

Concepción, treinta de septiembre de dos mil veintidós.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 20, 23 a 27, 30 y 31 de mayo; 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 28, 29 y 30 de junio; 1, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 de julio; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 y 25 de agosto de dos mil veintidós, ante esta Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, se llevó a efecto la audiencia de Juicio Oral en causa **RUC 1900571226-5, RIT 96-2022**, seguida en contra del acusado **ALEJANDRO DAVID CABELLO BUSTOS, RUN 14.372.476-K**, soltero, contador auditor, 47 años de edad, domiciliado en calle Colón N° 1307 departamento 305, sector Arenal, comuna de Talcahuano; de la acusada **NUBIA EDITH SAN MARTÍN PAVEZ, RUN 8.203.869-8**, soltera, secretaria, 65 años de edad; del acusado **PEDRO NOLASCO RAVANAL MELLADO, RUN 9.844.026-7**; soltero, obrero en montaje industrial, 58 años de edad, ambos domiciliados en calle Tegualda N°36-A, sector Collao, comuna de Concepción, estos tres imputados representados por los abogados particulares Francisco García Retamal y María Paz Gándara Chico; y, del acusado **PEDRO EDUARDO MAURICIO PAREDES MONTOYA, RUN 8.242.907-7**, casado, ingeniero comercial, 63 años de edad, domiciliado en calle Ainavillo N° 1040, comuna de Concepción, representado por las abogadas Ángela Contreras Saavedra y Rocío García Boré.

Fue parte acusadora el Ministerio Público, representado por sus fiscales María José Aguayo Jofré y Ana María Aldana Saavedra; y la querellante Municipalidad de Talcahuano, representada por el Consejo de Defensa del Estado, por intermedio de sus abogadas Paula Villalobos Lobos y Gisella Inostroza y abogado Luis Mora Urrutia.

Se consigna, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del Código Procesal Penal, en el presente juicio se mantuvo como jueza alterna doña Claudia Etcheberry Barrera.

SEGUNDO: Que, los hechos y circunstancias que fueron objeto de la **acusación fiscal**, contenidas en el auto de apertura proveniente del Juzgado de Garantía de Talcahuano, son los siguientes:

I.- LOS HECHOS:

Entre los meses de octubre de 2017 a marzo de 2019, la Dirección de Administración de Salud Municipal de Talcahuano, en adelante DAS, ubicada en calle 1 Sargento Aldea N°250, de la mencionada comuna, el imputado **ALEJANDRO DAVID CABELLO BUSTOS** se desempeñaba como funcionario de la Municipalidad de Talcahuano, específicamente como JEFE del DEPARTAMENTO DE FINANZAS, encargado, entre otras funciones, de controlar el presupuesto, asesorar en el cumplimiento de las funciones de administrar presupuesto y convenios, supervisar y encargarse de las transferencias entre cuentas corrientes y velar por el correcto funcionamiento del presupuesto de la DAS.



En el mismo departamento de finanzas, dentro de igual periodo, la imputada NUBIA SAN MARTÍN PAVEZ, funcionaria de la misma Municipalidad, ejercía la labor ENCARGADA DE PRESUPUESTO, y entre sus funciones se encontraban las de ingreso de registros contables, revisión de documentos de respaldo para pagos, registro de obligaciones, devengamiento y ajustes contables, pago de proveedores, y atención de proveedores. Además tenía a su cargo la caja chica y era una de las firmas autorizadas para girar cheques desde las cuentas corrientes de titularidad de la Municipalidad de Talcahuano.

En la misma época, el imputado PEDRO EDUARDO MAURICIO PAREDES MONTOYA, se desempeñaba como funcionario del Departamento de Abastecimiento de la DAS de Talcahuano, encargado de proyectos de dicho departamento. Por su parte, dentro del mismo periodo, el imputado MANUEL ANDRÉS ROJAS RAMÍREZ, se desempeñaba como funcionario municipal en el departamento de Abastecimiento de la DAS de Talcahuano y, entre otras funciones, le correspondía ser una de las firmas autorizadas para girar cheques desde las cuentas corrientes de titularidad de la Municipalidad de Talcahuano.

En el periodo señalado, en la comuna de Talcahuano, los imputados CABELLO BUSTOS, PAREDES MONTOYA, SAN MARTÍN PAVEZ y RAVANAL MELLADO se concertaron para sustraer distintas sumas de dinero de la Municipalidad de Talcahuano a través del giro y cobro de diversos cheques que se individualizarán, abusando todos de sus cargos y funciones públicas en su caso. Para sustraer fondos municipales, los imputados obraron de la siguiente forma:

HECHO N° 1:

Dentro del periodo señalado el imputado ALEJANDRO DAVID CABELLO BUSTOS quien, en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano, tenía a su cargo los fondos municipales permitió, estando previamente concertado con la imputada NUBIA SAN MARTÍN PAVEZ quien, en su calidad de funcionaria del Departamento de Finanzas de la DAS y titular de una de las firmas habilitadas de las cuentas corriente N° 52709052161 y N° 52709052004 del Banco Estado de la referida Municipalidad, giró y suscribió 7 cheques a su nombre para luego cobrarlos por caja sustrayendo la suma total de \$ 17.898.643 equivalente a 377,04 UTM, repartiéndose entre ambos, los montos sustraídos.

Los imputados CABELLO BUSTOS y SAN MARTÍN PAVEZ, registraron el cheque como pagadero de obligaciones contraídas por la DAS con proveedores, lo cual concretaron mediante el registro por SAN MARTÍN PAVEZ del cheque en el respectivo instrumento público Decreto de Pago, que luego era suscrito por el imputado CABELLO BUSTOS autorizando el pago. Luego, ingresaban el pago en el Sistema Modular Contable en adelante SMC quedando pagada contablemente pero en realidad estas obligaciones quedaban pendiente de pago para la Municipalidad.



Estos cheques fueron suscritos además por MANUEL ROJAS RAMÍREZ, quien tenía otra de las firmas habilitadas, actuando con negligencia inexcusable, al no verificar la procedencia de los pagos que supuestamente se efectuaban, infringiendo las labores propias de su cargo.

Lo anterior ocurrió en las fechas de giro, en relación con los cheques de las cuentas que se señalarán, por los mantos y en las fechas de cobro que se detallan a continuación:

	Fecha de giro	Cuenta corriente	N° Cheque	Monto	U.T.M.	FECHA COBRO
1. -	04/10/2017	52709052161	8986400	\$ 1.433.212	30,63	05/10/2017
2. -	28/11/2017	52709052004	9193157	\$ 2.472.523	52,95	28/11/2017
3. -	01/02/2018	52709052161	8986471	\$ 1.547.435	32,91	02/04/2018
4. -	02/04/2018	52709052161	9710655	\$ 2.582.300	54,59	02/04/2018
5. -	14/08/2018	52709052004	1166545	\$ 3.212.033	67,30	14/08/2018
6. -	05/09/2018	52709052161	1344001	\$ 3.111.255	64,93	05/09/2018
7. -	24/10/2018	52709052161	1344107	\$ 3.539.885	73,72	24/10/2018

HECHO N°2:

Dentro del periodo señalado el imputado ALEJANDRO DAVID CABELLO BUSTOS quien, en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano, y teniendo a su cargo los fondos municipales, permitió que la imputada NUBIA SAN MARTÍN PAVEZ, con quien estaba previamente concertado, en su calidad de funcionaria del Departamento de Finanzas de la DAS y titular de una de las firmas habilitadas de las cuentas corrientes N° 52709052161 y N°52709052004 del Banco Estado de la referida Municipalidad, girara y suscribiera 35 cheques a nombre del imputado PEDRO EDUARDO MAURICIO PAREDES MONTOYA, quien, concertado también con los imputados CABELLO BUSTOS y SAN MARTÍN PAVEZ los cobró por caja, sustrayendo la suma total de \$ 111.176.748 equivalentes a 2.339,69 UTM según



el valor de la época, repartiéndose luego, entre los 3 coimputados, de los montos sustraídos.

Estos cheques fueron suscritos además por MANUEL ROJAS RAMÍREZ, quien tenía otra de las firmas habilitadas, actuando con negligencia inexcusable, al no verificar la procedencia de los pagos que supuestamente se efectuaban, infringiendo las labores propias de su cargo, y dando ocasión a que los fondos fueran sustraídos.

Lo anterior ocurrió en las fechas de giro en relación con los cheques de las cuentas que se señalarán, por los montas y en las fechas de cobro que se detallan a continuación:

	Fecha de giro	Cuenta corriente	N° Cheque	Monto	U.T. M.	Fecha de giro
1.-	02/11/2017	52709052161	9193240	\$ 1.825.936	39,03	31/10/2017
2.-	07/11/2017	52709052004	9193090	\$ 1.724.429	36,93	07/11/2017
3.-	22/11/2017	52709052004	9193152	\$ 2.472.523	52,95	22/11/2017
4.-	30/11/2017	52709052004	9193164	\$ 2.171.750	46,51	30/11/2017
5.-	14/12/2017	52709052161	9193347	\$ 1.285.200	27,36	14/12/2017
6.-	22/12/2017	52709052161	9193377	\$ 2.394.756	50,98	22/12/2017
7.-	31/01/2018	52709052161	8986478	\$ 1.898.626	40,38	31/01/2018
8.-	28/02/2018	52709052161	9710543	\$ 2.907.825	61,78	02/04/2018
9.-	23/03/2018	52709052004	9470749	\$ 2.677.500	56,61	23/03/2018
10.-	27/03/2018	52709052161	9710628	\$ 2.728.602	57,69	27/03/2018



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

11. -	05/04/201 8	52709052161	9710666	\$ 2.900.62 5	61,32	05/04/201 8
12. -	26/04/201 8	52709052161	620223	\$ 2.853.29 9	60,32	26/04/201 8
13. -	07/05/201 8	52709052161	620253	\$ 2.898.44 7	61,15	07/05/201 8
14. -	25/05/201 8	52709052161	620324	\$ 3.331.32 6	70,29	25/05/201 8
15. -	12/06/201 8	52709052161	620368	\$ 3.560.48 0	74,90	12/06/201 8
16. -	05/07/201 8	52709052161	962127	\$ 3.503.95 5	73,49	05/07/201 8
17. -	17/07/201 8	52709052161	962149	\$ 3.348.50 7	70,23	17/07/201 8
18. -	03/08/201 8	52709052161	962202	\$ 3.645.22 9	76,37	03/08/201 8
19. -	17/08/201 8	52709052004	1166550	\$ 3.499.55 2	73,32	17/08/201 8
20. -	27/08/201 8	52709052161	962270	\$ 3.729.25 2	78,13	27/08/201 8
21. -	31/08/201 8	52709052161	962279	\$ 3.810.38 0	79,83	03/09/201 8
22. -	04/09/201 8	52709052161	962287	\$ 3.893.68 0	81,25	04/09/201 8
23. -	14/09/201 8	52709052161	1344036	\$ 3.825.73 1	79,84	14/09/201 8
24. -	20/09/201 8	52709052161	1344039	\$ 3.746.12 0	78,17	20/09/201 8



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

25. -	28/09/2018	52709052161	1344059	\$ 3.429.889	71,58	28/09/2018
26	12/10/2018	52709052161	1344096	\$ 3.909.627	81,42	11/10/2018
27. -	31/10/2018	52709052161	1344121	\$ 3.868.885	80,57	31/10/2018
28. -	09/11/2018	52709052161	1344156	\$ 3.826.109	79,44	09/11/2018
29. -	27/11/2018	52709052161	1762405	\$ 3.587.255	74,49	27/11/2018
30. -	05/12/2018	52709052161	1762436	\$ 3.457.545	71,51	05/12/2018
31. -	20/12/2018	52709052161	1762462	\$ 3.781.820	78,21	20/12/2018
32. -	02/01/2019	52709052161	1762482	\$ 3.867.857	79,99	28/12/2018
33. -	01/02/2019	52709052161	1762561	\$ 3.864.870	89,84	01/02/2019
34. -	06/02/2019	52709052161	1762578	\$ 3.741.955	77,47	06/02/2019
35	06/03/2019	52709052161	2142721	\$ 3.207.206	66,33	04/03/2019

HECHO N° 3:

El 05 de septiembre del 2018 el imputado ALEJANDRO DAVID CABELLO BUSTOS, quien en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano tenía a su cargo los fondos municipales, permitió que la imputada NUBIA SAN MARTÍN PAVEZ, con quien estaba previamente concertado, en su calidad de funcionaria del Departamento de Finanzas de la DAS y titular de una de las firmas habilitadas de la cuentas corriente N° 52709052161 del Banco Estado de la referida Municipalidad, girara el cheque N° 1344003 a nombre del ALEJANDRO DAVID CABELLO BUSTOS, quien



posteriormente procedió a cobrarlo por caja el 06 de septiembre del mismo año, sustrayendo así la suma de \$ 3.476.847 correspondientes a 72,56 UTM. Este cheque fue suscrito por MANUEL ROJAS RAMÍREZ, quien tenía otra de las firmas habilitadas, actuando con negligencia inexcusable, al no verificar la procedencia de los pagos que supuestamente se efectuaban, infringiendo las labores propias de su cargo, dando ocasión a la sustracción de los fondos.

HECHO N°4:

Dentro del periodo señalado el imputado ALEJANDRO DAVID CABELLO BUSTOS quien, en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano, tenía a su cargo los fondos municipales permitió que la imputada NUBIA SAN MARTÍN PAVEZ, con quien estaba previamente concertado, en su calidad de funcionaría del Departamento de Finanzas de la DAS y titular de las firmas habilitadas de las cuentas corriente N° 52709052161, N°52709052004, N°52709052187 y N° 52709052179 del Banco Estado de la referida Municipalidad, girara y suscribiera 86 cheques a nombre del imputado PEDRO RAVANAL MELLADO, quien, concertado también con los imputados CABELLO BUSTOS y SAN MARTÍN PAVEZ y a sabiendas de las calidades de funcionarios públicos desempeñados por estos, los cobró por caja, permitiendo la sustracción de la suma total de \$279.472.587 equivalente a 5.854,99 UTM repartiéndose entre los 3 coimputados, los montos sustraídos.

Todos los cheques, salvo N° 620362 y N° 620383 de la cuenta corriente N° 52709052161 de los número 36 y 37 del listado, fueron suscritos además por MANUEL ROJAS RAMÍREZ, quien tenía otra de las firmas habilitadas, actuando con negligencia inexcusable, al no verificar la procedencia de los pagos que supuestamente se efectuaban, infringiendo las labores propias de su cargo y dando ocasión a la sustracción de fondos.

Lo anterior ocurrió en las fechas de giro en relación con los cheques de las cuentas que se señalarán, por los mantos y en las fechas de cobro que se detallan a continuación:

	Fecha de giro	Cuenta corriente	N° Cheque	Monto	U.T. M.	Fecha de giro
1.-	24/10/2017	52709052161	9193223	\$ 2.246.720	48,02	23/10/2017
2.-	31/10/2017	52709052161	9193237	\$ 922.845	19,72	30/10/2017
3.-	13/11/2017	52709052004	9193122	\$ 1.796.344	38,47	10/11/2017
4.-	16/11/2017	52709052004	9193128	\$ 2.331.986	49,94	16/11/2017
5.-	05/12/2017	52709052004	9193183	\$	57,79	05/12/2017



**PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION**

	7			2.714.390		7
6.-	15/12/2017	52709052004	9470619	\$ 1.979.446	42,14	11/12/2017
7.-	04/01/2018	52709052161	9193398	\$ 1.777.665	37,81	02/01/2018
8.-	11/01/2018	52709052161	8986407	\$ 2.512.888	53,44	10/01/2018
9.-	17/01/2018	52709052161	8986413	\$ 2.294.082	48,79	16/01/2018
10.-	22/01/2018	52709052161	8986424	\$ 1.802.493	37,80	18/01/2018
11.-	26/01/2018	52709052161	8986437	\$ 2.238.979	47,62	25/01/2018
12.-	31/01/2018	52709052161	8986470	\$ 1.414.315	30,08	01/03/2018
13.-	12/02/2018	52709052161	9710502	\$ 2.968.812	63,08	09/02/2018
14.-	15/02/2018	52709052161	9710509	\$ 2.814.826	59,81	15/02/2018
15.-	21/02/2018	52709052161	9710524	\$ 2.677.500	56,89	20/02/2018
16.-	27/02/2018	52709052161	9710542	\$ 2.377.620	50,52	01/03/2018
17.-	12/03/2018	52709052161	9710590	\$ 2.618.000	55,35	08/03/2018
18.-	14/03/2018	52709052004	9470742	\$ 2.795.310	59,10	13/03/2018
19.	28/03/201	52709052161	9710634	\$	63,53	28/03/201



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

-	8			2.987.019		8
20.-	10/04/2018	52709052161	9710683	\$ 2.907.825	61,47	10/04/2018
21.-	13/04/2018	52709052004	9710438	\$ 2.827.202	59,77	12/04/2018
22.-	17/04/2018	52709052187	733206	\$ 2.972.239	62,84	17/04/2018
23.-	24/04/2018	52709052161	620204	\$ 2.588.250	54,72	23/04/2018
24.-	02/05/2018	52709052161	620230	\$ 2.942.311	62,20	27/04/2018
25.-	03/05/2018	52709052161	620231	\$ 2.680.118	56,55	02/05/2018
26.-	04/05/2018	52709052161	620250	\$ 2.796.500	59,00	04/05/2018
27.-	14/05/2018	52709052161	620274	\$ 3.236.526	68,29	11/05/2018
28.-	15/05/2018	52709052161	620291	\$ 3.220.353	67,95	15/05/2018
29.-	16/05/2018	52709052161	620296	\$ 3.623.788	76,46	15/05/2018
30.-	23/05/2018	52709052161	620314	\$ 3.220.783	67,95	23/05/2018
31.-	29/05/2018	52709052161	620334	\$ 3.652.110	77,06	28/05/2018
32.-	31/05/2018	52709052161	620345	\$ 3.402.210	71,78	31/05/2018
33.-	05/06/201	52709052161	620356	\$	70,09	04/06/201



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

-	8			3.332.000		8
34. -	06/06/2018	52709052161	620360	\$ 3.748.500	78,85	05/06/2018
35. -	12/06/2018	52709052161	620362	\$ 3.855.600	81,11	07/06/2018
36. -	26/06/2018	52709052161	620383	\$ 3.951.633	83,13	26/06/2018
37. -	28/06/2018	52709052161	620388	\$ 3.046.400	64,08	26/06/2018
38. -	29/06/2018	52709052161	962104	\$ 3.513.435	73,91	29/06/2018
39. -	04/07/2018	52709052161	962121	\$ 3.927.000	82,36	03/07/2018
40. -	12/07/2018	52709052161	962144	\$ 3.632.572	76,18	12/07/2018
41. -	23/07/2018	52709052161	962155	\$ 3.878.686	81,35	20/07/2018
42. -	24/07/2018	52709052161	962162	\$ 3.923.073	82,28	25/07/2018
43. -	31/07/2018	52709052004	1166424	\$ 3.570.000	74,87	30/07/2018
44. -	02/08/2018	52709052161	962191	\$ 3.382.575	70,87	01/08/2018
45. -	08/08/2018	52709052161	962219	\$ 3.769.991	78,99	06/08/2018
46. -	09/08/2018	52709052161	962240	\$ 3.754.331	78,66	08/08/2018
47.	13/08/201	52709052004	1166531	\$	76,29	10/08/201



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

-	8			3.641.400		8
48. -	14/08/2018	52709052004	1166538	\$ 3.538.219	74,13	13/08/2018
49. -	21/08/2018	52709052161	962263	\$ 3.660.738	76,70	03/09/2018
50. -	23/08/2018	52709052161	962267	\$ 3.213.000	67,32	03/09/2018
51. -	31/08/2018	52709052161	962274	\$ 3.442.113	72,12	30/08/2018
52. -	03/09/2018	52709052161	962284	\$ 3.575.474	74,61	03/09/2018
53. -	06/09/2018	52709052161	1344005	\$ 3.587.731	74,87	05/09/2018
54. -	10/09/2018	52709052161	1344029	\$ 3.681.789	76,83	07/09/2018
55. -	13/09/2018	52709052161	1344033	\$ 3.793.720	79,17	13/09/2018
56. -	14/09/2018	52709052161	1344035	\$ 3.439.930	71,78	13/09/2018
57. -	21/09/2018	52709052161	1344040	\$ 3.560.480	74,30	20/09/2018
58. -	25/09/2018	52709052161	1344052	\$ 3.877.020	80,91	24/09/2018
59. -	28/09/2018	52709052161	1344060	\$ 3.855.159	80,45	28/09/2018
60. -	03/10/2018	52709052161	1344065	\$ 3.962.700	83,02	02/10/2018
61.	05/10/2018	52709052161	1344082	\$	69,15	04/10/2018



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

-	8			3.320.100		8
62.	09/10/2018	52709052161	1344089	\$ 3.760.995	78,33	08/10/2018
-	8					
63.	18/10/2018	52709052161	1344100	\$ 3.612.835	75,24	17/10/2018
-	8					
64.	22/10/2018	52709052161	1344104	\$ 3.616.100	75,31	22/10/2018
-	8					
65.	24/10/2018	52709052161	1344106	\$ 3.881.780	80,84	23/10/2018
-	8					
66.	29/10/2018	52709052161	1344108	\$ 3.706.613	77,20	26/10/2018
-	8					
67.	30/10/2018	52709052161	1344113	\$ 3.513.753	73,18	01/02/2019
-	8					
68.	05/11/2018	52709052161	1344130	\$ 3.212.033	66,70	05/11/2018
-	8					
69.	07/11/2018	52709052161	1344145	\$ 3.520.773	73,11	07/11/2018
-	8					
70.	12/11/2018	52709052161	1344175	\$ 3.165.400	65,73	09/11/2018
-	8					
71.	26/11/2018	52709052161	1344183	\$ 3.254.650	67,58	13/11/2018
-	8					
72.	29/11/2018	52709052161	1762412	\$ 3.246.646	67,58	01/02/2019
-	8					
73.	04/12/2018	52709052161	1762416	\$ 3.463.495	71,63	03/12/2018
-	8					
74.	11/12/2018	52709052161	1762442	\$ 3.782.415	78,23	07/12/2018
-	8					
75.	14/12/2018	52709052161	1762451	\$	80,00	13/12/2018



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

-	8			3.868.055		8
76. -	19/12/2018	52709052161	1762456	\$ 3.850.840	79,64	19/12/2018
77. -	24/12/2018	52709052161	1762463	\$ 3.775.937	78,09	24/12/2018
78. -	28/12/2018	52709052161	1762480	\$ 3.861.550	79,86	01/02/2019
79. -	07/01/2019	52709052161	1762478	\$ 3.796.838	78,52	01/02/2019
80. -	09/01/2019	52709052161	1762511	\$ 3.783.724	78,25	08/01/2019
81. -	05/02/2019	52709052161	1762513	\$ 3.626.192	74,99	08/01/2019
82. -	06/02/2019	52709052161	1762512	\$ 3.500.980	72,40	08/01/2019
83. -	18/02/2019	52709052161	1762587	\$ 3.685.668	76,30	19/02/2019
84. -	22/02/2019	52709052161	1762600	\$ 3.923.073	81,21	20/02/2019
85. -	27/02/2019	52709052179	2593238	\$ 3.986.500	82,53	27/02/2019
86. -	07/03/2019	52709052161	2142720	\$ 3.298.918	68,23	04/03/2019

HECHO N° 5:

Entre los meses de diciembre del 2017 a octubre del 2018 el imputado ALEJANDRO CABELLO BUSTOS en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano y encargado de suscribir los decretos municipales que registran los pagos de obligaciones contraídas por la DAS de dicha Municipalidad, firmó los decretos respecto de pagos a distintos proveedores en las fechas, montos y con los cheques que se indicarán a



sabiendas que los cheques consignados no pagaron las obligaciones declaradas en los documentos. Estos decretos fueron elaborados concertadamente con CABELLO BUSTOS, por la imputada NUBIA SAN MARTÍN PAVEZ, en su calidad de Encargada de Presupuesto, quien ingresa la información contenida en los decretos y luego visa con firma de responsabilidad los mismos. Estos decretos son falsos al 8 declarar que las respectivas obligaciones en ellos consignadas fueron pagadas con los cheques de titularidad de la Municipalidad señalados en los documentos, lo cual es falso.

Lo anterior ocurrió en los siguientes documentos, en las fechas, respecto de los proveedores, por los cheques, y montos que se señalan a continuación:

	Número Decreto	Fecha	N° Cheque	Monto	Proveedor
1.-	2199	14/12/2017	9193347	\$ 1.285.200	Laboratorio Chile S.A.
2.-	275	21/02/2018	9710524	\$ 2.677.500	Etex Farmacéutica Limitada
3.-	344	38/03/2018	9710590	\$ 2.618.000	Etex Farmacéutica Limitada
4.-	498	28/03/2018	9710634	\$ 2.987.019	Laboratorio Andrómaco
5.-	653	32/04/2018	9710543	\$ 2.907.825	Munnich Pharma Medical Ltda.
6.-	643	12/04/2018	9710438	\$ 2.827.202	Laboratorio Andrómaco
7.-	659	17/04/2018	733206	\$ 2.972.239	Laboratorio Andrómaco
8.-	745	32/05/2018	620231	\$ 2.680.118	Laboratorio Andrómaco
9.-	921	23/05/2018	620314	\$ 3.220.783	Laboratorio Andrómaco
10.-	983	34/06/2018	620356	\$ 3.332.000	Laboratorio Andrómaco



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

11. -	1232	24/07/2018	962162	\$ 3.923.073	Laboratorio Chile S.A.
12. -	1277	30/07/2018	1166424	\$ 3.570.000	Laboratorio Chile S.A.
13. -	1535	D3/09/2018	962279	\$ 3.810.380	Dpharma Investi De Chile S.A.
14. -	1540	03/09/2018	962267	\$ 3.213.000	Buhos S.C.I.LTDA.
15. -	1541	03/09/2018	962284	\$ 3.575.474	Laboratorio Chile S.A.
16. -	1644	03/09/2018	962263	\$ 3.660.738	Winpharm SPA
17. -	1550	04/09/2018	962287	\$ 3.893.680	Laboratorio Chile S.A.
18. -	1588	05/09/2018	1344005	\$ 3.587.731	Laboratorio Chile S.A.
19. -	1594	05/09/2018	1344003	\$ 3.476.847	Opko Chile S.A
20. -	1587	05/09/2018	1344001	\$ 3.111.255	Pharma Investi De Chile S.A.
21. -	1589	10/09/2018	1344029	\$ 3.681.789	Ethon Pharmaceuticals
22. -	1634	13/09/2018	1344035	\$ 3.439.930	Laboratorio Chile S.A.
23. -	1626	14/09/2018	1344036	\$ 3.825.731	Laboratorio Andrómico
24. -	1635	20/09/2018	1344039	\$ 3.746.120	Laboratorio Andrómico



25. -	1643	20/09/2018	1344040	\$ 3.560.480	Laboratorio Andrómaco
26. -	1660	24/09/2018	1344052	\$ 3.877.020	Laboratorio Chile S.A.
27. -	1690	02/10/2018	1344065	\$ 3.962.700	Winpharm SPA
28. -	1712	04/10/2018	1344082	\$ 3.320.100	Etex Farmacéutica Limitada
29. -	1729	08/10/2018	1344089	\$ 3.760.995	Laboratorio Chile S.A.
30. -	1738	11/10/2018	1344096	\$ 3.909.627	Laboratorio Chile S.A.
31. -	1747	17/10/2018	1344100	\$ 3.612.835	Laboratorio Chile S.A.
32. -	1754	22/10/2018	1344104	\$ 3.616.100	Ethon Pharmaceuticals
33. -	1758	23/10/2018	1344106	\$ 3.881.780	Winpharm SPA
34. -	1776	24/10/2018	1344107	\$ 3.539.885	Lab. Silesia S.A.

HECHO N° 6:

El 12 de junio del 2018 el imputado ALEJANDRO CABELLO BUSTOS en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano y encargado de suscribir los decretos municipales que registran los pagos de obligaciones contraídas por la DAS de dicha Municipalidad, elaboró e ingresó la información contenida en el decreto de pago N° 1013 respecto del pago al proveedor LABORATORIO ANDROMACO declarando que el cheque N° 620368 pagaba dicha obligación por \$3.560.480 para luego firmarlo. El imputado lo firma a sabiendas de su falsedad al declarar que la respectiva obligación en el decreto consignada, fueron pagadas con los cheques de titularidad de la Municipalidad señalados en los documentos lo cual es falso.

HECHO N° 7:



El 01 de febrero del 2019 la imputada NUBIA SAN MARTÍN PAVEZ en su calidad de jefa subrogante del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano y encargada de suscribir los decretos municipales que registran los pagos de obligaciones contraídas por la DAS de dicha Municipalidad, elaboró e ingresó la información contenida en el decreto de pago N° 235 respecto del pago al proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION declarando que el cheque N° 1344113 pagaba dicha obligación por \$3.513.753 para luego firmarlo. La imputada lo firma a sabiendas de su falsedad al declarar que la respectiva obligación en el decreto consignada fueron pagadas con los cheques de titularidad de la Municipalidad señalados en los documentos lo cual es falso.

CALIFICACIÓN JURÍDICA, GRADO DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN:

El Ministerio Público estima que los hechos descritos precedentemente son constitutivos de los siguientes delitos:

1.- Respecto del imputado ALEJANDRO DAVID CABELLO BUSTOS:

a.- 129 delitos consumados en carácter de reiterado de malversación de caudales públicos del artículo 233 N° 2 y N° 3 del Código Penal atribuyéndole participación de **autor** del artículo 15 N° 1 del mismo cuerpo legal.

b.- 35 delitos consumados en carácter de reiterados de falsificación de instrumento público del artículo 193 N°4 del Código Penal, imputándole participación de autor del artículo 15 N° 1 del mismo Código.

2.- Respecto de la acusada NUBIA EDITH SAN MARTÍN PAVEZ:

a.- 129 delitos consumados en carácter de reiterado de malversación de caudales públicos del artículo 233 N° 2 y N° 3 del Código Penal, atribuyéndole participación de **autora** de conformidad al artículo 15 N° 1 del mismo cuerpo de normas.

b.- 35 delitos consumados en carácter de reiterados de falsificación de instrumento público del artículo 193 N°4 del Código Penal, atribuyéndole participación de **autora** del artículo 15 N° 3 del mismo Código.

c.- Un delito consumado de falsificación de instrumento público del artículo 193 N°4 del Código Penal en calidad de **autora** del artículo 15 N° 1 del mismo cuerpo legal.

3.- Respecto del imputado PEDRO EDUARDO MAURICIO PAREDES MONTTOYA, se le imputan **35 delitos consumados en carácter de reiterado de malversación de caudales públicos** del artículo 233 N° 2 y N° 3 del Código Penal, atribuyéndole a este encartado participación en calidad de **autor** del artículo 15 N° 3 del mismo Código.

4.- Respecto del imputado PEDRO NOLASCO RAVANAL MELLADO, se le imputan **86 delitos consumados en carácter de reiterado de malversación de caudales públicos** del artículo 233 N° 2 y N°3 del Código Penal, atribuyéndole a este imputado participación en calidad de **autor** del artículo 15 N° 3 del mismo Código.



CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL:

A juicio del Ministerio Público, respecto de los cuatro acusados, les favorece la circunstancia atenuante contemplada en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, esto es, de irreprochable conducta anterior.

En lo que respecta a agravantes de responsabilidad penal, a los cuatro imputados les perjudica la circunstancia del artículo 260 ter del Código Penal, respecto de los hechos cometidos con posterioridad al 20 de noviembre 2018.

PENA REQUERIDA:

El Ministerio Público requiere se condene a cada uno de los acusados a las siguientes penas:

1.- Respecto del imputado **ALEJANDRO DAVID CABELLO BUSTOS**, se solicita:

a.- Por los 129 delitos consumados en carácter de reiterado malversación de caudales públicos: VEINTE AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÁXIMO y multa del doble de lo substraído e inhabilitación absoluta perpétua para cargos u oficios públicos.

b.- Por los 35 delitos consumados en carácter de reiterado de falsificación de instrumento público: SIETE AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO.

c.- Además, las penas accesorias del artículo 30 del Código Penal, así como también, se le condene al pago de las costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal.

2.- Respecto **NUBIA EDITH SAN MARTÍN PAVEZ**, se solicita:

a.- Por 129 delitos consumados en carácter de reiterado de malversación de caudales públicos: VEINTE AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MAXIMO, y multa del doble de lo substraído e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos.

b.- Por los 36 delitos consumados en carácter de reiterados de falsificación de instrumento público, 35 de los cuales es en calidad de autora del artículo 15 N°3 y otro como autora del artículo 15 N° 1, todo del mismo cuerpo legal: **SIETE AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO.**

c.- Además, el Ministerio Público solicita el comiso de \$ 2.027.490 (dos millones veintisiete mil cuatrocientos noventa pesos) que da cuenta el comprobante de depósito contenido en NUE 5950471.

d.- Asimismo, se solicita el comiso de \$305.000 (trescientos cinco mil pesos) que da cuenta el comprobante de depósito contenido en NUE 6150682.

e.- Respecto de esta acusada, se solicita igualmente las penas accesorias del artículo 30 del Código Penal, así como también, se le condene al pago de las costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal.

3.- Respecto del imputado **PEDRO EDUARDO MAURICIO PAREDES MONTOKA**:



a.- Por los 35 delitos consumados en carácter de reiterado malversación de caudales públicos: VEINTE AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÁXIMO y multa del doble de lo substraído e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos.

b.- Igualmente se solicita para este acusado, las penas accesorias del artículo 30 del Código Penal, así como también, se le condene al pago de las costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal.

4.- Respecto del imputado PEDRO RAVANAL MELLADO:

a.- Por los 86 delitos consumados en carácter de reiterado de malversación de caudales públicos: VEINTE AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÁXIMO y multa del doble de lo substraído e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos.

b.- Asimismo, el Ministerio Público solicita para este acusado, las penas accesorias del artículo 30 del Código Penal, así como también, se le condene al pago de las costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal.

En su alegato de apertura dio cuenta de los medios de prueba de los cuales se valdrá para acreditar los elementos del tipo penal por el cual ha acusado, reiterando la calificación jurídica de los hechos, como la participación imputada, refiriendo que en el año 1988 las Direcciones de Administración de Salud Municipales (DAS) fueron traspasadas a los establecimientos municipales para acercar la salud primaria a los municipios, modernizar el sistema salud, pensando que era lo óptimo para entregar atención de salud oportuna a la población, proveyéndose de importantes recursos a las municipalidades; y quienes trabajan en la Enabas eran, son y serán funcionarios públicos; que según los profesores Politoff, Matus y Ramírez, los funcionarios públicos tienen un deber especial frente a la consecución de sus finalidades en orden a la consecución del bien común, pues se ejerce una función especial, y 3 de los acusados ejercían a propósito de los hechos que están acusados, una función pública en la DAS, y quienes trabajan allí deben entender que su trabajo está pensado y dirigido a la población más vulnerable, que no tiene la libertad de elegir un sistema salud distinto, y ese es el sentido de las Direcciones de Administración de Salud Municipales; que como se dice en la acusación, a principios del 2019 se conocía que había un déficit presupuestario en el Departamento de Finanza de la Das de Talcahuano, lo que determinó una fiscalización de la Contraloría General de la República, y en el transcurso y en paralelo a este proceso, un proveedor de la DAS, Munifarma Limitada reclama que hay un importante retardo en el pago de facturas, que lleva a quienes fiscalizaban en ese momento a verificar si tales reclamos eran efectivos o tenían explicación, y se verifica que lo que Munifarma reclamaba aparecía pagado con 8 cheques por una cantidad superior a 19,5 millones de pesos, pero dichos cheques no los había recibido el proveedor, sino que cobrados y girados por caja por Nubia San Martín, Pedro Ravanal y Pedro Paredes, y luego se pesquisa que



respecto al proveedor Etex Farmacéutica Limitada aparecían pagadas dos facturas, mediante dos cheques, emitido a nombre de Ravanal y Paredes, y girados por caja por ellos mismos; que la Contraloría General de la República evacua un informe que se traduce que en mayo de 2019 el Contralor General de la República presenta ante la fiscalía una denuncia con los primarios hechos recopilados, y así comenzó una investigación extensa y compleja, que ha llevado a la fiscalía a tener que trabajar con los fiscalizadores de dicha Contraloría; y dicha investigación debiese llevar a la convicción de condena de los 4 acusados que entre los años 2017 y 2019 se concertaron en una verdadera empresa delictual con el objetivo de sustraer más de 412 millones de pesos de propiedad de la Municipalidad de Talcahuano, mediante el giro de 129 cheques, que se irán individualizando en el juicio.

Que para desarrollarse esta empresa delictual, era necesaria la concurrencia de Cabellos Bustos, quien era el jefe de Finanzas del Departamento Salud de la municipalidad de Talcahuano, el encargado de controlar el presupuesto y velar por el correcto funcionamiento del presupuesto del Das, y por su rol sabía cuándo llegarían fondos, dineros a la Dirección de Salud, a qué cuentas llegaría, pero Cabello no podía actuar solo, y necesitaba contar con quienes podían firmar, con las firmas autorizadas, para girar los cheques municipales, y ahí cobra importancia la acusada Nubia San Martin encargada de presupuesto del Departamento de Salud de Talcahuano, una antigua funcionaria y referente dentro de dicho Departamento, quien tenía a su cargo bastantes responsabilidades, tenía a cargo la caja chica y era una de las que tenía una de las firmas aterrizadas; y su participación marcó el devenir de los hechos de manera fundamental, ella llenaba los cheques en las cuentas que Cabello le iba señalando para conseguir el dinero del que se apropiaron; que la segunda firma es importante, es la de Manuel Rojas Ramírez, quien será testigo en esta causa, respecto de quien por la confianza existente entre Cabello y San Martin, lograron que él firmara documentos que estaban en blanco, pero la empresa no habría sido posible sin cobradores de los cheques, y es ahí donde los acusados Paredes y Ravanal entran en la escena delictual planteada.

Que Pedro Paredes es funcionario del Departamento de Abastecimiento de la Das de Talcahuano, encargado de proyectos, y en el caso de Ravanal, único acusado que no es funcionario público, pero que mantiene una relación de convivencia y un hijo en común con la acusada San Martín, y finalmente se cobraran los cheques y se repartían entre Cabello, San Martin y la tercera parte, para el que cobraba el cheque, ya sea Paredes o Ravanal; y así entre octubre de 2017 y marzo de 2019, los 4 acusados mediante el cobro de 129 cheques se hicieron de suma de más de 412 millones de pesos, pertenecientes a la Municipalidad e Talcahuano; que se probará que Cabello cobró un cheque, que San Martín cobró 7 cheques, que Paredes cobró 35 cheques por más de 100



millones, y Ravanal cobró 86 cheques por más de 279 millones de pesos; dando cuenta cada uno de un delito de malversación de caudales públicos.

Pero como una cuestión aparte, también están los decretos de pago, documento público que da fe del proceso de pago que efectúa una municipalidad a un proveedor determinado, documento en el cual se señala que la Municipalidad de Talcahuano en este caso, en una fecha determinada efectuó un pago a un proveedor por una compra que se detalla en el documento, por un monto determinado, y ese documento es emitido en un Sistema Modular Contable, por un funcionario habilitado, y luego de emitido el documento, es llenado a mano por un funcionario, quien indica el número de documento que se paga, a qué cuenta se imputa dicho pago y quien retira el documento de la empresa proveedora, y para poder proceder al pago se acompaña el decreto con todos los otros documentos y las dos firmas autorizadas, el jefe de Finanzas, acusado Cabello o la acusada San Martin que lo subrogaba en este rol, y el Director del Departamento de Salud que visaba el documento anterior.

Se probará que San Martin fue quien emitió los decretos de pago, donde se señalaba que una determinada compra realizada por la municipalidad fue pagada con un cheque de la municipalidad, decreto que era firmado por Cabello como jefe de finanzas; y el contenido de ese documento era falso, puesto que el cheque que sirvió para pagar una determinada factura, fue cobrado por los acusados, sustrayendo los fondos municipales; que en el juicio declararán testigos que tenían la calidad de funcionarios de la Contraloría General de la República, también funcionarios de la propia municipalidad, y los funcionarios policiales quienes darán cuenta del extenso grupo de diligencias que debieron realizarse para establecer las afirmaciones delictivas que hace la fiscalía; que a contario de lo dicho por las defensas, en todas las diligencias realizadas, con la finalidad evidente de poder los fondos públicos, los más de 412 millones de pesos, de parte de los acusados no ha existido ni colaboración ni reparación celosa del mal causado, pues han sido extensas e intensas las diligencias policiales con la finalidad también de recuperar estos erarios públicos, y no ha existido de parte de los acusados colaboración en dicho punto, quienes han ido modificando sus declaraciones, acomodando las mismas, para no entregar información o datos certeros de donde podrían estar estos más de 412 millones de pesos, pues ha podido ser recuperada una cantidad cercana a los tres millones de pesos; pues además, se han encontrado con teléfonos incautados que no pueden revisar porque no conocen las claves, y ha habido un entramamiento que no permitirá establecer las dos atenuantes referidas; que si le favorecen a los acusados la irreprochable conducta anterior y les perjudica la agravante del artículo 260 ter del Código Penal, respecto de hechos posteriores al 20 de noviembre de 2018; por todo lo cual reitera la calificación jurídica de los hechos.



En sus discursos de clausura y réplica, analizó en detalle la prueba rendida, en base a la cual estima que se acreditaron los hechos de la acusación, y se hizo cargo de las distintas alegaciones de las defensas; por lo cual pidió la condena de los acusados por los delitos y penas solicitadas, señalando que se acreditó el concierto entre los acusados para configurar una empresa delictual al interior de la DAS con el objetivo de sustraer más de 412 millones de pesos a través del giro de cheques de titularidad de la municipalidad; dando cuenta de los testimonios que se refirieron a cómo se gestó la investigación y los resultados de la misma, como asimismo el proceso de pago de los proveedores; dando cuenta de los medios de prueba por medio de los cuales se establecieron las funciones de cada uno de los acusados funcionarios de la Municipalidad, y particularmente de la obligación de custodia de fondos públicos de Cabello Bustos y San Martín Pavez, citando doctrina sobre la forma de entender el concepto; para luego dar cuenta de la forma y medios de prueba como se acreditaron cada uno de los hechos de la acusación, constitutivos de los delitos de malversación imputados, analizando la totalidad de los cheques cobrados por los acusados, junto a los decretos de pago asociados en los casos que los hubiere; pasando por los antecedentes y elementos probatorios para tener por acreditados los roles o división de funciones en el señalado delito, como asimismo la forma que se estableció el concierto entre los acusados, particularmente del análisis de tráfico de llamadas, y mensajes de diversas aplicaciones, y análisis pericial contable de las cuentas bancarias de los acusados, con el establecimiento de coincidencias en los depósitos, haciendo referencia igualmente a las declaraciones prestadas por los acusados durante la investigación; sosteniendo que Cabello y San Martín tienen a su cargo fondos públicos, por lo que se cumplen a su respecto las exigencias del artículo 233 del Código Penal; en tanto que respecto de Ravanal y Paredes, habida consideración que la conducta de ellos era por la necesidad de que terceras personas cobraran los cheques para no generar dudas en Cabello y San Martín, por lo que les imputa participación conforme al artículo 15 N° 3 del Código penal, por ser un caso de complicidad en el cual ha habido concierto, analizando igualmente el tipo penal del artículo 233, y dando cuenta de las teorías existentes en torno a la problemática de la sanción del extraneus en este delito especial, analizando el tema de la denominada comunicabilidad, citando la doctrina al respecto y citando jurisprudencia en apoyo de su posición de comunicabilidad. Igualmente descartó que los delitos puedan ser sancionados como un solo delito continuado, dando los argumentos al respecto y citando jurisprudencia en apoyo de su tesis, en orden a sancionar a los acusados por los delitos de malversación de caudales públicos en carácter de reiterados; como también dedicó parte de sus alegaciones a argumentar el por qué los hechos no podían ser calificados como hurto, o estafa.

Reiteró la concurrencia de la agravante del artículo 260 ter del Código Penal, replicando las alegaciones de la defensa, en orden a que no es



concurrente porque los acusados casi no se conocían, puesto que tal aseveración está desacreditada con la declaración de testigos como Marianela Chamorro, Priscila Muñoz, Manuel Rojas y Mónica Vera, que eran quienes convivían con ellos, y no solo se conocían sino que había tráfico de llamados, y se trataban de manera particular según los mensajes de texto, y las transferencias electrónicas.

Señaló que si bien el delito de malversación requiere un perjuicio, hay distintos tipos de perjuicios, uno es el económico, se cobraron por caja 129 cheques y generó perjuicio para la municipalidad. Se acredita con documental de Contraloría relativa a la denuncia, documental 1, el pre informe de Contraloría, documental 77, informe final de Contraloría, anexo 10 de la documental 77, que hace listado de los 129 cheques cobrados por caja, que salen del patrimonio de la municipalidad y entran a los peculios de los acusados, la documental 78, con las cartolas de imágenes de cheques de las cuentas corrientes de la municipalidad; documental 75 en relación OMP N° 63 que contiene cartolas de imágenes de cheques; los dichos del perito Nelson Castro, que coincide con el perjuicio del informe final de Contraloría; la testimonial de Urrutia y Quezada que se refieren a perjuicio y origen de fondos, a que se refirió el alcalde, y funcionarios de contraloría; agregando que también hubo un perjuicio intangible, según dio cuenta el alcalde y los propios funcionarios de la municipalidad, como Chamorro Vera, que hablaron del cuestionamiento de la gente, en un ambiente laboral afectado, que se tuvo que restablecer la confianza con los proveedores, según Juan Torres; que el alcalde Henry Campos y la abogada Estefanía Estrada hicieron referencia al perjuicio más grave, cual es que en los Cesfam no habían medicamentos, los usuarios reclamaban, que en 2018 existió escasez de medicamentos, para la población más vulnerable de la comuna de Talcahuano, por culpa de los 4 acusados, que vieron mermada lo esencial de un ser humano, que es el acceso a la salud; que por supuesto que quedan dudas, acerca de cuál fue el monto real del perjuicio, y cuándo los acusados habrían comenzado con los hechos materia de la acusación, por lo que nunca se sabrá con certeza el monto total de lo malversado.

Por otra parte, en cuanto a los delitos de falsificación de instrumento público, señaló los medios de prueba con los cuales se acreditaron, analizando uno a uno los documentos fundantes de los referidos delitos, resaltando las falsedades e irregularidades existentes en cada uno de los órdenes o decretos de pago; haciéndose cargo de los cuestionamientos en torno al establecimiento de la firma del acusado Cabello, por el tenor de las conclusiones de la perito caligráfica; descartando la existencia de un concurso medial con los delitos de malversación de caudales públicos, porque no existía la necesidad de falsificar los decretos de pago el giro y cobro de los cheques.

En cuanto a la falsificación de instrumento privado mercantil y uso malicioso de instrumento mercantil falso, señaló que no compartía lo sostenido



por la querellante, debido a que los cheques cobrados por caja por los acusados corresponden a documentos legalmente emitidos y pagados por el banco, y no se hace mención o no constituyen una forma de declaración de la obligación que están pagando, por lo que no es falso bajo ninguno de los numerales que se señalan, y si no hay documento falso, malamente podría haber un uso malicioso del mismo.

Igualmente dedicó extensos argumentos para negar la existencia de la atenuante de colaboración sustancial de los acusados, haciendo referencia entre ellos, a la circunstancia que no se han recobrado los dineros, y las distintas diligencias realizadas con tal fin, que no tuvieron resultados positivos, como también hizo presente las distintas versiones que han dado de los hechos y referente al destino de los bienes durante la investigación y en el juicio, y todo lo pertinente a la entrega de claves de teléfono, en su caso.

Por lo que terminó solicitando las siguientes penas: Para Cabello Bustos en su calidad de autor de 129 delitos reiterados malversación caudales públicos del artículo 233, N° 2 y 3, del Código Penal, la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo; y por los 35 delitos reiterados de falsificación de instrumento público del artículo 193 N° 4, la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo. Para San Martín Pavez, como autora del 129 delitos de reiterados de malversación causales públicos del artículo 233 N° 2 y 3 del Código penal, pena de 20 años presidio mayor grado máximo; y como autora del artículo 15 N° 3 del Código Penal de 34 delitos reiterados de falsificación instrumento público del artículo 193 N°4 del Código Penal, y como autora del artículo 15 N° 1 de un delito de falsificación de instrumento público, referido como Hecho 7, la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo. A Pedro Paredes, le solicita la imposición de una pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, como autor del artículo 15 N° 3 del Código Penal, de 35 delitos reiterados de malversación caudales públicos del artículo 233 N° 3 del Código Penal, a 20 años presidio mayor en su grado máximo; misma pena que pide respecto de Ravanal Mellado, en su calidad de autor del artículo 15 N° 3 del Código penal, de 86 delitos de malversación causales públicos carácter reiterado 233 N° 2 y 3 del Código Penal.

Solicitando la aplicación de las accesorias especiales del artículo 233 y las generales, y las costas de la causa.

En la audiencia respectiva, reconoció la atenuante de irreproachable conducta anterior respecto de todos los acusados, pero se opuso a las atenuantes de colaboración sustancial y reparación celosa del mal causado en base a lo ya expuesto en sus alegatos; precisando que no hay antecedentes suficientes para ello, puesto que se realizaron diligencias al respecto, y no es menor en cuanto a la colaboración, porque solo se limitaron a reconocer cuando se les exhibía la documentación; por lo que solo reconoce la atenuante de irreproachable conductas anterior; en cuanto a la determinación de la pena, por las reglas de la reiteración parte a lo menos en presidio mayor en su grado



medio, por eso se pide la pena indicada, y el cálculo se hizo bajo la teoría de lo más beneficioso con la acumulación jurídica del Código Procesal penal, y por eso los 20 años que pide a Paredes; y la pena de multa, se pide el duplo de los sustraído, en su caso el duplo del hecho 2; señalando en relación a la colaboración alegada respecto de los otros tres acusados, que se remite a lo indicado; preguntándose si basta que hayan declarado en juicio lo que a ellos les plazca; pues hubo contradicciones en el contenido de sus declaraciones, con las pruebas, si dieron o no las claves, y al entrega de los celulares; que la solicitud de cálculo de las penas que hace su defensa, de llegar a 61 días para luego aumentar en un grado por la reiteración y luego un grado por la agravante, carece de sustento jurídico; y la pena solicitada por la fiscalía, se justifica porque hay una atenuante y una agravante, y por reiteración se llega a las penas solicitadas; que la defensa no señala de qué manera pretende llegar a la pena que indica, porque contiene graves contradicciones en su fundamentación; pues habla de 3 atenuantes, son hacerse cargo que le perjudica una agravante; por lo que no explica como subsisten las 3 atenuantes, y pide rebaja de 3 grados, luego aplica reiteración, y luego vuelve a aplicar las modificatorias; que las penas en abstracto, en particular la de malversación es de presidio mayor en su grado mínimo a medio, y por reiteración se puede aumentar en uno o dos grados. La forma que propone defensa se contradice con el texto del Código Procesal penal y el Código Penal.

Que respecto de los 4 acusados, señala que reparación debe ser celosa, que no basta con depositar una cantidad importante o residual en relación al perjuicio, que no es fortuito que estando privados de libertad, en momentos previos a la audiencia de preparación, se haga un cálculo para acceder a penas sustitutivas de libertad, sobre todo ante el delito de falsificación, que no es un bien jurídico de carácter patrimonial, por lo que carece fundamentación fáctica y jurídica.

Reitera las penas solicitadas en la acusación fiscal, y solita el comiso respecto de los dineros incautados en el domicilio, y respecto de la pecuniaria, solicita que sean condenados a la pena de multa de la manera señalada en la acusación; respecto a Paredes y Ravanal condenados al doble de lo que a ellos se les ha imputado, y a Cabello y San Martin, el doble de lo sustraído; agregando que la transformación de la pena en UTM no corresponde, porque está establecida en relación al valor de los sustraído; como igualmente pide la imposición de las penas accesorias específicas de inhabilitación a perpetuidad para ser funcionario público y accesorias generales.

TERCERO: La acusadora particular **ALICIA FELMER OPITZ**, Abogado Procurador Fiscal de Concepción del Consejo de Defensa del Estado, subrogando legalmente, en representación de Municipalidad de Talcahuano, persona jurídica de derecho público, formuló acusación particular en contra de **ALEJANDRO DAVID CABELLO BUSTOS, NUBIA EDITH SAN MARTIN PAVEZ, PEDRO NOLASCO RAVANAL MELLADO, y PEDRO EDUARDO MAURICIO**



PAREDES MONTOYA, en base a los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

LOS HECHOS:

“Entre los meses de octubre de 2017 a marzo de 2019, la Dirección de Administración de Salud Municipal de Talcahuano, en adelante DAS, ubicada en calle Sargento Aldea N°250, de la mencionada comuna, el imputado ALEJANDRO DAVID CABELLO BUSTOS se desempeñaba como funcionario de la Municipalidad de Talcahuano, específicamente como JEFE del DEPARTAMENTO DE FINANZAS, encargado, entre otras funciones, de controlar el presupuesto, asesorar en el cumplimiento de las funciones de administrar presupuesto y convenios, supervisar y encargarse de las transferencias entre cuentas corrientes y velar por el correcto funcionamiento del presupuesto de la DAS.

En el mismo departamento de finanzas, dentro de igual periodo, la imputada NUBIA SAN MARTIN PAVEZ, funcionaria de la misma Municipalidad, ejercía la labor ENCARGADA DE PRESUPUESTO, y entre sus funciones se encontraban las de ingreso de registros contables, revisión de documentos de respaldo para pagos, registro de obligaciones, devengamiento y ajustes contables, pago de proveedores, y atención de proveedores. Además, tenía a su cargo la caja chica y era una de las firmas autorizadas para girar cheques desde las cuentas corrientes de titularidad de la Municipalidad de Talcahuano.

En la misma época, el imputado PEDRO EDUARDO MAURICIO PAREDES MONTOYA, se desempeñaba como funcionario del Departamento de Abastecimiento de la DAS de Talcahuano, encargado de proyectos de dicho departamento.

Por su parte, dentro del mismo periodo, el imputado MANUEL ANDRES ROJAS RAMIREZ, se desempeñaba como funcionario municipal en el departamento de Abastecimiento de la DAS de Talcahuano y, entre otras funciones, le correspondía ser una de las firmas autorizadas para girar cheques desde las cuentas corrientes de titularidad de la Municipalidad de Talcahuano.

En el periodo señalado, en la comuna de Talcahuano, los imputados CABELLO BUSTOS, PAREDES MONTOYA, SAN MARTIN PAVEZ y RAVANAL MELLADO se concertaron para sustraer distintas sumas de dinero de la Municipalidad de Talcahuano a través del giro y cobro de diversos cheques que se individualizarán, abusando todos de sus cargos y funciones públicas en su caso. Para sustraer fondos municipales, los imputados obraron de la siguiente forma:

HECHO N° 1:

Dentro del periodo señalado el imputado ALEJANDRO DAVID CABELLO BUSTOS quien, en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano, tenía a su cargo los fondos municipales permitió, estando previamente concertado con la imputada NUBIA SAN MARTIN PAVEZ quien, en su calidad de funcionaria del Departamento de Finanzas de la DAS y titular de una de las firmas habilitadas de las cuentas corriente N° 52709052161



y N° 52709052004 del Banco Estado de la referida Municipalidad, giró y suscribió 7 cheques a su nombre para luego cobrarlos por caja sustrayendo la suma total de \$ 17.898.643 equivalente a 377,04 UTM, repartiéndose entre ambos, los montos sustraídos.

Los imputados CABELLO BUSTOS y SAN MARTIN PAVEZ, registraron el cheque como pagadero de obligaciones contraídas por la DAS con proveedores, lo cual concretaron mediante el registro por SAN MARTIN PAVEZ del cheque en el respectivo instrumento público Decreto de Pago, que luego era suscrito por el imputado CABELLO BUSTOS autorizando el pago. Luego, ingresaban el pago en el Sistema Modular Contable en adelante SMC quedando pagada contablemente, pero en realidad estas obligaciones quedaban pendiente de pago para la Municipalidad.

Estos cheques fueron suscritos además por MANUEL ROJAS RAMIREZ, quien tenía otra de las firmas habilitadas, actuando con negligencia inexcusable, al no verificar la procedencia de los pagos que supuestamente se efectuaban, infringiendo las labores propias de su cargo.

Lo anterior ocurrió en las fechas de giro, en relación con los cheques de las cuentas que se señalarán, por los montos y en las fechas de cobro que se detallan a continuación:

	Fecha de Giro	Cuenta Corriente	N° Cheque	Monto	UTM	Fecha de Cobro
1.	04/10/2017	52709052161	8986400	\$ 1.433.212	30,63	05/10/2017
2.	28/11/2017	52709052004	9193157	\$ 2.472.523	52,95	28/11/2017
3.	01/02/2018	52709052161	8986471	\$ 1.547.435	32,91	02/04/2018
4.	02/04/2018	52709052161	9710655	\$ 2.582.300	54,59	02/04/2018
5.	14/08/2018	52709052004	1166545	\$ 3.212.033	67,30	14/08/2018
6.	05/09/2018	52709052161	1344001	\$ 3.111.255	64,93	05/09/2018
7.	24/10/2018	52709052161	1344107	\$ 3.539.885	73,72	24/10/2018

HECHO N° 2

Dentro del periodo señalado el imputado ALEJANDRO DAVID CABELLO BUSTOS quien, en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano, y teniendo a su cargo los fondos municipales, permitió que la imputada NUBIA SAN MARTIN PAVEZ, con quien estaba previamente concertado, en su calidad de funcionaria del Departamento de Finanzas de la DAS y titular de una de las firmas habilitadas de las cuentas

corrientes N° 52709052161 y N°52709052004 del Banco Estado de la referida Municipalidad, girara y suscribiera **35 cheques** a nombre del imputado PEDRO EDUARDO MAURICIO PAREDES MONTOYA, quien, concertado también con los imputados CABELLO BUSTOS y SAN MARTIN PAVEZ los cobró por caja, sustrayendo la suma total de \$ 111.176.748 equivalentes a 2.339,69 UTM según el valor de la época, repartiéndose luego, entre los 3 coimputados, de los montos sustraídos.

Estos cheques fueron suscritos además por MANUEL ROJAS RAMIREZ, quien tenía otra de las firmas habilitadas, actuando con negligencia inexcusable, al no verificar la procedencia de los pagos que supuestamente se efectuaban, infringiendo las labores propias de su cargo, y dando ocasión a que los fondos fueran sustraídos.

Lo anterior ocurrió en las fechas de giro en relación con los cheques de las cuentas que se señalarán, por los montos y en las fechas de cobro que se detallan a continuación:

	Fecha de Giro	Cuenta Corriente	N° Cheque	Monto	UTM	Fecha de Cobro
1.	02/11/2017	52709052161	9193240	\$ 1.825.936	39,03	31/10/2017
2.	07/11/2017	52709052004	9193090	\$ 1.724.429	36,93	07/11/2017
3.	22/11/2017	52709052004	9193152	\$ 2.472.523	52,95	22/11/2017
4.	30/11/2017	52709052004	9193164	\$ 2.171.750	46,51	30/11/2017
5.	14/12/2017	52709052161	9193347	\$ 1.285.200	27,36	14/12/2017
6.	22/12/2017	52709052161	9193377	\$ 2.394.756	50,98	22/12/2017
7.	31/01/2018	52709052161	8986478	\$ 1.898.626	40,38	31/01/2018
8.	28/02/2018	52709052161	9710543	\$ 2.907.825	61,78	02/04/2018
9.	23/03/2018	52709052004	9470749	\$ 2.677.5	56,61	23/03/2018

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

				00		
10 .	27/03/2018	52709052161	9710628	\$ 2.728.602	57,69	27/03/2018
11 .	05/04/2018	52709052161	9710666	\$ 2.900.625	61,32	05/04/2018
12 .	26/04/2018	52709052161	620223	\$ 2.853.299	60,32	26/04/2018
13 .	07/05/2018	52709052161	620253	\$ 2.898.447	61,15	07/05/2018
14 .	25/05/2018	52709052161	620324	\$ 3.331.326	70,29	25/05/2018
15 .	12/06/2018	52709052161	620368	\$ 3.560.480	74,90	12/06/2018
16 .	05/07/2018	52709052161	962127	\$ 3.503.955	73,49	05/07/2018
17 .	17/07/2018	52709052161	962149	\$ 3.348.507	70,23	17/07/2018
18 .	03/08/2018	52709052161	962202	\$ 3.645.229	76,37	03/08/2018
19 .	17/08/2018	52709052004	1166550	\$ 3.499.552	73,32	17/08/2018
20 .	27/08/2018	52709052161	962270	\$ 3.729.252	78,13	27/08/2018
21 .	31/08/2018	52709052161	962279	\$ 3.810.380	79,83	03/09/2018
22 .	04/09/2018	52709052161	962287	\$ 3.893.680	81,25	04/09/2018
23 .	14/09/2018	52709052161	1344036	\$ 3.825.7	79,84	14/09/2018



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

				31		
24	20/09/2018	52709052161	1344039	\$ 3.746.120	78,17	20/09/2018
25	28/09/2018	52709052161	1344059	\$ 3.429.889	71,58	28/09/2018
26	12/10/2018	52709052161	1344096	\$ 3.909.627	81,42	11/10/2018
27	31/10/2018	52709052161	1344121	\$ 3.868.885	80,57	31/10/2018
28	09/11/2018	52709052161	1344156	\$ 3.826.109	79,44	09/11/2018
29	27/11/2018	52709052161	1762405	\$ 3.587.255	74,49	27/11/2018
30	05/12/2018	52709052161	1762436	\$ 3.457.545	71,51	05/12/2018
31	20/12/2018	52709052161	1762462	\$ 3.781.820	78,21	20/12/2018
32	02/01/2019	52709052161	1762482	\$ 3.867.857	79,99	28/12/2018
33	01/02/2019	52709052161	1762561	\$ 3.864.870	89,84	01/02/2019
34	06/02/2019	52709052161	1762578	\$ 3.741.955	77,47	06/02/2019
35	06/03/2019	52709052161	2142721	\$ 3.207.206	66,33	04/03/2019

HECHO N° 3:

El 05 de septiembre del 2018 el imputado ALEJANDRO DAVID CABELLO BUSTOS, quien en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano tenía a su cargo los fondos municipales, permitió que la imputada NUBIA SAN MARTIN PAVEZ, con quien estaba previamente concertado, en su calidad de funcionaria del Departamento de Finanzas de la



DAS y titular de una de las firmas habilitadas de la cuentas corriente N° 52709052161 del Banco Estado de la referida Municipalidad, girara el cheque N° 1344003 a nombre del ALEJANDRO DAVID CABELLO BUSTOS, quien posteriormente procedió a cobrarlo por caja el 06 de septiembre del mismo año, sustrayendo así la suma de \$ 3.476.847 correspondientes a 72,56 UTM. Este cheque fue suscrito por MANUEL ROJAS RAMIREZ, quien tenía otra de las firmas habilitadas, actuando con negligencia inexcusable, al no verificar la procedencia de los pagos que supuestamente se efectuaban, infringiendo las labores propias de su cargo, dando ocasión a la sustracción de los fondos.

HECHO N°4:

Dentro del periodo señalado el imputado ALEJANDRO DAVID CABELLO BUSTOS quien, en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano, tenía a su cargo los fondos municipales permitió que la imputada NUBIA SAN MARTIN PAVEZ, con quien estaba previamente concertado, en su calidad de funcionaria del Departamento de Finanzas de la DAS y titular de las firmas habilitadas de las cuentas corriente N° 52709052161, N° 52709052004, N°52709052187 y N° 52709052179 del Banco Estado de la referida Municipalidad, girara y suscribiera 86 cheques a nombre del imputado PEDRO RAVANAL MELLADO, quien, concertado también con los imputados CABELLO BUSTOS y SAN MARTIN PAVEZ y a sabiendas de las calidades de funcionarios públicos desempeñados por estos, los cobró por caja, permitiendo la sustracción de la suma total de \$279.472.587 equivalente a 5.854,99 UTM repartiéndose entre los 3 coimputados, los montos sustraídos.

Todos los cheques, salvo N° 620362 y N° 620383 de la cuenta corriente N° 52709052161 del número 36 y 37 del listado, fueron suscritos además por MANUEL ROJAS RAMIREZ, quien tenía otra de las firmas habilitadas, actuando con negligencia inexcusable, al no verificar la procedencia de los pagos que supuestamente se efectuaban, infringiendo las labores propias de su cargo y dando ocasión a la sustracción de fondos.

Lo anterior ocurrió en las fechas de giro en relación con los cheques de las cuentas que se señalarán, por los montos y en las fechas de cobro que se detallan a continuación:

	Fecha de Giro	Cuenta Corriente	N° Cheque	Monto	UT M	Fecha de Cobro
1.	24/10/2017	52709052161	9193223	\$ 2.246.720	48,02	23/10/2017
2.	31/10/2017	52709052161	9193237	\$ 922.845	19,72	30/10/2017
3.	13/11/2017	52709052004	9193122	\$ 1.796.344	38,47	10/11/2017



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

4.	16/11/2017	52709052004	9193128	\$ 2.331.9486	49,94	16/11/2017
5.	05/12/2017	52709052004	9193183	\$ 2.714.390	57,79	05/12/2017
6.	15/12/2017	52709052004	9470619	\$ 1.979.446	42,14	11/12/2017
7.	04/01/2018	52709052161	9193398	\$ 1.777.665	37,81	02/01/2018
8.	11/01/2018	52709052161	8986407	\$ 2.512.888	53,44	10/01/2018
9.	17/01/2018	52709052161	8986413	\$ 2.294.082	48,79	16/01/2018
10.	22/01/2018	52709052161	8986424	\$ 1.802.493	37,80	18/01/2018
11.	26/01/2018	52709052161	8986437	\$ 2.238.979	47,62	25/01/2018
12.	31/01/2018	52709052161	8986470	\$ 1.414.315	30,08	01/03/2018
13.	12/02/2018	52709052161	9710502	\$ 2.968.812	63,08	09/02/2018
14.	15/02/2018	52709052161	9710509	\$ 2.814.826	59,81	15/02/2018
15.	21/02/2018	52709052161	9710524	\$ 2.677.500	56,89	20/02/2018
16.	27/02/2018	52709052161	9710542	\$ 2.377.620	50,52	01/03/2018
17.	12/03/2018	52709052161	9710590	\$ 2.618.000	55,35	08/03/2018



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

18 .	14/03/2018	52709052004	9470742	\$ 2.795.310	59,10	13/03/2018
19 .	28/03/2018	52709052161	9710634	\$ 2.987.019	63,53	28/03/2018
20 .	10/04/2018	52709052161	9710683	\$ 2.907.825	61,47	10/04/2018
21 .	13/04/2018	52709052004	9710438	\$ 2.827.202	59,77	12/04/2018
22 .	17/04/2018	52709052187	733206	\$ 2.972.239	62,84	17/04/2018
23 .	24/04/2018	52709052161	620204	\$ 2.588.250	54,72	23/04/2018
24 .	02/05/2018	52709052161	620230	\$ 2.942.311	62,20	27/04/2018
25 .	03/05/2018	52709052161	620231	\$ 2.680.118	56,55	02/05/2018
26 .	04/05/2018	52709052161	620250	\$ 2.796.500	59,00	04/05/2018
27 .	14/05/2018	52709052161	620274	\$ 3.236.526	68,29	11/05/2018
28 .	15/05/2018	52709052161	620291	\$ 3.220.353	67,95	15/05/2018
29 .	16/05/2018	52709052161	620296	\$ 3.623.788	76,46	15/05/2018
30 .	23/05/2018	52709052161	620314	\$ 3.220.783	67,95	23/05/2018
31 .	29/05/2018	52709052161	620334	\$ 3.652.110	77,06	28/05/2018



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

32 .	31/05/2018	52709052161	620345	\$ 3.402.210	71,78	31/05/2018
33 .	05/06/2018	52709052161	620356	\$ 3.332.000	70,09	04/06/2018
34 .	06/06/2018	52709052161	620360	\$ 3.748.500	78,85	05/06/2018
35 .	12/06/2018	52709052161	620362	\$ 3.855.600	81,11	07/06/2018
36 .	26/06/2018	52709052161	620383	\$ 3.951.633	83,13	26/06/2018
37 .	28/06/2018	52709052161	620388	\$ 3.046.400	64,08	26/06/2018
38 .	29/06/2018	52709052161	962104	\$ 3.513.435	73,91	29/06/2018
39 .	04/07/2018	52709052161	962121	\$ 3.927.000	82,36	03/07/2018
40 .	12/07/2018	52709052161	962144	\$ 3.632.572	76,18	12/07/2018
41 .	23/07/2018	52709052161	962155	\$ 3.878.686	81,35	20/07/2018
42 .	24/07/2018	52709052161	962162	\$ 3.923.073	82,28	25/07/2018
43 .	31/07/2018	52709052004	1166424	\$ 3.570.000	74,87	30/07/2018
44 .	02/08/2018	52709052161	962191	\$ 3.382.575	70,87	01/08/2018
45 .	08/08/2018	52709052161	962219	\$ 3.769.991	78,99	06/08/2018



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

46 .	09/08/2018	52709052161	962240	\$ 3.754.36 31	78,6	08/08/2018
47 .	13/08/2018	52709052004	1166531	\$ 3.641.49 00	76,2	10/08/2018
48 .	14/08/2018	52709052004	1166538	\$ 3.538.23 19	74,1	13/08/2018
49 .	21/08/2018	52709052161	962263	\$ 3.660.70 38	76,7	03/09/2018
50 .	23/08/2018	52709052161	962267	\$ 3.213.02 00	67,3	03/09/2018
51 .	31/08/2018	52709052161	962274	\$ 3.442.12 13	72,1	30/08/2018
52 .	03/09/2018	52709052161	962284	\$ 3.575.41 74	74,6	03/09/2018
53 .	06/09/2018	52709052161	1344005	\$ 3.587.77 31	74,8	05/09/2018
54 .	10/09/2018	52709052161	1344029	\$ 3.681.73 89	76,8	07/09/2018
55 .	13/09/2018	52709052161	1344033	\$ 3.793.77 20	79,1	13/09/2018
56 .	14/09/2018	52709052161	1344035	\$ 3.439.98 30	71,7	13/09/2018
57 .	21/09/2018	52709052161	1344040	\$ 3.560.40 80	74,3	20/09/2018
58 .	25/09/2018	52709052161	1344052	\$ 3.877.01 20	80,9	24/09/2018
59 .	28/09/2018	52709052161	1344060	\$ 3.855.15 59	80,4	28/09/2018

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

60	03/10/2018	52709052161	1344065	\$ 3.962.700	83,02	02/10/2018
61	05/10/2018	52709052161	1344082	\$ 3.320.100	69,15	04/10/2018
62	09/10/2018	52709052161	1344089	\$ 3.760.995	78,33	08/10/2018
63	18/10/2018	52709052161	1344100	\$ 3.612.835	75,24	17/10/2018
64	22/10/2018	52709052161	1344104	\$ 3.616.100	75,31	22/10/2018
65	24/10/2018	52709052161	1344106	\$ 3.881.780	80,84	23/10/2018
66	29/10/2018	52709052161	1344108	\$ 3.706.613	77,20	26/10/2018
67	30/10/2018	52709052161	1344113	\$ 3.513.753	73,18	01/02/2019
68	05/11/2018	52709052161	1344130	\$ 3.212.033	66,70	05/11/2018
69	07/11/2018	52709052161	1344145	\$ 3.520.773	73,11	07/11/2018
70	12/11/2018	52709052161	1344175	\$ 3.165.400	65,73	09/11/2018
71	26/11/2018	52709052161	1344183	\$ 3.254.650	67,58	13/11/2018
72	29/11/2018	52709052161	1762412	\$ 3.246.646	67,58	01/02/2019
73	04/12/2018	52709052161	1762416	\$ 3.463.495	71,63	03/12/2018



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

74.	11/12/2018	52709052161	1762442	\$ 3.782.415	78,23	07/12/2018
75.	14/12/2018	52709052161	1762451	\$ 3.868.055	80,00	13/12/2018
76.	19/12/2018	52709052161	1762456	\$ 3.850.840	79,64	19/12/2018
77.	24/12/2018	52709052161	1762463	\$ 3.775.937	78,09	24/12/2018
78.	28/12/2018	52709052161	1762480	\$ 3.861.550	79,86	01/02/2019
79.	07/01/2019	52709052161	1762478	\$ 3.796.838	78,52	01/02/2019
80.	09/01/2019	52709052161	1762511	\$ 3.783.724	78,25	08/01/2019
81.	05/02/2019	52709052161	1762513	\$ 3.626.192	74,99	08/01/2019
82.	06/02/2019	52709052161	1762512	\$ 3.500.980	72,40	08/01/2019
83.	18/02/2019	52709052161	1762587	\$ 3.685.668	76,30	19/02/2019
84.	22/02/2019	52709052161	1762600	\$ 3.923.073	81,21	20/02/2019
85.	27/02/2019	52709052179	2593238	\$ 3.986.500	82,53	27/02/2019
86.	07/03/2019	52709052161	2142720	\$ 3.298.918	68,23	04/03/2019

HECHO N° 5:

Entre los meses de diciembre del 2017 a octubre del 2018 el imputado ALEJANDRO CABELLO BUSTOS en su calidad de jefe del departamento de



Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano y encargado de suscribir los decretos municipales que registran los pagos de obligaciones contraídas por la DAS de dicha Municipalidad, firmó los decretos respecto de pagos a distintos proveedores en las fechas, montos y con los cheques que se indicarán a sabiendas que los cheques consignados no pagaron las obligaciones declaradas en los documentos. Estos decretos fueron elaborados concertadamente con CABELLO BUSTOS, por la imputada NUBIA SAN MARTIN PAVEZ, en su calidad de Encargada de Presupuesto, quien ingresa la información contenida en los decretos y luego visa con firma de responsabilidad los mismos. Estos decretos son falsos al declarar que las respectivas obligaciones en ellos consignadas fueron pagadas con los cheques de titularidad de la municipalidad señalados en los documentos, lo cual es falso. Lo anterior ocurrió en los siguientes documentos, en las fechas, respecto de los proveedores, por los cheques, y montos que se señalan a continuación:

	Número Decreto	Fecha	N° Cheque	Monto	Proveedor
1.	2199	14/12/2017	9193347	\$ 1.285.200	LABORATORIO CHILE S.A.
2.	275	21/02/2018	9710524	\$ 2.677.500	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA
3.	344	08/03/2018	9710590	\$ 2.618.000	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA
4.	498	28/03/2018	9710634	\$ 2.987.019	LABORATORIO ANDROMACO
5.	653	02/04/2018	9710543	\$ 2.907.825	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.
6.	643	12/04/2018	9710438	\$ 2.827.202	LABORATORIO ANDROMACO
7.	659	17/04/2018	733206	\$ 2.972.239	LABORATORIO ANDROMACO
8.	745	02/05/2018	620231	\$ 2.680.118	LABORATORIO ANDROMACO
9.	921	23/05/2018	620314	\$ 3.220.783	LABORATORIO ANDROMACO



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

10.	983	04/06/2018	620356	\$ 3.332.000	LABORATORIO ANDROMACO
11.	1232	24/07/2018	962162	\$ 3.923.073	LABORATORIO CHILE S.A.
12.	1277	30/07/2018	1166424	\$ 3.570.000	LABORATORIO CHILE S.A.
13.	1535	03/09/2018	962279	\$ 3.810.380	DPHARMA INVESTI DE CHILE S.A.
14.	1540	03/09/2018	962267	\$ 3.213.000	BUHOS S.C.I. LTDA.
15.	1541	03/09/2018	962284	\$ 3.575.474	LABORATORIO CHILE S.A.
16.	1644	03/09/2018	962263	\$ 3.660.738	WINPHARM SPA
17.	1550	04/09/2018	962287	\$ 3.893.680	LABORATORIO CHILE S.A.
18.	1588	05/09/2018	1344005	\$ 3.587.731	LABORATORIO CHILE S.A.
19.	1594	05/09/2018	1344003	\$ 3.476.847	OPKO CHILE.S.A
20.	1587	05/09/2018	1344001	\$ 3.111.255	PHARMA INVESTI DE_CHILE S.A.
21.	1589	10/09/2018	1344029	\$ 3.681.789	ETHON PHARMACEUTICALS
22.	1634	13/09/2018	1344035	\$ 3.439.930	LABORATORIO CHILE S.A.
23.	1626	14/09/2018	1344036	\$ 3.825.731	LABORATORIO ANDROMACO



24.	1635	20/09/2018	1344039	\$ 3.746.120	LABORATORIO ANDROMACO
25.	1643	20/09/2018	1344040	\$ 3.560.480	LABORATORIO ANDROMACO
26.	1660	24/09/2018	1344052	\$ 3.877.020	LABORATORIO CHILE S.A.
27.	1690	02/10/2018	1344065	\$ 3.962.700	WINPHARM SPA
28.	1712	04/10/2018	1344082	\$ 3.320.100	ETEX FARMACEUTCA LIMITADA
29.	1729	08/10/2018	1344089	\$ 3.760.995	LABORATORIO CHILE S.A.
30.	1738	11/10/2018	1344096	\$ 3.909.627	LABORATORIO CHILE S.A.
31.	1747	17/10/2018	1344100	\$ 3.612.835	LABORATORIO CHILE S.A.
32.	1754	22/10/2018	1344104	\$ 3.616.100	ETHON PHARMACEUTICALS
33.	1758	23/10/2018	1344106	\$ 3.881.780	WINPHARM SPA
34.	1776	24/10/2018	1344107	\$ 3.539.885	LAB.SILESIA S.A.

HECHO N° 6:

El 12 de junio del 2018 el imputado AEJANDRO CABELLO BUSTOS PAVEZ en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano y encargado de suscribir los decretos municipales que registran los pagos de obligaciones contraídas por la DAS de dicha Municipalidad, elaboró e ingresó la información contenida en el decreto de pago N° 1013 respecto del pago al proveedor LABORATORIO ANDROMACO declarando que el cheque N°620368 pagaba dicha obligación por \$3.560.480 para luego firmarlo. El imputado lo firma a sabiendas de su falsedad al declarar que la respectiva



obligación en el decreto consignada fueron pagadas con los cheques de titularidad de la municipalidad señalados en los documentos lo cual es falso.

HECHO N° 7:

El 01 de febrero del 2019 la NUBIA SAN MARTIN PAVEZ en su calidad de jefa subrogante del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano y encargada de suscribir los decretos municipales que registran los pagos de obligaciones contraídas por la DAS de dicha Municipalidad, elaboró e ingresó la información contenida en el decreto de pago N°235 respecto del pago al proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION declarando que el cheque N°1344113 pagaba dicha obligación por \$3.513.753 para luego firmarlo. La imputada lo firma a sabiendas de su falsedad al declarar que la respectiva obligación en el decreto consignada fue pagada con los cheques de titularidad de la municipalidad señalados en los documentos lo cual es falso.

CALIFICACIÓN JURÍDICA, GRADO DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN:

La querellante y acusadora particular, estima que los hechos descritos precedentemente son constitutivos de los siguientes delitos:

1.- Respecto del imputado ALEJANDRO DAVID CABELLO BUSTOS:

a.- Tratándose de los hechos N° 1, 2, 3 y 4 referidos en el acápite I de la acusación particular de la querellante, **129 delitos en carácter de reiterado de falsificación de instrumento privado mercantil**, descrito y sancionado en el artículo 197 en relación con al artículo 193 N° 4 ambos del Código Penal, **en concurso medial con 129 delitos reiterados de malversación de caudales públicos** del artículo 233 N° 2 y N° 3 del Código Penal, **en grado de desarrollo consumados** y en los que se le atribuye a este acusado participación a título de **autor** de acuerdo con el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

b.- En cuanto a los hechos N° 5 y 6 del acápite I de la acusación particular de la querellante, **35 delitos reiterados de falsificación de instrumento público**, descrito y sancionado en el artículo 193 N°4 Código Penal, en grado de desarrollo **consumado** y en los cuales se le atribuye a Alejandro Cabello Bustos, participación a título de **autor**, de acuerdo con el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

2.- Respecto de la acusada NUBIA EDITH SAN MARTÍN PAVEZ:

a.- Por los hechos descritos en los N° 1, 2, 3 y 4 referidos en el acápite I de la acusación de la querellante, **129 delitos en carácter de reiterado de falsificación de instrumento público** descrito y sancionado en ellos artículo 197 en relación con el artículo 193 N° 4 del Código Penal, **en concurso medial con 129 delitos reiterados de malversación de caudales públicos** del artículo 233 N° 2 y N°3 del Código Penal, en los cuales se le atribuye a la encartada San Martín Pavez, participación a título de **autora** de acuerdo con el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

b.- Por los hechos descritos N° 5 y 7, referidos en el acápite I de la acusación de la querellante, **35 delitos reiterados de falsificación de instrumento**



público del artículo 193 N° 4 del Código Penal, en los cuales se le atribuye participación en calidad de **autora**, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 N° 3 del Código Penal, en relación al hecho N° 5, y; en calidad de **autora** del artículo 15 N° 1 del Código Penal, tratándose del hecho N° 7.

3.- Respecto del imputado **PEDRO EDUARDO MAURICIO PAREDES MONTOYA**, en relación al hecho N°2, referidos el acápite I de la acusación de la querellante, **35 delitos consumados y reiterados de uso malicioso de instrumento privado mercantil falso**, descrito y sancionado en el artículo 198 del Código Penal, en relación con el artículo 197 en relación con el artículo 193 N° 4 del Código Penal, **en concurso medial con 35 delitos, consumados y reiterados de malversación de caudales públicos**, descrito y sancionado en el artículo 233 N° 2 y N° 3 del Código Penal, en los cuales se le atribuye participación a título de **autor** de acuerdo con el artículo 15 N° 1 del Código Penal respecto de los delitos de uso malicioso de instrumento privado mercantil, y; participación a título de autor de acuerdo al artículo 15 N° 1 del Código Penal respecto del delito de malversación de caudales Públicos.

4.- Respecto del imputado **PEDRO NOLASCO RAVANAL MELLADO**, en cuanto al hecho N° 4, referido en el acápite I de la acusación de la querellante, **86 delitos consumados y reiterados de uso malicioso de instrumento privado mercantil falso**, descrito y sancionado en el artículo 198 del Código Penal, en relación con el artículo 197 en relación con el artículo 193 N° 4 del mismo cuerpo legal, **en concurso medial con 86 delitos consumados y reiterados de malversación de caudales públicos**, descrito y sancionado en el artículo 233 N° 2 y N° 3 del Código Penal, en los cuales se le atribuye participación a título de **autor**, de acuerdo con el artículo 15 N° 1 del Código Penal, respecto del uso malicioso de instrumento privado mercantil, y; participación a título de autor, de acuerdo al artículo 15 N° 1 del Código Penal, respecto del delito de malversación de caudales Públicos.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

A juicio de la querellante acusadora particular, estima que concurren respecto de los cuatro acusados, las siguientes circunstancias modificatorias de responsabilidad penal:

En lo que concierne a circunstancias atenuantes de responsabilidad penal, se estima que favorece a los acusados, la del artículo 11 N° 6 del Código Penal, esto es la irreprochable conducta anterior, tratándose de todos los delitos que se les imputan.

En cuanto a circunstancias agravantes, se estima por parte de la acusadora particular, la del artículo 260 ter del Código Penal, respecto de la comisión del delito de malversación de caudales públicos, toda vez que, de acuerdo a la norma citada, dicha circunstancia agravante aplica solo respecto de los delitos de los parraos 5, 6, 9 y 9 bis del libro II del Código Penal, encontrándose el delito de malversación de caudales públicos descrito en el



párrafo, 5 artículo 233 y siguientes del citado Código. Esto respecto de los hechos acaecidos con posterioridad al 20 de noviembre de 2018.

PENA REQUERIDA:

La querellante y acusadora particular, requiere se condene a cada uno de los acusados a las siguientes penas:

1.- Respecto del imputado **ALEJANDRO DAVID CABELLO BUSTOS**, se solicita:

a.- Por los delitos reiterados de falsificación de instrumento privado mercantil en concurso medial con delitos reiterados de malversación de caudales públicos imputados en los Hechos N° 1, 2, 3, 4 de la acusación particular de la querellante: **QUINCE AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÁXIMO, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y multa del doble de lo substraído.**

b.- Por el delito reiterado de falsificación de instrumento público imputado en el acápite I de la acusación particular de la querellante, hecho N° 5 y N° 6: **SIETE AÑOS Y CIENTO OCHENTA Y TRES DÍAS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO.**

2.- Respecto **NUBIA EDITH SAN MARTÍN PAVEZ**, se solicita:

a.- Por los delitos reiterados de falsificación de instrumento privado mercantil en concurso medial con delitos reiterados de malversación de caudales públicos imputados en los Hechos N° 1, 2, 3, 4 del acápite I de la acusación de la querellante: **QUINCE AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÁXIMO, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y multa del doble de lo substraído.**

b.- Por el delito reiterado de falsificación de instrumento público, imputado en el acápite I de la acusación de la querellante, hecho N° 5 y N° 7: **SIETE AÑOS Y CIENTO OCHENTA Y TRES DÍAS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO.**

3.- Respecto de **PEDRO EDUARDO MAURICIO PAREDES MONTOYA**, por los delitos reiterados de uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, en concurso medial con delitos reiterados de malversación de caudales públicos imputados en los Hechos N° 2 del acápite I de la acusación de la querellante: **QUINCE AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÁXIMO, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y multa del doble de lo substraído.**

4.- Respecto de **PEDRO RAVANAL MELLADO**, por los delitos reiterados de uso malicioso de instrumento privado mercantil falso en concurso medial con delitos reiterados de malversación de caudales públicos imputados en el Hecho N° 4 del acápite I de la acusación de la querellante: **QUINCE AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÁXIMO, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y multa del doble de lo substraído.**

En su alegato de apertura, la querellante manifestó que a través de la



prueba que rendirá durante el desarrollo del juicio acreditará, más allá de toda duda razonable, todos y cada uno de los presupuestos fácticos de su acusación particular y de su demanda civil de indemnización de perjuicios;preciando aspectos relevantes para la resolución de este juicio. En primer lugar, que los 3 acusados de esta causa tenían a la época de ocurrencia de los hechos la calidad de funcionarios públicos, Alejandro David Cabello Bustos, Nubia Edith San Martín Pavez y Pedro Eduardo Mauricio Paredes Montoya; que Cabello Bustos desempeñaba como jefe de administración de finanzas, San Martín Pavez se desempeñaba en el cargo de encargada de presupuestos de la Municipalidad de Talcahuano y Paredes Montoya se desempeñaba como un funcionario del Departamento de Abastecimiento de la Dirección de la Administración de Salud de Talcahuano que en adelante denominará DAS; por lo que todos desempeñaban una función pública o cargo público al momento de la comisión de los delitos por los cuales se presenta la correspondiente acusación en esta causa; que acreditará que los funcionarios públicos acusados actuaron previamente concertados con un particular, Pedro Nolasco Ravanal Mellado, quien tiene una vinculación consistente en una relación de pareja con la acusada San Martín Pavez, que es una de las funcionarias públicas; que acreditará que todos estos hechos son cada uno constitutivos de delitos ejecutados en forma reiterada de manera independiente, fueron ejecutados durante un determinado período de tiempo que se extiende desde el mes de octubre del año 2017 hasta marzo del año 2019, momento en que el actuar delictivo de cada uno de los acusados quedó al descubierto a través de la realización de una auditoría por parte de la Contraloría Regional del Bío Bío, auditoria que dejó en evidencia el comportamiento delictivo y que en definitiva se habían sustraído fondos pertenecientes a la Municipalidad de Talcahuano que estaban destinadas a la Dirección de Administración de Salud de dicha comuna y que en su totalidad, sin hacer referencia del detalle por cada uno de los delitos, produjo un perjuicio a fondos públicos que asciende al suma de \$412.024.825.-

Que concurrieron funcionarios de la Contraloría Regional del Bío Bío a hacer una auditoría de rutina, como se hace distintos servicios públicos, en la DAS de Talcahuano, para lo cual se comenzaron a enviar cartas a los distintos proveedores con la finalidad que los mismos proveedores informaran las deudas que tenían con el respectivo servicio, de tal manera que con este antecedente los funcionarios fiscalizadores concurren a los asientos contables del respectivo servicio y verifican la concordancia entre lo informado por el proveedor y lo que se encuentra registrado en los antecedentes contables del servicio público respectivo; y fue así que en primer lugar se detectó la comunicación de un proveedor Etex Farmacéutica que le señaló a los funcionarios fiscalizadores que la DAS mantenía con él una deuda que ascendía a los doce millones de pesos, por lo que inmediatamente los funcionarios fiscalizadores fueron a revisar el antecedente respectivo en la anotación contable del servicio público y verificaron que aparecía en los antecedentes financieros del servicio como



pagada, lo que fue una primera alerta. Luego, paralelamente, se recibe una denuncia vía web de parte de otro proveedor que se llama Laboratorio Múnich Limitada que le señalaba a los funcionarios fiscalizadores que la DAS mantenía con ellos una deuda de noventa millones de pesos, ante lo cual los funcionarios fiscalizadores fueron a revisar los antecedentes contables por el monto y porque se informaban varias facturas con número que se encontraban impagas, percatándose que muchas de las facturas que informaba este proveedor particular como impagas aparecían registradas como pagadas, alrededor de 66 millones de pesos aparecían pagados. De tal manera que la alerta empezó a intensificarse aún más y decidieron los funcionarios fiscalizadores revisar los cheques con los cuales había efectuado el pago de cada una de las deudas que aparecían registrados y que cuestionaban estos proveedores particulares de la DAS y solicitaron a las respectivas entidades bancarias que remitieran la copia de los cheques; y en ese momento se percatan que muchos de los cheques con los cuales aparecían pagadas estas deudas habían sido girados a nombre de funcionarios de la DAS Talcahuano, específicamente la acusada Nubia San Martín, Pedro Paredes y además aparecían algunos girados también a un particular, Pedro Ravanal Mellado. En definitiva, en ese momento se dieron inmediatamente cuenta los funcionarios fiscalizadores que aquí habían hechos que podían ser constitutivos de delitos y se dirigieron ante las autoridades correspondientes a hacer la denuncias respectivas a fin de que se iniciara una investigación en relación a estos hechos, pero paralelamente los funcionarios de la Contraloría siguieron realizando auditorías sucesivas a la DAS hasta el momento de determinar la cantidad completa y total que había sido sustraída, que asciende a la suma de \$ 412.024.825.-.

Al mismo tiempo los funcionarios de la Contraloría a través de estas auditorías que realizaron permitieron determinar el modus operandi o la forma en que estos 3 funcionarios de la DAS Talcahuano y de la Municipalidad de Talcahuano en conjunto con el particular Pedro Nolasco Ravanal Mellado, habían cometido cada uno de los ilícitos que hoy tipifica como malversación de caudales públicos y también otros delitos que eran el medio necesario para la consecución del fin principal que era la comisión del delito de malversación de caudales públicos; que lo que se determinó fue que el procedimiento consistía en girar cheques de ambas cuentas de la Municipalidad de Talcahuano, cuentas corrientes que estaban destinadas al pago de los proveedores de la DAS, se giraban los cheques a nombre de los funcionarios públicos acusados en esta causa, los que luego suscribían, presentaban los cheques a cobro, se apropiaban de esta manera de los fondos públicos y repartían entre ellos el dinero que lograban cobrar utilizando este mecanismo y luego para no ser descubiertos lo que hacían era generar un decreto de pago en el cual se hacía referencia al pago de algún proveedor al que se asignaba el cheque como que estaba pagando la deuda del proveedor, pero en realidad era el cheque que se había utilizado para sustraer los fondos de la DAS por parte de los funcionarios públicos; y luego



ingresaban esta información al proveedor respectivo, al cheque respectivo que había sido cobrado por los funcionarios públicos, pero haciendo referencia en el sistema financiero contable SMC, que se había pagado la deuda de algún proveedor determinado, lo que no era efectivo.

Señala que ello sin lugar a dudas permitió a estos funcionarios públicos concertados con este particular mantener su actuar delictual durante un espacio extenso de tiempo y les permitió ejecutar varias veces, de manera reiterada cada uno de los delitos de la manera señalada en la acusación particular y del Ministerio Público; que son muchos delitos, varios reiterados, en los números exactos señalados en la acusación durante este espacio de tiempo y acompañado de ciertas circunstancias especiales de este caso concreto; ello porque los funcionarios públicos acusados, concertados con el particular, no podrían haber llevado a cabo la comisión del ilícito de malversación de caudales públicos y los otros necesarios para su ejecución si no en la calidad de funcionario público que tenían al momento de ocurrencia de los hechos, porque las funciones que cada uno desempeñara los ubica en una posición privilegiada, en una posición especial respecto de los fondos para poder disponer de ellos. En el caso del señor Cabello Bustos era el jefe de finanzas de la municipalidad de Talcahuano y en relación a la DAS estaba encargado de velar por el presupuesto de la DAS, por lo que tenía a su cargo los fondos públicos porque era el último mecanismo de control en el procedimiento de emisión de los cheques y pago a los distintos proveedores, de tal manera que el cargo que él desempeñaba lo ubicada en una posición de disposición de estos fondos públicos; pero no bastaba su intervención, sino que se necesitaba la intervención de otros funcionarios públicos que tenían otras funciones distintas, pero que se complementan en el procedimiento de pago, y ahí ingresa la labor de Nubia San Martín, porque como funcionaria pública, jefa del Departamento Presupuesto de la DAS de Talcahuano, ella tenía a su cargo estas chequeras de la Municipalidad de Talcahuano que le fueron conferidas y entregadas para girar los cheques para pagar a los proveedores, al mismo tiempo que ella tenía la facultad, estaba autorizada por el servicio para ser una de las firmas autorizadas de los cheques. Por consiguiente se tiene en primer lugar la posición del señor Cabello Bustos como el jefe que controlaba finalmente toda la actividad presupuestaria. En segundo lugar, esto se relaciona con la actividad de la señora Nubia San Martín, que era la que tenía las chequeras, giraba los cheques para hacer pago a los proveedores dentro de sus funciones y tenía una firma autorizada. Pero además se requería la intervención de otras personas, y el funcionario público Paredes Montoya, ocupaba un cargo como funcionario del Departamento de Abastecimiento, que sin lugar a dudas participaba de la comisión de los hechos previamente concertado con los otros dos funcionarios públicos acusados y en definitiva guardaba silencio debido a que también formaba parte de esta obra común. En definitiva es la función que cada uno de estos funcionarios públicos desarrolla dentro de servicio público, lo que permite el logro de la comisión



exitosa del delito de malversación de caudales públicos cometido de manera reiterada en el espacio extenso de tiempo que ya ha señalado.

Señala que estos funcionarios públicos además se conciertan con este particular y la vinculación en este caso específico del particular, lo es por su relación de carácter personal con uno de los funcionarios públicos, con la señora Nubia San Martín y esto es relevante porque eso implica o permite acreditar que respecto de él había conocimiento de dos factores que son relevantes, en primer lugar de que estaba actuando como un coimputado con funcionarios públicos, y en segundo lugar, que las actuaciones que él realizaba, en lo que se refiere al cobro específico de los cheques por caja, que eran girados a su nombre por doña Nubia San Martín, importaría la sustracción y apropiación de fondos públicos, de lo cual él tenía pleno conocimiento.

En definitiva los cuatro acusados, tanto los funcionarios públicos como el particular Pedro Ravanal Mellado, actúan previamente concertados, lo que es muy importante porque en las actividades que ellos desarrollen existe lo que se conoce como una convergencia, una convergencia en los hechos que ejecutan y una convergencia en el aspecto subjetivo o dolo común. En definitiva, estos acusados se reparten distintas actuaciones que deben realizar materialmente dentro de esta obra común que en definitiva es la consecución de la malversación de caudales públicos, la sustracción de los fondos públicos. Mientras algunos falsifican los decretos de pago, otros giran los cheques, otros los cobran por ventanilla, etc., pero todas estas actuaciones individuales de cada uno de ellos que constituyen parte de la ejecución de la conducta típica se aúnan en su conjunto y cada uno se hace partidario de lo que ejecutan los demás a través de lo que se conoce como dolo común o convergencia subjetiva. Señala que esto es muy relevante en lo que se refiere a los tipos penales por los cuales se está solicitando que se condene a los acusados tanto, porque esta convergencia subjetiva en esta obra común, lo que hace en definitiva es dar aplicación en este caso a la teoría de la comunicabilidad, en que aquellas características o elementos típicos especiales del delito de malversación de caudales públicos se traspasan y se extienden a cada uno de los que intervienen en la comisión del mismo en esta obra común, incluyendo este particular. Refiere que precisamente, la condición de disposición de los fondos públicos que principalmente la tenía el señor Cabello Bustos, se traspasa con este dolo común a los restantes funcionarios públicos y también este carácter de funcionario público se comunicaría respecto del particular y todos ellos participarían en esta obra común que es un delito de malversación de caudales públicos, correspondiéndoles participación en calidad de coautores en delito reiterados y consumados.

Refiere que para la comisión de esta obra principal, que era la sustracción de los fondos de la DAS Talcahuano, era necesario que tanto los funcionarios públicos como este particular cometieran otros delitos que en definitiva son medios para la comisión del delito principal y el fin principal que se traduce



simple y sencillamente en apropiarse de estos fondos públicos, sustraerlos y apropiarse de los mismos. Así, comenzaron a cometer el delito de falsificación de instrumento público, por cuanto estos decretos de pago en definitiva lo que hacían era consignar en ellos que con los cheques girados a nombre de los funcionarios públicos y del particular acusado en esta causa, se pagaba alguna obligación verdadera, existente, respecto de los proveedores, lo cual era falso. De tal manera que este documento que per se es un documento público, porque da fe de una determinada situación al interior del servicio y ha sido otorgado dentro de su competencia por un funcionario público, es falso ideológicamente y en cuanto su contenido. Lo mismo ocurre respecto de los distintos cheques que se van girando por la señora Nubia San Martín, y que configurarían el delito de falsificación de instrumento privado mercantil, cheques que se giran a nombre de los distintos funcionarios públicos y del particular, porque estos cheques no eran cualquier cheque, pues provenían de dos talonarios específicos de la Municipalidad de Talcahuano que habían sido confiados y entregados a la funcionaria Pública Nubia San Martín para hacer pagos específicos y determinados con fondos públicos que sólo podían ser utilizados para el pago de proveedores. De tal manera que cuando ella llena estos cheques y se suscriben con beneficiarios distintos a aquellos que estaban autorizados por el servicio y para la cual estos elementos habían sido entregados, lo que está haciendo es faltar a la verdad de la narración de los hechos sustanciales del contenido del cheque, de conformidad a lo que dispone el N°4 del artículo 193 del Código Penal, al que se remite el delito de falsificación de instrumento privado mercantil. Finalmente, estos cheques debían ser utilizados por los distintos funcionarios, presentados a cobro y también por el particular ante las instituciones financieras respectivas para lograr la sustracción y la apropiación de los fondos públicos.

Es así, que a través de la acusación particular presentada por parte del Consejo de Defensa del Estado se imputan a cada uno de los acusados los siguientes delitos. Respecto de los hechos señalados de los números 1, 2, 3 y 4 de la acusación particular, en relación al señor Alejandro Cabello Bustos 129 delitos ejecutados en carácter de reiterado de falsificación de instrumento público mercantil que se encuentran en concurso medial con 129 delitos de malversación de caudales públicos. Respecto de los hechos 5 y 6 respecto del señor Cabello Bustos, 35 delitos reiterados de falsificación de instrumento público. Respecto de Nubia San Martín en relación con los hechos 1, 2, 3 y 4 de la acusación, 129 delitos de carácter reiterado de falsificación de instrumento público en concurso medial con 129 delitos reiterados de malversación de caudales públicos del artículo 233 números 2 y 3; y además, 35 delitos reiterados falsificación de instrumento público del artículo 193 número 4. Respecto del acusado Paredes Montoya en relación al hecho 2, 35 delitos consumados reiterados de uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, descrito y sancionado en el artículo 198 el Código Penal en relación con el



artículo 197 en relación con el artículo 193 N°4, en concurso medial con 35 delitos consumados y reiterados de malversación de caudales públicos, descrito en el artículo 233 números 2 y 3. En cuanto a Pedro Ravanal Mellado, en relación al hecho N°4, 86 delitos consumados y reiterados de uso malicioso instrumento privado mercantil falso en concurso medial con 86 delitos consumados y reiterados de malversación de caudales públicos, descrito y sancionado en el artículo 233 números 2 y 3.

En base a esta calificación jurídica y a esta imputación, solicita que se imponga respectivamente respecto Alejandro Cabello Bustos la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos oficios públicos y multa del doble de lo sustraído, por su participación a título de autor en los delitos reiterada de falsificación de instrumento privado mercantil en concurso medial con los delitos reiterados de malversación de caudales públicos imputados en los techos 1, 2, 3 y 4. En relación al delito reiterado de falsificación de instrumento público imputado en el acápite primero de este libelo, hechos 5 y 6, se le atribuye participación de autor de 35 delitos consumados y reiterados, y se solicita la pena de siete años y 183 días de presidio mayor en su grado mínimo. Respecto de Nubia San Martín Pavez, por los delitos reiterados de falsificación de instrumento privado mercantil en concurso medial con delitos reiterados de malversación de caudales públicos imputados en los hechos 1, 2, 3 y 4 del acápite primero este libelo, se le atribuye la participación como autora de 129 delitos consumados y reiterados, solicitando la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y multa del doble de lo sustraído. Respecto al delito reiterado de falsificación de instrumento público imputado en el acápite primero de la acusación, hechos números 5 y 7, se solicita la pena de 7 años y 183 días de presidio mayor en su grado mínimo. Respecto a Pedro Paredes Montoya por los delitos reiterados de uso malicioso de instrumento privado mercantil falso en concurso medial con delitos reiterados de malversación de caudales públicos imputados en los hechos 2 del acápite de la acusación se solicita 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y multa del doble de lo sustraído. Respecto de Pedro Ravanal Mellado, delitos reiterados de uso malicioso instrumento mercantil falso en concurso medial con delitos reiterados de malversación de caudales públicos imputados en el hecho 4 de la acusación, solicitando la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y multa del doble de los sustraído.

En definitiva, después de escuchar la prueba rendida durante el desarrollo del juicio quedará plenamente acreditado, más allá de toda duda razonable, que a cada uno de los acusados individualizados les ha cabido participación en cada uno de los hechos que motivan la presente acusación, en calidad de autor, delito en grado de ejecución consumados y reiterados y que por consiguiente deben



ser condenados las penas que solicita como acusadora particular.

En lo que se refiere a la demanda de indemnización de perjuicios, da por reproducidos los que constituyen el fundamento fáctico de su demanda, idénticos a los hechos que configuran el fundamento fáctico de su acusación y de la acusación del Ministerio Público. Señala que la demanda civil del Consejo de Defensa del Estado que ha sido deducida en esta causa reúne todos y cada uno de los requisitos que se establecen en el artículo 164 del Código de Procedimiento Civil en cuanto a los requisitos formales de toda demanda, con la individualización de los demandados, los datos principales que se regirán por la norma, los hechos que constituyen los hechos que generan en definitiva la obligación de indemnizar. Respecto a los antecedentes de derecho, los hechos que constituyen su demanda civil configuran además de delitos desde el punto de vista del derecho penal que me motivan la acusación, constituyen también ilícitos de carácter civil y, por consiguiente, nace la obligación de aquellos que incurrieron en estos hechos, es decir, cada uno de los acusados que en la demanda civil tienen la calidad de demandados, de indemnizar los perjuicios causados con la comisión de estos hechos en conformidad a lo que establece el artículo 2314 del Código Civil, que señala el que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización de perjuicios.

De tal manera que si se analiza en este caso concreto se puede establecer, y así se hará con la prueba rendirá en el juicio, que se reúnen todos y cada uno de los elementos de la responsabilidad civil extra contractual en este caso, porque en definitiva se reúne el primer requisito que dice relación con la capacidad del autor del delito o cuasi delito civil, toda vez que por la prueba que se rendirá durante el juicio quedará plenamente acreditado que cada uno de los acusados son plenamente capaces desde el punto civil en la comisión de delito o cuasi delito civil, partiendo de la base que la regla general la constituye la capacidad y la incapacidad es una excepción que debe ser alegada y acreditada por quien la invoque. De tal manera que quedará plenamente acreditado que ellos son capaces de la comisión de delito o cuasi delito civil. El dolo o culpa del autor, también se acreditará a través de la prueba rendida en el juicio, porque se acreditará que ellos han tenido intervención en calidad de autores de delitos reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación instrumentos públicos, uso malicioso de instrumento público y falsificación de instrumento público, que hace nacer la responsabilidad penal, pero al mismo tiempo también y de manera paralela la responsabilidad civil para la indemnización de los perjuicios causados. En tercer lugar se acreditará que se ha producido un daño o perjuicio a fondos públicos pertenecientes a la Municipalidad de Talcahuano. Se acreditará la forma en que se produce el daño, precisamente con la comisión de estos ilícitos que importan la sustracción y apropiación de los fondos públicos en la manera que ya se ha dicho, mediante el giro de cheques de las cuentas corrientes de la Municipalidad Talcahuano a nombre de los distintos acusados, simulando o haciendo parecer en los antecedentes financieros que se giraban y



pagaban deudas propias del servicio público, en este caso de la DAS Talcahuano, que en definitiva arroja un perjuicio para la Municipalidad de Talcahuano, para los fondos públicos que asciende precisamente a la suma de \$412.024.825.-

Finalmente, acreditará el último requisito de la responsabilidad civil extra contractual y que dice relación con el vínculo causal que debe existir entre las conductas que son imputadas desde el punto de vista civil y el resultado que en el hecho se produce, que es en este caso el perjuicio. Se va a determinar a través de la prueba rendida que el perjuicio que ya ha señalado es consecuencia directa e inmediata de las conductas que ejecutaron cada uno de los acusados y que son constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento privado mercantil, uso malicioso instrumento privado mercantil falso y falsificación de instrumento público, reuniéndose entonces todos y cada uno de los elementos que configuran la responsabilidad civil extra contractual, nace según lo dispone el artículo 2329 del Código Civil la obligación de quien ha causado el daño o perjuicio de indemnizar todo daño o perjuicio que se haya producido a consecuencia de los hechos ejecutados. Por tanto, después escuchar toda la prueba rendían no le quedará al tribunal duda alguna que se reúnen cada uno de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual respecto de cada uno de los acusados y por consiguiente ellos deben ser condenados a pagar en favor del Ilustre Municipalidad Talcahuano la suma de \$412.024.825, correspondiente a la pérdida causada a la municipalidad de Talcahuano por su actuar delictivo, con su correspondiente conversión en pesos a la fecha del pago efectivo y total, en subsidio la suma que este tribunal determine. En segundo lugar a pagar los intereses corrientes sobre la suma señalada la letra a) debidamente reajustada, calculados entre la fecha en que la sentencia que ejecutoriada y la fecha del pago efectivo y total. Finalmente que cada uno de los acusados, tanto lo que se refiere al ejercicio de la acción penal mediante la presentación de su acusación particular, como en lo que se refiere a la demanda civil que ha sido interpuesta por el Consejo de defensa del Estado en representación de la Municipalidad de Talcahuano deben ser condenados al pago de las costas de la causa.

En sus alegatos de clausura y réplica, refirió la prueba rendida con la cual se acreditaron los hechos, hizo hincapié en la calidad de funcionarios públicos de Cabello, San Martín y Paredes, y las funciones que correspondía a cada uno de los acusados, la naturaleza de fondos públicos de los asignados a la DAS, y el origen de los mismos, en base a la declaración de los testigos que indica, como también por medio de normativa legal que dispone la asignación de fondos por parte del Ministerio de Salud; hizo un análisis de los antecedentes y medios probatorios a partir de los cuales se acredita el acuerdo de voluntades entre los cuatro acusados, la distribución de funciones existente a objeto de ejecutar las acciones o actividades tendientes a conseguir el fin común, por lo que estima la unidad de todas las acciones a partir de un dolo común; analizando específicamente los antecedentes a partir de los cuales se acreditan la custodia



de caudales públicos por parte de Cabello y San Martín; en particular, además respecto de Cabello, quien sabía cuándo habían y cuando no, fondos en las distintas cuentas de la DAS, quien admite que él había detectado los defectos de control que existían al interior de la DAS, que tenía las facultades de disposición de las cuentas fiscales, podía hacer transferencias entre las distintas cuentas, como por lo demás lo señaló la testigo Mónica Vera, que lo vio realizando transferencia, y la existencia de mensajes entre Cabello y San Martín que hablan de las transferencias bancarias, que incluso realizaba desde su casa, porque manejaba los digi pass de las cuentas, y Cabello decía qué proveedor se pagaba primero; dando cuenta de por qué San Martín también tenía a cargo fondos públicos, básicamente por el hecho que era firma autorizada, tenía la custodia de los talonarios de cheques, giraba cheques y tenía clave para ingresar al sistema modular contable e intervenía en los distintas etapas del proceso de pago, quien además era jefe de finanzas subrogante en ausencia de Cabello y dominaba todas las funciones propias de su cargo, citando disposiciones legales, a partir de las cuales se establece las exigencias de custodias de bienes públicos y las responsabilidades al respecto, y las funciones del encargado de administración y finanzas y estatuto de los funcionarios municipales que establece que las funciones deben desarrollarse con estricto apego al principio de probidad administrativa; se apoyó en doctrina para sostener que los acusados tenían a su cargo fondos públicos; sosteniendo que no es exigencia legal que las funciones consten en un manual de procedimiento; la existencia de procesos de inducción en los cargos a los funcionarios que llegan a trabajar, larga data de Nubia San Martín como funcionaria en la DAS; y del mismo modo se refirió a las funciones de Paredes, admitiendo que no tenía la custodia de fondos públicos, pero que al concertarse con los otros acusados, sabía que ellos eran funcionarios públicos y que tenían a cargo fondos públicos, acusado que por lo demás antes había desempeñado el cargo de jefe de finanzas y por ello sabía de los mecanismos de control; y en relación a Ravanal si bien no era funcionario público, estaba concertado con los otros acusados, era la pareja de San Martín, por lo que sabe a lo que se dedica ella, cuáles son sus funciones, como también que Cabello era el jefe de su pareja, y sus funciones y responsabilidades; analiza los antecedentes a partir de los cuales se establece el concierto, mensajes de texto, las coincidencias en las cuentas corrientes de los acusados, en base al peritaje contable; como también hace referencias la división de funciones y el obrar común de todos los acusados, y las funciones que desarrollaba cada acusado, lo cual permite establecer la existencia de una empresa delictual, en la que la jefatura le correspondía a Cabello, y que era integrada por Nubia, quien giraba y firmaba los cheques, y Paredes y Ravanal, eran los encargados del cobro de los cheques; y por consiguientemente insta por la aplicación de la agravante del artículo 260 ter del Código Penal; estimando que cada uno de los acusados es un autor ejecutor, conforme a la teoría del dominio del hecho de Roxin, y el cobro de un cheque es un acto ejecutivo, por lo que han de ser



sancionados todos por el artículo 15 N° 1 del Código Penal, porque en ese momento se produce la sustracción material de los fondos; que se acreditó que todos los cheques fueron girados y cobrados por San Martín, acreditado con mérito prueba pericial caligráfica de Pacheco Coke; que con los ichos de Manuel Rojas se acreditó que se firmaban cheques en blanco a San Martín; dio cuenta de las cartolas de las cuentas corrientes acompañadas y del informe 315 de Contraloría, con el cual se acreditan los montos sustraídos que alcanzan a \$412.024.825; del peritaje de Nelson Castro, que determinó la cantidad de cheques y dinero sustraído por cada uno de los cuatro acusados por medio del cobro de los cheques; dando cuenta de la información entregada por los fiscalizadores Urrutia y Guenante y de las labores por ellos realizadas para llegar a determinar la existencia de los hechos.

Sostuvo que el carácter de funcionario público de los acusados Cabello, San Martín y Paredes se comunica a Ravanal, como también la obligación de tener fondos o caudales públicos a su cargo de Cabello y San Martín se comuna a Ravanal y Paredes, sosteniendo que todos los acusados son coautores del delito de malversación de caudales públicos, y deben ser condenados conforme al artículo 15 N° 1 del Código Penal, pues la sustracción se produce cuando los acusados cobran el cheque, postulando la existencia de un dolo común entre los acusados; para luego hacer un análisis de las teorías de la comunicabilidad, e incomunicabilidad y comunicabilidad relativa de la cualidad especial del intraneus a los extraneus, como también la distinción de los delitos especiales en propios e impropios y de las consecuencias de cada una de las teorías, que en el caso de la DAS no existen otros tipos penales aplicables al caso, no obstante que se considere que se trata de un delito especial impropio; argumentando por qué a los extraneus Paredes y Ravanal no se les pueden aplicar los delitos de hurto, estafa, apropiación indebida, administración desleal, por las razones que en cada caso proporciona, sino que el único delito aplicable es el de malversación de caudales públicos; cita jurisprudencia que acoge teoría de la comunicabilidad extrema; pidiendo que los delitos de malversación de caudales públicos sean sancionados como delitos reiterados, entregando los argumentos para desechar la petición de la defensa de considerar a los hechos como un delito continuado, toda vez que cada vez que se consumaba un delito a través del cobro del cheque, concurrían todos y cada uno de los elementos del tipo penal de malversación, por lo que le es aplicable el artículo 74 del Código Penal, dispone la disposición de las penas a las distintas infracciones, pero por el que le es más favorable la aplicación del 351 del Código Procesal Penal, agregando que la reiteración de delitos tiene reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico y el delito continuado no; que en este caso no se habla de un dolo global, no se decidió sustraer por los acusados 412 millones de pesos, y que luego fraccionaron con el cobro de cheques, sino que los acusados se ponían de acuerdo y obraban con un dolo común cada vez que existían fondos en las cuentas corrientes, y cuando ello



ocurría Cabello lo comunicaba a San Martín, quien veía quien cobraba el cheque y se ejecutaba.

En cuanto a los delitos de falsificación de instrumento público, refiere que los decretos de pago tiene la calidad de documentos públicos para tales efectos, porque dan cuenta del nacimiento de una obligación de la DAS de pagar a un proveedor, otorgado por un funcionario público, que es el sujeto activo calificado, en el ejercicio de sus funciones y que da fe de su contenido; que los decretos de pago referidos son falsos, porque los acusados Nubia y Cabello incorporaban en ellos información falsa, faltaban a la verdad en la narración de los hechos sustanciales, conforme al artículo 193 N° 4, falsificación de carácter ideológica, porque se decía en ellos que se pagaba a un proveedor cuando no era así, se pagaba una factura determina pro un monto determinado, cuando en realidad no era así, sino que en realidad no daban cuenta del pago a los proveedores según el contenido de los mismos, sino que los cheques eran cobrados en caja por los acusado Ravanal, Paredes, y en ocasiones por San Martín; señalando los medios de prueba con los cuales se acreditan tales delitos, particularmente el peritaje de Pacheco Coke, haciéndose cargo de los cuestionamientos de la defensa en torno a las conclusiones de la misma, y haciendo referencia que conforme a los funcionarios que declararon, nunca hubo cuestionamientos en torno a la firma de Cabello.

Sostuvo la existencia de los delitos de falsificación de instrumento privado mercantil y uso malicioso de instrumento mercantil falso, argumentando que existe falsedad ideológica respecto de los cheques girados y cobrados por los acusados, plenamente aplicable conforme a los artículos 193 N° 4 y 197 del Código Penal, citando doctrina al respecto que acepta la falsedad ideológica en los delitos de falsificación de instrumento privado; delitos que están en concurso medial con los delitos de malversación de caudales públicos, dado que estima que eran el medio necesario para lograr la sustracción de los fondos públicos, haciendo aplicable el artículo 75 del Código Penal

Que se hizo cargo de todas las alegaciones de las defensas, y finalmente terminó solicitando la condena de los acusados, por los delitos contenidos en su acusación, reiterando las penas allí requeridas, para lo cual pide considerar la mayor extensión del mal causado por el delito, por afectado no solo desde punto de vista patrimonial, sino que una afectación a la función pública de la DAS frente a la comunidad, como también hubo que recomponer relaciones con los proveedores, y e incluso tuvo repercusiones en la imagen que terceras personas tenían respecto al trabajo de los funcionarios públicos, y sobre todo por la afectación a la salud primaria de la comunidad, que implicó la falta de medicamentos, que tuviera que conseguirse los mismos en otras municipalidades; cuestionando finalmente las versiones de los acusados en cuanto al destino que le dieron los dineros sustraídos.



Finalmente, pidió se acoja su demanda civil, por haberse acreditado todos los elementos que configuran la responsabilidad civil, ello con el mérito de la prueba rendida en el juicio, reiterando los montos indicados en su demanda.

En la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal indicó que hacía suyas las alegaciones de la fiscalía, reconociendo el 11 N°6, acreditado que gozan de irreprochable conducta anterior, sin condenas en sus extractos; y no reconocen atenuante del 11 N°9, porque la colaboración debe ser sustancial al esclarecimiento de los hechos, y las distintas declaraciones de los acusados, contienen diversas versiones acerca de la comisión de los hechos, que variaban según el momento de la investigación y quienes los asesoraban, lo que demuestra que no intención colaboración, y desde el inicio de la investigación, contando con los antecedentes de la Contraloría se pudo establecer cuál era el modus operandi y de qué manera habían intervenido, hasta el monto total, por lo que además de ser declaraciones obstructivas, no tuvieron relevancia para el establecimiento de los hechos; oponiéndose igualmente al 11 N° 7, porque la reparación debe ser celosa, que importe un esfuerzo de parte de los acusados que tienda a reducir al mínimo las consecuencias perniciosas del delito, y jamás han aportado antecedentes de cuál es el destino de los fondos, y no ha restituido la mínima parte de los fondos sustraídos, y dieron versiones sobre lo sucedido con los fondos, que son bastante alejadas de la realidad, a las que se refirió; pidiendo considerar el artículo 69 del Código Penal, esto es la mayor extensión del mal causado, dada la afectación a la necesidad de atención primaria de salud, como afectó a la confianza de la comunidad frente a la sociedad, conforme a lo ya indicado en sus alegaciones precedentes; por lo que reitera las penas solicitadas en la acusación, a pesar de la absolución de los delitos de falsificación, pues la pena estaba solicitada por concurso medial, por lo que por la reiteración queda dentro del rango pena de 15 años y un día a 20 años.

CUARTO: Que la defensa del acusado Pedro Paredes Montoya precisó que su alegato de apertura se centra en el Hecho 2 de la acusación, referido al cobro de 35 cheques, de los 129 cheques cobrados en esta causa, que alcanzaron un monto de \$111.176.748, por el cual se acusa a su defendido, indicando que su representado solo concurrió al banco a cobrar los cheques; que la fiscalía debe acreditar los hechos y la participación, y acreditar más allá de toda duda razonable, e incluso más allá de la declaración del acusado, el concierto o dolo con el cual habría actuado el acusado; que será difícil que la fiscalía acredite sin la declaración del acusado, que éste habría actuado con dolo, que existía el concierto para participar del delito que se le viene acusando; agregando que no está descrito este hecho, penalmente relevante, en la acusación, como lo es el que su defendido estaba en conocimiento de la actividad ilícita que estaban desarrollando los otros acusados, no se describe que supiera o conociera que se estaban apropiando de estos fondos fiscales que ellos estaban destinados a resguardar, pero más allá de este problema de congruencia que podría existir en ambas acusaciones; señala que parte de la



base que su defendido declarará, y pedirá la recalificación de los hechos denunciados, al delito de hurto, y solicitará que sea considerada su participación como cómplice del artículo 16 del Código Penal, ello porque la figura de malversación de fondos públicos es una figura que es pacífico en la doctrina nacional e internacional y en la jurisprudencia, que se trata de un delito especial impropio, es decir, que tiene su correspondencia en un delito común para los extraneus, que se sabe que es de sujeto calificado, que corresponde a un funcionario público, y el acusado era funcionario público, pero el artículo 233 del Código Penal requiere además de ser funcionario público, que ese funcionario tenga a su cargo caudales de efectos públicos o de particulares, depósito, consignación, secuestro, y lo sustrajere o consintiere que otro lo sustraiga, y es este requisito, este elemento normativo del tipo, el que no se cumple respecto del acusado; por lo que no tiene ninguna relevancia para la actividad que desarrolló Pedro Paredes, su calidad de funcionario público, pues para todos los efectos sus actos son exactamente iguales a los que desarrolló Pedro Ravanal, que es un extraneus, y por ello Pedro Paredes debe ser sancionado también como extraneus porque no tenía caudales o efectos públicos o de particulares en depósito; y esto hay que llevarlo al terreno de la tipicidad, porque si se sanciona a Pedro Paredes por una conducta que no podía cometer, porque no calificaba en esta parte del tipo penal, se infringe principio legalidad, la tipicidad.

Agrega que lo relevante es hablar de la comunicabilidad de la figura para el extraneus y para los partícipes que no tienen la calidad especial; y las diversas teorías que hay respecto de la comunicabilidad de la calidad especial, van desde la incomunicabilidad extrema hasta la comunicabilidad extrema, pero lo cierto es que la teoría de la comunicabilidad extrema, es decir, la que dice que el partícipe extraneus debe responder igual que el sujeto calificado del delito especial, es minoritaria en nuestro derecho y jurisprudencia y también a nivel internacional, el único autor que sostiene más o menos una teoría de comunicabilidad extrema es el profesor Garrido Montt, y aun así se señala que no se dan todos los presupuestos de los delitos especiales; que la mayoría de la doctrina y jurisprudencia y autores que cita la fiscalía, están por la tesis intermedia de la comunicabilidad limitada, entre ellos Etcheberry, Grisolia, Bustos, Matus, Ramírez, Labatud, e incluso Cury, que al inicio estaba en la teoría de la incomunicabilidad extrema, es decir, que nunca se comunicaba, finalmente cambia por esta teoría intermedia; y esta última teoría señala que la calidad especial se va a comunicar al extraneus solo en los delitos especiales propios, que no es esta figura, es decir en aquel delito en que no se puede encontrar una correspondencia en el derecho común; incluso otros autores están por una concepción más moderna de la comunicabilidad limitada, que está por una mira desde el punto de vista de la infracción de deber, la teoría de Roxin de la infracción de deberes; que son los autores Rodríguez Collao, Ossandon Widow, entre otros, quienes dicen que la pregunta que hay que hacerse es quién



tenía el deber de custodiar los fondos públicos, a quien se le confiaron la custodia de los fondos; y desde ese punto de vista su defendido, tampoco califica para ser considerado que está dentro de la tipicidad de esta figura, pues “tener a su cargo efectos públicos o de particulares”, también es un elemento normativo del tipo, interpretarle al que hay que darle algún sentido, y a su respecto se ha discutido en la jurisprudencia, como el caso Riggs, la situación de los edecanes que habrían cuentas reservadas que posibilitaron que Augusto Pinochet se apropiara de gastos reservados, edecanes que no tenían por ley ni por reglamento, ni por instrucción ni distribución de cargo, la función de tener a cargo estos gastos reservados, pero se hizo una interpretación amplia, diciendo que también había que recurrir a la costumbre administrativa, pues era costumbre que los edecanes de estas autoridades públicas, abrieran una cuenta personal para subvencionar los gastos de la autoridad, por lo que sí tenían a su cargo los fondos públicos; pero incluso con esta teoría amplia, de lo que significa tener a cargo los fondos públicos, tampoco se configura esta situación respecto de su defendido, quien ni siquiera trabajaba en el mismo edificio del departamento de finanzas de la DAS, ni trabajaba en el departamento de Adquisiciones o abastecimientos, sino que en el departamento de Proyectos, que es un unidad distinta; por lo que no tiene posibilidad de manejar las compras públicas, los pagos de los proveedores, los giros de cheques, la custodia de documentos, ni tener contacto con proveedores ni generar la solicitud de una adquisición pública, porque en la unidad que él trabaja se encarga de asesorar al alcalde y a la dirección de la DAS en ciertas tecnologías que permitirán modelar políticas públicas, por lo que no tiene ninguna posibilidad de hacer adquisiciones, y menos manejar dineros y fondos públicos.

Por otro lado, los funcionarios explicarán cómo era el proceso de pago de proveedores, desde que se hace una solicitud de compra, hasta que el proveedor entregaba y finalmente se le pagaba, y en ese proceso el acusado no tiene ninguna participación, no participa en el momento en que se solicita la adquisición o se solicita realizar una licitación pública o trato directo, no participa en el momento en que haya que girar algún cheque para pagar a algún proveedor, no tiene su firma habilitada, como sí la tenía San Martín y Marcos Sánchez que es el cuarto imputado, a quien se le otorgó una suspensión condicional; que respecto de estas personas que tenían la calidad de giradores están obligados por ley a rendir una fianza, y su defendido no tenía esa obligación ni tenía una póliza de seguros como sí tenían otros acusados, como San Martín y Marcos Sánchez, y Cabellos que tenía la responsabilidad de la custodia de estos fondos públicos; y por eso tenían que rendir estas fianzas y obligados rendir cuentas, y de hecho eso fue lo que determinó la Contraloría, un juicio de cuentas, pero no respecto de su representado, que no tenía la administración ni fondos confiados a su respecto; que el hecho que Paredes en alguna oportunidad, antes del año 2010, hubiere sido jefe de finanzas, fuera de



la fecha de la acusación, no tiene ninguna relevancia penalmente hablando, y porque tampoco se ha dicho que durante el tiempo que él estuvo como jefe de finanzas se cometió alguna irregularidad en las cuentas, y ya no trabajaba en ese departamento cuando se cometió la malversación, pues estaba en el departamento de proyectos.

En cuanto a la conducta que desarrolla el acusado, es punible o no; a Paredes se le dice que vaya a cobrar el cheque que está a su nombre, circulando según ley de Cuentas Corrientes, Bancarias y Cheques, según esas reglas con endosos correctos, firmado por las personas que estaban autorizadas, no falsificaba las firmas, girado nominativamente a su nombre, y se presenta él mismo, por lo que es un acto neutro, va y cobra un cheque, podría ser extraño, quizás sancionado administrativamente porque él no tenía esa función y no debería haberse prestado para cobrar los cheques, pero era una práctica común que se enviara a una persona a cobrar cheque al banco, incluso personas del aseo, iban a depositar cheques a proveedores en pago de supuestas facturas, a ruego de San Martín o Cabello u otros funcionarios del área Finanzas, y esas personas no cometían ningún delito, a pesar que ese pago pueda corresponder a esos contratos simulados, en que no se hicieron esas obras; por lo que ahí hay fraude al fisco, pero ellas no cometen ningún delito por ir a depositar el cheque al banco.

El dolo es lo que podrá cambiar la conducta neutra de su defendido de ir a cobrar un cheque al banco que podría hacerlo cualquiera, en una participación punible, que estaba en conocimiento, y ello debe probarse, más allá de indicios o prueba indirecta, de cómo no se iba a percatar, que en el fondo él había sido jefe de finanzas, pero no es una prueba directa que acredite que estaba en conocimiento, y de hecho Manuel Sánchez que era girador, que tenía a su cargo la disposición de los bienes, se le sanciona a nivel de culpa, no obstante que él firmó 129 cheques en blanco, lo que podría ser un indicio de que su participación era dolosa; por lo que se requiere algo más que Pedro Paredes haya ido a cobrar los cheques por caja, porque no se sabe que ocurrió con esos dineros; que al acusado se le pedía que hiciera este servicio y recibía un pago por ese servicio, tenía que quedarse con un tercio, y lo demás era para San Martín y Cabello, que se lo repartían entre ellos; pero de la prueba de la fiscalía no se puede acreditar que Pedro Paredes recibió parte de esos fondos, ni siquiera un tercio, que no hay ninguna correspondencia contable, a pesar de haberse pedido un análisis al respecto, entre los montos cobrados por Paredes y los que hubiere depositado, hubiere invertido, o pagos irregulares anticipados, como pagar créditos, compras de productos o bienes a la red familiar, por lo que no hay ninguna acreditación de demuestre que los fondos que Paredes tenía en sus bienes, tuvieran un origen no justificado; de hechos fondos que tenía al momento de ser formalizado correspondían a sueldos de la universidad UTEM donde hacía clases, sueldos de la municipalidad, no transferencias sospechosas,



ni depósitos de montos sospechosos que se correspondieran con los cheques cobrados, por lo que sin su declaración, es muy difícil probar que se quedó con fondos de los cobros de esos cheques; que también es relevante para las atenuantes que puedan configurarse, cual es que Pedro Paredes no aumentó su situación económica, no hubo pago, adquisición de bienes, ni a su familia, y al contrario, se declaró en quiebra, se sometió a liquidación voluntaria de sus bienes, y en el año 2019 se sentenció en causa C 2261-2020, del Tercer Juzgado Civil de Concepción esa situación; y a pesar de ello, realizó una reparación celosa, considerando la circunstancia que estaba viviendo, en quiebra y en prisión preventiva por casi un año, pues reparó en una suma de \$10.000.000, bastante cuantiosa, considerando montos del hecho 2, y que se habría quedado con un tercio; además tiene 11 N° 6, y la colaboración ha sido sustancial, la cual debe ser considerada como muy calificada, porque no solo permite acreditar su participación dolosa, sino que además fue él quien entregó la información en su declaración de que parte de esos dineros malversado se habían invertido en un club nocturno “La Yola”, que se invirtió en la instalación de un minimarket a la pareja del señor Cabello, e incluso entrega una boleta de ese establecimiento, por lo que entregó información para colaborar en la recuperación de bienes.

Que la circunstancia de cobrar un cheque correctamente girado, circulando de acuerdo a las normas del Código de Comercio, es acto formal, de comercio, lo que hace caer la acusación de la querellante de que sería uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, porque esa figura se remite a la figura de la falsificación de instrumento público, y ésta se remite al 193 en la hipótesis del N° 4, esto es, haber fallado en la narración de hechos sustanciales, variando el sentido, pero como va a ser posible que en un documento formal se haga una variación en la narración que varíe el sentido, lo que no se puede pues ya estaba correctamente extendido, no hay falsificación ni uso malicioso de instrumento mercantil falso; que por otro lado, en cuanto a la agravante también cae, pues el acusado es extraneus para el derecho, desde el punto de vista de la sanción que pueda proceder, y esta agravante solo procede para las figuras del Título V del Libro II del Código Penal, y si el acusado Pedro Paredes va a ser condenado finalmente por hurto, no se le puede aplicar esa agravante; pero, más allá de eso, yendo al contenido de la agravante, se debe exigir algo más de la simple coparticipación, y algo menos que la asociación ilícita para que se configure la agravante; y al medio esta esta agravante, y esa situación tampoco se da en el hecho, pues si hay alguna dependencia jerárquica no está dada por el plan delictivo sino que está dada por la situación de funcionarios públicos y por los distintos cargos que desempeñan, y no por el hecho delictivo, y si hay alguna distribución funciones, es la mínima, para entender que estamos en coparticipación, pero ni siquiera había conocimiento de parte de Paredes de que esto era más grande de lo que a él le correspondía, no sabía que la pareja de San Martín estaba cobrando cheques, a quien no conocía, que el acusado nunca



supo que esto se extendía mucho más allá, que incluso dio lugar a una arista de pago a proveedores por contratos irregulares, por lo que desde el punto vista del fondo no se configura la agravante.

Que en cuanto a la penalidad, la discusión de si se trata de un delito continuado o varios delitos reiterados, se discutirá en la audiencia del artículo 343; pero hay un error en la acusación, pues la fiscalía dice que son delitos reiterados, pero al haber una modificación que aumentó las penas en el año 2018, dice que son 30 delitos anterior a la modificación, y eso se va a reiterar, y después dice que estos otros 5 delitos que son después de la modificación, los vamos a reiterar, entonces se están reiterando dos veces, y sale una cuenta en perjuicio del imputado, cuando en realidad podría haber dicho, siguiendo su criterio de la reiteración, que no comparte, tendría que haber tomado todo como un solo delito, y considerar el más grave con la nueva legislación, y de ahí aumentar un grado.

Finalmente, es hurto y no apropiación indebida, porque el hurto es la figura residual, que es la que más se aviene a los actos desarrollados, porque la apropiación indebida requiere de una entrega fiduciaria previa a Paredes de los fondos, lo que no existe, sino que eso se le requiere a los partícipes de sujeto calificado, el cheque no está siendo hurtado, sino que son los fondos los que están siendo hurtados, y hay clandestinidad respecto del titular de los fondos que es la municipalidad; y participación es de complicidad, y no de autor, porque él no tenía el dominio del hecho, de desarrollar este delito, no podía decidir qué facturas se pagaban, ni cuándo se iba a girar el cheque, él por sí solo no podría haber cometido el delito; por lo que solo facilitaba los medios, lo que lo transforma en complicidad del artículo 16 del Código Penal.

Finalmente, respecto a la demanda civil, de ser condenado su defendido, los sea civilmente, pero acotado a los perjuicios efectivamente provocados por él, solo referidos al hecho N° 2, y la solidaridad de indemnizar no alcanza a otros hechos u otros montos que no son de su responsabilidad manejar ni de su conocimiento; sino que solo a lo que él se benefició, que fue un tercio de lo recibido del hecho 2.

En sus discursos de clausura y réplicas reiteró las alegaciones de su apertura, en particular manifestó que el delito de malversación de caudales públicos requiere acreditar el destino de los fondos lo que no ha ocurrido en la especie, tampoco la apropiación de manera permanente para diferenciar la situación de los artículos 235 y 236, o al menos que la salida del patrimonio de la municipalidad ha sido permanente; ni se ha acreditado el perjuicio ni su monto, pues solo está claro que los acusados cobraron ciertos cheques de titularidad de la municipalidad, que no se hizo peritaje contable para establecer la trazabilidad entre el cobro de cheques y la permanencia de los fondos en el patrimonio de cada acusado; argumenta se dice que los fondos estaban destinados a pagar



facturas de proveedores, pero hay 12 cheques que no se asocian a ningún decreto de pago, y en los casos que de 5 cheques, en que figuran personas representando a los laboratorios declarando que recibieron los cheques, y no se hizo ninguna investigación en torno a ello; que Paredes no tenía fondos públicos a su cargo, y el artículo 60 de la Contraloría es clara en torno a quienes tienen a cargo fondos municipales o estatales, quien tampoco trabajaba en el departamento de finanzas y nada tenía que ver en el proceso de compra o de pago, y ante la ejecución de delito su situación no es distinta a la de Ravanal, por lo que único que se acreditó a su respecto es que era un funcionario público, pero tiene que ser tratado como un extraneus, tal como lo reconocen fiscal y querellante, argumentando luego en base a doctrina que cita y teorías existentes en torno a la llamada comunicabilidad, que en la especie se está frente a un delito especial impropio, porque en este tipo de delitos la calidad especial solamente implica agravar la responsabilidad, y tiene que ver con el bien jurídico protegido y el correcto desempeño de la función pública, deber o responsabilidad que no tiene los extraneus, por lo que conforme al artículo 64 del Código Penal, no se les comunica la calidad especial y habrán de responder por la figura base, hurto o apropiación indebida, citando jurisprudencia en apoyo de tal tesis; argumentando luego extensamente en torno a la concurrencia de la atenuante de colaboración sustancial, principalmente en base a que sin la declaración del acusado no hay como acreditar el concierto, cuestionando las pruebas que hacen valer los acusadores en tal sentido; pidiendo se rechace la configuración de la agravante del artículo 260 ter del Código Penal, argumentando que los acusados no se han dado ninguna estructura, sino que la situación se da por la relación laboral de los mismos, en que Cabello era el jefe del departamento de finanzas y Nubia, trabajaba bajo esa autoridad, y no se ven instrucciones de Cabello, que se dice que Cabello tendría la jefatura, pero desde el punto del dominio del hecho, era Nubia la única que no necesitaba de los otros para emitir un cheque cuando quisiera, por lo que en definitiva postula a que solo ha habido una empresa criminal sino que sólo se trata de una circunstancia de coparticipación en cada hecho; argumentando igualmente que no se trata de un tema de participación, sino de tipicidad y legalidad, por lo que hay que establecer quién es el autor y luego la participación, y que por lo mismo ni siquiera se le puede condenar por el 15 N° 3 del Código Penal; que Paredes no tenía el dominio del hecho por la circunstancia de ir a cobrar el cheque, por lo que su contribución no era esencial, y debe ser sancionado como cómplice, si es que se decide compartir el título de imputación, pero por una condena de hurto, dado que hubo sustracción, sacándose los fondos de la esfera de custodia de su titular, lo cual se hizo de manera clandestina respecto de la municipalidad; sin que proceda la condena por apropiación indebida, porque no hay una entrega fiduciaria a Paredes, ni un requerimiento que no haya cumplido. En cuanto al delito de uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, pide sea absuelto, dado que no es posible la falsificación ideológica en este tipo de



delitos, porque por naturaleza se trata de documentos incausados, que se bastan por sí mismos. En cuanto a la demanda civil, hace presente que el acusado Paredes lo es solo por el Hecho 2, cuyos 35 cheques suman 111 millones y fracción, y según dichos de acusados esa suma se dividió en tres, por lo que si hay solidaridad, solo lo debe ser por dicho monto, agregando que no se ha acreditado el perjuicio, que no se sabe si hubo o no perjuicio, porque no se sabe si la municipalidad pagó o no de nuevo, ya que no se trajo un decreto de pago que demuestre que pagó nuevamente; por lo que solicita se rechace la demanda civil.

Pidió en definitiva que se condene a Paredes considerando su colaboración como muy calificada, solo respecto del delito de hurto; y subsidiariamente, si se estima que se le puede comunicar el título de imputación, por no reunir la calidad especial, se le sancione en calidad de cómplice del artículo 16 del Código Penal, por facilitar los medios para la ejecución del delito.; igualmente solicitó la absolución por los delitos de uso malicioso de instrumento mercantil falso, y el rechazo de la demanda civil.

En la audiencia respectiva, invocó las atenuantes de irreprochable conducta anterior y de colaboración sustancial, muy calificada, pues la propia fiscal lo indicó que es el único de los imputados que no negó su responsabilidad, declarando dos veces en la investigación, y en el tribunal y en todas declaro lo mismo, y si bien la fiscal dice que no dijo dónde estaría el dinero, ello no es necesario para esclarecer el delito, pero lo dijo, y otra cosa que fiscal no siguiera esa línea investigativa o que no se le crea, y dijo que recibió un tercio de la totalidad de los 111 millones, lo que no es una suma tan alta que no se haya podido gastar en deudas y juegos; existiendo una resolución del tercer juzgado civil, de 28 de abril de 2020 Rol C 2261-2020, que decreta la liquidación de los bienes de Pedro Paredes Montoya; sirviendo su declaración para efectos de establecer el concierto y para dar certeza jurídica; como también solicita se le reconozca la atenuante del 11 N°7 del Código Penal, esto es, procurar reparar con celo el mal causado, en base a la certificación del ministro de fe del Juzgado de Garantía de Talcahuano, que da cuenta de las consignaciones en la cuenta del tribunal por los imputados, que respecto de Paredes totalizan diez millones; para lo cual ha de considerarse que desde el 25 de febrero de 2021 se encuentra privado de libertad, por lo que perdió su trabajo y cualquier forma de procurarse ingreso; lo demuestra ser una reparación celosa en relación con los dineros que recibió, considerando además sus problemas de salud, su diagnóstico de glaucoma, por lo que debe someterse a un procedimiento por láser en su ojo derecho y problemas de desprendimiento de retina, y problemas a la próstata, afecciones al hígado y otras que indica, todo lo cual le han impedido allegar más recursos para una reparación mayor; por lo que dada la agravante, existen dos atenuantes en su favor, en base a lo que pide rebajar la pena en un grado, debiendo considerarse el cambio legislativo de aumento de las penas en un grado de las originales, y por una interpretación más favorable para el acusado



que la división que hace la fiscalía, y por aplicación de los artículos 351 del Código Procesal Penal y 18 del Código Penal, se consideren todos los delitos como reiterados partiendo de la norma más favorable anterior a noviembre de 2018, partiendo de los 3 años y un día, aumentándolo en un grado, de 5 años y un día, y considerando las dos atenuantes, rebajar la pena a 3 años y un día, y se haga la diferencia del reproche penal, que no es misma situación que Cabello y Nubia, porque los destinatarios del deber de cuidar los fondos era de ellos, y no de Paredes; y se le sustituya por la pena de libertad vigilada, intensiva o simple, en base a los mismos antecedentes médicos expuestos, por existir una posibilidad cierta que pueda recuperar y reinsertarse en la sociedad, pues es profesor universitario que hizo clase durante muchos años, exhibiendo la última liquidación de sueldo de la universidad, que demuestra que tiene posibilidades de retomar esa forma de proveerse de recursos, que según su liquidación de marzo de 2021, ascendía a una suma total líquido de ochocientos mil pesos. En cuanto a la pena de multa, es imposible de cumplir en la situación que se encuentra el acusado, por lo que en atención al artículo 70 pide que se haga uso de la facultad, considerando las atenuantes y agravantes y las circunstancias personales, y se aplique una pena pecuniaria que pueda pagar, proponiendo una multa de 50 UTM.

QUINTO: Que la defensa de los acusados Cabello Bustos, San Martín Pavez y Ravanal Mellado, señaló en sus alegatos de apertura que para entender este juicio y este caso es bueno dar una mirada global de cómo se inicia y cuál es el desarrollo del mismo y de esa manera se va a entender mejor la posición de la defensa. Señala que se debe recordar que en la década de los 80 tanto la educación como la salud básica fue derivada a la Municipalidad y eso generó que las Municipalidades no estuvieran lo suficientemente preparadas para asumir responsabilidades relevante en cuanto a la labor que iban a cumplir, educación y salud, ni preparadas para administrar presupuestos cuantiosos relacionados con ambos objetivos y eso en definitiva generó que ya en la década del 90, del 2000 y 2010 se produjeron muchos problemas en las Municipalidades respecto del control de los fondos públicos y de los presupuestos. Indica que se amplió el déficit fiscal tanto en educación como en salud y esto no es ninguna novedad, y no tiene que ver con este caso sino que en términos generales los municipios tienen déficit relevantes en relación con la educación y la salud y que está relacionado también con la forma administración y seguramente con la escasez de los recursos, pero además como todos estos desafíos que implican establecer sistemas de control eficientes, los municipios no incorporaron esos sistemas de control eficiente. Por ejemplo, sistemas computacionales, aquí ya se ha hablado del sistema modular de control contable del municipio y además que pudieran efectivamente fiscalizarse adecuadamente, principalmente los departamentos de finanzas de estos departamentos de salud o de educación; y es así como nace esta historia, porque poco antes del año 2017 Alejandro Cabello Bustos, en su rol como jefe de finanzas de este departamento de salud



municipal de la comuna Talcahuano, y aprovechando la tormenta perfecta para para él en términos de visualizar y darse cuenta de todas estas falencias administrativas, contables, de control del municipio y además estar pasando por una situación personal compleja y delicada como se acreditará, él sin avisarle a nadie, sin ponerse acuerdo con nadie ni con Nubia, ni con los otros imputados, tomó la decisión de cobrar un cheque, que por cierto que iba destinado al pago de proveedores, y ya se había realizado ese pagó, pero él en definitiva generó un nuevo pago y empezaron estos hechos a repetirse en el tiempo y a cobrar cheques a su nombre; que en el devenir y particularmente en el año 2017, más menos octubre -noviembre del año 2017, hubo una empresa proveedora de servicios a la DAS de Talcahuano que reclamó porque llevaba un tiempo sin pagarse una factura, cuestión extraña porque lo que se perseguía por Alejandro siempre era que se pagara al proveedor, porque de esa manera no había un riesgo de que alguien reclamara y se generara una investigación o un sumario administrativo. Sin embargo, hubo un reclamo de una empresa y ese reclamo lo recibió doña Nubia San Martín, quien empezó a revisar los sistemas contables y aparecía este proveedor pagado, pero al revisar el cheque y visualizar el documento, se da cuenta de que ese documento no estaba a nombre ese proveedor sino que estaba a nombre de Alejandro Cabello, ante eso ella tiene una conversación con Alejandro Cabello y ella, ya sintiéndose involucrada en esto, decide también cobrar documentos o cheques a su nombre, misma cuestión respecto del coimputado Paredes, toda vez de que en una conversación con Nubia San Martín él también se integra a cobrar documentos y a dividirse entre los tres, por partes iguales, los dineros obtenidos. Indica que eso es y además Pedro Ravanal, pareja de Nubia San Martín y, a requerimiento de ella, también empieza a fines del año 2017, noviembre del año 2017, a cobrar documentos a su nombre y luego entregaba el dinero a Nubia o Alejandro Cabello y se repartía el dinero entre los tres funcionarios públicos.

Señala que esos son los hechos y en gran parte estos hechos comienzan con una investigación, que tal como ya lo señalara la fiscal, venía de una investigación administrativa; que ya el 4 de julio al año 2019 la señora Nubia San Martín y don Pedro Ravanal, investigados en ese tiempo, declaran ante la policía y aportan antecedentes relevantes y se atreve a anticiparlo porque esto va ser objeto de la prueba y la apertura tiene que ver con aquello, que hasta ese momento el señor Cabello era testigo en el caso y no es menor que a propósito de la declaración de estos dos coimputados Ravanal y Nubia San Martín, el mismo día de la declaración de aquellos la fiscalía solicita una orden de entrada y registro para el domicilio de Cabello, dando incluso cuenta de esta declaración; pero eso no fue todo, porque a la luz de esta investigación estos imputados han participado en diversas diligencias, por cierto participar en pruebas caligráficas voluntariamente, particularmente Cabello y Nubia San Martín; y en el reconocimiento de documentos y cheques, todos los cheques que forman parte de acusación han sido reconocidos su firma; y a aportar a los



funcionarios policiales correos electrónicos con sus respectivas claves, entregar voluntariamente teléfonos celulares con sus respectivas claves, y también autorizar voluntariamente la extracción de datos desde sus teléfonos celulares; y todo ello relevante, más aún cuando respecto de los hechos contenidos en la acusación, en lo sustancial, los reconocen.

Que en relación con los delitos que se le acusan, primero debe señalar que no se está ante una figura de delitos reiterados, sino que más bien en este caso lo que se da es un delito continuado con todos los requisitos que ha establecido la doctrina y la jurisprudencia; y en su oportunidad dará cuenta de la opinión de los autores y las sentencias de tribunales superiores de justicia en casos similares, pero sí puede mencionar desde ya que estos delitos continuados tienen una serie de requisitos, pluralidad de actos, unidad de la lesión jurídica, conexión entre las acciones, unidad de sujetos pasivos; agrega que respecto del dolo, la teoría de la alternación, que es una de las últimas recogidas, en cuanto a que el sujeto activo reanuda la misma decisión delictiva una y otra vez; que respecto de todos y cada uno de los documentos que fueron cobrados y que forman parte de la cantidad de delitos que el Ministerio Público y acusadora particular consideran como delito reiterados, no hay una reiteración, que se dan en este caso, como muchos casos de delitos de igual naturaleza, malversación de caudales públicos, falsificación instrumentos públicos, la posibilidad de considerarlos como delitos continuados por darse todos y cada uno de los requisitos.

Respecto de la agravante del artículo 260 ter, señala que no es posible considerar esto como una empresa, porque la empresa siempre necesita un gerente o el dueño o alguien que dé las directrices, y se pregunta ¿cómo aquí se va a tener un nivel de organización incluso medio, si entre los mismos acusados no se conocían?. Señala que algunos no se conocían y ni siquiera había relación entre ellos, y para ello será importante acreditarlo mediante, por ejemplo, los whatsapp, comunicaciones, teléfono y la misma declaración de ellos o también las diligencias de investigación. Indica que no había una comunicación, particularmente el señor Ravanal prácticamente no tenía ninguna comunicación con Alejandro Cabello, ni tampoco con Paredes; que nadie recibe lo mismo, no se retribuye de la misma manera en una organización, pues siempre el líder, el dueño, el gerente percibe una remuneración o una retribución mayor que el resto, cuestión que aquí tampoco sucede, pues se dividió el dinero en partes iguales, por lo que solo mencionando esto es posible sostener que cae la organización, que parece que se confunde con la coparticipación criminal, que es otra cosa; y desde ese punto de vista entiende que no se configura la circunstancia agravante de responsabilidad.

Que respecto del delito de falsificación de instrumento público, sostiene que es un concurso medial, que en definitiva estos decretos de pago, que dan cuenta en definitiva del pago, que fueron y llegaron a las cuentas de particulares y no la de los proveedores a quienes deberían haber llegado, es el medio para



lograr este perjuicio al fisco, es el medio para lograr esta malversación, pues si no existiera aquello, si no existiera este medio, el resultado no se hubiera producido y, por lo tanto, está subsumida la conducta; que respecto de Pedro Ravanal, él no es funcionario público, ni tampoco tiene una función especial dentro de la administración pública en orden al resguardo o la custodia de los dineros, de manera que por cierto él está en una situación distinta y desde ese punto de vista es conveniente decir que este tipo penal de malversación de caudales públicos del artículo 233 del Código Penal, parte señalando que el sujeto activo de éste es un funcionario público, que además tiene una condición especial, pues resguarda los fondos públicos; y al no tener esta condición, su representado Pedro Ravanal, la relación de él con el delito malversación de caudales públicos no se da y en el caso de que se estime algún reproche penal, ese debe ir por un delito de hurto o de apropiación indebida de acuerdo sea el caso.

En sus discursos de clausura y réplica, reiteraré extensamente los argumentos expuestos en su apertura, señalando en relación a los delitos de falsificación de instrumento público referidos en el Hecho 5, que en los decretos de pago no se consigna en parte alguna que se haya pagado una determinada suma de dinero con un documento, solo se ordena el pago de una suma, por lo que no da cuenta que se haya efectuado un pago, pues eso no es de la naturaleza del decreto de pago, ni está entre sus menciones que se haya hecho un pago efectivo; que no es posible establecer la participación de los acusados, pues es esencial que no exista duda acerca de la participación de Cabello en la firma de los decretos, y el único medio probatorio rendido al respecto son los dichos de la perito Pacheco, quien dijo que no podía establecer que la firma corresponda a Cabello, requiriendo documentación firmada al periodo investigado, la que no se le hizo llegar por la fiscalía, lo que es relevante por el hecho que hay varios decretos firmados por Nubia San Martín como subrogante durante el 2019, resaltando al respecto la falta de manuales de procedimiento y de funciones o perfil de cargos, que posibilitaban que cualquiera firmara por Cabello; por lo que ya sea por la vía del delito o de la participación no se puede sancionar a los acusados por el Hecho 5. Que respecto de los Hechos 6 y 7, refiere que los hechos no han sido expuestos de manera íntegra y completa que permita entender la conducta que se atribuye a los acusados, dado que no se establece donde se ingresa la información, a un libro, al sistema computacional de la municipalidad, a algún cuaderno de los acusados, por lo que no es posible establecer que se haya ingresado una información falsa, porque no se tiene el instrumento donde se ingresó, y no es posible suponer que lo que quiso decir el fiscal es que se ingresaban a un sistema computacional contable, por más que se haya rendido prueba al respecto; por lo que también los acusados deben ser absueltos de dichos delitos, porque no se pueden establecer dichos delitos, y porque además en todos los casos existe un concurso medial, para el caso que se dé por establecido el delito de malversación de caudales públicos, conforme al



artículo 75 del Código penal, porque los decretos sirvieron como medio idóneo y necesario para la comisión de otro delito de mayor gravedad.

En cuanto al delito de malversación de caudales públicos, en relación al acusado Ravanal, señala que éste no conocía los procesos administrativos internos de la DAS ni los procesos de pago, y no hay prueba que así lo establezca, y lo acreditado solo es que cobro 86 cheques firmados previamente por Nubia San Martín y Manuel Rojas; que si se omite la declaración de los acusados no hay prueba que acredite el vínculo que tenía con los demás acusados, que a Ravanal nunca lo vieron conversando con los demás acusados, y en el domicilio de Cabello no encontraron ninguna evidencia que lo vincule con Ravanal, ni en el domicilio de este último, algo que lo vincule con el primero, que en cuanto a movimientos bancarios, solo hay un solo depósito exiguo de dinero, que no tiene relación con los hechos, sino con un préstamo entre ellos, cuestiona las coincidencias plateadas por el perito en relación a los cobros de cheques y depósitos de dinero en las cuentas; como también la vinculación que la fiscalía pretende hacer a partir del tráfico de llamadas telefonías, dado que las que se dijo por la policía que el numero asociado a Cabello en esos tráficos de llamadas era el terminado en 0082, y conforme a prueba rendida en el juico que refiere, ese número pertenece a Elson Lienlaf, por lo que las comunicaciones entre Ravanal y Cabello nunc a existieron.

Agrega que Ravanal es un extraneus, dado que no es funcionario público y tampoco tenía a su cargo fondos públicos, por lo que tratándose el delito de malversación de caudales públicos de un delito especial impropio, no hay comunicabilidad entre la conducta de los funcionarios públicos de la DAS; citando doctrina y jurisprudencia al respecto, incluso de incomunicabilidad total, refiriéndose igualmente a la jurisprudencia citada por las acusadoras, cuestionado la interpretación que se les ha dado a las mismas.

Que respecto a Cabello señala que no hay prueba que establezca concierto previo de Cabello con Ravanal ni con Paredes, ni de estos últimos entre sí, pues los funcionarios que dieron cuenta de haber visto a Paredes, solo conversaban entre ellos, y además había una relación previa de muchos años, y de las incautaciones en los domicilios, no hay nada que los vincule; y aparte de la declaración de Cabello y Nubia, no hay prueba alguna que establezca una concertación entre ellos, dado que las conversaciones vía WhatsApp no dice relación con cobro de cheques determinados; agregando que se estableció que Cabello tenía ausencias permanentes en las oficinas de la DAS, que no iba siempre a la oficina, que tenía problemas personales, refiriendo además una documentación encontrada al momento de la entrada y registro su domicilio, consistente en antecedentes médicos que daban cuenta de atención de urgencia que tuvo el 1 de enero de 2019, en que sufrió una fractura por una caída, y coincidente con persona que llegó a trabajar el 24 de enero de 2019 a la DAS a propósito de la licencia médica de Cabello; agregando que la fiscalía debe probar que en cada oportunidad que se cobró un cheque, hubo un acuerdo, dado



que sostiene que se trata de delitos autónomos, reiterados; también manifestó que no es efectivo que en cada uno de los cheques hubo una llamada desde el banco, puesto que el V°B° que figura en el reverso del cheque es una verificación del cajero, más allá que algún testigo diga que escuchó una llamada telefónica, no se puede establecer que en todos los documentos existió visación; que el Ministerio Público sostiene que el acuerdo entre Nubia San Martín y Cabello Bustos podía venir de los decretos de pago, pero refiere que los decretos requerían dos firmas, como era la del Director de la DAS, por lo que sin esta segunda firma, el decreto de pago no podía avanzar, y el que tiene a cargo los fondos públicos es el Director, por lo que la sola firma de Cabello no podía determinar los pagos; que se dice que los acusados actuaron concertados en la malversación de más de 400 millones de pesos, pero es curioso que en los Hechos 1 al 4, no se da cuenta de dicha concertación, y el Hecho 1, habla que se reparten el dinero entre Nubia y Cabello; que es importante que se establezca el monto que cada uno de los acusados se apropia, porque el artículo 235 recoge de manera relevante el monto, dado que da la posibilidad de reintegro, y en este caso los imputados no tenían ese derecho; y respecto de los montos la información se encuentra en los acusados, peor el Ministerio Público no rindió prueba; argumentó igualmente que Cabello no estaba a cargo de los fondos públicos en los términos de la acusación, no hay acto administrativo que dé cuenta de ello, no tenía fianza, que las citas al artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades no corresponde, dado que se refiere a los Jefes de Finanzas de las unidades, sino de los Departamentos de las Direcciones de Finanzas; que el certificado de disponibilidad presupuestaria, nada tenía que ver con la disponibilidad de fondos; que Cabello no tenía clave de acceso, no era apoderado de ninguna institución, no había manual de procedimiento que regulara la forma de pagar a los acreedores, no había control cruzado de emisión de cheques por parte de la municipalidad; no tenía fianza; que no es procedente la costumbre administrativa alegada por la fiscalía, sino que se requiere de un acto administrativo formal de la administración de fondos.

Por otra parte, sostuvo que por la forma de comisión de los delitos, y demás requisitos doctrinales y jurisprudenciales que cita, estima que se está en presencia de delito continuado, citando jurisprudencia en apoyo de su petición; pidiendo que no se acoja la agravante del artículo 260 ter invocada, pues hechos descritos en acusación, dan cuenta que se trata de coparticipación, no existiendo pruebas para el establecimiento de la agravante, que todos cobraron cheques, por lo que es una coparticipación criminal y no hay evidencia de que de manera reiterada en el tiempo existieron instrucciones de Cabello, sobre todo que estuvo periodos fuera de la oficina, y la única persona que habló de la distribución de funciones fue el policía Valenzuela.

En cuanto acusación particular, por 129 delitos reiterados de falsificación instrumento privado mercantil; en relación a Cabello, no se configura porque la querellante plantea falsificación ideológica, en relación al contenido del



documento y que sería falso porque se paga algo a terceras personas para quienes no estaba ordenado pagar; pero aquí es importante la legislación mercantil y regulación de cheques y no hay discusión en doctrina, y hay jurisprudencia que cheques son incausados, no necesitan causa, se bastan a sí mismo, son meramente formales, por lo que la relación fuera del mismo cheque, de si paga o no obligaciones, si es en garantía, si corresponde o no para lo cual se debe pagar, no genera el delito que plantea la querellante, porque son documentos que no necesitan causa para su validez; y, por lo mismo, respecto de Ravanal, cuando se da cuenta de delitos o plantean uso malicioso, los 86 cheques no son falsos, porque desde el punto de vista de su formalidad y lo que dan cuenta, tienen validez, y al ser un documento que no necesita causa, no es posible sostener una falsedad ideológica del mismo.

Igualmente refirió que beneficia a sus representados la circunstancia atenuante de colaboración sustancial del artículo 11 N° 9 del Código Penal, dado que reconocen su participación en el cobro de cheques, a lo precaria que fue al prueba del Ministerio Público y al hecho que sus defendidos entregaron voluntariamente las claves o contraseñas de los dispositivos telefónicos o cuentas de correo electrónicos, y si no se logró el ingreso a los mismos, se debió a la falta de prolijidad de la policía; y refirió una serie de antecedentes en base a los cuales estima la concurrencia de la atenuante referida; haciendo igualmente referencia en torno a la efectividad de los viajes de Ravanal y Nubia a Punta Arenas, argumentando en torno al cheque depositado en un banco de dicha ciudad y a lo absurdo que resulta que se le pase el cheque a otra persona para que lo deposite en dicha ciudad.

Finalmente, solicitó respecto de Ravanal, su absolución por el delito de malversación de caudales públicos, y en subsidio, si es que concurre algún delito, y se acoge la tesis de la comunicabilidad limitada, se le sancione por alguno de los delitos base del artículo 432 o 470, o en subsidio, como cómplice del artículo 16 del Código Penal, y se considere como delito continuado y no como reiterado.

Respecto de Cabello y San Martín, se les absuelva de los delitos de falsificación de instrumento público y mercantil; y en subsidio, y para el caso de establecerse esos delitos, se consideren como concurso medial en relación con los delitos de hurto o apropiación indebida, o si se estima con el delito de malversación.

Respecto al delito de malversación de caudales públicos, se absuelva a Cabello, salvo respecto del hecho 3, en que se le puede dar una calificación distinta en relación al delito base, de hurto o apropiación indebida; en subsidio, si el tribunal es de posición de condenar a Cabello por todos los delitos de la acusación, lo sea como autor de delito continuado de malversación de caudales públicos. Respecto de Nubia, si se estima que hay mérito para la condena por el artículo 233, se le castigue como delito continuado y no reiterado, y no se



considere la agravante del artículo 260 ter respecto de hechos posteriores al 20 de noviembre de 2018.

En cuanto a la demanda civil, respecto a la solidaridad entre todos los acusados por el total de los montos, debe estar en relación únicamente por los montos que se acrediten defraudados por cada uno de los acusados, no es posible desde su punto de vista que se pueda atribuir la talidad a cada uno de los acusados, cuando efectivamente a la luz de los hechos, en alguno de estos, solo se da cuenta que dinero fue repartido, en ninguno de los hechos dan cuenta que se distribuyen en todos los acusados, y al no dar cuenta de esa distribución no es posible sostener que todos sean responsables del monto de los 412 millones.

En la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal, solicitó se reconozca a los acusados la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, y además la del 11 N°9, y que se le tenga como muy calificada, refiriendo en apoyo de esta última la existencia del derecho a guardar silencio consagrado como uno de los derechos más importantes a partir de la reforma procesal penal; que Cabello parte reconociendo su participación en los hechos, la dinámica, como lo hacía y cuando lo empezó a hacer y cómo se involucran las distintas personas acusadas, que se quedaba con un tercio de lo que se cobraba cualquiera de los acusados, al igual que sus otros dos defendidos; que Cabello siempre estuvo en contacto con policía Valenzuela, le pasa su clave de teléfono y correo electrónico, y de hecho hay correos electrónicos con Valenzuela; y también refiere el destino de los dineros, y el hecho de habérsela farreado, porque iba al casino, y muchos testigos indican que Cabello llegaba sin bañarse, como después de una farra, que tenía problemas de alcohol, todo lo que decía relación con los problemas en que estaba; y lo mismo respecto a Nubia y Ravanal en cuanto al destino de los dineros, que dicen que se lo gastaron en viajes a Punta Arenas a visitar a su hijo, respecto a su declaración y destino de dinero. Asimismo invocó la atenuante del 11 N°7, reparación celosa del mal causado, estimando que se dan los presupuestos para ello, refiriendo los montos consignados por cada uno de ellos, en base a certificación del tribunal de Talcahuano y nuevos abonos posteriores a dicha certificación, debiendo considerarse para ello los tiempos que han estado privados de libertad desde febrero del año 2021.

Pidió que de las tres atenuantes, se califique la del 11 N°9, y en subsidio simple; se compense la agravante con la atenuante de 11 N°6; y si no se acoge la agravante, se rebaje en 3 grados la pena por el delito de malversación y el de falsificación subsumido, pidiendo 61 días, y por la reiteración se suba un grado, y se le aplique 541 días; y de ser acogida la agravante, que se compense, que se suba en un grado y se quede en rango de 3 años y un día .

Luego señaló que respecto del delito de malversación de caudales, concurren 3 atenuantes, rebajar 3 grados, y si se acoge solicitud de calificar atenuante 11 N°9, y pide 3 años y un día; si se acoge la agravante, se compense



con la atenuante 11 N° 6; respecto de la falsificación de instrumento público, concurren 3 atenuantes, y muy calificada la del 11 N° 9, pide pena de 541 días; solicitando el otorgamiento de pena sustitutiva de libertad vigilada, para lo cual acompañó informes sociales de los acusados; y en cuanto a la pena de multas, en base a los informes sociales y al hecho de encontrarse privados de libertad, si posibilidad de generar ingresos, se rebaje a 50 UTM, y no se condene en costas a los acusados.

SEXTO: Que, renunciando a su derecho a guardar silencio, el acusado **Pedro Paredes Montoya** prestó declaración en la oportunidad referida en el inciso tercero del artículo 326 del Código Procesal Penal, señalando que vive en Concepción, que tiene 63 años de edad, es ingeniero comercial, tiene 3 hijos y una nieta, es casado, pero separado desde hace 3 años, tiene problemas a la próstata, sufre de glaucoma, y su mayor problema es la vista, pese a ser operado de cataratas; que ingresó el 2005 a la Dirección de Salud Municipal de Talcahuano como jefe de finanzas, del 2005 al 2010; y en este período trabajó en un equipo afiatado, con alta motivación por desarrollar su trabajo, hubo preocupación permanente por capacitarse, lo que se dio con cierta secuencia por las falencias que existían por los registros contables, que siempre había sido un problema complejo; que en ese período hubo una situación negativa que tiene que ver con un sumario administrativo por la pérdida de documentos bancarios, pero afortunadamente se reaccionó a tiempo y no hubo complicación posterior, pues se corrigió, y en este periodo no hubo pérdidas económicas, y el control por los pagos a proveedores estuvo al detalle y no hubo mayores complicaciones; que en los años 2010 al 2020 se desempeñó como jefe de proyectos, que surgió de una inquietud personal, pues no estaba en el organigrama de la DAS, y el principal objetivo que se planteó fue buscar nuevas tecnologías para apoyar la gestión de la atención primaria, que se vio reflejada en algunas ideas de prefactibilidad que realizaron y las funciones propiamente tal apuntaban a buscar financiamiento, tecnologías adecuadas para ser materializadas, elaborar buen diagnóstico de la situación de la atención primaria, coordinación con instancias para que tuvieran acceso a esta situación que querían concretar, como transferencia tecnológica, que estuvieron desarrollando la idea de un centro de diagnóstico con las personas que tienen que dializarse, que quedó como proyecto de prefactibilidad; que lamentablemente por el tipo de ayuda hoy existen proyectos de reposición, que consisten en comprar las cosas que se quieren reemplazar; como reposición de vehículos, pero son proyectos simples, pero se compraron sillones dentales, pero siempre se optaba por lo más barato y al poco tiempo daban problemas. El área de proyectos que define es una unidad, no un departamento, un organismo asesor del director, es como jurídica, como comunicaciones, que no tiene relación con ninguna otra unidad, en la que solo trabaja él, no tiene secretaria, no está comunicada a ninguna otra unidad, que siendo una unidad que no tiene relación, ni depende de abastecimiento ni de



recursos humanos, ni de finanzas; es un ente asesor, una unidad autónoma, no se trabaja con dinero, no hay pago de fianza, no cuida bienes.

Que en relación a los hechos, hay distintas situaciones, que desde segundo semestre de 2017, que coincide con la llegada del nuevo director de Salud don Armando Domínguez, quien al igual que muchos otros, siempre le llamaba la atención el área de proyectos, que algunos directores anteriores asumían con entusiasmo la idea y permanecían donde está la administración de salud, que lo veía como un respaldo a su trabajo, pero con la llegada de Domínguez ocurren situaciones especiales, pues es trasladado a un edificio a 100 metros de la oficina central, síntoma de que la situación no funcionaba bien, pero el problema estaba en que mantenía un grado de independencia prácticamente absoluta, no tenía contacto con ningún departamento o área con los que había trabajado, y se generó una situación especial porque hubo una persecución laboral hacia su persona, que le causó inconvenientes, porque Domínguez trató de encontrarle sentido a lo que él había estaba haciendo, y se da esa persecución importante, que llegó a la Contraloría, porque en un período de 3 meses lo evaluó en una categoría que lo dejaba en una situación incómoda, y al mes hizo otra evaluación en que quedaba en situación de ser expulsado, y la Contraloría dio luz verde a la situación y se corrigió directamente con el alcalde; que esto le originó muchos problemas, y paralelamente estaba pasando por una situación económica delicada que venía arrastrando desde el 2016; que en las tardes después de su horario de trabajo realizaba labores de docencia, en algunos institutos como Inacap, clases vespertinas, y logró trabajar de lunes a sábado, lo que le significó un esfuerzo físico y mental y un estado depresivo muy importante, pero en algún momento recurrió a conductas autodestructivas, uso excesivo de fármacos, tenía dolores de cabeza, para estar activo, lo que controló y le permitió cumplir muchas de las cosas que realizó, pero fue mermando en otras situaciones, como conductas evasivas, como la ludopatía, situación que en algún momento no encontraba explicación, pero el desahogo estaba por ahí.

Que esta situación de persecución laboral y endeudamiento era conocida por el equipo de finanzas, doña Nubia y don Alejandro, que con este último tenía permanente contacto en reuniones que realizaban, y gran parte de la oficina conocía su situación; y a raíz de esta situación en octubre de 2017 Alejandro dice que le ofrece ayuda, y él aceptó porque su situación era bastante delicada, y la ayuda consistía en cobrar un cheque que iba a salir a su nombre, y una parte del cheque era para él, lo tomaba como suyo, y lo otro era entregado a la señora Nubia y a Alejandro, era una repartición en tres partes iguales; que inicialmente no hizo mayor cuestionamiento; que hoy con la tranquilidad del momento, de ver las cosas con el tiempo, podría cuestionarla desde todo punto de vista, que incluso ni siquiera preguntó si habían otras personas cobrando, y siempre supuso que era la única persona que cobraba.



Que los documentos que él recibió tenían un valor promedio de 3 millones y fracción, por lo que era obvio que la repartición era en términos iguales; y bordeaban los 3 millones y medio, que la entrega de documentos era de manera manual o Alejandro o la señora Nubia, no existía una fecha preestablecida, sino que en cualquier momento; que se enteró que habían otras personas que estaban cobrando cheques, lo supo al final de este período, a través del informe emanado de la Contraloría General de la Republica en agosto de 2019, donde se expresan los documentos que fueron cobrados por cada uno de ellos, y además una cuarta persona, don Pedro Ravanal, con el detalle de cada uno de los cheques cobrados y sus montos; que los dineros que fueron cobrados por esas personas, él no los recibió, como repartición por partes iguales a la que hacía mención; que la relación que existía entre la señora Nubia y don Alejandro fue siempre estrictamente laboral y con Pedro Ravanal no existe relación de ningún tipo.

Que quiere reconocer que se le entregaron 35 cheques a su nombre pertenecientes a las cuentas corrientes de la Dirección Salud Municipal Talcahuano para que los cobrara en la oficina del Banco Estado de Talcahuano, siempre fueron cobrados en efectivo y dan como \$115.000.000, que fueron repartidos en 3 partes iguales, lo que da como \$37.000.000, que fue lo que hurtó y que quedó bajo su propiedad, y de estos 37 millones, ha devuelto, e hizo un aporte a la causa, de \$10.000.000 como devolución por el mal causado, pese a su situación económica que estaba pasando, recurrió a su familia que lo apoyó, por lo que no fue una situación que fue a buscar el dinero y lo devolvió, sino que fue con apoyo de su familia, y fueron depositados en 3 fechas, en el mes de mayo de 2021. Que respecto al destino de los recursos, siempre fue el pago de deudas; bancos principalmente, instituciones financieras, porque en muchas de estas instituciones tuvo que repactar y le significaba altos montos, y tenía gastos importantes, dos hijos estudiando en la Universidad, una hija en la secundaria junto con su nieta y la ludopatía que desarrolló de alguna manera. Que esta situación siguió avanzando, y seguía cobrando los documentos, y era preocupante, lo que dice hoy, pues era una bola de nieve que seguía creciendo y no tenía claro el destino final, y hoy como que agradece, porque si no esta situación sería más catastrófica, que esta situación siempre la ocultó, no la compartió con nadie, y por ello era angustiante; que en relación al uso del dinero, no lo utilizó en la compra de ningún bien, no compró auto, ni departamento, simplemente, iba aumentando la bola de nieve deuda tras deuda.

En cuanto a situación de aislamiento que tenía en su oficina, los documentos que se le entregaban estaban asociados a una factura, y la factura a un proveedor, que él no sabía, a él le entregaban el cheque, que era lo que le interesaba, y no la documentación respaldatoria, que desconoce cómo opera el sistema computacional, respecto al ingreso de la documentación contable; que respecto a la forma como se operaba, siempre se utilizó el cheque o documento



que se le entregaba, el cual era de la cuenta corriente de la Dirección Municipal de la Dirección de Salud de Talcahuano, además, el valor del cheque estaba asociado a una factura, también era gravitante la distribución, siempre repartido en partes iguales, lo que cobraba se entregaba en términos igualitarios, y en su caso siempre tuvo un objetivo, cual era pagar deudas, un destino de urgencia económica que estaba atravesando; que esta situación colapso cuando fue detectada, porque sus acreedores rápidamente lo demandaron y complejizó su situación, lo que lo llevó a presentar su quiebra personal, que era su última opción, y fue aceptada por el Tercer Juzgado Civil de Concepción, y se produjo la liquidación voluntaria de sus bienes en abril de 2021, y se sacó un gran peso de encima.

Con respecto a lo que ha significado el aporte de la causa, a él como imputado le generó una duda, o cierto grado de impotencia, porque siempre su intención fue colaborar, y veía que en las entrevistas o revisión de medidas cautelares, siempre se veía que ello no era importante, pero su aislamiento era importante, no tenía conocimiento de lo que ocurría en la Dirección de Salud, y cuando tuvo la primera entrevista con la fiscal entregó su celular, con clave, para tener acceso y para su revisión, y también entregó las claves de correos, personal e institucional, concurrió voluntariamente a la PDI a un peritaje caligráfico, que en toda ocasión que la PDI o fiscalía requiera su presencia, siempre estaba dispuesto a colaborar, y cuando fueron a revisar o hacer incautación estaba en la casa y los recibía, sin ánimo de eludirlos; que en la primera oportunidad entregó una boleta de un local comercial, un minimarket, sin entender mucho cual era el sentido, que era un local comercial de una de las personas involucradas en esta situación; la policía el día de la formalización incauta un segundo celular y se los entregó con las claves de acceso, y se llevaron el notebook con las claves, y al observar estas situaciones, desde su perspectiva, siente que ha colaborado, aunque puede que técnicamente no sea así.

Que en todos los hechos relatados, la intención siempre ha sido entregar la información más cercana y real posible; que este período de privación de libertad ha sido muy complejo para él y su familia, que ha podido analizar cada uno de los detalles entregados, lo que lo ha llevado a su profundo arrepentimiento, que esto nunca debió haber ocurrido, que significó una profunda crisis personal, en los distintos niveles de su vida, familiar, perdió su matrimonio, el cual ya venía a tumbos, y esta situación no la provocó, pero la detonó, y significó desde el punto de vista laboral que perdió todo, su trabajo, y económico, pues no tiene ingresos de ningún tipo, lo que lleva a complejizar su situación futura, que esto no se repetirá, y nunca debió haber ocurrido, decidió callar, cuando perfectamente pudo denunciarlos, por lo que fue cómplice de esta corrupción de los hechos relatados, por lo que no le queda más que aferrarse a dos hechos, lograr la libertad y la reinserción en la sociedad, y esto último, como



la misma libertad, la quiere obtener como un ciudadano normal y común; sabe que tiene las armas para reinsertarse, no será fácil, pero tiene la esperanza de poder levantarse ante esta situación.

Ante preguntas de la fiscalía, señaló que ingresó el 2005 a la Dirección de Administración de Salud al departamento de Finanzas, en esa época era el jefe; cargo que ocupó hasta el año 2010, y Nubia San Martín ya formaba parte del departamento de Finanzas, pero Alejandro Cabello en esa fecha no, quien ingresó como el 2013, y al parecer antes estuvieron trabajando juntos un par de meses; que él como jefe de finanzas, sabe las obligaciones que tiene un jefe de finanzas, las conoce, y sabe cuáles eran las funciones desempeñadas por Nubia San Martín, pero antiguamente se trabajaba con otros presupuestos, por lo que los requerimientos eran distintos a los que se desarrollaban después con presupuestos abultados, que sabe lo que es un decreto de pago, que tiene que ir firmado por el jefe de finanzas y el director, que tiene que señalar a qué proveedor se le está pagando, el monto por el cual se paga, las cuenta corriente de la DAS de Talcahuano son varias, en su tiempo eran como 6, hoy son del orden de 10 cuentas, y según el fondo es el número de la cuenta corriente, y antiguamente llegaban aportes extraordinarios que enviaba el Servicio de Salud, y dentro de los requisitos era abrir una cuenta corriente, eran cuentas complementarias, que como finanzas la cuenta que más se utiliza o más se giran cheques, antiguamente prácticamente se usaba una cuenta, pero se fueron dividiendo, porque fueron llegando distintos programas, está hablando de años 2006 a 2010; que a la época en que él era jefe de finanzas cree que se ocupaban distintas cuentas corrientes, unas 4 o 5 cuentas; que además de la cuenta se señala la forma como se paga, no se indica si es por transferencia, porque no había en ese tiempo, tiene duda si se señala el número del cheque, pero si se señala el monto y el proveedor; que dentro de sus funciones estaba firmar los decretos de pago, no recuerda si se indicaba el número de cheque.

Que fue objeto de un sumario administrativo en compañía de la señora Nubia San Martín, el que terminó sin complicaciones, con una sanción administrativa; y luego lo trasladan como jefe de proyectos y queda como en estado de asilamiento en la DAS, como si y no, porque siempre los directores de finanzas lo apoyaron en su idea, por lo que siempre permanecía en reuniones con ellos en la búsqueda de proyectos e ideas que llevaran a mejorar la atención; que del 2017 al 2019, concurría al departamento de finanzas a saludar, pero no todos los días, que no era común que saliera con el señor Cabello, casi nunca salían, que recurrentemente almorzaban juntos con Nubia San Martín, no tenía una relación de amistad con ella, no tenían relación cercana; que le piden ayuda en cobrar un cheque y él se quedaba con un porcentaje, y él no hizo mayor cuestionamiento, se refiere a que en ese momento no evaluó la situación de si era ilícito, y en cuanto a si sabía que no podía cobrar cheques de dicha entidad, dice que sí sabía, pero respecto al origen de los fondos, él no tenía conocimiento



si existían fondos, si correspondían a medicamentos o remuneraciones o al origen que podía tener ese dinero; por lo que no sabía el gasto al cual se imputaba el cheque, pero si sabía que no podía cobrar dicho cheque.

Que no sabe cuándo los funcionarios de Contraloría ingresan a hacer la fiscalización, no se enteró, pero el ultimo cheque que cobró fue en marzo de 2019; que hurtó el cheque; que sabe la diferencia entre un hurto y una malversación, como él lo entiende esta última es transferir desde un recurso a otro en distintas cuentas corrientes e internamente cuando hay déficit de una cuenta, ocupar dineros que están para otro destino; que declaró ante fiscalía en dos oportunidades, y ante la PDI no ha declarado; la primera vez que declaró fue en agosto del año 2019, donde entregó las claves de su correos electrónicos y un teléfono y las claves de éste, pero ese teléfono parece que no tenía claves, era directo; que cuando fue la PDI le permitió la entrada, pero andaban con una orden judicial, y en esa oportunidad entregó voluntariamente el teléfono, pero no se acuerda de si había una orden de incautación, que fue un allanamiento a su casa.

Que respecto del uso del dinero, en la declaración de agosto de 2019, no se acuerda lo que señaló, recuerda que señaló haber recibido aproximadamente 40 millones; y luego del uso de la herramienta legal, lee su declaración del 6 de agosto de 2019, en que a la pregunta de cuánto dinero cobró, se responde que 40 millones y fracción, agregando que no recibió más de 4 millones.

Que también declaró el 9 de diciembre de 2021, donde señaló otra cifra en cuanto a su apropiación, que siempre ha tenido mentalmente la cifra en los 37 millones, por lo que debió haber dicho esa cifra; que de ese dinero, él deposito 10 millones, y otros dineros para efectos bancarios y otros, como universidad, colegiaturas, dividendos, ludopatía; que el aporte fue en mayo del año 2021.

Ante preguntas de la parte querellante, indicó que se desempeñó en la Municipalidad de Talcahuano en el cargo de jefe del departamento de finanzas de la Dirección de Administración de Salud, y como tal las funciones que debía cumplir, nunca las funciones fueron definidas, pero recuerda que en algún momento se pidió que cada jefe redactara de su puño y letra cuáles eran las funciones que debía cumplir cada jefe, por lo que no estaban claras ni tipificadas, y él describió básicamente, las de elaborar el presupuesto anual, una de las más importantes, el ingreso contable o registro contable de todas las partidas en las distintas cuentas que se manejaban, ingresos y egresos, la custodia de los recursos económicos para dar cumplimiento a los requerimientos que se querían dar o pagos; la elaboración de informes mensuales, semestrales, la disposición monetaria del momento, llevar registro contable de acuerdo a las exigencias, como mantener actualizado el plan de cuentas para ver el avance de recursos y gastos, y para la toma de decisiones; y en cuanto a las responsabilidades que correspondían al cargo de jefe de Finanzas del Das de



Talcahuano, señala que si no fueron definidas bajo un perfil conocido, no puede responder la pregunta, porque no quiere asumir algo que debió hacerse y no se hizo, no puede dar una opinión de cómo debe desempeñarse un jefe de finanzas, nunca se establecieron cuáles eran las responsabilidades del cargo; por lo que dice que no conocía cuáles eran las responsabilidades; si faltaba algún fondo asignado a la Das, las preguntas respecto a los fondos, se le hacían al director, porque muchos de estos imprevistos que ocurrían eran porque los dineros no habían llegado y las gestiones había que hacerlos a nivel de directores para agilizar la llegada de recursos, y a él como jefe de finanzas no se le consultaba.

En su periodo se realizó un sumario, en que fueron sumariados él y la señora Nubia; y era por extravío de documentos bancarios, cheques, que no recuerda a quien pertenecían, sumario fue por responsabilidad que tenía como jefe; como era jefe de finanzas, era obvio que tenía algún grado de responsabilidad, porque una persona a su cargo cometió alguna situación que no era correcta, como el reguardo de la chequera, y esa persona era la señora Nubia, y los cheques siempre se manejaban en la caja de fondos, y al parecer en esa oportunidad la chequera no quedó en esa caja, pero como se reaccionó rápidamente no hubo mayores consecuencias, que él fue sancionado en ese sumario, parece que una amonestación por escrito, y la señora Nubia se imagina que fue sancionada, no recuerda por qué cargo, no recuerda fecha de ese sumario; que dejó de ser jefe de finanzas, porque él lo pidió, pero ese sumario no tuvo relación con ello; que la remuneración como jefe de finanzas y el sueldo que tiene después cuando pide el cambio, no hay variación, y en el nuevo cargo no tiene a cargo fondos públicos, y como jefe de finanzas tenía a cargo fondos públicos; que los fondos de Administración de salud eran variados, per cápita, convenios, y actualmente deben haber 100 o 200 convenios, con distintos objetivos. Que habían fondos destinados al pago de proveedores, no recuerda cuál era el sistema que se utilizaba para el pago de los proveedores, que había que elaborar un presupuesto y hacer pagos a distintos proveedores; que en el pago de proveedores se utilizaban cheques, siempre se han pagado cheques a los proveedores, y provenían de per cápita, convenios específicos de pago de proveedores, y los cheques con los que se hacía pago a los proveedores en la Dirección de Administración de Salud, provienen de cuenta corriente y los dineros son ingresados a cuenta, el origen va depender del origen de los fondos; el titular de la cuenta corriente es la DAS, la Dirección de Salud de Talcahuano.

Que cuando él era jefe de finanzas, Nubia San Martin se desempeñaba como administrativa y estaba a cargo del manejo de la cuenta corriente de la DAS, y otras más, como cardiología, remuneraciones, per cápita; que no conocía el procedimiento de pago a los proveedores, nunca lo entendió, era engorroso, poco amigable, porque simplemente se ingresa la información, registros; y él no propuso cambios, porque el sistema es municipal; y él no intervenía en nada en el sistema de pago; que hay distintos sistemas de control, desde auditoria a



procesos simples como la emisión o pago de un cheque, que en cualquier repartición, no solo se valida firmas autorizadas, sino que hay un organismo superior que vela porque tenga fondos; y en esa fecha siempre existían firmas autorizadas, y en ese tiempo, pero no se acuerda, porque la señora Nubia parece que no firmaba cheques en ese tiempo, y siempre se emitían decretos de pago, pero eso no era mecanismo de control, de que era real o no; y en esa época la información se ingresaba al sistema modular computacional.

Agregó que luego de cambiar sus funciones estaba en una oficina, aislado, sin comunicación con otras unidades, pero tuvo conocimiento del informe realizado por la Contraloría, porque la misma contralora se lo entregó en la oficina de Concepción, debido a que él estaba dentro del sumario, involucrado en el proceso, y tuvo que ir a declarar a la Contraloría; que almorzaba regularmente con la señora Nubia San Martín, y mantenía contacto ocasional con señor Cabello; que los cheques que cobró, le eran entregados por la señora Nubia o don Alejandro, se contactaban por teléfono, cuando el documento estaba listo, uno de los dos lo llamaba y le decían que estaba listo; no le dijeron por qué le entregan los cheques, no había ningún fundamento que le hayan indicado para cobrar los cheques, simplemente la llamada telefónica.

Ante preguntas de su abogada defensora, refirió que en cuanto al sumario que existió cuando era jefe de finanzas, no recuerda la fecha, pero fue antes del año 2010; que en relación a los cargos, era por extravío de unos cheques, no hubo pérdida de fondos, porque se dieron órdenes de no pago al día siguiente y se hicieron las publicaciones en un diario local, no hubo mayor complicación porque se actuó inmediatamente, por lo que nadie fue a cobrar esos documentos, los que estaban si mal no recuerda en el escritorio de la señora Nubia, y a ésta se le sanciona por esa situación, porque no estaban resguardados en la caja fuerte donde deberían estar; que al hablar de las funciones y responsabilidades como jefe de finanzas, señala que son las que él veía pertinente realizar, no estaba descrito el cargo ni los perfiles, y luego que él dejó de ser jefe finanza no sabe si se describieron, pero una de las responsabilidades era tener a cargo los fondos municipales, que era su responsabilidad hasta el año 2010, y después de esa fecha esa responsabilidad es del nuevo jefe de finanzas, pasaron varias personas, y en el periodo cuestionado, no se acuerda, pero desde el 2013 en adelante Alejandro Cabello, por lo que éste tenía esa responsabilidad, y no sabe quién era el encargado de ingresar los registros de los pagos, y se imagina que la señora Nubia era la encargada del pago de proveedores del 2010 en adelante, pero no sabe quiénes tenían las firmas autorizadas para los cheques, y no sabía de quienes eran las firmas de los cheques, y no sabe con qué se relacionaba contablemente el cheque con el sistema de la DAS, ni sabía a qué proveedor correspondía el cheque que estaba cobrando, no sabe la operatoria anterior a la entrega del cheque entre Nubia y Alejandro; él no tenía en el cargo de proyecto obligación



de rendir alguna fianza, no manejaba fondos en ese cargo, y en cuanto a las compras públicas no tenía ninguna relación en el área de proyectos.

En la DAS, después del director, estaban tres personas, jurídica, proyectos y comunicaciones, debajo del director, como unidad asesora; y después venían los departamentos, que dependían del director, departamentos de recursos humanos, abastecimiento, de Obras y mantenimiento, y Finanzas; que en la unidad de proyecto en que él trabajaba, la unidad de proyecto se relacionada directamente con el director, y él en su unidad de proyecto, no tenía relación con los otros departamentos; que adquisiciones está en el mismo nivel de finanzas, obras y recursos humanos, que él en sus funciones de proyecto no tenía que generar solicitud de compras, solo a nivel de ideas y factibilidad, no tenía nada que ver en el proceso de proveedores, cotizaciones, trato directo de proveedores, ni elaboración de licitaciones públicas ni elección del proveedor, recepción de mercadería, recepción de servicios u obras ejecutadas, ni recepción de facturas de los proveedores ni reclamos que pudieran presentar los proveedores; que en la conformación del legajo con el cual van a firma los decretos de pago, no tiene ninguna relación; que el referido legajo debería tener todo el proceso señalado, con los vistos buenos de cada uno de los involucrados, y él no tenía que ver con ninguno de esos procesos o etapas; él no tenía la responsabilidad de verificar que lo mencionado en la resolución de pago, que se estaba pagando a un proveedor, se cumpliera y se pagara a ese proveedor.

En cuanto a si sabía que no debía cobrar los cheques de la DAS que le entregaba la señora Nubia o Cabello, por caja, señala que hay superposición de valores y situaciones personales de ambos, del momento, porque él inicialmente puede decir que no, y en algún momento ha dicho que lo guardó, que debió declararlo y no lo hizo, que fue cómplice de un acto de corrupción que puede delatar; pero el ir a cobrar un cheque al banco entregado por Cabello para ir a cobrarlo al banco, en el minuto le pareció bien, que sabía que estaba cometiendo un ilícito al ir a cobrar ese cheque, debido a todo lo que significó llegar a ese momento, porque no era dinero de don Alejandro ni de la señora Nubia, se dio cuenta de ello, porque era una cuenta de la cuenta corriente de la DAS, pero él no sabía que iban a hacer Alejandro y Nubia del dinero por él cobrado y que le entregó, se hablaba de deudas, no sabe qué iban a hacer con el dinero, si lo reintegraron a caja o lo ocuparon personalmente; en cuanto al uso de los dineros, en relación a Alejandro Cabello, recuerda algunas situaciones, a nivel de conversación de pasillo, pero no le constan que fueran, que describió algunas conversaciones, comentarios, de que haya participado o esté involucrado en un negocio de club nocturno cuyo nombre no recuerda; que habían conversaciones de pasillo, los funcionarios de la DAS, que comentaban lo ya dicho, la participación de don Alejandro en ese tipo de negocios, y esta información se la entrega a la fiscal, y le entregó una boleta de un minimarket, que está a un costado de un supermercado en Colón, que era relevante porque sabe que



Alejandro pagaba un arriendo de ese minimarket; que el promedio de cada cheque que se le entregaba era sobre tres millones, tres millones y medio o tres millones doscientos mil pesos; y ese monto era repartido en partes iguales entre tres.

En cuanto a la persecución por parte de Armando Domínguez, cuando asume alcalde Henry Campos, en enero de 2017, la persecución se traducía en una evaluación, en que él califica con nota deficiente, en circunstancias que ni siquiera se le conocía, no se sabía quién era, y le pide a otra persona que lo evalúe, una directora, quien pone la misma nota que él en circunstancias que ella lo había avaluado en el período anterior con nota excelente, y él reclamó en Contraloría y se acogió su reclamo; y habían otras personas más que sufrían la persecución, otra persona de recursos humanos, de apellido Navarrete, quien llevaba muchos años trabajando en la municipalidad, mucho antes que él, que ingresó cuando era alcalde Leocán Portus.

Ante preguntas del abogado defensor de los otros acusados, manifestó que en relación a doña Nubia San Martín, ella se incorpora a la municipalidad antes que él; que trabajó con ella cuando él era jefe del departamento de finanzas, y ella desarrollaba funciones variadas, porque habían períodos en que tenía que ver con el pago de remuneraciones y otro porcentaje importante era el pago de proveedores, ella era secretaria al incorporarse, pero después no hubo evolución porque no habían cargos específicos claramente definidos, pero hubo un esfuerzo de la dirección en capacitar a los funcionarios y se participó en varios cursos contables, en manejo de presupuestos; que él fue jefe de finanzas entre 2005 y 2010, y en ese período trabajó junto a Nubia San Martín, y al cambiarse de funciones a la unidad de proyectos, doña Nubia permanece en el departamento de finanzas; y durante todo ese período cultivaron una relación de amistad; que en relación a Alejandro Cabello, lo conoce en el trabajo, postuló para ingresar al departamento de finanzas y queda seleccionado, no recuerda año, pero fue entre el 2005 y 2010, y se mantuvo trabajando por un periodo breve, un par de meses, y se fue a otro trabajo, y regresa el año 2013 como jefe de finanzas; y en ese tiempo él ya no trabajaba en finanzas; y con el señor Cabello no genera relación de amistad, sino que básicamente laboral; con señor Ravanal no tenía ninguna relación, pero sabía quién eran, y no sabía en que trabajaba.

En cuanto a la situación de Alejandro Cabello, del año 2017 a 2018, le manifestó que estaba en una situación muy compleja, depresiva, e incluso situaciones que ya eran incontrolables, derivando en conductas que a él mismo le llamaban la atención, situación delicada en términos de salud; que él pudo percibir que habían momentos en que le preocupaba su salud, porque en las ocasiones que compartían de trabajo, cada 15 días, y después semanales, le preocupaba su salud, porque siempre estaba con fuertes dolores de cabeza, y



además en un tono de piel que no era normal, y le llamaba la atención y le decía que algún problema adicional tenía que tener; que en período de 2017 a 2019 debe haber tenido períodos de licencia médica, porque recuerda haberlo visto en momentos muy deteriorado físicamente.

Que él se involucra en estos hechos en octubre del año 2017, lo que sucedió a propósito de una conversación con el señor Cabello, porque a raíz de su situación angustiante y de la persecución laboral, el señor Cabello lo llama y le dice que lo puede ayudar y le explica en qué consiste la ayuda, en la entrega de cheques, y que una parte quedaba en su poder y la otra entregada a él y a la señora Nubia, conversación presencial que pudo haber sido en la calle, no lo recuerda; y en cuanto al primer cheque, se le entrega físicamente el documento y se le dice que hay que cobrarlo y entregar el dinero en efectivo, tiene dudas si ese primer cheque se lo entregó la señora Nubia o don Alejandro, pero si era la señora Nubia, él iba a la oficina y se lo entregaban, a veces se lo entregaban en la calle, a la salida de la oficina, y la primera vez parece que fue en la oficina de Alejandro Cabello; que su oficina estaba ubicada en Señoret como 31 o 51 y las oficinas de la DAS donde trabajaba Nubia y Alejandro, estaban a 100 metros, en calle Gabriel Toro, donde habían tres pisos; que en el edificio de la DAS, el departamento de finanzas en que estaba Nubia era el tercer piso, y la oficina de Alejandro en el tercer piso; y la entrega del primer piso debe haber sido en la oficina de don Alejandro; que va a cobrar el cheque siempre en la misma sucursal, la oficina del Banco Estado de Talcahuano, en la calle Colón, el cheque lo cobraba en dinero efectivo, y luego este dinero lo entregaba a Alejandro y a Nubia, él se quedaba con una parte de ese dinero, un tercio, y el resto se lo entregaba un tercio a Cabello y un tercio a Nubia, y esa entrega materialmente se la entrega en su oficina a Alejandro Cabello y a la señora Nubia le decía donde, en la oficina o pasillos.

Que respecto de Nubia San Martín se enteró que ella también cobraba cheques a su nombre a través del informe de Contraloría de agosto de 2019; pero a esa fecha ya había cobrado todos los cheques por los cuales se le acusa; que siempre supuso que él era el único que cobraba; que el trato era con el señor Cabello y la señora Nubia, los tres estaban involucrados en la repartición, lo que supo a través del informe de Contraloría, y que Ravanal también cobraba.

Visitaba edificio donde trabajaba Cabello y San Martín, sabía que legajos de compra se guardaban en las oficinas de la DAS, en la oficina de finanzas habían muchos archivadores, por lo que eran probable que estuvieran ahí; que habían deficientes sistemas de control, que al parecer eran auditorías semestrales o anuales, y básicamente apuntaban a si determinados programas estaban siendo bien desarrollados, lo que obviamente era un control sesgado de lo que podía estar ocurriendo al interior del departamento, lo que probablemente posibilitó que se dieran los hechos que se investigan; que del



presupuesto de la DAS sobre el 80% va a remuneraciones; que en relación a los proveedores, respecto de quienes se generaron los pagos, desconoce si fueron pagados o no.

Finalmente, indicó que solo reconoce un tercio de los cheques cobrados a su nombre, respecto de los otros cheques de la acusación no reconoce participación.

SÉPTIMO: Que, renunciando a su derecho a guardar silencio, el acusado **Alejandro Cabello Bustos** prestó declaración en la oportunidad referida en el inciso tercero del artículo 326 del Código Procesal Penal, señalando que tiene 47 años y es contador auditor, tiene 4 hijos, la mayor es profesora, uno odontólogo y una hija de 17 años en cuarto medio y la menor en quinto básico; para contextualizar la primera vez que trabajó en la DAS fue del 2006 al 2009, entró a hacer un remplazo en finanzas, a mediados del 2006, se fue alargando el reemplazo hasta que se le ofreció contrato a plazo fijo, ahí pasó el año 2007, 2008 y hasta principios 2009, en este periodo trabajó en el departamento finanzas. Su función era hacer pago proveedores, rendir cuentas al servicio salud, principalmente; que en este periodo evidenció y le hizo saber al director de entonces falencias que habían en el sistema, que lo escucharon, pero no se hizo nada por subsanarlas; que, en ese periodo postuló a otro trabajo, y el año 2009 se fue en el mes de mayo a otra ciudad, la ciudad de Santa Cruz, donde estuvo trabajando hasta el 15 de enero de 2013, renunció por motivos que hija mayor estaba en cuarto medio y quería entrar a la Universidad de Concepción, por lo que venía desde el año anterior haciendo gestiones de traslado que no tuvieron efecto, y se enteró que necesitaban una persona en la DAS, esto en enero de año 2013 y se va a entrevistar con el director de entonces, Hernán Gormaz que le ofrece puesto de jefe de finanzas que estaba vacante, y renuncia a su trabajo, y se integra el 18 de enero de 2013 a DAS de Talcahuano en cargo jefe finanzas.

En cuanto al contexto de las cosas, refiere el desorden contable que existía y venía de muchos años anteriores al 2006 incluso, lo hizo saber muchas veces, el sistema contable por lo menos en todo el periodo en que él estuvo trabajando las dos veces jamás reflejó al contabilidad, la realidad económica y contable de la dirección de salud, y cuando él llega se encuentra con problema muy grande que había, ya que no se le iban a hacer devolución de rentas a los funcionarios municipales incluidos educación, salud y municipalidad por los problemas contables a asociados a la Dirección de Salud, lo que logró llevar a buen término con un trabajo bien grande, con apoyo de muchas personas, lograron que no ocurriera la catástrofe de no devolución de renta; esto lo dice para evidenciar el nivel de malos registros y mala contabilización que venía de años pretéritos.

Siguiendo con esto, en el mismo proceso de las funciones que él empezó a ejercer en su cargo, quiere decir que las funciones nunca fueron definidas, sino



que se hacían las cosas día a día, lo principal era pagar proveedores, los fondos nunca se generaron desde la dirección de finanzas como dice el nombre del departamento, por eso él siempre cuestionó el nombre y dijo que eran un departamento de contabilidad no de finanzas, pues un departamento de finanzas tiene que realizar la gestión financiera, cosa que ellos no hacían. En este sentido, también revisando el tema contable se dio cuenta de las falencias en los controles, por ejemplo, uno de los controles más básicos que existen en cualquier sistema contable, más allá del sistema modular computacional que tenían como herramienta informática, sino como decisión municipal del área de la dirección de control, uno de los controles más básicos es que cuando se gira un cheque, el cheque aparte de ingresarlo a la contabilidad y que tiene que emitirse un documento contable, el cheque por ningún motivo se puede ir y cobrar inmediatamente al banco independientemente que tenga las dos firmas y todo, en cualquier parte, con los más mínimos sistemas de control al emitir un cheque, este cheque debe ser informado al banco por lo menos con un día hábil de anticipación por el organismo de control de la institución, en este caso el organismo de control es la dirección de control, como lo hace cualquier otro organismo; que ese tema lo hizo notar primero en administración de Hernán Gormaz que el alcalde era Gastón Saavedra, luego en la administración de Henry Campos, con el director Armando Domínguez, explicó muchas veces las falencias que tenían, pero no hicieron caso a lo que había él había visto; otro problema pasaba con el tema de las auditorías, si bien se hacían regularmente tanto del servicio salud, Municipalidad de Talcahuano y área de control, obedecían más que nada a un trámite administrativo y cumplir un requisito, pero no se realizaban como cualquier auditoría básica que significaría haber revisado, por ejemplo, en un mes una de las cuentas y revisar todos los registros, no habla de un año, basta un mes, revisar que se giró a nombre de quien y ver si corresponde con lo que está en el área contable. Se hicieron auditorías en ese periodo, pero ninguna revisó eso, y esto desde años anteriores, siempre se hizo así, esa era otra falencia que había, que también él detectó e informó y también con nula respuesta de los directores.

En cuanto a los hechos, él fue la primera persona que cobró un cheque, y lo hizo solo, sin conocimiento de nadie, estaba en una situación personal complicada y económicamente también, tenía unos cobros que estaban hace mucho tiempo en Dicom, y tenía problemas que lo iban a embargar y en un momento de desesperación, no lo pensó mucho, y viendo todas estas falencias, giró un cheque a su nombre; explicando como se hacía, señala que se buscaba una orden de compra de un proveedor a quien ya se le hubiese pagado la orden, que fuera antigua, y volvía a ingresar la orden al sistema informático contable, la ingresaba como una deuda nueva, como una nueva obligación contable y se hacía todo el proceso de pago normal, o sea se generaba la orden, se devengaba contablemente y se generaba la orden de pago, todo a nombre del proveedor,



que ya se había pagado, en el fondo era un segundo pago, la diferencia es que al momento de emitir el cheque manual, lo hizo a su nombre y no de la empresa, y cobró el documento, y en ese momento, sabía que eso estaba mal, cobró el documento por la necesidad económica que tenía en ese momento. Después de un tiempo, fue la señora Nubia quien descubrió esta situación irregular, se lo hizo ver, de hecho ella fue a su oficina y lo encara, le dice encontré un documento que en la contabilidad está a nombre de un proveedor, pero no están cobrados por el proveedor sino que están cobrados por él, y en ese momento él ya tenía una carga emocional por la misma situación, y necesitaba que reventara, le reconoció que había sido así, y le dijo que entendía que ella lo tenía que denunciar, que no lo volvería a hacer y señora Nubia le dijo que no lo iba a denunciar, sino que ella también iba a cobrar documentos porque también tenía problemas económicos. En el momento no hablaron más del tema, él también se sorprendió con la respuesta y al cabo de un par de semanas, gestionaron un nuevo cobro, que no recuerda a nombre de quien fue, cree que fue a nombre de la señora Nubia, quien empezó a cobrar documentos; y al cabo de un par de semanas aparece Pedro Paredes, que llega a su oficina y le dice que había hablado con la señora Nubia, quien le había dicho que estaban cobrando documentos irregularmente, y que estaba al tanto y que él también empezaría a cobrar porque estaba en situación económica complicada y veía en esto una solución para eso.

Así en adelante siguieron cobros siempre de la misma forma, y empezaron a girar documentos en la medida que había disponibilidad de fondos y siempre motivados por una necesidad económica de cualquiera de los 3 que siempre estaban con problemas económicos; que la repartición siempre fue en tres partes iguales, y la participación de Pedro Ravanal fue una situación de la que se enteró a fines de 2018, ahí se enteró que también cobraba cheques, a raíz de una conversación con la señora Nubia, quien otra vez motivado por problemas económicos le pide dinero a ella en forma personal, ella le prestó dinero y le habla que Pedro le va a transferir fondos, y ahí pensó que era Pedro Paredes, y ella le dice que no, que Pedro Ravanal también está cobrando, él se sorprendió en el momento y le comentó a ella que él no le había comentado a nadie, que nadie sabe y ella le indicó que ya le dijo y que llevaba cobrando hace bastante tiempo, del detalle de eso se enteró con mucha posterioridad cuando los llevaron a Contraloría, ahí se dio cuenta de cuanto era la magnitud y el tiempo de todo esto.

En cuanto a qué hizo con los fondos, señala que como refirió anteriormente él aparte de los problemas económicos que tenía, también se encontraba en un proceso de separación, lo que había derivado en un consumo excesivo de alcohol, y llegó a transformarse en un alcohólico, bebía 5 días a la semana en forma excesiva, y empezó a presentar problemas de salud, lo que sumado al estrés de esta situación que él sabía que estaba mal lo que estaba



haciendo, estaba mal psicológicamente y buscó como una forma de evasión el alcohol, se hizo adicto al casino, iba regularmente al casino y gastaba sumas altas para él, cada vez que iba gastaba 500 a 600 mil pesos en juego y alcohol. También salía mucho a bares, restaurantes y clubes nocturnos, y en cuanto a bienes compró un vehículo, pagó una parte de un vehículo, después lo llevó a la misma automotora lo dio en parte de pago y compró otro de mayor precio, después hizo lo mismo y al final compró una camioneta Mitsubishi; que en este período, año 2018, conoció a una mujer con la que tuvo una relación y se fue a vivir con ella, se generaron varios gastos con ella, porque se fueron a vivir y arrendaron casa por 6 meses, comprar cosas para la casa, hicieron un viaje a la sexta región un fin de semana, le compró un auto a ella y pagó una parte y el resto pagó las cuotas también; en ese periodo ella quería abrir un minimarket que es el que se comentaba anteriormente y él puso el dinero para el arriendo de 6 meses y para la compra inicial de mercaderías, y a fines de 2017 en un momento un amigo que tenía cuando era muy joven le ofrece como un negocio un club nocturno en Talcahuano, que estaba cerrado, le dice que era un buen negocio, que aprovechara la oportunidad, y pensó que podía ser la forma de terminar con todo esto y no seguir, se metió en el negocio, el amigo le presentó a la dueña del local, le dijo cuanto era el arriendo, aproximadamente cuánto iba a necesitar para empezar y pidió préstamo en la Caja los Andes, por 3 millones y medio, pensando que con esto lo podía hacer funcionar y después se iba a sustentar para seguir trabajando, pero esto no resultó bien, tanto porque él no sabía del tema y no tenía tiempo para estar en el lugar y después se dio cuenta que tampoco quería estar ahí, ya estaba metido en tantos problemas, se sentía tan mal emocionalmente y sabía que no era un ambiente en el que quería seguir; al final el negocio no resultó, con el préstamo alcanzó a pagar gastos de dos meses, pero el contrato era por un año, por lo que siguió pagando todo lo que costaba mantener el local por el resto del año hasta que terminó el contrato.

Señala que también prestó dinero, entre comillas prestar, dio dinero a compañero de trabajo para gastos de una hija, para unos exámenes, dinero que en general lo perdió en cosas sin ningún valor, aparte de lo que habló de los vehículos y cuentas que fue pagando, tenía cuentas atrasadas en Caja los Andes, Copeuch, y así se le diluyó el dinero, jamás juntó mucho dinero a parte de la vez que compró el vehículo, e incluso se vio en la necesidad de pedir plata a la señora Nubia y a familiares, estando cobrando estos documentos.

Los hechos siempre se dieron de la misma forma, siempre se repartían en partes iguales, motivados por el problema económico, y cuando llegó el tema de la Contraloría a la Dirección de Salud, era evidente que los iban a pillar, y ahí él prácticamente ni siquiera iba a trabajar, de hecho lo tenían que llamar para que apareciera en el trabajo, presentaba licencias, permisos, vacaciones, prácticamente no dormía por el nivel de estrés que tenía en ese tiempo y cuando esto sale a la luz y terminaron reconociendo, en el proceso final cuando ya los



formalizan y todo, significó ver la realidad de lo que se había metido, nunca dimensionó el total de la malversación y tampoco se daba cuenta de que podía llegar a la situación en que se encuentra hoy, se refiere a privado del libertad, nunca lo analizó ni tuvo consciencia o no se puso a pensar en eso; que el hecho de ser formalizado y estar en prisión preventiva lo ha hecho reflexionar en esto y su vida; obviamente está arrepentido lo que ha hecho y le da vergüenza, pero hay que enfrentar la verdad. Esto obviamente ha generado muchos daños principalmente en el ámbito familiar, porque son ellos los que han sufrido la falta, principalmente su hija, y su familia que lo ha apoyado en esto en todo sentido, en el ámbito económico, puesto que desde que esto terminó y fueron desvinculados el 2019 quedaron sin trabajo, y él jamás guardó dinero, y después de eso se dedicó a trabajar como Uber y conductor de distintas aplicaciones y con eso ayudaba a su familia. Después cuando fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva no pudo generar más ingresos, y fue gracias a su hermanas se pudo seguir adelante; reitera su arrepentimiento, pide una oportunidad de reinserirse y poder hacer las cosas bien y retribuir por el daño que ha hecho de alguna forma.

Que él pudo percibir cuales eran las falencias al interior del departamento de finanzas, anteriormente señaló dos de muchas más que permiten o permitían que se pudiera llegar a esta situación, no sabe si al día de hoy han sido subsanadas, pero lo informó y no fueron subsanadas, lo hizo tanto a la primera como a la segunda administración en la que trabajó, ni cuando él era jefe de finanzas, porque no estaban dentro de sus atribuciones y dicho sea de paso tampoco tenían atribuciones claras, simplemente trabajaban por costumbre. Él las informa y no se subsanan, refirió la problemática y falta de control básico en el cobro de cheques, que se refería a la comunicación entre la municipalidad y el banco, la cual no existía, no existía ningún control entre quien emite el cheque y un control después hacia el banco, como existe en cualquier parte, nadie que emite un cheque va directamente a cobrarlo al banco siempre hay un tercer que controla y siempre es la unidad de control o la unidad administrativa superior y en este caso no existía. Agrega que él sugirió que dentro de la Das hubiere una unidad que hiciera control tanto del proceso pago de cheques como de los procesos compras, irregularidades que también las denunció en su momento al Director.

Él era el jefe de finanzas del 2017 al 2019, debía elaborar el presupuesto y controlar su ejecución, es decir, ir informando a la Dirección de Administración y Finanzas Municipales y a la Dirección de Control Municipal cuál era el avance en números. Señala que presupuesto es muy distinto a finanzas, el departamento jamás debió llamarse Departamento de Finanzas pues ellos no hacen gestión financiera, sino de contabilidad. Al ingresar como jefe de finanzas existía un déficit presupuestario en la DAS de Talcahuano, tanto en la primera que ingresó como en la segunda vez que ingresó; que cuando ingresó como jefe de finanzas



había un déficit en el sistema contable, que distaba mucho de la realidad, ya por un lado los errores contables que venían de muchos años, habían errores de miles de millones de pesos en esos informes, además de una mala práctica que era generalizada y que obedecía a un tema político, que eran no ingresar la deuda total del año, siempre cuando llegaba normalmente el último trimestre del año venía una orden desde la dirección de no ingresar más facturas independiente que siguieran llegando facturas, las acumulaba el departamento correspondiente, o sea abastecimiento; que la municipalidad además cada cierto tiempo, dentro del mismo presupuesto, la municipalidad se compromete a ingresar al año 2018 una cantidad de fondos, y en el fondo uno ya trabaja con ese presupuesto y después en el próximo año tiene que ir entregándola durante el año, eso es parte del presupuesto. Explica que el presupuesto considera los ingresos municipales, la dirección de salud se compone de un presupuesto total donde se consideran todos los ingresos para el año siguiente y también la estimación de gastos para el año siguiente y el año siguiente cuando ya se empieza a ejecutar se empieza a comparar cómo van los ingresos presupuestados con lo real, no es que hayan ingresos adicionales, normalmente se cumple con lo que prometió la municipalidad a entregar; que los abonos en las cuentas corrientes respectivas dependientes de la DAS de Talcahuano, los abonos llegaban mensualmente, cerca de los últimos días del mes eso era como lo más normal, porque habían excepcionalmente abonos fuera de estos periodos, como otros ingresos que correspondían a otras cosas. Explica que la dirección de salud, los consultorios trabajan con una norma donde están vinculados cuáles son sus prestaciones y eso es lo que está llamado a hacer siempre la Dirección de Salud al generar el cumplimiento de esto, cosas adicionales por nombrar algo particular para ejemplificar es un convenio aparte que llegó con Senda para el tema de control de alcohol y droga y conductores, esa era una situación excepcional, era un convenio aparte que tenía fondos aparte y se ejecutaba también aparte. En el caso de Senda se enviaban fondos especiales por convenios que se hacían durante el mismo año del cual no había conocimiento y como no estaba anteriormente en el Departamento de Finanzas, menos tenían conocimiento porque ellos no gestionaban recursos a ellos les avisaban, ya sea de la Dirección o desde la Municipalidad que se firmó un convenio, ellos se enteraban mucho después de eso, no es que ellos fueran a decir necesitamos tanto dinero, venían los convenios hechos, los firmaban principalmente en la municipalidad y a través de ellos después ellos se enteraban de la firma del convenio lo que implicaba la inyección de recursos para cosas específicas, esto sale de lo normal, no es obligación de los consultorios hacer estas acciones sino que eran acciones más bien ligadas al área política para generar acciones que de alguna forma se cruzaban con el área de la salud. Refiere que desde la Dirección o de la Municipalidad le avisaban que iban a llegar estos recursos a él normalmente para decirle que había un nuevo convenio que implicaba determinada cantidad de fondos, y que había que pagar a ciertas personas o



comprar ciertos servicios. Cuando usa la expresión nos avisaban, se refiere que les avisaban al departamento, porque si él no estaba le avisaban a cualquier funcionario del departamento. Les avisaban, se refiere al sentido que como normalmente un convenio implica contratación de gente y ellos como Departamento de Finanzas no tienen nada que ver con la contratación y pago de sueldos y honorarios, eso lo veía otro departamento, por lo tanto, generalmente se avisaba a abastecimiento, a finanzas y a recursos humanos. En la Dirección de Salud no está a cargo de otros departamentos, aquí existen departamentos en paralelo, estaba abastecimiento, recursos humanos, finanzas, mantención, todo en jerarquías paralelas, ninguno tenía jerarquía sobre otro, por lo tanto, cuando los llamaban para esto, insiste con el los, porque por ejemplo la mayoría de los convenios tenían recursos humanos, por ejemplo en el caso de Senda se contrataba un médico y se le entregaba la información de cuánto era el monto que venía y eso tenían que entregárselo a recursos humanos, no es que le entregaran a él solamente la información, insiste con eso, él reconoce el ilícito que hizo, no está negando eso, solamente está hablando de la especificaciones del departamento que ellos registraban contablemente, pero las decisiones eran de muchos departamentos distintos a la vez.

Para girar un cheque de titularidad del DAS se requieren dos firmas y al 2017 la DAS manejaba 10 cuentas corrientes; en cuanto a la materialidad del cheque, bajo el número de la cuenta, aparece como titular de las cuentas la Municipalidad de Talcahuano, no aparece en el documento que es la DAS, aunque puede que haya alguna cuenta, de hecho recuerda una que tiene otro nombre, pero son todas de la Municipalidad de Talcahuano; que él no es una de las firmas autorizadas para firmar los cheques, entre 2017 en adelante eran firmas autorizadas la señora Nubia San Martín y Manuel Rojas; cuando se va a cobrar un cheque de titularidad de Talcahuano, el banco generalmente paga sin mucho control al respecto, y a veces hacen revisión de firma en muy contadas ocasiones, y de hecho en uno de los cheques de la investigación se le llama del banco y le preguntan por la firma conforme, no está muy seguro qué le preguntan del banco, y él dice que está bien; pero no es una forma de control ese llamado, porque se generan miles de cheques al año en la DAS, y ese año recuerda que recibió una sola consulta de firma del banco. Se le consulta cuál era el número que registraba el banco para hacer la consulta, ello en el evento que llamaran, y responde que desconoce cuál era el número que registraban, es más el número al que lo llamaron ese día era el número de su celular, porque él mismo se lo había entregado a la ejecutiva de cuenta del banco por cualquier motivo, porque normalmente el problema que podían tener si necesitaban un pago urgente o hacer una transferencia que se hiciera efectiva dentro del mismo día, le pedían a la ejecutiva que les avisara si no se lograba a hacer, se refiere al funcionamiento normal de la DAS y no específicamente a esta situación. Señala que no recuerda cuando le dio el número a la ejecutiva para la revisión de firma;



Insiste que no era un mecanismo de control, sino se hubiera efectuado cada vez. Se le consulta si en esa oportunidad que no recuerda dio solo su celular o el teléfono de algún otro funcionario del DAS y responde que debe haber dado solamente el suyo, y porque además en el banco contaban con todos los números de teléfonos disponibles de la Dirección de Salud, información que se le entregó desde la municipalidad, y además esa información es pública. No sabe quién de la Municipalidad era encargado de dar esa información, pero está un 99% seguro que es así, que el banco maneja los números fijos de todos los funcionarios municipales y es información pública.

Para cobrar un cheque no era necesario llevar el decreto de pago respaldante, el banco solo pedía el cheque, pero para emitir el cheque siempre se necesitaba hacer la orden de pago, se requiere emitir un decreto de pago, esa era la forma contable de emitir el cheque; y el decreto de pago de la DAS tiene el timbre de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Talcahuano, el Director de Salud Municipal de Talcahuano en un lado y en el otro lado el timbre del jefe de Finanzas de la Dirección de Salud de Talcahuano. Indica que arriba va el logo de la municipalidad, y a mano derecha el número de decreto de pago, luego se individualiza el nombre de proveedor, el Rut y va una glosa donde se puede describir el detalle de la transacción, y después viene otra parte del documento donde aparecen los movimientos contables, eso antes de la parte inferior, porque en la parte inferior van los timbres que nombró del director y el jefe de finanzas de la DAS, que son los que firman el decreto de pago, no hay un orden en el papel, pero la lógica era que firmara primero el jefe de finanzas y luego el director, en la práctica a veces se firmaba el director antes o a veces el jefe de finanzas firmaba antes, y en la parte de abajo del decreto de pago se indica el número de documento que es el cheque, el número de cuenta corriente, el número de movimiento contable; en algunos casos parece quien retira el cheque, cuando se retiraba, firmaba o ponía el nombre la persona que retiraba; porque si alguien de la empresa proveedora va y retira el cheque se consigna de esa forma, muchos representantes de laboratorio llegaban en forma presencial y revisaban los cheques, sus listados de facturas y firmaban las órdenes de pago; y la otra opción era que el cheque se depositara en la cuenta de la empresa proveedora, que era la forma más común, por lo que cuando se gira un cheque se individualiza en el cheque la empresa proveedora a la que se le está pagando, el cheque tiene que llevar el nombre del girado, necesariamente, pero en la práctica, en la DAS de Talcahuano, históricamente, cuando él ingreso el 2006 y desde antes ya existía la práctica de mantener cheques firmados, pero en blanco, esta situación también es parte de lo que benefició poder llevar a cabo el ilícito, porque habían cheque en blanco con dos firmas que se podía asociar a un nombre distinto. Lo que se hacía era llenar la orden de compra como un segundo pago a un proveedor, se hacía todo a nombre de un proveedor, pero aprovechando que el cheque estaba con las firmas al momento de hacerlo se



llenaba nombre del cheque con el nombre de alguno de ellos, y esa práctica de cheques firmados en blanco venía de antes del 2006, le pareció que no era bueno lo que hizo notar y después el 2013 también lo volvió a hacer notar; pero la situación de los cheques en blanco siempre se mantuvo y no es una definición del Departamento de Finanzas sino que más que nada de la Dirección supone. Cuando él llegó, en un momento, pidió que no siguieran dejando cheques con firmas en blanco, pero en alguna cosa tenían que hacer pagos se encontraba que seguían los cheques con dos firmas, la respuesta era que siempre se había hecho así y era una necesidad porque no solamente finanzas pagaba, la mayor cantidad de pagos se refiere a recursos humanos y ahí se generaban muchos cheques y necesitaban mantener cheques en blanco por la eventualidad que alguien no estuviera. Esto se venía dando de tiempos que él no conoce, es mucho anterior a él, más allá que él lo hizo notar como un tema que él no estaba de acuerdo en su momento, no se tomaron medidas por parte de la Dirección, la Dirección sabía de esto y eso también fue uno de los puntos que hace que se produzca toda esta situación de cobros de cheques por parte de ellos.

Al ver un legajo, la portada del legajo sería el decreto u orden de pago, y ese legajo está compuesto por una serie de documentos que respaldan dicho decreto u orden de pago, debiera estar generalmente la orden de compra, pero hay distintas situaciones de compra, puede ser un decreto alcaldicio, puede ser un pago de un servicio básico que no genera orden de compra, y obviamente el pago de las remuneraciones que si bien lo hacía recurso humanos, lo hacían simplemente a través de procesos informáticos. En el caso de pago de servicios se tiene que incluir la boleta o factura del servicio, y pago de remuneraciones. Agrega que en algunos casos también se debe incluir el certificado de disponibilidad presupuestaria, que firma el jefe de finanzas generalmente, o sea él, y también lo hace el director, y en el evento de incluir cotizaciones, también se debe adjuntar al legajo, dependiendo del tipo de compra. Señala que mejo va explicar un poco el tema de las compras y los legajos, las compras, dejando afuera las remuneraciones, hay varios tipos de procesos de compras. Las compras que se está llamado a hacer por la naturaleza del servicio público siempre es a través de convenio marco, con excepción de las municipalidades que pueden acceder a otros sistemas que son las licitaciones, y en situaciones más especiales a trato directo, y también dependiendo del monto de la compra se pueden hacer compras menores a 10 UTM solamente con el concurso de 3 cotizaciones, y según tipo de compras se va a necesitar uno u otro documento respaldo, y la última etapa es la emisión del cheque para realizar el pago, y luego de la emisión del cheque, no necesariamente se firma el decreto de pago, a veces es antes y otras después, lo que obedece a que no existe un manual ni una guía de cómo hacer las cosas. No hay y nunca ha habido definición de funciones, definición de perfiles, la única vez que se entregó un definición de perfil que el recuerda, fue una vez que la solicitó Contraloría y como no tenían la



Dirección ordenó de manera desesperada que ellos mismos hicieran un listado de lo que hacían y lo firmaran de inmediato, eso es a lo que se le llamó definición de funciones y que sirvió solamente para entregarlo para cumplir con Contraloría y eso se entregó y se perdió, ni siquiera se revisó lo que cada persona puso como sus funciones, Entonces, el desorden sobre qué se hacía primero y qué después era dependiendo de cada uno de los funcionarios de la DAS, cada uno hacia las cosas como veía que se podían hacer.

Fue el primero en cobrar un cheque y lo hizo sin ayuda de nadie, porque las condiciones estaban dadas, explicó la situación en la que se encontraba, los motivos que tuvo para hacerlo, pero las condiciones que se dieron y por qué pudo hacerlo, fueron las falencias, la falta de control, cheques firmados en blanco, y no necesitaba a nadie para a hacerlo, porque contaba con acceso a documentos y acceso a órdenes de compra que se guardaban a vista y paciencia de cualquier funcionario, y tomó la orden de compra anteriormente pagada y generó un doble pago en el sistema contable y ocupó un cheque que tenía las dos firmas y que estaba en blanco, e hizo todo el procedimiento contable como si fuera un pago al proveedor, pero el cheque lo hizo a nombre suyo y no le dijo a nadie. Usó un cheque que estaba con las dos firmas que se encontraba en blanco.

Que los 129 cheques del juicio no se refieren a obligaciones pagadas previamente por el DAS, porque lo indicado fue al principio. Al principio cuando él cobró y en el primer tiempo que estuvieron cobrando con señora Nubia y Pedro Paredes, entiende que ahí se pagaban órdenes que ya estaban pagadas, pero con el tiempo, en el estado en que él estaba, no revisaba qué se pagaba o qué no se pagaba, pues estaba pasando una situación muy mala, una situación de estrés, el tema del alcoholismo grave, y no revisaba el detalle de las cuentas. En ese tiempo en el trabajo se dedicaba a cumplir con lo mínimo, que eran los informes, y las conciliaciones bancarias, si bien se hacían él no revisaba el detalle de cada uno de los cheques, simplemente tomaba informe que daba el banco, que le mostraba fecha, el monto y forma de cobro, o sea, depósito, transferencia, o pagado por caja, y con eso hacia conciliaciones bancarias, no es que él hubiese estado haciendo una auditoria constante, porque no era su función tampoco. En cualquier auditoría que se hubiese hecho, muy básica, se refiere a una auditoría de una conciliación bancaria habrían tenido que tomar un mes de una cuenta y haber revisado los cheque uno por uno como siempre se hace en el proceso de auditoría y ahí se hubieran dado cuenta de inmediato que había cheques que no correspondían a los girados en el sistema contable, eso fue lo que habló en una declaración anterior, no había comunicación entre el sistema contable del banco. Lo que sabe es que inicialmente se hacían pagos a órdenes de compra que habían sido pagadas anteriormente y después él no tuvo el control sobre eso, pero evidentemente cuando llegó Contraloría y solicitan la circularización de deuda con proveedores, ahí se dio cuenta que había órdenes



de compra que se habían generado cheques para ellos, que había cobrado alguno de ellos y que no habían sido pagadas anteriormente.

Declaró en junio de 2019 como testigo, después como imputado el 26 agosto de 2019, y estando formalizado y en prisión preventiva el 29 de julio de 2021; que no recuerda exactamente cuando llega Contraloría a fiscalizar el DAS, pero cree que fue en enero de 2019, y él tiene que haber sido suspendido en mayo de 2019 de sus funciones, no recuerda el cargo o motivo por el cual fue suspendido, porque él estaba con un nivel de estrés tan grande que tenía cómo una negación de la realidad de lo que estaba pasando, cree que ni siquiera leyó en ese momento los cargos, solo que estaba suspendido y se fue de la DAS; que en esa primera etapa, no sabe que se sabía o que no, porque no tenía acceso a la información, él se enteró que fiscalía sabía que él había girado cheques, en su primera declaración como imputado en fiscalía, no recuerda si en Contraloría le dijeron algo o no del tema de los cheques.

En cuanto a su declaración como testigo, en dicha oportunidad se le consultó por la fiscal si sabía del cobro de cheques por funcionarios del DAS, y recuerda que negó saberlo, y no señaló que él no hubiera cobrado cheques. En esa declaración como testigo él no aportó ningún dato sobre el cobro de cheques de ninguno de los involucrados.

Declaró como imputado en agosto de 2019, señalando que estaba quizás asustado y que por eso no dio la información, estaba con un nivel de stress tremendo y no sabía muy bien la implicancia de todo esto, y quería evadir la realidad de lo que estaba pasando. En dicha oportunidad señaló que don Pedro siempre le decía que tenía problemas económicos, y siempre le decía que se podían hacer cosas para ayudarlo, la primera vez que le dijo eso, pensó que se refería a si le podía prestar dinero personal, y le dijo que no podía; pero la conversación quedó en eso.

A efectos de evidenciar una contradicción, y en uso de la herramienta procesal respectiva, procede a dar lectura a su declaración del 19 de agosto de 2019, en la que ante la consulta sobre la situación o contexto en que se produce el cobro de cheques, se consigna que respondió que la situación partió con don Pedro Paredes funcionario de la DAS, que él le propuso cobrar cheques ya que él sabía que habían formas de cobrarlos, le dijo que buscaría órdenes de compra, le estaban avisando lo que iban a hacer, él tenía que firmar las órdenes y se llevaría un porcentaje, este dependía de la situación, ya que algunas veces don Pedro le decía que necesitaba un cheque para el solo y en otras le daba una parte a él y otra a la señora Nubia, su parte generalmente era de un tercio o de un 25%. Admitiendo que eso es lo que dijo en esa oportunidad, y que hoy señala otra cosa, hoy vuelve a reiterar lo mismo que declaró en julio del año 2021 y respecto a la declaración de la que le están preguntado del 2019 como imputado, ya había cambiado la declaración, cosa que dijo en julio del año 2021



donde contó la verdad y dijo que él había empezado esto, cosa que reitera hoy. Además, en esa declaración como imputado el 2021 él se encontraba en una situación emocional muy compleja, además en su momento él también pidió el derecho a guardar silencio porque no sabía las repercusiones de todo esto y cuando lo hizo, si bien inicialmente le dijeron que ya perfecto llegan hasta acá, tanto la fiscal como el detective Valenzuela le insistieron que si no declaraba iba a ser peor para él, entonces se asustó mucho más y no sabía qué decir y lamentablemente no es la verdad lo que dijo en algunas partes de esa declaración, pero también admitió otras. Le dijeron que si no declaraba en ese momento podía ser peor para él, en el momento lo tomó como que lo estaban ayudando, en el desconcierto que sentía en ese momento declaró y declaró cosas que no eran verdad.

En relación al uso del dinero, refiere la compra de vehículo, que luego lo utiliza para la compra de otro vehículo y finalmente se traduce en la compra de una camioneta. También habló de cuentas que tenía en Coopeuch y tenía una deuda que le estaban a punto de embargar por eso de la Caja de Los Andes, la compra del vehículo y lo que señaló anteriormente y que en parte el dinero lo ocupó para el minimarket a nombre de la persona llamada Maritza Vargas con la que vivió. Además, a propósito del club nocturno “Yolas” pidió un préstamo de tres millones y medio en la Caja Los Andes, le hicieron arreglos, cosas menores al local, unas goteras que había, botar cosas que estaban podridas, los baños que estaban en mal estado; del dinero que obtuvo del cobro de los cheques, en el local se fueron como 20 millones, considerando que tuvo que pagar un arriendo de \$700.000 más otros gastos durante 10 meses, y en la declaración de agosto de 2019 no recuerda cuánto indicó que había gastado, pero como dijo hoy pidió un préstamo de 3 millones y medio, lo usó para pagar mes de garantía, mes de arriendo y compras para el local, estima que fueron como 20 millones, no llevaba un control, pero estima que pudo haber sido algo así.

Para efectos de evidenciar contradicción, se le exhibió la misma declaración de agosto de 2019 previamente exhibida; en la que consta que ante la pregunta acerca de los cuarenta millones que señaló anteriormente, cuánto millones se le fue en este negocio, responde que en ese negocio se fue toda la plata, cree que como un 75% de los 40 millones, en pagar arriendo, gastos básicos, y que el contrato lo terminaron en agosto de 2018.

Luego indica que en esa oportunidad, fue la primera declaración como imputado, y que entregó el teléfono, patrón del teléfono y correos electrónicos. En ese momento entrega la clave de su correo electrónico personal y no se acordaba de la clave de su correo electrónico institucional, que era un gmail que se ocupaba en el trabajo y por ello tuvo que hacer recuperación de la clave a través del mismo gmail, lo que le llegó dos o tres días después y se lo envió por correo electrónico a Alex Valenzuela, ello con el ánimo de colaborar, pero no



cambia la clave 30 días después; no recuerda haberla cambiado posteriormente, y es más, cuando se comunicó por correo electrónico con Alex Valenzuela, se puso a disposición para cualquier cosa, por lo que le llama la atención que se hable que cambió claves, y si no recuerda y alguna vez cambió la clave que no se le haya consultado por la nueva clave si hubo un periodo extenso de investigación y él estaba disponible, tenían su dirección que él mismo aportó y donde siempre lo notificaron correctamente, tenía el mismo correo electrónico donde lo notificaron para toma de muestra caligráfica donde también fue voluntariamente y donde también en ese tiempo el otro teléfono ya no lo tenía y tenía un número nuevo el cual se lo entregó y le dio los datos a la persona de la Brigada de Delitos Económicos para que se lo informara a don Alex Valenzuela, entonces no puede decir tajantemente que quizás no cambió la clave, porque tal vez en algún momento lo hizo, pero no lo recuerda, pero si lo hubiese hecho estaba en que se lo pidieran nuevamente y él hubiese accedido. Además él ese día que prestó declaración hace entrega de su teléfono con la clave para poder acceder a su teléfono.

En cuanto a los decretos de pago, dijo que requerían dos firmas, la suya y la del director, así se hacía; que en relación a los decretos de pago relacionados con los hechos y en relación a cómo se obtenía la firma del director, en esa declaración no recuerda lo que dijo al respecto, pero en la teoría se supone que tenía que ir primero la firma del jefe de finanzas y luego pasar a la firma del director, pero en la práctica era indistinta, firmaba uno u otro primero. Se le pregunta respecto de estos decretos duplicados y la obtención de la firma del director, y responde que insiste en que no había diferencias en cuanto a cómo obtener una firma del director, siempre que fuera con la firma del jefe de fianzas y luego la firma del director, pero esto era la teoría. Explica que siempre se generaban muchas órdenes de compra, llegaban altos de órdenes de compra para firmar y no se revisaban en detalles las órdenes que estaban firmando; que se duplicaba el decreto, se tomaba una orden de compra ya pagada, por ende ésta ya tenía un proceso contable hecho, y se volvía a hacer todo el proceso contable para cada uno de los pagos que se hizo, y no necesariamente se duplicaba toda la documentación del legajo para el segundo decreto. Explica se tomaba la orden de pago antigua, se sacaba, no es que se duplicara el papel, no es que se imprimiera un nuevo decreto y se sacaran firmas nuevamente, se ocupaba la misma orden de compra antigua y lo que se duplicaba eran los movimiento contables que generaban el proceso de pago, el proceso de pago era lo que se duplicaba en el fondo, no la orden de compra.

A propósito de este cobro de cheques, recibió un tercio de los 412 millones, casi 140 millones, cosa que nunca dimensionó, e incluso en su primera declaración habló de 40 millones, no llevaba un registro; y esos millones los utilizó en la compra de vehículo, cuentas Coopeuch, parte en el negocio "Yolas", entre otras cosas que señaló, como la compra de un vehículo para su pareja de



ese momento, un viaje a la Sexta Región con ella un fin de semana, prestó dinero a algunas personas, fueron montos mínimos, salvo una vez que le prestó unos \$700.000 u \$800.000 a un compañero de trabajo, Gustavo Martínez, por problemas de salud de una hija, obviamente él no sabía de dónde salió este dinero; también gastó mucho dinero en los vicios en que estaba, alcohol, casino, y no podía mantenerse con dinero en los bolsillos, tenía dinero y lo único que quería era gastarlo, iba al casino y gastaba hasta que perdía toda la plata y ahí quedaba tranquilo.

Ante preguntas de la parte querellante, indicó que tenía problemas económicos, deudas que arrastraba de distintas casas comerciales, tarjetas, ya estaba en Dicom desde hace mucho tiempo y con lo que ganaba apenas le alcanzaba para vivir, siempre vivía endeudado y conseguía dinero con familiares para tratar de terminar el mes; que no se refirió a ludopatía, si habló que gastó mucho dinero en el casino, no como una enfermedad, sino que una válvula de escape para la presión que estaba teniendo en ese momento, empezó a beber en exceso, tenía problemas personales y económicos, y cuando empezaron a hacer cobro de estos cheques aumentó el nivel de consumo de alcohol, excesivo y una de las salidas fue ir mucho al casino y gastaba altas sumas, \$600.000 mil pesos, en las máquinas y bebía hasta que se le acaba la plata; al casino a veces iba solo y otras veces acompañado, no lo acompañaba Paredes, aunque sabía que él asistía al casino, porque a veces se lo encontró allí.

Ante preguntas de su abogado defensor, manifestó que la primera declaración que prestó fue en calidad de testigo, el 24 de junio de 2019, ante la fiscal María José Aguayo y funcionario de PDI Alex Valenzuela, la segunda declaración la prestó en calidad de imputado el 26 de agosto de 2019, ante la misma fiscal y mismo funcionario, compareció solo a esa declaración, sin abogado, no tuvo abogado hasta el día en que se le formalizó, le asignaron en ese momento un abogado; que después declaró estando formalizado y en prisión preventiva el 29 de julio de 2021 en compañía de un abogado de la defensoría frente a la misma fiscal y funcionario PDI, y en esta oportunidad en relación a los hechos dijo la verdad, reconoció los hechos y que él había sido el primero que cobró, lo que dijo ayer en la declaración, relató cómo ocurrió, cómo se llevó a cabo la situación, como se repartían los dineros; que en relación a la incorporación de las otras personas a cobrar cheques, él no tomó ninguna decisión, porque la situación que se integrara la señora Nubia, se dio, porque ella se dio cuenta de lo que estaba pasando, y ella decide voluntariamente empezar a cobrar cheques, porque cuando se lo hace notar en su oficina él reconoce la situación y que le dice que sabía que lo podía denunciar, y ella le dice que no quería denunciarlo sino que también iba a empezar a cobrar; y Paredes, también llega a su oficina y que había hablado con Nubia y sabía que estaba haciendo cobro de cheques en forma irregular, y él le dice que también va a seguir cobrando, sumarse a los cobros, no hay una condición ni una



pregunta; y en el caso de Pedro Ravanal, se enteró mucho después que estaba realizando cobros, por una conversación con la señora Nubia se enteró que Pedro Ravanal venía cobrando hace tiempo; que con Pedro Paredes solo tenía una relación estrictamente laboral, y con señora Nubia era laboral, pero más cercana porque se veían todos los días, y con Ravanal no lo conocía personalmente, pero sabía quién era y lo había visto un par de veces cuando iba a buscar a señora Nubia y sabía que era su pareja; en cuanto a la distribución y entrega de los dineros obtenidos por estos cobros de cheques, señala que la entrega de dinero siempre fue en efectivo, en partes iguales, y la persona que cobraba el cheque era la que repartía a los otros dos, un tercio para cada uno; que en relación a los cobros de los cheques, se repartía siempre entre los tres, en caso de Ravanal siempre pensó que era señora Nubia la que cobraba, se enteró mucho después, en el fondo era una parte Paredes, otra él, y la otra parte era la señora Nubia, que para ellos la señora Nubia y Pedro Ravanal siempre fue la señora Nubia, era una parte no más; que respecto de los cheques que cobraba la señora Nubia o Ravanal, también le correspondía un tercio al señor Paredes, siempre era un tercio para cada uno.

En cuanto a la forma de proceder y obtener el pago de los cheques, las órdenes de compra las buscaba cualquiera de los tres, las órdenes de compra estaban ahí mismo en la DAS, físicamente estaban en los baños del segundo y tercer piso, y si bien los baños habilitados, la mitad de los baños estaban ocupados como bodegas y se guardaban cajas de archivos órdenes de compra antiguas ya pagadas, era indistinto, no había un orden de quien sacaba las órdenes de compra, podía ser cualquiera de los tres, Paredes, Nubia o él; y la orden de compra elegida debía estar pagada, se buscaba que el monto fuera de alrededor de 3 millones para que al repartir fuera de alrededor de un millón para cada uno y que fuera de un proveedor de un laboratorio; y generalmente los proveedores se repetían, eran laboratorio Munnich, laboratorio Chile y Laboratorio Andrómaco o Silesia; y pudo haber otros laboratorios que no recuerda; que en un primer momento se buscaban órdenes de compra respecto de proveedores que se hubiesen pagado, que él empezó solo haciendo esto, y desde que empezó siempre lo hizo así, hasta un período en que el año 2018, que no recuerda fecha, puede ser a mediados de año, en que él estaba con varios problemas externos, que lo hicieron no mirar lo que estaba pasando y no fijarse en las órdenes de comprar que se estaban pagando y se dio cuenta que tenía órdenes de compra cobradas que no se habían pagado, ya casi el segundo semestre del año 2018 y se imagina que fueron las menos, porque siempre la idea era pagar órdenes de compra que estuviesen pagadas, deben haber sido las menos que se pagaron sin haber sido previamente pagadas al proveedor, y al hacerse conocida esta situación y se investiga por la Contraloría, se produce porque esta última se da cuenta de la situación debido a una circularización de deuda que hace con varios proveedores, se envían como 20 cartas a 20



proveedores distintos, en que en un par de ellos aparecen facturas que los laboratorios las informan como no pagadas, pero en el sistema contable aparecen como pagadas; y ahí contraloría se da cuenta de esto.

Entre el año 2017 y el 2019 tenía una cuenta corriente del Banco Estado, con una línea de \$400.000 que siempre está copada, tuvo una cuenta del Banco de Chile con línea de crédito de un millón de pesos, también siempre copada, y una tarjeta Visa, copada, y al día de hoy no tiene ninguna de esas cuentas; no estaba en situación de ser sujeto de crédito porque estaba en Dicom desde hacía mucho tiempo, muchos años al igual que en la actualidad; llevaba varios años en Dicom, antes de llegar a DAS, lo último por un tema de tarjetas de casas comerciales, la Polar, y después un crédito de Coopeuch que no pudo seguir pagando, y también en CrediChile tuvo un crédito anterior que tampoco pudo seguir pagando. En cuanto a su patrimonio no tenía casa propia, estaba conviviendo en ese tiempo, nunca se casó con la madre de sus hijos, fueron pareja durante muchos años, ellos compraron una casa por el año 2008, que tuvo casa con hipotecario, pero cuando se separó transfirió la casa, porque tenían temor que si tenía pareja nueva se casara y la casa se fuera con la pareja nueva; que se separó aproximadamente el año 2015, separación de hecho, pero él siguió viviendo un tiempo en la casa, pero separados en habitaciones distintas, y al poco tiempo se fue de la casa, el proceso fue complicado y están separados hasta el día de hoy.

En relación al local nocturno, la dueña era Sonia González, y a él le ofrecieron ese negocio que se encontraba cerrado, se lo ofreció una persona que había sido amigo suyo cuando eran muy pequeños, quien había tenido antes ese local nocturno y le dijo que era lucrativo y que podía ganar dinero con ello, y él estimó que podía ser un buen negocio, quien le presenta a la señora Sonia y llegan al acuerdo del arriendo y ella le explicó que tenía que comprar para hacer el negocio; que al arrendar pensó por ignorancia que como era funcionario público no podía tener el negocio, por lo que habló con Richard Augusto y Elson Lienlaf, si podían hacer una sociedad para llevar a cabo el funcionamiento del negocio y hacer el contrato, Richard era su amigo y Elson era un conocido, era el esposo de sus ex cuñada, y se constituyó dicha sociedad, la sociedad AIE Limitada y a través de ella se hace el contrato de arriendo con la señora Sonia, y su representante legal era Richard Augusto al parecer, no lo recuerda bien, pero en la practica el negocio lo llevaba él, pues eso solo fue para hacer el contrato, él pagó, pidió un crédito y trató de hacerlo andar, empezó a ir al local para tratar que funcionara, pero no funcionó por varios motivos que ya explicó, pues se dio cuenta que no era lo que él quería hacer ni tenía el tiempo para hacerlo, él era la cara visible hasta que no dio más, el negocio tampoco, y después lo dejó que funcionara con una persona que llegó a trabajar a la barra, quien después se hacía cargo de comprar y pagos, de estar como a cargo del local; que tuvo que pedir un crédito a la Caja de Compensación Los Andes, y se



explica que pudo obtener una crédito a pesar de estar en DICOM ya que en la caja de Compensación habían condiciones especiales de crédito por ser funcionario municipal, y los requisitos no eran los mismos que en el banco, y el préstamo de \$3.500.-000 no recuerda a cuantos meses lo solicitó ni cuanto era la cuota, pero no lo terminó de pagar, el que se le descontaba de la planilla de sueldo, y cuando dejó de trabajar en la DAS, porque lo cesaron, no lo pudo pagar más; que él tenía un vehículo que lo compró, primero un Kia Río en Bruno Fritsch que lo tuvo unos meses, y luego lo llevó y lo dio en parte de pago en la misma automotora por otro vehículo, después hizo lo mismo, y finalmente lo dio en parte pago de una camioneta Mitsubishi el año 2019 si no se equivoca; que pedía dinero varias veces, principalmente, a familiares, y a la señora Nubia San Martín en reiteradas ocasiones le pidió dinero prestado en forma personal.

Que en una oportunidad entregó el correo electrónico y la clave de su correo electrónico, al que se podía ingresar en forma directa a través de su celular que es el que entregó, sin poner clave, bastaba la clave del celular y además por el computador que ocupaba en la DAS también bastaba con hacer el ingreso y se ingresaba, y estaban las dos cuentas gmail, la personal y la institucional, bastaba con ingresar porque las claves estaba auto guardadas, no había que ingresarlas, y esos computadores fueron incautados por la PDI y las claves de acceso a los computadores fueron entregados por la municipalidad a la PDI; que se le incautaron dos teléfonos celulares; el primero lo entregó voluntariamente en la primera declaración como imputado el 26 de agosto de 2019, se entregó el teléfono y la clave del mismo, ante la fiscal Aguayo y el detective Valenzuela, y el segundo teléfono lo entregó horas antes de la formalización, cuando lo van a buscar a la casa y llevaban a PDI para ser formalizado, y antes de eso estando en la PDI le solicitan su teléfono; en cuanto a computadores, él no tenía computador personal; en relación a la entrada y registro a su domicilio, él no sabe que se llevaron de la casa, entiende que llevaron unas boletas del local, pero no tuvo detalle de lo que se llevaron, pero se dio acceso a PDI a todo, y él en ese tiempo vivía con su hermana y tenía una cama, que había que levantarla y abajo era como un baúl, y ellos no lo habían revisado, y él le dijo a la hermana y la hermana les fue avisar a PDI para que revisaran ahí, pero el detalle de lo que encontraron aparte de las boletas del local nocturno y además relativo al local encontraron un lector de tarjetas de redbank.

En este periodo sin ingresos le ha colaborado económicamente su familia, las tres hermanas mayores, una es profesora de artes en un colegio de Hualpén, después viene Antonieta, ingeniero en administración, funcionaria Corte de Apelaciones de Concepción, y Valentina es abogado, recién titulada y está haciendo reemplazo en un juzgado de Talcahuano; que ha intentado reparar el mal causado, se han hecho aportes en la medida que se ha podido aportar, con aportes de su familia, se hizo un aporte inicial de 7 millones y después se han ido



aportando nuevos montos, no sabe el detalle exacto, es un aporte que ha realizado su familia, sabe que alrededor de 20 millones de pesos.

Ante preguntas de la abogada defensora del acusado Paredes, señaló que en cuanto a las funciones y el perfil del cargo en el periodo de 2017 a 2019 no estaban definidas, pero él se desempeñaba como Jefe de Finanzas, y tenía como funciones principales, la de controlar la ejecución del presupuesto, que no ha dicho que tuviera fondos municipales a su cargo, sino que sus funciones eran elaborar, controlar la ejecución presupuestaria, elaborar el presupuesto, realizar pagos a proveedores como departamento de finanzas, aunque no lo hacía directamente, informes mensuales y trimestrales a la dirección de finanzas y dirección de control; que como jefe de finanzas, a su criterio, no tenía bajo su responsabilidad la custodia de los fondos de las cuentas municipales, porque si hubiese tenido custodia de fondos tendría que haber sido poseedor de fianza, lo que jamás ha tenido; que Pedro Paredes tampoco tenía en este período la custodia de los fondos de la municipalidad, pues trabajaba en otra área y no tenía fianza tampoco. Pedro Paredes en el periodo de la acusación trabajaba en la unidad de proyectos, y dicha unidad no tiene la administración ni la custodia de ninguna cuenta municipal, tampoco esta unidad tiene participación en las compras públicas, ni la responsabilidad del pago de los proveedores; tampoco era responsabilidad de Pedro Paredes controlar la ejecución del presupuesto, sino que era su responsabilidad la elaboración y el informe de la ejecución presupuestaria; que no dijo que dentro de la ejecución presupuestaria era de su responsabilidad que el registro contable reflejara el correcto estado de las cuentas municipales, sino que dijo que el dpto. de finanzas no debería llamarse de finanzas, sino de contabilidad y presupuesto, porque registraban contabilidad e ingresaban presupuesto; que ese registro contable nunca arrojó realidad de cuentas municipales, porque cuando llegó a la DAS de Talcahuano el 2006, ya el sistema contable no reflejaba la realidad de la contabilidad ni de los estados financieros de la Das, lo que nunca se subsanó, y al volver al 2013 el desorden era aún mayor de lo visto en el primer período, y la responsabilidad de que el sistema arrojará correctamente el estado de las cuentas era del área de finanzas, pero él no podía hacerse cargo de situaciones antiguas, de hecho él revisó varios años de contabilidad mal hecha, y tiene varios registros en que rehízo la contabilidad paralela, que se la presentó al director, porque para hacer cambios en la contabilidad años anteriores no era llegar y hacerlo se tenía que pedir permiso a la municipalidad y a la Contraloría, se trabajó mucho en eso, está hablando de más de 10 años de errores contables que no pudo solucionar; uno de los errores contables era que no se cumplía con la regla del devengo, que obedecía, más bien con un tema político, porque al no devengar no se reflejaban las deudas que habían y se dejaban las deudas de un año para el otro, y eso significaba que la cantidad de deudas con ciertos proveedores que ya habían enviado facturas no se ingresaba como deuda exigible y aparecía más



presupuesto con ese proveedor que el que realmente existe, eso en términos simples. Señala que las facturas llegaban, se hacían las compras y esos correspondía a otro departamento, la parte de obligación presupuestaria no la hacían ellos en finanzas, eso lo hacia el departamento de abastecimiento. El departamento de abastecimiento hacia las compras, recibía facturas y las mercaderías; que este departamento en el tiempo que se está hablando estaba a cargo del señor Juan Eduardo Garcés, casi todo el período hasta que es designado director subrogante o interino de la DAS; que Pedro Paredes en este periodo no tenía relación con el departamento de abastecimiento.

Otra unidad que podía hacer compras y recibir facturas era la unidad de obras y mantenimiento, que en este periodo del 2017 en adelante, el proceso de compras no solo era de abastecimiento, sino que además en un momento el área de farmacia también funcionó como un ente aparte y también obras y mantenimiento realizaba compras del área de ellos, ellos realizaban la gestión de la compra, pero le mandaban a abastecimiento para que generara el proceso de compra; pero la necesidad del gasto la evaluaban abastecimiento u obras y mantenimiento, y después la verificación que los servicios o productos se habían recibido eran de responsabilidad de estas dos unidades o departamentos. Con toda esta información, órdenes de compras, recepción de mercaderías y facturas de proveedores, se iba formando el legajo, al que se acompañaba el decreto de pago, que tenía que firmar él; y cuando ya estaba completo el legajo iba a la firma de finanzas y del director de la DAS para emitir decreto de pago y después el cheque; que no deberían haberse firmado ningún cheque ni decreto de pago si no se tenía esta documentación soportante, pero muchas veces se firmaban cheques sin tener legajo completo, por situaciones bien especiales, pero si se hacía.

De la conformación del legajo y todas estas etapas hasta el giro del cheque mismo del pago del producto o servicio contratado, don Pedro Paredes no tenía ninguna participación a menos que fuera solicitante de algún producto de su unidad, pero más que eso nada.

Él no era una de las firmas autorizadas para giro de cheques, pero cuando se hacían transferencias, que eran muy contadas, se hacían por dos situaciones puntuales, una cuando era pago de sueldos, que lo realizaban en recurso humanos, y eventualmente se hacían algunos pagos a proveedores, y existían unos pinpass del banco con distintas claves para ir autorizando pagos, él no era tenedor de alguno de estos pinpass, pero en la práctica cuando se necesitaban algunos pagos se los pasaban para hacerlos, el hizo trasferencias de pago de proveedores, y además de eso realizaba transferencias entre distintas cuentas de la DAS cuando faltaba dineros en alguna de estas cuentas, pero eso se hacía vía transferencia electrónica o vía cheque entre cuentas y eso es algo que siempre se ha hecho en la DAS, en la municipalidad, porque a veces llegan



fondos mal depositados y hay que cambiarlos de cuentas; se le pregunta si había que pagar un cheque y la señora Nubia le avisaba que en esa cuenta a la que pertenecía el cheque no habían fondos suficientes, ocurría veces en que por ejemplo transfería de la cuenta de venta a la cuenta del cheque para que no saliera protestado y responde que como se refieren a una cuenta específica no podría decir que sí en esa, pero si se hacían traspasos de dinero entre cuentas.

En su primera declaración como imputado se sintió presionado de declarar, y no contaba con asesoría de abogado, por lo que dijo cosas que no eran ciertas y otras que sí eran ciertas, y por eso después presta una nueva declaración el 26 de agosto del año 2019 asesorado por un abogado; que respecto de las cosas que eran ciertas; que en la primera declaración dijo que esto partió por Pedro Paredes que propuso el plan de tomar órdenes de compra e imputar a ellas el giro de cheques, que después se repartían entre tres, pero esa parte que se refiere a que Paredes empezó, es falso, porque él fue quien empezó; si es cierto que se repartían en tres partes iguales; que tampoco es cierto que desde el principio partieron los tres, pues empezó solo, y ya indicó como llegó la señora Nubia y don Pedro; pero si es cierto que fue la primera persona que empezó a cobrar cheques, lo que comenzó a hacer en el año 2015, que estaba en un momento difícil de su vida, que desde ese año se giró a su nombre aproximadamente como un cheque por mes de las cuentas de la DAS, no recuerda detalle de si dijo que era uno al mes o no; pero que dijo que tomó precaución que todos cheques fueran girados a cuenta de un cuenta de una orden de compra que ya pagada, y que todos estos montos, en general, eran de un promedio de aproximadamente 800 mil pesos o menos, según recuerda; en este momento recuerda que durante el 2015 los cheques que cobró él se imputaban a órdenes de compra ya pagadas y el promedio de los cheques era de aproximadamente \$800.000, y no recuerda si era un cheque mensual, pero fueron varios documentos; que los confeccionó solo; que para girar los cheques a su nombre, existían siempre cheques con ambas firmas y en blanco, que esto era una costumbre de la DAS desde tiempos que desconoce, porque desde su primer período en la DAS veía que eso se hacía, siempre se usaban cheques en blanco con firmas en la DAS; que en este período de tiempo le pidió a una persona que le cobrara cheques y que le entregara el dinero a él, que era Richard Augusto Álvarez, no recuerda cuántos cheques, le pidió que se los cobrara diciéndole que era un favor porque él no tenía tiempo para cobrarlos; y en relación a esa persona, él no recibía pago o participación del monto de esos cheque, pues al principio pensaba que era algo de su trabajo, pero después le prestó dinero, pero no iban en relación al tema de los cobros, le pidió dinero y le empezó a prestar, y esa persona es la misma a la que le pidió que constituyera una sociedad para el club nocturno, esta persona es amigo de la infancia del colegio y era el socio de Elson Lienlaf, que era casado con la hermana de su ex señora. Se le pregunta si Richard Augusto aparece vinculado a la investigación



porque ejecutó obras para la DAS y responde que eso es otro tema que no tiene nada que ver con esto, que ejecutó obras menores antes de este periodo, en el tiempo en que el encargado de mantenimiento era Pedro Paredes, y respecto de esas obras que se ejecutaron, esas obras fueron pagadas y en cuanto a la ejecución por lo menos a él le llegaba estado de ejecutado, pero el que tenía que verificar eso era Pedro Paredes, que era el encargado de obras y tenía que verificar eso.

Que en cuanto a cuando comienza a participar doña Nubia, no tiene clara la fecha en que empezó a participar, le ha costado mucho ubicarse en los periodos de tiempo, de lo que se dio cuenta cuando tuvo a la vista el informe de Contraloría, y ahí pudo ubicarse en las fechas, en ese en un momento habló de un periodo que no era correcto. No lo tenía claro, pero al ver le informe de Contraloría aparece en octubre de 2017 y Pedro Paredes en noviembre de 2017; que la señora Nubia le dice que se percató de la situación y le dice que también quiere cobrar cheques, lo que le puede haber dicho un mes antes de octubre de 2017, pero el primer cheque cobrado por ella aparece en octubre; y cuando ingresa la señora Nubia o Pedro cualquiera de los tres elegía una orden de compra y ese se ocupaba para hacer el segundo pago; pero Pedro Paredes no trabajaba en la misma función ni en el mismo edificio donde estaban las órdenes de compra, sino que en un edificio cercano, a menos de 100 metros, pero iba prácticamente todos los días a la DAS, incluso antes de esto, iba a saludar y conocía todo el funcionamiento y sabía donde estaban las órdenes, y don Pedro le dice que se enteró por la señora Nubia y se ofrece con buscar órdenes de compra; que en las dependencias de Finanzas de la DAS habían más funcionarios trabajando, como Marcos Sánchez, señora Priscila en un período; que en las dependencias donde se guardaban las órdenes de compra, no se guardaba en la oficina de finanzas, sino que las órdenes de compra que se utilizaban estaban pagados y se encontraban en archivos, los que estaban principalmente en el segundo y tercer piso de la DAS en los baños, que estaban habilitados para su uso, pero la mitad de los baños se usaban como bodegas y en cajas donde se guardaban estas órdenes, y cualquiera podía meterse a revisar la documentación contable que allí se guardaba.

Nunca hubo un control, después por mucho tiempo dejó de buscar órdenes, a veces lo hacía y no se fijaba en las órdenes que sacaban Nubia y Pedro, no revisaba las órdenes que buscaban ellos, no recuerda el periodo exacto, pero el 2018 empezó con problemas de salud grave y fue a varios médicos, y se lo achaca al estrés por esta situación, falta de concentración y efectivamente tenía problemas de concentración, estaba con un problema jurídico y muchas cosas más, por lo que no tiene claridad respecto de las fechas en que dejó de estar más presente físicamente en la DAS, cumplía con las funciones mínimas. Señala que lo de los 40 millones recibidos que aparece en



una declaración suya como imputado, la primera declaración, no lo ha dicho en audiencia.

Se le pregunta cómo sabe lo que él recibió del total de los 129 cheques que traen a juicio como cobrados irregularmente y señala que nunca dimensionó la cantidad de las sumas, solo se da cuenta del monto al ver el total de los 129 cheques y al dividirlo por tres, porque todos los cheques girados eran siempre repartidos en tres partes; que dijo no sabía que Pedro Ravanal estaba cobrando cheques, supo mucho tiempo después porque entendía que era la señora Nubia quien cobraba; que los cheques que cobró Pedro Ravanal, no lo supo por mucho tiempo, siempre pensó que era la señora Nubia quien los cobraba, para él era la señora Nubia, él no veía los cheques y no veía el cobro en el banco, por lo que todos los cheques que se giraban en la DAS él no sabía de cada uno de los cobros; que es posible que no hubiere recibido participación de algunos de los cheques cobrados por Ravanal, la posibilidad siempre está. Él confiaba en que la señora Nubia y Pedro Paredes estaban compartiendo lo que se cobraba; a él le llegaba un tercio, y normalmente el que cobraba el cheque era el que entregaba el tercio a una persona y después a la otra, por lo que daba por hecho que si a él le entregaba el tercio, se lo estaban entregando también a la otra personas, los cheques que cobraba Ravanal no sabían quién los cobraba, porque era la señora Nubia quien llegaba con esos tercios, que lo presume porque no era él quien los entregaba, y también lo presume cuando Paredes le entrega a él el tercio, presume que también se lo entregaba a la señora Nubia; por lo que se obraba en base a la confianza.

En relación a la participación del señor Ravanal, esto lo supo en fecha que no recuerda exactamente, pero en el año 2018, fue mucho tiempo después que él estuviera cobrando; que Ravanal respecto de la cantidad de cheques supo por el informe de Contraloría que llegó después, no recuerda cuántos, pero alrededor de 80 y tantos cheques, no recuerda desde qué fecha exacta aparece cobrando cheques el señor Ravanal, pero se atrevería a decir que desde octubre o noviembre de 2017, la misma fecha que empieza cobrar cheques la señora Nubia y Pedro Paredes. Señala que se enteró que Ravanal cobraba cheques porque le pidió dinero a la señora Nubia y le dice que Pedro le iba a pasar la plata, y él le dice que entonces él iba, pensando que se refería a Pedro Paredes, y ahí le dice que era Pedro Ravanal; que banco lo llamó por un cheque, respecto del que dio un visto bueno, pero no recuerda si estaba girado a nombre de Pedro Ravanal, sabe que lo llamaron una vez y simplemente dio el visto bueno.

Respecto a teléfonos incautados, uno lo entregó en su declaración a la fiscal voluntariamente, no recuerda el número de teléfono, fue hace más de 3 años, era un Samsung J5, no recuerda el número 34288362 que le indica la defensora; en ese tiempo estaba con un problema grave de salud mental y con un consumo excesivo de alcohol y tiene muchas dificultades para recordar



muchas cosas; y el otro teléfono se incautó horas antes de la formalización se requisó el nuevo teléfono, cuando los llevaron a la PDI para ser formalizados las 4 personas, al llegar en dependencias de la PDI, antes de ser formalizados les solicitaron los teléfonos; no recuerda el número; que el primer teléfono lo entregó voluntariamente el año 2019 y otro lo entregó el año 2021, no fueron paralelamente usados; no sabe si se realizó algún análisis de la información contenida en los teléfonos, supone que los revisaron, pero no sabe qué tipo de análisis ni nada de eso.

Probablemente que tuvo comunicaciones con señora Nubia por whatsapp en el año 2018 de hecho estaban trabajando, y no recuerda si le preguntó a la señora Nubia por whatsapp por la cuenta corriente de don Pedro Ravanal en el 2018. Se le pregunta si durante el periodo del 2017 al 2019 hubo constantes comunicaciones telefónicas entre él y Pedro Ravanal y responde que tampoco lo recuerda, probablemente, pero así como constantes lo duda, porque a Pedro Ravanal lo conocían muy poco, prácticamente era nulo el conocimiento de él, más de nombre. Al pedirle que aclare señala que no dijo que si hubieron comunicaciones, que eso lo afirmó la defensora, él dijo que lo duda, si es que hubo alguna comunicación no lo recuerda, en ningún momento dijo que hubieron muchas comunicaciones.

Respecto Elson Lienlaf, no eran conocidos con Pedro Ravanal, que él sepa por lo menos no hubo un contacto entre Elson Lienlaf y Pedro Ravanal.

OCTAVO: Que, renunciando a su derecho a guardar silencio, la acusada **Nubia San Martín Pavez** prestó declaración en la oportunidad referida en el inciso tercero del artículo 326 del Código Procesal Penal, señalando que es secretaria, que tiene 65 años de edad, que ingresó a la Municipalidad, área salud, en el departamento de Finanzas en el año 1991, y se desempeñó como administrativa hasta el año 1997-1998, en que la cambiaron al departamento de Finanzas, donde cumplía labores administrativas y pasado un tiempo cambiaron sus funciones, como el 2013, y le fue asignada la caja chica con una póliza, le afirmaron firmar documentos fiscales de las cuentas corrientes del Banco Estado, de la DAS, que también se le otorga el pago de proveedores, que fue administrativa contable en ese momento porque ingresaba los devengamientos, y se devengaban y archivaban hasta el momento de los pagos, después pagar los consumos básicos, como luz, agua, los arriendos, salas cunas, y en ese departamento también trabajaban 4 a 5 personas; que en cuanto a los procedimientos de pago, era que tenían que venir todo el legajo completo, las órdenes de compra, certificado de disponibilidad, solicitud de pedidos del centro de salud y también debía tener una licitación, el número de licitación, el número de cotización si era compra directa, que no eran muy reiterativas, también el convenio marco, Chile compra, se agregaba la factura, comprobante de



recepción firmado por los centros de salud, o por el departamento que lo solicita; y esos se archivaban para cuando hubiere el proceso de pago.

Que en cuanto al inicio de lo que se le acusa, fue en el año 2017, que ocurre cuando un proveedor le solicita el pago de una factura, ella le pidió el RUT, ingresó al sistema contable, porque podía ingresar por ser administrativa contable y se dio cuenta que la factura estaba pagada, por lo que ingresó a la página del Banco Estado, las cuentas corrientes que administraban, ingresó el número de cheque y se dio cuenta que estaba a nombre de otra persona, que siguió indagando, y se dio cuenta de la misma situación en otros casos, Richard Aburto y Alejandro Cabello, que imprimió los documentos, los cheques irregulares y fue donde don Alejandro y le dio cuenta de la situación encontrada y él le dijo que estaba en su derecho de denunciarlo, pero no lo denunció porque para ella fue una buena oportunidad de tener recursos fáciles, ya que tenía muchos problemas económicos, que estuvo siempre en Dicom, era compradora compulsiva, y por eso no acusado a don Alejandro, lo que se prolongó hasta el año 2019; y en esta situación ingresó su pareja en octubre del año 2017, y también ingresó Pedro Paredes y ella, y se empezaron a cobrar los documentos irregulares; que ella le pidió a su pareja si le podía hacer el favor de cobrar un cheque que era de la administración porque se necesitaba dinero en efectivo, y le dijo que sí; que en un primer momento él no sabía de qué se trataba, pero después fueron consecutivos, le volvió a pedir porque ella no se quería exponer tanto a la situación de los documentos irregulares, que la repartición que se hacía siempre fue en partes iguales; y todos estaban con problemas económicos; y el destino que ella le dio a las platas fue viajar y viajar, a Punta Arenas, Copiapó, Pucón, Villarica, conocer lugares que no conocía, ir a tiendas a comprar ropas y lindos zapatos, supermercados, y como era compradora compulsiva, todo quería tener y siempre estaba encalillada, nunca tuvo una tarjeta de titular, salvo la del Banco Estado, que era por su sueldo, por medio de la municipalidad, y era adicional de todas las tarjetas de Pedro Rabanal, BCI, CMR, Santander, y Visa Banco Estado.

Que declaró dos veces en la fiscalía, la primera vez reconoció todos los hechos y dio la participación de su pareja, y en la segunda declaración en el tribunal de Garantía de Talcahuano, reconoció la participación de todos los involucrados, y autorizó una prueba caligráfica voluntariamente, entregó sus correos con claves, en la primera vez que la llaman a declarar o fueron a la casa, fueron con orden de ingreso para revisar y se llevaron dos celulares, uno de su pareja y otro suyo que estaba con clave, les dieron las claves a los funcionarios de la PDI; que en la segunda declaración aclaró la participación de Alejandro Cabello, ya que el 4 de julio él estaba como testigo y no como imputado, y aclaró que tenía participación, y con eso la fiscal pidió una autorización a la jueza para hacer un ingreso y registro del departamento de Alejandro, y también dio información sobre la participación de Alejandro, que él había hecho las cosas antes que ella, y había tenido mejores dividendos, y también la fiscal pidió



autorización a la jueza para hacer un alzamiento del secreto bancario de don Alejandro.

Que su familia la componen sus dos hijos, Miguel de 40 años, odontólogo, dos nietos, y otro hijo, Mauricio, militar que vive en Punta Arenas; que por su irresponsabilidad y no tener conciencia de lo que estaba haciendo, está privada de libertad y con mucho arrepentimiento, ha dañado a la comunidad y a su familia y a quienes habían confiado en ella, por lo que pide disculpas a todos, porque nunca pensó; que ella se preguntaba cómo era la gente adentro, pero es horrible para una persona mayor, hipertensa, que está con una depresión y lo único que quiere es ver a sus nietos.

Ante preguntas de la fiscal, señaló que la oficina de Finanzas se ubica en el tercer piso del DAS, que ahí está su escritorio y dos escritorios más, al año 2019, el escritorio del frente al suyo lo ocupaba una alumna en práctica cuyo nombre no recuerda; y el escritorio de su derecha, al parecer lo ocupaba Marcos Sánchez; que Alejandro Cabello tiene oficina fuera de la unidad de finanzas del tercer piso, su oficina está en el segundo piso; que ella es firma autorizada de las cuentas de la Municipalidad al parecer desde el 2013 o 2014; que la Municipalidad tiene como 8 a 10 cuentas corrientes destinadas a la DAS, a la cuenta que termina en 161 le daban el nombre de “aporte municipal”, la que termina en 004, parece que es “resolutividad”, y además de esas cuentas corrientes eran firmas autorizadas Manuel Rojas, que era titular e Irene Navarrete como titular, que aún no había renunciado a firma, y Claudio Morales también de titular, y ella era suplente, que entre 2017 y 2019 Manuel Rojas no formaba parte del departamento de Finanzas y doña Irene Navarrete tampoco y Claudio Morales tampoco, quien era como director administrativo, por lo que la única firma autorizada del departamento de finanzas a esa época era la suya; que los talonarios de cheques de titularidad del DAS quedaban en la caja fuerte que había en el tercer piso, en el departamento de finanzas, ubicada junto a su escritorio, los cheques de titularidad de la municipalidad siempre requerían de dos firmas.

En cuanto a las transferencias bancarias, tenían un sistema de doble súper clave o doble pinpass, y ella nunca manejó claves de pinpass, las manejaba el departamento de remuneraciones y a veces para pagar sueldos, el departamento de finanzas, y en este departamento de finanzas siempre se manejaban los dos pinpass, a veces lo manejaba Alejandro para cargar los sueldos o remuneraciones o a veces la encargada de remuneraciones, y algunas veces se hacían transferencias de esas cuentas cuando se solicitaban; que para las transferencias también se necesitaba doble clave, uno lo mantenían en el departamento de finanzas, don Alejandro, y si no lo tenía Alejandro, en el departamento finanzas el pin pass lo mantenía ella en la caja fuerte, por lo que era ella o don Alejandro, o la parte de remuneraciones cuando solicitaban los pagos de los sueldos, los dos pinpass los tenía el departamento de



remuneraciones para hacer transferencias o cargar los sueldos; que cuando el banco tenía que llamar para verificar una firma llamaban a los que en esos momentos solicitaban si lo habían hecho o no, a las personas que estaban encargadas de la firma, que cuando del banco llaman a la Municipalidad o al DAS para verificar el pago de un documento, el banco tenía todos los teléfonos de la municipalidad y posiblemente llamaban a don Alejandro, quien siempre estaba en contacto con el banco por el asunto de los depósitos para que se hicieran más rápido, y poder liberar más rápido los fondos, entonces se comunicaban con él; que a ella no la llamaban del banco para verificar el pago de un cheque de titularidad del DAS.

Respecto a las órdenes o decretos de pagos, para su emisión se usaba un sistema modular contable, que es un sistema computacional que funciona en el interior de la municipalidad, el SMC, al cual todos los funcionarios de la municipalidad tienen acceso al SMC, tanto remuneraciones, adquisiciones y finanzas, pero no todos tienen el mismo perfil, pero los que pueden crear decretos u órdenes de pago puede ser los del departamento de finanzas, y dentro de finanzas todos tienen perfil para crear decretos u órdenes de pago, porque en ese tiempo todos podían hacerlo porque no estaba bien definido lo que se hacía; se ingresa el devengamiento al sistema contable para emitir la orden de pago, cuando la documentación se iba a pagar, porque no se permitía que se reflejara la deuda en el sistema, se ingresa un número de devengamiento que el sistema le atribuye a una orden de compra y con ese sistema se puede emitir una orden o decreto de pago, que se imprime en una hoja que viene prediseñada como orden o decreto de pago, en la parte superior izquierda de la hoja viene el logo de la municipalidad de Talcahuano, del DAS, y a la derecha, se le asigna el número del decreto u orden de pago, también se individualiza la empresa proveedora a la que se le paga, con el Rut de la empresa, con lo que además se está pagando, se individualiza además el monto, la descripción de lo que se estaba ordenando pagar; el monto por el cual se está pagando o se cobra por el producto que envía la empresa, medicamentos o artículos de aseo, porque son variadas las cosas que se compran, se especifica la cantidad de los productos y el valor a pagar; que además queda un registro con una sigla de quien ingresa o emite el decreto u orden de pago, queda registrado en el sistema contable cuando se ingresa a la parte contable; que en la parte de abajo del decreto existe una parte en que se individualiza cómo se paga, donde se incluyen las firmas del director y del jefe de finanzas, y también en una glosa pequeña se coloca el número de cheque, la cuenta de la cual se va a sacar, se registra en el sistema, y en el comprobante contable o decreto queda registrado o ingresado el número de cheque; que esa parte donde se pone la cuenta, el comprobante contable y el número de cheque, se hace a mano y también usando el sistema computacional, porque cuando se confecciona el decreto se le ingresa el cheque vía computacional, pero más abajo también se especifica el número de



cheque y la cuenta del cual va a salir; y esa información la ingresan los que hacen los egresos, ella u otro compañero que estaba en la oficina tenían la posibilidad de hacer los decretos de pago; por lo que quien emite un decreto de pago es la misma persona que llena la información respecto del cheque y quien llena el cheque, lo que también ocurre, porque había documentación que se pagaba con programas y se utilizaban otras cuentas, por lo que las otras personas también podían hacerlo.

En cuanto a las firmas del decreto, hay dos firmas, que firma primero el jefe de finanzas y después el director; y donde se señala la sigla de quien emite el decreto de pago, existe una mosca o firma de autorización, y no se recuerda si quien emite el decreto de pago es el que emite esa mosca sobre esa sigla, porque ya en el egreso se sabe quién hace el decreto. Que no recuerda si en un decreto de pago bajo las firmas del director y jefe finanzas, hay unas iniciales del usuario del SMC. Que primero firma el jefe de finanzas y luego el director, y se acompaña todo el legajo, orden de compra, certificado de disponibilidad, la solicitud del centro de salud donde solicitan los requerimientos, números de licitaciones, convenios marco, Chilecompra o compra directa, que no es siempre, y con esos documentos se hace el decreto con su comprobante de recepción, tiene su factura, y se hace el cheque; por lo que cuando pasa a la firma del jefe finanzas y del director, junto al legajo, además, se debería acompañar el cheque; que un jefe de finanzas no puede firmar el decreto de pago sin que vaya el cheque; como tampoco puede firmarlo sin que vaya el legajo sin la documentación señalada.

En cuanto a la firma de director, indica que en la DAS de Talcahuano la persona encargada de obtener la firma del director, se juntaban todos los decretos de pago, con sus cheques y firma del jefe de finanzas, se juntaban varios documentos, varias órdenes de ingreso, se le llevaban a la secretaría del director, y se le entregaban al director para que después firma, se juntaban varios decretos de pago porque siempre el director estaba en reuniones y a veces se requerían documentos urgentes, y no se podía dejar que se esperara o que firmara el director para poder hacer el pago, por ello se juntaban los legajos y después él los firmaba.

En cuanto a la firma de los talonarios en blanco, señala que la firma de estos talonarios en blanco, siempre se firmaban, siempre estaban firmados, ella los requería a Manuel Rojas cuando se necesitaba cosas urgentes y también ella los dejaba firmados por cualquier cosa urgente que se necesitara, por si ella no estuviera se pudieran hacer los pagos que correspondían, los pagos urgentes; en cuanto a la firma autorizada de Irene Navarrete, no sabe si ella firmaba cheques en blanco; pero ella no le requirió a doña Irene que firmara algún cheque en blanco, ya que se llevaba la documentación completa para que ella la firmara cuando se necesitaba el pago de algún proveedor; a Claudio Morales cree que



alguna vez, una o dos veces, ella le requirió que firmara un cheque en blanco, por lo que la gran parte de los cheques en blanco los firmaba Manuel Rojas y ella; que a Rojas también el jefe del departamento de finanzas, Alejandro Cabello, le solicitaba que firmara cheques en blanco, y ella siempre mantenía todas las chequeras firmadas.

Que la Contraloría llega al DAS cree que en enero del año 2017, no está segura, pero fue en ese tiempo cuando se hizo la investigación; que llegaron a la unidad de finanzas como dos o tres personas de Contraloría, no recuerda los nombres, y le pidieron los decretos de pago, le dan un listado de decretos de pago, con el número del decreto, los valores y proveedores que necesitan; le pidieron respecto proveedores Munnich, Laboratorio Chile, Andrómaco, Recalcine o Silecia; que a ella la suspenden de sus funciones cuando Contraloría manda una información al ente fiscalizador que habían irregularidades, y la suspenden a ella, porque Alejandro no estaba, y ella entregó a la fiscal las claves del correo electrónico, la clave de la caja fuerte en que se guardaban los cheques, el computador quedó abierto, le entregó una carpeta con documentos pendientes en que se le solicitaba el pago sin sus legajos, que dejó guardados en una carpeta azul; la información que le pidieron, porque fue un lista con nombre de proveedores, números de decretos, y ellas los buscó y entregó la información a los fiscalizadores toda la información que pedían, y la que no alcanzó a entregarse, se la dejó en una carpeta, que rotuló “para los fiscalizadores”, porque cree que la suspendieron un día lunes o martes, y quedó en el escritorio una carpeta con los documentos que no alcanzó a entregar; y la carpeta azul es otra carpeta tenía documentos donde Juan Garcés le solicitaba que le pagara una facturas sin legajos, sin nada, solo la factura de los servicios que él hacía, y la tenía en una carpeta en su escritorio o en una repisa, donde tenía muchas facturas que no tenían respaldo, pero ella entregó solo lo que le solicitaron, los egresos, nada más.

Que en relación a las facturas sin respaldo que le pidió el señor Garcés, las empresas proveedoras eran Ramiro Soto, Montblac, Servicios Ormaj, y no recuerda qué otros más, eran como 3 o 4 que le solicitaban que le pagaran la documentación aunque no le acompañaron los respaldos que nunca llegaron, y por eso le puso a la carpeta “documentos pendientes”; que el señor Juan Garcés Gallardo era el jefe de abastecimiento y director subrogante, y con esa potestad le pedía a ella que pagara la documentación, porque él estaba pendiente cuando llegaban las remesas a la DAS; que Servicios Ormaj, Monblanc, Ramiro Soto, son empresas de servicios, no son laboratorios.

Que declaró ante la fiscal el 4 de julio, y había un policía de apellido Valenzuela, y su abogado que la asesoraba, y en esa oportunidad respecto a la consulta de los cheques en blanco, dijo que ella no firmaba cheques en blanco, y que no había hecho esa firma, pero después se retractó, que sí, que a lo mejor, y



ahora dice que sí, que realmente se firmaban cheques en blanco; que cuestionó haberlos firmados, porque no recordaba haberlos firmado, y cuestionó que hayan sido falsificados por otras personas, porque no lo recordaba los nombres que salían en los documentos, pero después se retractó y ahora dice que si firmó cheques en blanco; que había dicho que los documentos habían sido falsificados, y por eso se le requirió la firma, que la toma de muestras la hizo en la PDI de calle Angol, en Concepción, y voluntariamente le tomaron las pericias caligráficas para ver si las firmas correspondían a ella o no; que en esa oportunidad dijo que había descubierto a Cabello cobrando estos cheques a su nombre, y dijo en un principio que señor cabello le prohibió denunciarlo, pero realmente él nunca se le prohibió, sino que ella le dijo voluntariamente que iba a cobrar, porque ella tenía muchos problemas económicos, estaba muy encalillada, y era una forma de solventar las tarjetas que estaban horribles; que en esa oportunidad dijo que Ravanal no sabía que lo que ella le encargaba no formaba parte de sus funciones laborales, que al principio le dijo que cambiara un cheque porque lo necesitaba, pero después que fue más reiterativo le dijo lo que estaba sucediendo, pero al primer documento Ravanal no tenía idea lo que estaba sucediendo, pero después supo realmente lo que ella estaba haciendo y sucediendo, o lo que estaban haciendo.

Que en dicha declaración se le exhibieron una serie de documentos y todos tenían su firma, parece que la fiscal se los exhibió, no lo recuerda bien; que ese día proporcionó su clave de correo electrónico, que no era institucional, porque era un gmail, la que correspondía, y la clave de su celular, el que había sido previamente requisado, que tendría que corresponder a la clave del teléfono; que declaró ante el Tribunal de Garantía de Talcahuano en julio de 2021, y en esta oportunidad aclaró la participación de su pareja y de Alejandro Cabello, quien comenzó con el ilícito y había obtenido ganancias de los pagos, y ahí la fiscal solicitó una autorización para que se levantara o alzara el secreto bancario de don Alejandro; que esto último lo sabe por la información que declaró, por todo lo que dijo de don Alejandro, que estaba como testigo y no como imputado; pero no recuerda como supo del alzamiento.

Que en relación a la petición de orden de entrada al departamento de Alejandro, lo sabe porque él estaba de testigo, y ella aclaró que él tenía participación en los hechos, y por eso se llegó una orden de registro al departamento de don Alejandro, no recuerda quién le dijo a ella que la fiscal pidió la orden de ingreso; que le parece que el 5 de julio de 2019 se otorgó la autorización de alzamiento del secreto bancario, aunque después dice que tiene que haber sido el año 2021, pero no recuerda como lo supo.

En relación al destino de los bienes, por el cobro de los cheques, la cantidad obtenida la dividieron por tres, y recién ahí, al final supo que había obtenido como 120 0 130 millones cada uno; que los destinó para viajes, que



viajó a Punta Arenas en los períodos en que se hacían las malversaciones, en 2017, 2018, y parte del 2019, fueron donde hijo que es militar y que reside allá, y lo iban a visitar, tres o cuatro veces al año, iban a verlo, porque estaba solo, que iba con su pareja Ravanal, para Navidad, su cumpleaños, lo iban a ver, siempre en compañía de su pareja; iban en avión desde Santiago a Punta Arenas, y en bus desde Concepción a Santiago; también fueron a Villarrica, Pucón, Quilpué, Valparaíso, Viña, Villa Alemana, Las Termas de Malleco, en Punta Arenas a las Torres del Paine, las Cuevas del Milodón, arrendaron una casa; que a Villarrica y a Pucón se trasladaron en auto, y a Valparaíso y a Viña en auto también; que el primer viaje a Villarrica y a Pucón cree que lo desarrolló el año 2018, y a Valparaíso y Viña fueron el 2019, pero de fechas no se acuerda tanto; que gasto dinero en tiendas, en comprarse ropa bonita, en casas, boutique, Tienda García, Modas Evita, compró muchos abrigos, botas en Tienda Gacel, cosas bonitas que le gustaba tener, que antes por sus problemas económicos no los podía tener.

En su primera declaración del 4 de julio fue consultada por estos temas, y dijo en esa oportunidad respecto del uso del dinero, dijo que era una compradora compulsiva, que se compraba cosas bonitas, que se hizo un implante dental al igual que su pareja, que fue gimnasio de yoga, que se fue a una clínica de sueño, se fue al Sanatorio Alemán, porque se operó de la vista, porque tiene inicios de glaucoma; que eso debería ser lo que indicó en esa oportunidad, que recuerda en parte.

Que luego del ejercicio de refrescar memoria con su declaración de fecha 4 de julio de 2019 ante el Ministerio Público, y de leer la parte pertinente de la misma, señala que dijo los había gastado porque tenía problemas económicos, había pagado cuentas, y había viajado, para comprar; y en cuanto a gastos para médicos y exámenes, no lo señaló la primera vez, porque no se acordaba.

En relación a la participación de Ravanal, recuerda que dijo que le pidió a su pareja Ravanal que le cobrara un cheque de su trabajo porque ella no podía ir, y él le dijo que estaba bien; y en cuanto a de quién fue la idea de incorporar a Ravanal, dijo que la idea era de Alejandro Cabello, pero ahora dice que fue de ella sin comunicarle a Alejandro Cabello, debido a que ella no se quería exponer tanto a lo que estaba pasando; que en esa oportunidad no tenía conocimiento de cuántos cheques eran los que cobraba Ravanal, dijo 10, 20 o 30, pero solo tuvo la certeza cuando Contraloría dio el resumen de los cheques cobrados a nombre suyo, Ravanal, Paredes y Cabello; que se repartían entre partes iguales el monto de los cheques cobrados con Alejandro Cabello, que era el jefe, Pedro Paredes y ella; que la totalidad de los cheques, se repartieron de esa forma; lo que era independiente de quien cobraba el cheque, ella, Pedro Paredes o Pedro Ravanal; y respecto de los cheques que cobraba Cabello, cree que también recibió un porcentaje, porque esa era la modalidad que tenían de repartirse los dineros;



que el dinero lo repartían los tres que cobraban cheques, tanto Alejandro, Pedro Paredes, y su pareja, porque ella lo llamaba para que fuera a buscar el cheque, le entregaba la plata a ella, y ahí hacían la distribución, por lo que Ravanal no se quedaba con nada de los montos de los cheques cobrados; que en la declaración de julio de 2019, en cuanto a porcentajes de repartición de los montos de cheques, dijo que eran un 10% para cada uno, pero no fue así, sino que en partes iguales. Respecto de los cheques que se giraban, decían relación con facturas que ya estaban pagadas, que eran de años anteriores, y de esos legajos se tomaban y se hacía un nuevo egreso, la documentación la traía Pedro Paredes, don Alejandro y ella, entre los tres buscaba el documento, y se lo traían a ella o ya lo tenía, y lo ingresaba al sistema como una deuda nueva, como un pago nuevo, se le asignaba un número, se hacía devengamiento, y se tomaba un número para la orden de compra, y se confeccionaba el decreto de pago y se hacía el cheque, pero eran de facturas ya pagadas en años anteriores. Que en la declaración de julio de 2019 señaló como razón para cometer los hechos, que fue por necesidad económica, y que Cabello no tenía nada que ver en su decisión, porque cuando fue a la oficina y le dijo lo encontrado, él le dijo que estaba en su deber denunciarlo, pero ella no lo denunció porque era conveniente tener esos dineros por los problemas económicos que pasaba, y lo aceptó, por lo que Cabello en ningún momento le dijo que lo hiciera; que recuerda que dijo que Alejandro lo presionaba, pero no fue así, ella solo dijo que quería participar.

Que en cuanto a su declaración prestada ante el tribunal cuando estaba en prisión preventiva y formalizada; señala que en esa oportunidad, en relación a la repartición de los montos de los cheques, dijo que fue el 10% para cada uno, de todos los cheques, de todos los documentos irregulares, que se repartían de esa manera; pero ello no fue así, porque ella junto a Paredes tenían un abogado que les pidió que dieran esa versión; que respecto del uso del dinero, en esa oportunidad, dijo que principalmente era un buen momento para poder salir de sus deudas, y que por estar nerviosa, que contestó a la fiscal lo primero que se le vino, y dijo que había salido a Chillán, y unas cosas muy vagas que dijo; dijo que lo gastó en cosas básicas, parece que dijo que se la había gastado en supermercado.

Que el señor Ravanal no recibió parte de este dinero que ella cobraba por caja; no le entregó a hijos de Ravanal parte de estos dineros, pero si le hizo regalos caros a sus hijos, el más caro fue porque le regaló plata para comprar un auto; cree que le debió haber preguntado si le dio dinero a sus hijos, pero parece que le dijo no, pero en realidad no se recuerda.

Ante preguntas de la parte querellante, indicó que en la época de ocurrencia de estos hechos, su jefe directo era Alejandro cabellos en el departamento de Finanzas, y su oficina estaba en tercer piso y la de él en el segundo piso, y la administración en Gabriel Toro 49, Talcahuano, y la relación



de trabajo se desarrolló varios años, en los pisos que indica la administración de finanzas en el tercer piso, por espacio no podían estar en conjunto; se contactaba directamente con Cabellos en el desempeño de sus funciones, las que desarrollaba necesitaban la aprobación del señor Cabellos, las decisiones importantes las debía visar él, como pagar documento alto, cosas que pudieran pedir otros departamentos, había que preguntarle a él; que antes de este periodo en que era su jefe Cabellos, también fue su jefe directo en el departamento de finanzas el señor Paredes, por unos 3 o 4 años; por lo que día a día tenía una relación directa con el señor Paredes en aquella época, y tenía conexión directa porque ella era administrativa en el departamento de finanzas cuando él era el jefe, por lo que las funciones importantes suyas en ese tiempo debían ser visadas por el señor Paredes.

Cuando Alejandro Cabello era su jefe directo, en ese periodo si ella dentro de sus funciones debía pagar a un proveedor, ese pago debía ser autorizado por él, el jefe de finanzas de ese momento; por lo que si ella extendía un cheque de las cuentas de DAS para hacer pago a nombre de un proveedor ya firmado por ella y la otra firma autorizada, debía llevar el cheque, la orden de pago y el legajo de documentos a Cabellos para su autorización del pago y firmara el decreto, pues siempre se hacía así.

En cuanto a quien tomaba la decisión de girar algún cheque a nombre suyo, no la tomaba ella, sino que la tomaban los tres, porque los tres tenían problemas económicos, se giraba el cheque y uno de ellos, lo iba a cobrar, para ponerse de acuerdo cualquiera podía tomar la decisión, porque estaban siempre de acuerdo los tres, y en la práctica tenían facilidad para sacar los documentos que ya estaban pagados y giraban el documento, que solamente lo giraban, porque siempre estaban con problemas económicos, y era ella la que siempre escribía casi la mayoría de los cheques, y en cuanto a la decisión de a nombre de quien se suscribía el cheque, indica que no se tomaba ninguna decisión, sino que se hacía por la necesidad y el que tuviera más tiempo para ir a cobrarlo, se hacía el documento, y para ello se suponía que a veces Pedro Paredes iba a saludarlos en la mañana o con don Alejandro se juntaban en la oficina y ahí se decidía quién iba, y el que tenía más voluntad y más tiempo para ir a cobrarlo, iba, y a veces se saludaban y decían que tenían problema económico y listo, no se hacían reuniones; se juntaban cuando ella les repartía el dinero, o venía Pedro a dejar la plata a la oficina de Alejandro.

En cuanto a cómo sabían cuando habían fondos disponibles en la Das para girar cheque e ir a cobrar, señala que ella podía ver en el sistema contable, como era administrativa, si había disponibilidad, y luego le consultaba a Cabello, y decía que en tal cuenta había, y se giraba en esa cuenta que casi siempre fue la de "aporte municipal"; y en cuanto al monto del cheque a girar, no se tomaba una decisión, sino que se tomaba un legajo, que no fuera una suma tan baja,



porque eran tres, por lo que tomaban un legajo que fuera de como tres millones, para que fuera una división que les sirviera por lo que necesitaban, y se traía cualquier legajo de aproximadamente tres millones; que se giraba cheque y a veces iba a cobrar, pero siempre sabían que uno iba a cobrar el documento; y se venía del banco con el dinero en efectivo a la oficina, y el reparto se hacía en dinero efectivo para Alejandro y Paredes, para lo cual ella siempre lo dejaban en la oficina, a la hora de colación se juntaban, y se hacía la distribución del monto del cheque.

La distribución era en tres partes iguales respecto de todos los documentos cobrados, siempre fue la misma modalidad, incluso los cheques cobrados por Ravanal, porque él iba a cobrar el cheque en la mañana, se juntaban en hora de colación y le entregaba todo el dinero, y se distribuía en las tres partes, y Ravanal nunca se quedó con dineros, porque estaba ella ahí y no él; a veces se quedó con un par de chauchas; y en cuanto al destino de fondos, dijo que fueron en viajes, los cuales hacía siempre acompañado con su pareja el señor Ravanal, y si este último no recibió dinero, era porque ella le aportaba para sus gastos; que en definitiva se gastó parte de los fondos conjuntamente con Ravanal, porque era su pareja y siempre estaban juntos.

Los cheques que se cobraban sabían que eran de la chequera de cuentas corrientes de la Administración de Salud de la Municipalidad y que se referían a fondos de propiedad de la municipalidad y tenía conocimientos que los fondos contra los cuales se giraban los cheques eran para un fin público, que era pagar a proveedores de salud, y sabía que estaba a cargo de custodiar las cheques, pero las chequeras se guardaban en la caja de fondos, pero no era solo ella la que tenía la responsabilidad, sino que también los que trabajaba en el departamento de finanzas cuando se necesitaba pagar a un proveedor, cualquiera sacaba cheque, cualquiera podía sacar cuando estaba abierta y cuando estaba cerrada, solo podía abrirla ella y donde Alejandro.

En cuanto a la incorporación del señor Paredes al cobro de cheques, a éste ella le comentó cuando descubrió el ilícito y él le dijo que le dijera a don Alejandro lo que había encontrado, y que él también tenía necesidades económicas y dijo que iba a cobrar cheques, que le contó a Paredes porque antes fue su jefe y era la persona que tenía más cerca porque trabajaba en el tercer piso, a oficina y media, y le contó la situación y le dijo que le contara a don Alejandro; que el señor Paredes era la persona que tenía más cerca, no almorzaban continuamente, pero cuando no tenían comida iban a almorzar afuera, pero era un café; que el señor Paredes siempre iba a su oficina, todas las mañanas al departamento, porque después lo trasladaron a señoret y pasaba a firmar y a verlos a ellos, a todos los del departamento, porque era conocido de todos, pasaba a saludarlos; que no le contó a otros funcionarios, le contó a



Paredes porque estaba cercano y había trabajado con él, y Manuel Rojas trabajaba en otro departamento y no había la confianza con él.

En relación a su pareja Ravanal, en este momento nos e dedica a nada, antes de ser formalizado trabajaba en una sandwichería que tenía a su cargo, debía comprar las cosas, los productos para que funcionara; que cuando le pidió que cobrara en un primer tiempo, él no se dio cuenta de nada de lo que sucedía, ella le pido que le hiciera el favor de cobrar el documento porque se necesitaba dinero efectivo, que era de su trabajo, y ese primer cheque estaba a nombre del señor Ravanal, y el cheque era de un monto de como \$2.246.000 o algo así; que en relación al referido cheque a nombre del señor Ravanal, y monto, no implicó que éste le hiciera ningún comentario, pues ella nunca había hechos cosas que no correspondían, por lo que lo cambió sin problemas; que cuando los cheques los cobraba el señor Ravanal, le entregaba el dinero en la hora de colación, por lo que el señor Ravanal cobraba el cheque y se dirigía a su lugar de trabajo y en su oficina le entregaba los dineros, y ella le entregaba una parte a don Alejandro y éste a Pedro Paredes en partes iguales, todo ello ocurría en horas de colación, por lo que a la hora del reparto de dineros del señor Ravanal, no necesariamente estaba presente el señor Paredes y Cabello; porque las platas que se cobraban, Ravanal se las traía en hora de colación, y ella sacaba su parte y el resto se lo entregaba a don Alejandro; que cuando Ravanal iba a entregarle el dinero a su trabajo, a veces era visto por las otras personas, pero nunca lo vieron haciendo ese tipo de cosas; que en relación a la plata, se gastaron toda la plata por muchas necesidades económicas, por ser compradora compulsiva, y estar en Dicom, también pidió un préstamo, viajes, consumos, supermercados, tiendas, comparaba y compraba; que no tenía más ingresos que los de su trabajo, y después por los fondos del delito; que la detuvieron el 2021, y lleva un año tres meses privada de libertad más o menos; que se mantiene porque es jubilada y tiene su pensión.

Ante preguntas de su defensor, señaló que actualmente tiene una pensión, y ha recibido ayuda de su hermano y cuñados y cuñadas para mantenerse durante el período que ella y Pedro estuvieron sin plata; que uno es jefe de una empresa de montaje industrial, su hermano tiene un mimimarket y cuñadas tienen un negocio de abarrotes; que en esta causa, ha intentado reparar el mal causado, con un monto de más o menos 20 millones de pesos al parecer, que sus cuñadas con su hermano lo reunieron para reparar el mal, hermano Erwin, cuñados José, María y Carmen, Virginia, y Luzmira Ravanal.

Que la primera vez que cobra un cheque fue en los primeros días de octubre del año 2017, el día 4, una vez que se enteró de la situación a fines de septiembre; que luego de enterarse de la situación hizo todos los registros y documentos, se puso nerviosa, porque no sabía qué hacer y concurrió a la oficina que está oficina por medio y le contó a Pedro Paredes lo que había



descubierto, y él le dijo que tenía problemas económicos y que también se iba a sumar a los cobros, y en ese tiempo Paredes estaba físicamente en el tercer piso de calle Toro, y el señor Cabello estaba en el segundo piso; que esto ocurrió en la oficina de Pedro Paredes, y una vez que tiene la conversación con Pedro Paredes, ella va donde don Alejandro y le comenta la situación de lo que había descubierto y él dice que estaba en su derecho de denunciarlo, y ella no lo hizo porque era una buena oportunidad para tener dinero y pagar sus deudas; que va a la oficina de Cabello, y en cuanto a Paredes, cree que éste tuvo conversación con Cabello, porque después le trajo un documento para que ella se lo firmara; porque Paredes, ya había hablado con don Alejandro sobre la situación y que él también iba a cobrar, era una orden de compra que se sacaba de los archivos que estaban en el baño del departamento de finanzas, que era de un proveedor, y era una orden de pago de años anteriores, ya pagada, venía con su factura y legajo completo, y era para hacer una nueva orden de compra, ingresándolo como un gasto nuevo en el sistema, y al ingresarla se emite la orden de pago y posteriormente el cheque, y una vez que está el cheque se hace el comprobante contable y se registraba en el sistema; que a esa fecha de octubre de 2017 tenía una relación igual con los tres, Paredes, Cabello y Rojas, por los años que llevaban en la institución, pues todos trabajaban juntos; y le comentó primero a Paredes lo descubierto, antes de comentarle a Cabello, debido a que habían alumnos en práctica en su oficina, y porque se había ingresado otro trabajador con el cual no tenía la confianza suficiente para comentarle lo que había descubierto, y se dirigió a donde Paredes con quien había trabajado desde el año 2000 hasta el 2012 o 2013, porque después llegó Alejandro Cabello, con quien también había trabajado antes cuando era administrativo, que cuando trabajó con Paredes, trabajaban en Aníbal Pinto 360, en el departamento de Finanzas del área salud, y ella cumplía función administrativa y Paredes era el jefe del departamento de Finanzas, por lo que en ese periodo él era su jefe; y después del año 2012 o 2013, cuando ellos se cambian a Gabriel Toro, a Paredes lo asigna como jefe de control y proyectos en Gabriel Toro 49, y a esa época que lo cambiaron, trabajaban los tres en el mismo edificio y después a Paredes lo cambian a calle Señoret, porque lo cambió el señor Domínguez, pero no tiene seguridad del año; que Cabello antes había trabajado en la DAS, en un primer período en fecha que no recuerda, pero era administrativo, y no era su jefe en ese período, sino que su jefe parece que era Pedro Paredes.

Que en cuanto al pago de proveedores, señala que siempre se trataba de pago a proveedores que ya se habían realizado efectivamente; siempre actuó con la convicción que todas las facturas eran pagadas; que cuando ella se involucra en los hechos, los talonarios de cheques, en relación con las firmas, en los períodos anteriores que trabajó en la DAS, entre años 2000 a 2016, los cheques se manejaban siempre en la parte de salud la documentación o chequeras estaban firmadas en blanco.



Respecto a la caja fuerte, estaba en el tercer piso, al lado de su escritorio, y para acceder a ella, tenían acceso en primera instancia, cuando Pedro Paredes era jefe, él tenía la clave y se la enseñó a ella, y después ella se lo dijo a Alejandro, y por ello eran los 3 los que tenían la clave, pero últimamente solo la ocupaba ella y don Alejandro; que no había una resolución administrativa que la hiciera cargo de esa caja, las funciones eran de palabra, pero nunca una resolución.

En cuanto a la repartición del dinero, el dinero que se obtuvo durante todo el período se dividió entre Paredes, Cabello y ella, en partes iguales; que cuando Pedro Paredes cobró alguno de los cheques que aparecen en el juicio, su parte del dinero cobrado por Paredes, se lo entregaba don Alejandro; y cuando Ravanal cobró los cheques, ella le entregó el dinero a don Alejandro, y éste le entregaba la otra parte a Paredes, y ella se quedaba con una parte, porque era repartido en tres partes iguales; y en relación a Paredes, sabía que había recibido su tercio, por la confianza que tenía suponía que había sido así; pero más allá de esa confianza, de suponer, le consta que ello haya sucedido, porque debería haber sido así, por la confianza que tenían y porque todos tenían necesidades económicas, colapsadas por las cuentas, por lo que se debía hacer así.

Que ella tuvo la cuenta del Banco Estado donde le depositaban su sueldo, y una tarjeta crédito Visa, eran las únicas cuentas a su nombre; y en el caso de Pedro Ravanal, él tenía productos bancarios, y ella era adicional a sus cuentas, la tarjeta CMR, del BCI y Scotiabank, en que pagaban a Cencosud, ella nunca pudo tener tarjetas titulares porque estaba en Dicom, solo obtuvo la titular por intermedio de la Municipalidad para el depósito de su sueldo; que los cheques que cobraba Ravanal y ella, el dinero obtenido no llegaba a su cuenta, por lo que se cobraba el cheque, ella quedaba con el dinero efectivo por su parte que le correspondía, y ese dinero luego se lo gastaba, pagaba algunas deudas con esas platas de la DAS, las compras que hacían con Ravanal, lo hacían con las tarjetas, cuentas de BCI y a veces con cuentas suyas y cuando estaban copadas las empezaban a pagar con las platas de la DAS; que a la cuenta del BCI no tiene conocimiento de que dineros ingresaban ahí, que era cuenta de Pedro Ravanal.

Que Ravanal nunca tuvo relación con don Alejandro, nunca hablaban, y Alejandro nunca le pidió nada a Ravanal, y con Pedro Paredes tampoco tenía relación, Paredes sabía que Ravanal era su pareja, pero ninguna conexión; que cuando le cuenta a Paredes lo sucedido, éste le dice que él también iba a empezar a cobrar, y esa decisión de Paredes no pasaba por el beneplácito de nadie, era una decisión propia; que al hacer ella un cheque a nombre de Pedro Paredes, lo hacía porque Paredes pedía que se le girara un cheque y se le hacía; que girar y cobrar cheques lo podría haber hecho sin la intervención de las otras personas involucradas en los hechos; que siempre las decisiones importantes,



como el cobro de un documento alto se tenía que consultar al señor Cabello, y si este estaba con licencia médica o no iba a la oficina, se consultaba al director de ese tiempo Armando Domínguez.

Ante las preguntas de la defensora del acusado Paredes, señaló que ella estaba a cargo de firmar los cheques de las cuentas municipales, y Paredes no tenía la función de firmar o girar, no tenía la autorizada, y nunca fue una de las firmas registradas para firmar cheques, pero cuando fue jefe de finanzas, sí firmaba documentos, si tuvo autorización para firmar cuentas corrientes hasta que lo sacaron del cargo, que le parece que fue el año 2010; que cuando trabajaban en finanzas ambos, nunca fueron cuestionados por el manejo de las cuentas, o al menos nunca supo nada, que siempre se recibían reclamos por pagos pendientes, pero nunca se le cuestionó a ella; que en ese tiempo ella fue sancionada en un proceso administrativo porque se le extravió un cheque del talonario, el papel, no que se haya perdido la plata o que haya cobrado el cheque, y cuando le comunica el hecho al Director, se avisó la cuenta del extravío y se informa al banco, y se da aviso al periódico para las publicaciones por extravío.

Cuando fue elegido Henry Campos, éste pone a Domínguez en el cargo y a Juan Eduardo Garcés como jefe abastecimiento y como director subrogante, y comienza una persecución de Domínguez hacia Paredes, y la elección de Henry campos cuando llega con Domínguez fue en el año 2016 y Domínguez cambia a la oficina de calle Señoret al señor Paredes; pero los cobros irregulares de cheques comienzan el año 2017; que ella detecta esto a mediados del 2017 porque le consultaron una factura y la vio en el sistema y ahí se dio cuenta, que le consultaron por una factura quien no estaba pagada, y en el sistema aparecía pagada, y al pedir la imagen del banco para ver a nombre de quien estaban, se da cuenta que estaba a nombre de Alejandro Cabello, por lo que el cheque con el que descubre esto estaba a nombre de Alejandro Cabello;

Que escuchó en audiencia que Alejandro Cabello dijo que esto lo venía haciendo desde el año 2015, que él inició todo este sistema; que de estos cobros que hizo Cabello no recibió participación alguna, y no puede responder por Pedro Paredes, no lo sabe si él recibió participación.

Que cuando conversó con Alejandro, la primera vez dijo que este la presionó para que se quedara callada, pero no fue así, estuvo mal asesorada por el abofado anterior, para que dijeran eso, porque con Paredes tenían el mismo abogado, Juan Ángel Jofré, ello en julio de 2019 cuando declaró por primera vez; pero un año después declaro el 2021 en el tribunal de garantía, y ahí dijo que cabello lo había presionado, pero ya no tenía el mismo abogado del señor Paredes, su abogado era Renato Zegpi, y ahí volvió a decir que Cabello la presionó para que guardara silencio; que tomó dos abogados, y ellos tenían la misma versión; y ahora tiene el mismo abogado que Cabello.



En sus declaraciones del 2019 y 2021, dijo que ella recibió el 10% de los cheques irregularmente cobrados, la primera vez cuando tomó esos abogados, le asesoraron que dijera que era el 10%, pero en realidad era en partes iguales, y esto lo dice ahora en el juicio, no se lo dijo a la fiscal el 2019 ni en la audiencia de tribunal de garantía el año 2021; siempre dijo que era el 10% de todas las personas, y después que era en tres partes iguales, que esto último lo rectificó en el tribunal de garantía, dijo que estaba mal asesorada, que la repartición era en partes iguales, nunca dijo en esa declaración que solo participó de los cheques cobrados por ella y Ravanal.

Con el objeto de evidenciar contradicción, se hizo uso de la herramienta legal respectiva, en relación a la declaración prestada ante el Juzgado de Garantía del 6 julio de 2021, en la que aparece que ante la pregunta de la fiscal de si respecto a la totalidad de los cheques por la que fue formalizada, obtuvo el 10% de todos los cheques; respondió que NO; que no recibía de los que hacía don Alejandro con Pedro Paredes; y que recibió el 10% de los cheques cobrados por su pareja y por ella.

Respecto a la totalidad de los 129 cheques, se enteró por el informe de Contraloría que eran alrededor de 412 millones de pesos, y que de eso se llevó un tercio, que serían como 120 a 130 millones, por la sumatoria y dividido en tres partes, y el dinero lo destinó en viajes, iban con Ravanal a Punta Arenas a ver el hijo de ambos, 3 a 4 veces al año, y se solventaban con dineros de la DAS, para comprar y hacer todo, arrendaron casa en Punta Arenas para quedarse, una semana o quince días, valor arriendo no se acuerda, que arrendaron una sola vez, porque después el hijo tenía casa, todos los viajes y estadías lo hacían con dineros sacados de la DAS, no tiene el valor de los viajes, nunca los tomó en cuenta, no veía lo que gastaba, que hacían excursiones, Torres del Paine, Cuevas del Milodón, Puerto Natales; contrataban tour por el día; Termas de Malleco y de Manzanar, fueron por un rato; todos viajes de placer, no se quedaba en hotel, iban por el día; también hizo muchas compras, se dio los gustos que nunca con sus ingresos se los había podido dar, compraba muchos perfumes, ropa, regalos, vinos, licores, cosas exquisitas; fue clienta de Antena 3D; que nunca tuvo consciencia de cuanto gastaba mensualmente, gastaba y pagaba; botas arriba de 120 mil pesos, zapatos caros, vinos, whisky; pagó operación de la vista en el Sanatorio Alemán, vía láser, por problemas por presión alta y glaucomas, se compró lentes caros arriba de 800 mil pesos, la operación cree que fue sobre 2 millones, no lo recuerda; se arregló dientes y se puso implantes dentales ella y Ravanal, debería ser sobre cuatro o tres millones de pesos, porque ella pagaba; que hizo regalos a Miguel Viveros, su hijo mayor, que es odontólogo, casado con Karina Vera, a quienes le regalaron plata para comprar un auto, un Peugeot 301; y al enterarse de la situación le quieren devolver el auto, se lo devolvieron; que cuando quieren devolver el vehículo, lo hacen traspasándolo a nombre de la hermana de Pedro Ravanal, y después el vehículo fue vendido, y ese dinero no lo



devolvió a la Municipalidad, porque se ocuparon para el consumo porque tenían muy bajos ingresos en esos momentos, y se ocupó en gastos de la casa; que no le pasó dinero a su hijo para que pagara el crédito hipotecario, que debería haber sido Pedro Ravanal quien le pasó dinero para comprarse un terreno en Tomé, la suma de 15 millones, que debería haber sido así, porque eso lo trataba con su pareja, pero ese dinero que le pasó a su hijo, no era el mismo de la DAS, fue un préstamo que Ravanal pidió en el banco.

Ella no adquirió una parcela en Ranquil, nunca tuvo parcela en Ranquil; y Pedro Ravanal compró una parcela en Ranquil en el año 2008 o 2009, como un proyecto de vida para los dos; pero después se construyó una casa en este período, empezó a construir por sus propias manos, por lo que no se invirtió dinero desde la DAS, porque se compró el terreno el año 2009, y se empezó a edificar; su pareja trabajaba en la empresa Sigdo Koppers, donde ganaba como \$1.800.000 a \$2.000.000, como supervisor, era relativo, no se recuerda hasta qué fechas trabajó allí, 2016 o 2017, había un negocio de sándwich de la hermana, que él administraba, se llama "RAVA" de Ravanal, que es de la hermana; que ese negocio no tiene noción de cuando se instaló o cuando comenzó su cuñada con el negocio, y Pedro Ravanal empezó a trabajar como el 2016 o 2017 en ese negocio. Pedro Ravanal pidió un préstamo para entregarle dinero a su hijo, y con los dineros de la DAS pagaron créditos que tenían, consumos del mes.

Respecto a las carpetas que dejó a la fiscalizadora de Contraloría, la primera carpeta, cuando a ella la suspenden de sus funciones, los señores fiscalizadores pedían una documentación, por ejemplo el día lunes y a ella la suspenden el martes, por lo que no se las alcanzó a entregar y les dejó la carpeta a nombre de ellos con los egresos que le pidieron, y en otra carpeta le azul, le puso "documentos pendientes", que tenía en el escritorio, en una repisa, la que tenía facturas sin sus legajos, sin sus respaldos, porque esas facturas se pagaban, porque Juan Garcés, que era jefe abastecimiento y director subrogante, le solicitaba que pagaran esas facturas, que pidió la información y le dijeron que se la iban a traer y no se la trajeron y guardó esa documentación en la carpeta azul, por lo que se refería al pago de ciertos proveedores, Ramiro Soto, Ormaj, Montblanc; y respecto de estos proveedores, se enteró después por la información de fiscalía, que no se habían entregado esos servicios o productos, y respecto de ese negocio ella no recibió nada de eso, no se enteró de eso; pero sí firmó los cheques con los que se pagaban a esos proveedores, porque venía Juan Garcés a decirle que habían llegado las platas y que ella girara los cheques y como él era el jefe y ordenaba porque se había acordado con la empresa, por lo que fue presionada por Garcés para pagar a esos proveedores, porque exigía que se le pagara, tanto Garcés, como director Subrogante, y también cuando estaba Domínguez, porque eran tratos que hacían con esos proveedores, pero no lo presionaba para firmar sin legajos



correspondientes; que guardó la carpeta como resguardo, para que en algún momento le trajeran la documentación que faltaba; tratos de Juan Garcés, y decían que había que pagarlos a ella y a don Alejandro, que no tiene responsabilidad en esos pagos, Garcés decía que se pagara, que ya habían llegado las platas o se hiciera transferencia; que fueron como tres veces, todo por orden de Garcés, que tenían como un convenio o amistad, porque andaba pendiente de las platas que llegaban a la Das para pagar esas facturas, que no sabe si se levantaron cargos a Cabello por este tema, cree que no; que Paredes no tenía nada que ver con esos pagos irregulares a proveedores, y tampoco participaba en ningún proceso de pago a proveedores, ninguna intervención para pagar a proveedores;

Cuando iba a explotar esto, va a conversar con Juan Garcés, le comentó la situación porque estaba a punto de explotar y le dijo que no se preocupara, que él lo iba a solucionar porque tenía personajes influyentes en la Contraloría que lo podían ayudar, y le dice que para qué habían hecho eso, si habían otras maneras de sacar plata, que debería haber conversado con él primero, antes de hacer lo que hicieron.

Que los 129 cheques cobrados, fueron confeccionados por ella, independientemente del nombre de quien fuera; que si quería girar un cheque no necesitaba avisarle a Paredes o Cabello, podía ir y sacar la orden de compra, elegir proveedor, confeccionar el cheque, y la firma de Rojas ya estaba en blanco, y habérselo pasado a Ravanal, y nunca avisarle a Cabello o Paredes, podría haberlo hecho, pero nunca lo hizo; pero en la situación inversa, Cabello o Paredes, no tenían que llegar donde ella, porque la chequera estaba firmada, si hubiesen querido sacarlos, no había impedimento, porque estaban firmados, y cualquiera podía hacerlo, sin perjuicio que todos los documentos están con su letra y firma; por lo que ella hacía los cheques, pero no se imaginó la cantidad de cheques que habían hecho o los que habían cobrado, solo se enteró por la fiscalía, por el proceso en cuestión, porque no llevaba un control, pero todos los llenó y firmó.

Las órdenes de compra correspondían a proveedores que ya habían sido pagados, y los reclamos de proveedores que no habían sido pagados los recibía el director y se los transfería al jefe de finanzas; en todos los cheques cobrados, alguno pudo corresponder a orden de pago no pagada, como de la que se dio cuenta en el sistema cuando descubrió a don Alejandro, que fue la única; que de la información de cuáles proveedores habían sido pagados, los tres que participaron en el delito, tenían acceso, las facturas eran del 2013, 2014, 2010, diferentes fechas, pero antiguas; se tomaban facturas de esas fechas que aparecían pagadas el 2017, información que estaba en el sistema modular contable, y la responsable en ese periodo de registrar la información en el



sistema eran ella, Cabello y otros funcionarios, pero Paredes no tenía perfil para hacer ese registro en el sistema porque pertenecía a otro departamento.

Ante una pregunta aclaratoria del tribunal, refiere que traslado de paredes a calle Señoret por Domínguez debió haber sido el año 2016; que cuando se enteró de esta situación, le fue contar a Paredes que estaba a una oficina por medio de la suya, que el descubrimiento fue a mediados de septiembre de 2017, y a esa fecha Paredes todavía tenía oficina en calle Toro, por lo que se equivocó en cuanto al año del traslado de Paredes.

NOVENO: Que, renunciando a su derecho a guardar silencio, el acusado **Pedro Ravanal Mellado** prestó declaración en la oportunidad referida en el inciso tercero del artículo 326 del Código Procesal Penal, señalando que sus estudios son cuarto medio, su actividad laboral la desarrolló en montaje industrial, en faenas por diversos partes del país, y últimamente en un local de comida rápida; que reconoce los delitos de que se le acusa, lo 86 cheques que cobró a su nombre, a petición que le hizo Nubia San Martín, que en principio le dijo que era parte de su trabajo, y al pasar los días le dijo si podía seguir cobrando y accedió a su petición, para ello la llamó por teléfono, asistió a su oficina, se acercó al banco, se juntaron a la hora de almuerzo y le entregaban los dineros, en su totalidad, excepto las monedas, solo le entregaba los billetes; su nexa para hacer esto fue solo Nubia, no conoce a las otras personas, en el sentido de personal, sino que como compañeros de trabajo de ella, como jefes de ella; que respecto a los cobros, siempre fue al banco nunca le pusieron obstáculos para cobrar los cheques; no niega que hizo uso de los dineros, pues pago créditos bancarios, casas comerciales que no podía solventar con sus ingresos, también compró auto, realizaron viajes, fue al dentista, consumieron cosas en restaurantes, en cosas que nunca podrían haber probado, quesos, vinos de alto valor; que está arrepentido de lo que hizo, como hombre, padre, esposo y abuelo, porque sabe que no debería haberlo hecho nunca, a las personas que le ha hecho daño, personas de Talcahuano, familias que lo han pasado súper mal; ellos como pareja que están incomunicados más de un año, sin poderse ver y hablar, los nietos que se desaparecieron, les pide disculpas.

Ante preguntas de la fiscalía, indica que reconoce haber cobrado 86 cheques a su nombre, está claro de lo que hizo; que Nubia lo llamaba, y él iba a la oficina de ella, iba durante la mañana, ingresaba al tercer piso donde estaba la oficina, y en la oficina se encontraban unas dos personas más, entre las que no estaba el señor Cabello ni Paredes; que todos los cheques los recibió de manos de la señora Nubia en su oficina, aunque a veces, alguna oportunidad bajó ella al estacionamiento, en la calle, donde estaba él, no le paso documentos en la casa que compartían; que luego iba al Banco Estado a cobrar el cheque, no siempre a la misma sucursal, porque a veces en Talcahuano estaba muy lleno, se dirigía Concepción, a Collao, Bío, donde hubiera menos gente, y luego ese mismo día volvía a la hora que fuera a entregarle el dinero a la señora Nubia, y



la entrega del dinero se producía a la hora de almuerzo, donde estaban almorzando, habían unos locales en Colón, cerca de la oficina, dos o tres cuadras; que al entregar el dinero, estaba Nubia siempre sola, y le entregaba dinero, y se quedaba con las monedas, refiriéndose a solo monedas, al metal; que en relación al conocimiento del cobro indebido de cheques, no sabía que era ilícito, en los últimos tiempos supo que era ilícito cobrar un cheque municipal, de lo que se enteró en los últimos momentos, en el proceso de investigación y cuando estaba escuchando a las mismas personas, ahí supo que un documento con logo municipal no lo podía cobrar un particular, que el hecho que fuera un cheque con logo municipal, porque antes sabía que era un documento no e iba a cobrarlo como cualquier documento; que pudo ver los documentos, que al cobrar un cheque en el banco, anotaba el Rut al reverso del cheque, y el número de Rut lo anotaba él, que en la parte posterior del cheque tenía un timbre atrás al parecer, luego dice que atrás del cheque iba solo su Rut, que no tenía nada, solo ponía su Rut; y en la parte frontal del cheque, vio que en los 86 cheques decía Ilustre Municipalidad de Talcahuano; que conoce la firma de doña Nubia San Martín, y vio que en los 86 cheques estaba estampada la firma de ella; que es pareja de doña Nubia hace más de 35 años, que conoce la letra manuscrita de ella, y pudo corroborar que los 86 cheques habían sido llenados por ella; que cuando iba a la oficina de Nubia al Departamento de Salud, entraba a la oficina de ella, y la puerta de esa oficina tenía un cartel, que al parecer decía “Finanzas”, aunque luego dice que no lo recuerda si tenía un cartel; que sabe que Nubia trabajaba en el departamento de Finanzas de la Das; sabía quién era el jefe de doña Nubia, don Alejandro Cabello, y que su jefe anterior fue Pedro Paredes, y había una Romina mucho antes; que personalmente no conoce a Cabello, pero si como compañero de trabajo de Nubia, cree que no debería tener en número de teléfono de don Alejandro Cabello, y en su agenda telefónica no tenía el número de teléfono de Pedro Paredes, a lo mejor en el último tiempo, cuando se suscitó la cuestión, al término, pero antes no, porque abogado a lo mejor; como en julio de 2017 tenían el mismo abogado que los estaba representando; luego dice que fue después, el 2018 cuando los empezó a representar, cuando empezaron a compartir el abogado Jofré.

Los pagos que refiere no son con las monedas que se quedaba, sino con los dineros que Nubia traía a casa, de ellos hacía uso; pero directamente no se quedó con parte de los dineros cobrados por caja; sino de los que Nubia traía a casa, que no tiene la cuantía de cuánto dinero pudo haber sido.

Pagó créditos con el dinero, todos sus gastos empezaron a salir de esos dineros, porque él ya no ingresaba aportes a la casa, por otros temas, y todas sus tarjetas de crédito y gastos los sacaban de esos dineros; eran créditos de consumo en el BCI, iba pagando cuotas, algunas de 125 o 250, uno de 300 y tanto; no tenía crédito hipotecario, puede ser a lo mejor en otra tarjeta, del banco Falabella, puede haber otro crédito, que en Falabella tenía cuenta



corriente, había otro crédito de consumo, que pagaba las cuotas con esos dineros; compró un auto, Peugeot 301 que se lo pasó al hijo grande a través de la nuera Karina Vera; lo compró e inscribió a nombre de Karina Vera, compra que fue el 2019, que fue comprado con un cheque suyo y dos de Nubia, pero fue cubierto con el dinero que le pasaba Nubia, al contado; en cuanto a viajes, refiere que fueron a Punta Arenas casi dos veces al año, pasaron un Año Nuevo por esos lados, Punta Arenas y Puerto Natales, siempre juntos con Nubia y en avión, que arrendaron una casa antes que su hijo tuviera su casa, lo que fue cuando empezaron a ir a verlo, no fue producto de esos dineros; que también fueron en auto a Quilpué, Villa Alemana; que todos los viajes fueron solventados con los fondos que provenían de la Municipalidad de Talcahuano, no sabe cuánto gastaban en cada viaje, pero por cada viaje gastaban millones, por costo pasaje, y todo lo que comparaban; puede estar cerca de los dos millones por viaje.

Ha prestado dos veces declaraciones, una en julio de 2019, otra ante el tribunal de Garantía el 2021; que el 2019 no sabía cuántos documentos había cobrado, pero le reconoció la cantidad de documentos que le exhibió que estaban a su nombre y le ratificó que los había cobrado; que en ese momento desconocía cuantos documentos había cobrado, y que la fiscal le exhibió cheques, y los reconoció todos como cobrados por ella; no recuerda cuántos cheques le fueron exhibidos en esa oportunidad, pero fueron mucho menos de 86 cheques; que seguramente le preguntó por la totalidad de cheques, pero no sabía la cantidad de cheques que había cobrado; que en esa declaración en relación al conocimiento que tenía a la fecha de los hechos en relación a la ilicitud del cobro de los cheques, parece que le dijo que no sabía que era ilegal; que la expresión “palo blanco” es cuando ocupan a un apersona para que haga un cobro o que vaya a cobrar un documento; que en su declaración de 2019 en una oportunidad dijo que era un “palo blanco”; y cuando le preguntaron si él era utilizado para el cobro de cheques como algo ilícito no recuerda lo que le contestó.

Que luego del ejercicio de refrescar memoria con su declaración de julio de 2019 y de leer la parte pertinente de la misma, manifiesta que recuerda que dijo que don Alejandro le había propuesto a doña Nubia para cobrar documentos, que podía ser cualquier persona.

Que su nombre dijeron que Alejandro cabello propuso su nombre, pero lo dijeron por asesoramiento, y luego dice que él dijo, no plural, y la verdad es que Nubia le pidió si seguía cobrando; que la verdad es la que dice hoy, pues no sabía que era un delito.

Que la primera vez que va a cobrar un cheque fue en octubre de 2017 y la última fue en el año 2019, marzo o abril; que en alguna oportunidad que fue a cobrar los 86 cheques, se acercaba, daba su documento, pedían carnet, chequeaban y le pagaban, sin ningún problema, nunca le dijeron que no podían



ser pagados; que chequeaban, llevaba documento, lo ingresa a otra oficina, vuelve y le pagaban documento, el cajero no le dijo que tenían que llamar a la municipalidad para poder pagar el cheque.

Que no realizó otras compras a nombre de terceras personas; que desde el año 2017 en adelante sus ingresos eran el mínimo, recibía el sueldo mínimo por el local de comida rápida "Ravasandwich" que es de su hermana, él no es socio de ese restaurant, y ese es su único ingreso desde el año 2017 en adelante, el sueldo se lo pagaban en efectivo, los días 30 del mes, y el sueldo lo incorporaba a los gastos de la casa, no lo depositaba en sus cuentas, se quedaba con el dinero en efectivo; nunca deposito en sus cuentas parte de su remuneración; la última vez que recibió un sueldo de dicho restaurante fue hasta los últimos días que fueron presos, en enero del 2021; que desde 2021 a la fecha no recibe ningún ingreso.

Que no recuerda qué dijo en su primera declaración en relación al uso del dinero, recordando luego que dijo que no lo había usado, pero no era cierto; que también declaró ante el tribunal de garantía, cuando ya estaba en el Manzano, y ahí tampoco dijo nada en relación al uso del dinero, no dijo nada en qué habían ocupado los dineros; que con doña Nubia se gastaron todo el dinero, que estima que se gastaron los 140 millones de pesos; que la última vez que cobró un cheque en la municipalidad de Talcahuano fue en marzo de 2019, y la fecha en que terminaron de usar todo el dinero fue el 2020; que de alguna manera cree que ha cooperado con la investigación, cuando declaró dijo que Nubia guardaba unos documentos en la casa; y cuando vinieron los señores de la PDI al ingreso de la casa cree que fue producto de su declaración, que le pidieron su celular, su computador y accedió a entregárselos con su clave cuando tenía, pero el computador no tenía su clave, se abría y se podía ingresar a su correo y al correo de Nubia, era un computador Samsung, porque el otro estaba guardado y "se le fue a negro", y él lo usaba; que en su primera declaración dijo que Nubia guardaba documentos y dinero en una caja de fondo que tenían en la pieza y en una caja chica de seguridad tenía el dinero, lo que declaró con la idea de colaborar; que en cuanto a la entrega del celular y del computador, esa solicitud se produjo después que hizo su declaración, porque terminando la declaración llegaron a la casa los señores de la PDI, lo entregó en la entrada y registro, pero ellos traían documentos de entrada y registro, y cuando estaban adentro le preguntaron si podían llevar celulares y dijo que sí; que el computador no tenía clave, y había uno de sus celulares que tenía una clave.

Que desde el 2020 que no recibe remuneración alguna; que ha depositado en la causa con aportes de familiares, ha devuelto algo de lo sustraído, como 20 millones de pesos; como cantidades no sabe cuánto fueron depositados, sí sabe que fue aporte mayormente de su hermano José Ravanal Mellado, y a medida que han podido hacerlos sus hermanos, que su hermano José que trabaja en el



norte, y él con su sueldo, ahorros y su 10% ha podido respaldarlo; por lo que los 20 millones provienen en su totalidad de lo que su hermano José aportó, y sus hermanas María, Virginia y Carmen pusieron dinero en la medida de sus posibilidades; que los dineros depositados pasaron a través de su cuñado Erwin San Martín que tenía una cuenta en el Banco Estado parece.

Que sabía que Cabello era el jefe de Nubia y Paredes había sido el jefe, pero él no los conocía personalmente, pero si los conocía como compañeros y jefe de Nubia, nunca hablaba por teléfonos con ellos en esa época; no se enviaba mensajes de texto con ellos.

Que respecto de estos dineros, a veces depositaba en su cuenta del BCI, de CMR de Falabella, y la Cencosud, de Almacenes Paris; ahí depositaba el dinero que Nubia traía a casa producto de los cobros de los cheques, no las monedas; que de ese dinero proveniente de la Municipalidad, le pagó una cuenta a una sobrina Cristina San Martín Pincheira en el banco Scotiabank parece, porque estaba en aprieto, una cuota de como 4 millones de pesos, que le hizo un depósito con ese dinero, con un cheque suyo de la cuenta del BCI.

Ante preguntas de la querellante, señaló que con la señora Nubia tenía una relación de 35 años aproximadamente y que la echaba de menos de hablar con ella por este período separado por las prisión de libertad, que internamente se vieron dos veces, en junio y en enero, como cada seis meses, con todos los trámites internos, se vieron como media hora, y a veces coincidían los sábados y podían conversar un rato, y lo demás puros mensajes por intermedio de familiares que la llamaban, que hace rato que no la ve; que tienen un hijo en común, al hijo grande, Miguel, lo conoció de chico y estuvieron hartos años con él, y después nació Mauricio, pero su relación con Nubia, él siempre trabajo en montajes afuera, turnos de 20 por 10, y contactos por teléfono, la ama y la adora; no conocía mucho los detalles del trabajo de Nubia, sabe que trabaja en la Municipalidad y hace funciones, pero no tiene detalles de qué hace, sabe el cargo, pero no sabe las cosas que tiene que hacer dentro de sus actividades, pero sabía que trabajaba en el departamento de Finanzas; sabía que tenía que firmar cheques para pagar, pero no sabía que tenía a cargo chequeras; sabía que se usaban las chequeras para pagar; sabía con quien trabajaba la señora Nubia, la jefatura era don Alejandro, y en la oficina sabía que había un niño que se llamaba Marcos, una señorita Priscila, se acuerda de ellos no más; que sabía que Paredes había sido jefe de la señora Nubia; que en las visitas al trabajo de la señora Nubia sabía quiénes eran ellos, los conocía, pero habían otras personas más, la señora Marta, Irene, y ella cuando bajaba la iba a buscar.

En esta relación con Nubia, cualquier cosa importante que le hubiere pasado en términos generales se lo habría contado, pero no sabía que la habían sumariado antes; que si ella hubiere descubierto algo relevante, grave en su trabajo, cree que sí se lo habría contado a él; pero ella no le contó del hecho de



haber descubierto lo del cheque a nombre de Cabello, cree que porque tenía que ver qué pasaba en su trabajo, directamente no le contó; que es parte del trabajo de ella, de su trabajo no tenía conocimiento de cómo realizaba su trabajo, y por eso piensa que se lo comunicó a la persona más cercana, y por eso se acercó a Paredes para contarle; que él nunca se enteró que el cobro de los cheques que cobraba era algo ilícito, al principio no sabía que era algo ilícito, que no se debía hacer, cuando le pidió le dijo que tuviera cuidado de lo que estaba haciendo, no quería verse involucrado en cosas negativas, más allá de estar cobrando cheques, que le dijo eso a Nubia, cuando ya se empezaron a cobrar los cheques, no los primeros, tercer o cuarto cheque le dijo que tenía que tener cuidado, porque él no se quería ver involucrado más allá de ir a cobrar los cheques, que eso se lo dijo porque supo que cobrar los cheques no correspondía en ese momento de su parte; pero siguió cobrando los cheques, porque ella le dijo que necesitaba para no verse expuesto nombre en el cobro; finalmente cobró 86 cheques, cuyo monto total no los recuerda, variaban entre \$2.200.000, \$2.500.000, \$2.800.000, eran diferentes montos; que cuando le dice a Nubia que no está bien, que no se quiere involucrar, la señora Nubia no le da explicaciones de cómo ella estaba haciendo ese tipo de gestiones, no le dice cómo era; la verdad es que no le dice cómo hacía las cosas para obtener el cheque a su nombre, no se lo dijo, no sabe cómo es;

Ante preguntas de su defensor, señala que no sabía cuál era el procedimiento para pagar a proveedores de la Dirección de Salud de Talcahuano, no sabía que era un legajo, ni qué era una orden o decreto de pago, ni orden de compra; no sabía en qué lugar o edificio se guardaban los documentos asociados a los pagos de la DAS; que en cuanto a cuándo supo que esto de cobrar cheques era ilícito o ilegal, señala que cuando Nubia le pide el favor de cobrar documentos porque era para de su trabajo, no sabía que era algo ilícito, pero como a la semana le pidió que cobrara más documentos, ahí le hizo la advertencia, y le dijo ten cuidado con lo que estás haciendo, no quiero involucrarme en cosas mayores de las que estás haciendo, que él no quiere verse mayormente involucrado; que los documentos se cobraron entre 2017 y 2019, y en ese período de tiempo, el 2017 tomó conocimiento de aquello.

En relación al cobro de los cheques, Nubia la llamaba por teléfono, él iba a su trabajo, y después se acercaba al banco de Talcahuano, y si estaba muy ocupado, había mucha gente, se acercaba a los bancos de Concepción, de Collao, del Bío Bío a cobrar; en Collao era más chico y estaba más desocupado, y así ganaba más tiempo, y también le quedaba cerca de su casa; que luego de cobrar el cheque, se comunicaba con Nubia, y a veces se juntaban a almorzar y le entrega los dineros, y como tenía disponibilidad de horarios se acercaba a cualquier hora, a veces en la tarde a entregarle los dineros; y en cuanto a la entrega del dinero, siempre se lo entregó a Nubia, nunca se lo entregó a otra persona; y en cuanto al cobro de los cheques, los cobraba en efectivo a su



nombre, y solo un cheque fue depositado en su cuenta del banco BCI en Punta Arenas, en junio del 2018 cuando fueron a visitar a su hijo, cuyo documento le entregó Nubia, y desconoce por qué lo llevó para Punta Arenas, y se lo entregó, y él para no andar con dinero, lo depositó.

Que Paredes fue a su domicilio, a raíz del término de ellos, cuando fueron sacados por el sumario, que asistieron donde el mismo abogado Jofré, y ahí Pedro fue un par de veces a su casa, y con Alejandro no tiene contacto de visita de casas, que a dicho abogado lo conocía Nubia de antes, y Jofré al comienzo era abogado de él y de Nubia, y había empezado con Paredes al principio, pero parece que después no estuvo con él; y ese abogado trabajaba con Renato Zegpi.

Que no tenían bienes raíces; pero él tuvo una parcela, porque años atrás trató de postular a subsidios, pero no pudo porque con el dinero que ganaba él no postulaba a una ficha Cas, por lo que no pudo postular a subsidio, y con los años dijo que se iba a comprar un sitio y ahí iba a hacer su casa, que trabajando en el norte en las mineras, si bien se sacrifica, decidió comprar un sitio para comenzar a construir casa y encontró publicación en Yapu, y fueron a ver el sitio, le gustó, y como sabía que a Nubia le gustaba el campo, le dijeron que tenía que decidirse luego, le gustó y le dijo que se lo compraba, y empezaron los trámites y le compró el sitio, y con el tiempo fue comprando materiales de a poco, ladrillos, fierros, cemento y fue levantando la casa; el sitio está ubicado para la comuna de Ranquil, Ñipas, lo adquirió el año 2012, lo pagó en efectivo, porque era barato, casi 3 millones de pesos, con dineros de su trabajo en montaje industrial, porque lo bueno que tienen ellos es que en el montaje, los finiquitos son mejores que los demás, más los bonos; que se comenzó a construir de a poco, bajaba e iba a ver cómo iba la construcción de la casa, y le faltó un poco de dinero para terminarla y cerrarla, y ese apoyo se lo pidió a su cuñada Cristina Pincheira que le prestó como tres millones de pesos, y le dijo que cuando lo finiquitaran le devolvía el dinero, y ahí terminó la casa en el contorno para dejarla cerrada; que la casa no está terminada, le falta todavía, y él se despreocupó de ella, porque ya estaba cerrada, puso cerámica, cañerías, gasfitería; trabajos que se hicieron el 2013 o 2014; que en esa propiedad una oportunidad Nubia ofreció la casa y personal de la Das organizaron un evento y fueron a compartir a la parcela; fueron unas 15 personas, un verano, cuya fecha no sabe, pero fueron compañeros de Nubia, inclusive Alejandro con su señora, Marco, Cristina, Claudia, otros jóvenes; Loreto con su marido, y otras personas que no ubicaba que son compañeros de ella, e incluso al día siguiente llegó un jefe de ella; que ellos financiaron su evento, el grupo que fue organizó su evento, su asado, las cosas que llevaron, deben haber organizado sus cuotas, y Nubia solo ofreció la casa.

En cuanto a las cuentas bancarias, señala que Nubia tenía su cuenta independiente, y él sus cuentas corrientes BCI y Cuenta Falabella, y estas



cuentas son de como el 2010 o 2012, y del BCI es adicional Nubia, y también le hizo adicional a Mauricio cuando se fue a la escuela suboficial de Santiago, y en el Falabella tenía Nubia, y parece que a Mauricio también le hizo, porque tenía beneficios, porque él viajaba mucho; que él tenía dos cuentas, BCI y Falabella; que del BCI tenía adicional a Nubia San Martín y Mauricio, y del Banco Falabella, adicional a Nubia San Martín, la CMR, y Mauricio para viajes; no tenía otra cuenta de banco; que Nubia tenía una tarjeta adicional en BCI y de Falabella, debido a que ella estuvo o está en DICOM, por lo que no tenía acceso a ese tipo de tarjetas y no podía hacer compras en Falabella u otras tiendas porque no le daban, y a él generalmente le depositaban el sueldo, y ahí ella tenía acceso a la tarjeta para acceder a sus cuentas del BCI.

Los dineros por cobro de los cheques iban destinados a las dos cuentas, que cuando Nubia traía los dineros, generalmente no los depositaba al tiro, y cuando se veía que venían cobros o atrasos de las cuentas, él iba a depositar a las cuentas de BCI o Falabella, cuando salían los cobros de fin de mes; los dineros siempre a estas dos cuentas; que las compras de supermercado, ropa, generalmente se pagaba con tarjetas más que nada; y el dinero con lo que se compraba provenía del cobro de los cheques, el pagaba consumos básicos, bencina; en relación al destino de los dineros, generalmente tenían una vez al año un chequeo general, completo, exámenes de sangre, y él fue a una clínica de dentista, donde se hizo arreglos dentales, con varios implantes, y estima que gastó unos 20 millones de pesos, porque se hizo como 6 implantes, lo que se pagó dando un cheque suyo del BCI, que pagó, entre 4 y 5 millones la primera parte, y después lo demás fue depositando, pagando con dinero de los cobros de la DAS; en relación a la compra de un auto, se lo ofreció al hijo grande, un Peugeot 301, que compraron en Bruno Fritsch, que lo pusieron a nombre de Karina, porque Miguel estaba ocupado, y lo pagaron con un cheque suyo, y unos cheques de Nubia, y el dinero provenía de los cobros de cheques de la DAS, y ese auto costó como 10 millones de pesos, que después Miguel se enteró de lo que estaba pasando con la Contraloría con la mamá, y le preguntó por el auto, y ellos decidieron devolver el auto, se lo devolvieron, y lo recibieron de vuelta, y él se lo ofreció a una hermana, que le dijo que lo compraba, y se lo pusieron a nombre de ella, que con el tiempo no pudo pagar, comprarlo, por lo que se lo vendieron a otra persona como en 7 millones de pesos.

Respecto a la compra de un sitio en Tomé, es del hijo Miguel, quien hizo las gestiones y necesitaba el dinero, y si bien ellos son profesionales, en los bancos no le daban ese dinero, porque trabajaba con boleta, por lo que le ofreció a Miguel ayudarlo y él se acercó a su ejecutiva y le dijo que necesitaba \$15.000.000, y al ver que a él le costaba, pero pagaba, le prestaron ese dinero, y él se lo prestó a su hijo para la compra en Tomé, pero en definitiva no se llevó a cabo la compra, y Miguel le pidió si podía ocupar ese dinero en pagar la casa, y le dijo que lo ocupara no más; y con el tiempo vinieron las cuotas, y él empezó a



solventar la cuota y depositar los valores de las cuotas y pagarlas, y usó el dinero de los cobros de los cheques, y las cuotas eran como de \$330.000 pesos; que a parte de ese crédito de 15 millones, en el periodo de 2017 a 2019, no contrató otros créditos con bancos o casas comerciales.

En cuanto a un negocio que administraba, señala que se llama Ravasandwich, que antes era Mansosandwich, que su hermana adquirió el local con su esposo, pero empezó a decaer, y hubo reclamos, por lo que decidió cambiarle nombre a Ravasandwich; que en el año 2016 o 2107, el marido abandonó a su hermana y ella se enfermó y cayó en depresión y ya no se hizo cargo del negocio, y ahí él, que estaba sin trabajo, pudo hacerse cargo y empezar a comprar los insumos, y con el tiempo su hermana empezó a exigir dinero, y su hermano dijo que tenían que vender el local, y su hermana le pidió si se podía hacer cargo del negocio, y todo el traspaso del negocio lo hizo el contador de su hermana, pero fue una cosa de papeles, porque esto fue para que ella no perdiera el local, por lo que él fue en el papel dueño del local, pero no es el dueño, ni tiene ganancias del local, el que funcionaba de antes y aún sigue funcionando con ella; el local está a nombre de su hermana Carmen Ravanal, y un tiempo estuvo a su nombre; y ese local venía funcionando de antes, no hubo gestiones de dineros, no tiene nada que ver con esos dineros.

Que a Nubia nunca le ha visto una colilla de pago, estima que su sueldo era arriba de un millón de pesos, y en el periodo de 2017 a 2019, su ingreso era el mínimo, \$250.000, provenientes del local Ravasandwich; que entre fines de 2017 a fines 2019, gastaban como grupo familiar entre 4,5 millones mensuales.

En relación a sus declaraciones anteriores, una fue en julio de 2019 y otra en julio de 2021, y en una de esas oportunidades colaboró dando información de que Nubia guardaba documentos y dinero en su domicilio, ubicado en calle Tegualda 36 A, Concepción; lo que fue en su declaración del año 2019, que tuvo lugar como a las 9 de la mañana; que le dijo a la policía donde estaban los documentos, le abrió la caja de fondo, chequearon el dinero, lo contaron; su declaración terminó como al mediodía, y luego de ellos se fueron a la casa con Nubia, y estaban almorzando, tomando un café, que Nubia la acompañó y la esperó a fuera; que luego llegaron a la casa los señores de la PDI con una orden de registro y dijeron que venían a registrar la casa y a ver la caja de fondo donde él dijo que estaba el dinero, y le preguntan si la podía abrir, y él la abrió y accedió a todo lo que le pidieron; que en la declaración, a parte de la fiscal, había un señor Valenzuela de la policía, y en la tarde cuando ingresa la policía a su casa, venía el señor Valenzuela y otros que no conocía, y en cuanto a la caja en que dijo que Nubia guardaba dineros y documentos asociados a estos cobros, al llegar la policía le dicen que venían a ver la caja de fondos que había indicado y que le mostrara donde estaba y si la podía abrir, y él los llevó al dormitorio, y le indicó su ubicación y abrió la caja, que tenía clave que él manejaba, y dentro



de la caja encontraron un cheque rayado que tenía Nubia, y era de la municipalidad; y en relación a la caja en que había dinero, ellos dijeron que había que llevar el dinero, la sacaron y se puso en la mesa y se contó el dinero y fueron como dos millones de pesos, era una caja negra de unos 20 por 15 y 10 de alto, y el dinero que estaba allí lo había dejado Nubia, y el cheque que estaba en la caja de seguridad él parece que lo guardó, porque Nubia se lo pasó y él lo guardó; que Nubia no le dio una razón de por qué tenía que guardarlo, que cuando lo guardó estaba también rayado,.

Que cuando la policía ingresa a su domicilio, no le dicen que viene a buscar cual computador o celular, le dicen que van a llevar teléfono si tiene, y computador si tiene, y del teléfono que tenía clave le dieron la clave, porque en un oportunidad tenía clave uno, y el computador se abría y se accedía a correo de él y de Nubia, y el otro computador que tenía, se le “había ido a negro”, y no lo ocupaba; por lo que se incautaron dos computadores en su domicilio, uno es como plateado, Samsung, y el otro oscuro, tipo negro, Acer, y esos dos computadores, solo ocupaban el Samsung, él y Nubia, y el Acer estaba malo, no funcionaba al prenderlo; para acceder al Samsung, se prendía y accedía, porque no tenía clave de nada, se prendía y accedía a todo el contenido del computador; que ese computador tenía correos asociados a él y Nubia, incorporados; no tenía clave, se podía acceder directamente a ver los correos de ambos.

En cuanto a los teléfonos, en julio de 2019, habían dos teléfonos que estaban ocupando, uno cada uno, y había otro que estaba en la pieza, que desconoce si estaba bueno, fueron tres teléfonos. El que estaba en el dormitorio no se usaba, no recuerda su marca ni color. Los otros dos teléfonos los andaban trayendo ellos o podrían haber estado encima de la mesa; uno negro Samsung S9, y otro más tipo grafito, misma marca; uno más oscuro, que usaba él, el cual tenía clave de acceso “P”, la que tenía hacía tiempo, y cuando dijeron los funcionarios policiales que se lo tenían que llevar, le preguntaron si tenía clave, y les dijo que si, y se las dio, y la llevaron escrita; que a esa época desde su teléfono podía acceder a su correo electrónico, directo, abría el celular y ponía aplicación del correo y se abría; y también tenía la aplicación de whatsapp; y en relación al teléfono de Nubia, no sabe si estaba la aplicación de correo electrónico, pero si la tenía en el computador, y el celular de ella también tenía un número para acceder; y cuando policía fue al domicilio, Nubia entregó la clave para acceder al teléfono, porque ella se lo dijo y quedó registrado, anotado.

Que después de este ingreso de julio de 2019, cuando los llevaron detenido el 5 de febrero de 2021 estuvo la policía en su casa, y en esa oportunidad nuevamente había dinero, como \$300.000 o un poco más, y nuevamente se llevan sus celulares, otros; se llevaron dos celulares, uno usaba Nubia y el otro él; que eran del mismo A-10 Samsung, no se acuerda si había alguna diferencia



de color entre ambos, y el que usaba él era 984500049; que este teléfono no tenía clave para su ingreso, y tenía la aplicación de su correo electrónico; y el otro teléfono que ocupaba Nubia, el número era 981576190, tampoco tenía clave, y tenía whatsapp, y él también tenía esa aplicación.

En relación con sus cuentas corrientes, no recuerda que la policía le haya preguntado si accedía al levantamiento de sus cuentas; y en relación a si los autorizaba a que accederán a la información de su teléfono, tampoco le preguntaron; que en la declaración que dio en julio de 2019 se le exhiben varios, 20 o 25 cheques, a medida que la señora fiscal le iba mostrando, él les decía que eran suyos, la firma, y el número de Rut, que reconoció todos los documentos que le mostraron.

Que no sabía de cuanto era lo que se repartían, pero Nubia le dijo que era un tercio, lo que supo porque al cobrar los documentos y entregarle el dinero a ella, el dinero que traía ella a la casa era lo que correspondía al tercio de lo que él había cobrado, no sabe más detalladamente; y había oportunidades en que Nubia llegaba con dinero, que no correspondía al mismo día que él había cobrado el cheque; y los montos que traía en dinero en efectivo cuando no correspondía al día que cobraba, era parecido o similar a los que traía cuando él cobraba

Ante preguntas de la defensa del acusado Paredes, señaló que en relación a los abogados que tenían al inicio de la investigación estaba el abogado Juan Jofré, que era conocido de la señora Nubia, y después se sumó don Renato Zegpi, y el abogado Jofré al inicio fue recomendado al señor Paredes y durante un tiempo tuvieron un mismo abogado, quienes les asesoraron como estrategia que señalaran que del total cobrado obtuvieron el 10%, pero luego él señaló que eso no era cierto; que en un inicio la estrategia era que indicaran que Cabello había solicitado que él cobrara cheques, pero eso tampoco es verdad, ya que fue la señora Nubia quien le pidió que participara cobrando cheques; que ahora comparte mismo abogado con el señor Cabello; en cuanto a los contactos con los otros acusados, los ubicaba pero no había mayor contacto en forma personal, los conoce como compañeros de trabajo de Nubia, pero lo vio en su parcela al señor Cabello, pero Paredes no fue a esa reunión o evento que tuvo lugar el año 2017-2018; muchas personas se quedaron toda la noche; que del 2017 al 2019 no tuvo contactos frecuentes telefónicos con Cabello, ni le suena quien es Elson Lienlaf.

En cuanto a sus gastos mensuales entre el 2017 al 2019, los calcula en 4,5 millones mensuales, sin considerar los implantes mensuales; y la señora Nubia también se hizo tratamiento de implante, pero no sabe cuánto le salió a ella, pero fue mucho menos a lo que él gastó, pero ella puede haberse hecho uno, él se hizo varios implantes; que un implante son como \$1.000.000; que además se gastó el dinero en la compra de un vehículo en la suma de diez millones, y él pidió un préstamo que le pasó a Miguel, el cual después pagó con dineros de la



DAS, y eran un préstamo de 15 millones; que cada viaje a Punta Arenas costaba como dos millones de pesos, y se hicieron como 3 viajes entre los 2017 al 2019; pagó un crédito de \$3.700.000 que había sacado Cristina San Martín Pincheira, lo que hizo el año 2018, quien una sobrina que le pidió que la ayudara con ese pago; que él administraba, estaba encargado de hacer las compras de los insumos de comida para que funcionaria el local Ravasandwich, se pagaba a diario el sueldo a los trabajadores, lo que hacía la cajera según los registros; él no pagaba el arriendo del local, solo hacía compras de insumos para el local, y en la noche iba a dejar a los trabajadores; si constituyó una empresa individual limitada, que el contador hizo todas las gestiones para traspasar el local a su nombre, porque su hermana cayó en depresión porque su marido la dejó y él tuvo que hacerse cargo del local, y con el tiempo su marido le pidió dinero y que lo vendiera, y ella para no quedarse sin ingreso para alimentar a sus niños, se hizo la gestión por el contador, por lo que fue cabecilla del local, sin tener participación, sino que hacerlo funcionar como lo hacía antes, y él recibía del local un ingreso como \$250.000; que en su casa no tenían empleada doméstica, pero sí cuando vivía su suegra, había que atenderla en sus últimos años, la señora que trabajaba en su casa se llamaba Gladys, quien trabajó en su casa hasta después que falleció su suegra, quien falleció antes del año 2017; que la casa en que vivía con Nubia, era de su suegra, no se pagaba arriendo; todas las compras y pagos se hacían a través de su cuenta, porque señora Nubia era adicional de él en cuentas CMR y BCI, por lo que cuando Nubia contrató Yoga, eso lo pagaba ella, no sabe cuánto.

Que el total de los 86 cheques cobrados, no sabe cuál es el total, pero de ellos se llevaron un tercio, sabe que del total, que estimó que eran como 140 millones; por lo que si se suman todos los gastos debe dar una suma no superior a esos 140 millones.

Ante una pregunta aclaratoria del tribunal, manifestó que los viajes a Punta Arenas, fueron 3 en total entre los años 2017 al 2019

DÉCIMO: Que en la audiencia de preparación de juicio oral los intervinientes no acordaron convenciones probatorias.

UNDÉCIMO: Que para el establecimiento de los hechos de que en definitiva resultan responsables los acusados, este tribunal ha tenido en consideración la prueba de cargo rendida por el ente persecutor, la cual fue compartida por la acusadora particular y las defensas de los acusados, como lo son las declaraciones de los funcionarios de la Contraloría General de la República del Bío, testigos Mario Urrutia Sáez, Pablo Quezada Guenante y Roxana Núñez González, quienes estuvieron a cargo de las labores de fiscalización llevadas a cabo en la Dirección de Salud Municipal de Talcahuano (DAS), y que reunieron un cúmulo de antecedentes que dieron cuenta de las irregularidades de índole administrativa, contable y financiera que afectaba al



departamento de finanzas de dicha Dirección; antecedentes que por la gravedad de los mismos, y ante la posibilidad de que fueran constitutivos de delitos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Bío Bío para su investigación correspondiente; lo cual motivó que dicho ente persecutor dispusiera las diligencias del caso, entre ellas, la de entrada y registro a las dependencias de la DAS en la comuna de Talcahuano, las cuales estuvieron a cargo del funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, Alex Valenzuela Ortiz, conjuntamente con otros miembros de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de dicha policía, que también participaron en dicha diligencia intrusiva y las demás que se fueron decretando durante el transcurso de la investigación, como lo fueron los funcionarios José Miguel Rojas Barrientos, Gladys Lagos Reyes, Juan Carlos Estay González, Nicolás Arratia Reyes, Llubixza Lizama Rivera, Sebastián Zapata Monsalve, Cristian Torres Mercado y Luis Cárdenas Loyola; diligencias a través de las cuales se logró la incautación de la documentación contable y financiera atinente a los hechos investigados, principalmente, las órdenes o decretos de pago, documentación bancaria, como cheques, cartolas de las cuentas corrientes de la Municipalidad, las cuales fueron debidamente incorporadas al juicio; como asimismo comparecieron al juicio gran parte de los funcionarios municipales, del orden administrativo y profesionales, que a la época de los hechos se desempeñaban en la Municipalidad de Talcahuano, y específicamente en la DAS y en el departamento de finanzas, tales como Priscila Muñoz Candia, Marianela Chamorro Díaz, Mónica Vera Cionti, Manuel Rojas Ramírez, Juan Francisco Torres Vargas y Estefanía Estrada Rivas, e incluso el propio alcalde de la municipalidad en cuestión, Henry Campos Coa; a través de cuyos relatos el tribunal pudo enterarse de los procesos de pago de proveedores y de las funciones, obligaciones y responsabilidades de cada uno de los acusados, y en particular de las labores de custodia de los fondos públicos y de las sumas de dinero que en definitiva los acusados lograron sustraer de distintas cuentas corrientes de la DAS; lo cual se vio corroborado por los informes evacuados por la propia Contraloría General de la República que se incorporaron al juicio y de la cual también dieron cuenta los funcionarios de dicha entidad que elaboraron dicha documentación; como también se incorporaron pericias de índole fotográfica, caligráfica, informática y financiera, que contribuyeron a ilustrar al tribunal sobre las respectivas materias, particularmente en cuanto los distintos lugares, dependencias y domicilios desde donde fueron incautadas la gran mayoría de la prueba documental y otros medios de pruebas aportados al juicio, sobre los hallazgos encontrados en los dispositivos telefónicos incautados que fueron analizadas por los peritos; sobre la confección de documentos y trazado de firmas en los mismos; y en torno al cobro de documentos y abono o depósitos efectuados por los acusados en sus cuentas bancarias; como igualmente se contó con la documentación que dio cuenta de los decretos alcaldicios de nombramiento de los acusados que revisten la calidad de empleados públicos,



las pólizas de fianza suscritas en relación a algunos funcionarios de la DAS, y de las personas que tenían la calidad de firma autorizada, para los efectos de suscripción y giro de los cheques de las cuentas corrientes de dicha Dirección, entre ellas la acusada San Martín Pavez.

DUODÉCIMO: Que en cuanto al origen de la investigación de los hechos que motivan la presente causa, pueden señalarse los siguientes antecedentes y consideraciones:

1.- Que, conforme a los antecedentes entregados por el fiscalizador **Pablo Andrés Quezada Guenante**, el año 2019 se efectuó una auditoria en la Dirección de Salud Municipal de Talcahuano, la cual se inició por el plan operativo anual que hizo la Contraloría por el alto grado de denuncia de proveedores por el no pago oportuno de facturas y también debido al denominado ranking, dado el riesgo que conllevaba auditar la DAS de Talcahuano, por la no confección de las conciliaciones bancarias y alto grado de incongruencias contables que tenía según los informes que llegaban a la Contraloría, existiendo inconsistencias contables de variados tipos, que explicó.

Así, en cuanto al alto grado de denuncias de proveedores por el no pago de facturas a proveedores, señaló el referido testigo que eran principalmente denuncias de Laboratorios, explicando que recuerda que a la Contraloría llegaron denuncias del proveedor Munnich Pharma, que denunciaba un sinnúmero de facturas no pagadas según sus registros, también de Valtex, de Ethon Pharma, Recaline al parecer, que fueron como 7 proveedores, denuncias todas que eran del mismo tenor, por el incumplimiento del pago de facturas, que tenían cierta antigüedad, algunas eran del 2015 en adelante; y otras denuncias se verificaron en el portal de mercado público, pero no recuerda los nombres de dichos proveedores, pero eran por incumplimiento del plazo legal de los 30 días para pagar las facturas, que la DAS no estaba pagando oportunamente los documentos mercantiles; agregando que el otro factor para realizar la auditoria fue el denominado ranking, por la no confección de conciliaciones, explicando que la Contraloría tiene una unidad técnica de control externo UTCE, que se aboca a la planificación de la auditoria que luego ellos ejecutan cuando van a terreno, que la UTCE elabora un ranking con diversos insumos que pueden derivar para desarrollar una auditoría, que ranquean a los municipios con más riesgo para ser auditado, y entre ellos está el tema de la no confección de las conciliaciones bancarias, que corresponde al cotejó de la cuenta banco contable, y lo que dice el banco de todas las cuentas corrientes que maneja un determinado departamento o municipio; señalando que la UTCE sólo ranquean si un municipio tiene o no al día las conciliaciones, y luego en la auditoría propiamente tal ellos -los fiscalizadores- ven las diferencias y observan lo que encuentran en terreno.

Señaló que la auditoría comenzó el 6 de marzo de 2019, que el equipo estaba compuesto por él y Mario Urrutia, como fiscalizadores, y por María



Soledad Mendoza, como supervisora, que el objetivo era auditar el macro proceso de finanzas del Departamento de Salud de Talcahuano (DAS), hacer un examen de cuentas de los gastos del departamento, verificar o analizar las inconsistencias contables - entre las que señaló, saldos irregulares en el balance de comprobación de saldos, en que las cuentas de activo y cuentas de obligaciones, deben tener saldo deudor en el balance y tenían saldos acreedor-, las conciliaciones bancarias desactualizadas; hacer un examen de los gastos de los convenios que le llegan por Salud al departamento, los convenio APS de atención Primaria, y entre medio de la auditoria surgió el eventual fraude que detectaron, por el cual se hizo un examen netamente a la figura de los cheques y se amplió el período de la auditoría, porque inicialmente era del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, y cuando empiezan a detectar los cheques que estaban con figura de fraude, ampliaron al período comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de marzo de 2019;

2.- Antecedentes que se condicen con los aportados por **Mario Iván Urrutia Sáez**, en cuanto a la fecha de inicio de la auditoría, de la integración del equipo auditor, del origen de la misma y antecedentes relativos a los propios datos que manejaba la Contraloría y a la información rescatada del portal del mercado público, portal Chile Compras, agregando que ellos se constituyeron en la DAS de Talcahuano dentro de un macro proceso de finanzas, que en sí engloba efectuar un análisis financiero, que incluye examinar las conciliaciones bancarias del servicio, si están al día, bien confeccionadas y sustentadas, examinar una muestra de gastos y la composición de las cuentas contables, que estén bien registradas o imputadas, se examina que los gastos correspondan a lo que dicen los decretos de pago, que lo que se esté pagando esté bien registrado y que el pago llegue al proveedor, y que en el caso de la DAS de Talcahuano, las conciliaciones no estaban al día, como tampoco se mantenía un registro contable de la deuda con los proveedores, sin perjuicio que se mantenía una información en una planilla Excel aparte, en la cual se indicaba la deuda con proveedores, pero era una información que no estaba en la contabilidad, pues era como un ayuda memoria de que se le debía los a proveedores, explicando que cada vez que se recibe una factura por una compra de un bien o servicio se debe registrar en la cuenta presupuestaria por pagar, que corresponde a la cuenta 21522, y el sistema contable de la DAS de Talcahuano mantenía un saldo en la cuenta por pagar distinto a la realidad que se constató, puesto que sólo estaba contabilizada una deuda de unos 238 millones de pesos, en circunstancias que la deuda real eran de alrededor de 1.800 millones de pesos; aspectos estos en los que también se encuentra conteste el fiscalizador Quezada Guenante.

Que el fiscalizador **Quezada Guenante** también indicó que el tema de los cheques surgió en atención a que dado que había una alta tasa de reclamos de facturas impagas, se hicieron pruebas de auditoria que tienen que ver con realizar una circularización de la deuda, que significa que se pide al jefe de



finanzas o al director de departamento que le envié una carta a ciertos proveedores para que éstos contesten respecto de eventuales facturas impagas en el registro contable del departamento, que son los mismos que ellos mantienen en sus sistemas o contabilidad; por lo que se examinó la planilla que les pasó el señor Cabello, y se analizaron los 20 proveedores que figuraban con más deuda en dicha planilla y se les solicitó que ellos les enviaran sus deudas en sus registros contables, y les indicaran si esas facturas estaban pagadas o impagas en sus registros contables; y de los 20 proveedores, respondieron 6 proveedores; precisando que los 20 proveedores eran todos Laboratorios, y de los que respondieron se acuerda de Munnich Pharma, Laboratorio Recalcine, Etex Farmacéutica, Nipro, Laboratorio Andrómaco, Valtex; y existieron inconsistencias en estas deudas circularizadas con Etex, Recalcine y Nipro, pues ellos informaban de facturas impagas en sus registros, que al contrastarlas con los registros contables del DAS figuraban pagadas; ante lo cual con Mario Urrutia les envían correos a los proveedores para que informaran si esas facturas estaban pagadas en sus registros, y les respondieron que no; proceso o prueba de circularización respecto a la cual Urrutia Sáez entregó en general antecedentes totalmente coincidentes durante su declaración judicial.

Señaló **Quezada Guenante** que dentro de los primeros casos que analizaron fue una factura que estaba pagada al laboratorio Recalcine por \$3.677.000 y fracción, en que el proveedor decía que no estaba pagada y se le solicitó a Cabello Bustos obtener a través del banco copia del cheque para verificar a quién se le pagó, y se quedó a la espera de la respuesta; que Cabello se ausentó, presentó licencia médica y no apareció más, y auditoría continuó con Nubia San Martin, que pidieron los decretos de pago con los cuales se pagaron las facturas, ella se negaba en primera instancia a pasar los decretos, decía que estaban desordenados, y luego llegó el decreto de pago y decía que estaba pagado a laboratorio Recalcine, y se quedaron con ese caso, como un caso dudoso; precisando que para saber si una factura estaba pagada hay que ver en el decreto de pago si el pago se hizo a través de cheque o transferencia, y eso lo señala el decreto de pago, y en el decreto de pago salía pagado a través de un cheque; por lo que se pidió copia del cheque al banco a través del señor Cabello o la señora Nubia y quedaron a la espera; agregando que siguieron analizando y apareció el caso de una factura del Laboratorio Etex por \$2.677.500, respecto a la cual Etex decía que no estaba pagada según sus registros, y en los registros de la DAS estaba pagada, incluso dos veces con distinto número de factura en la contabilidad, alterado un número, dado vuelta, pagado dos veces en la contabilidad, por el mismo monto; y el pago de Etex, no recuerda si tenía decreto de pago; aparecía pagado según registros contables, el Mayor Contable de las cuentas de contabilidad del DAS, y en este registro contable, en el Mayor Contable de la cuenta de banco aparece el cheque utilizado para pagar la factura, cuenta que tiene código 11102, donde están todas las cuentas de banco



con las cuales se pagan cheques o cualquier documento que se pague; aspectos en torno a los cuales Urrutia Sáez agregó que Etex informó 6 facturas impagas, de las cuales 5 de ellas aparecían contablemente pagadas, pero una de ellas, por el valor indicado de \$2.677.500, aparecía pagada dos veces al proveedor, lo que quiere decir que se estaba haciendo un registro contable de una misma factura, pagando dos veces, pero que le cambiaron el número de factura en el decreto de pago para generar un nuevo cheque, pero el proveedor no recibió el pago, aparecía pagada en enero y después en abril del mismo 2018.

Lo anteriormente expuesto se condice totalmente con el mérito del cheque N° 9470749, de fecha 23 de marzo de 2028, de la cuenta corriente N° 527090052004 del Banco Estado; y del cheque N° 9710524, de fecha 20 de febrero de 2018, de la cuenta corriente 52709052161 del Banco Estado, ambos por el monto de \$2.677.500, acompañados mediante **Documental 111 N°3 y 108 N°17**; los que, respectivamente fueron girados nominativamente a Pedro Ravanal Mellado y Pedro Paredes Montoya, y cobrados por caja por ellos mismos; según consta en los mismos documentos; debiendo agregarse que el último de los cheques, figura consignado en el decreto de pago N° 275, de fecha 20 de febrero de 2018, por el cual se ordena pagar a Etex Farmacéutica Limitada la suma de \$2.677.500, consignándose que el pago con dicho cheque se hizo con fecha 20 de febrero de 2018, a cuyo respecto cabe resaltar que el decreto de pago hace referencia a que se está pagando la factura N° 106949, en circunstancias que dentro del legajo del decreto en cuestión figura una copia de la factura N°1036949, de fecha 9 de junio de 2015, por la suma de \$2.677.500, todo ello conforme se constata de la **Documental N° 212**; en tanto que el cheque 9470749, no figura asociado a ningún decreto de pago.

Que conforme al fiscalizador **Quezada Guenante**, también apareció el proveedor Nipro, con una factura por 3 millones 400 mil y algo, en la misma situación de Etex, que figuraba contablemente pagada, pero el proveedor decía que no la tenían pagada en su cuenta corriente, lo que fue en abril de 2019; que respecto de Recalcine solicitaron copia del cheque, y de Etex y Nipro también pidieron imagen de los cheques, pero lo hicieron de otra forma, porque en el aparato público los cheques se firman por dos personas, y los giradores titulares de las cuentas corrientes eran Irene Navarrete y Manuel Rojas, y los giradores suplentes eran Nubia San Martín y Claudio Morales, pero como Navarrete y Morales presentaron una cancelación a sus pólizas, al momento de la auditoría quedaban como giradores solo Rojas y Nubia; por lo que le pidieron a Manuel Rojas, quien tenía acceso a la cuenta corriente Banco Estado, que obtuviera copias de los cheques de estos casos. Que el Laboratorio Munnich Pharma también respondió la circularización, y fue quien también presentó denuncia ante la Contraloría por varias facturas no pagadas según sus registros, y de Munnich les salieron varios casos dudosos, proveedor que decía le debían alrededor de 94 millones y fracción y que le habrían pagado solo 32 millones en



el periodo auditado, pero en los registros contables del departamento figuran 96 millones y fracción pagados a Munnich Pharma.

Que en relación a la situación del proveedor Munnich Pharma, el fiscalizador **Urrutia Sáez** se explayó, manifestando que empezando el mes de mayo se recibe una denuncia de dicha empresa farmacéutica, la cual les adjuntó un listado de alrededor de 90 facturas impagas por parte de la DAS, y al efectuar el análisis de esa información, se percatan que alrededor de 28 facturas que decían estar impagas, contablemente la DAS las tenía registradas como pagadas; por lo que le escribe un email, pidiéndole que verifiquen las facturas que estaban impagas, porque los registros contables daban otra realidad, y Munnich Pharma respondió que siguen impagas y adjunta las facturas que estaban pagadas, alrededor de 35 millones pagados por DAS y que la deuda era de alrededor de 94 millones según registros; y como tampoco calzaban los pagos, deciden indagar donde estaba el problema y empezaron a verificar si el cheque había sido o no cobrado, y acceden a las cartolas bancarias y los cheques que decían que se habían pagado factura 1000 por ejemplo a Munnich, el cheque había sido cobrado por caja, lo que les llamó la atención, porque lo normal es que los cheques aparezcan cobrados por canje en las cartolas bancarias; por lo que siguieron revisando otros pagos a Munnich Pharma, y se percatan que otros cheques también estaban cobrados por caja, y luego vieron otros cheque pagados a Etex y también decían cobrados por caja, pero no tenían la imagen de los cheques de todos los pagos, pero en las páginas del banco existe opción de visualizar los cheques; agregando el citado fiscalizador, que en el caso del Laboratorio Recalcine, les indicaba que tenía una deuda de alrededor 18 millones de pesos, pero les llamó la atención que entre las deudas habían dos números de facturas por un monto aproximado de \$3.920.000, que el DAS tenía registrado como pagado, y al analizar y profundizar más con dicho laboratorio, constataron que contablemente se había emitido un decreto de pago, pagando dos facturas de \$3.927.000 aproximado, oportunidad en que se comunican por mail con Recalcine, indicándoles que según registros del DAS estaban pagadas esas dos facturas, y les respondieron que revisados sus valores en sus cuentas corrientes, dichas cifras no figuraban ingresadas a la cuenta corriente; antecedentes que se relacionan con la Orden de pago N° 1144 , de fecha 3 de julio de 2018, que precisamente dispone que se pague a Laboratorio Recalcine la suma de \$3.927.000, singularizándose el cheque 962121 en dicho decreto, conforme se constata con **Otros Medios de Prueba 42**, cuyo documento en definitiva aparece extendido a nombre de Pedro Ravanal Mellado por la suma indicada, y cobrado por éste, y no por Laboratorio Recalcine, según consta del mismo documento, acompañado por medio de la **Documental 108 N° 44**.

Por su parte, **Quezada Guenante** manifestó que dentro del listado de cheques que le pidieron a Manuel Rojas, en primera instancia salieron 7 cheques



que estaban pagados a terceras personas, no a los Laboratorios, sino que a Pedro Ravanal, un cheque pagado a Nubia San Martin, y otros cheques pagados a Pedro Paredes, que era un funcionario del departamento de Salud, precisando que esta situación de los 7 cheques fue el 17 de mayo de 2019, y que por ello se hizo un análisis del Libro Banco Contable en la tabla en Excel de la cuenta 1102, con las cartolas del banco que tenían en Excel porque las pidieron, y se analizaron pagos a Laboratorio con cruces de información, de cheques que eventualmente podrían ser dudosos, dada la existencia de los 7 cheques iniciales detectados, y fueron donde Manuel Rojas y empezaron a ver en la pantalla del computador los cheques que se le indicaban, que fueron como entre 50 o 60, y aparecieron 18 cheques más, pagados a estas personas, los cuales estaban firmados por Manuel y Nubia; agregando que estos 25 cheques en total sumaban alrededor de 66 millones de pesos y fracción, por lo que hablaron con la supervisora María Soledad, con la jefa de control externo Roxana Núñez, y también con el Contralor Regional de ese momento, quien les dijo que hicieran una minuta para presentarla al Ministerio Público, la que hicieron el 22 de mayo, en la cual señalaba la existencia de los 25 cheques por 66 millones y fracción, y el Contralor Regional habló con el Contralor General señor Bermúdez, quien viajó a Concepción y entregó el 28 de mayo la minuta en cuestión, que incluía los 25 cheques pagados en forma irregular a terceras personas, y no a los proveedores, de los cuales se adjuntaron las copias, precisando que solo 12 de dichos cheques estaban con el decreto de pago que señalaban que estaban pagados a proveedores, pero que él no sabe si los 25 estaban todos pagados sin pago al proveedor, pero de las que vieron estaban todas pagadas a terceros sin pagos al proveedor, ello dada la falta de los decretos de pago para poder visualizarlos y por la respuesta de solo 6 proveedores.

El fiscalizador **Quezada Guenante** también señaló que en este proceso de fiscalización no podían revisar todos los cheques, sino solo los que aparecían con negrita, los que se podían pinchar y obtener la imagen del documento, y que obtuvieron como 16 cheques más, y de los otros que tenían dudas pidieron a través del alcalde que solicitara al banco la obtención de 99 cheques más, de los cuales 88 de ellos eran pagados a estas personas, contemplando así 104 cheques más, apareciendo un cheque girado a nombre de Alejandro Cabello por 3 millones y fracción; información ésta que se condice con el cheque N° 1344003, por la suma de \$3.476.457, debidamente acompañado mediante la **Documental 108 N°63**, y que por lo demás se encuentra asociado al Decreto de pago 1594 , contenido en **Otros Medios de Prueba 2**; agregando el funcionario que en definitiva se obtuvo un total de 129 cheques por 412 millones de pesos y fracción, de los cuales 1 cheque estaba girado a nombre de Alejandro Cabello, por tres millones de pesos y fracción; 7 cheques a Nubia San Martín, por 17 millones y fracción; 35 cheques a Paredes Montoya, por unos 111 millones de pesos y fracción; y 86 cheques a Ravanal Mellado, por 279 millones de pesos y



fracción; que de la mayoría de los 129 cheques, 111 eran de la cuenta que terminada en 2161, que era de Aporte Municipal.

Que los antecedentes referidos se encuentran en total consonancia con los entregados por **Urrutia Sáez**, quien al respecto indicó que al momento en la DAS habían solo dos firmas autorizadas operativas para firmar cheques, Manuel Rojas y Nubia San Martin, los cuales también tenían acceso para ingresar a página del Banco Estado, por lo que el 17 de mayo le solicitaron a Manuel Rojas que les mostrara e imprimiera el cheque al que podían acceder, y se dieron cuenta que el cheque que debería estar girado a Munnich, estaba girado a una persona natural distinta de Munnich, de nombre Pedro Ravanal Mellado; luego le pidieron imprimir imágenes de otros cheques cobrados por caja, y salió cobrado por una persona en particular y no la empresa, por lo que ese día 17 de mayo se dieron cuenta que habían cheques cobrados por Pedro Paredes, que es ex funcionario de la DAS al día de hoy, otros por Pedro Ravanal, de quien se desconocía quién era, y cheques cobrados por Nubia San Martín; de manera que a la fecha señalada ya obtienen información que habían pagos irregulares, porque el proveedor no los había recibido, y los cheque cobrados, por funcionarios o alguien externo que desconocía, y el 20 de mayo formaron un número mayor de casos de cheques cobrados por caja, y se dieron cuenta que no solo esta situación ocurrió con Munnich y Etex, sino que también con Laboratorio Andrómaco, y Laboratorio Chile, en el cual contablemente aparecían que se había girado a estos proveedores, pero al ver las imágenes de los cheques, se percatan que habían sido cobrados por los ex funcionarios o externos; agregando que en este trabajo de obtención de imágenes de cheques, al 20 mayo obtuvieron 25 cheques por un total de 66 millones de pesos, que contablemente estaban registrados como pagados a proveedores pero que habían sido cobrados por las personas individualizadas; y con motivo de la obtención de la red familiar que hizo la Contraloría Regional se percatan que dentro de la red familiar había un hijo de la señora Nubia de apellido Ravanal, y consultado en el Registro Civil se obtuvo que el nombre del padre del hijo era Pedro Ravanal, que resultó ser la persona externa que cobraba cheques, información que ya tenía al 22 mayo; por lo que informaron a la jefatura lo constatado y al Contralor, y se confeccionó una minuta dando cuenta del detalle y adjuntando los 25 cheques cobrados por las personas, por lo que el Contralor General se apersonó en la región y entregó la minuta a la Fiscal Regional, poniendo en conocimiento del Ministerio Público tal situación.

3.- Que los antecedentes precedentemente expuestos se encuentran debidamente corroborados por los aportados por **Roxana Leoniza de las Mercedes Núñez González**, que es precisamente la Jefa de la Unidad de Control Externo de la Contraloría, quien al respecto señaló que efectivamente intervino en el proceso de auditoría a la dirección de Salud Municipal de Talcahuano para cuyos efectos se conformó un equipo constituido por Mario



Urrutia y Pablo Quezada como fiscalizadores en terreno y por doña María Soledad Mendoza Como supervisora de la ejecución del trabajo, explicando que dicho proceso de auditoría tiene su origen en un proceso de planificación que comienza en el mes de septiembre y termina en diciembre, por el cual se planifica la auditoría del año siguiente, decidiéndose la fiscalización de la Dirección de Salud Municipal de Talcahuano en atención al análisis de riesgo y de las indagaciones preliminares realizadas al respecto por la unidad de planificación, precisando que al hablar del análisis de riesgo se comprenden distintos indicadores en este caso estaban relacionados con conciliaciones bancarias que no estaban al día, cómo también a la existencia de reclamos que la misma Contraloría había recibido de distintos proveedores por no pago de facturas, que en general estaban relacionados con Laboratorios por facturas al parecer desde antes del año 2015; testigo que dio cuenta de las irregularidades financieras, contables y administrativas ya referidas a raíz de los hallazgos detectados, particularmente por la disconformidad existente entre la información relativa al pago de facturas a distintos proveedores, de la aplicación del proceso de circularización de la deuda y de los Laboratorios que informaron y deudas impagas de las que daban cuenta, y de la revisión detallada de las cartolas bancarias, registros contables y de las imágenes de los cheques a las que pudieron acceder por intermedio del funcionario Manuel Rojas, que entiende que era firma autorizada en la firma de cheques y que le parece que él con la clave de otra persona ingresaron al sistema para poder visualizar los cheques; lo que en definitiva permitió establecer que los cheques que se habían girado o que estaban destinados al pago de proveedores, no habían sido emitidos a nombre de estos últimos, sino que a nombre de Nubia San Martín, Pedro Paredes, Pedro Ravanal y Alejandro Cabello; precisando que de los 20 proveedores a los que le aplicaron la circularización de la deuda, solo contestaron 6, dentro de los cuales estaban Laboratorio Munnich, que envió un listado de una deuda por un monto total de 94 millones y fracción, de los cuales según los registros contables, la DAS sólo había pagado 32 millones; y de Etex por un monto de unos 12 millones de facturas impagas; agregando que a ella se le presentó por los fiscalizadores la documentación que daba cuenta de ello, ante lo cual se informa al Contralor Regional, decidiendo ampliar el período de investigación, que originalmente era del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, al comprendido entre diciembre de 2017 a marzo de 2019, elaborándose por los fiscalizadores una minuta el 28 de marzo de 2019, la cual decía relación con 25 cheques por un monto de unos 66 millones de pesos, y en definitiva se decide hacer la denuncia ante el Ministerio Público, tomando conocimiento que en la municipalidad se había iniciado un proceso disciplinario, del cual luego se hizo cargo la Contraloría, continuando además con la auditoría, y el 24 de julio 2019 se elabora una segunda minuta, porque siguieron revisando más cheques sobre lo mismo, más documentos, más registros, y pidieron al Banco Estado que les dieran una clave para poder acceder a otros cheques que no podían tener



físicamente a través de la municipalidad, y el Banco Estado otorgó el acceso y el equipo (los fiscalizadores Urrutia y Quezada) continuó revisando y aparecieron más cheques, por lo que la segunda minuta incluye los 25 cheques de la primera minuta, por lo que suman en total 129 cheques, todos los cuales habían sido firmados por Nubia San Martín y Manuel Rojas, y eran entre diciembre de 2017 a marzo de 2019; cheques que correspondían a las cuentas, cuyos últimos 3 dígitos eran la 161, que era de Aporte Municipal; la 004, que era de Atención Primaria de Salud (APS); la 187 que era de Resolutividad; y la 179 de Remuneraciones, cuyo titular es la municipalidad de Talcahuano.

Igualmente señaló que después de la segunda minuta, empezaron a dar término a la auditoria y los fiscalizadores empiezan a elaborar el pre informe, el cual contiene todo aquellos hallazgos que encontraron, no solo referido al tema de los 129 cheques, sino que un análisis del macro proceso de finanzas que era el objetivo inicial de la auditoria, informe que se lo entregan a la supervisora, quien lo revisa y se lo entrega a ella en borrador, para su revisión, el cual posteriormente pasó al asesor jurídico, para que vea aspectos jurídicos del informe, lo conversan, llegan a acuerdos y se entrega el pre informe al Contralor Regional, que lo revisa, se aclaran dudas que pudiese existir, y lo despachan en forma confidencial al alcalde y al Director de Control de la municipalidad; señalando la testigo los distintos hallazgos de los que daba cuenta el pre informe, entre ellos, la falta de procedimientos administrativos, falta de reglamento interno, medidas de control interno, temas relacionados con giradores, activos fijos, aspectos presupuestarios y contables, conciliaciones bancarias y se reiteraron los contenidos en las minutas 1 y 2; pre informe respecto del cual señala que la municipalidad tenía un plazo 10 días para responder los hallazgos, del cual al parecer pidieron aumento, llegando la respuesta, el cual fue nuevamente analizado por el equipo, en base a lo cual se elabora el informe final, constituido por el Informe N°315, que fue despachado el 17 de diciembre de 2019; informe que fue debidamente acompañado por el Ministerio Público, al igual que el Pre Informe referido por la testigo (**Prueba Documental N° 89 y 77, respectivamente**),

DECIMOTERCERO: La información proporcionada por los fiscalizadores Urrutia Sáez y Quezada Guenante y la jefa de la unidad de Control Externo, Núñez González, se encuentra en total consonancia con una serie de antecedentes documentales y otros medios de prueba que fueron debidamente incorporados al juicio por el Ministerio Público, y que por lo demás fueron exhibidos y reconocidos durante la audiencia, en su caso, por los referidos testigos, quienes entregaron más detalles en torno a los mismos, que son precisamente el cúmulo de antecedentes que recopilaron durante el proceso de auditoría o fiscalización llevado a cabo en las dependencias de la Dirección de Salud Municipal de Talcahuano (DAS, y los informes elaborados con motivo de tal trabajo. Así:



1.- Documental N° 1: Constituida por un Oficio de fecha 28 de mayo de 2019, del Contralor General de la República y sus anexos, en el cual se incluye minuta de fecha 22 de mayo de 2019 del equipo fiscalizador de la auditoría en el DAS de la Municipalidad de Talcahuano; programa N° 8034 de 2019 a la jefa de unidad de control interno; detalle de facturas impagas informadas por el proveedor Munnich Pharma Ltda.; correo electrónico de Munnich Pharma Ltda. informando el pago de facturas por parte del DAS de Talcahuano por \$32.283.686; antecedentes de los funcionarios y vínculos de parentesco; resultado de la circularización del proveedor ETEX Farmacéutica Ltda.; detalle y copia de los cheques emitidos y cobrados por las personas individualizadas; copia de los decretos de pago tenidos a la vista de los casos observados a la fecha de la minuta.

En efecto, por el referido **oficio del 28 de mayo de 2019** se remiten a la Fiscal Regional del Bío Bío, los antecedentes recopilados por el equipo fiscalizador, entre los cuales se incluye los siguientes:

a) A fs. 2, 3 y 4 una minuta de fecha 22 de mayo de 2019, del equipo Fiscalizador de la Auditoría en el DAS de la Municipalidad de Talcahuano a la Jefa de Unidad de Control externo de la Contraloría General de la República, en que se indica que se realizó circularización a proveedores que según los registros del DAS mantenían mayor deuda impaga al 31 de diciembre de 2018, y que durante la auditoría se recepcionó una denuncia del proveedor Munnich Pharma Ltda., quien informó que DAS de Talcahuano le adeuda al cierre del período 2018 un monto de \$94.997.387, correspondientes a 70 facturas, provenientes del año 2015 a 2018; determinándose que según registros contables el DAS le habría pagado a dicha empresa \$96.561.277 durante el período 2018, no obstante dicho proveedor señaló que los pagos recibidos del DAS durante ese año, ascienden a \$ 32.283.686; que al respecto se verificó que de las facturas informadas por el proveedor en cuestión como impagas al 31 de diciembre de 2018, el DAS pagó a través de la emisión de 8 cheques, un total de \$19.526.047, constatándose que dichos documentos no fueron emitidos a nombre del citado proveedor, sino que a nombre de los funcionarios del DAS, señora Nubia San Martín Pavez y Pedro Paredes Montoya, y por el particular Pedro Ravanal Mellado, los que fueron cobrados por caja por las citadas personas; precisándose que Nubia San Martín Pavez es administrativa Contable, encargada de los pagos del DAS, y es una de las giradoras de las cuentas corrientes del Banco Estado que administra dicha entidad, con póliza vigente ante este organismo de Control, que Pedro Ravanal Mellado es padre de Mauricio Ravanal San Martín, hijo de Nubia San Martín; y que Pedro Paredes Montoya, pertenece a la dotación del DAS con contrato vigente por 44 horas; que el proveedor ETEX Farmacéutica Ltda. informó que el DAS Talcahuano adeuda \$12.862.294 correspondiente a 6 facturas, que la factura N° 1036949 de



9 de junio de 2015, por \$2.677.500, fue pagada en dos oportunidades, mediante los cheques 9710524 y 9470749 de las cuentas corrientes 52709052004 y 52709052161 del Banco Estado, los que se encontraban emitidos a nombre de Pedro Ravanal Mellado y Pedro Paredes Montoya, respectivamente, y cobrados por caja por dichas personas; que a raíz de las situaciones detectadas se procedió a validar el pago a distintos proveedores mediante la visualización de los cheques cobrados por caja a través de las cartolas bancarias electrónicas mencionadas durante el año 2018, constatándose que a la fecha de la minuta, hay 25 cheques por un total de \$66.299.040 que fueron emitidos a nombre de los funcionarios del DAS, Nubia San Martín Pavez, Pedro Paredes Montoya, y por el particular Pedro Ravanal Mellado, y cobrados por caja por estas mismas personas.

b) A fs. 6 y 6 vta., 7 y 7vta., se encuentra una **Minuta de fecha 22 de mayo de 2019, remitida por el equipo fiscalizador a la Jefa de Unidad de Control externo de la Contraloría**, dando cuenta de los hechos denunciados, refiriendo los anexos acompañados, que son los mismos referidos precedentemente.

Que exhibida la documentación precedente, el fiscalizador Urrutia Sáez señaló que el oficio de 28 de mayo de 2019 es el oficio que el señor Bermúdez firmó para remitirlo a la fiscalía, y que la minuta de fs. 2 a 3, corresponde a la minuta que él elaboró.

c) Que el documento en cuestión contiene a fs. 5, un índice en que individualiza 6 anexos que se acompañan: Minuta Auditoría DAS Talcahuano (PREG. 8.034-2019):

A fs. 8, figura Anexo 1: Detalle de facturas impagas informadas por proveedor Munnich Pharma Ltda., con indicación de Cliente, factura, número de documento, día, monto original, total, total \$94.997.387.

En torno a este Anexo, **el fiscalizador Urrutia explica** que contiene las columnas, nombre cliente, la municipalidad Talcahuano departamento Salud, luego el origen que es la factura por la venta de un bien, el número de documento es la factura a que hace mención, luego fecha del documento, fecha en que se emitió la factura, luego, días de mora, el proveedor indica los días de atraso en el pago de la citada factura, moneda se refiere en pesos, luego monto original se refiere al valor de la factura, y finalmente, el total, que es la valor total de la factura; en este caso es la información de empresa Munnich Pharma lo que significa que estas facturas se encuentran pendientes de pago.

A fs. 8 vta., figura Anexo 2: Correo electrónico de Munnich Pharma Ltda., informando pago de facturas por parte de DAS de Talcahuano por \$32.283.686, con indicación de correos electrónicos de Munnich informado



pagos de Municipalidad, con fecha de pago, por \$32.283686; adjuntándose detalle de las facturas; y a fs. 9 un anexo, con copias de correos electrónicos del fiscalizador Mario Urrutia Sáez con el representante de la empresa sobre pagos depositados en la cuenta corriente de empresa Munnich durante el año 2018, donde se indica que no se registra pago por \$3.538.219 de 14-08-2018.

Al respecto, **el testigo Urrutia**, precisó que este anexo corresponde al resultado de una comunicación por mail con el proveedor, señalándole que ellos tenían constancia que según registros contables del DAS habían facturas pagadas y que ellos informaban como pendiente de pago, por lo que les pidieron informaran si habían más pagos que no estuvieran informando, y Munnich informó el detalle de los pagos efectuados durante el 2018, lo que confirmaba que lo que habían enviado en su primera información se encontraría bien; lo que significó que hicieran un análisis de si los registros contables señalaban que habían pagado un número cercano a 28 facturas que se decían impagas y el proveedor no las reconocía, por lo que se revisó Libro Banco, y se fueron a las cartolas bancarias, y constataron que el cheque con el cual se decía pagadas facturas habían sido cobrados y muchos de ellos habían sido cobrados por caja; que de ese anexo 2, todos los cheques tenían eso en común, que se dieron cuenta que de ese listado habían 28 pagos contablemente girados, pero habían sido cobrados por caja.

A fs. 9 vta. y 10, figura **Anexo 3**: Antecedentes de los funcionarios y vínculo de parentesco, que corresponde a los antecedentes de los funcionarios y vínculos de parentesco, información personal de Nubia San Martín Pavez, nombramientos, tabla decreto alcaldicio, póliza de fianza; además figuran otros anexos que contienen información sobre autorización para girar cheques, con indicación de número cuentas, en relación a la misma funcionaria; Póliza de Fianza, HDI Seguros, asegurado Contraloría General República, afianzado Nubia San Martín; desde 12.09.2011, hasta que afianzado cese en su obligación de rendir fianza, ACEPTADA, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, 6 de febrero 2012; y una Tabla consulta parentesco, en que se destaca Rut 18.684.474, Mauricio Ravanal San Martín; y copia de certificado de nacimiento de Mauricio Ravanal San Martín, padre Pedro Ravanal, madre Nubia San Martín; Decreto 398, de 23.09.2009, que dispone traspaso a la DAS de personal contratado que al 1 de septiembre de 2007 permanecía en dicha repartición, figurando entre otros, Nubia San Martín Pavez; Resolución Exenta 951, que autoriza subrogancia por orden de precedencia: 1era, subrogancia Nubia San Martín Pavez, 2da. Subrogancia Marcos Sánchez Rodríguez.

A fs. 14 vta., figura Anexo 4: Resultado de la circularización deuda del proveedor Etex Farmacéutica Ltda. FS 14 vta., informando facturas por pagar a ETEX, los abonos y el saldo total por pagar al 15/04/2019, de \$9.542.154.



En torno a la información contendida en este anexo, el tantas veces aludido **Urrutia Sáez** indicó que éste se refiere al resultado de la respuesta a la circularización del mes de abril de 2019 a la empresa Etex que le respondió en relación a las facturas que ellos tenían registradas como impagas de parte del DAS; que Etex es una empresa que se dedica al giro de medicamentos, y son empresas proveedoras de medicamentos al igual que Munnich Pharma; que Etex en este anexo dice que DAS adeudaba como 12 millones de pesos, por lo que hicieron lo mismo que con Munnich y fueron a los registros contables y se percatan que las primeras 5 facturas que se señalan impagas por Etex, contablemente figuraban como registradas pagadas, solo las facturas sobre 4 millones no estaban registradas como pagadas y la de \$2.677.500, se giró dos veces con cargo a la misma factura; porque existen dos decretos de pago por el pago de esta factura, pero sin embargo se registró en el decreto de pago, en el número de factura se le varió un número al número de la factura, no recuerda el número, pero la primera factura 1036949, de la primera línea, se giró pagándose a Etex, pero ese giro cobrado por caja, y en otro momento se volvió a girar el mismo pago y valor, pero esta vez, el numero documento 103694, y le faltaba un dígito; es decir, el decreto de pago contiene varios aspectos y al registrarse la contabilización hay una columna que indica el número de documento que se están pagando en esa oportunidad, que se ubica a la derecha del recuadro, donde dice debe, cuyos decretos de pago son de los que no encontraron; agregando que se detectó que una misma factura sirvió para dos decretos de pago, debido a que la numeración que se registró solo le faltaba un dígito, por lo que asumieron que la factura que se indicó era incorrecta; y se percataron que fue pagada dos veces la factura, se giró el cheque a Pedro Paredes con un pago, y el otro se giró a nombre de Pedro Ravanal Mellado; precisando que ello se aprecia en la línea 7 de la foja 15, del Anexo 5, comprobante egreso 20252, cobrado en plaza Concepción Bio, por monto \$2.677.500, cobrado el 21 febrero 2018, cuenta ocupada 2161, y quien cobró, fue Pedro Ravanal; pero no fue pagada a Etex, por lo que seguía impaga para ese proveedor; y ese mismo valor se ve en la penúltima fila, en que se pagó de nuevo, el mismo monto, cobrado el 23 marzo de 2018, ahora en cuenta corriente de aportes APS, que son de convenios, y quien cobró el cheque fue Pedro Paredes Montoya; antecedentes estos que son totalmente corroborados por la **Documental 112, 111 N°3 y 108 N°17** acompañada al juicio por el ente acusador, a la que se hizo referencia en párrafos anteriores.

A fs. 15 se encuentra el Anexo 5: Detalle y copia de los cheques emitidos y cobrados por las personas individualizadas; con observaciones visualizados en cartolas bancarias del DAS Talcahuano. Se singularizan cheques cobrados por Pedro Ravanal, Pedro Paredes, y Nubia San Martín; por un total \$66.299.040; y un resumen por persona: Nubia San Martín, \$4.129.735; Pedro Ravanal \$39.436.524; y Pedro Paredes \$22.732.781.



Se adjuntan a **FS 15 vuelta y siguientes, las imágenes de todos los cheques individualizados en el listado de la fs. 15:**

Cheques a Pedro Ravanal: \$ 1.777.665, 2.512.888; 2.294.082; 1.802.493;; 2.814.826; 2.677.500; 1.414.315; 2.907.825; 2.588.250; 2.942.311; 2.796.500; 3.236.526; 3.220.353; 3.623.788; 2.827.202.

Cheques a Pedro Paredes: \$1.898.626, \$2.728.602; **2.907.825;** 2.900.625; 2.853.299; 2.898.447; 3.867.857; 2.677.500.

Cheques a Nubia San Martin: \$2.582.300; 1.547.435.

En torno a la información contenida en este Anexo 5, señala el **Urrutia Sáez** que en dicho anexo se contienen un cuadro resumen de cuanto cobraron individualmente las personas respecto de los 66 millones de pesos girados a empresas proveedoras, pero cobrados por Mellado, Paredes y San Martin, que se sumaron los cheques que cobraron cada uno, e hicieron el resumen por cada uno, y Ravanal cobró 15 cheques, Paredes cobró 8 cheques, y San Martín cobró 2 cheques, del total de los 25 cheques en cuestión.

A fs. 27, se encuentra el **Anexo 6:** Copia de decretos de pago tenidos a la vista de los casos observados a la fecha de la minuta, que son precisamente los 12 decretos de pago respecto de los cuales también se adjuntan las respectivas fotocopias con sus legajos, según se detalla más adelante; en la que se indica una glosa con proveedores, Rut, cheque pagado por caja, montos, fechas de cobro, cuenta corriente, cheques cobrados por Ravanal, Paredes, San Martín.

Anexo que conforme a **Urrutia Sáez** contiene un detalle de cada uno de los decretos de pago de los que hicieron acta de levantamiento para llevar la documentación original para tenerlos bajo custodia, que adjuntaron fotocopia de estos decretos, que son parte de los 25 cheques cobrados, que se hizo un resumen de los decretos de pago, por lo que están relacionados con el anexo 5, son parte de los 25 cheques girados a las personas referidas, y en el mes de mayo de 2019, se trajeron 30 decretos, de los cuales, 12 sí tenían que ver con el cobro de los cheques, y otros, eran porque se estaban pagando a proveedores, pero se decía que se estaban pagando por caja, y por lo sucedido se los llevaron para un posterior análisis; por lo que los decretos se relacionan con el anexo 5, pero en este anexo hay más cheques, ello debido a que en un principio obtuvieron imágenes de 25 cheques cobrados por las personas, y quisieron obtener los 25 decretos de pago que los respaldaban, pero solo obtuvieron 12 decretos, y finalmente cuando se hizo la visita el 31 de mayo de 2019, y la incautación de la fiscalía, se encontraron los otros 13 decretos de pago que no habían podido obtener.

La prueba documental N°1 además contiene las siguientes fotocopias de 12 decretos de pago:



FS 28: **Decreto de pago N° 6, de 2 de enero de 2018**, por \$1.777.685, a Laboratorio Chile, firma Alejandro Cabello, Jefe Finanzas, y Armando Domínguez, Director, luego número cheque, fecha pago, fecha de pago 2.01.2018.

Fs. 40 **Decreto Pago N° 72, a Munnich, por \$2.512.888**, firma Alejandro Cabello, Jefe de Finanzas, y Armando Domínguez, director, número cheque, fecha pago 10/01 2018.

Fs. 55, **Orden de pago 80**, a Laboratorio Chile, de 16 de enero de 2018, por \$2.294.082, por fármacos Cesfam noviembre 2016, firma Nubia San Martin, jefa finanzas y el director, pagado cheque el 16-01-2018.

FS 67. **Orden de Pago 85**, de 18 enero 2018, se decreta pago a Munnich Pharma \$1.802.493, firma Nubia San Martin como jefe finanzas subrogante, pagado 18-04-2018.

FS 76 **Orden de pago 165**, de 31 de enero de 2018, decretese pago a Munnich por \$1.898.626, usuario Nubia San Martin, firma Alejandro Cabello como jefe finanzas, cuenta y cheque, egreso, fecha pago 31:01.2018.

FS 86 **Orden de pago 122**, lunes 29 enero 2018, comprobante contable 2-262, páguese a \$1.414.515 a Laboratorio Andrómaco, abastecer Farmacia Cesfam, firma Nubia San Martin como jefe finanzas subrogante.

FS 99 **Orden de pago 476**, 27 de marzo 2018, pagar a Munnich, por \$2.728.602, firma Alejandro Cabello como jefe finanzas, y el director.

FS 120, **Orden de pago 142** de 30 enero 2018, decreta pago a Munnich Pharma \$1.547.435, firmado Alejandro Cabello, como jefe de Finanzas, y Director subrogante Juan Garcés, pagado 30-01-2018.

FS 143 **Orden pago 629**, de 10 abril 2018, páguese a Munnich \$2.907.825, firma Alejandro Cabello, jefe finanzas y Armando Domínguez director, fecha pago 10.04.2018.

FS 152, **Orden de pago 779**, de 7 mayo 2018, pagar a Distribuidora Multimarca Ltda., alcohol etílico, \$2.898.447, Usuario nsanmart, firma Alejandro Cabello, como jefe de Finanzas, cheque pagado 07-5-2018.

FS 162 **Orden de pago 826**, de 11 de mayo de 2018, orden pago a Laboratorio Chile \$3.236.526, usuario nsanmart, fecha pago 11-05-2018, firman Alejandro Cabello Jefe Finanzas, y Armando Domínguez Director.

FS 180 **Orden de pago 878** de 15 mayo 2018, decreta pago a Munnich Pharma, por \$3.220.353, fecha pago 15/05/2018, firman Alejandro Cabello, como jefe de finanzas, y Armando Domínguez, como Director.



Que los referidos decretos de pago le fueron exhibidos al testigo Urrutia Sáez, quien al respecto precisó que en la minuta se acompañaron los 12 decretos de pago, que levantaron los originales, y que, posteriormente, por motivo del proceso que lleva la fiscalía, les fueron solicitados los originales, los cuales se remitieron a la fiscal en el mes de julio; testigo que además dio cuenta y explicó el contenido de un decreto de pago, de cada uno de sus recuadros, como asimismo explicó la documentación respaldante que se incluyen en los legajos respectivos, como la orden de compra interna, la orden de compra emitida por mercado público, comprobante de devengo contable, certificado de disponibilidad presupuestaria, la recepción de los bienes que se están adquiriendo, la factura.

2.- Que debe señalarse que respecto a las fotocopias de los decretos de pago precedentemente singularizados, fueron debidamente incorporados al juicio los documentos originales de los mismos, a través de **Otros Medios de Prueba N°42**, la que a su vez se encuentra totalmente acorde con la **Prueba Documental N° 197**, constituida por el **Oficio REF 85507-2019 de la Contraloría Regional del Bío Bío, de 19 de junio 2019**, por el cual se remiten a la Fiscalía Regional de Concepción, los decretos de pago solicitados, en que existen detalle de los decretos de pago que se adjuntan, que en total son 20 filas, en que se individualizan distintos números de Decretos de Pago, y en la hoja 2, la misma tabla, incluye 10 filas, oficio que fue remitido por el Contralor Regional, y luego un anexo con tabla de 5 columnas, bajo las cuales se detallan los decretos de pago, en 13 filas, que con manuscrito se indica que “decretos contenidos en listado de 25 casos observados con evidencia de imagen de cheque”.

Sobre dicho documento, el testigo **Urrutia Sáez** manifiesta que mediante ese oficio la Contraloría remitió los 30 decretos de pago que levantaron o resguardaron el 17 y 20 de mayo de 2019, con motivo de las irregularidades de los cheques cobrados por los funcionarios y el externo, debido a que no habían encontrado los otros decretos de pago, por lo que se quisieron asegurar con que estos no fueran a extraviarse, y a petición de la fiscalía, dado que le habían remitido solo fotocopias, les entregaron los originales de todos los decretos de pago; aclarando que son 30 decretos y no solo 12, porque en la cartola bancaria del banco si bien aparecían que contablemente habían sido pagados a proveedores, constataron que algunos de ellos también aparecían cobrados por caja, lo cual les llamó la atención y por las cifras, y como no fue posible visualizarlos si fueron cobrados por el proveedor o por una persona natural, por ello levantaron en total 30 decretos para hacer luego un análisis más profundo; que no pudieron ver las imágenes de esos cheques, porque no existe la opción 100 por 100 para ver todos los documentos por la página web, porque al parecer solo se pueden visualizar los últimos tres meses, y solo se puede ver que se cobró por caja; a lo que se debe agregar otra dificultad, que estaba dada por el



hecho que no todos los cheque solicitados pusieron ser encontrados, como queda patente con el mérito del Informe del Banco Estado, de fecha 24 de enero de 2020 (**Prueba Documental N° 120**), que remite cheques requeridos, pero hace presente que hay un documento que no se ha podido encontrar.

3.- También el ente persecutor acompañó los antecedentes contenidos en Otros Medios de Prueba 42, constituida por 2 archivadores remitidos por la Contraloría Regional del Biobío mediante, por Oficio N° 5203 de 19 de junio de 2019, que contienen un total de 30 Decretos de Pago, correspondientes a los Nros. 1143, 2107, 1402, 785, 165, 142, 103, 72, 85, 250, 1549, 1144, 122, 779, 826, 6, 80, 476, 629, 581, 792, 878, 935, 947, 1115, 1188, 1199, 1253, 1254 y 447 del año 2018, bajo NUE 5210781.

Que la referida prueba le fue exhibida al testigo **Urrutia Sáez**, quien en torno a la misma manifestó que los dos archivadores corresponden a los 30 decretos de pago retirados desde la DAS en mayo de 2019, precisando que un Archivador es marca Colon, color blanco en el lomo, y el otro archivador tiene el membrete de la Municipalidad de Talcahuano; que en los archivadores están los 30 decretos de pago, entre los que se adjuntan los 12 decretos que tiene relación con el cobro de los 25 cheques incluidos en la primera minuta - habiendo igualmente explicado que en una segunda minuta enviada, se informó el total de 129 cheques, entre los que se incluyen los 25 de la primera minuta; que dentro del oficio del Contralor se detallan los 30 decretos de pago, y en la caratula se identificaron con amarillo los 12 decretos que tenían relación con los referidos cheques; y también en las carpetas existen otros decretos de pago, que fueron levantados, pero respecto de los cuales no vieron las imágenes de los cheques, y que se levantaron porque en algunos de ellos se estaban pagando facturas, que según la página web del Banco Estado, habían sido cobrados por caja; agregando que en el archivador 2, en su primera hoja se detallan los decretos de pago que se acompañan, y con amarillo los decretos de pago que guardan relación con la minuta que se envió a fiscalía; cuyo detalle viene en el oficio que envió el Contralor Regional; habiendo el testigo hecho referencia a los decretos de pago 103, 250, 935 y 947, que le fueron exhibidos, explicando a su respecto lo observado en torno a los mismos.

Así, respecto del Decreto de pago 103, el cual se indica en la fila 7 de la primera hoja del documento 197 (ya referido en el numeral anterior), señala que dicho decreto no estaba incluido dentro de las copias remitidas a la fiscalía, el cual revisaron para ver a quién se estaba pagando, el cual figura por un monto de \$ 2.238.979, que debió ser pagado a Munnich Pharma Medical Ltda., decreto de pago que fue elaborado por Nubia San Martín, pues figura como usuario en el documento y su visto bueno, y lo firma como jefe de finanzas subrogante; en el que aparece que se están pagando dos facturas números



30361 por montos distintos (\$853.533 y \$1385.446); agregando que en definitiva el pago se hizo a Pedro Ravanal Mellado, con cheque N° 8986437, de fecha 5 de enero de 2018, según consta en la prueba **Documental N°108, en su numeral 11 que se le exhibe**, precisando que dicho cheque aparece firmado por Nubia San Martín y Manuel Rojas.

En relación al Decreto de pago N° 250, de 9 de febrero de 2018, que corresponde al pago de factura de Munnich Pharma, fue de aquellos incluidos en la denuncia, que en la información que allí se consigna, se indica que se pagó el 9 de febrero de 2018 con cheque 9710502, el cual fue girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado por un monto de \$2.968.812, de la cuenta que termina en 161 de operación de la DAS, según consta en la prueba **Documental N°108, en su numeral 15, que se le exhibe**, cheque que aparece firmado por Nubia San Martín y Manuel Rojas.

En cuanto al Decreto de pago N° 935, de fecha 25 de mayo de 2018, indica que es uno de los decretos de pago que se enviaron a la fiscalía, el cual fue emitido a nombre de Munnich Pharma, por el cual se da por pagada factura que afectó a cuenta 2153407, denominada Deuda Flotante y pagada con cuenta corriente 161, que es la cuenta operacional del DAS, que dicho decreto fue elaborado por Nubia San Martín, con su visto bueno, y firmado por Alejandro Cabello Bustos como Jefe Finanzas y por Juan Eduardo Garcés como director subrogante del DAS, por un monto de \$3.331.326; que el decreto da cuenta que se utilizó la cuenta corriente 161 para su pago, no se indica número de egreso, se indica cheque N° 620324, de fecha 25 de mayo de 2018; que ese cheque fue en definitiva girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, por monto de \$3.331.326, lo cual consta en la **Documental N° 108, numeral 35 que se le exhibe**; por lo que ese cheque no sirvió para pagar a Munnich Pharma Ltda., y ese pago probablemente es de los indicados como pendientes por esa empresa, y por ese requisaron el decreto de pago en su momento.

Finalmente, en cuanto al Decreto de Pago N° 947, señaló que es de fecha 28 de mayo de 2018, emitido a nombre de del proveedor Munnich Pharma Ltda., por monto de \$3.652.110, fue elaborado por Nubia San Martín, por su denominación y visto bueno, firmado por Alejandro Cabello como jefe Finanzas, y por Juan Garcés Gallardo, como director subrogante, ello no obstante que se indica el nombre de Armando Domínguez, y la cuenta corriente operación 161, del DAS, sin que se acompañe el número de egreso, y el cheque con el que se paga es el N°620334, emitido el 28 de mayo de 2018; pero ese cheque no sirvió para pagar la obligación indicada en dicho decreto, y corresponde al que **se le exhibe a través de la Prueba Documental 108, numeral 36**, emitido el 27 de mayo de 2018, por \$3.652.110, el cual el tribunal constata que aparece girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado.



4.- Que como se ha adelantado, las conclusiones referidas por los fiscalizadores Urrutia Sáez y Quezada Guenante, tal como ellos lo indicaron se encuentran plasmados en las minutas que fueron elaboradas durante el transcurso de la fiscalización y en los oficios remitidos por la propia Contraloría General de la República al Ministerio Público; según dan cuenta la **Documenta N° 29 y 89** debidamente acompañada por la fiscalía:

a) En efecto, la **Documental N° 29**, está constituida por el **Oficio N° 6359, de 24 de julio de 2019**, de Ricardo Betancourt Solar, Contralor Regional del Bío Bío, a la señora fiscal María José Aguayo, por medio del cual el referido órgano contralor da cuenta que con motivo de auditoria que está realizando en la DAS de Talcahuano, remite nuevos antecedentes relacionados con causa.

En particular, se adjunta la **Minuta de la Unidad de Control Externo 0041, de la Contraloría General de la República, del equipo Fiscalizador del DAS Talcahuano**, Pablo Quezada Guanante, y Mario Urrutia Sáez, como fiscalizadores, y María Soledad Mendoza Schmlin, como supervisara, dirigida a la **Roxana Núñez, Jefa Unidad Control externo**, la cual complementa la minuta enviada el 22 de mayo de 2019, pues se advirtió la emisión de más cheques girados a terceras personas, Nubia San Martin Pavez, administrativa contable, Pedro Ravanal Mellado, particular, padre de un hijo de Nubia, Pedro Paredes, funcionario de la DAS y Alejandro Cabello, jefe finanzas, indicándose que se constató la existencia de 129 cheques girados y cobrados por las personas por total de \$412.024.825, que incluye los cheques anteriores por \$66.249.040; se comprende meses octubre 2017 a marzo de 2019, según cuadro que se adjunta, y 3 anexos que se indican. Así:

Anexo 1, denominado, **Resumen de casos observados al 15.07.2019, Auditoría Departamento de Salud Municipal de Talcahuano, Pro 8034/2019, macro proceso de finanzas y adm. financieros**; el cual contiene los 129 cheques observados, por giradores y sucursales en que se cobraron, resumen cuentas corrientes, y giros por mes y año; debiendo destacarse el Primer Cuadro, en el cual contiene el **Resumen por Giradores**:

- Alejandro Cabello, cantidad 1, monto \$ 3.476847
- Nubia San Martín, cantidad 7, monto 17.898.643
- Pedro Paredes, cantidad 35, monto \$ 111.176.748
- Pedro Ravanal, cantidad 86, monto \$279.472.587
- Totales, cantidad 129, monto \$412.024.825

Asimismo, del mismo cuadro, aparece que las cuentas corrientes en contra de las cuales se giraron los 129 cheques por la suma total ya referida, son las siguientes:



- I. Municipalidad de Thno. Fondos Project APS 52709052004, cantidad 16, monto \$43.424.607.
- Mun. Thno. Dir Salud Mun Aporte Municipal, cuenta corriente 52709052161, cantidad 111, monto \$361.641.479.
- Mun. Thno. Dir Salud Prog De Resol. A Prim, cuenta corriente 52709052187, cantidad 1, monto \$2.972.239.
- Muni. Thno. Dir Salud Mun Remuneraciones cuenta corriente 52709052179, cantidad 1, monto 3.986.500.

Además, se identificaron las sucursales del Banco Estado en las cuales fueron cobrados los cheques, por el total de \$412.024.825, figurando las oficinas de Talcahuano, Collao, Conce Bio, Conce Plaza ACE, Concepción, El Trébol, y Punta Aranes, en la cual figura cobrado un cheque por la suma de \$3.855.600.

Se detalla en un Segundo Cuadro un Resumen por Periodo (mes y año), destacándose que durante el período octubre a diciembre de 2017, se cobraron un total de 14 cheques, por un monto \$27.772.060; que de enero a diciembre de 2018, se cobraron una cantidad de 103 cheques, que totalizan un monto \$339.968.984; y que de enero a marzo de 2019, se cobraron 12 cheques, por la suma total de \$44.283.781.

Anexo 2, detalle de los 25 cheques emitidos y cobrados por personas naturales según minuta del 22 de mayo por suma de \$66.249.040, que forman parte de la denuncia presentada por el Ministerio Publico en causa que motiva este juicio; en la cual se incluyen columnas referidas a la Información de las cartolas Bancarias Banco Estado, bajo la cual aparecen 5 subcolumnas, indicando la sucursal, detalle, cargo en pesos, fecha y cuenta corriente, luego otra columna, indicando información adicional, cobrado por; luego Libro Banco contabilidad DAS Talcahuano, y subcolumnas Compr, fecha, glosa, Rut y Haber en pesos; y particularmente, se destaca la primera de las columnas, denominada “cruce los cheques”, en las que figuran los siguientes 25 cheques, singularizados por sus números: 8986471, 9710655, 8986478, 9710543, 9470749, 9710628, 9710666, 620223, 620253, 1762482, 9193398, 8986407, 8986413, 8986424, 8986470, 9710509, 9710524, 9710683, 9710438, 620204, 6200230, 620250, 620274, 620291, 620296. **Total \$66.299.040**

Anexo 3, Detalle de los 104 cheques validados adicionalmente por un total de \$345.725.785, adjuntándose copia de los cheques observados, ordenados por cobrador y fecha del giro del documento; destacándose la columna denominada “Cruce de cheque”, en la cual se consignan números de los referidos cheques, respecto de los cuales también se adjunta un anexo con imágenes por anverso y reverso de los mismos: 1344003, 8986400, 9193157, 1166545, 1344001,



1344107, 9193240, 9193090, 9193152, 9193164, 9193347, 9193377, 620324, 620368, 962127, 962149, 962202, 1166550, 962270, 962279, 962287, 1344036, 1344039, 1344059, 1344096, 1344121, 1344156, 1762405, 1762436, 1762462, 1762561, 1762578, 2142721, 9193223, 9193237, 9193122, 9193128, 9193183, 9470619, 8986437, 9710502, 9710542, 9710590, 9470742, 9710634, 733206; 620231, 620314, 620334, 620345, 620356, 620360, 620362, 620383, 620388, 962104, 962121, 962144, 962155, 962162, 1166424, 962191, 962219, 962240, 1166531, 1166538, 962263, 962267, 962274, 962284, 1344005, 1344029, 1344033, 1344035, 1344040, 1344052, 1344060, 1344065, 1344082, 1344089, 1344100, 1344104, 1344106, 13344108, 1344113, 1344130, 1344145, 1344175, 1344183, 1762412, 1762416, 1762442; 1762451, 1762456, 1762463, 1762480, 1762478, 1762511, 1762513, 1762512, 1762587, 1762600, 2593238, 2142720. **Total \$345.725785.**

En cuanto al anexo con imágenes por anverso y reverso de los cheques, debe precisarse que el número 9193128, corresponde a la cuenta corriente 52709052004, de la I. Municipalidad Talcahuano Fondos Proyectos APS, por \$2.331.986, de 16.11.2017, que figura girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, dos timbres, Banco Estado y otro del Fondo Salud de la Municipalidad Talcahuano, al reverso número manuscrito 9.844.026-7, timbre Banco Estado, y signos manuscritos V°B°.

b) En cuanto a la Documental N° 89, está conformada por Oficio 10.233, de 17 de diciembre de 2019, de la Contraloría General de la República, Regional del Bío, el cual remite Informe Final N° 315 de 17 de diciembre de 2019, de la unidad de Control Interno de dicho órgano contralor, debidamente aprobado sobre auditoria efectuada en DAS de Talcahuano, suscrito por Ricardo Betancur Solar, Contralor Regional del Bio Bio, dirigido a la Fiscal Regional del Bío Bío.

Al respecto cabe destacar que dentro del informe se señala el Objetivo de la auditoría practicada, consignándose al respecto que tuvo por objeto realizar una revisión al macro proceso de finanzas al DAS Talcahuano en el periodo entre el 1 enero al 31 diciembre de 2018, incluyendo proceso de formulación, modificación y control presupuestario, con la finalidad de validar control interno, lo que implicó examinar fidelidad y veracidad de cuentas según contraloría, la autenticidad de la documentación de respaldo y análisis financiero y presupuestario; se efectuó examen de cuenta al proceso de pago bienes y servicios asociados a los subtítulos 22 y 29, con excepción de los servicios básicos, y un examen a los desembolsos realizados con cheque cobrados por caja del 1 octubre 2017 al 31 de marzo de 2019.

Además se consignan los principales resultados obtenidos, indicándose que se constató en el periodo auditado que 129 cheques por un total de \$412.024.825 se asociaron contablemente a deudas con diversos proveedores,



sin embargo fueron girados y cobrados a nombre de Alejandro Cabello Bustos, jefe de finanzas del DAS, un cheque por \$3.476.847; doña Nubia San Martin Pavez, administrativa contable de ese DAS, 7 cheques por \$17.898.643; señor Pedro Paredes Montoya, funcionario del DAS, 35 cheques por \$111.176.748; del particular Pedro Ravanal Mellado, 86 cheques por \$279.472.587, quien es padre de un hijo de la señora San Martín Pavez, todo lo cual vulnera gravemente los principios de probidad administrativa y legalidad del gasto; agregándose que lo observado fue puesto en conocimiento del Ministerio Publico y además de la misma Contraloría Regional por Resolución 486 de 2019, ordenándose un sumario administrativo a objeto de determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos descritos.

Además, se da cuenta de una serie de irregularidades, falencias y omisiones detectadas durante la auditoria, entre los cuales se destacan el hecho que la DAS no mantiene las conciliaciones bancarias actualizadas y existen cuentas corrientes que no tienen antecedentes respecto de su última conciliación bancaria, además de partidas de antigua data sin conciliar, que alcanzan la suma de \$2.161.782.943, correspondientes a cheques girados y no cobrados, cargos y abonos no contabilizados y diferencias contables no registradas; y cuentas corrientes con fondos empozados por la suma de \$2.123.749, debiendo la entidad municipal actualizar las conciliaciones bancarias, clarificar y ajustar las partidas no conciliadas y regularizar las cuentas corrientes que presentan montos empozados y sin movimiento, acreditando aquello en el sistema de seguimiento y apoyo CGR en un plazo de 60 días contados desde la recepción del presente informe; como también se verificaron inconsistencias en los saldos de las cuentas; se verificó que las disponibilidades reales en las cuentas corrientes de la entidad según cartolas bancarias al 31 de diciembre de 2017 difieren del monto informado; se constataron diversas inconsistencias en las cuentas del balance.

Asimismo, se constató que no existe segregación de funciones respecto de las labores relacionadas con la contabilización de ingreso y egresos y firma de cheques, además de la falta de supervisión relacionada con la aprobación de las conciliaciones bancarias y visación de los decretos de pago,

El Informe Final 315, refiere un ítem denominado "Justificación", el cual contiene diversos acápites, relativos a antecedentes generales, objetivo de la fiscalización, la metodología; el Universo y Muestra de lo fiscalizado, incluyendo diversas tablas en que se detallan distintos antecedentes, como también lo pertinente al Resultado de la auditoria, que establece aspectos de control interno, indicando diversos puntos referidos a la carencia de reglamento interno, falta de segregación de funciones, falta de supervisión en las operaciones de la entidad, y falta de actualización de giradores autorizados ante el Banco Estado.



El informe hace referencia al Examen de la Materia Auditada, y en otro de sus puntos contiene uno denominado Punto III.- EXAMEN DE CUENTAS, en el cual se contienen detalles sobre los siguientes aspectos: 1.- Pago extemporáneo de facturas y deudas con proveedores, se desarrolla y se acompaña de tablas. 2.- Cheques destinados al pago de proveedores girados a nombre de funcionarios y de un particular. 3.- Sobre información presuntamente adulterada. 4.- Saldos en cuentas corrientes de convenios suscritos con el Servicio de Salud Talcahuano, también incluye detalles y tablas al efecto. Conclusiones, que detalla lo ya referido al principio del documento y analiza acápite por acápite cada una de las conclusiones alcanzadas en el informe, firmado por Roxana Núñez González, jefe de unidad de control externo de la Contraloría Regional del Bio Bio.

Cabe destacar el Anexo 10, denominado “Detalle de cheques cobrados por funcionarios y un particular.”, el cual contiene columnas referidas al número de cheque; información de cartolas bancarias del banco Estado, en que se detalla, la sucursal, cargo en pesos, fecha de cada cheque y la cuenta corriente desde la que se giró; luego otra columna, que indica información adicional, cobrado por; luego otra columna Libros Banco contabilidad DAS Talcahuano, la cual se subdivide en COMPR., FECHA., Glosa (Proveedor), RUT y Haber. Luego está el detalle de los documentos de cheques, en que aparecen los nombres de Alejandro Cabello Bustos en uno de ellos, Nubia San Martín, Pedro Paredes Montoya, y Pedro Ravanal Mellado, haciendo total de los documentos de \$412.024.825; todo ello en total coincidencia con la información contenida en la Documental 29 referida en el numeral anteriormente desarrollado.

DECIMOCUARTO: Que, conforme a los elementos probatorios aportados, ha quedado establecido que en atención a los antecedentes que la Contraloría General de la República puso a disposición del Ministerio Público, particularmente la existencia de 25 cheques por un total de \$66.299.040, que contablemente estaban registrados como pagados a proveedores pero que habían sido cobrados por las personas ya individualizadas, dicho órgano persecutor inició la investigación penal correspondiente, dentro de cuyas primeras diligencias destaca la entrada y registro a las dependencias de la Dirección de Administración de Salud Municipal de Talcahuano, ubicada en calle Gabriel Toro 49, de Talcahuano, la cual se materializó el día 31 de mayo de 2019, en base a una orden judicial despachada al respecto por el Juzgado de Garantía de Talcahuano, conforme dieron cuenta los funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Concepción, **José Miguel Rojas Barrientos y Alex Rodrigo Valenzuela Ortiz**, siendo este último el funcionario quien estuvo a cargo de la investigación; diligencia a través de la cual se logró la incautación de numerosa documentación contable y financiera atinente a los hechos investigados, principalmente, las órdenes o decretos de pago, documentación bancaria, como cheques y cartolas de las cuentas corrientes de la Municipalidad, las cuales fueron debidamente



incorporadas al juicio; como igualmente se obtuvieron otros elementos probatorios en otras diligencias intrusivas llevadas a cabo en los domicilios de los imputados.

1.- En efecto, **Rojas Barrientos** manifestó que la investigación se generó por una denuncia presentada por la Contraloría General del Bío Bío a raíz de una fiscalización que realizó en la Dirección de Salud Municipal de Talcahuano donde encontraron alrededor de 25 pagos fraudulentos por un monto aproximado de 66 millones de pesos, y ello genera la investigación del Ministerio Público e incautación en dicho estamento público; que en un comienzo se determina que se buscaba incautar documentación relativa a órdenes de pago, órdenes de compra, y cualquier documentación contable atingente; que mientras estuvieron al interior departamento finanzas estuvieron acompañados por la fiscal señora María José Aguayo; y que se encontró documentación atingente a lo que se estaba investigando, que eran los hechos vertidos en la denuncia de Contraloría; que se levantaron 14 actas de incautación relativos a documentos contables, equipos tecnológicos, computadores o equipos de almacenamiento como disco duro y pendrive; agente policial que precisó que dentro de los elementos incautados se encuentra la Orden de pago N° 1540 y con un legajo de documentos de los cuales dio cuenta, que reconoció como los que forman el medio probatorio denominado **“Otros Medios de Prueba N° 1**, que le fue exhibido; los que indicó fueron incautados desde el mueble que está en la parte posterior a la estación de trabajo de doña Priscila Muñoz, estación de trabajo que manifestó corresponder a la que se muestra en la **fotografía N° 35, de “Otros Medios de Prueba “ N° 88**, respecto a lo cual señaló que en la parte posterior del escritorio hay muebles, archivadores, que eran la mayoría información de proveedores del año 2018 y parte del año 2019; que de ese sector se incautó toda la documentación contable de proveedores, como decretos de pago, órdenes de compra y cualquier documento contable que en esas carpetas era archivada, documentación toda que fue incluida en una sola cadena de custodia.

Que el agente policial Rojas Barrientos, igualmente dio cuenta que la **documentación contenida en los “Otros Medios de Prueba” N° 2**, también fue incautada desde la parte posterior al escritorio de Priscila Muñoz, en el mueble o estante de archivero, reconociendo dicha prueba al serle exhibida durante su declaración, respecto de la cual dio cuenta pormenorizadamente de su contenido, esto es, dio cuenta de todos los decretos de pago que se contenían en dicho medio de prueba, como asimismo del legajo de documentos que acompañaban a cada uno de esos decretos, y particularmente dio lectura a todos los decretos que allí se contenían, que fueron los siguientes: Decretos de Pago N° 1872 (7 de noviembre de 2018); 1966 (9 de noviembre de 2018); 1844 (5 de noviembre de 2018); 1429 (14 de agosto de 2018); 1589 (10 de septiembre de 2018); 1634 (13 de septiembre de 2018); 1644 (3 de septiembre de 2018); 1535



(3 de septiembre de 2018); 1594 (5 de septiembre de 2018); como los decretos de pago contenidos en un Archivador denominado "Transferencias varios", 2152 (17 de diciembre de 2018; 2125 (20 de diciembre de 2018); 2124 (19 de diciembre de 2018); 2134 (24 de diciembre de 2018; 1550 (4 de septiembre de 2018); 1541 (3 de septiembre de 2018); 1232 (24 de julio de 2018); 1588 (5 de septiembre de 2018); 1626 (14 de septiembre de 2018); 1846 (8 de noviembre de 2018); 1277 (30 de julio de 2018); 2161 (28 de diciembre de 2018); 1587 (5 de septiembre de 2018); 1828 (31 de octubre de 2018); 2074 (7 de diciembre de 2018); 1968 (13 de noviembre de 2018); 1970 (27 de noviembre de 2018); 1438 (17 de agosto de 2018); 1643 (20 de septiembre de 2018); 1084 (26 de junio de 2018); 1383 (8 de agosto de 2018); 983 (4 de junio de 2018); 993 (5 de junio de 2018); 1044 (7 de junio de 2018); 643 (12 de abril de 2018); y 394 (13 de marzo de 2018).

Asimismo, precisó como documentación incautada una carpeta plástica de color azul, que refiere corresponde a **"Otros Medios de Prueba N° 25"** que le fue exhibido, y que señala que contiene diferentes decretos de pago, algunos depósitos y documentación contable en su interior, sin detallar su contenido; carpeta que estaba encima del escritorio en la parte derecha.

También señala que se incautó una agenda de color café, de dominio personal de la señora Nubia San Martín, incautada desde el segundo cajón de su escritorio, que estaba sin llaves; el que tenía documentación en su interior e incluso una hoja de reclamos, que muestra una tabla Excel, con una serie de listados con diferentes proveedores y un número ID de mercado público de cada reclamo efectuado por proveedores, montos y estados de dichos reclamos, liquidaciones de remuneraciones y un CD; señalando que la agenda en cuestión corresponde a **"Otros Medios de Prueba" N° 51** que se le exhibe.

También refiere que se incautaron unos talonarios de cheques, los cuales fueron encontrados en una caja color transparente en el escritorio de Nubia San Martín; que son los que se contienen en **"Otros Medios de Prueba Números 9 al 22"**, que le fueron exhibidos, de los que dio lectura detallada, indicando que todos correspondientes a la cuenta corriente N° 52709052161 del Banco Estado, cuyos talonarios estaban todos ocupados.

Antecedentes precedentemente expuestos, que se ven complementados con la exhibición de las **fotografías 36, 38, 40 y 42 del Set Fotográfico de "Otros Medios de Prueba N° 88"**, a que fue sometido Rojas Barrientos, a cuyo respecto indicó que en ellas se muestra el escritorio que ocupaba doña Nubia San Martín, ubicado en el departamento de finanzas, al lado del ventanal, precisando que se encontraron varios decretos de pago sueltos encima de una caja metálica que estaba en la parte posterior del escritorio, sobre el cual había una carpeta de color azul con diferentes documentos contables en su interior;



también una agenda personal, de color café de la señora Nubia que estaba en uno de los cajones del escritorio; y además refirió que encima del escritorio se ven unos talonarios de cheques, que estaban sueltos y adosados con un elástico, los cuales fueron incautados, los que fueron encontrados en una caja plástica transparente, que estaba a un costado del escritorio de señora Nubia, especificando que dicha caja estaba en el interior de la oficina de finanzas, al entrar a mano derecha, donde existía una especie de lavaplatos o lavatorio; y eran en total 14 talonarios de cheque y todos del Banco Estado, eran talonarios usados; pero no recuerda si en esa caja se encontró algún talonario con documentos en blanco.

2.- Que lo anteriormente expuesto, encuentra total sustento y corroboración en los dichos del comisario **Valenzuela Ortiz**, quien también concurrió a la diligencia de entrada y registro de las dependencias de la Dirección de Administración Municipal de Talcahuano, indicando al respecto que el 31 de mayo de 2019 la fiscal le hace entrega de una orden de entrada y registro autorizada por el Juzgado Garantía de Talcahuano, en relación a las dependencias señaladas, las que se encuentran ubicadas en calle Gabriel Toro 49 de dicha comuna, por lo que entendiendo que iba a ser el encargado de la investigación, en definitiva se agrupan como 15 colegas de la unidad, y concurren en cuatro vehículos a la dirección señalada, entre los que también iba la fiscal María José Aguayo y una persona de Contraloría, de apellido Urrutia, que la fiscal se fue con ellos en el vehículo y les explica que la orden de entrada y registro fue solicitada dado que el día 28 de mayo de ese año 2019 se recepcionó una denuncia de parte de la Contraloría General de la República, en la cual se señalaba que estando fiscalizadores de dicha entidad haciendo revisión de los pagos de proveedores de la división de salud, recepcionaron una denuncia como fiscalizadores de una empresa proveedora, Munnich Pharma Limitada, la cual señalaba que al término de su periodo contable 2018, habían alrededor de 70 facturas impagas, contando desde el 2015 al 2018, lo que ascendía a un monto aproximado de más de 94 millones de pesos; que al revisar los fiscalizadores las facturas de Munnich Pharma, se percataron que durante el 2018 el pago de facturas de ellos había sido por más de 96 millones de pesos, y no obstante, la misma empresa Munnich les indica por correo electrónico a los fiscalizadores que solo habían recibido como 32 millones el año 2018, por lo que los fiscalizadores proceden a la revisión del pago de esas facturas por 96 millones y se encuentran con 8 cheques que fueron pagados a dos personas que eran de la Dirección de Administración de Salud, doña Nubia San Martín Pavez, y don Pedro Paredes Montoya, y un civil, de nombre Pedro Ravanal Mellado, que sería pareja de la señora Nubia, ya que tendrían un hijo en común; y que posteriormente, la Contraloría se encuentra con una segunda situación, referida a la empresa, Etex Farmacéutica Limitada, que decía tener 6 facturas pendientes de pago por alrededor de 12 millones de pesos, las que Contraloría



revisó, percatándose que una de esas facturas que se reclamaba, tenía dos pagos con cheques, de los cuales uno de ellos estaba a nombre de Pedro Ravanal y el otro a nombre de Pedro Paredes.

Agregó que con esta información que le dio la fiscal, más lo señalado por el fiscalizador señor Urrutia, en el sentido que habiendo solicitado los respaldos de las órdenes de pago de las dos empresas, a la fecha no habían recepcionado el total de lo requerido, la diligencia en cuestión tenía por objeto buscar dichos decretos de pago, talonarios de cheques, documentación contable, artículos electrónicos o computadores, donde se podría obtener información con respecto al ilícito cometido; diligencia que se centró en el departamento de Finanzas de la DAS, para lo cual tomaron contacto primeramente con el alcalde de la municipalidad, dándole a conocer a grandes rasgos lo que iban a realizar, y se le solicitó que firmara el acta de autorización de levantamiento de secreto bancario para 10 cuentas de la DAS, para luego dirigirse a calle Gabriel Toro 49 donde se contactaron con el Director subrogante, Juan Garcés Gallardo, a quien se le dieron a conocer las diligencias.

Que a dicha diligencia concurrió **Irina Angélica Casanova Figueroa, perito fotógrafa del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones**, quien se constituyó el mismo día y hora conjuntamente con el personal de la Brigada de Delitos Económicos de Concepción, como ella misma lo señaló, quien agregó que las dependencias de la DAS constan de tres pisos, y en cada uno de ellos habían oficinas y en cada piso se fijaron computadores con sus números de serie de importancia para la investigación, y que la fijación fue con más detalles en las oficinas del departamento de finanzas en el tercer piso; ello en la calle Gabriel Toro 49, dado que después se trasladaron a la calle Señoret N°86, donde había una oficina y un computador con su número de serie; perito que realizó 51 fijaciones fotográficas, que son las que se contienen en **Otros Medios de Prueba N° 88**, que le fue exhibido, en torno al cual detalló cada uno de los lugares que fijó fotográficamente, particularmente dio cuenta que en ellas se aprecia el frontis de las dependencias de la DAS de Talcahuano en calle Gabriel Toro 49, el acceso al primer piso y oficinas de abastecimiento y adquisiciones e interior de dichas oficinas, observándose un computador en la oficina del jefe de dicho departamento (fotos 1 a 15), como también otra oficina de dicho departamento de abastecimiento, escritorio y el total de 3 computadores incautados (fotos 16 a 20); dependencias ubicadas en el segundo piso de la DAS, la oficina del director, su escritorio y un computador, con su número de serie (fotos 21 a 24); la oficina del jefe de Finanzas, su escritorio, computador incautado y número de serie (fotos 25 a 27); dependencias del tercer piso de la DAS, entre ellos el departamento de Obras y Mantenimiento y oficina del jefe de dicho departamento, computador incautado y número de serie (fotos 28 a 33); el acceso al departamento de finanzas y el interior del mismo, tres escritorios en las ubicaciones que precisa al interior, y computadores existentes



sobre los escritorios, y sus números de serie (fotos 34 a 40 y 45), documentación sobre un mueble, a la espalda de un escritorio (fotos 41 a 44); como asimismo el frontis de las dependencias de calle Señoret N° 86, el interior de las mismas, las oficinas ubicadas en el segundo piso, la existencia de dos escritorios, documentación y un computador incautado y su número de serie (fotos 46 a 51).

Que el funcionario **Valenzuela Ortiz** describió las dependencias en cuestión, como una casa de 3 pisos, con un antejardín y una reja perimetral, precisando las áreas donde se hizo levantamiento de archivos o documentación contables, facturas, órdenes de compra, señalando que:

En el primero piso, a mano derecha, entrando por puerta principal, había cocina, patio luz, y dependencias u oficinas, y ahí se encontraban los administrativos del Departamento de Abastecimiento, y de esas oficinas se levantó información, como documentación contable, órdenes de trabajo, órdenes de compra, archivos y computadores.

En el segundo piso, a mano izquierda, donde habían 3 puertas, una de ellas correspondía a la oficina del Jefe de Finanzas, en la cual había un escritorio y una pequeña mesa de trabajo, y de esta oficina no se levantó mucho, no recordando que se haya encontrado documentación importante, pero si el computador que ocupaba el jefe de finanzas; y también se levantó el computador de la oficina que estaba frente a la escalera del segundo piso, que era del director de la DAS; pero no recuerda qué equipos de trabajo realizaron la revisión de las dos dependencias indicadas.

En el tercer piso, se encontraba la dependencia desde la cual se levantó más información y documentación; que a mano izquierda habían 3 oficinas separadas por vidrios, y una oficina grande donde habían varios escritorios; que esa área de 3 oficinas eran de Obra y Mantención, y los escritorios eran de administrativos de esa dependencia; desde dónde también se levantó documentación, órdenes de trabajo, archivadores y computadores.

En cuanto a la oficina administrativa de finanzas, se ubicaba en el tercer piso, frente a la escalera, era una oficina como del porte de una pieza, que entrando a su lado derecho había un lavaplatos, arriba del lavaplatos había archivadores en repisa, por ese mismo lado derecho, hacia la pared, al fondo se encontraba un escritorio, el cual también, en la parte superior trasera, tenía una repisa con archivadores, y frente a este habían dos escritorios más, uno pegado a la ventana, y un tercer escritorio más cerca de la puerta, que en su parte superior también tenía archivadores, y entremedio de los dos escritorios había una caja fuerte, y al lado de la ventana en el segundo escritorio, había una caja al parecer metálica, con documentación, papeles, órdenes, en la parte superior; oficina en la que recuerda que estuvieron a cargo del registro sus colegas Rojas



y Torres; y la fiscal que se centró en esa dependencia; señalando las evidencias levantadas desde estas dependencias:

Archivos con documentación contable, decretos de pago, se levantaron cajas plásticas, con documentación y otras cosas que tenían en su interior, talonarios de cheques que estaban dentro de la habitación, y mucha documentación contable que se encontró; que de la oficina de Finanzas se levantaron archivadores con documentación contable de años anteriores, una caja plástica, con documentación atinente a la investigación, talonarios de cheques, sin cheques en su interior, órdenes de compras, completas y no completas, debido a que muchos de los testigos entrevistados indicaron que para llegar al final del pago de facturas de proveedores se generaba un decreto de pago con una serie de documentación adjunta y varias firmas que se necesitaban, y algunas tenían la documentación completa y otras facturas no tenían la documentación completa; señalando a este respecto que algunos testigos, como Priscila Muñoz Candia, decía que entrando a mano derecha, arriba del lavaplatos, se encontraba la documentación que ella llamada “legal”, que eran órdenes de compra pagadas, y bien pagadas, y al lado izquierdo sobre el escritorio de la señora Nubia, se encontrarían pagos de facturas y pagos incompletos de la señora Nubia y del señor Cabello; y otro testigo, Juan Francisco Torres Vargas, señaló lo mismo, que al lado derecho se encontraría la documentación que había salido correctamente hacia pago, y al lado izquierdo, la documentación que no sabía bien de qué se trataba porque le pertenecía a la señora Nubia, y él por ser un trabajador recién contratado o que estaba en reemplazo, no se metía ahí, lo que también señalaron funcionarios del área de finanzas de la DAS de Talcahuano.

En cuanto a las evidencias en concreto que fueron habidas en las dependencias de la DAS, el testigo Valenzuela Ortiz, señaló los lugares en que fueron encontradas las mismas, agregando que ese día se levantaron 14 actas de incautación de documentación contable, carpetas, archivadores, aparte de los computadores que fueron entre 8 a 12 en esa primera oportunidad: Así:

1.- Señala que en el tercer piso, al lado de la escalera, había una dependencia destinada a baño, la cual él revisó, en cuyo interior habían varias cajas apiladas con información contable que tenía la Dirección de Salud, como facturas y decretos de pago, pero era documentación antigua y no eran atinentes a la investigación, por lo cual se desestimó la misma, precisando que la fotografía 34 que se le exhibe **(Otros Medios de Prueba N° 88)** muestra dicho lugar.

2.- Que al interior de la oficina de finanzas habían 3 escritorios, y al lado derecho un lavaplatos, que uno era el escritorio que correspondía a Priscila Muñoz Candia, en cuya parte posterior se ubicaban unas repisas con a archivadores, muchos de los cuales fueron incautados, siendo el criterio para



ello, todo lo que tenía relación con órdenes de compra y facturas desde mediados del año 2017, del año 2018 y hasta los primeros meses del año 2019, escritorio que se aprecia en la fotografía 35 que se le exhibe (**Otros Medios de Prueba N°88**), precisando que él no levantó los decretos de pago, sino que fue informado de ello.

3.- Que frente al escritorio de Priscila Muñoz, se encuentra ubicado el que ocupaba Nubia San Martín Pavéz, el cual los testigos identificaban como el que quedaba al costado de la ventana de la oficina; el cual se aprecia en las fotografías 36 y 38 que se le exhiben (**Set Fotográfico de Otros Medios de Prueba N° 88**), en las cuales indica se observan algunas de las cosas incautadas, dos carpetas color azul que estaban encima de la mesa, más de talonarios de cheques, una caja archivador marca Rehin, con documentación contable, decretos de pago pendientes, que estaban atrás del escritorio de la señora Nubia; los cuales se incautaron, al igual que el computador allí existente, precisando que los talonarios de cheque, que estaban todos usados, habrían estado en los cajones del escritorio de la señora Nubia, aunque no sabe si se encontraron otros talonarios distintos a esos, porque al llegar estaban todos en el escritorio de la señora Nubia, y las carpetas fueron levantadas desde la repisa que se encontraba a la cabeza del escritorio en cuestión; todo lo cual se aprecia en las fotografías 39 y 40 del set referido; y que en la fotografía 41 se aprecia una caja metálica que estaba detrás, al lado izquierdo del escritorio de la señora Nubia, en la cual había una gran cantidad de decretos de pago y documentación contable, que según testigos, dichos decretos estaban para pago, según lo que fuera diciendo la Dirección de la DAS o el jefe de Abastecimiento, o si llegaba algún proveedor a reclamar el pago de su documento, se le daba prioridad a ese pago, según lo indicara el director; decretos de pago que fueron incautados; precisando que en la fotografía 42 del set en cuestión se ve una agenda, y además, dos carpetas azules y los talonarios de cheques, que entiende que fueron encontradas en ese cajón, lo cual fue incautado.

Señaló que los talonarios de cheques encontrados en el escritorio de la señora Nubia, corresponden a los que se le exhiben (**Otros Medios de Prueba del N°9 al 22**), lo que sabe porque en la parte posterior se ve el número de la cuenta que termina en 161, que era una de las cuentas que usaba la señora Nubia en la confección de los documentos.

Que al serle exhibido **Otros Medios de Prueba N° 25**, manifestó que se aprecian los documentos que estaban encima del escritorio de señora Nubia, con documentación contable, entre ellos, decreto de pagos, copias de depósitos de cheques a diferentes empresas, comprobantes de movimientos contables, ordenes internas de pagos, copias de facturas, mucha documentación que correspondería a los legajos que usaba la DAS para hacer los pagos de los proveedores, los que no estaban completos, pues le faltaría documentación;



habrían 6 legajos que no estarían completos, más un listado de pagos de una empresa Indura SA, en formato Excel, y algunos comprobantes denominados “obligaciones por devengar”; las carpetas estaban encima del escritorio de la señora Nubia, pero entiende que estaban en la repisa posterior de la señora Nubia, las dos carpetas de color azul que se levantaron; como también refiere que el legajo del decreto de pago 1540 que se le exhibe (**Otros Medios de Prueba N°1**), que contenía archivos y documentos, estaban en el puesto de trabajo o escritorio de la señora Nubia.

Precisa que en la **Prueba Documental 201 a 206 que se le exhibe** contiene los documentos que fueron incautados desde el escritorio de Nubia San Martín, que corresponden a los decretos de pago 1359, 1305, 1220, 1088, 444 y 1475, decretos fueron incautados de los archivadores que estaban en la repisa de la parte posterior del escritorio de Priscila Muñoz.

Del mismo modo, del mérito de lo señalado por los funcionarios policiales que concurrieron a la diligencia en cuestión y de la lectura de la cadena de custodia NUE 5196587 (**Prueba Documental 207 a 211**), queda establecido que entre la documentación incautada desde las oficinas del departamento de finanzas de la DAS, se encontraban 5 comprobantes de movimientos contables, de distintas fechas del año 2018, en los cuales se hacía mención a los cheques respectivos, los cuales igualmente fueron incautados, los que totalizan 8 cheques de la cuenta municipal terminada en 161, todos los cuales se encontraban incompletos en su llenado, salvo uno girado a nombre de Jorge Cáceres Méndez, por \$1.591.850, de 7 de enero de 2018, lo cual pone de manifiesto las irregularidades e ilicitudes en las que se encontraba Nubia San Martín y de las que más adelante se darán cuenta.

El funcionario Valenzuela Ortiz también indicó que los legajos de decretos de pago que se contienen en la **Prueba Documental 212**, deberían haber sido incautados del puesto de la señora Nubia, desde la parte posterior, donde se visualizan legajos de órdenes de pago, aunque no está seguro, pues él no los levantó, por lo que pueden haber estado en otra parte; y los legajos de decretos de pago que se contienen en la **Prueba Documental 213** que se le exhibe, también deberían haberse levantado del escritorio o círculo de resguardo del escritorio de la señora Nubia, de encima de la caja metálica, lo que sabe por lo que le fue indicado, ya que él no los levantó.

4.- Otro escritorio se encuentra ubicado, entrando por la puerta principal, al lado izquierdo de la oficina, al lado del escritorio de la señora Nubia San Martín, que en primera instancia era ocupado por Marcos Sánchez Rodríguez, y al día de la entrada y registro entiende que era ocupado por el señor Juan Torres Vargas, escritorio en el cual había un computador y alguna documentación,



estando seguro que éste último se incautó, señalando que es el que se aprecia en la **fotografía 43 del Set Fotográfico de Otros Medios de Prueba 88.**

DECIMOQUINTO: Que según lo dicho, también se llevaron a cabo por parte de la Policía de Investigaciones diligencias de entrada y registro en los domicilios de los acusados, entre ellos el de los encartados **Nubia San Martín Pavez y Pedro Ravanal Mellado, ubicado en Tegalda N° 36 A, sector Collao, Concepción.**

1.- Al respecto se cuenta con los dichos de **Valenzuela Ortiz**, quien refirió haber realizado, entre otras diligencias, la toma de declaración a Pedro Ravanal Mellado y a Nubia San Martín Pavez, los días 3 y 4 de julio de 2019, respectivamente, dando cuenta del relato que les proporcionaron en calidad de imputados, que en general les dieron a conocer el modus operandi y reconocieron el cobro de cheques por parte de Ravanal y la firma de los mismos por San Martín, y a raíz que Pedro Ravanal indicó que el dinero su señora lo guardaba en una caja fuerte en su domicilio, la fiscalía consiguió una orden de entrada y registro emanada del Juzgado Garantía de Talcahuano para realizar diligencias de inmediato, por lo cual el mismo 3 de julio a eso de las 12:30 horas, se conformó un vehículo policial con miembros de la Brigada Delitos Económicos, encabezados por su persona, entre los que también estaban el subcomisario Medina, subcomisario Fernández y el comisario Torres, y acompañados de un perito fotográfico del Laboratorio Criminalística, concurrieron a calle Tegalda 36 A, Concepción, con la intención de encontrar documentación contable, dinero o alguna especie tecnológica que fuere atinente a la investigación.

El funcionario citado dio cuenta de las características del domicilio señalado, particularmente que se trataba de una casa de un solo piso, con un antejardín, en el cual había una camioneta y un vehículo menor y una motocicleta, y que al momento de la diligencia se encontraban presentes ambos imputados, señalando que desde dicho inmueble se levantaron tres teléfonos celulares, dos que estaban en pertenencias de cada uno de los imputados, y un tercero que estaba en un velador de la pieza principal del domicilio, que además se incautó un poco más de dos millones de pesos, una caja fuerte, la cual contenía una carpeta amarilla, un cheque de pago tarjado, a nombre de Pedro Ravanal, de la cuenta que terminaba en 161, y un cheque que terminaba en 579, por alrededor de \$2.600.000 o \$2.800.000, que era de la cuenta DAS de Talcahuano, como Aporte Municipal; que también había una carpeta roja, la cual contenía una confesión manuscrita de dos hojas de la señora Nubia que decía relación con lo que había pasado, y algunas facturas de proveedores de la DAS y algunos correos electrónicos; precisando en relación a los teléfonos, que había uno teléfono que no tenía clave, que era el que estaba en el velador, y de los otros dos, las claves fueron aportadas por los imputados, que se supone que



con esos teléfonos la brigada especializada puede hacer pericias, pero entiende que esas pericias no fueron prosperas porque no se pudo entrar a los teléfonos, porque las claves no correspondía a la clave real de los teléfonos.

En cuanto al dinero incautado fue encontrado en dos partes, pues la gran mayoría estaba dentro de una caja metálica dolor oscuro que estaba en la mesa, y una gran cantidad en volumen, en rollos de monedas y bolsitas de papel con vueltos de su ventas de miel que tenían Nubia con Ravanal, según lo indicado por ellos, en dos bolsas que estaban en una cómoda de la pieza, en el primer cajón, billetes dentro de una billetera, y las dos bolsas con vueltos; que solo se encontró el dinero referido, y en la caja fuerte solo se encontraron las dos carpetas, que contenía un cheque, pero no se encontró dinero en la caja fuerte, que Nubia y Pedro, dicen que los dos millones levantados eran por la recaudación de miel y huevos que vendían.

2.- Que ha dicha diligencia concurrió Rodrigo Eduardo Figueroa Olivares, perito fotógrafo del Laboratorio de Criminalística de Concepción de la Policía de Investigaciones de Chile, quien señaló que se constituyó el mismo día y hora señalado, conjuntamente con el personal de la Brigada de Delitos Económicos de Concepción, a cargo de Alex Valenzuela Ortiz, en calle Tegualda 36 A, sector Collao, de Concepción, que es el domicilio de la imputada Nubia San Martin Pavez, en cuyo lugar procedió a hacer un registro fotográfico de las dependencias de la vivienda, que incluyen el antejardín, acceso, living comedor, pasillo de distribución, dos o tres dormitorios, otra habitación, más una dependencia o especie de ampliación lateral, techada y cerrada; como también fotografió objetos de interés que le indicaba el personal de la brigada a cargo de Valenzuela Ortiz; y al respecto evacuó un informe que contiene 65 fijaciones fotográficas, que indica son las que se contienen en **Otros Medios de Prueba N° 89**, que le fue exhibido, en torno al cual detalló cada uno de los lugares que fijó fotográficamente, particularmente dio cuenta que en ellas se aprecia el frontis de la propiedad, el antejardín y dos vehículos al interior, especificando que uno es un vehículo marca Ford patente CB KS 35 y una camioneta patente ST 6388 (**fotos 1 a 4**); el frontis de la vivienda (**fotos 5 a 7**); el living de la vivienda (**fotos 8 y 9**); la dependencia destinada a comedor, en cuyo centro se fijó una caja metálica, encima de la cual se aprecian unas hojas, precisando ante preguntas de la defensa, que desconoce quién abrió la caja, que seguramente fue personal de la Brigada de Delitos Económicos, y que desconoce dónde estaba la caja, pues al ingresar se le pidió que había que fijarla y estaba en el comedor (**fotos 10 a 12**); como también una hoja manuscrita al costado de la referida caja metálica y dinero en monedas y billetes al interior de la misma, con el detalle de todo su contenido, en especial la nota manuscrita que estaba en la caja, que contiene un listado de números, cantidades, fechas, y operaciones matemáticas (**fotos 13 a 17**); vistas de uno de los dormitorios, en las que se aprecia un mueble tipo cajonera, en la que se ve un cajón abierto en el cual hay



un estuche con dinero en su interior y bolsas sintéticas color blanco, con el detalle de los billetes de \$20.000 encontrados en el estuche, precisando que en una de las bolsitas sintéticas habían unas bolsitas de papel en las que se lee señora Carmen y en otra se aprecia un billete de diez mil pesos **(fotos 18 a 26)**; como también se aprecian el pasillo, y el acceso al dormitorio principal y el interior del mismo, en el cual hay un closet, en cuyo interior se aprecia una caja de seguridad, con sistema de apertura digital, con clave **(fotos 27 a 33)** y luego se ve el contenido de dicha caja abierta, con un estuche, una caja de cartón en su interior y varios documentos, precisando que hay un cheque que se ve rayado en su totalidad, que es de la Dirección de Salud Municipal de Talcahuano, en cuyo reverso se ve numeración 9844026-7 y 984500049 **(fotos 34 a 38)**, precisando ante preguntas de uno de los defensores que la referida caja estaba cerrada en un ropero del dormitorio, desconoce quién la abrió después y si se pidió o no la clave y en la fotografía está abierta sobre una cama cuando se fija fotográficamente; un mueble velador en el dormitorio principal, en cuya parte superior se aprecia un teléfono celular, en cuya tapa protectora figura el número 569739157031 **(fotos 39 a 42)**, como igualmente otras habitaciones del domicilio, en una de las cuales se aprecian máquinas de ejercicio **(fotos 43 a 54)**, una habitación en la que habían una serie de cajas de cartón y un escritorio **(fotos 55 y 56)**; una especie de ampliación techada, en cuya dependencias se aprecian unos tambores metálicos, que contenían algo relacionado con miel **(fotos 57 a 61)**, e imágenes que registran un teléfono encontrado en la vivienda **(fotos 62 y 63)**; y un segundo teléfono, el cual no recuerda si tenía o no clave o si alguien lo desbloqueó, pues solo lo fijó en la posición que estaba **(foto 64)** y un tercer teléfono **(foto 65)**, precisando que en la vivienda se encontraron 3 teléfonos, uno de los cuales estaba sobre el velador.

3.- Que el funcionario Valenzuela Ortiz, con apoyo de las fijaciones fotográficas referidas **(Otros Medios de Prueba 89)**, precisó las dependencias y lugares desde donde se efectuaron los levantamientos de dinero, objetos y documentación, señalando que las **imágenes N° 10 y 11** corresponden al comedor, donde encontraron la caja metálica color oscuro que contenía dinero en billetes y un papel u hoja como de agenda color amarillo, que contenía movimientos de dinero, sumas y restas; que la caja al llegar estaba abierta, según lo que recuerda; que las **N° 14 y 15** ilustran el dinero encontrado dentro de la caja metálica, y que según lo indicado por Nubia San Martín y Pedro Ravanal, el dinero encontrado era por venta de miel y huevos; **la N° 16** muestra lo que se encontró en el interior, que se supone que era por ingresos por la venta de esos productos; **que la N° 21** se aprecia un mueble, cuyo primer cajón está abierto, en el cual se encontró más dinero en efectivo, en billetes dentro de una billetera, y las dos bolsas, una de las cuales contenía rollos de papel blanco con monedas, y en otra bolsitas de papel, blancas con nombres en cada bolistas **(Fotos 22 a 25)**, los cuales los imputados dijeron que eran vueltos pendientes



de entrega por la venta de miel y huevos; que el cajón estaba abierto al momento de entrada y registro, y se aprecia que estaba con la lleve; **en la N° 26**, se ven las referidas bolsas levantadas e incautadas; precisando que él vio que habían unas 3 o 4 bandejas de huevos, y dos tarros grandes color amarillo, que estaban en un segundo patio techado, los cuales contenían miel y visualizó varios potes contenedores de un kilo o medio kilo de miel, tarros amarillos que dice se aprecian en la **imagen N° 60**; agregando en relación a las **N° 31 y 35**, que recuerda haber visto fotografías que indicaban que este era un closet dentro del dormitorio principal de los imputados Nubia San Martin y Pedro Ravanal, en el cual se aprecia dentro del closet una pequeña caja fuerte de 40 centímetros de ancho y 15 de alto, donde se encontraron las carpetas amarillas y roja, que contenían cheque y confesión de la señora Nubia, correos electrónicos y facturas, agregando que sus colegas le indicaron que le solicitaron a la señora Nubia abrir la caja fuerte.

4.- Que al referido funcionario Valenzuela Ortiz se le exhibieron una serie de elementos probatorios que dicen relación con las evidencias incautadas a las que ha hecho referencia, entregando mayores detalles al respecto.

a) Así, en cuanto los **Otros Medios de Prueba N° 65**, singularizados en el auto de apertura como Teléfono Samsung modelo sm-g530H Galaxi Grand prime y teléfono marca Samsung modelo sm-G965F Galaxi 59, bajo NUE 5950473; señaló que corresponden a dos teléfonos incautados en la casa de Nubia San Martin y Pedro Ravanal, el de color negro que tendrían ellos en su poder, y el de flores, con un numero al interior, correspondería al que se incautó en la pieza principal del domicilio, en un escritorio, al lado de la cama; precisando que el teléfono de flores era sin clave y era de propiedad de Nubia San Martín; y el otro oscuro tenía una clave, era de propiedad de Pedro Revanal, y por lo que tiene entendido, no se pudo ingresar al teléfono, porque la clave no correspondía; y respecto de un tercer teléfono que no está entre los que se le exhiben, que era de propiedad de Nubia San Martín, señala que ese sí tenía clave, y entiende que tampoco se pudo ingresar y rescatar información de esos teléfonos..

Respecto a dichos celulares, ha de señalarse que según el perito **Marcelo Eduardo Ziem Cortes**, le correspondió periciar los dos teléfonos referidos en esa NUE, uno de los cuales se encontraba desbloqueado y el otro bloqueado, pero al serle exhibidos, y por estar apagados, no pudo determinar cuál de ellos, porque los dos modelos son iguales, pero señaló que el bloqueado era el modelo Samsung G965, pero él no sabe si el propietario entregó la contraseña, pero no recuerda si fiscal se la hizo llegar o no, por lo que solo extrajo la información del otro celular; agregando que las extracciones del celular se encuentran en el Disco Duro marca Toshiba, número serie THKG, contenido en **Otros Medios de Prueba N° 55** que se le exhibe; información que fue analizada por la



subinspectora de la PDI, **Llubixza Alexandra Lizana Olivares**, que confirma que la información se encuentra contenida en dicho disco duro, quien dio cuenta que la información contenida en el teléfono Samsung SMG 530H estaba constituida por alrededor de 9.000 fotografías, entre las cuales habían 3 comprobantes de pago con destino a la cuenta bancaria de Pedro Ravanal Mellado, por las sumas de \$140.000, \$170.000, y \$180.000, y una gran cantidad de fotografías, entre las que señala que aparecían Ravanal y San Martín, como capturas fotográficas a uso computadores en las que se apreciaban operaciones en un estado de cuenta de la Municipalidad de Talcahuano; al igual que habían fotos de dos comprobantes de pago por alrededor de 34 y 35 millones de pesos; y también diversas conversaciones en red social Messenger, whatsApp y chat hangouts; información que se contiene en el Informe Policial N° 143, que **Otros Medios de Prueba N° 98, 99, 101**, que le fue exhibida y que detalló; testigo Lizana Olivares que igualmente dio cuenta de la información contenida en el teléfono celular Samsung SMG 965F, señalando que dicha información también está contenida en el disco duro que se le exhibió, y su informe sobre los resultados del análisis contenidos en el mismo Informe 143, señala que se encontraron gran cantidad de archivos, carpetas, subcarpetas, fotografías, videos, resaltando como de relevancia, dos boletas electrónicas de 31 de julio de 2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, correspondientes a dos presupuestos dentales en sociedad de servicios odontológicos Dufey Limitada, por sumas de \$4.000.0000 y \$3.400.000 aproximadamente; resultados que señala están contenidos en **Otros Medios de Prueba N° 102** que le fue exhibido, y que también detalló de manera extensa.

b) En torno a los **Otros Medios de Prueba N° 6**, refiere que se trata de una carpeta color amarillo, y corresponde a la que fue incautada en el domicilio de Nubia San Martín, desde un closet de pieza principal de la casa, y dentro de una caja fuerte; señalando que al interior de la referida carpeta existen: un legajo de documentos, como hoja resumen de seguro colectivo de incendio con sismo y adicionales al edificio “Crédito hipotecario” de Nubia San Martin Pavéz; calendario de Vencimientos, que hace referencia a un crédito del 12 de junio de 2019, por alrededor \$5.100.000, a nombre Nubia Edith San Martin Pavez, primera cuota del 1.08 2019 al 1.7 del 2021; adjunta una hoja resumen contrato prestación servicios 24 horas a nombre Nubia San Martin, de fecha junio de 2019 y un contrato de prestación de servicios 24 horas persona natural, el cual no registra ninguna firma a mano; y una Hoja Resumen Seguro Desgravamen “Crédito Hipotecario” Nombre Nubia San Martin Pavez, de 20 de junio de 2019, sin firma.

Agregó que también hay un cheque serie 9710579, cuenta fiscal 52709052161, de Titularidad I. Municipalidad Talcahuano, Dirección Salud Aporte Municipal, que fue encontrado al interior de la caja fuerte que estaba en el closet de pieza de señora Nubia, de alrededor \$2.618.000, en números, y que



se alcanza a distinguir a nombre de Pedro Ravanal, y recuerda que al ser incautado y llevarlo a la Bridet revisó a quien correspondía el Rut que aparece en la parte posterior, y puede confirmar que corresponde a Pedro Ravanal Mellado; que el cheque tiene dos firmas a la vista, en las cuales él no las reconoce, porque nunca vio las firmas de los firmantes, y un timbre de la Municipalidad de Talcahuano que dice Fondo de Salud, y fecha 8 de marzo de 2018; y que la señora Nubia al ser consultada por el cheque, dijo que lo había hecho mal, y que lo guardó en su casa y que se le olvidó en la caja fuerte, y por eso lo mantenía allí.

c) Respecto a **Otros Medios de Prueba N° 64**, indicó que se trata de un **comprobante de depósito**, comprobante del Servi Estado, de fecha de depósito 12 de julio, cuya fecha no alcanza a visualizar, del Ministerio Público, que da cuenta del dinero incautado en el domicilio de Nubia San Martín y Pedro Ravanal, que fue encontrado en la caja seguridad y en las bolsas plásticas dentro de la cómoda de una de las piezas, que en total fueron más de dos millones, que según documento de depósito son \$2.027.490; documento que efectivamente estos sentenciadores pueden constatar que está borroso, probablemente debido a que se trata de una boleta cuya tinta se va desvaneciendo con el tiempo, en la parte de la fecha, que impide su lectura, pero sí se alcanza a apreciar el monto referido por el testigo.

d) También le fue exhibido **Otros medios de Prueba N° 3**, una carpeta color rojo, marca Torre, en torno a la cual manifestó que se trata de la carpeta encontrada al interior de la caja fuerte que estaba en el dormitorio de la señora Nubia, en cuyo interior se encuentra la carta que habría escrito a mano la señora Nubia respecto al relato de los hechos; que se le consultó a la señora Nubia sobre la misma, quien indicó que es un relato de los hechos de lo que había pasado, y que en algún minuto estuvo con la intención de entregarla, pero que no se había atrevido; precisando el funcionario policial que dicha carta se visualiza como una copia, pues no tiene rasgos de ser original, y son dos hojas manuscritas tamaño carta; procediendo el funcionario a dar lectura íntegra del tenor de la carta en cuestión; y cuyo tenor transcrito es el siguiente:

“Relatos de los hechos.

-En el inicio del año 2017, descubrí que don Alejandro Cabello Bustos, jefe del depto. de Finanzas de la Dirección de la Salud Municipal de Thno. giraba cheques a su nombre y de un tercero llamado Richard Augusto, utilizando su firma.

- Para mi sorpresa, estos pagos se venían realizando de años anteriores, se lo hice notar en varias oportunidades y su respuesta fueron evasivas y amenazas, por ejemplo “como no es de su incumbencia y que nunca le va a pasar



nada a ud. por dicha situación, por lo tanto quédese tranquila. otro ejemplo de respuesta “este asunto lo manejo yo”

- La forma en que descubrí la situación descrita anteriormente fue por mi inquietud de verificar que si dicha documentación contaba con todos los respaldos respectivos una vez pagados, esto se verificó utilizando los movimientos contables, chequeras y registros de banco (ctas ctes bancarias).

- Frente a la situación descrita creo que por una forma de acallar o verse sorprendido por lo que descubrí es que se me ofrece participar con un porcentaje en cada operación por realizar.

- Reconozco que frente al ofrecimiento dude en aceptarlo inicialmente, pero por la forma y seguridad de sus palabras tenían grado de imposición y obligatoriedad de participar en la operación, ya que siempre estuve involucrada involuntariamente por las firmas de documentos (cheques).

- Es importante destacar que don Alejandro Cabello Bustos es la única persona que realiza transacciones bancarias entre cuentas ctes. y pagos en línea a proveedores.

Otro elemento a destacar es el uso de claves de otros funcionarios autorizados para realizar pagos que él decide. lo anterior lo destaco porque el Sr. Alejandro Cabello Bustos nunca quiso tener claves bancarias, sin embargo siempre utilizó los dispositivos del banco de los otros funcionarios.

- Teniendo presente que el sr Alejandro Cabello Bustos siempre manejo toda la situación desde el momento en que se genera la idea y el pago del documento porque él sabía en que momento hacerlo, por lo tanto el modo operandi fue:

Jefe de Finanzas decidía en que momento hacerlo y realizar la operación definiendo los montos y personas que iban involucrados, dando siempre un porcentaje del monto cobrado, ya sea por la firma y cobro en efectivo del documento.

Nubia San Martin

8.203.869.8” y una firma o mosca al lado

El funcionario también da cuenta de otro documento encontrado al interior de la carpeta en cuestión, una hoja tamaño carta, manuscrita, denominado “Antecedentes a considerar B”, en el cual se señalan algunos detalles y prácticas que se hacían en el departamento de finanzas, que el da la impresión que era un punteo de la carta anterior, documento al cual también dio lectura íntegra durante la audiencia, y cuyo tenor es el siguiente:



“Antecedentes a considerar B.

Lo siguiente es un ejemplo real del pago de factura que no cumple con el proceso normal de pago.

- Facturas pagadas a través de compra directa a empresas: Ramiro Soto Valderrama y Cía Ltda Rut 77.649.530-1, Giro: servicio de vigilancia, arriendo vehículos, Aseo industrial.

La autorización de pago proviene del jefe de finanzas y del director (S) DAS

La documentación es entregada por el Director (S) DAS al jefe de Fzas o en su efecto a mi persona para cancelación, solo con factura.

La operación de pago no se registra en el movimiento de fondos, porque no existe orden de compra interna, sin licitación pública, adicionalmente en muchas oportunidades no se contaba con presupuesto para dichas compras.

Dejo constancia que las contrataciones directas con proveedores las realizo el jefe de Abastecimiento, actualmente Director (S) de la DAS

Por otro lado, me llama la atención los montos involucrados en el pago de facturas, por no corresponder a contratación directa, más bien corresponderían a licitaciones públicas.

Adicionalmente el pago de estas facturas se realiza con platas provenientes de Convenios SAR (Servicio de Alta Resolutividad) y no con presupuesto, que es lo que corresponde.

- Se adjunta detalle.”

También dio cuenta de otros documentos encontrados, como una hoja tamaño carta, manuscrita, que a la que también dio lectura, y que es del siguiente tenor:

“Antecedentes a considerar A

Trasferencias entre cuentas corrientes que constituirían malversación de fondos-:

- uso de cuentas ctes. De Bienestar N°52709000080 - salidas y entradas en último periodo

- no existen registros contables de estas transacciones.

Cta. Cte. 52709000080, Bienestar DAS”



Y a continuación hay un detalle de seis cuentas terminadas en 179 y otras terminada den 004.

Señala el funcionario policial, que igualmente había otra hoja manuscrita, tamaño carta, que se aprecia que es original, a la cual dio lectura, y cuyo tenor es el siguiente: *“Cuando el señor Cabello necesitaba dinero iba a la oficina y me decía que estaba con problemas económicos, que quería le girara de la cuenta 161 y si la cuenta no tenía recursos él proveía de otra cta cte para sacar y yo le preguntaba de que proveedor y le mostraba la información y me decía, y le preguntaba a que nombre el giro, y se contactaba con la persona a quien iba girado el cheque y lo acompañaba al Bco.”*

Asimismo, refirió otros documentos que existían en la carpeta en cuestión, como pantallazos de un whatsapp, correos electrónicos, copia de facturas electrónicas que detalla, cartolas de cuenta corriente del Banco Estado de la titular Nubia San Martín, certificados de cotizaciones previsionales, y una nómina de documentos, que corresponde a la solicitud que le hizo la Contraloría para buscar decretos de pago y cheques para corroborar el efectivo y correcto pago de las facturas.

DECIMOSEXTO: Por otra parte, igualmente se realizó una **diligencia de entrada y registro al domicilio del acusado Alejandro Cabello Bustos, ubicado en calle Colón 1307, departamento 305, Talcahuano**, la cual arrojó los hallazgos que a continuación se indicarán.

1.- Al respecto se cuenta con los dichos de **Valenzuela Ortiz**, quien refirió le llegó una instrucción particular de la fiscalía, que adjuntaba una orden de entrada y registro autorizada por Juzgado de Garantía de Talcahuano, por el cual se autorizaba la entrada y registro a la casa de Alejandro Cabello Bustos, ubicada en calle Colón 1307, departamento 305, Talcahuano, por lo cual concurren al domicilio indicado, con los comisarios Toro Torres, Leal Lagos; señalando que el inmueble es un edificio esquina, de alrededor de 5 pisos, que tiene entrada por calle Colón, hasta subir al tercer piso, donde se encuentra el departamento 305, el cual al momento de llegar los oficiales a la dirección, los atendió la hermana de Cabello Bustos, la señora Antonieta, quien solamente estaba con su madre en el departamento, y no había nadie más, a quien se le exhibió la instrucción de la magistrada, quien estuvo de acuerdo, procediéndose al ingreso del domicilio, ello con la intención de buscar dinero, documentación contable y elementos tecnológicos que pudieran acreditar los hechos que se investigaban; procediendo a describir el interior del mismo, particularmente que habían 3 dormitorios, siendo el de Alejandro Cabello Bustos, el del final del pasillo, desde donde se levantaron 3 contenedores o cajas plásticas, de las cuales dos eran con tapa plástica transparente y una con tapa fucsia, pues de las otras piezas o partes del departamento no se levantó nada; antecedentes que se encuentran en concordancia con los aportados por la funcionaria de la misma



unidad policial, **Gladys Lea Lagos Reyes**, quien señaló al respecto que el 13 de agosto de 2019 concurrió con colegas de la unidad a dar cumplimiento a una orden de entrada registro e incautación en domicilio de Colon 1307, departamento 305, junto a comisarios Eladio Alveal, Edgardo Albornoz, Cristian Torres, Luis Toro, Alex Valenzuela y José Miguel Rojas, cuyo domicilio pertenecía al imputado Alejandro Cabello Bustos; que se levantaron 3 actas de incautación, en las que había documentación contable de la empresa A y E Limitada, timbres de empresas, una bolsa con documentación de decretos de pago de la DAS de la Municipalidad de Talcahuano, documentación bancaria, máquinas transbank, fotocopias de facturas, entre otros; documentación que estaba en el dormitorio que ocupaba Alejandro Cabello.

2.- Que a dicha diligencia concurrió Ricardo Antonio Pérez Zúñiga, perito fotógrafo del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, quien señaló que se constituyó el mismo día y hora señalado, conjuntamente con el personal de la Brigada de Delitos Económicos de Concepción, a cargo de Alex Valenzuela Ortiz, en calle Colón N° 1307, departamento 305, en cuyo lugar se le solicitó fijar fotográficamente una dependencia destinada a dormitorio, y específicamente algunos contenedores plásticos de material transparente que estaban bajo una cama, que se levantaba el colchón, otro contenedor que estaba en un closet y otro que estaba en un estante, los cuales fueron abiertos, y se les pidió fijar unos sobres y documentos escritos; y al respecto evacuó un informe que contiene 17 fotografías del sitio del suceso; que indica son las que se contienen en **Otros Medios de Prueba N° 90**, que le fue exhibido, en torno al cual detalló cada uno de los lugares que fijó fotográficamente, particularmente dio cuenta que en ellas se aprecia el edificio del departamento ubicado en Color 1317, Talcahuano la puerta de acceso al departamento 305 (**fotos 1 a 3**); y el interior de un dormitorio del departamento, en el cual se observa un mueble a la izquierda y una cama, y sobre ese mueble hay unos contenedores de plásticos, y al levantar la cama, se observan otros contenedores transparentes (**Fotos 4 a 6**); como también se observa en el mismo dormitorio otro estante donde habían documentos que le solicitaron fotografiar y unos sobres, en que se aprecia el logotipo Banco de Chile (**Fotos 7 y 8**); vistas de la cama, que al ser levantada por los oficiales policiales se aprecia un contenedor al interior y acercamientos los contenedores plásticos, fotografiados sobre la cama y el contenido de los mismos, constituidos por carpeta y documentos y unas calculadoras, respecto a lo que luego se rectifica, señalando que al parecer son máquinas de tarjetas de crédito (**Fotos 9 a 17**).

3.- Que el funcionario **Valenzuela Ortiz**, con apoyo de 13 fijaciones fotográficas de las referidas precedentemente (Otros Medios de Prueba 90), precisó los lugares desde donde se efectuaron los levantamientos de evidencias, de manera coincidente con lo expuesto por el perito fotógrafo Pérez Zúñiga, y en



particular dio cuenta del levantamiento de unos sobres del Banco Chile (fotos 7 y 8); de la cama del dormitorio del señor Cabello Bustos, donde se aprecia una de las cajas contenedoras plásticas, con tapa fucsia, que se levantó, agregando si bien él no encontró la caja, sus colegas le dieron cuenta que al revisar debajo de la cama, se percataron que era una cama tipo cama nido y levantaron la cama, que tenía un brazo hidráulico (foto 9 y 10); y que hacia el otro lado de la cama del señor Cabello, hacia los pies, se puede apreciar la caja plástica señalada arriba del mueble, entre dos cajas negras, y una tercera caja que se encuentra en una pequeña repisa detrás de la puerta, en el espacio del medio, la cual contenían cosas de interés para la investigación (fotos 11, 12 y 13); por lo que se levantaron tres cajas plásticas, más los sobres que se encontraron en la pieza de Alejandro Cabello.

4.- Que al referido funcionario Valenzuela Ortiz se le exhibieron una serie de elementos probatorios que dicen relación con las evidencias incautadas a las que ha hecho referencia, entregando mayores detalles al respecto.

a) Así, en cuanto los **Otros Medios de Prueba N° 68**, señaló que se trata de uno de los contenedores que se encontró en la casa del señor Cabello, en su dormitorio, en un envase plástico con tapa plástica que estaba arriba en un mueble, entre dos cajas negras, y en su interior se encontró:

Un archivador marca Torre, color café oscuro, el cual contiene un sinnúmero de documentación de la cual dio cuenta durante la audiencia, consistente en una declaración mensual y pago simultáneo de impuesto formulario 29 de Sociedad Comercial A y E Limitada; certificado de declaración de formulario 29 de la misma Sociedad Comercial A y E Limitada, un pago de nombre Richard Anthony Augusto Álvarez, por \$293.835, con una cuenta de cargo del Banco Estado; certificado de Formulario 29 de diciembre de 2017, misma sociedad Comercial A y E Limitada; un pago de nombre Richard Anthony Augusto Álvarez, cuenta de cargo Banco Estado por \$364.045; copia de la hoja anterior; Factura Electrónica hacia sociedad Comercial A y E Limitada, de Balmaceda 725, Arenal Talcahuano, emitida por Marítima Industrial EL Faro S.A.; factura electrónica de Distribuidora Nueva Amanecer hacia Sociedad Comercial A y E Limitada, por bebidas alcohólicas; otra Factura misma distribuidora hacia sociedad comercial A y E, por bebidas alcohólicas y bebidas; Factura de Distribuidora Bonomini Limitada a sociedad comercial A y E Limitada, por bebidas alcohólicas y bebidas, y una Nota de Pedido por mismos productos; factura de Distribuidora Nueva Amanecer a Sociedad Comercial A y E Limitada, por bebidas alcohólicas y bebidas; factura Distribuidora Nuevo Amanecer a Sociedad Comercial A y E Limitada, por bebidas alcohólicas, bebidas y cervezas; Factura electrónica de Transbak S.A a Sociedad Comercial A y E Limitada, por concepto de comisión de venta de debido; factura transbank a sociedad comercial A y E, por comisión venta nacional, factura electrónica



distribuidora Nueva Amanecer a sociedad comercial por diferentes bebidas alcohólicas; otras 12 facturas de distribuidora Nueva Amanecer a Sociedad comercial Ay E por bebidas alcohólicas; Factura de Impresos Ferh, por confección de boletas de venta del 001 al 5000, a sociedad comercial A y E Limitada, de fecha 3 de enero de 2018; factura Distribuidora Amanecer a Sociedad Comercial A y E Limitada, por bebidas alcohólicas; Factura de Comercial Marítima Industrial El Faro, a sociedad Comercial Ay E Limitada por presurización a extintores; 4 Facturas electrónicas Sociedad Nuevo Amanecer y Nueva Bonomini Limitada, a Sociedad Comercial A y E, por bebidas alcohólicas.

Que también se encontró al interior **un Cuaderno marca Auca, espiral simple, con flores en suportada**; en cuyo interior se puede subentender que es un registro por día de las ventas que habrían tenido en Sociedad A y E Limitada, porque si bien la mayoría de los comprobantes están en blanco, algunos se lee como comprobante de Boucher de venta; lee tarjeta de crédito Comercial A y E, Balmaceda 00725 s/n Talcahuano 18 de abril de 2018, siendo las 00.08.36, por \$35.000; la primera fecha que aparece consignada en el cuaderno es miércoles 13.12.2017 y la última consignada es 29.04.2018.

También se encontraron al interior de la caja Boucher sueltos o prensados en un clip, la mayoría no se visualiza por estar borrados, pero en algunos se visualiza reporte de cierre del terminal Comercial A y E, de Balmaceda 00725 s/n Talcahuano del 15 de septiembre de 2018; que son los cierres que se hacen al terminar la venta del día; dato de urgencia de atención DAU, del Hospital Higuera de Alejandro Cabello Bustos, de fecha 01.01.2019; una orden médica de Alejandro Cabello Bustos, por una fractura de dedo de mano, de fecha 2.01.2019; orden médica de Alejandro Cabello Bustos, al parecer exámenes médicos de 02.01.2019; otra orden médicas por fractura de otro dedo de mano de 02.01.2019; facturas electrónicas hacia Sociedad Comercial A y E Limitada, de Abarrotes Económicos SA, de fecha 16 de septiembre de 2018; otras facturas de alcoholes; certificado de dominio Yolas.cl, que señalaba que estaba inscrito a nombre de ese dominio Elson Carlos Lienlaf Quirilao, otorgado por NIC Chile, que es el que lleva el control de los .cl en las páginas de internet; otras facturas por compras de alcoholes.

b) A la exhibición de Otros medios de prueba N° 69, referido a un timbre “C.A.E Ltda. 76.801.783-3”, carpetas con boletas y documentación variada, manifestó que todo ello estaba al interior de la caja fucsia que se levantó, detallando en extenso su contenido, en particular una carpeta Sport life, color blanco, con facturas, notas de debido, en su interior, las que detalla; una carpeta plástica, marca Rehin, en cuyo interior hay un contrato de arriendo entre Sonia González Gajardo y Sociedad comercial representado por Elson Lienlaf Quirilao, de 17 de noviembre de 2017, Balmaceda 741, por \$750.000, duración de un año, y comenzará a regir a contar del 12 de octubre de



2017; hay un registro de estatuto actualizado de sociedad comercial A y E Limitada, que en su artículo tercero señala que el domicilio de la sociedad es Balmaceda 725 Villa Arenal, Talcahuano; Ordenes de ingresos municipales, patente del periodo 1.09.2016 al domicilio Balmaceda 725 Talcahuano, patente de alcoholes; recibo de dinero por \$750.000, de 30 de enero de 2018, de Sonia González a la sociedad A y E; copia de la cédula de identidad de Richard Anthony Augusto Álvarez; copia de cédula de Elson Carlos Lienlaf Quirilao; Registro de certificado de anotaciones, Run 76801788-3, será Rut de la sociedad comercial A y E, constitución 14.11.2017, emitido 22.11.2017; Comprobante provisorio de RUT, del SII, de sociedad comercial A y E Limitada 78.801.788-3, de fecha 14.11.2017; Declaración juarda de timbraje de documentos ante SII, de 1 de abril de 2018, por legajo de boletas de 1 a la 5000 y por libro compraventas del 1 al 30; Cuenta agua de Balmaceda 741 Arenal, de entre 12 febrero al 14 marzo 2018; dos hojas oficio con planilla al parecer Excel en que existiría un registro con movimiento de bebidas alcohólicas y de fantasía.

Agregó que tanto en la carpeta que indica, como en una bolsa plástica con inscripción SUPER Ganga, y una carpeta color verde que dice ROCHE CHILE LTDA, se encontraron decretos de pago completos o con documentación adjunta, órdenes de compras, con documentación adjunta.

Que hay una segunda bolsa, Supermercado Tottus, que en su interior se encontraba variada documentación de la Municipalidad de Talcahuano, Dirección de Salud Municipal, Departamento de Finanzas; titulada Rendimiento Recaudación Febrero 2017, compuesta de dos páginas, que llevan adjunta y corcheteada, una gran cantidad de comprobantes de recaudación, los cuales dicen Centro de Salud Los Cerros, 13 febrero de 2017, 13, 14, 15, 16, todas de febrero de 2017; Registra 4 firmas y tres timbres, uno dice Recaudación Consultorio Los Cerros, dos iguales; y el tercer timbre Municipalidad de Talcahuano Dirección, Centro de Salud Familiar Los Cerros, Dirección de Salud, por lo que entiende que los comprobantes deberían sumar \$12.000, porque cada comprobante adjunto es de 200 y 300.

Que en la bolsa, aparte de los comprobantes, hay un Ordinario N°147 de 9 de marzo de 2017 del Centro Salud Familiar Los Cerros al Director Administración Salud Armando Domínguez Ponce, firmado por Claudio Morales Hidalgo, Director, timbre de Dirección Centro Salud Familiar Los Cerros.

También se encontró en la bolsa, en un porta documentos plástico azul, documentación de un vehículo Toyota Corola, de fecha junio de 2016, que hacen referencia que el propietario sería Alejandro Cabello Bustos, con domicilio en Yucatán 207, comuna San Cruz (certificado de emisiones, contaminantes, revisión técnica)



Finalmente, refiere el funcionario Valenzuela que había una tercera bolsa con documentación en su interior, que dice c/MORAN, y en su interior una carpeta cartón color rojo, en la cual hay un comprobante de pago desde una cuenta del Banco Estado de Alejandro Cabello a diferentes cuentas, que solo indican el número; de fecha 27 enero de 2017; comprobante de pago de cuenta de Essbio a través de transacción de Cabello de 27 de enero de 2017; una transacción a Ana Sáez Muñoz de 27 de enero 2017, por \$250.000; otra transacción de la misma cuenta y mismo día a Ana Sáez Muñoz, depósito \$250.000, mismo día misma cuenta a José Miguel Sáez Muñoz, \$250.000; mismo día misma cuenta a Ana Sáez Muñoz \$75.000, comentario “pensión”; todo lo demás corresponden a órdenes de compra y decretos de pago con documentación adjunta, de la Municipalidad de Talcahuano, Números 2057 de 27 de diciembre de 2012; 917, de 13 de junio de 2012; 920, de 25 de junio de 2013; 323, de 19 de marzo de 2013; 324, de 19 de marzo de 2013; 1606, de 5 de septiembre de 2014; 1257, de 10 julio de 2014; 1419, de 1 de agosto de 2014; 2024, de 5 de octubre de 2014; 725, de 17 de abril de 2014; 523, de 20 de marzo de 2014.

c) También se le exhibió al testigo Valenzuela Ortiz **Otros Medios de Prueba N° 70**, en torno a la cual indicó que se trata de la evidencia levantada en el domicilio de Alejandro Cabello, al interior de su dormitorio, en una caja encontrada a los pies de la cama de Alejandro, después de un mueble con puertas, en una pequeña repisa, al medio, junto a otra caja plástica con tapa verde; y se trata de 2 Máquinas Transbank, cuyos modelos y números de identificación señaló; un talonario de Boletas con un numero 1 en su portada, el cual al interior había un set de 5 boletas con copia, algunas ocupadas, que hacían referencia Comercial A y E Limitada, giro discoteque, cabaret, sala de baile y similares, ubicada en Balmaceda 725, sector Arenal Talcahuano, que comienza en boleta número 1 y termina en la boleta número 496; y revisado el talonario, están usadas desde la boleta 1, del 4 de enero de 2018, a la 235 de 5 de agosto de 2018.

Agregando que al interior de la caja, también se encontraron rollos que corresponderían a las máquinas de transbank; como también había un tríptico de la empresa La Polar, en cuyo interior había un parte de un inspector municipal, de fecha 10 de enero de 2019, por un vehículo mal estacionado placa patente HR TY-47, el que estaría frente al domicilio 984, calle 8, San Marcos 2000. “estacionado en zona prohibida y señalizada; y que al revisar la placa patente del vehículo, correspondería a la señora Maritza Magdalena Vargas Pincheira, la cual se relacionó con Alejandro Cabello, conforme a lo indicado por la señora Nubia, en orden a que la pareja de Cabello en ese momento era de nombre Magdalena.



DECIMOSÉPTIMO: Por otra parte, y a propósito de la materialización de una orden de detención, se realizó igualmente una **diligencia de entrada y registro al domicilio del acusado Pedro Paredes Montoya, ubicado en calle Ainavillo 1040, Concepción.**

1.- Al respecto se cuenta con los dichos del testigo **Luis Didier Cárdenas Loyola**, comisario de la Policía de Investigaciones, perteneciente a la Brigada de Delitos Económicos de Concepción, quien refirió que el 25 de febrero de 2021 la unidad recibió una instrucción particular, por la cual se hacía mención a una orden de detención verbal a diversos imputados, entre los que estaba Pedro Paredes Montoya, por lo que junto a comisario Gabriel Arriagada y Carlos Torres, como a las 06:00 horas, se dirigieron al domicilio de Ainavillo 1040 Concepción, y al tocar el timbre sale la persona requerida que se identifica portando su cédula de identidad, por lo que es intimado de la orden de detención y él en conocimiento de los hechos accede al registro voluntario del inmueble en el que estaba, por lo que el personal policial con el imputado ingresan al domicilio, en particular a su domicilio que estaba en el segundo piso del inmueble, y al ingresar pudieron observar diferentes elementos de interés criminalístico para la investigación de la causa, por lo que se levanta el acta correspondiente para la incautación de algunas especies que se encontraban en dicho dormitorio; precisando que la resolución judicial también hacía mención a la entrada y registro y a la incautación de toda especie que tuviera interés criminalístico.

El referido Cárdenas Loyola dio cuenta que el inmueble habitacional, era de dos pisos, con un cierre perimetral metálico, en cuyo interior habían otros familiares del imputado, los cuales por la hora de entrada y registro estaban durmiendo en sus respectivos dormitorios, y el imputado tenía su dormitorio en el segundo piso, y ocupaba un solo dormitorio, pero tenía una habitación colindante donde almacenaba algunas especies; que en el dormitorio del imputado fueron encontrados 5 equipos celulares de diferentes marcas, en uno de sus veladores habían talonarios de cheques, algunos ocupados y otros con poca cantidad de documentos, y equipos computacionales como notebook y una CPU o computador de escritorio, documentos de interés en dos carpetas, una de color azul y otra de color rojo, lo que les llamó la atención porque había mucha documentación, unos sumarios y dictámenes de contraloría, documentos de compra de vehículos, liquidaciones de sueldos, entre otros documentos que no puede precisar.

2.- Que el funcionario Cárdenas Loyola, con apoyo de un set fotográfico que forma parte de **“Otros Medios de prueba N° 106”**, precisó las características del inmueble y, en particular, los lugares desde donde se efectuaron los levantamientos de evidencias ya referidos; manifestando que en las fotografías, las cuales fueron fijadas por él, se aprecia el frontis del



inmueble en cuestión y su antejardín y las dependencias del primero piso (**fotos 1 a 4**); el dormitorio del imputado en el segundo piso de la vivienda, donde se observan dos veladores al lado de la cama y al frente un mueble de televisión (**fotos 5 a 7**); detallando que se aprecia un escritorio, sobre el cual habían celulares al igual que en el velador, y también talonarios de cheques (**foto 8**), que en el mueble del televisor hay dos notebooks, y bajo ello carpetas con documentación de interés, carpetas que dice que, a su vez, se encontraban al interior de una carpeta azul (**foto 9**); uno de los veladores, y observándose que abajo hay un equipo celular (**foto 10**); se detallan los equipos celulares que estaban en el velador y fueron apilados para ser fijados fotográficamente, que en total son 5 equipos celulares de diferentes marcas, reconocidos por el imputado como de su propiedad, quien dijo que solo uno de ellos tenía clave de bloqueo, la cual compartió en el acta respectiva, autorizando el acceso a dicho equipo (**foto 11**); que se ve el interior de la cajonera de uno de los veladores, en que se observan diferentes talonarios de cuentas corrientes del banco de Chile, algunos vacíos y otros incompletos (**foto 12**); como también se fijó una habitación colindante al dormitorio del imputado en cuyo interior se observa una CPU y un equipo notebook sobre una silla, las que fueron levantadas (**fotos 13 a 15**).

3.- Que al referido funcionario Cárdenas Loyola se le exhibieron una serie de elementos probatorios que dicen relación con las evidencias incautadas a las que ha hecho referencia, entregando mayores detalles al respecto.

a) Así, en cuanto los **Otros Medios de Prueba N° 23**, señaló que se trata de una carpeta azul, de cartulina, que al abrirla, contiene diferentes documentos en papel, siendo uno de ellos una factura electrónica DIFOR Chile N° 144068, emitida el 8 de febrero de 2017, a Ingrid del Pilar Saldaña León, se refiere a station wagon nuevo marca Ford modelo eco sport, por monto de \$8.815.126, más IVA, \$10.490.000; en cuyo interior también se encuentra la solicitud de primera inscripción de 9 de febrero de 2017 realizada en la oficina del Registro Civil Mirador Bío, que coincide con el vehículo señalado anteriormente; hay liquidación de remuneraciones a nombre de Ingrid Saldaña León, como docente, por \$825.235, al mes de abril de 2019, otra de febrero de 2019, por \$845.552.

También da cuenta que se encuentra al interior una Minuta para prueba testimonial, y que se detallan 6 preguntas a Irene Navarrete Rodríguez: 1.- Nombre, tiempo y cargo que desempeña en la DAS, 2.- Donde se ubica físicamente su oficina y con quien comparte dicha dependencia, 3.- Ud. acusó a su jefe Armando Domínguez por persecución y acoso laboral, 4.- Cuando ocurrió, puede explicar brevemente porque ocurrió ese hecho, 5.- Ud. estaba enterada que existía una persecución de acoso laboral al señor Pedro Paredes, 6.- El Sr Paredes le comentaba este hecho y como le afectaba en su vida diaria; como también preguntas a Ingrid Saldaña León: 1.- Es Ud. esposa del señor Pedro Paredes, 2.- Como caracterizaría a su esposo, 3.- Ud. estaba enterada de lo que



sucedía con el cobro de cheques por parte de su esposo; 4.- Puede describir un día cualquiera de la rutina de su esposo; 5.- Ud. notó algún cambio de conducta de su esposo durante el último tiempo; 6.- Ud. notó algún cambio en los gastos domésticos que como matrimonio le llamara la atención; 7.- Cual es la situación contractual de su pareja.

También se encuentra un documento Formulación de cargo, de la Contraloría General de la República Regional Bío Bío, que aparentemente es un sumario de la unidad jurídica de dicha entidad, caratula 34329, firmado por el fiscal instructor Gladys Ferrada San Martín, con fecha 28 de octubre de 2019; como igualmente otra Formulación de cargos de la misma entidad mencionada, con timbre de recepción de oficina de partes de 14 de noviembre de 2019, de dicha Contraloría General, caratula 34329, firmado por fiscal instructor Gladys Ferrada San Martín, el 28 de octubre de 2019. Desconoce el contenido del documento.

Asimismo, hay un estado de cuenta nacional de tarjeta de Crédito, cartola bancaria banco Scotiabank, titular Ingrid Saldaña; resumen detalle de condiciones contractuales del crédito otorgado por Caja Los Andes, cuyo beneficiario es Pedro Paredes Montoya; no se observa firma ni timbre de ejecución del documento, ni fecha; una aparente liquidación de remuneraciones, emitida por Municipalidad de Talcahuano, del mes de febrero de 2019 a nombre de Pedro Paredes Montoya, con timbre y un visto bueno, en aparente estado de original, y hace un detalle de \$652.564, que debería ser el monto líquido; misma documentación del mes de marzo y del mes de abril.

Finalmente, indica que también se encuentra un documento de la Contraloría Regional Bío Bío, unidad jurídica, acta de notificación de cargo de 29 de octubre del 2019, que indica que se notifica personalmente a Pedro Paredes, jefe proyectos del Departamento Salud de Talcahuano, firmado Gladys Ferrada Sam Martin.

DECIMOCTAVO: Que es del caso que durante el período investigativo también se procedió a la incautación de otros teléfonos celulares, como por ejemplo durante la materialización de las respectivas órdenes de detención despachadas en contra de los acusados, dispositivos celulares que por lo demás, posteriormente fueron sometidos a sendas pericias; además de equipos computacionales y documentación.

1.- En efecto, el funcionario **Valenzuela Ortiz** además de haber intervenido en diligencias de entrada y registro a los domicilios y dependencias municipales ya señalados, le cupo participación en la materialización de las órdenes de detención de los imputados que tuvieron lugar el 25 de febrero de 2021, señalando que para ello el personal de la Bridec se distribuyó en distintos vehículos policiales, dirigiéndose a los domicilios de Pedro Paredes, en Ainavillo



1040, Concepción; de Nubia San Martín y Pedro Ravanal, en Tegualda 36 A, sector Collao, Concepción; y el domicilio de Alejandro Cabello en Colón 1307, departamento 305, Talcahuano; precisando que él junto a los comisarios Alvial y Retamal se centró en este último domicilio, participando en la detención de Cabello Bustos, a quien se le incautó un teléfono celular que estaba usando, señalando que dicho dispositivo corresponde al que se le exhibe, contenido en **Otros Medios de Prueba N° 81 (singularizado en el auto de apertura como teléfono celular marca Xiaomi, modelo m1808d2tg)**, agregando que no recuerda si se requirió la clave del mismo.

De igual forma el aludido funcionario Valenzuela Ortiz señaló Alejandro Cabello Bustos se presentó a declarar en la fiscalía local de Concepción el 26 de agosto de 2019, ocasión en que lo hizo en calidad de imputado, y que en esa oportunidad, previa solicitud, procedió a entregar un teléfono celular, color negro, habiéndosele requerido la clave, que era un patrón "M"; teléfono que dice corresponde al que le es exhibido durante la audiencia, contenido en **Otros Medios de Prueba N° 71 (singularizado en el auto de apertura como teléfono Samsung, color negro, modelo J5)**, precisando que es marca Samsung, agregando que entiende que no pudo ser periciado.

El mismo funcionario también dio cuenta de haberse presentado a declarar a la fiscalía de local de Concepción doña Maritza Vargas Pincheira, persona que conforme a dichos de algunos testigos tendría una relación sentimental con el imputado Cabello Bustos, quien en su declaración refirió que una vez encontró unas llaves de una caja fuerte que mantenía en el dormitorio principal de su casa de San Marcos, y que procedió a abrir dicha caja, visualizando alrededor de \$16.000.000, sin saber de qué se trataba, pero que sabía que esa plata pertenecía a Alejandro Cabello, y que tiempo después al revisar la caja fuerte encontró solo \$3.000.000, y que Alejandro le dijo que eran platas obtenidas de contabilidades de amigos, los que le debían mucha plata, pero que después la plata no estaba, y que él se fue de la casa, por lo que ella hizo un orden y encontró unos documentos y un cuaderno oscuro, de matemáticas y espiral; precisando el testigo que dicha documentación fue entregada el día de su declaración y que los documentos eran de la Dirección de Salud y del negocio de prostíbulo que tenía el señor Cabello; que la documentación es la que se le exhibe, contenida en **Otros Medios de Prueba N° 4**; en torno a lo cual indico que dice relación de cursos de capacitación realizados por personal de la Administración, proceso de calificación agosto 2013-septiembre 2014; registro de asistencia septiembre 2013 a agosto 2014; Hoja de Vida de Marcos Sánchez Rodríguez, Hoja Precalificación de Sánchez Rodríguez; Hoja de Vida de Jorge Ibacache Sanhueza, DAS Abastecimiento, Hoja de Vida de Nubia San Martín Pavez, periodo 2013, agosto 2014, como jefe directo Alejandro Cabello; Acta de constitución de la comisión de calificación, para proceso 2012-2013; Acta de constitución de la comisión de calificación, proceso 2011-2012; Hoja de



Precalificación de señora Nubia, y rayado Marco Sánchez; hojas de precalificación sin nombres; listado en tabla Excel, el cual señala muchos proveedores Munnich Pharma, Recalcine. A su vez que reconoció como el cuaderno que le entregó la señora Vargas, el contenido en **Otros Medios de Prueba N° 5**, precisando que en su interior se encontraron registros de los Boucher de ventas del local “Yolas”.

Agregó Valenzuela Ortiz, que conforme a lo indicado por Vargas Pincheira, y que con el fin de hacer seguimiento al dinero que se habría movido en el domicilio de dicha testigo, el 18 de octubre de 2019 se recibe una instrucción particular de la fiscal Aguayo que le dio cuenta de haberse obtenido una autorización verbal de entrada y registro al domicilio de Maritza Vargas Pincheira ubicado en calle 8 N° 984, sector San Marcos 2000, Talcahuano, por lo que ese mismo día concurren a dicho domicilio, donde en definitiva se procede al registro del inmueble, donde no encontraron grandes sumas de dinero, sino solo \$209.000, que Vargas Pincheira dijo que era para el pago del arriendo; pero si encontraron la caja fuerte y un computador, y alguna documentación del negocio de la empresa Maritza Vargas Pincheira EIRL, como también un pendrive y un teléfono de propiedad de Maritza Vargas; teléfono que reconoció como al que se le exhibe, marca Samsung, color negro, el cual no tenía clave; y que se contiene en **Otros Medios de Prueba N° 72**.

2.- Por otra parte, también compareció **Christian Gonzalo Torres Mercado**, comisario de la Brigada de Delitos Económico de la PDI de Concepción, señalando que a él le correspondió participar junto a colegas que indica en el diligenciamiento de una orden de detención de Nubia Edith San Martin Pavez y de su conviviente Pedro Ravanal Mellado, ambos con domicilio en Tegualda 36 A, Concepción; cuya orden incluía la incautación de especies relacionadas con el delito investigado, la cual se realizó el 25 de febrero de 2021, constituyéndose en dicho domicilio a las 05:45 horas, haciendo ingreso pacífico, firmándose un acta de autorización de la persona a cargo del domicilio, de detenidos y lectura de derechos, la cual firmó doña Nubia San Martín, y en cuyo interior estaban ambas personas, las que resultaron detenidas; señalando que se efectuó una revisión al interior del inmueble donde se encontraron especies en el sector del comedor de la casa, en el dormitorio matrimonial, que fue fijado como habitación número 1, y una habitación fijada como número 2; que se incautaron un teléfono celular Samsung color negro, otro marca Samsung negro carcasa rosada, celulares que fueron levantados de la habitación matrimonial y que eran de los imputados; un computador Samsung color gris con negro, un computador marca Asus, color azul, y \$305.000 en dinero efectivo en billetes de distinta denominación, encontrado en la habitación número 2.

Que precisó la ubicación de las especies incautadas con apoyo de la exhibición del set fotográfico contenido en **Otros Medios de Prueba N° 104**,



indicando que en ellas se aprecia el computador marca Samsung, que fue levantado en el sector del comedor del inmueble, cuyo propietario era Pedro Ravanal (**foto 1**); una de las habitaciones del inmueble, al costado del comedor de la casa y un mueble en su interior (**foto 2 y 3**); una libreta que estaba en uno de los cajones del mueble recién exhibido, en cuyo interior habían unos documentos relativos a un tratamiento dental de doña Nubia, un presupuesto dental que no superaba los \$300.000 (**foto 4**); el dinero en efectivo incautado, que fue encontrado en la habitación signada con el número 2 del registro fotográfico (**foto 5**); la habitación matrimonial de los imputados y celular encontrado en dicha habitación, el cual no sabe si estaba bloqueado o desbloqueado (**fotos 6 y 7**); otro celular de propiedad del imputado encontrado en la habitación matrimonial (**foto 8**), precisando que ambos celulares fueron incautados; un mueble ubicado al interior de una habitación de la vivienda objeto de la diligencia (**foto 9**); un bolso, tipo cartera encontrado en una habitación al interior del inmueble, que era de doña Nubia (**fotos 10 y 11**); otras habitaciones y muebles de la vivienda (**fotos 12 a 14**); y uno de los computadores incautados, que fue encontrado en la habitación número 2 (**foto 15**).

Testigo Torres Mercado que al serle exhibido reconoció un **comprobante de depósito de dinero en efectivo, en cuenta N° 53300261627, Banco Estado, de fecha 3 de marzo de 2021, por la suma \$305.000 (Otros Medios de Prueba N°84); como también reconoció dos teléfonos celulares que se le exhibieron, contenida en Otros Medios de Prueba N° 82**, señalando que corresponden a los incautados, un teléfono Samsung, color negro, **número 984500049**, y un celular marca Samsung color negro, número **981576190**, cuyos números leyó en el acta o cadena de custodia; precisando que dicha evidencia fue levantada por el comisario González, y tiene entendido que le preguntaron al imputado el número de los teléfonos; que ambos son marca Samsung, pero uno tiene un dibujo de un vehículo en carcasa, y el otro, tiene una funda plástica, color blanca; que los celulares no sabe qué modelos son, pero aparentemente serían el mismo modelo; agregando que en el registro y revisión del domicilio, no se encontró ropa u otros objetos de alta gama o de alto valor.

DECIMONOVENO: Que atendida las alegaciones expuestas por los intervinientes, y de los dichos de los propios acusados, para los efectos del establecimiento de los hechos en la presente causa, y sin perjuicio de la prueba rendida, desde ya ha de señalarse que existen ciertos hechos o circunstancias que no fueron objeto de debate. Así:

1.- Que a la fecha de los hechos, esto es, en el período comprendido entre los meses de octubre de 2017 a marzo de 2019, los acusados Alejandro Cabello Bustos, Nubia San Martín y Pedro Paredes Montoya eran funcionarios públicos;



por cuanto Cabello Bustos se desempeñaba como Jefe de Finanzas del Departamento de Salud Municipal de Talcahuano; San Martín Pavez, como encargada de presupuesto de dicho departamento, en tanto que Paredes Montoya, era encargado de Proyectos de la referida Dirección de Salud; y, por lo demás, los propios encartados reconocieron expresamente tal calidad, indicando Cabello Bustos que él ingresó al cargo de jefe de Finanzas de la DAS de Talcahuano el 18 de enero de 2013; San Martín Pavez señaló que el año 1991 ingresó al área salud, en el departamento de Finanzas de la Municipalidad donde cumplía funciones administrativas, y que más adelante, en el año 2013, asumió funciones de administrativa contable; en tanto que Paredes Montoya afirmó al respecto que él se desempeñó como jefe de Finanzas del Departamento de Salud de la Municipalidad de Talcahuano entre los años 2005 y 2010, y que entre el año 2010 y el 2020, se desempeñó como jefe de proyectos en la referida municipalidad; sin que se tampoco se encuentre en discusión que el acusado Pedro Ravanal Mellado era la pareja de la acusada San Martín, con quien tenían un hijo en común, según se estableció por medio del respectivo certificado de nacimiento acompañado por la fiscalía (**Documental N° 11**), lo cual ha sido confirmado por los dichos de los referidos acusados, en particular Ravanal Mellado, quien afirmó que tiene con aquella una relación de 35 años aproximadamente; acusado este último que no es funcionario público, y que por lo demás ninguna relación o vínculo jurídico tenía con la Municipalidad de Talcahuano.

Sin perjuicio de lo anterior, las calidades de funcionario público quedaron fehacientemente acreditadas por medio de los documentos allegados durante el juicio por el acusador fiscal:

Así, mediante el **Decreto N° 386 de la Municipalidad de Talcahuano, de fecha 01.10.2015 (Prueba Documental 147)**, en el cual se incluye el nombramiento, entre otros, de Cabello Bustos, por medio del cual se le contrata a contar del 1 de octubre de 2015, a plazo indefinido en la Dirección de Salud Municipal DAS-Talcahuano, como profesional, categoría B, con una jornada de 44 horas, decreto alcaldicio que fue debidamente registrado en la Contraloría General de la República, según da cuenta el certificado emanado de dicho órgano contralor (**Prueba Documental 148**); como también del mérito de su Hoja de Vida (**Documental N°71**), en la que además de indicarse las ausencias y motivos, se adjuntan liquidaciones de sueldo; y Ficha de identificación Funcionaria (**Prueba Documental N° 48**), documentos que dan cuenta que entre los años 2006 y 2009 se desempeñó en varias oportunidades como administrativo en el Departamento de Finanzas, en particular desde el 2 de enero de 2008 en carácter indefinido hasta el 13 de mayo de 2009, fecha en la que renuncia voluntariamente a contar del 18 de mayo del mismo año; para luego ser contratado como contador auditor el 18 de enero de 2013, hasta el 31 de diciembre de 2013, para ser contratado como jefe de finanzas a contar del 1



de abril de 2013, contrato que fue prorrogado, hasta que fue contratado a plazo indefinido a contar del 1 de octubre de 2015.

En tanto que respecto de Paredes Montoya y San Martín Pavez , **se acompañó el Decreto N° 398 de la Municipalidad de Talcahuano, de fecha 23.09.2009 (Prueba Documental N°149)**, por medio del cual se dispone el traspaso de funcionarios a la dotación de la Dirección de Administración de Salud Municipal de Talcahuano al personal que allí se indica, entre los cuales se encuentran los dos funcionarios en cuestión, ambos con un contrato de carácter indefinido, que en el caso de Paredes Montoya lo es bajo la categoría B, y en el caso de San Martín Pavez, en categoría C; decreto alcaldicio que fue debidamente registrado en la Contraloría General de la República, según da cuenta el certificado emanado de dicho órgano contralor (**Prueba Documental N°150**); como también del mérito de las Hojas de Vida de ambos funcionarios (**Documental N°71**), en las que además de indicarse las ausencias y motivos, se adjuntan liquidaciones de sueldo.

2.- Tampoco se encuentra en discusión por los intervinientes que a la época de los hechos la acusada Nubia San Martín Pavez y el funcionario municipal Manuel Rojas Ramírez tenían sus firmas autorizadas para girar cheques desde las cuentas corrientes de titularidad de la Municipalidad de Talcahuano; conforme, por lo demás, se acredita con el mérito de la documentación debidamente incorporada por la fiscalía, consistente en **Oficio 0491, de 8 de enero de 2015 de la Contraloría General de la República**, por el cual se autoriza a giradores de cuentas corrientes bancarias estatales bipersonales que indica (**Prueba Documental N°38**), entre las que figuran Rojas Ramírez, como titular, y San Martín Pavez, como suplente; como lo ratifica la propia encartada San Martín Pavez, quien sobre el punto manifestó que como el año 2013, le fue asignada la caja chica con una póliza y también la función de firmar documentos fiscales de las cuentas corrientes del Banco Estado, de la Dirección de Salud de Talcahuano, precisando que ella al parecer es “firma autoriza” desde el año 2013 o 2014, y que también era “firma autorizada” Manuel Rojas, circunstancia que este último igualmente reconoció durante su declaración en juicio; lo cual también se encuentra corroborado por medio de los asertos del acusado Cabello Bustos, señalando que al año 2017 en adelante eran firmas autorizadas Nubia San Martín y Manuel Rojas.

3.- También es indiscutido que en el período octubre de 2017 a marzo de 2019, se giraron y cobraron un total de 129 cheques de las cuentas corrientes de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Talcahuano, que totalizan la suma de \$412.024.825, de los cuales 86 cheques fueron girados a nombre del acusado Pedro Ravanal Mellado, quien cobró los mismos, por un total de \$279.472.587; 35 cheques fueron girados a nombre de Pedro Paredes Montoya y cobrados por éste, por una suma total de \$111.176.748; en tanto que 7 cheques fueron



girados a nombre de Nubia San Martín Pavez y cobrados por ésta, por un monto total de \$17.898.643; y 1 cheque fue girado a nombre de Alejandro Cabello Bustos, y cobrado por éste, por un monto de \$3.476.847; todo ello, además, conforme al mérito de cada uno de los 129 cheques, debidamente acompañados por la fiscalía, en los cuales constan los montos de cada uno de ellos, las personas a cuyo nombre fueron girados y el cobro de los mismos en las fechas que se indican (**Prueba documental números 107, 108, 109, 110, 111 y 112**), lo cual aparece también debidamente corroborado con el mérito de la auditoría practicada por la Contraloría General de la República y los informes emitidos al respecto, contenidos en el **Oficio N°6359, de 24 de julio de 2019 de la Contraloría Regional del Bío Bío (Prueba documental 29, Anexos 1, 2 y 3) y Oficio 10.223, del 17 de diciembre de 2019, del Contralor Regional del Bío Bío**, por el cual se remite el Informe Final N°315/2019, de fecha la misma fecha (**Prueba Documental 89, Anexo 10**); antecedentes todos que han sido confirmados por los propios acusados, quienes admiten haber cobrado los cheques que se le imputan, sin perjuicio que no tengan claridad sobre la cantidad exacta de cheques cobrados o el monto total de los mismos; indicando al respecto Pedro Paredes que a él le entregaron 35 cheques a su nombre pertenecientes a las cuentas corrientes de la Dirección de Salud Municipal de Talcahuano, los cuales cobró siempre en dinero efectivo, y que suman como \$115.000.000; indicando Pedro Ravanal que el reconoce haber cobrado 86 cheques a su nombre, de la Ilustre Municipalidad de Talcahuano, los cuales iba a cobrar al Banco Estado, no siempre en la misma oficina, cuyo monto total no recuerda, pero que en atención al dinero gastado con Nubia San Martín ascendió como a \$140.000.000, pues estima que a ellos les correspondió esa cantidad, que sería el tercio del total de los cheques; los dichos de Cabello Bustos, quien indicó que él fue la primera persona que cobró un cheque; y San Martín Pavez, que en general admite que ella, Pedro Paredes y Pedro Ravanal cobraron cheques.

VIGÉSIMO: Que conforme al mérito de la prueba relacionada en el motivo precedente, principalmente la **Documental 108 N°63**, concretamente se encuentra establecido, más allá de toda duda razonable, que se giró nominativamente al **acusado Alejandro Cabello Bustos**, el cheque N°1344003, de fecha 5 de septiembre de 2018, de la cuenta corriente N° 52709052161, del Banco Estado de la Municipalidad de Talcahuano, correspondiente a la cuenta de Aporte Municipal, por la suma de \$3.476.847, el cual fue cobrado por caja el 6 de septiembre de 2018 en la oficina del Banco Estado en la comuna de Talcahuano, equivalente a 72,56 UTM conforme a la información oficial de público conocimiento.

Que el referido cheque se encuentra asociado al Decreto de Pago N° 1594 que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°19 de las acusaciones, cuyas



observaciones están contenidas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 1594 (Otros Medios de Prueba N° 2)

Fecha: 5 de septiembre de 2018

Páguese a: Opko Chile S.A

Suma de: \$3.476.847

Factura N°: 250002

Cheque: 1344003

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

VIGÉSIMO PRIMERO: Que conforme al mérito de la prueba relacionada en motivo Decimonoveno, y principalmente de la contenida en la Prueba Documental 107, 108, 109, 110, 111, y 112, concretamente se encuentra establecido, más allá de toda duda razonable, que se giraron nominativamente a la **acusada Nubia San Martín Pavez**, los 7 cheques que a continuación se indican, por un total de \$17.898.643, con detalle de las fechas de giro y cobro, monto y cuenta corriente del Banco Estado de la Municipalidad de Talcahuano, específicamente, las cuentas de Fondos Proyectos Atención Primaria de Salud N°52709052004, y de Aporte Municipal N°52709052161; cheques que, por lo demás, fueron posteriormente cobrados por caja en las oficinas del Banco Estado en la comuna de Talcahuano:

1.- En efecto, el cheque 8986400, cuenta corriente N° 52709052161, por \$1.433.212, de fecha 04.10.2017 (**Prueba Documental 108 N°1**) se giró a nombre de Nubia San Martín Pavez, y fue cobrado por caja el 4 de octubre de 2018 en oficina Talcahuano, figurando al reverso escrito en manuscrito el número 8.203.869-8; cheque que se encuentra asociado al Decreto de Pago que a continuación se detalla:

Decreto Pago N° 1738 (Prueba Documental N°213)

Fecha: 4 de octubre de 2017

Páguese a: Lab Silesia S.A.

Suma de: \$ 1.433.212

Factura N°: 275750 (de 26.08.2014, y hay otra de 23.05.2014)

Cheque : 8986400

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

2.- Cheque N° 9193157, cuenta corriente N°52709052004, girado por \$2.472.523, de fecha 28.11.2017 (**Prueba Documental 107 letra d**), a nombre de Nubia San Martín Pavez, y cobrado por caja el 28 de noviembre de 2017 en oficina Talcahuano, al reverso figura manuscrito número RUN 8203869-8;



cheque que no se encuentra asociado a ningún decreto de pago (**Prueba Documental 107 letra d**)).

3.- Cheque N° 8986471, cuenta corriente N° 52709052161, girado por la suma de \$1.547.435, de fecha 30.01.2018, a nombre de Nubia San Martín Pavez, pagado o cobrado por caja el 01 de febrero de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso figura manuscrito número 8.203.869-8, documento que no se encuentra asociado a ningún decreto de pago (**Prueba Documental 108 N° 14**).

4.- Cheque N° 9710655, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$2.582.300, de fecha 02.04.2018, a nombre de Nubia San Martín Pavez, pagado o cobrado por caja el 2 de abril de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso en manuscrito número 9.203.869-8; cheque que no se encuentra asociado a ningún decreto de pago (**Prueba Documental 108 N° 22**).

5.- Cheque N°1166545, cuenta corriente N°52709052004, girado por \$3.212.033, de fecha 14.08.2018, a nombre de Nubia San Martín Pavez, cobrado por caja el 14 de agosto de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso figura manuscrito número 8.203.869-8; documento que no se encuentra asociado a ningún decreto de pago (**Prueba Documental 107 letra i**).

6.- Cheque N°1344001, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.111.255.-, de fecha 05.09.2018, a nombre Nubia San Martín Pavez, pagado o cobrado por caja el 5 de septiembre de 2018 en oficina de Talcahuano, y al reverso manuscrito figura 8.203.804-8 (**Prueba Documental 108 N°61**); cheque que se encuentra asociado al Decreto de Pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°20 de las acusaciones , cuyas observaciones están contenidas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 1587 (Otros Medios de Prueba N° 2)

Fecha: 5 de septiembre de 2018

Páguese a: Pharma Investi de Chile S.A.

Suma de: \$3.111.255

Factura N°: 64273

Cheque : 1344001

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

7.- Cheque N°1344107, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.539.985, fechado el 24.10.2018, a nombre de Nubia San Martín Pavez, pagado o cobrado por caja el 24 de octubre de 2018 en oficina Talcahuano, manuscrito al reverso 8.203.869-8 (**Prueba Documental 108 N°79**); cheque



que se encuentra asociado al Decreto de Pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°34 de las acusaciones, cuyas observaciones están contenidas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 1776 (Prueba Documental N° 213)

Fecha: 24 de octubre de 2018

Páguese a: Lab. Silesia S.A.

Suma de: \$3.539.885

Factura N°: 305984

Cheque: 1344107

Firmado jefe finanzas; Alejandro Cabello Bustos

Firmado director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

VIGESIMO SEGUNDO: Asimismo, de la prueba ya referida en motivos anteriores, fundamentalmente la **Documental N° 107, 108, 109, 110, 111, y 112**, también se puede dar por establecido, más allá de toda duda razonable, que se giraron nominativamente al **acusado Pedro Paredes Montoya**, los 35 cheques que a continuación se indican, que totalizan \$111.176.748 con detalle de las fechas de giro y cobro, monto y cuenta corriente del Banco Estado de la Municipalidad de Talcahuano, los cuales, por lo demás, fueron cobrados por caja por él mismo en las oficinas del referido banco en la comuna de Talcahuano; precisándose que los distintos cheques que a continuación se detallan corresponden a las cuentas corrientes de Fondos Proyectos Atención Primaria de Salud, N°52709052004; y de Aporte Municipal, N°52709052161:

1.- Cheque N°9193240, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$1.825.936, de fecha 31.10.2017, a nombre de Pedro Paredes Montoya, cobrado el 2 de noviembre de 2017 en oficina Talcahuano, al reverso figura manuscrito CI 8242.907-7, teléfono 964249761 (**Pruebas Documental 108 N°4**); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 1864 (Prueba Documental N°213)

Fecha: 31 de octubre de 2017

Páguese a: Lab Silesia SA

Suma de: \$1.825936

Factura N°: 59632 (de fecha 19.07.2013, y otras 3 facturas del año 2013)

Cheque: 9193240

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director (S): Juan Garcés Gallardo

Visto bueno usuario: nsanmart

2.- Cheque N° 9193090, cuenta corriente N°52709052004, por \$1.724.429, de fecha 7.11.2017, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya,



pagado o cobrado por caja el 7.11.2017, en oficina Talcahuano, al reverso figura manuscrito 8.242.907-7; cheque que no está asociado a ningún decreto de pago **(Prueba Documental 107 letra a).**

3.- Cheque N° 9193152, cuenta corriente N°52709052004, girado por \$2.472.523, de fecha 22.11.2017, a nombre de Pedro Paredes Montoya, cobrado por caja el 22.11.2017 en oficina Talcahuano, al reversos manuscrito figura el número 8242907-7; documento que no se encuentra asociado a ningún decreto de pago **(Prueba Documental 107 letra c).**

4.- Cheque N° 9193164, cuenta corriente N°52709052004, girado por \$2.171.750 a nombre de Pedro Paredes Montoya, de fecha 30.11.2017, cobrado por caja el 30.11.2017 en oficina Talcahuano, al reverso manuscrito número 8.242.907-7; cheque no asociado a ningún decreto de pago **(Prueba Documental 107 e)).**

5.- Cheque N° 9193347, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$1.285.200, de fecha 14.12.2017, a nombre de Pedro Paredes Montoya, cobrado el 14 de diciembre en oficina Talcahuano, al reverso manuscrito CI 8.242.907-7, teléfono 964249761 **(Prueba Documental 108 N° 5)**, cheque que se encuentra asociado al Decreto de Pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°1 de las acusaciones, cuyas observaciones están contenidas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 2199 (Prueba Documental N°213)

Fecha: 14 diciembre 2017

Páguese a: Laboratorio Chile

Suma de: \$1.285.200

Factura N°: 3626

Cheque N° 9193347

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

6.- Cheque N° 9193377, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$2.394.756, de fecha 20.12.2017, a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado por caja el 22 de diciembre de 2017 en oficina Talcahuano, al reverso manuscrito CI 8242907 y teléfono 964249761, el cual no se encuentra asociado a ningún decreto de pago **(Prueba Documental N°108 N°6).**

7.- Cheque 8986478, cuenta corriente N° 52709052161, por \$1.898.626, de 31.01.2018, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado por caja el 31 de enero de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso manuscrito CI 8.242.907-



7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N° 13**), cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 165 (Otros Medios de Prueba N°42)

Fecha: 31 de enero de 2018

Páguese a: Munnich Pharma Medical Ltda.

Suma de: \$1.898.626

Factura N°: 19473 (de fecha 26.08.2016)

Cheque : 8986478

Firmado jefe finanzas; Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director (S): Juan Garcés Gallardo

Visto bueno usuario: nsanmart.

8.- Cheque N° 9710543, cuenta corriente N° 52709052161, por \$2.907.825, de 28.02.2018, girado a nombre Pedro Paredes Montoya, pagado por caja el 28 de febrero de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso número C.I. manuscrito 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (Prueba Documental 108 N°19); cheque que se encuentra asociado al Decreto de Pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°5 de las acusaciones, cuyas observaciones están contenidas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 653 (DOCUMENTAL N° 212)

Fecha: 2 de abril de 2018

Páguese a: Munnich Pharma Medical Ltda.

Suma de: \$2.907825

Factura N°: 17167

Cheque: 9710543

Firmado jefe finanzas; Alejandro Cabello Bustos

Firmado director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

9.- Cheque N° 9470749, cuenta corriente N°52709052004, por \$2.677.500, de 23.03.2018, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, cobrado por caja 23 marzo 2018 en oficina Talcahuano, al reverso manuscrito números 8242907-7 y 964249761 (**Prueba Documental 111 N°3**), cheque que no se encuentra asociado a ningún decreto de pago, pero que es del mismo monto del cheque 9710524 (Prueba Documental 18 N°17), girado a nombre de Pedro Ravanal y que se relaciona con el decreto de pago 275 (Prueba Documental212).

10.- Cheque N° 9710628, cuenta corriente N° 52709052161, por \$2.728.602, de 27.03.2018, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado



por caja el 27 de marzo de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso figura manuscrito números C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N°20**); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 476 (Otros Medios de Prueba N°42)

Fecha: 27 de marzo de 2018

Páguese a: Munnich Pharma Medical Ltda.

Suma de: \$2.728.602

Factura N°: 3219 y 3215 (de 06.02.2015 y 06.02.2015; la suma excede monto, y luego hay nota de crédito)

Cheque : 9710628

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

11.- Cheque N° 9710666, cuenta corriente N° 52709052161, por \$2.900.625, de fecha 05.04.2018, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado por caja el 5 de abril de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso en manuscrito número C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N° 23**), documento que no se encuentra asociado a ninguna orden de pago.

12.- Cheque N° 620223, cuenta corriente N° 52709052161, por \$2.853.299, de fecha 26.04.2018, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado por caja el 26 de abril de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso manuscrito C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N° 26**), documento que no se encuentra asociado a ninguna orden de pago.

13.- Cheque N°620253, cuenta corriente N° 52709052161, por \$2.898.447, de fecha 07.05.2018, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado por caja el 7 de mayo de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso en manuscrito número C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N° 30**), cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 779 (Otros Medios de Prueba N°42)

Fecha: 7 de mayo de 2018

Páguese a: Distribuidora Multimarca Ltda.

Suma de: \$2.898.447

Factura N°: 892 (Figura la N°829, de fecha 16 de marzo de 2017, por dicho monto)

Cheque: 620253

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce



Visto bueno usuario: nsanmart

14.- Cheque N° 620324, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.331.326, de fecha 25.05.2018, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado por caja el 25 de mayo de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso en manuscrito número C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N° 35**); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N°935 (Otros Medios de Prueba N° 42)

Fecha: 25 de mayo de 2018

Páguese a: Munnich Pharma Medical Ltda.

Suma de: \$3.331.326

Factura N°: 14698

Cheque: 620324

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

15.- Cheque N° 620368, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.560.480, de fecha 12.06.2018, girado a nombre Pedro Paredes Montoya, pagado por caja el 12 de junio de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso en manuscrito número C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N°40**), cheque que se encuentra asociado al Decreto de Pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 6 de las acusaciones, cuyas observaciones están contenidas en el considerando Trigésimo letra B), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N°1013 (Prueba Documental N°212)

Fecha: 12 de junio 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$ 3.560.480

Factura N°: 648696

Cheque: No se indica

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: acabello

16.- Cheque N° 962127, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.503.955, de fecha 05.07.2018, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado y cobrado el 5 de julio de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso manuscrito C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N° 45**), documento que no se encuentra asociado a ninguna orden de pago.



17.- Cheque N° 962149, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.348.507, de fecha 17.07.2018, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado el 17 de julio de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso en manuscrito número C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N° 47**); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 1199 (Otros Medios de Prueba N° 42)

Fecha: 17 de julio de 2018

Páguese a: Munnich Pharma Medical Ltda.

Suma de: \$ 3.348.507

Factura N°: 46808 y 11976

Cheque: 962149

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

18.- Cheque N° 962202, cuenta corriente N° 52709052161, por \$ 3.645.229, de 03.08.2018, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado el 3 de agosto de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso manuscrito C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N° 51**), documento que no se encuentra asociado a ninguna orden de pago.

19.- Cheque N° 1166550, cuenta corriente N°52709052004, por \$3.499.552, de fecha 17.08.2018, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, cobrado el 17 de agosto de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso en manuscrito número C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 107 letra k**); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 1438 (Otros Medios de Prueba N°2)

Fecha: 17 de agosto de 2018

Páguese a: Winpharm SPA

Suma de: \$3.499.552

Factura N°: 55596 (de fecha 17.03.2017, y dos facturas más de abril y marzo 2017)

Cheque: 1166550

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

20.- Cheque N° 962270, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.729.252, de fecha 27.08.2018, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado el 27 de agosto de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso manuscrito



C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N° 56**), documento que no se encuentra asociado a ninguna orden de pago.

21.- Cheque N° 962279, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.810.380, de fecha 31.08.2018, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado por caja el 31 de agosto de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso en manuscrito número C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N°58**), cheque que se encuentra asociado al Decreto de Pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°13 de las acusaciones, cuyas observaciones están contenidas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N°1535 (Otros medios de Prueba N° 2)

Fecha: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Páguese a: Pharma Investi De Chile S.A.

Suma de: \$ 3.810.380

Factura N°: 70405

Cheque: 962279

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

22.- Cheque N° 962287, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.893.680, de fecha 04.09.2018, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado por caja el 4 de septiembre de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso en manuscrito número C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N°60**), cheque que se encuentra asociado al Decreto de Pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°17 de las acusaciones, cuyas observaciones están contenidas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 1550 (OTROS MEDIOS N°2)

Fecha: 4 de septiembre de 2018

Páguese a: Laboratorio Chile

Suma de: \$ 3.893.680

Factura N°: 155825

Cheque : 962287

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

23.- Cheque N°1344036, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.825.731, de fecha 14.09.2018, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya,



pagado el 14 de septiembre de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso en manuscrito número C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N°65**), cheque que se encuentra asociado al Decreto de Pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°23 de las acusaciones, cuyas observaciones están contenidas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 1626 (Otros Medios de prueba N° 2)

Fecha: 14 de septiembre de 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$ 3.825.731

Factura N°: 646489

Cheque : 1344036

Firmado jefe finanzas; PP Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce.

Visto bueno usuario: nsanmart

24.- Cheque N° 1344039, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.746.120, fechado el 20.09.2018, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado por caja el 20 de septiembre en oficina Talcahuano, al reverso en manuscrito número C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N°67**), cheque que se encuentra asociado al Decreto de Pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°24 de las acusaciones, cuyas observaciones están contenidas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 1635 (DOCUMENTAL N°212)

Fecha: 20 de septiembre de 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$3.746.120

Factura N°: 616179

Cheque : 1344039

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

25.- Cheque N°1344059, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.429.889, fechado el 28.09.2018, girado a Pedro Paredes Montoya, pagado por caja el 28 de septiembre de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso manuscrito C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N° 70**), documento que no se encuentra asociado a ninguna orden de pago.



26.- Cheque N° 1344096, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.909.627, fechado el 12.10.2018, girado a Pedro Paredes Montoya, pagado por caja el 12 de octubre en la oficina Talcahuano, al reverso en manuscrito número C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N°75**), cheque que se encuentra asociado al Decreto de Pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°30 de las acusaciones, cuyas observaciones están contenidas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 1738 (Prueba Documental N° 213)

Fecha: 11 de octubre de 2018

Páguese a: Lab Chile S.A.

Suma de: \$3.909.627

Factura N°155847

Cheque N° 1344096

Firmado jefe finanzas; Cabello

Director: Domínguez

Visto bueno usuario: nsanmart

27.- Cheque N°1344121, cuenta corriente N° 52709052161, por \$ 3.868.885, fechado el 31.10.2018, girado a Pedro Paredes Montoya, pagado por caja el 31 de octubre de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso en manuscrito número C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N°82**); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 1828 (Otros Medios de Prueba N°2)

Fecha: 31 de octubre de 2018

Páguese a: Lab Silesia S.A.

Suma de: \$3.868.885

Factura N°: 211837

Cheque : 1344121

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

28.- Cheque N° 1344156, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.826.109, de fecha 08.11.2018, girado a Pedro Paredes Montoya, pagado por caja el 9 de noviembre de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso en manuscrito número C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N°85**); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 1846 (Otros Medios de Prueba N°2)

Fecha: 8 de noviembre de 2018

Páguese a: Munnich Pharma Medical Limitada

Suma de: \$3.826.109



Factura N°: 17126 y 12867

Cheque: 1344156

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

29.- Cheque N° 1762405, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.587.255, fechado el 27.11.2018, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado por caja el 27 de noviembre de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso en manuscrito número C.I. 8.242.907-7 y 964249761 (**Prueba Documental 108 N°88**); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 1970 (Otros Medios de Prueba N°2)

Fecha: 27 de noviembre de 2018

Páguese a: Lab Silesia S.A.

Suma de: \$3.587.255

Factura N°: 277325 (de fecha 17.12.2014, y 5 facturas más de años 2014 y 2015)

Cheque : 1762405

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

30.- Cheque N° 1762436, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.457.545, de fecha 05.12.2018, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado por caja el 5 de diciembre de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso en manuscrito número C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N°90**); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 2053 (Prueba Documental N° 212)

Fecha: 5 de diciembre de 2018

Páguese a: Comercializadora y Distribuidora Médica Ltda.

Suma de: \$3.457.545

Factura N°: 23225 (6 de abril de 2017).

Cheque : 1762436

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

31.- Cheque N° 1762462, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.781.820, de fecha 20.12.2018, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado por caja el 20 de diciembre de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso en manuscrito número C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba**



Documental 108 N°94); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N°2125 (Otros Medios de Prueba N° 2)

Fecha: 20 de diciembre de 2018

Páguese a: Laboratorio Chile SA

Suma de: \$3.781.820

Factura N°: 185349 (de fecha 28.06.2016)

Cheque:1762462

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

32.- Cheque N° 1762482, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.867.857, de fecha 28.12.2018, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado por caja el 2 de enero de 2019 en oficina Talcahuano, al reverso en manuscrito número C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N°97**); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 2161 (Otros Medios de Prueba N° 2)

Fecha: 28 de diciembre 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$3.867.857

Factura N°: 610156 (de 26.07.2017, y otra de 14.07.2017)

Cheque: 1762482

Firmado jefe finanzas (S): Nubia San Martín Pavez

Firmado Director (S): Juan Garcés gallardo

Visto bueno usuario: nsanmart

33.- Cheque N° 1762561, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.864.870, de fecha 01.02.2019, girado a Pedro Paredes Montoya, pagado por caja el 1 de febrero de 2019 en oficina Talcahuano, al reverso en manuscrito número C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N°99**); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 177 (Prueba Documental N°212)

Fecha: 1 de febrero de 2019

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$ 3.894.870

Factura N°: 558501

Cheque: 1762561

Firmado jefe finanzas (S): Nubia San Martin Pavez

Firmado Director (S): Juan Garcés Gallardo

Visto bueno usuario: nsanmart



34.- Cheque N°1762578, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.741.955, de fecha 06.02.2019, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado por caja el 6 de febrero de 2019 en oficina Talcahuano, al reverso en manuscrito número C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N°102**); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan; a cuyo respecto debe indicarse que existe además otro decreto con el mismo número, con la única diferencia que lo firma Armando Domínguez Ponce como director:

Decreto Pago N° 237 (DOCUMENTAL N° 212)

Fecha: 6 de febrero de 2019

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$3.741.955

Factura N°: 567475

Cheque: 1762578

Firmado jefe finanzas (S): Nubia San Martín Pavez

Firmado Director (S): Juan Garcés Gallardo

Visto bueno usuario: nsanmart

35.- Cheque N°2142721, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.207.206, de fecha 06.03.2019, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado por caja el 6 de marzo de 2019 en oficina Talcahuano, al reverso en manuscrito número C.I. 8.242.907-7 y teléfono 964249761 (**Prueba Documental 108 N°105**); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 317 (Prueba Documental N° 212)

Fecha: 4 de marzo de 2019

Páguese a: Opko Chile S.A

Suma de: \$3.207.206

Factura N°: 312111 y 338419

Cheque: 2142721

Firmado jefe finanzas: Figura nombre de Alejandro Cabello Bustos y timbre, pero no hay firma estampada

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

VIGÉSIMO TERCERO: Que el mérito de la prueba referida en el motivo Decimonoveno N° 3, y fundamentalmente de la **Documental 107, 108, 109, 110, 111, y 112**, se puede establecer, más allá de toda duda razonable, que se giraron a nombre del **acusado Pedro Ravanal Mellado**, los 86 cheques que a continuación se indican, que totalizan \$279.472.587, con detalle de las fechas de giro y cobro, monto y cuenta corriente del Banco Estado de la Municipalidad de Talcahuano, los cuales, por lo demás, fueron cobrados por caja por él mismo en distintas sucursales del Banco Estado, con excepción del cheque N°620362, de la cuenta corriente 52709052161, por la suma de \$3.855.600, que figura en el



N° 35 de este listado, el cual fue depositado en el Banco Crédito e Inversiones, oficina Punta Arenas, figurando al reverso la cuenta N°77048253 BCI; precisándose que los distintos cheques que a continuación se detallan corresponden a las cuentas corrientes de Fondos Proyectos Atención Primaria de Salud, N°52709052004; de Aporte Municipal, N°52709052161; de Programa de Resolutividad Atención Primaria, N° 52709052187; y de Remuneraciones, N° 52709052179:

1.- Cheque N°9193223, cuenta corriente N° 52709052161, por \$2.246.720, de fecha 23.10.2017, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, cobrado por caja 24 de octubre 2018 en oficina Concepción Collao, al reverso figura manuscrito 9844026-7 (**Prueba Documental 108 N°2**); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 1833 (Prueba Documental N°213)

Fecha: 23 de octubre de 2017

Páguese a: Lab. Silesia SA

Suma de: \$2.246.720

Factura N°: 266342 (de fecha 30.07.2014, y hay otras facturas del Lab Chile)

Cheque: 9193223

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

2.- Cheque N°9193237, cuenta corriente N° 52709052161, por \$922.845, de fecha 30.10.2017, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, cobrado el 31 de octubre de 2018 en oficina Concepción Collao, al reverso figura manuscrito 9844026-7 (**Prueba Documental 108 N°3**); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 1856 (Prueba Documental N° 213)

Fecha: 30 de octubre de 2017

Páguese a: Laboratorio Chile SA

Suma de: \$922.845

Factura N°: 33236 (de fecha 20.03.2013, y otra de 11.03.2013)

Cheque: 9193237

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director (S): Juan Garcés Gallardo

Visto bueno usuario: nsanmart

3.- Cheque N° 9193122, cuenta corriente N°52709052004, girado por \$1.796.344, de fecha 10.11.2017, a nombre Pedro Ravanal, cobrado por caja el 13 de noviembre 2017 en oficina Concepción Collao, al reverso figura



manuscrito 9844026-7 (**Prueba Documental 107 letra b**); cheque que no se encuentra asociado a ningún decreto de pago.

4.- Copia de Cheque N° 9193128, cuenta corriente N°52709052004, girado por \$2.331.986, de fecha 16.11.2017, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, cobrado por caja el 16 de noviembre de 2017, al reverso figura manuscrito 9844026-7 (**Prueba 29, folio 84**); el cual no aparece asociado a ningún decreto de pago.

5.- Cheque N° 9193183, cuenta corriente N°52709052004, por \$2.714.390, de fecha 05.12.2017, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, cobrado por caja el 5.12.2017 en oficina Collao (**Prueba Documental 111 N°1**), al reverso figura manuscrito el número 9844026-7, el cual no se encuentra asociado a ningún decreto de pago.

6.- Cheque N° 9470619, cuenta corriente N°52709052004, por 1.979.446, de fecha 12.12.2017, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, cobrado por caja el 15 de diciembre 2017, al reverso figura manuscrito 9844026-7 (**Prueba Documental 107 letra f**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 2185 (Prueba Documental N° 213)

Fecha: 12 de diciembre de 2017

Páguese a: Laboratorio Chile SA

Suma de: \$1.979.446

Factura N°: 32246 (de fecha 11.03.2013, y otra de 17.04.2013)

Cheque: 9470619

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

7.- Cheque N°9193398, cuenta corriente N° 52709052161, por \$1.777.665, de fecha 04.01.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 4 de enero de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso figura manuscrito 9844026-7 (**Prueba Documental 108 N°7**); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 6 (Otros Medios de prueba N°42)

Fecha: 2 de enero de 2018

Páguese a: Laboratorio Chile S.A.

Suma de: \$1.777.665

Factura N°: 80516 (de fecha 30.01.2014, y cuatro facturas del año 2014 y también de otras 2 de 2013)

Cheque: 9193398



Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos
Firmado Director: Armando Domínguez Ponce
Visto bueno usuario: nsanmart

8.- Cheque N°8986407, cuenta corriente N° 52709052161, por \$2.512.888, de fecha 10.01.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, cheque pagado por caja el 11 de enero de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso figura manuscrito 9844026-7 (**Prueba Documental 108 N°8**); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 72 (Otros Medios de Prueba N° 42)

Fecha: 10 de enero de 2018
Páguese a: Munnich Pharma Medical Ltda.
Suma de: \$2.512.888
Factura N°: 21660 (de fecha 3.11.2016, y otra de 25.01.2017, que completa monto)
Cheque: 8986407
Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos
Firmado Director: Armando Domínguez Ponce
Visto bueno usuario: nsanmart

9.- Cheque N°8986413, cuenta corriente N° 52709052161, por \$2.294.082, de 16.01.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, cobrado por caja 17 de enero de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso figura manuscrito 9844026-7 (**Prueba Documental 108 N°9**); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 80 (Otros Medios de prueba N°42)

Fecha: 16 de enero de 2018
Páguese a: Laboratorio Chile SA
Suma de: \$2.294.082
Factura N°: 282138 (de fecha
Cheque: 8986413 (Figura en legajo factura N°212838, de 16.12.2016 por dicho monto)
Firmado jefe finanzas (S); Nubia San Martín Pavez
Firmado Director: Armando Domínguez Ponce
Visto bueno usuario: nsanmart

10.- Cheque N° 8986424, cuenta corriente N° 52709052161, por \$1.802.493, de fecha 19.01.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 22 enero 2018 en oficina Concepción, al reverso figura manuscrito 9844026-7 (**Prueba Documental 108 N°10**); cheque que se



encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 85 (Otros Medios de Prueba N°42)

Fecha: 18 de enero de 2018

Páguese a: Munnich Pharma medical Ltda.

Suma de: \$1.802.493

Factura N°: 29711 (de fecha 16.06.2017)

Cheque: 8986424

Firmado jefe finanzas (S); Nubia San Martín Pavez

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

11.- Cheque N°8986437, cuenta corriente N° 52709052161, por \$2.238.979, de fecha 25.01.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 26 de enero de 2018 en oficina Concepción Bío Bío, al reverso figura manuscrito número 9844026-7 (**Prueba Documental 108 N°11**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 103 (Otros Medios de Prueba N°42)

Fecha: 25 de enero de 2018

Páguese a: Munnich Pharma Medical Ltda.

Suma de: \$2.238.979

Factura N°: 30361 (de fecha 30.06.2017, y otra de misma fecha por otro valor para completar)

Cheque: 8986437

Firmado jefe finanzas (S); Nubia San Martín Pavez

Firmado Director (S): Juan Garcés Gallardo

Visto bueno usuario: nsanmart

12.- Cheque N°8986470, cuenta corriente N° 52709052161, por \$1.414.315, de fecha 30.01.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja 30 enero de 2018, en oficina Concepción Plaza Acevedo, al reverso figura manuscrito número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N° 12**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 122 (Otros Medios de Prueba N°42)

Fecha: 29 de enero de 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$1.414.315

Factura N°: 615257 (de fecha 05.09.2017, y otras 3 facturas de agosto y septiembre de 2017)

Cheque: No se indica, pero en el recuadro final, manuscrito se indica 8986470

Firmado jefe finanzas (S): Nubia San Martín Pavez



Firmado Director (S): Juan Garcés Gallardo
Visto bueno usuario: nsanmart

13.- Cheque N°9710502, cuenta corriente N° 52709052161, por \$2.968.812, de fecha 09.02.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 14 de febrero de 2018 en oficina Concepción Bío Bío, figura al reverso número manuscrito 9.844.026-7 y 984500049 (**Prueba Documental 108 N°15**); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 250 (Otros Medios de Prueba N°42)

Fecha: 9 de febrero de 2018
Páguese a: Munnich Pharma medical Ltda.
Suma de: \$2.968.812
Factura N°: 20299 (de fecha 20.09.2016)
Cheque: 9710502
Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos
Firmado Director: Armando Domínguez Ponce
Visto bueno usuario: nsanmart

14.- Cheque N° 9710509, cuenta corriente N° 52709052161, por \$2.814.826, de fecha 15.02.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 15 de febrero de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso figura número manuscrito 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°16**); cheque que conforme al Anexo N° 10 del Informe 315/2019 de la Contraloría Regional del Bío Bío (**Prueba Documental N° 77**), se encuentra asociado al Decreto de Pago N° 258 que ordena pagar a Laboratorio Andrómaco la suma referida, documento que en todo caso no fue acompañado por los acusadores.

15.- Cheque N° 9710524, cuenta corriente N° 52709052161, por \$2.677.500, de fecha 20.02.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 20 de febrero de 2018 en oficina Concepción Bío Bío, al reverso figura manuscrito el número 9.844.026-7 y 984500049 (**Prueba Documental 108 N°17**); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°2 de las acusaciones, cuyas observaciones están contenidas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 275 (Prueba Documental N° 212)

Fecha: 20 de febrero de 2018
Páguese a: Etex Farmacéutica Limitada
Suma de: \$2.677.500
Factura N°: 106949



Cheque: 9710524

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

16.- Cheque N°9710542, cuenta corriente N° 52709052161, por \$2.377.620, de fecha 27.02.2018, girado a nombre de Pedro Rabanal Mellado, pagado por caja el 27 de febrero de 2018 en oficina Concepción Bío Bío, al reverso manuscrito número 9.844.026-7 y 984500049 (**Prueba Documental 108 N°18**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 444 (Prueba Documental N°205)

Fecha: 1 de marzo de 2018

Páguese a: Recben Farmacéutica Ltda.

Suma de: \$2.377.620

Factura N°: 20384 (Figura factura N°20348, de fecha 24.06.2016, por dicho monto)

Cheque : 9710542

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

17.- Copia de Cheque N°9710590, cuenta corriente N° 52709052161, cuenta corriente N° 52709052161, por \$2.618.00, de fecha 09.03.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, cobrado por caja el 12 marzo de 2018 en oficina Concepción Bio Bio (**Prueba Documental 112 N° 1**), al reverso manuscrito números 9844.026-7, y 984500049; cheque que se encuentra asociado al decreto de pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°3 de las acusaciones, cuyas observaciones están contenidas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 344 (Prueba Documental N°212)

Fecha: 8 de marzo de 2018

Páguese a: Etex Farmacéutica Limitada

Suma de: \$2.618.000

Factura N°: 1038351

Cheque: 9710590

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

18.- Copia de Cheque N° 9470742, cuenta corriente N°52709052004, por \$2.795.310, de fecha 14.03.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado,



pagado por caja el 14.03.2018 en oficina Concepción Bio Bio, al reverso figuran manuscritos los números 9844.026-7, y 984500049 (**Prueba Documental 111 N° 2**), cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 394 (Otros Medios de Prueba N°2)

Fecha: 13 de marzo de 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$2.795.310

Factura N°: 548463 (De fecha 29.08.2016)

Cheque : 9470742

Firmado jefe finanzas; Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

19.- Cheque N° 9710634, cuenta corriente N° 52709052161, por \$2.987.019, de fecha 28.03.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 28 de marzo de 2018 en oficina Concepción Bio Bío, al reverso manuscrito números 9.844.026-7 y 984500049 (**Prueba Documental 108 N° 21**); cheque que se encuentra asociado al decreto de pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°4 de las acusaciones, cuyas observaciones están contenidas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N°498 (Prueba Documental N° 212)

Fecha: 28 de marzo 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$2.987.019

Factura N°: 597777

Cheque NO SE INDICA

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

20.- Cheque N° 9710683, cuenta corriente N° 52709052161, por \$2.907.825, de fecha 10.04.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 10 de abril de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso manuscrito números 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N° 24**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 629 (Otros Medios de Prueba N°42)

Fecha: 10 de abril de 2018

Páguese a: Munnich Pharma Medical Ltda.

Suma de: \$2.907.825



Factura N°: 11767 (de fecha 04.12.2015 por dicho monto)
Cheque : 971068 (se le agregó un 3 manuscrito, y quedó 9710683)
Firmado jefe finanzas; Alejandro Cabello Bustos
Firmado Director: Armando Domínguez Ponce
Visto bueno usuario: nsanmart

21.- Cheque N° 9710438, cuenta corriente N°52709052004, \$ 2.827.202, de fecha 12.04.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, cobrado por caja el 13 de abril de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso números 9844026-7 (**Prueba Documental 107 letra g**); cheque que se encuentra asociado al decreto de pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°6 de las acusaciones, cuyas observaciones están contenidas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 643 (Otros Medios de Prueba N°2)

Fecha: 12 de abril de 2018
Páguese a: Laboratorio Andrómaco
Suma de: \$ 2.827.202
Factura N°: 562206
Cheque: 9710438
Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos
Firmado Director: Armando Domínguez Ponce
Visto bueno usuario: nsanmart

22.- Cheque N° 733206, cuenta corriente 52709052187, por \$2.972.239, de fecha 17.04.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 17 de abril de 2018 en oficina Concepción Bio Bio, y al reverso manuscrito existen números 9844026-7 (**Prueba Documental N° 110**); cheque que se encuentra asociado al decreto de pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°7 de las acusaciones, cuyas observaciones están contenidas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 659 (Prueba Documental N° 212)

Fecha: 17 de abril de 2018
Páguese a: Laboratorio Andrómaco
Suma de: \$2.972.239
Factura N°: 562825
Cheque: 733206
Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos
Firmado director: Armando Domínguez Ponce
Visto bueno usuario: nsanmart



23.- Cheque N°620204, cuenta corriente N° 52709052161, por \$2.588.250, de fecha 23.04.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 24 de abril de 2018 en oficina Concepción Bío Bío, al reverso, en manuscrito números 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°25**); cheque que conforme al Anexo N° 10 del Informe 315/2019 de la Contraloría Regional del Bío Bío (**Prueba Documental N° 77**), se encuentra asociado al Decreto de Pago N° 693 que ordena pagar a Laboratorio Andrómaco la suma referida, decreto que en todo caso no fue acompañado por los acusadores.

24.- Cheque N°620230, cuenta corriente N° 52709052161, por \$2.942.311, de fecha 30.04.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 2 de mayo de 2018 en oficina Concepción Bío Bío, al reverso figuran manuscrito números 9.844.026-7 y 984500049 (**Prueba Documental 108 N° 27**); cheque que conforme al Anexo N° 10 del Informe 315/2019 de la Contraloría Regional del Bío Bío (**Prueba Documental N° 77**), se encuentra asociado al Decreto de Pago N° 742 que ordena pagar a Laboratorio Andrómaco la suma referida, decreto que en todo caso no fue acompañado por los acusadores.

25.- Cheque N°620231, cuenta corriente N° 52709052161, por \$2.680.118, de fecha 02.05.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 3 de mayo de 2018 en oficina Concepción Bío Bío, al reverso manuscrito números 9.844.026-7 y 984500049 (**Prueba Documental 108 N°28**); cheque que no se encuentra asociado a ningún decreto de pago, dado que la vinculación que se hacía con el decreto N° 745 (Prueba Documental N° 212) - contenida en el Hecho 5 N° 8 de las acusaciones-, en definitiva no es tal, dado que dicho decreto consigna el cheque número 620232, el cual por lo demás no ha sido incorporado por los acusadores; todo ello según lo que se indica al momento del análisis de tales hechos.

26.- Cheque N° 620250, cuenta corriente N° 52709052161, por \$2.796.500, de fecha 04.05.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 4 de mayo de 2018 en oficina Concepción Plaza Acevedo, al reverso manuscrito número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N° 29**); cheque que conforme al Anexo N° 10 del Informe 315/2019 de la Contraloría Regional del Bío Bío (**Prueba Documental N° 77**), se encuentra asociado al Decreto de Pago N° 773 que ordena pagar a Laboratorio Andrómaco la suma referida, decreto que en todo caso no fue acompañado por los acusadores.

27.- Cheque N° 620274, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.236.526, de fecha 11.05.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 14 de mayo de 2018 en oficina Concepción Collao, al reverso número manuscrito 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°31**); cheque que



se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 826 (Otros Medios de Pruebas N° 42)

Fecha: 11 de mayo de 2018

Páguese a: Laboratorio Chile SA

Suma de: \$3.236.526

Factura N°: 192257 (Figura factura N°192275, de 04.08.2016, y otra 192231, de misma fecha)

Cheque:620274

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

28.- Cheque N°620291, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.220.353, de 15.05.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado el 15 de mayo de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°32**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 878 (Otros Medios de Prueba N° 42)

Fecha: 15 de mayo de 2018

Páguese a: Munnich Pharmna Medical Ltda.

Suma de: \$3.220.353

Factura N°: 10609 y 8951 (30.10.2015 por \$2.145.990 y de 07.09.2015 por \$1.074.363)

Cheque: 620291

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

29.- Cheque N°620296, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.623.788, de fecha 15.05.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 16 de mayo de 2018 en oficina Talcahuano El trébol, al reverso manuscrito número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N° 33**); cheque que conforme al Anexo N° 10 del Informe 315/2019 de la Contraloría Regional del Bío Bío (**Prueba Documental N° 77**), se encuentra asociado al Decreto de Pago N° 886 que ordena pagar a Laboratorio Andrómaco la suma referida, decreto que en todo caso no fue acompañado por los acusadores.

30.- Cheque N° 620314, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.220.783, de fecha 23.05.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 23 de mayo de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso manuscrito números 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°34**), cheque que se encuentra asociado al decreto de pago que a continuación se detalla, y



que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°9 de las acusaciones, cuyas observaciones están señaladas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 921 (Prueba Documental N°212)

Fecha: 23 de mayo de 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$3.220.783

Factura N°: 622331

Cheque: 620314

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

31.- Cheque N°620334, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.652.110, de fecha 27.05.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja 29 de mayo de 2018 en oficina Concepción Bío Bío, al reverso número manuscrito 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°36**); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N°947 (OTROS MEDIOS N°42)

Fecha: 28 de mayo de 2018

Páguese a: Munnich Pharma Medical Ltda

Suma de: \$.3652.110

Factura N°: 35980 (de fecha 7.11.2017, por el total)

Cheque : 620334

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

32.- Cheque N° 620345, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.402.210, de fecha 31.05.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 31 de mayo de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso manuscrito número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°37**); cheque que se encuentra asociado al siguiente Decreto de Pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 963 (Prueba Documental N° 212)

Fecha: 31 de mayo de 2018

Páguese a: Etex Farmacéutica Limitada

Suma de: \$3.402.210

Factura N°: 1037934, de 19.9.2015, y N° 1038181, de 8.10.2015

Cheque : 620345

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce



Visto bueno usuario: nsanmart

33.- Cheque N° 620356, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.332.000, de fecha 04.06.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 5 de junio de 2018 en oficina Concepción Collao, al reverso manuscrito número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°38**), cheque que se encuentra asociado al decreto de pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N° 10 de las acusaciones, cuyas observaciones están señaladas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 983 (Otros medios de Prueba N°2)

Fecha: 4 de junio de 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$3.332.000

Factura N°: 551799

Cheque: 620356

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

34.- Cheque N°620360, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.748.500, de fecha 05.06.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 6 de junio de 2018 en oficina Concepción Bío Bío, al reverso manuscrito números 9.844.026-7 y 984500049 (**Prueba Documental 108 N°39**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 993 (Otros Medios de Prueba N°2)

Fecha: 5 de junio de 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$3.748.500

Factura N°: 525878, 526197, 532143 (de fechas 26.08.2016; 24.06.2016; y 30.08.2016.

Cheque: 620360

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

35.- Cheque N° 620362, cuenta corriente N° 52709052161, por \$3.855.600, de fecha 07.06.2018, girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado, el cual tiene estampado en el anverso un timbre de fecha 11 de junio 2018 del Banco Crédito e Inversiones, Punta Arenas, y al reverso figura cuenta 77048253, y un timbre BCI 06/11/2018 y una firma o mosca, como también figura manuscrito Pedro Ravanal Mellado (**Prueba Documental 108 N°41**);



cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 1044 (Otros Medios de Prueba N°2)

Fecha: 7 de junio de 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$ 3.855.600

Factura N°: 562054 (es de fecha 21.11.2016, que corresponde realmente a la 562045 por dicho monto)

Cheque: 620362

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

36.- Cheque N° 620383, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.951.633, de fecha 26.06.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 26 de junio de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso manuscrito número 9.844.026-7 **(Prueba Documental 108 N°42)**; cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 1084 (Otros Medios de Prueba N°2)

Fecha: 26 de junio de 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$3.951.633

Factura N°: 6486942 (Figura factura N°648692, de 11.04.2018, por dicho monto)

Cheque: 620383

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

37.- Cheque N° 620388, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.046.400, de fecha 27.06.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 28 de junio de 2018 en oficina Concepción Collao, al reverso número manuscrito 9.844.026-7 **(Prueba Documental 108 N°43)**; cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 1088 (Prueba Documental N°204)

Fecha: 27 de junio de 2018

Páguese a: Winpharm SPA

Suma de: \$ 3.046.400

Factura N°: 50959 (de fecha 20.10.2016)

Cheque : 620388

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos



Firmado Director: Armando Domínguez Ponce
Visto bueno usuario: nsanmart

38.- Copia de Cheque N° 962104, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3513.435, de fecha 28.06.2018, a Pedro Ravanal Mellado, al reverso número manuscrito 9844026-7 (**Prueba Documental 112 N°2**), el cual si bien es ilegible el timbre de pagado, conforme al Anexo 10 del Informe 315/2019 de la Contraloría Regional del Bío Bío (**Prueba Documental N° 77**), **aparece cobrado el 29 de junio de 2018**; cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 115 (Otros Medios de Prueba N°42)

Fecha: 28 de junio de 2018

Páguese a: Munnich Pharma Medical Ltda.

Suma de: \$3.513.435

Factura N°: 8997 y 16063 (de fechas 08.09.2015 y 02.05.2016, no suman total. Hay una tercera factura por más de 3 millones).

Cheque: No se indica. Pero al final del decreto, de manera manuscrita se registra que la orden fue pagada con cheque N° 962104, con fecha 28.06.2018.

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

39.- Cheque N° 962121, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.927.000, de fecha 03.07.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 4 de julio de 2018 en oficina Concepción Plaza Acevedo, al reverso figura número manuscrito 9.844.026-7, y también manuscrito se lee “**confirmación telefónica Alejandro Cabello**” (**Prueba Documental 108 N°44**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 1144 (Otros Medios de Prueba N°42)

Fecha: 3 de julio de 2018

Páguese a: Laboratorio Recalcine

Suma de: \$3.927.000

Facturas N° 89724 y 1212904 (de fechas 28.06.2016 y 23.12.2016, que sería su número correcto 121294 según legajo)

Cheque: 962121

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

40.- Cheque N° 962144, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.632.572, de fecha 12.07.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 12 de julio de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso manuscrito



número 9. 844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°46**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 1188 (Otros Medios de Prueba N°42)

Fecha: 12 de julio de 2018

Páguese a: Munnich Pharma Medical Ltda.

Suma de: \$.3632.572

Factura N°: 6384 (Hay una factura 6483, de fecha 10.06.2015, por gran parte del monto, y otra factura menor, de fecha 18.07.2016).

Cheque : 962144

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

41.- Cheque N° 962155, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.878.686, de fecha 20.07.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 23 de julio de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso número figura manuscrito 9.844.026 (**Prueba Documental 108 N°48**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 1220 (Prueba Documental N° 203)

Fecha: 20 de julio de 2018

Páguese a: Opko Chile S.A.

Suma de: \$3.878.686

Factura N°: 329995 (Figura factura 329959, de fecha 24.11.2017, por dicho total)

Cheque: 962155

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

42.- Cheque N° 962162, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.923.073, de fecha 24.07.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 24 de julio de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso figura manuscrito número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°49**), cheque que se encuentra asociado al decreto de pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°11 de las acusaciones, cuyas observaciones están señaladas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 1232 (Otros Medios N°2)

Fecha: 24 de julio de 2018

Páguese a: Laboratorio Chile S.A.

Suma de: \$3.923.073



Factura N°: 279576

Cheque : 962162

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

43.- Copia de Cheque N°1166424, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.570.000, de fecha 30.07.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja 30.07.2018 en oficina Talcahuano, al reverso número manuscrito 9844026-7 (**Prueba Documental 111 N°4**), cheque que se encuentra asociado al decreto de pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°12 de las acusaciones, cuyas observaciones están señaladas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 1277 (Otros Medios de Prueba N° 2)

Fecha: 30 de julio de 2018

Páguese a: Laboratorio Chile SA

Suma de: \$ 3.570.000

Factura N°: 294655

Cheque: 1166424

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

44.- Cheque N° 962191, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.382.575, de fecha 01.08.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 2 de agosto de 2018 en oficina Concepción Bío Bío, al reverso figura manuscrito número 9.844.026-7(**Prueba Documental 108 N°50**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 1305 (Prueba Documental N° 202)

Fecha: 1 de agosto de 2018

Páguese a: Opko Chile S.A.

Suma de: \$3.382.575

Factura N°: 350822 (Figura adjunta factura 350282, por el total, de fecha 20.06.2018)

Cheque: 962191

Firmado jefe finanzas (S); Nubia San Martín Pavez

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

45.- Cheque N°962219, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.769.991, de fecha 06.08.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado



por caja el 8 de agosto de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso figura manuscrito 9.844.026-7 **(Prueba Documental 108 N°52)**; cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 1359 (Prueba Documental N° 201)

Fecha: 6 de agosto de 2018

Páguese a: Laboratorio Chile S.A.

Suma de: \$3.769.991

Factura N°: 219306 (de fecha 26.01.2017, y figuran varias facturas de marzo 2016 y junio 2016)

Cheque: 962219

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

46.- Cheque N°962240, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3754.331, de fecha 08.08.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 8 de agosto de 2018 en oficina Concepción Bío Bío, al reverso figura manuscrito 9.844.026-7**(Prueba Documental 108 N°53)**; cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 1383 (Otros Medios de Prueba N°2)

Fecha: 8 de agosto de 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$3.754.331

Factura N°: 656489 (Figura N°656498 de 18.05.2018, y otra N°664263, de 28.06.2018)

Cheque: 962240

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

47.- Cheque N°1166531, cuenta corriente N° 52709052004, girado por \$3.641.400, de fecha 10.08.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, cobrado por caja 13 de agosto de 2018 en oficina Concepción Bio Bío, al reverso figura manuscrito 9844026-7 y 984500049 **(Prueba Documental 107 lera h))**; cheque que conforme al Anexo N° 10 del Informe 315/2019 de la Contraloría Regional del Bío Bío **(Prueba Documental N° 77)**, se encuentra asociado al Decreto de Pago N° 1403 que ordena pagar a B. Braun Medical S.A. la suma referida, decreto que en todo caso no fue acompañado por los acusadores.

48.- Cheque N° 1166538, cuenta corriente N° 52709052004, girado por \$3.538.219, de fecha 13.08.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, cobrado



por caja el 14 de agosto de 2018 en oficina Concepción Collao, al reverso figura manuscrito 9844026-7 (**Prueba Documental 107 letra j**)); cheque que conforme al Anexo N° 10 del Informe 315/2019 de la Contraloría Regional del Bío Bío (**Prueba Documental N° 77**), se encuentra asociado al decreto de pago N°1417 que ordena pagar a Munnich Pharma Medical Ltda. la suma referida, decreto que en todo caso no fue acompañado por los acusadores.

49.- Cheque N° 962263, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.660.738, de fecha 20.08.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 21 de agosto de 2018 en oficina Concepción Collao, al reverso manuscrito 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°54**), cheque que se encuentra asociado al decreto de pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N° 16 de las acusaciones, cuyas observaciones están señaladas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 1644 (Otros Medios de Prueba N°2)

Fecha: 3 de septiembre de 2018

Páguese a: Whinpharm SPA

Suma de: \$3.660.738

Factura N°: 50716

Cheque : 962263

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Juan Garcés Gallardo (S)

Visto bueno usuario: nsanmart

50.- Cheque N° 962267, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.213.000, de fecha 22.08.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 23 de agosto de 2018 en oficina Concepción Plaza Acevedo, al reverso manuscrito figura el número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N° 55**), cheque que se encuentra asociado al decreto de pago N° 1540 que continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°14 de las acusaciones, cuyas observaciones están señaladas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas; cheque que por lo demás, también figura citado en el decreto N° 1475, de fecha 22 de agosto de 2018, que ordena pagar a Esenergy la suma de \$437.671, constando en dicho legajo que esta última suma se depositó en la cuenta del referido proveedor el 23 de agosto de 2018:

Decreto Pago N° 1540 (Otros Medios de Prueba N° 1)

Fecha: 3 septiembre 2018

Páguese a: Buhos S.C.I. LTDA

Suma de: \$3.213.000

Factura: 18112

Cheque: 962267



Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos
Firmado director: Armando Domínguez Ponce
Visto bueno usuario: nsanmart

51.- Cheque N° 962274, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.442.113, de fecha 30.08.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 31 de agosto de 2018 en oficina Concepción Plaza Acevedo, al reverso figura manuscrito número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N° 57**); cheque que conforme al Anexo N° 10 del Informe 315/2019 de la Contraloría Regional del Bío Bío (**Prueba Documental N° 77**), se encuentra asociado al decreto de pago N°1521 que ordena pagar a Nipro Medical Corporation la suma referida, decreto que en todo caso no fue acompañado por los acusadores.

52.- Cheque N° 962284, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.575.474, de fecha 03.09.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 3 de septiembre de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso figura manuscrito 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°59**), cheque que se encuentra asociado al decreto de pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°15 de las acusaciones, cuyas observaciones están señaladas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 1541 (Otros Medios de Prueba N°2)

Fecha: 3 de septiembre de 2018

Páguese a: Laboratorio Chile S.A.

Suma de: \$ 3.575.474

Factura N°: 154356

Cheque : 962284

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

53.- Cheque N°1344005, cuenta corriente N° 52709052161, girado por la suma de \$3.587.731, de fecha 05.09.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 6 de septiembre de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso figura manuscrito 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°62**), cheque que se encuentra asociado al decreto de pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°18 de las acusaciones, cuyas observaciones están señaladas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 1588 (Otros Medios de Prueba N° 2)

Fecha: 5 de septiembre de 2018

Páguese a: Laboratorio Chile S.A.



Suma de: \$3.587.731

Factura N°: 155859

Cheque : 1344005

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

54.- Copia Cheque N°1344029, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.681.789, de fecha 10.09.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 10.09.2018 en oficina Talcahuano, al reverso figura con manuscrito número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 112 N°3**), cheque que se encuentra asociado al decreto de pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°21 de las acusaciones, cuyas observaciones están señaladas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 1589 (Otros Medios de Prueba N° 2)

Fecha: 10 de septiembre de 2018

Páguese a: Ethon Pharmaceuticals

Suma de: \$3.681.789

Factura N°: 74656

Cheque: 1344029

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

55.- Cheque N° 1344033, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.793.720, de fecha 13.09.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 13 de septiembre de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso manuscrito número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°64**); cheque que conforme al Anexo N° 10 del Informe 315/2019 de la Contraloría Regional del Bío Bío (**Prueba Documental N° 77**), se encuentra asociado al decreto de pago N°1623 que ordena pagar a Etex Farmacéutica Limitada la suma referida, decreto que en todo caso no fue acompañado por los acusadores.

56.- Cheque N°1344035, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.439.930, de fecha 13.09.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 13 de septiembre de 2018 en oficina Concepción Collao, al reverso figura manuscrito 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°66**), cheque que se encuentra asociado al decreto de pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°22 de las acusaciones, cuyas observaciones están señaladas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:



Decreto Pago N° 1634 (Otros Medios de Prueba N° 2)

Fecha: 13 septiembre 2018

Páguese a: Laboratorio Chile S.A

Suma de: \$3.439.930

Factura N°: 214403

Cheque: 1344035

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director (S): Juan Garcés Gallardo

Visto bueno usuario: nsanmart

57.- Cheque N° 1344040, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.560.480, de fecha 20.09.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 21 de septiembre de 2018 en oficina Concepción Collao, al reverso figura manuscrito 9.844.026-7 **(Prueba Documental 108 N°68)**, cheque que se encuentra asociado al decreto de pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°25 de las acusaciones, cuyas observaciones están señaladas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 1643 (Otros Medios de Prueba N° 2)

Fecha: 20 de septiembre de 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$ 3.560.480

Factura N°: 647811

Cheque: 1344040

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director (S): Juan Garcés Gallardo

Visto bueno usuario: nsanmart

58.- Cheque N° 1344052, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.877.020, de fecha 25.09.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 25 de septiembre de 2018 en oficina de Talcahuano, al reverso figura manuscrito 9.844.026-7 **(Prueba Documental 108 N°69)**, cheque que se encuentra asociado al decreto de pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°26 de las acusaciones, cuyas observaciones están señaladas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N°1660 (Prueba Documental N°213)

Fecha: 24 de septiembre de 2018

Páguese a: Laboratorio Chile

Suma de: \$3.877.020

Factura N°: 235235

Cheque N° 1344052

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos



Firmado director (S): Juan Garcés Gallardo
Visto bueno usuario: nsanmart

59.- Cheque N° 1344060, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.855.158, de fecha 28.09.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 28 de septiembre de 2018 en oficina Concepción Collao, manuscrito al reverso el número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°71**); cheque que conforme al Anexo N° 10 del Informe 315/2019 de la Contraloría Regional del Bío Bío (**Prueba Documental N° 77**), se encuentra asociado al decreto de pago N°1666, que ordena pagar a Munnich Pharma Medical Ltda. la suma referida, decreto que en todo caso no fue acompañado por los acusadores.

60.- Cheque N° 1344065, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.962.700, de fecha 02.10.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 3 de octubre de 2018, en sucursal Concepción Plaza Acevedo, al reverso manuscrito número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°72**), cheque que se encuentra asociado al decreto de pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°27 de las acusaciones, cuyas observaciones están señaladas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 1690 (Prueba Documental N° 213)

Fecha: 2 de octubre de 2018

Páguese a: Winpharm SPA

Suma de: \$3.962.700

Factura N°: 50714

Cheque 1344065

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

61.- Cheque N°1344082, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.320.100, de fecha 04.10.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 5 de octubre de 2018 en oficina Concepción Plaza Acevedo, al reverso manuscrito figura número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°73**), cheque que se encuentra asociado al decreto de pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°28 de las acusaciones, cuyas observaciones están señaladas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 1712 (Prueba Documental N° 212)

Fecha: 4 de octubre 2018

Páguese a: Etex Farmacéutica Limitada

Suma de: \$3.320.100

Factura N°: 1034439



Cheque: No se indica, pero en un recuadro destinado a individualizar el cheque con el cual se paga, se consigna con manuscrito el cheque N° 1344082.

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

62.- Cheque N° 1344089, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.760.995, de fecha 08.10.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 8 de octubre de 2018 en oficina Concepción Plaza Acevedo, al reverso figura manuscrito el número 9844026-7 (**Prueba Documental 108 N°74**), cheque que se encuentra asociado al decreto de pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°29 de las acusaciones, cuyas observaciones están señaladas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 1729 (Prueba Documental N° 213)

Fecha: 8 octubre 2018

Páguese a: Laboratorio Chile SA

Suma de: \$3.760.995

Factura N°: 158856

Cheque N°: 1344089

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: acabello

63.- Cheque N°1344100, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.612.835, de fecha 17.10.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 18 de octubre de 2018 en oficina Concepción Plaza Acevedo, al reverso manuscrito figura número 9.844.026-7(**Prueba Documental 108 N°76**), cheque que se encuentra asociado al decreto de pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°31 de las acusaciones, cuyas observaciones están señaladas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N°1747 (Prueba Documental N° 213)

Fecha: 17 de octubre de 2018

Páguese a: Laboratorio Chile SA

Suma de: \$3.612.835

Factura N°: 155864

Cheque: 1344100

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart



64.- Cheque N° 1344104, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.616.100, de fecha 22.10.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 22 de octubre de 2018 en oficina Concepción Collao, al reverso en manuscrito número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°**), cheque que se encuentra asociado al decreto de pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°32 de las acusaciones, cuyas observaciones están señaladas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 1754 (Prueba Documental N° 213)

Fecha: 22 de octubre de 2018

Páguese a: Ethon Farmaceuticals

Suma de: \$3.616.100

Factura N°: 74221

Cheque: 1344104

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

65.- Cheque N°1344106, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.881.780, con fecha 23.10.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 24 de octubre de 2018 en oficina Concepción Bio Bio, al reverso figura manuscrito 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°78**), cheque que se encuentra asociado al decreto de pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 5 N°33 de las acusaciones, cuyas observaciones están señaladas en el considerando Trigésimo letra A), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N°1758 (Prueba Documental N°213)

Fecha: 23 de octubre de 2018

Páguese a: Winpharm SPA

Suma de: 3.881.780

Factura N°:45518

Cheque 1344106

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

66.- Cheque N°1344108, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.706.613, de fecha 25.10.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 29 de octubre de 2018 en oficina Concepción Plaza Acevedo, manuscrito al reverso el número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N° 80**); cheque que conforme al Anexo N°10 del Informe 315/2019 de la Contraloría Regional del Bío Bío (**Prueba Documental N° 77**), se encuentra asociado al



decreto de pago N°1785, que ordena pagar a Laboratorio Silesia S.A. la suma referida, decreto que en todo caso no fue acompañado por los acusadores.

67.- Cheque N° 1344113, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.513.753, de fecha 29.10.2018, a nombre de Pedro Ravanal mellado, pagado por caja el 30 de octubre en oficina Concepción Bio Bio, al reverso figuran manuscrito 9.844.026-7 y 984500049 **(Prueba Documental 108 N°81)**, cheque que se encuentra asociado al decreto de pago que a continuación se detalla, y que por lo demás corresponde a uno de los decretos contenidos dentro del Hecho 7 de las acusaciones, cuyas observaciones están señaladas en el considerando Trigésimo letra C), las que se tienen por reproducidas:

Decreto Pago N° 235 (Prueba Documental N° 212)

Fecha: 1 de febrero 2019

Páguese a: Nipro Medical Corporation

Suma de: \$3.513.753

Facturas N°: 71405 y 71040

Cheque: 1344113

Firmado jefe (S) finanzas: Nubia San Martín Pavez

Firmado Director: Juan Garcés Gallardo

Visto bueno usuario: nsanmart

Debiendo agregarse que igualmente, existe agregado en el legajo de la orden de pago señalada, el decreto N°1806, de fecha 29 de octubre de 2018, que ordena pagar a Nipro Medical Corporation la suma de \$3.513.753, en el cual se consigna el cheque N° 1344113 en cuestión, decreto este último que igualmente está firmado por Cabello Bustos, y figura nsanmart como usuario.

68.- Cheque N°1344130, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.212.033, de fecha 05.11.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 5 de noviembre de 2018 en oficina Concepción Collao, al reverso manuscrito el número 9.844.026-7 **(Prueba Documental 108 N°83)**; cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 1844 (Otros Medios de Prueba N° 2)

Fecha: 5 de noviembre de 2018

Páguese a: Novartis Chile S.A.

Suma de: \$ 3.212.033

Factura N°: 255018 (de fecha 08.09.2015, y hay otras dos del 05.08.2015 y del 08.10.2015)

Cheque: 1344130

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart



69.- Cheque N°1344145, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.520.773, de fecha 07.11.2018, a nombre de Pedro Revanal Mellado, pagado por caja el 7 de noviembre de 2018 en oficina Concepción Plaza Acevedo, al reverso manuscrito el número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°84**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 1872 (Otros Medios de Prueba N° 2)

Fecha: 7 de noviembre de 2018

Páguese a: Lab Silesia S.A.

Suma de: \$3.520.773

Factura N°: 59631 (de fecha 19.07.2013, y otras de 5 del años 2013).

Cheque: 1344145

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

70.- Cheque N°1344175, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.165.400, de fecha 09.11.2018, a nombre de Pedro Revanal Mellado, pagado por caja el 12 de noviembre de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso figura manuscrito reverso número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°86**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 1966 (Otros Medios de Prueba N°2)

Fecha: 9 de noviembre de 2018

Páguese a: Lab Silesia S.A.

Suma de: \$3.165.400

Factura N°: 295246 (de fecha de 19.12.2014)

Cheque: 1344175

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

71.- Cheque N° 1344183, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.254.650, de fecha 13.11.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 26 de noviembre de 2018 en oficina Concepción Plaza Acevedo, al reverso figura manuscrito número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°87**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 1968 (Otros Medios de Prueba N°2)

Fecha: 13 de noviembre de 2018

Páguese a: Lab Silesia S.A.

Suma de: \$3.254.650



Factura N°: 173978 (de fecha 09.05.2013, y otras 3 de 2013 y una de 2014)
Cheque: 1344183
Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos
Firmado Director: Armando Domínguez Ponce
Visto bueno usuario: nsanmart

72.- Cheque N° N°1762412, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.246.646, de fecha 28.11.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 29.11.2018 en oficina Concepción Plaza Acevedo, al reverso manuscrito número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 112 N° 4**).

Este cheque, conforme al Anexo N° 10 del Informe 315/2019 de la Contraloría Regional del Bío Bío (**Prueba Documental N° 77**), podría encontrarse asociado al decreto de pago N° 234, que ordena pagar a Laboratorio Chile S.A. la misma suma referida, dado que el Ministerio Público incorporó el decreto de pago 234 de 1 de febrero de 2019, que ordena pagar a Laboratorio Chile la suma de \$3.264.646, indicando que se hace por "INSUMOS REGULARIZACION DECRETO N. 1975 No REFISTRADO en M.F. NOV.2018", consignándose la Factura 36219 y cheque 1762411, firmado por Nubia San Martín Pavez como Jefe Depto. Finanzas (S) y Juan Garcés Gallardo, como director (S); en cuyo legajo se encuentra ajunto el Decreto 1975, de 28 de noviembre de 2018, el cual dispone que se pague a Laboratorio Chile S.A., la suma ya referida de \$3.264.646, por la necesidad de abastecer de fármacos a CESFAM OC 995, individualizando la misma factura y cheque ya indicado, decreto que en este caso está firmado por los titulares Alejandro Cabello y Armando Domínguez, debiendo agregarse que en todo caso en el legajo existen dos facturas por un monto de \$1.285.200 cada una, entre ellas la N° 36219, de fechas 17 y 18 de abril de 2013, y una factura por \$694.246, de 11 de marzo de 2013.

73.- Cheque N°1762416, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.463.495, de fecha 03.12.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 4 de diciembre de 2018 en oficina Concepción Bio Bio, al reverso manuscrito 9.844.026-7 y 84500049 (**Prueba Documental 108 N° 89**); cheque que conforme al Anexo N° 10 del Informe 315/2019 de la Contraloría Regional del Bío Bío (**Prueba Documental N° 77**), se encuentra asociado al decreto de pago N°2020, que ordena pagar a Nipro Medical Corporation la suma referida, decreto que en todo caso no fue acompañado por los acusadores.

74.- Cheque N° 1762442, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.782.415, de fecha 07.12.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 11 de diciembre de 2018 en oficina Concepción Plaza Acevedo, manuscrito al reverso 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°91**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:



Decreto Pago N° 2074 (Otros Medios de Prueba N°2)

Fecha: 7 de diciembre de 2018

Páguese a: Synthon Chile Limitada

Suma de: \$3.782.415

Factura N°: 48636 (de 4.05.2017, y hay 3 facturas más, de marzo 2017, diciembre 2016 y agosto 2016.

Cheque: 1762442

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

75.- Cheque N°1762451, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.868.055, de fecha 13.12.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 14 de diciembre de 2018 en oficina Concepción Collao, al reverso manuscrito 9.844.026-7 **(Prueba Documental 108 N°92)**; cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 2107 (Otros Medios de Prueba N°42)

Fecha: 13 de diciembre de 2018

Páguese a: Munnich Pharma Medical Ltda.

Suma de: \$3.868.055

Factura N°: 347757 (de fecha 15.12.2017, y hay otra de 16.06.2017 por \$3.456.545, que completa monto)

Cheque: 1762451

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

76.- Cheque N° 1762456, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.850.840, de fecha 19.12.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 19 de diciembre de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso manuscrito figura número 9.844.026-7 **(Prueba Documental 108 N°93)**; cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 2124 (Otros Medios de Prueba N°2)

Fecha: 19 de diciembre de 2018

Páguese a: Laboratorio Chile SA

Suma de: \$3.850.840

Factura N°: 187204 (de fecha 04.07.2016, y otra de la misma fecha)

Cheque: 1762456

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart



77.- Cheque N° 1762463, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.775.937, de fecha 24.12.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 24 de diciembre de 2018 en oficina Concepción Plaza Acevedo, al reverso manuscrito número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°95**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 2134 (Otros Medios de Prueba N°2)

Fecha: 24 de diciembre de 2018

Páguese a: Laboratorio Chile SA

Suma de: \$3.775.937

Factura N°: 181068 (de fecha 27.05.2016, y otras 2 de 12.07.2016 y de 26.07.2016)

Cheque: 1762463

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

78.- Cheque N° 1762480, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.861.550, de fecha 28.12.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 28 de diciembre de 2018 en oficina Concepción Plaza Acevedo, al reverso figura manuscrito el número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°96**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 232 (Prueba Documental N° 212)

Fecha: 1 de febrero de 2019

Páguese a: Laboratorio Chile SA

Suma de: \$3.861.550

Factura N°: 186835 y 190665 (fechas 29.06.2016 y 26.07.2016, y hay una tercera factura de 28.06.2016)

Cheque: 1762480

Firmado jefe finanzas (S): Nubia San Martín Pavez

Firmado Director (S): Juan Garcés Gallardo

Visto bueno usuario: nsanmart

79.- Cheque N° 1762478, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.796.838, de fecha 27.12.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 7 de enero de 2019 en oficina Concepción Plaza Acevedo, al reverso en manuscrito figura 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°98**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 231 (Prueba Documental N° 212)

Fecha: 1 de febrero de 2019



Páguese a: Laboratorio Chile

Suma de: \$3.796.838

Factura N°: 183772 (es de 14.06.2016, y hay otra de 23.06.2016)

Cheque: 1762478

Firmado jefe finanzas (S): Nubia San Martín Pavez

Firmado Director (S): Juan Garcés Gallardo

Visto bueno usuario: nsanmart

Además, adjunto al legajo, existe el Decreto Pago N° 2150, de fecha 27 diciembre de 2018, en que se consigna la misma factura, cheque y monto, firmado por Nubia San Martín como jefe finanzas (S) y Armando Domínguez como director, el cual no tiene firma de recibido.

80.- Copia de Cheque N°1762511, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.783.724, de fecha 08.01.2019, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 09.01.2019 en oficina Concepción Collao, al reverso manuscrito 9.844.026-7 (**Prueba Documental 112 N°5**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan

Decreto Pago N° 16 (Prueba Documental N°212)

Fecha: 8 de enero de 2019

Páguese a: Laboratorio Chile SA

Suma de: \$3.783.724

Factura N°: 212803 (de fecha 16.12.2016 y otra de 13.10.2016)

Cheque : 1762511

Firmado jefe finanzas (S): Nubia San Martín Pavez

Firmado Director (S): Juan Garcés Gallardo

Visto bueno usuario: nsanmart

81.- Cheque N°1762513, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.626.192, de fecha 08.01.2019, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 5 de febrero de 2019 en oficina Talcahuano, al reverso figura manuscrito el número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°100**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 156 (Prueba Documental N° 212)

Fecha: 8 de enero de 2019

Páguese a: Laboratorio Chile

Suma de: \$3.626.192

Factura N°: 214504 (de 28.12.2016 y otras dos facturas de noviembre de 2016)

Cheque: 1762513

Firmado jefe finanzas (S): Nubia San Martín Pavez

Firmado Director (S): Juan Garcés Gallardo

Visto bueno usuario: nsanmart



82.- Cheque N° 1762512, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.500.980, de fecha 08.01.2019, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 6 de febrero de 2019, en oficina Talcahuano, al reverso figura manuscrito el número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°101**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 17 (Prueba Documental N° 212)

Fecha: 8 de enero de 2019

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$3.500.980

Factura N°: 609196 (de 14.07.2017 y tres más de julio de 2017)

Cheque: 1762512

Firmado jefe finanzas (S): Nubia San Martín Pavez

Firmado Director (S): Juan Garcés Gallardo

Visto bueno usuario: nsanmart

83.- Cheque N°1762587, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.685.668, de fecha 18.02.2019, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 18 de febrero de 2019 en oficina Talcahuano, al reverso manuscrito el número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°103**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 259 (Prueba Documental N°212).

Fecha: 19 de febrero de 2019

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$ 3.685.668

Factura N°: 496815 (del 20 de octubre de 2015)

Cheque: 1762587

Firmado jefe finanzas; Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director (S): Juan Garcés Gallardo

Visto bueno usuario: nsanmart

Al respecto cabe hacer presente que existen dos decretos N° 259, de misma fecha y por mismo monto.

84.- Cheque N° 1762600, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.923.073, de fecha 21.02.2019, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 22 de febrero de 2019 en oficina Concepción Plaza Acevedo, al reverso en manuscrito figura 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°104**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 270 (Prueba Documental N° 212)

Fecha: 20 de febrero de 2019



Páguese a: Laboratorio Chile SA

Suma de: \$3.923.073

Factura N°: 25797 (es la Guía de Despacho, y es de fecha 16.02.2018)

Cheque : 1762600

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

85.- Cheque N° 2593238, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.986.500, de fecha 27.02.2019, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 27 de febrero de 2019 en oficina Talcahuano y al reverso figura manuscrito 9844026-7 (**Prueba Documental 109**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N°271 (Prueba Documental N°212)

Fecha: 27 de febrero de 2019

Páguese a: Laboratorio Chile SA

Suma de: \$3.986.500

Factura N°: 277942 (de 29.01.2018, y hay otra de 23.03.2018)

Cheque : 2593238

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart, sin mosca

86.- Cheque N° 2142720, cuenta corriente N° 52709052161, girado por \$3.298.918, de fecha 06.03.2019, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado por caja el 7 de marzo de 2019 en oficina Concepción Plaza Acevedo, al reverso figura manuscrito 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°106**); cheque que se encuentra asociado al siguiente decreto de pago con los datos que a continuación se detallan:

Decreto Pago N° 316 (Prueba Documental N° 212)

Fecha: 4 de marzo de 2019

Páguese a: Laboratorio Chile SA

Suma de: \$3.298.918

Factura N°: 208401 (de fecha 22.11.2016, y figura otra factura del 13.10.2016)

Cheque: 2142720

Firmado jefe finanzas: Figura nombre de Alejandro Cabello Bustos y timbre, pero no hay firma estampada.

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

VIGÉSIMO CUARTO: Que conforme a lo referido en el motivo Decimonoveno N° 2, y prueba documental allí expuesta (**Prueba Documental N°38**), a la fecha de ocurrencia de los hechos las firmas autorizadas para girar



cheques desde las cuentas corrientes bancarias estatales bipersonales de la Municipalidad de Talcahuano, entre las cuales se encuentran las Nros. 52709052179, 52709052161, 52709052004 y 52709052187, correspondían a las de Manuel Rojas Ramírez, como titular, y Nubia San Martín Pavez, como suplente; y, por lo mismo, dado el carácter de bipersonal de las cuentas referidas, los cheques debían de contener dos firmas autorizadas, y es del caso que en torno al establecimiento de la participación caligráfica de Nubia San Martín Pavez y Manuel Rojas Ramírez en la confección de las firmas de giro trazadas en los cheques materia de las acusaciones fiscal y particular, que se han detallado en los cuatro considerandos precedentes, el ente persecutor trajo a estrados a la perito documental del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Concepción, doña **Elizabeth Yamilett Pacheco Coke**, quien sobre el punto manifestó que efectivamente se le solicitó establecer la referida participación caligráfica respecto de 120 cheques en relación a las cuentas corrientes de la Municipalidad de Talcahuano, terminadas en 004, 161, 179 y 189, para cuyos efectos se valió del material de comparación consistente en las muestras escriturarias de Nubia San Martín y Manuel Rojas que ella misma tomó en la fiscalía local de Concepción, muestras caligráficas que le fueron exhibidas como **Otros Medios de Prueba N° 73**, las que reconoció como las tomadas por ella; y que luego de la comparación y análisis pericial respectivo, le permitió concluir que las 120 firmas de giro trazadas en la parte inferior derecha de los cheques, son firmas genuinas de Nubia San Martín Pavez; y que las firmas trazadas en la zona inferior izquierda, exceptuando las firmas de los números 5 y 49, son firmas genuinas de Manuel Rojas Ramírez; todo ello de conformidad con su Informe 184, de 14 de octubre de 2021; perito a quien se le exhibieron las **Pruebas Documentales 107, 108, 109, 111**, en torno a los cuales precisó que son los cheques periciados; y si bien la totalidad de los cheques materia de la acusación son 129, ha de tenerse presente que la propia encartada Nubia San Martín no ha negado en juicio la firma de todos los cheques, y ha señalado expresamente que los 129 cheques fueron confeccionados por ella, independientemente del nombre al que se giraron, que todos los documentos están con su firma y letra, por lo que ella hacía los cheques, y que no se imaginó la cantidad de cheques que habían hecho o cobrado, pero todos los llenó y firmó ella.

Que la conclusión precedente, además se condice con otros antecedentes aportados por la misma perito Pacheco Coke, contenidos en su Informe N° 5, de fecha 5 de enero de 2022, por cuanto también se le pidió la eventual participación caligráfica de San Martín Pavez y Rojas Ramírez en la confección de 14 talonarios de la cuenta de la Municipalidad, terminada en 161, talonarios que para los efectos de su pericia los sindicó del número 1 al 14, señalando que dichos talonarios corresponden a los que se le exhiben, comprendidos en **Otros Medios de Prueba Nros. 9 a 22**, precisando que todos corresponden a la cuenta corriente terminada en 161 y los números de cheques comprendidos en



cada uno de los talonarios que se le exhiben y las fechas, como también expuso los espacios periciados, en los cuales habían letras y números; concluyendo en definitiva que los textos y dígitos trazados en los 14 talonarios cuestionados, exceptuando el cheque terminado en 368 del talonario Número 2 (**que corresponde al contenido en Otros Medios de Pruebas N° 16**), proceden de la mano de Nubia San Martín Pavez, agregando que este último, no fue trazado por Manuel Rojas Ramírez.

Que es del caso que el espacio del talonario N° 2 referido por la perito, y que corresponde al del cheque terminado en 368, corresponde al cheque N° 0620368, en cuyo talonario figura girado por la suma de \$3.560.480, con fecha 12.06.2018 a L. Andrómaco; y que conforme a la prueba documental rendida, fue cobrado por Pedro Paredes Montoya, y fue asociado al Decreto de Pago N° 1013, respecto del cual se encuentra acusado Alejandro Cabello Bustos como autor de la falsificación de dicha orden de pago, conforme al Hecho N° 6 de las acusaciones fiscal y particular, según se verá más adelante.

Así, la circunstancia que la acusada Nubia San Martín Pavez haya llenado y firmado los 129 cheques consignados en la acusación, ha de relacionarse con el hallazgo de 14 talonarios, que conforme a los dichos del funcionario policial Rojas Barrientos en las fotografías que le fueron exhibidas (**36, 38, 40, 42 del Set de Otros Medios de Prueba N°88**) se ven sueltos y adosados con un elástico encima del escritorio, los cuales fueron encontrados en una caja plástica transparente, que estaba a un costado del escritorio de la señora Nubia, especificando que dicha caja estaba en el interior de la oficina de finanzas, al entrar a mano derecha, donde existía una especie de lavaplatos o lavatorio; y eran en total 14 talonarios de cheque y todos del Banco Estado, eran talonarios usados; y si bien ante preguntas del defensor García, el referido funcionario terminó indicando que no recuerda si los talonarios estaban sobre el escritorio de Nubia San Martín, y que en las fotografías que le exhibió la fiscal en audiencia no observó la caja transparente, más allá de si estaban o no al interior de una caja plástica o encima del escritorio de la señora Nubia o al interior de algún cajón de dicho mueble, lo cierto es que fueron habidos al interior de la oficina que ocupaba la acusada Nubia San Martín en el departamento de finanzas; como lo afirma el funcionario Valenzuela Ortiz, que sobre el punto manifestó que los talonarios de cheque, que estaban todos usados, habrían estado en los cajones del escritorio de la señora Nubia, aunque no sabe si se encontraron otros talonarios distintos a esos, porque al llegar estaban todos en el escritorio de la señora Nubia, como se aprecia en las fotografías 36 y 38 que se le exhibieron (**Set Fotográfico de Otros Medios N° 88**); todo lo cual se condice con el hecho que era ella quien llenaba y firmaba los cheques, y además hacía las anotaciones en los respectivos talonarios.

VIGÉSIMO QUINTO: Que en cuanto a la naturaleza de los fondos o caudales que se vieron afectados por los hechos que motivan la acusación en contra de los cuatro acusados y su monto total, todos los antecedentes aportados



durante el juicio dan cuenta que los mismos son de carácter público, como por lo demás lo refirieron la totalidad de los testigos que declararon sobre el punto, quienes por trabajar en la misma Dirección de Salud Municipal de Talcahuano o los cargos públicos que desempeñan o desempeñaban a la época de los hechos, estuvieron en condiciones de referirse a ello con pleno conocimiento; aspecto que tampoco ha sido controvertido o puesto en duda por ninguno de los acusados ni por sus defensas.

1.- Así, se desprende claramente de los dichos del testigo **Henry Leonardo Campos Coa**, quien a la época de los hechos tenía la calidad de alcalde de la Municipalidad de Talcahuano, cargo que por lo demás aun detenta, quien indicó que el perjuicio monetario de dicha entidad edilicia asciende a \$412.025.000 aproximadamente, que se defraudó al Estado al utilizarse esos fondos para fines propios, que tiene entendido que las cuentas corrientes más afectadas fueron las de Remuneraciones y la de Aportes Municipales, entre otras; precisando que la cuenta corriente de Remuneraciones recibe los aportes en general desde el pago per cápita, esto es, la subvención que entrega el Estado a través del Ministerio de Salud para la atención de los usuarios, y que la cuenta Aportes Municipales, es la que recibe los recursos de la municipalidad, que son cercano a los \$400.000.000, que es el traspaso que le hace la Municipalidad a la DAS; aportes municipales que se condicen con los indicados en el **Oficio Reservado N° 242, del 22 de febrero de 2019, del Alcalde (S) de la Municipalidad de Talcahuano dirigido al Director de Salud Municipal de Talcahuano (Prueba Documental N° 69)**, en el cual precisamente se señalan los aportes transferidos a dicha Dirección por la suma de \$400.000.000 por cada uno de los años 2017, 2018 y 2019; ello entre otras materias que allí se informan.

Antecedentes corroborados por la Directora Jurídica, **doña Estefanía Estrada Rivas**, quien manifestó que los fondos de la DAS eran fondos públicos, puesto que los ingresos de la DAS provienen del Servicio de Salud, que mensualmente transfiere fondos según un cálculo per cápita, según la cantidad de habitantes de la comuna que se atienden en los servicios de atención primaria de salud, y con fondos de programas o proyectos, como también de fondos del propio municipio; agregando que el monto total del perjuicio fue de más de 400 millones de pesos.

Origen de fondos de la DAS que encuentra también sustento legal, en el artículo 49 de la Ley N° 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, en cuanto se establece que cada entidad administradora de salud municipal recibirá mensualmente, del Ministerio de Salud, a través de los Servicios de Salud y por intermedio de las municipalidades correspondientes, un aporte estatal, el cual se determinará según los criterios que allí se indican, que dicen relación con la población potencialmente beneficiaria en la comuna y características epidemiológicas, nivel socioeconómico de la población, índices de



ruralidad, conjunto de prestaciones que se programen anualmente en los establecimientos de la comuna, cantidad de prestaciones efectivamente realizadas, entre otros.

2.- De igual manera, se contó con el testimonio de **Juan Francisco Torres Vargas**, quien es contador auditor y ha desempeñado funciones en la DAS de Talcahuano desde el 23 de enero de 2019, en una primera época realizando un reemplazo en el departamento de finanzas de dicha Dirección, asumiendo en mayo de 2019 como jefe de finanzas, para actualmente desempeñar el cargo de jefe de administración y finanzas desde junio de 2020; de lo que se desprende que se encuentra en conocimiento de los procesos al interior de la Dirección de Salud Municipal en cuestión, y particularmente en torno a los recursos y el origen de los mismos, con los cuales han de cumplir sus objetivos; quien al respecto manifestó que los cheques cobrados eran de las cuentas terminadas en 161, de Aportes Municipales y la terminada en 004 de APS o Atención Primaria de Salud; precisando que la primera de las cuentas nombradas se alimentaba de ingresos de recuperación de licencias médicas y de aportes municipales que se reciben en la DAS según el presupuesto de cada año; en tanto que la terminada en 004, recibe ingresos desde el Servicio de Salud Talcahuano, porque corresponde a los Convenios que se firman de manera anual con la DAS y que son atingentes a los programas que se deben ejecutar en la comuna, agregando que también hay convenios como SAPU, SAR, CECOSF, que perciben recurso de forma mensual.

3.- Que lo anteriormente expuesto se condice con los antecedentes aportados por la jefa de Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de la República, **Roxana Leoniza de las Mercedes Núñez González**, quien tuvo a su cargo la revisión del informe evacuado por el equipo fiscalizador de la DAS de Talcahuano, que se materializó en el informe N° 315 del año 2019, quien especificó que las cuentas corrientes de la Municipalidad de Talcahuano que se vieron afectadas con los giros de los 129 cheques, fueron las terminadas en los números 161, que era de Aportes Municipales, cuya plata proviene de la que transfiere el municipio a la DAS; la 004, que era de APS ; la 187, de Resolutividad; y la 179, de Remuneraciones; cuentas que reciben aportes a través del Servicio de Salud, a través del per cápita; agregando que el resultado del informe final fue que existió un cobro de cheques por un total de \$412.024.825, monto que estaba destinado al pago de proveedores y cuyos cheques fueron cobrados por Nubia San Martín, Pedro Paredes, Alejandro Cabello y Pedro Ravanal, conforme a lo ya analizado en consideraciones anteriores, indicando expresamente que los fondos sustraídos eran fondos públicos.

4.- Lo anterior, se ve corroborado por los antecedentes contenidos en la Minuta del equipo fiscalizador de la Contraloría General de la República del Bío



Bío, suscrito por Pablo Quezada Guanante, Mario Urrutia Sáez y María Soledad Mendoza Schmlin, dirigido precisamente a la jefa de Unidad de Control Externo dicha entidad Fiscalizadora, que se adjunta al Oficio N° 6359, de 24 de julio de 2019 remitido por el Contralor Regional del Bío Bío a la Fiscalía del Ministerio Público (**Prueba Documental N°29**), en el cual se concluye que se constató la existencia de 129 cheques girados y cobrados por las personas que se indican, por un total de \$412.024.825, entre los meses de octubre de 2017 y marzo de 2019; en cuya Minuta se contempla el Anexo 1 en el cual los fiscalizadores, además, especifican las cuentas corrientes de la Municipalidad de Talcahuano en contra de las cuales se giraron los cheques, el número de tales documentos y los montos respecto de cada una de las cuentas, a saber: Fondos Proyect APS cuenta corriente N°52709052004, cantidad 16 cheques, monto \$43.424.607; Aporte Municipal, cuenta corriente N°52709052161, cantidad 111 cheques, monto \$361.641.479; Prog De Resol. A Prim, cuenta corriente N° 52709052187, cantidad 1 cheque, monto \$2.972.239; Remuneraciones, cuenta corriente N° 52709052179, cantidad 1 cheque, monto \$3.986.500. Totales, cantidad 129 cheques, monto \$412.024.825; cuentas corrientes que pertenecen a la Municipalidad de Talcahuano, conforme queda corroborado con el mérito del **Oficio 0491, de 8 de enero de 2015 de la Contraloría General de la República**, en el cual se singularizan 13 cuentas corrientes bancarias bipersonales, entre las que se encuentran las cuatro cuentas señaladas (**Prueba Documental N°38**).

Antecedentes que en definitiva se consignaron en el Informe Final N° 315 de 17 de diciembre de 2019 de la Unidad de Control Interno de la Contraloría Regional del Bío Bío, que fuera remitido junto a sus anexos a la Fiscal Regional del Bío Bio, por medio del Oficio N° 10.233, de 17 de diciembre de 2019 (**Prueba Documental 89**); y cuyo informe, por lo demás está en consonancia con el Pre Informe de Observaciones de la misma Contraloría, debidamente incorporado (**Prueba Documental N° 77**), y a los cuales ya se ha hecho referencia.

VIGÉSIMO SEXTO: Que desde ya ha de señalarse que para los efectos de los hechos materia de la acusación y de las responsabilidades imputadas a los acusados, es del todo necesario establecer las funciones y obligaciones que tenían los encartados, que a la época de los hechos se desempeñaban como funcionarios de la municipalidad de Talcahuano, y especialmente de Cabello Bustos y San Martín Pavez, a cuyo respecto se aportaron pruebas testimoniales y documentales, incluidos los dichos de los propios acusados, a partir de cuyos antecedentes también fue posible establecer las obligaciones de custodia de los caudales públicos que implicaba el desempeño de sus cargos, según se analizará; todo ello más allá de si existían o no manuales de procedimientos o perfiles de cargo, de si tenían o no póliza de fianza y si eran firma autorizada respecto de la documentación bancaria de la DAS de Talcahuano.



Que en cuanto a las funciones desempeñadas por los acusados Cabello Bustos, San Martín Pavez y Paredes Montoya en sus respectivos cargos en la Dirección de Salud Municipal de Talcahuano, ha de señalarse lo siguiente:

A) En relación a las funciones y obligaciones de Cabellos Bustos y San Martín Pavez:

1.- Conforme a los dichos de **Marianela del Pilar Chamorro Díaz, asesora jurídica de la jefatura de la Dirección de Administración de Salud Municipal de Talcahuano**, Cabello Bustos se desempeñaba como jefe de finanzas, quien llegó al parecer el año 2013, porque años antes había trabajado como funcionario del departamento de finanzas, pero por motivos laborales se trasladó a otra región y volvió a fines del 2012 o el 2013 al cargo de jefe de Finanzas; indicando que las principales funciones del jefe de finanzas eran encargarse de todo el aspecto de pago de obligaciones que se van generando en las compras de bienes y servicios, de todo el pago que implica el funcionamiento del recurso humano, el pago de remuneraciones, de las previsiones, y pago de los honorarios, pues hay una cantidad de recurso humano vinculado por honorarios; todo lo que es pago proveedores pasaba por ese departamento; que dentro de las funciones del jefe finanzas estaba la elaboración técnica del presupuesto, que es una herramienta de gestión, que incluye los supuestos ingresos que se van a tener para el año siguiente, se proyectan los ingresos, que los hay por vía per cápita, que es la forma como el Estado entrega dinero para desarrollar la atención primaria, esto es les pagan por cada persona inscrita en los centros de salud, dineros que ingresan mensualmente; y aparte de esos dineros también manejan dineros que el municipio entrega como aporte municipal, y además una gran cantidad de dinero, vía convenios que hace el Ministerio de Salud; y debe de ver con cuánto dinero se va a contar, y también hay que ver cuánto son los gastos que se van a tener que afrontar, y ese global es el presupuesto; por lo que los fondos de la DAS eran cuantiosos, y si bien no maneja los montos, sabe que eran miles de millones de pesos, los cuales son fondos públicos, y el jefe de finanzas tenía un rol o especie de control interno de la función del DAS, pues por ejemplo si se está comprando mucho y no queda dinero, quien debía controlar eso era el jefe de finanzas.

2.- En cuanto a las funciones y responsabilidades asumidas por Cabello Bustos, también se cuenta con los dichos de la encargada de adquisiciones **Mónica Vera Cionti**, que al respecto indicó que Cabello era jefe de finanzas de la DAS, quien tenía las funciones propias de ese cargo en aquella época, las cuales están orientadas al manejo de la información contable y financiera, a emitir informes, a supervisar todo lo que tiene que ver con los movimientos de los fondos públicos, a la firma de documentación que autoriza estos movimientos, por ejemplo a firmar disponibilidad presupuestaria, firmar orden



de egreso, y emitir informes que le fuese solicitado en términos contables y financieros, y entiende que en la práctica lo que se ve es eso, firma documentos, avala movimientos presupuestarios, es responsable del manejo, el control y cuidado de los fondos públicos.

3.- Que en torno a las funciones que desempeñaba Cabello Bustos, también se refirió otro funcionario de la DAS, el **testigo Manuel Andrés Rojas Ramírez**, quien si bien a la fecha de ocurrencia de los hechos no trabajaba en el departamento de finanzas propiamente tal, pues estaba en el departamento de Adquisiciones, sí desempeñó funciones en el departamento de Finanzas hasta el año 2014, alcanzando a tener como jefe al referido Cabello Bustos uno o dos años, como lo especificó en su declaración, precisando que en esa época su jefe tenía como función llevar el control del departamento, llevaba el control de todas las cuentas, dando cuenta que el jefe de finanzas firmaba el certificado de disponibilidad presupuestaria, y como subrogante doña Nubia San Martín; testigo que también dio cuenta de la circunstancia que dentro de las DAS Alejandro Cabello y Nubia San Martín tenían las claves de acceso a las cuentas del Banco Estado que permitían hacer movimientos, como también sabe que ellos también manejaban el pinpass.

4.- El testigo Mario Urrutia Sáez, producto de las labores de fiscalización desarrolladas al interior de la DAS, también dio cuenta de las labores que al acusado Cabello Bustos le correspondía realizar, mencionado que dentro de un departamento de finanzas en una municipalidad, el responsable máximo de ingresar las deudas a la cuenta 215 - que explicó que es la cuenta presupuestaria de la municipalidad en la cual se ingresan las deudas por las compras de bienes o servicios a que se obliga dicha entidad- es el jefe de finanzas, aunque lo más seguro es que exista personal bajo su dependencia que debería tener asignada la función de ir registrando contablemente las facturas que van ingresando por las compras de bienes o servicios, y que en este caso dichas funciones, los devengos o deudas los estaba haciendo Nubia San Martín; agregando que Alejandro Cabello era el encargado de firmar el certificado de disponibilidad presupuestaria - en torno al cual explicó que es un certificado que da cuenta que la Dirección de Salud Municipal cuenta con los fondos para poder adquirir un producto determinado, por lo que puede respaldar el pago de la adquisición -, por su rol de jefe de finanzas y por ser el encargado de velar por el control presupuestario de los servicios a su cargo y del cumplimiento del presupuesto asignado a la DAS.

5.- Conforme a los dichos de la asesoría jurídica **Chamorro Díaz**, la señora Nubia San Martín en genérico ejecuta materialmente las instrucciones de su jefatura, pago a proveedores, y debía chequear que la documentación que llega a su manos esté conforme y sea consistente para dar lugar al pago; que sus funciones en concreto, eran el pago a proveedores y pago de servicios, y



manejaba la caja chica de la DAS, una pequeña cantidad de dinero que se entregaba para gastos menores, como pago de cartas de correos, ella giraba los cheques, tenía firma autorizada y tenía póliza de fianza, tenía autorizada una firma en el banco, era firma titular de las cuentas corrientes del DAS; haciendo hincapié que para otorgar estas funciones específicas a un funcionario, dentro el DAS la señora Nubia era la de mayor antigüedad y de conocimiento histórico de todos los procesos que se llevaban en el departamento, y en la administración pública en general va generando una mayor comprensión, y por ello son lo que van ascendiendo de las responsabilidades donde están insertos, y de hecho era la subrogante.

Que por lo demás Nubia San Martín era firma autorizada, como lo señalan diversos testigos, como **Estefanía Karolina Estrada Rivas, y Priscila Muñoz Candia**, precisando esta última, que eran firma autorizadas Nubia San Martín y Manuel Rojas, y que se manejaban talonarios con cheques en blanco, lo que ocurría mucho cuando Manuel Rojas estaba de vacaciones, y cuando se requería pago, que la firma en blanco era la de Rojas, agregando Muñoz Candia que Nubia San Martín incluso podía manejar el dispositivo digipass cuando Alejandro Cabello no estaba.

6.- Antecedentes que son concordantes con los aportados por el propio **Manuel Rojas Ramírez**, quien señala que él asume como firma autorizada de cuentas de la Municipalidad a fines del 2012 o principios del 2013, como firma suplente, rol que desempeño hasta principios del año 2019, y que desde el año 2017 en adelante las firmas autorizadas eran la señora Nubia San Martín y él, que fue el único período en que habían dos firmas autorizadas, porque antes habían 3 firmas, explicando que ser firma autorizada de la DAS implicaba que era la firma de los cheques, precisando que el cheque tenía que llevar dos firmas, que la gran mayoría de los caso él era el primero que firmaba los cheques y después se los enviaba de vuelta a Nubia San Martín, quien ponía la segunda firma, y completaba el proceso, y se entregaba al proveedor; testigo que, según lo indicado en líneas anteriores, reconoció que también firmaba cheques en blanco, indicando al respecto que él cometió el error de firmar documentos en blanco en algún momento, se lo pedían en casos urgentes, que la primera vez se lo pidió Cabello cuando estaba de vacaciones, como el 2016 o 2017, pero después se lo pedía la señora Nubia, que siempre fueron de poca cantidad, casos de emergencia, pago servicios básicos o algún proveedor que estaba a punto de cortar el suministro, que él creía y de buena fe y confianza firmaba, que los documentos en blanco, él era el primero en firmar; agregando que a veces firmó cheques que venían con el nombre de beneficiaria Nubia San Martín, dado que ella era la encargada de la caja chica, pero que eran cheques por sumas chicas que fluctuaban en los 3 UTM.



7.- En relación a las funciones y responsabilidades de San Martín Pavez, también se refirió la testigo **Mónica Vera Cionti**, manifestando que una buena parte de lo que correspondía a finanzas o la unidad, Nubia lo manejaba a criterio personal, explicando al respecto que podían mandar una nómina para pago y ella discriminaba a qué proveedor pagaba y a cuál no, y con qué oportunidad podía generar pago, que de hecho ella podía determinar a qué proveedor pagaba, en qué oportunidad y con qué preferencia pagaba, señalando la testigo que estima que ello no debía ser, pero no sabe si recibía instrucciones de Cabello o tomaba sus propias decisiones; que podría decir que Nubia era una funcionaria muy empoderada en el cargo, desconociendo si tenía atribuciones cedidas por alguna jefatura, pero en los hechos la veía tomando decisiones en el ejercicio de su función, porque podía tomar arbitrariamente decisiones de pago a un proveedor.

8.- Que además, en cuanto a las funciones de los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez, se acompañó la **Prueba Documental 76**, consistente en el **Oficio N°539, de fecha 25 de septiembre de 2019, por medio del cual la Directora (R) de la DAS de Talcahuano**, Marcela Breve Henríquez, adjunta el Memorándum de la Jefa del Departamento de Recurso Humanos de dicha Dirección, en la que se da cuenta que no existe un documento formal y oficial de la DAS que posee ese departamento, en el que conste la descripción de cargos de los funcionarios de esta administración, pero que dada la realidad y necesidad de contar con dicha herramienta, el nuevo Director apenas asumió el cargo en enero de 2017 anunció que se trabajaría dicho tema de manera prioritaria, por lo que en una primera etapa el Director solicitó información a todos los departamentos y compartió algunos avances con la suscrita; adjuntándose el avance que recibió respecto de los funcionarios Cabello Bustos y San Martín Pavez.

Al respecto, se acompañó una Descripción de Desempeño respecto del cargo de Jefe de Finanzas, cuyo funcionario responsable es Alejandro Cabello Bustos, que da cuenta de las siguientes funciones específicas: Controlar presupuesto, asesora en el cumplimiento de las funciones de administrar presupuesto y convenios, confeccionar centros de costos, proponer y confeccionar presupuesto Anual; velar por la entrega de información al Servicio de Salud Talcahuano, por convenio previamente establecidos, supervisa y se encarga de las transferencias entre cuentas corrientes; elaboración de ingresos presupuestarios y de convenios, velar correcto funcionamiento del presupuesto de la Dirección de Salud Municipal; estimar gastos para direccionar de mejor manera el cumplimiento del presupuesto; evaluar periódicamente los procedimientos contables y financieros; trabajar coordinadamente con otros departamentos de la dirección de salud.

Asimismo, se acompañó la Descripción de Desempeño en relación a la encargada de Presupuesto, doña Nubia San Martín Pavez, que refiere las



siguientes funciones específicas: Ingreso de registros contables, revisión de documentación respaldante para pagos; Registro de obligación, devengamiento y ajustes contables; encargada de caja chica de la Administración y de los Cesfam, registro de ingreso de recaudación de los Cesfam; circulación de deudas de Proveedores; pagos a proveedores; responsabilidad de firma de documento fiscal; propuesta de modificación presupuestaria, análisis de ejecución presupuestaria, atención de proveedores; revisión del estado presupuestario; registro en información de consumos básicos; recopilación de información para la formulación del presupuesto; ingreso de deuda flotante; ingreso de presupuesto inicial, custodio de documentos de garantía.

Al respecto, debe señalarse que la referida descripción de cargo que le correspondía desempeñar al acusado Cabello Bustos como jefe de Finanzas de la DAS, se condicen plenamente con las indicadas en el artículo 27 letra b) de la Ley Orgánica de Municipalidades, respecto del Encargado de la Unidad de Administración Municipal, para quien, entre otras se señalan: Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos municipales; colaborar con la Planificación en la elaboración del presupuesto municipal; Visar los decretos de pago; llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la República imparta al respecto; controlar la gestión financiera de las empresas municipales; efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir cuentas a la Contraloría General de la República; recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan; funciones u obligaciones que no obstante estar descritas en relación al encargado de la unidad referida, aparecen del todo aplicables y son plenamente compatibles con las funciones del Jefe del Departamento de Finanzas de la DAS, quien en definitiva ha de cumplir las mismas labores, pero restringidas a dicha Dirección.

9.- De esta manera, conforme a los antecedentes precedentemente expuestos y documentación ya relacionada, ha quedado acreditado que el acusado Cabello Bustos se desempeñaba como jefe del departamento de finanzas de la DAS de Talcahuano, y como tal debía desempeñar las funciones propias de dicho cargo, como lo eran la elaboración técnica del presupuesto de dicha Dirección, todo lo relacionado con el pago de las distintas obligaciones que se generan por las compras de bienes y servicios, pago de remuneraciones, previsión del recurso humano; el encargado del registro contable de las facturas que van ingresando por las compras de bienes o servicios, el responsable máximo de ingresar todas las deudas a la cuenta presupuestaria respectiva de la Municipalidad, aun cuando materialmente esa función la delegue en otros funcionarios, que en el caso en concreto las cumplía Nubia San Martín, conforme lo estableció el fiscalizador Urrutia Sáez; también en su calidad de jefe de finanzas tenía un rol de control interno de la función de la DAS, en cuanto a



que no se estuviere comprando más de lo que se podía conforme al presupuesto, ello en atención a que conforme al señalado fiscalizador, por su rol de jefe de finanzas es el encargado de velar por el control presupuestario de los servicios a su cargo y del cumplimiento del presupuesto asignado a la DAS; tiene a su cargo el manejo de la información contable y financiera, emitir informes, supervisar todo lo que tiene que ver con los movimientos de los fondos públicos, la firma de documentación que autoriza estos movimientos, entre ellos firmar los certificados de disponibilidad presupuestaria, firmar orden de egreso, y emitir informes que le fuese solicitados en términos contables y financieros, y por su puesto era uno de los firmantes de las órdenes de pago, junto al Director.

Por su parte San Martín, que se desempeñaba como encargada de presupuesto o administrativa contable, tenía a su cargo el pago a proveedores, debía chequear que la documentación respectiva para proceder al pago estuviere conforme, también a cargo del pago de servicios, manejaba la caja chica de la DAS, una pequeña cantidad de dinero que se entregaba para gastos menores, y claramente una de sus principales funciones era la firma de cheques con los que se pagaba a los proveedores, como también firmaba, en calidad de subrogante, los certificados de disponibilidad presupuestaria en los casos que no estaba el jefe de finanzas Cabello Bustos, según dio cuenta Rojas Ramírez, quien también dio cuenta que Nubia San Martín estaba a cargo de la cuenta de presupuesto, el pago de lo que no estaba en convenios DAS, que lo común era el pago de Laboratorios, servicios básicos, luz, agua, combustible de vehículos, mantención del inmueble y la mayor cantidad de rubros que hay en la DAS; como también dio cuenta que la referida Nubia San Martín tenía a su cargo la caja chica y los estipendios que cancelaba mensualmente, explicando que estos últimos eran pagos en efectivo que se hacían a los cuidadores de las personas postradas o enfermas, a quienes se les pagaba \$20.000 en efectivo a cada uno, motivo este por el cual se le giraban a la señora Nubia cheques mensuales, aunque por montos bajos, máximo 15 UTM entre todas las cajas chicas, que eran una por cada centro de salud más el DAS; y conforme al fiscalizador Urrutia Sáez, también se pudo establecer que la acusada San Martín Sáez registraba y manejaba en parte las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de la DAS, emitía los decretos de pago, y al emitir los decretos de pago hacía la contabilización del cierre de las cuentas por pagar, y era firma autorizada para firmar cheques de la DAS, junto a Manuel Rojas Ramírez, según lo ya analizado y documentación ya referida en motivos anteriores. Por lo demás, dentro de las conclusiones arribadas en el informe N° 315 de la Contraloría General de la República, se contempla la falta de segregación de funciones al interior de la DAS, verificándose por los fiscalizadores de dicho ente contralor, que Nubia San Martín Pavez efectuaba labores relacionadas con la contabilización de ingresos y egresos, firmaba los cheques como giradora de las cuentas corrientes de la entidad, llevaba el manejo extracontable de la disponibilidad de los fondos de la



cuenta corriente principal de la entidad, la N° 527-0-905216-1 del Banco Estado, y tenía además asignada la administración de la caja chica, como se acredita por los dichos de diversos funcionarios de la DAS que se refirieron al respecto, y además por medio de las **Resoluciones Exentas Nros 321, 19-F y 515, de fechas 24 de julio de 2017, 15 de enero de 2019 y 24 de julio de 2019**, respectivamente, emanadas del Director de la DAS de Talcahuano (**Prueba Documental Nros. 39, 40, 41**), por medio de las cuales se autoriza la asignación de fondos para gastos menores financiados con caja chica, a los funcionarios que allí se indican, que para el caso de las DAS, corresponde a Nubia San Martín Pavez, por la cantidad de 3 UTM para el año 2017, y de 2,5 UTM para los años 2018 y 2019, sumas que deben ser rendidas mensualmente.

Por lo demás, también quedó establecido que el que firmaba el certificado de disponibilidad presupuestaria era el acusado Cabello Bustos, y que cuando no estaba él, lo firmaba la encartada San Martín Pavez, lo cual estaba completamente asumido como funciones dentro del accionar del departamento de finanzas, como lo pudo establecer el funcionario policial Valenzuela Ortiz, quien refirió que el certificado de disponibilidad presupuestaria no lo generaba Finanzas como tal, sino que era una hoja que hacía Abastecimiento que enviaba a Finanzas, para que ésta consignara si había o no disponibilidad, si estaban o no los recursos para la compra de bienes o servicios; y que el mismo señor Cabello Bustos, como jefe de finanzas, le declaró que él era el único que firmaba este documento, y que en su ausencia lo podía firmar la señora Nubia, misma información que le dio otro testigo, quien además le dijo que si no estaba Nubia, firmaba Claudia Araya.

B) En cuanto a las funciones y obligaciones de Pedro Paredes Montoya:

1.- Conforme a los dichos de la tantas veces citada asesora jurídica **Chamorro Díaz**, el señor Paredes Montoya a la época de los hechos estaba encargado de Proyectos, no tenía un cargo específico, y nunca supo qué hacía el encargado de Proyectos, pero por el título, supone que hacía y ejecutaba proyectos, pero trabajaba en otras dependencias físicas, por lo que desde que fue nombrado no lo volvió a ver, y se entendía directamente con la jefatura; que a la época que llega Contraloría a la DAS, Paredes físicamente ya no estaba en el edificio del DAS, sino que en un edificio a unos 50 metros, habiendo asumido como encargado de Proyectos en una fecha que no recuerda, pero entre el 2012 y 2013; agregando que Paredes Montoya era el jefe de finanzas antes que asumiera Cabello Bustos.

2.- Que en relación a Pedro Paredes, se reafirma su pertenencia a la Dirección de Salud Municipal de Talcahuano, con los dichos de la funcionaria **Mónica Vera Cionti**, que al respecto manifestó que aquél llegó a trabajar a la DAS como el año 2007, a cubrir cargo de jefe de finanzas de la DAS, bajo otra



jefatura, y trabajó en el departamento de finanzas, y cuando ella vuelve a trabajar a la DAS el año 2017, Paredes había sido cambiado a otro puesto, lo cual se condice con lo indicado por la testigo **Chamorro Díaz**, en orden a que Paredes había sido jefe de finanzas, quien al parecer fue contratado a fines de la administración de Leocan Portus, y era ingeniero comercial y seguramente fue contratado en ese cargo por la experticia que manifestó en entrevistas, pero no sabe las razones por las que dejó de desempeñar ese cargo; de lo cual también dio cuenta **Manuel Andrés Rojas Ramírez**, funcionario del departamento de Adquisiciones de la DAS entre los años 2009 al 2019, quien confirma que Paredes era el jefe de finanzas al año 2009, y como tal llevaba el control de las cuentas .

3.- En torno a las funciones que Paredes desempeñaba en la DAS, **la testigo Priscila Muñoz Candia** manifestó que si bien no sabe qué funciones específicas desarrollaba, porque trabajaba en otro edificio, indicó que él se encargaba de varios programas, agregando que antiguamente había sido jefe de finanzas, según se lo comentaron Nubia San Martín y Marcos Sánchez; pero que en el tiempo que ella estuvo trabajando en finanzas vio a Paredes ir a la oficina de Finanzas, que algunas veces revisaba algunas carpetas y preguntaba cosas específicas, pero que no siempre iba a eso, sino que cuando le asignaban algún trabajo, y necesitaba información de proveedores, pero que no era que llegara con la autoridad de buscar documentos, sino que para cumplir con la labor que le habían encomendado.

4.- Todo ello corroborado por las indagaciones efectuadas por Valenzuela Ortiz, quien sobre el punto indicó que desconoce las funciones que cumplía Paredes Montoya en la DAS, pues sólo tomó conocimiento por la base de datos de la DAS que era un funcionario que cumplía labores en un edificio anexo, donde funcionaba la unidad de Obras, y al parecer estaba encargado de proyectos del servicio, según se le comentó; agregando que tiene entendido que Paredes había trabajado en años anteriores en el departamento de finanzas, pero no en el periodo investigado de octubre de 2017 a marzo de 2019, quien no aparece en ninguna de las etapas del proceso de pago a proveedores, que no estaba encargado de las etapas que se hacían en el departamento de abastecimiento y que sólo apareció cobrando cheques a su nombre.

5.- Que sin perjuicio de lo señalado precedentemente, por **Oficio 583, de 14 de octubre de 2021, del Jefe (S) del Departamento de Salud, Juan Torres Vargas**, se pudo contar con el perfil del cargo de Paredes Montoya, contenido en un memorándum adjunto, el cual señala que como Encargado de Inversiones y Proyectos de la DAS de Talcahuano, debía: asesorar técnicamente al Jefe DAS, crear un plan Operativo de Inversión comunal anual, conformar y planificar un plan de trabajo del Comité de Inversiones Comunal, crear un banco de proyectos de pre inversión a nivel comunal; velar por fuentes de



financiamiento y postulación de los proyectos a través de SECPLAN y del Servicio de Salud Talcahuano, velar por la ejecución de los proyectos financiados.

6.- Así, el acusado Paredes Montoya cumplía labores como encargado de proyectos de la Municipalidad en torno a cuyas funciones específicas los testigos no tienen mayores antecedentes, más allá de que era el encargado de desarrollar algunos programas o proyectos, y por lo mismo ningún testigo lo sitúa cumpliendo labores en el departamento de finanzas de la DAS; sin perjuicio que en algunas oportunidades se le vio en estas últimas dependencias revisando algunas carpetas y preguntando cosas cuando se le asignaba algún trabajo o necesitaba información de algún proveedor, como lo afirmó Candia Muñoz; pero sí se estableció fehacientemente que antes que Cabello Bustos fuera el jefe del departamento de finanzas, dicho cargo fue desempeñado por Paredes Montoya, como por lo demás lo reconoce expresamente el propio acusado, al afirmar que él se desempeñó como jefe de Finanzas del Departamento de Salud de la Municipalidad de Talcahuano entre los años 2005 y 2010, y que entre el año 2010 y el 2020, se desempeñó como jefe de Proyectos en la referida municipalidad.

C) Que a mayor abundamiento, y no obstante la ausencia de reglamentos, manuales o instructivos escritos en torno a las funciones que debían desempeñar los distintos funcionarios de la DAS, lo cierto es que ha quedado totalmente establecido que cada uno de los funcionarios, y particularmente los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez tenían total claridad acerca de sus funciones y obligaciones específicas en el departamento de finanzas, y nunca manifestaron dudas en torno a las mismas; habiéndose igualmente establecido la existencia de procesos de inducción a la llegada de los funcionarios a las distintas reparticiones de la DAS, y en especial del departamento de Finanzas. En efecto:

1.- Al respecto debe tenerse presente que la asesora jurídica **Marianela Chamorro Díaz**, fue enfática en señalar que en ese tiempo dentro de la DAS, se actuaba en base a una costumbre, por lo que todos los funcionarios sabían lo que tenían que hacer, ello aunque no hubiere un manual, un documento físico en el que se describieran o pudieran leer sus funciones; pero que en todo caso las obligaciones funcionarias están definidas en los estatutos administrativos, que es parte del derecho público, donde están las obligaciones a que están sujetos los funcionarios; reiterando que no estaban escrituradas una a una las funciones que debía desarrollar algún funcionario en la DAS, como tampoco estaban descritas las funciones del médico o de la enfermera, y que en su informe Contraloría dispuso que debían escriturarse en un protocolo una a una las acciones, lo cual se hizo, pero que ello no significa que las acciones no estaban claras para cada uno, porque cuando se entra a trabajar, se le indican las funciones de cada uno; pues hay un procedimiento en recursos humanos que se



llama inducción al cargo, es decir cuando contratan a una persona, lo llevan a conocer las dependencias, le presentan los compañeros de trabajo, y le van explicando una a una las funciones que debe acometer día a día, las inducciones son verbales, y si se tiene que trabajar con alguna maquinaria, se explica dónde está el manual de la maquina; que por los 25 años que lleva trabajando ahí, puede dar fe, y ha visto que al que llega se le explica lo que tiene que hacer, y si bien no podría decir si el Director que era médico le explicó a Paredes lo que tenía que hacer con el presupuesto y los proveedores, asume que lo contrató porque sabía y le explicó genéricamente el procedimiento de la oficina; y si bien desconoce si quedó por escrito esa inducción, actualmente hay reglamento interno en la DAS desde el año 2019 en adelante; agregando que Cabello Bustos y Nubia San Martín, jamás comentaron no tener claro o tener dudas acerca de las funciones de su cargo, siempre tenían claro lo que tenían que hacer; y en el caso de la señora Nubia trabajaba en la DAS desde antes que llegara ella en el 1997, pues la señora Nubia venía desde 1980 cuando estaba como sistema comunal de salud y educación.

Claridad de las funciones que debían de desempeñar los funcionarios de la DAS, que se encuentra ratificada por los dichos del fiscalizador **Mario Urrutia Sáez**, quien al respecto manifestó que si bien en la DAS no había un reglamento interno donde se indicaran fehacientemente las funciones del personal, en la práctica funcionaban, sin estar formalizados, una serie de procesos que se venían dando, por lo que la gente conocía sus labores.

2.- Lo anterior guarda total concordancia con lo señalado por la testigo **Priscila Muñoz Candia**, quien inicialmente se desempeñó dos meses como alumna en práctica en el departamento de finanzas de la Dirección de Salud Municipal de Talcahuano, desde enero de 2018, para posteriormente ser contratada para realizar algunos reemplazos de funcionarios ausentes, quien al respecto indicó que nunca tuvo acceso a un manual del proceso de pago, pero al ingresar a hacer su práctica, entre don Alejandro Cabello y doña Nubia San Martín le indicaron cuáles iban a ser sus funciones, que tenía que hacer todo lo que le asignaban la señora Nubia y don Alejandro y tenía que cumplir los roles de quienes estaban con licencia; incluso más, indicó que la señora Nubia le enseñó muchas cosas, que era su tutora en todos los aspectos; que al ingresar a hacer su práctica le asignaron labores de apoyar en todo lo que se le solicitare, ver proveedores, el orden de los documentos y que el 90% de las cosas que tenía que hacer, se los decía la señora Nubia; lo cual se ve refrendado por el testigo **Manuel Rojas Ramírez**, quien sobre el punto manifestó que cuando él ingresó al departamento de finanzas, y de palabra y de manera informal, don Pedro Paredes le dio a conocer sus funciones, lo cual era la tónica en los departamentos en que estuvo, precisando que cuando él estuvo en el departamento de finanzas tenía clara sus funciones, agregando que rara vez se generó algún conflicto respecto a las funciones de cada uno; habiendo señalado



que él formó parte del departamento de finanzas hasta el año 2014, fecha en que lo trasladaron al departamento de Bienestar que fue creado en ese año.

Que es del caso que todos los antecedentes precedentemente expuestos se condicen plenamente con los recopilados por el comisario de la Bridec, **Valenzuela Ortiz**, quien tuvo a cargo la investigación en cuestión, y en tal calidad le tomó declaración a la mayor parte de los funcionarios de la DAS, tales como Manuel Rojas, Marcos Sánchez, Marianela Chamorro, Priscila Muñoz, Juan Torres, incluidos los acusados, por lo cual está en condiciones de dar cuenta de las funciones que desarrollaban al interior de dicha dirección de salud; quien al respecto manifestó que por lo que señalaron los testigos, entiende que no habrían manuales de procedimientos, pero en la práctica sin estar formalizado había una serie de procesos que se venían dando y que la gente conocía sus labores, por cuanto los testigos entrevistados, estaban muy claros con los procedimientos, y como proceder en cada una de las situaciones en que estaban, y así se lo indicó Priscila Muñoz, en orden a que a ella todo se lo había enseñado la señora Nubia; y también lo señala Manuel Rojas, quien le afirmó que en una primera instancia o paso por finanzas, se le enseñó como proceder, y posteriormente en Bienestar, también se le enseñó, y que últimamente en el área de abastecimiento en que estaba, tenía muy claro cómo funcionaba su trabajo; agregando el funcionario que se estableció que Nubia le enseñaba todo a Priscila, que no existía duda de quién hacía qué; que en la oficina de Finanzas estaba muy claro, quien hacía las diferentes funciones, que los testigos hablan que el señor Sánchez se habría encargado de honorarios, Priscila Muñoz, se habrían encargado de boletas de garantía, y que por algún tiempo estuvo en proveedores, y la mayoría señala que la señora Nubia si bien era administrativa, estaba encargada de proveedores, gastos básicos, confección de cheques y las firmas de los cheques, y todos los entrevistados, señalaban lo mismo.

3.- Antecedentes sobre la existencia de una práctica de inducción al cargo, que también se ven corroborados por los dichos de la testigo **Mónica Alejandra Vera Cionti**, quien a la época de los hechos era la encargada de la unidad de Adquisiciones de la Dirección de Salud de Talcahuano, por cuanto afirmó que era funcionaria pública desde el año 1984 y que trabaja en la Dirección de Salud Municipal de Talcahuano desde su creación en el año 1990, lo cual pone de manifiesto el alto conocimiento que tiene en torno a los procesos y formas de trabajo al interior de dicha Dirección, como también de las funciones que desarrollaban los acusados San Martín, Paredes y Cabello; quien luego de explicar en detalle el proceso de adquisiciones y pasos que se han de cumplir, señaló que si bien al respecto no habían protocolos escriturados, existía un manual de adquisiciones, aunque no un manual de procesos, como flujos, como micro proceso, como el que existe en este momento; pero que antes de la creación de este manual de proceso, ella tenía claro lo que tenía que hacer en sus funciones, y todos los funcionarios que trabajan en la unidad, dando cuenta



de la existencia de un proceso de inducción de cada funcionario que ingresa a la unidad, la cual era realizada por sus pares; precisando que cuando ella ingresó el 2017, existía un jefe de adquisiciones o abastecimiento, y también habían varios funcionarios, que son los funcionarios administrativos y un químico farmacéutico a cargo de compras de farmacia y por lo tanto todos los que trabajaban en el departamento son los encargados de explicar los procesos que se llevaban a cabo en la oficina; reiterando que dentro de la DAS, las inducciones por los propios pares era una práctica.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que en torno a las funciones y responsabilidades de los acusados al interior del Departamento de la Dirección de Administración de Salud, como igualmente en torno a los procesos y funcionamiento interno de la misma, particularmente en cuanto a las compras y pagos respectivos, cobran importancia los antecedentes aportados por **Valenzuela Ortiz**, funcionario de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI que estuvo a cargo de toda la investigación en sede penal que le fuera encargada por la Fiscalía, y que por lo mismo recopiló importantes antecedentes con ocasión de las pruebas incautadas y la toma de declaraciones a funcionarios de la DAS y a los propios acusados, y particularmente lo concerniente al proceso que debía llevarse adelante para la adquisición de bienes o contratación de servicios para la DAS hasta su debido pago a los proveedores respectivos; aspectos estos últimos en torno a los cuales se contó además con los dichos de la testigo **Priscila Muñoz Candia**, quien, según lo ya dicho, se desempeñó como alumna en práctica y luego como funcionaria en el departamento de Finanzas de la DAS.

1.- Así, **Valenzuela Ortiz**, señala que respecto a los procesos de pago, si bien no vio manuales o instrucciones escritas, llegó a la conclusión de cómo se realizaban con la información que les entregaron los mismos trabajadores de la DAS, pudiendo entender como era el organigrama de la DAS y como era el proceso de compras y bienes y servicios y el pago de facturas, para lo cual tuvo en consideración, entre otros, lo señalado por la asesora Marianela Chamorro y Priscila Muñoz, que les explicaron las distintas áreas de la DAS, con lo que pudieron concretar el organigrama, en el que se distinguían 3 niveles: El primero, que lo componía el Director, Armando Domínguez; un segundo nivel, en el que estaban los Departamentos de Recursos Humanos, a cargo de Mónica Breve; de Finanzas, a cargo de Alejandro Cabello; de Abastecimiento, a cargo de Juan Garcés; y de Mantención, a cargo de Luigi Fregonara; que entre el director y estos departamentos, existía una asesora legal de la DAS, Marianela Chamorro; y debajo existían 5 subdepartamentos, que eran Servicios Generales, Proyectos e Infraestructura, Maquinaria y Equipos, Electricistas, y Equipamiento Clínico, cada uno con personal administrativo.

En cuanto al proceso de compras, **Valenzuela Ortiz** manifestó que todo empezaba cuando alguna de las entidades que tenían dependencia con la DAS,



como Cesfam, Cecosf o Posta, hacían una solicitud de bienes o servicios al departamento de Abastecimiento, solicitud que generalmente era a través de un requerimiento, un memo o correo electrónico, el que llegaba a Abastecimiento, donde se hacían dos cosas: Cuando llegaba el requerimiento se enviaba un certificado de disponibilidad presupuestaria a Finanzas, que era un papel, donde abastecimiento le preguntaba a finanzas si estaban los recursos para el pago de facturas de bienes o servicios, y Finanzas respondía si existían o no los recurso para dicho pago; y Abastecimiento también le pedía al departamento de Obra y Mantención, que viera la pertinencia de lo que se estaba solicitando, y Obra y Mantención le encargaba a alguno de sus sub departamentos la labor de revisar si era necesario o no lo que se solicitaba, y cuando se llegaba a la conclusión que sí era necesario, Obra y Mantención emitía una solicitud interna señalando la necesidad del bien o servicio, que enviaba a Abastecimiento, y con esos dos antecedentes, Abastecimiento le generaba una orden de compra al proveedor, el cual a su vez, generaba la factura y enviaba los productos o desarrollaba el servicio, y la factura era enviada nuevamente a Abastecimiento, y este departamento la hacía llegar a Finanzas, y adjuntaba un legajo completo de compra, con lo cual Finanzas lo ingresaba en su sistema y la devengaba para que posteriormente fuera pagada; agregando que conforme a los testigos el legajo de pago completo debía reunir la documentación que sería el respaldo de la factura y del pago que se enviaba a Finanzas, legajo que debería contener el memo, requerimiento o correo electrónico que hizo la entidad al principio de la cadena, la solicitud interna de Obras y Mantención, orden de compra interna, certificado de disponibilidad presupuestaria visado por Finanzas, la factura y la recepción conforme del bien o servicio prestado.

Señaló igualmente, que posteriormente Finanzas confeccionaba el decreto de pago, que debía contener las firmas del jefe de abastecimiento, jefe de finanzas y el del director de la DAS -aspecto en torno al cual en el transcurso de su declaración se rectificó, en orden a que el decreto de pago debía contener solo las firmas del jefe de finanzas y del director de la DAS-, y cuando se tenía todo eso se confeccionaba el cheque a mano, precisando que el pago se podía hacer por cheque o por transferencia, y que el cheque se podía pagar de dos formas: La primera, cuando el proveedor pasaba a buscar el cheque a la Dirección de Salud, caso en el cual en el mismo decreto de pago se consignaba el nombre, firma y cédula de identidad del proveedor, y también se consignaba en el decreto de qué cuenta salió, a que cuenta se cargaba el monto, el número del cheque. Y la segunda posibilidad de pago era que el cheque se depositara a la cuenta del proveedor, para lo cual generalmente se solicitaba a algún auxiliar de la DAS que concurriera al banco a hacer el deposito, y al hacerlo, quedaba el comprobante que se adjuntaba al decreto de pago, para tener el respaldo que el pago se había hecho al proveedor. Agregando que también se podía pagar por transferencia, pero eran los menos; y en cuanto a quién podía hacer



transferencia, la mayoría de los testigos decían que Abastecimiento podía hacer la transferencia o Recursos Humanos; algunos testigos señalaban a Cabello, pero la gente de la oficina de Finanzas no lo hacían, que Nubia, Sánchez o Priscila, no hacían transferencias.

Precisó que los pagos se hacen por medio de un decreto de pago, que es el acto administrativo que da fe de lo que se está pagando a una persona natural o jurídica es real, el cual debe ser emitido por la persona que está asignada para dicho proceso o función, y en el caso de la DAS de Talcahuano quien generaba el decreto de pago era Nubia San Martín, pues en la carátula del mismo van sus iniciales y visto bueno; que el decreto de pago ha de contener dos firmas, las del jefe del departamento de Finanzas de la DAS, que en el caso eran Alejandro Cabello o quien lo subrogue, que era Nubia San Martín; y el Director de la DAS, que era Armando Domínguez, o su subrogante Juan Garcés.

2.- Que lo anteriormente expuesto se ve corroborado por los dichos de **Candia Muñoz**, quien precisó que hizo la práctica en la DAS de Talcahuano por dos meses a contar de enero de 2018, y después que terminó dicha práctica la llamaron a una suplencia en julio de 2018 y estuvo hasta marzo de 2019 y después hizo otra suplencia y estuvo en definitiva en la DAS hasta como junio o julio de 2019, pues después vino el estallido social; indicando que tenía que hacer decretos de pago, realización de cheques, órdenes de documentos, tratar con proveedores, y que al ingresar a su práctica, entre Alejandro y Nubia, le indicaron cuáles eran sus funciones; de manera que la testigo en cuestión tuvo la oportunidad de trabajar durante un período que abarca parte del referido a los hechos investigados, realizando funciones de las que desempeñaba la acusada San Martín, y conociendo, por lo mismo, el proceso de pago de los proveedores, motivos por los cuales los antecedentes en torno al proceder y forma de llevar adelante dicho proceso de pago, es de primera fuente, como también en torno a una serie de otros aspectos a los que se harán referencia más adelante.

Así, indicó que para la confección de un decreto de pago tenía que venir con orden de compra, que viene desde el portal, por Chile compra o por trato directo, venir la factura, copia de la orden de compra y respaldos que sean necesarios para poder llevar a cabo el pago, detalle y descripción del producto que se está comprando, que el decreto de pago se supone se hacía después que la mercadería llegara o se realizaba la función si era mantenimiento, si ya estaba efectuada la compra se procedía al pago, y se realizaba un cheque o una transferencia; que el decreto de pago se hacía mediante el sistema que tenían en la DAS, llamado SMC o algo así; ella entraba con las claves de sus colegas, cualquiera de finanzas, y trabajaba mayormente con la clave de Marcos Sánchez, y cree que en un momento el 2019 se le generó a ella una clave; que en un decreto se sabe quién lo confeccionó porque sale el nombre del usuario que



imprimió o hizo el decreto; precisando que dentro de un legajo, lo primero que tenía que estar era la disponibilidad presupuestaria, o si no se podía hacer la compra o servicios, que Abastecimiento manda un monto de lo que necesitaban para comprar, lo se sube a Finanzas y Nubia o Alejandro veían en la cuenta si estaba el monto, y si estaba el monto se mandaba la disponibilidad presupuestaria a Abastecimiento y ellos procedían a hacer la compra; explicando que habían varias cuenta bancarias y dependía a quien se estaba asignando la compra, a Farmacia o Mantención, y como ellos - refiriéndose a Cabello y a San Martín- eran los únicos que tenían acceso al banco, eran los únicos que podían proceder a ver la disponibilidad presupuestaria, puesto que habían cuentas que estaba relacionadas a programas y cada cuenta tenía su chequera; que la cuenta terminada en 161 era una de las cuentas, "Aportes", y la mayoría de los fondos eran de la 161, que parece que tenía que ver con Proveedores, y la 004, que era Programas; agregando que al sistema para hacer el decreto, no recuerda mucho como lo hacía, pero dentro del decreto tenía que poner el número de cuenta con que había sido pagado, el número de cheque, si fue con transferencia, la cuenta de donde se había realizado el cheque, y las firmas del jefe de finanzas y del director; y la información de la cuenta y del número de cheque se ingresaba manualmente, y si el pago se realizaba con cheque o por transferencia se veía, porque si era por cheque se indicaba el cheque y la cuenta y si el pago era transferencia se ponía una "T", y el número de la transferencia; explicando que cualquiera de Finanzas podía llenar un cheque, pero no firmarlo; ella escribía el nombre del proveedor, la fecha y el monto a pagar, y para escribir el nombre del proveedor, miraba la factura para saber a nombre de quien se giraba, no se podía llenar factura con nombre distinto que no fuera el de la factura, pero habían empresas que tenían un nombre en la factura y después habían cambiado nombre y se llamaba a la empresa para hacer nombre actual de la empresa; que los que podían firmar el cheque eran la señora Nubia y Manuel Rojas, y casi siempre era la señora Nubia la que primero firmaba, porque estaban en la misma oficina, de ahí salían los cheques;

3.- Así, por medio de los dichos del funcionario policial y testigo referido ha quedado debidamente establecido el procedimiento de compra y de pago de los proveedores, y quienes intervenían en el mismo, particularmente quienes firmaban los decretos de pago, y quienes firmaban los respectivos cheques, como igualmente los pasos previos, como la existencia de un certificado de disponibilidad presupuestaria, el cargo de la compra de bienes o servicios a alguna cuenta bancaria determinada de la DAS de Talcahuano, y la constancia o certificación de haberse recibido los bienes o prestados los servicios, conjuntamente con la correspondiente factura, como el hecho que el decreto de pago se confeccionaba ingresando la información al Sistema Modular Contable de que disponía la DAS, para lo cual se debía contar con una clave, quedando



por lo mismo registrado el usuario que había ingresado la información, y la circunstancia que posteriormente, al momento del pago propiamente tal de la suma ordenada en el decreto, si se efectuaba con cheque, se debía llenar a mano el número de cheque y la cuenta con la cual se estaba pagando, y en el caso de ser una transferencia, se indicaba ello con una "T" ; cheque que también se llenaba a mano, por cualquier funcionario de finanzas, el cual se debía confeccionar a nombre del proveedor que figuraba en la factura, pero que sólo podían ser firmado por San Martín y Rojas.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que a partir de los elementos probatorios precedentemente expuestos y de algunas otras precisiones en torno a las funciones, obligaciones y responsabilidades de los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez también es posible determinar si tenían a su cargo fondos o caudales públicos, que es una de los supuestos en los que se sustentan las acusaciones fiscal y particular en relación a los delitos de malversación de caudales imputados.

Desde ya ha de señalarse que si bien el acusado Paredes Montoya a la época de los hechos, ostentaba la calidad de funcionario público, de conformidad a lo establecido en el artículo 260 del Código Penal, conforme a lo ya analizado en motivos anteriores, no existe discusión alguna de los intervinientes que aquél bajo ningún respecto tenía a su cargo caudales o efectos públicos, lo cual también se desprende claramente del conjunto de elementos probatorios aportados al juicio, que dan cuenta que ni siquiera trabajaba en el departamento de Finanzas de la DAS, y que por el contrario, laboraba como encargado de Proyectos de dicha Dirección, ni tenía injerencia alguna ni en los procesos de compra de bienes y servicios ni en los proceso de pago de los mismos, como lo señalaron expresamente diversos testigos, entre ellos Urrutia Sáez, quien indicó al respecto que si bien desconoce las funciones que Paredes Montoya cumplía en la DAS, pues sólo tomó conocimiento por la base de datos de la DAS que era un funcionario que cumplía labores en un edificio anexo, donde funcionaba la unidad de obras, y al parecer estaba encargado de proyectos del servicio, según se le comentó; tiene entendido que Paredes había trabajado en años anteriores en el departamento de finanzas, pero no en el periodo investigado de octubre de 2017 a marzo de 2019, el cual no aparece en ninguna de las etapas del proceso de pago a proveedores, y tampoco estaba encargado de las etapas que se hacían en el departamento de abastecimiento y que sólo apareció cobrando cheques a su nombre; todo ello sin perjuicio del conocimiento que tenía de dichos procesos, atendido que con anterioridad había desempeñado precisamente el cargo de jefe del departamento de finanzas, situación que más adelante se analizará.

Por el contrario, hay que considerar una serie de testimonios, antecedentes documentales y situaciones fácticas que ponen de manifiesto que



los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez sí tenían caudales o efectos públicos a su cargo, ello sin perjuicio que pueda sostenerse que no existe ningún decreto, reglamento, o acto administrativo que formalmente le entregue el cuidado de los mismos. Al respecto debe considerarse los siguientes antecedentes aportados durante el juicio:

1.- Conforme a los dichos de investigador **Valenzuela Ortiz**, el certificado de disponibilidad presupuestaria lo firma Alejandro Cabello, como jefe de finanzas, por ser el encargado de velar por el control presupuestario de los servicios a su cargo y en cumplimiento del presupuesto asignado a la DAS, el cual, como tal, era, además, el encargado de realizar el presupuesto anual, por lo que debe velar que cuando se adquiriera un bien exista disponibilidad presupuestaria para adquirirlo, esto es, que cuenta con los fondos para la compra, debiendo velar por la correcta administración del presupuesto; agregando que los fondos de que dispone el Departamento de Salud están a su cargo, y quien debe velar por los mismos y la forma de administrarlos, es el jefe de finanzas.

2.- Conforme al fiscalizador de la Contraloría Regional de la República, **Urrutia Sáez**, los fondos de que dispone dicha Dirección están a cargo del Jefe de Finanzas y debe velar por los mismos; que el señor Cabello es el que administra toda la parte financiera del departamento de salud, está a cargo de la ejecución presupuestaria del servicio, y como tal debe velar por el pago oportuno de las remuneraciones y todo lo relacionado con el pago a proveedores; agregando que en el departamento de finanzas de la DAS, el jefe de finanzas tenía acceso a la información relativa a los fondos disponibles de dicha Dirección; indicando que si bien formalmente no estaban a cargo del señor Cabello la custodia de los fondos de la DAS, desde el momento que está firmando el decreto de pago está sumiendo la función de custodia de dichos fondos públicos, misma función que cumple el Director del Departamento de Salud.

Fiscalizador que también detalló el proceso de pago propiamente tal, explicando que cada vez que se recibe una factura por una compra de un bien o servicio, se debe registrar, contabilizar en la cuenta de gasto, que es una cuenta por pagar, por lo que cuando se habla de deudas, todas deben estar en las cuentas por pagar a terceros, que presupuestariamente comienzan con los dígitos 215; y dentro de un departamento de Finanzas en una municipalidad, el responsable máximo de ingresar las deudas a la cuenta 215 es el jefe de finanzas, sin perjuicio que exista personal bajo su dependencia que tenga asignada la función de ir registrando contablemente las facturas, que en el caso de la DAS de Talcahuano estaba haciendo los devengos o deudas Nubia San Martín.



3.- También se cuenta con los dichos de la encargada **de adquisiciones, Mónica Vera Cionti**, quien indicó que si bien Alejandro Cabello no tenía firma de apoderado de cuenta, por lo que no firmaba cheques, sí manejaba digipass, lo que le consta porque en ocasiones en que ella acudía a su oficina, a pedir firma de documentación como un certificado disponibilidad presupuestaria o para pedir el pago a algún proveedor, él estaba en la página del banco haciendo pagos, o pagaba cuando uno le solicitaba que hiciera un pago "X" para liberar algún pedido, por lo que lo vio haciendo transacción con digipass, y ella solicitaba pago de proveedores, aunque no pagaba en ese momento lo que le solicitaba pero sí hacía pagos; lo cual se condice con los antecedentes entregados por la testigo **Priscila Muñoz Candia**, quien realizó su práctica profesional en el departamento de finanzas de la DAS por algunos meses, y que por lo mimos estuvo en condiciones de observar directamente la forma de trabajo al interior de dicha repartición, más aún si su principal apoyo era la acusada Nubia San Martín, con quien se desempeñaba físicamente en la misma oficina; testigo que sobre el punto manifestó que el acusado Alejandro Cabello y Carolina Sáez tenían clave para acceder a las cuentas del banco de la DAS, y que Cabello y Nubia San Martín manejaban el digipass, no recordando bien si se guardaba en la oficina de Cabello o de Carolina Sáez; corroborado también con los asertos del propio **Manuel Rojas Ramírez** que dio cuenta que Nubia San Martín con Alejandro Cabello, tenían claves de acceso a las cuentas del Banco Estado de la Municipalidad, que les permitían hacer movimientos, y también manejaban el pinpass.

4.- Que en relación a la acusada Nubia San Martín, **el testigo Urrutia Sáez** manifestó que ella era funcionaria que llevaba más tiempo en la DAS, desde antes del año 2014, que registraba, manejaba en parte las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de la DAS, emitía los decretos de pago, y era firma autorizada para girar cheques de la DAS, y al emitir un decreto de pago hacía la contabilización del cierre de las cuentas por pagar; agregando que para obtener un decreto de pago hay que ingresar la información al Sistema Modular Computacional (SMC), donde se llenan los campos y luego se imprime el decreto de pago, y que dentro de las personas que tenían acceso de usuario para hacerlo, al menos en los decretos que tuvo a la vista, estaba la señora Nubia San Martín, la cual aparecía como usuario, precisando que si bien no tiene constancia dónde estaba regulada esa obligación, sí la estaba realizando, porque en los decretos de pago estaba su inicial y V°B°; funcionaria San Martín Pavez que también tenía asignada formalmente la caja chica o fondos fijos para gastos menores del departamento; ello conforme a lo ya establecido en líneas anteriores y debidamente corroborado con prueba documental.

Que el referido fiscalizador aseveró que San Martín era una de las firmas autorizadas para girar cheques, como también era firma autorizada el funcionario Manuel Rojas, quien en el 2018 y 2019 cumplía funciones en la



unidad de Abastecimiento; a cuyo respecto estima que dado que estaba trabajando en la señalada unidad, no cree que estuviere haciendo custodia de cheques, y era solamente firma autorizada; agregando que la custodia de los talonarios de cheques cuando estaban en blanco los tenía la señora Nubia en la caja fuerte de su oficina, aunque desconoce de dónde emanaba tal obligación de custodia de cheques; precisando respecto a las firmas autorizadas que los cheques en estricto rigor en el servicio público lo normal es que existen 4 firmas autorizadas, dos titulares y dos suplentes, y en este caso en la DAS, habían pasado todo el 2018 con solo dos firmas vigentes, porque de las otras firmas autorizadas, uno ya no pertenecía a la DAS (Claudio Morales), y la otra firma autorizada, doña Irene Navarrete, estaba cumpliendo otras funciones en la DAS o al parecer se había ido; por lo que sólo Manuel Rojas Ramírez y Nubia San Martín eran las firmas autorizadas que se necesitaban para los cheques, cuya finalidad es que haya una oposición de funciones, un control respecto de lo que se está dando como pago o egreso; indicando, además, que al momento de la visita o constitución en la DAS de Talcahuano -que tuvo lugar el 6 de marzo de 2019-, sólo habían dos firmas operativas para la firma de cheques, que eran Manuel Rojas y Nubia San Martín, los cuales también tenían acceso para ingresar a través de la página del Banco Estado, a las cuentas del banco.

Debiendo agregarse que en torno a la custodia de los talonarios de cheques, también se refirió la asesora jurídica de la DAS, **testigo Chamorro Díaz**, señalando al respecto que dicha custodia la tenía la señora Nubia, que los talonarios visiblemente estaban “regados” en el escritorio en cualquier momento del día, sobre el escritorio y adentro de una cajonera sin llaves, a pesar que en la DAS había una caja fuerte gigante, que normalmente estaba abierta, agregando que de hecho hubo un sumario por lo mismo, porque se extravió un cheque, y como consecuencia se amonestó a la señora Nubia y a Pedro Paredes, como su jefe, por el descuido de tener los cheques en un cajón sin llaves, en circunstancias que había una caja fuerte para ello; existencia del sumario y sanción que se corrobora con el mérito un **correo electrónico de fecha 17 de julio de 2019 suscrito por la misma Chamorro Díaz (Prueba Documental N° 42)**, por la cual entrega información asociada a un requerimiento del Ministerio Público, en el cual se indica de por Decreto Alcaldicio 1.268 (14 de mayo de 2008) se ordenó una investigación sumaria con el fin de determinar las presuntas responsabilidades funcionarias en el extravío de tres documentos de una chequera correspondiente a la cuenta corriente de remuneraciones de la Dirección de Salud Municipal, donde se formularon cargos en contra de Pedro Paredes Montoya, jefe del Departamento de Finanzas de la DAS en dicho período, y Nubia San Martín Pavez funcionaria administrativa de la DAS; precisándose que en contra de Paredes Montoya, lo fue por no haber actuado con la debida diligencia al permitir que los funcionarios a su cargo mantengan en sus escritorios chequeras fiscales, existiendo en el Departamento de Finanzas



a su propio cargo una caja fuerte, elemento de seguridad que resguarda de manera efectiva la documentación y valores públicos en custodia de su departamento; y por similar cargo en contra de San Martín Pavez, a quienes en definitiva se les aplicó la sanción de censura establecida en el artículo 121 de la Ley 18.883; sanción disciplinaria de la cual da cuenta precisamente la copia del Decreto Alcaldicio de la Municipalidad de Talcahuano N° 1563, de fecha 25 de junio de 2008 (**Prueba Documental N° 72**), y del Registro 9147, de fecha 31 de diciembre de 2008, de la Contraloría General de la República, suscrito por el Contralor Regional del Bío Bío (**Prueba Documental N° 73**), por medio de la cual dicho ente contralor registra el referido decreto municipal..

5.- También se cuenta con dichos de **Priscila Muñoz Candia** que indicó que se puede cobrar por caja un cheque sin el decreto de pago, porque a la caja del banco solo se lleva el cheque, y que el banco no tiene como saber si habían habido movimientos anteriores; que el cheque debía contener dos firmas, y por lo que recuerda si los cheques eran superiores a 2 o 4 millones de pesos, el banco llamaba a don Alejandro o a doña Nubia para autorizar el pago, y si eran inferiores a esos montos se pagaban; que ella presenció cuando llamaban del banco a doña Nubia para dar el visto bueno, pero respecto de Cabello, no lo recuerda, porque él no estaba en su oficina, por lo que no tenía como corroborar eso; circunstancia que guarda perfecta relación con lo indicado por **Estefanía Karolina Estrada Rivas**, que a la fecha de los hechos era la Directora Jurídica de las Municipalidad de Talcahuano, quien aseveró que para que un particular cobre un cheque en el banco de titularidad de la municipalidad, no se requiere que lleve el decreto de pago, pero van a llamar al jefe de finanzas para que autorice el pago cuando era sobre cierta suma de dinero, como dos millones setecientos mil pesos o sobre tres millones, y si no está el jefe de finanzas, desconoce a quien llamaban, pero supone que era a otra persona del departamento de finanzas: lo cual se condice con la información entregada por el Banco Estado, por medio de Respuesta de dicho banco a información solicitada, de fecha 13.11.2020, suscrita por Víctor Moreno Pizarro (**Prueba Documental N° 155**), por el cual se adjunta normativa sobre protocolos de verificación de firma para cobro de cheques de instituciones públicas que se realizan por caja, el cual se contiene en un pendrive (**Otros Medio de Prueba N° 63**), en el cual se establece las medidas y controles que han de adoptarse ante el cobro por caja de los cheques que se presentan ante dicha institución, según el monto de los mismos, y en lo pertinente, respecto de cheques cuyo valor sea igual o superior a \$4.000.000, se contemplan medidas especiales, entre ellas la intervención del personal superior para el otorgamiento de los visto buenos, informar al beneficiario del cheque que deberá esperar unos 15 minutos, y se contemplan 12 pasos o puntos de control, ejecución y acción, entre ellos el Punto 3, que da cuenta que en forma inmediata se debe contactar telefónicamente con el cliente titular de la cuenta; como también lo afirmó



Chamorro Díaz, asesora jurídica de la DAS, quien sobre el punto indicó que escuchó por lo menos dos veces que lo habían llamado del banco-refiriéndose a Cabello Bustos- para dar un visto bueno de algún cheque, si se podía pagar el cheque, si estaba bien emitido o no, reiterando que cuando un cheque era de determinado monto, independientemente de que estuviere bien emitido o girado, desde el banco la ejecutiva llamaba a don Alejandro preguntándole si el cheque estaba bien por el valor que se indicaba, y él decía “si, está bien”, lo que ocurrió frente a ella, ello sin perjuicio que no pudo precisar en qué fecha ocurrió.

6.- Por lo demás, y en relación a la función de custodia de los fondos de la DAS, ha de considerarse que si bien se encuentra establecido que el acusado Cabello Bustos no era firma autorizada para la firma de los cheques de las cuentas de dicha Dirección, y que sólo lo eran Nubia San Martín y Mario Rojas, ha quedado también totalmente acreditado que Cabello Bustos daba órdenes para firmar cheques, aún en casos en que no se encontraba toda la documentación de respaldo completa para ello, como lo indica de manera categórica la testigo **Priscila Muñoz**, al manifestar que cuando los legajos no venían completos, no se debía proceder al pago, pero igual habían documentos que se pagaba sin respaldo, lo cual dependía de las órdenes de las jefaturas de don Alejandro Cabello y también de Juan Garcés, jefe de Abastecimiento, y Luis Fregonara, jefe de Obras o Mantenimiento, quienes le pedían a la señora Nubia que hiciera el cheque para el pago de facturas; precisando que la señora Nubia muchas veces se negó a realizar dichos pagos, pero si no lo conseguían con doña Nubia, hablaban con don Alejandro Cabello, quien daba la orden, y si él daba la orden había que hacer el cheque o la transferencia; agregando que a veces ni siquiera iban a la oficina, y solo llamaban a don Alejandro, quien llamaba a la señora Nubia.

7.- Luego, los encartados Cabello Bustos y San Martín Pavez, realizan una serie de funciones específicas y tenían determinadas obligaciones, de las cuales se desprende nítidamente las respectivas responsabilidades para con la custodia de los fondos o caudales públicos de propiedad de la DAS de Talcahuano.

Así, Cabello Bustos, es la persona que en su calidad de Jefe de Finanzas, debe firmar los respectivos certificados de disponibilidad financiera, como también una de las personas, que junto al Director de la DAS, debe firmar los decretos de pago; igualmente es el encargado de otorgar el visto bueno cuando el banco lo requería, en el caso del cobro de cheques sobre cierto monto; manejaba clave o digipass para efectuar transferencias desde las cuentas corrientes de la DAS a terceros, como entre las mismas cuentas bancarias de dicha Dirección, ello sin perjuicio que no figure oficialmente con token o clave como tal para ingresar a las cuentas, por no ser cuenta correntista, como lo afirmó el testigo Urrutia Sáez (quien también señaló que en realidad desconocía si Cabello tenía acceso a las claves); pues perfectamente podía hacerlo con las



claves o token de los funcionarios que sí las tenían, como por lo demás fue visto por Muñoz Candia y Vera Cionti.

Por su parte, San Martín Pavez, era la persona que tenía clave para ingresar la información al Sistema Modular Contable para efectos de la confección de los respectivos decretos de pago; en la práctica efectuaba el registro contable o devengo de las facturas a pagar; en ausencia del titular, en su calidad de jefe de finanzas subrogante, procedía a la firma de los certificados de disponibilidad financiera y de los decretos de pago; y era una de las personas que tenía firma autorizada para firmar la documentación bancaria, específicamente los cheques de las cuentas corrientes de titularidad de la Municipalidad de Talcahuano; acusada respecto de quien también se estableció que era quien mantenía bajo su custodia los respectivos talonarios de cheques, al punto que en una oportunidad fue incluso sancionada disciplinariamente por faltar a tales deberes, y a quien también se le consultaba desde el Banco Estado para los efectos del visto bueno del cobro de cheques sobre ciertos montos; acusada respecto de quien la testigo Chamorro Díaz indicó que si bien no sabe quiénes tenían digipass o claves para las transferencias bancarias, sin duda una de ellas debió haberla tenido doña Nubia, porque las transferencias llevan dos claves de dos digipass, pero son las mismas que tienen firmas autorizadas, y un digipass lo tenía la señora Nubia.

Que todo lo anteriormente expuesto se ve corroborado con el tenor de la carta encontrada en el domicilio de los acusados San Martín Pavez y Ravanal Mellado, de la que dio cuenta el funcionario policial Valenzuela Ortiz, a quien la acusada San Martín Pavez le manifestó que dicha carta la escribió porque en algún momento pensaba denunciar los hechos; por cuanto en uno de sus párrafos, se refiere precisamente al hecho que Cabello Bustos realizaba transacciones entre cuentas corrientes y que no obstante no tener claves, manejaba las de otros funcionarios, lo cual pone de manifiesto las conclusiones referidas, en cuanto a que conforme a sus funciones y responsabilidades, sí tenía a cargo fondos públicos de la DAS. Así, literalmente se señala:

“- Es importante destacar que don Alejandro Cabello Bustos es la única persona que realiza transacciones bancarias entre cuentas ctes. y pagos en línea a proveedores.”

“Otro elemento a destacar es el uso de claves de otros funcionarios autorizados para realizar pagos que él decide. lo anterior lo destaco porque el Sr. Alejandro Cabello Bustos nunca quiso tener claves bancarias, sin embargo siempre utilizó los dispositivos del banco de los otros funcionarios.”

Lo anterior, igualmente se ve corroborado con el mérito de conversaciones vía whatsapp que tuvieron lugar entre Nubia San Martín y Alejandro Cabello **(Otros Medios de Pruebas N° 99)** de las cuales dio cuenta la perito Lizana



Rivera, quien efectuó la revisión y análisis de la información extraída de dos teléfonos pertenecientes a Nubia San Martín, cuyo número en tales conversaciones corresponde al terminado en 703, extraída del aparato o dispositivo teléfono Samsung SMG 530H, según lo señalado por la perito; teléfono que le fue incautado a la acusada en la diligencia de entrada y registro a su domicilio, según lo ya expuesto, en tanto que el número correspondiente a Cabello Bustos, es el terminado en 661, como expresamente consta de las impresiones de las conversaciones, y también lo afirma la perito, quien también señala que también hay conversaciones con un número terminado en 953, que corresponde a Cabello Bustos, debido a que al realizar la lectura de las conversaciones, Nubia hace referencia a que está hablando con Alejandro Cabello; en cuyas conversaciones expresamente se refieren las transferencias de fondos entre las cuentas de la DAS que se indican, y que incluso se desprende que las puede hacer desde su domicilio, lo que implica naturalmente que contaba con los dispositivos electrónicos o digi pass para ello. Así, el tenor de tales conversaciones son las siguientes:

Página 2: Conversación del 17 de abril de 2018, entre Alejandro y Nubia, el primer mensaje es de Alejandro, que señala con la 2004 y 187. Nubia le dice Ok, y Alejandro responde Yo llego en la tarde después de las 15:30.

El 28 de mayo de 2018, Alejandro señala, Sra Nubia, en otro mensaje, voy a transferir 30 millones de las 179 a la 161, y el mismo día Alejandro le señala, hay que preparar pagos de sanitas, codimed y diemet.

El 29 de mayo de 2018, Nubia le envía mensaje a Alejandro, Alejandro tengo la factura de vigilancia dice ser san Vicente la OC es de los cerros, y por la diferencia debió dar por 154, y la envió por 1275, 680 la pago o le pido la diferencia; y Alejandro le respondió que hay que pedir a abast una OC por lo que falta

Página 10: conversación desde el 15 de mayo de 2018, el número señala Ok, luego al día siguiente 16 de mayo 2018, le señala señora Nubia, luego otro mensaje hay que pagar 25 millones a opko; luego otro mensaje del número, que señala pague directo con la 187, y mismo número señala hay que depositarlo, y Nubia responde Ok. Luego Nubia señala depositado Opko, y otro mensaje del número 953 que dice le pude enviar el correo con el detalle a Claudio de opko y a mi

Página 11, conversación Nubia señala Si, cuando vuelvan del banco, y el número le señal ok

Luego el 18 de mayo de 2018, Nubia emite otro mensaje al número, donde le señala había w gacet trasferencia ormag, y otro mensaje de Nubia que dice había q hacer; luego Nubia el mismo día señala, me pregunta Juan edo, y el número le responde igual se puede, y el número dice voy a ver si puedo hacerlo desde mi casa, y hay otro mensaje desde el 953 y la hora fue a las 15:35:10.



Otro mensaje del numero de 18 de mayo de 2018, Y le aviso; y mensaje del número de misma fecha, cuyo contenido esta en siguiente pagina

Página 12. El numero 953 dice necesito el monto, y Nubia responde 2.064.223, rut 76433467-2; luego Nubia emite nuevo mensaje en que señala 2.064.22. Es el correcto;

Luego otro mensaje del número, sería una imagen de número 20180518, luego otro mensaje que señala listo, y otro mensaje que señala con la 187. Luego Nubia el mismo día 18 de mayo le señala Ok gracias. Nubia le señala al número Alejandro debo girar a Etohn vino jedo en Fact 3,5 mas 4millones que hizo trato juan edo.

Testigo dice que aquí Nubia lo trata de Alejandro al número con el cual entablaba conversación

Página 13 conversación, el numero 953 le respondió, me dijo que eran 4 millones, y Nubia respondió Nad una o. de compra 3,23, Y Nubia en otro mensaje Mas oc de \$3,223.

Luego mensaje del número 953 de 22 de mayo de 2018, señala Ya.

Página 14, conversación entre Nubia y el número de fecha 22 de mayo de 2018; numero 953 de dice que habría que girar de la 52004 desde la 187; ante lo cual el mismo día Nubia le señaló Ok

Página 15: conversación comienza el 6 de julio de 2018, entre Nubia y el número 953, Nubia le señala Juan edo 7 millones ahora; y un segundo mensaje de Nubia, le señala saco de la 179 a la 161, y el numero le responde nada más; el 6 de julio 2018, Nubia responde ok, y luego dice Juan edo quería otro por 6, le dijo que no, para la próxima semana.

Todavía más, se acompañó por la fiscalía el Decreto u Orden de pago N° 559, de fecha 15 de abril de 2019, **(Prueba Documental N° 212)**, firmado por Cabello Bustos como Jefe de Finanzas, y en el cual consta que fue confeccionado por San Martín Bustos, por sus iniciales nsanmart; en que precisamente se efectúa una transferencia de fondos desde la cuenta corriente 2004 a la 161, por la suma de \$25.000.000, documento en el cual, por lo demás, no se da cumplimiento a la exigencia de dejar constancia del motivo de la transferencia de fondos.

VIGÉSIMO NOVENO: Que en relación al cuidado de los caudales o fondos públicos, ha de considerarse que dentro de la DAS existían varios funcionarios que tenían póliza de fianza, como lo eran Manuel Rojas Ramírez, Irene Navarrete Rodríguez, Claudio Morales Hidalgo y Nubia San Martín Pavez, según se encuentra acreditado con el mérito de las respectivas copias de Póliza



de Fianza Nros. 335193, 334601, 334131 y 334599, de HDI Seguros (**Prueba Documental Nros. 2, 3, 4 y 5, como también se reitera información Prueba Documental 133, 134, 135, 136 y 158**) con las vigencias y condiciones que en cada caso se indican, en las que figura como asegurado la Contraloría General de la República, lo que se condice con lo indicado por **Urrutia Sáez**, en orden que al tiempo de la fiscalización de la DAS tenían póliza de fianza Nubia San Martín y Manuel Rojas; y en el caso específico de la acusada San Martín Pavez, su póliza tiene vigencia desde el 12 de septiembre de 2011 hasta que el afianzado cese en su obligación de rendir fianza, circunstancia ésta que a su respecto también refuerza la conclusión que sí tenía fondos públicos a su cargo; y, por el contrario, la inexistencia de tal póliza, no puede ser interpretado o conducir a la conclusión que un funcionario no tenga fondos o caudales públicos a su cargo, sino que simplemente puede deberse a una omisión o negativa del mismo o incluso un eventual incumplimiento normativo, a las obligaciones establecidas en los artículos 68 y siguientes de la Ley N° 10.333 Orgánica de la Contraloría General de la República, en cuanto por dichas normas se obliga a todo funcionario que tenga a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquiera naturaleza, a rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones; cauciones que podrán consistir en seguros, fianzas y otras garantías que determine el reglamento que dicte el Presidente de la República; debiendo los Jefes de Servicios velar porque sus subalternos cumplan con la obligación de rendir caución.

En efecto, sobre el punto ha de considerarse lo expuesto por la asesora jurídica de la jefatura de la DAS, doña **Marianela Chamorro Díaz**, quien indicó que la póliza de fianza es un documento que se debe suscribir y solicitar a través de la Contraloría por todo funcionario público que tenga a su cargo bienes o recursos fiscales, y los jefes de finanzas deben tener esta póliza porque ellos manejan recursos fiscales, y que respecto del señor Cabello Bustos desconoce si mantenía o no tal póliza, no sabe si la tenía o si estaría al día o revocada, pero debiera haberla tenido, porque los jefe de finanzas históricamente siempre suscribieron documentación bancaria y ello exige tener póliza de fianza, aseverando que al día de hoy el jefe de finanzas la tiene; antecedente este que se ve corroborado por los dichos del acusado Paredes Montoya.

Incluso más, la referida testigo también se refirió al hecho que el Jefe de Finanzas no fuera firma autorizada, señalando que ello se debía únicamente a que él señor Cabello no quería tener firma autorizada y de hecho fue el primer jefe de finanzas que no tenía firma autorizada, claramente por la responsabilidad que ello involucra; testigo que en todo caso fue enfática en manifestar que entre las funciones de Cabello estaban las de custodia de los fondos asignados a la DAS; más aún si en su calidad de jefe del Departamento de Finanzas de dicha Dirección tiene a su cargo la elaboración técnica del presupuesto de la DAS, que



es una herramienta de gestión, en la que se incluyen los supuestos ingresos con los que se van a contar para el año siguiente como los egresos en que se van incurrir, los gastos en que se van en incurrir, por lo que dentro de las funciones del jefe de finanzas, existe una especie de control interno en ese sentido, como lo afirmó Chamorro Díaz.

En el mismo sentido declaró **Estefanía Estrada Rivas**, quien a la época de los hechos era la Directora Jurídica de la Municipalidad, pues dio cuenta que la póliza de fianza es una especie de seguro que se obtiene por quien maneja causales públicos, y el objeto es hacer frente, generalmente, por las pérdidas de dichos fondos, y que los jefes de finanzas usualmente tiene póliza de fianza, puesto que cualquiera que maneje o administre fondos públicos la debe tener, y que si el jefe de finanzas no tiene dicha póliza, no significa que deja de tener fondos a su cargo, agregando que es el propio jefe de finanzas quien requiere las pólizas o las gestiona, indicando como ejemplo el hecho que ella misma hizo el requerimiento a la Dirección de Finanzas para gestionar su póliza; y que si Alejandro Cabello no tenía póliza de fianza, ello se explica porque él no quiso obtenerla, porque podría haberla solicitado, pues es él quien las solicita a la Contraloría, que según el organigrama de la DAS no había otra persona que pudiera pedirla, para finalizar indicando que Cabello Bustos en su calidad de jefe de finanzas administra fondos públicos, y que cualquier persona que tenga injerencia en la administración de fondos públicos, implica un deber de custodia de los fondos, pues si una persona va a administrar de cualquier forma fondos públicos, firmando cheques, decretos de pago, pagando a un proveedor, tiene la obligación de custodiar esos fondos, y en el caso en concreto, estima que Alejandro Cabello y Nubia San Martín tenían la custodia de los fondos.

Al respecto, son claves los dichos del **encartado Paredes Montoya**, quien al ser consultado por las funciones que él tenía cuando fue jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Talcahuano, si bien manifestó que las funciones nunca fueron definidas, indicó que recordaba que en algún momento se le pidió a cada jefe que redactara de su puño y letra cuáles eran las funciones que debía cumplir cada jefe, y él describió varias funciones, entre las cuales expresamente señaló la custodia de los recursos económicos para dar cumplimiento a los requerimientos; incluso más, dijo que “ como jefe de finanzas tenía a cargo fondos públicos”; que al hablar de funciones y responsabilidades como jefe de finanzas, “una de las responsabilidades era tener a cargo los fondos municipales, que era su responsabilidad hasta el año 2010, y después de esa fecha esa responsabilidad es del nuevo jefe de finanzas”.

TRIGÉSIMO: Que como se indicó en considerandos anteriores, a raíz de la fiscalización realizada por funcionarios de la Contraloría Regional de la República en las dependencias de la DAS y luego de las diligencias de entrada y registro por parte de la Policía de Investigaciones a las dependencias de la DAS



de Talcahuano y a los domicilios de los acusados, se logró la incautación de variada documentación atinente a los hechos investigados, entre los cuales se encuentran una gran cantidad de decretos u órdenes de pago con sus respectivos legajos o documentación adjunta, en los cuales se consignaba el pago de facturas a diversos proveedores de medicamentos e insumos médicos, en las fechas, montos y mediante el giro de los cheques que en cada decreto se consigna; y, conforme a las pruebas periciales, testimoniales y documentales se puede dar por acreditado que dichos pagos no fueron efectuados a los proveedores que en los decretos se indican, esto es, no pagaron las obligaciones declaradas en dichas órdenes de pago, y por el contrario, se logró establecer que los documentos bancarios sindicados en dichos decretos fueron girados y cobrados por los acusados Cabello Bustos, San Martín Pavez, Paredes Montoya y Ravanal Mellado, según el detalle que se indicará; ello sin perjuicio que los acusados también cobraron otros cheques que se encuentran relacionados o respaldados con otros decretos de pago e incluso sin estar vinculado a orden de pago alguna.

A) En efecto, en relación al Hecho N° 5 de la acusación fiscal y particular, imputados a los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez, el Ministerio Público incorporó los siguientes decretos u órdenes de pago, con sus respectivos legajos y la información que a continuación se detalla:

1.- Orden de Pago N° 2199 (Prueba Documental N° 213)

Fecha: 14 diciembre 2017

Páguese a: Laboratorio Chile

Suma de: \$1.285.200

Factura N°: 3626

Cheque N° 9193347

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los recuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 9193347

Fecha pago: 14.12.2017

Recibí conforme: En blanco

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161, y como numero de egreso se consigna el numeral 20

Dentro del legajo adjunto, figura una orden compra interna de 3 de abril de 2013, fotocopia de factura 36262 de 18.04.2013 por \$1.285.200, comprobante movimientos contables de 10.10.2013, donde se cita dicha factura; y una obligación presupuestaria y dos comprobantes movimiento contable por



mismo monto, de fecha 14.12.2017, distinta hora, que tienen como usuario a nsanmart, y en los dos últimos comprobantes se cita como factura la N° 3626.

Que al revisar el cheque N° 9193347 (**Prueba Documental 108 N° 5**) allí singularizado, se pueden establecer que extendido por la suma de \$1.285.200, de fecha 14.12.2017, girado a nombre de Pedro Paredes Montoya, quien lo cobró por caja el 14 de diciembre de 2017 en la oficina Talcahuano.

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°9193347, sirvió para pagar la factura 3626 de Laboratorio Chile, pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Paredes Montoya; y además la factura incluida en el legajo no es la 3626, sino que la 36262.

2.- Decreto Pago N° 275 (Prueba Documental N° 212)

Fecha: 20 de febrero de 2018

Páguese a: Etex Farmacéutica Limitada

Suma de: \$2.677.500

Factura N°: 106949

Cheque: 9710524

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los recuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 9710524

Fecha pago: 20.02.2018

Recibí conforme: En blanco

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161, y como numero de egreso se consigna 20/252.

Dentro del legajo, figura una obligación presupuestaria de 21.02.2018 y comprobante de movimiento contables de la misma fecha, indicándose en esta última la factura 106949, ambos documentos por \$2.677.500; como también otro comprobante de movimientos contables de misma fecha, pero de distinta hora, en la cual se consigna además, el N° cheque 9710524; documentos que aparecen emitidos por usuaria nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías, son del año 2015, y figura una copia de factura 1036949 de 09.06.2015, por \$2.677.500.

Que al revisar el cheque N° 9710524, por \$2.677.500, aparece girado con fecha 20.02.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, cobrado por caja el 20 de febrero de 2018 en oficina Concepción Bío Bío, y al reverso figura número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N° 17**).

Por lo demás, ha de señalarse que también se giró el cheque N°9470749 por la misma suma de \$2.677.500, de fecha 23.03.2018, a nombre de Pedro



Paredes Montoya, el cual no se encuentra asociado a ningún decreto de pago, conforme se constata del examen de la **Prueba Documental 111 N°3**.

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°9710524, sirvió para pagar la factura 106949 de Etex Farmacéutica Limitada, pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Ravanal Mellado; y además la factura incluida en el legajo no es la 106949, sino que la factura 1036949 de 09.06.2015.

3.- Decreto Pago N° 344 (Prueba Documental N°212)

Fecha: 8 de marzo de 2018

Páguese a: Etex Farmacéutica Limitada

Suma de: \$2.618.000

Factura N°: 1038351

Cheque: 9710590

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los cuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 9710590

Fecha pago: 8.03.2018

Recibí conforme: En blanco.

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161, y como número de egreso se consigna 20/350.

Al analizar el legajo, figura una obligación presupuestaria de 14.03.2018 y comprobante de movimiento contables de la misma fecha, indicándose en esta última la factura 1038351, ambos documentos por \$2.618.000; como también otro comprobante de movimientos contables de misma fecha, pero de distinta hora, en la cual se consigna además, el N° cheque 9710590; documentos que aparecen emitidos o usuaria nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías son del año 2015 y 2016, y se encuentra factura N° 1038351 de 28.10.2015, por \$2.618.000.

Que revisada la copia del cheque N°9710590, figura girado por \$2.618.00, con fecha 09.03.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, cobrado por caja en oficina Concepción Bio Bio, pagado marzo 2018, día ilegible, figurando al reverso números 9844.026-7, y 984500049 (**Prueba documental 112 N°1**).

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°9710590, sirvió para pagar la factura 1038351 de Etex Farmacéutica Limitada, pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Ravanal Mellado; y además la factura referida es de fecha 28.10.2015.

4.- Decreto Pago N°498 (Prueba Documental N° 212)



Fecha: 28 de marzo 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$2.987.019

Factura N°: 597777

Cheque NO SE INDICA

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los recuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 9710634

Fecha pago: 28.03.2018

Recibí conforme: En blanco

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161, y como número de egreso se consigna 20.

Dentro del legajo figura comprobante de movimiento contables de 23.03.2018, indicándose la factura 597777 y cheque 9710634, documento que aparecen como usuario nsanmart, por \$2.987.019; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías son del año 2017, y figura copia de factura N° 597077, de 3.05.2017, por \$2.987.019, y también otra copia de la misma factura, la cual tiene un timbre de oficina de partes de la Dirección de Salud Talcahuano, de fecha 27 NOV 2017; e igualmente esta la fotocopia de la guía de despacho, por mismo monto y fecha.

Que al revisar cheque N° 9710634, aparece extendido por \$2.987.019, de fecha 28.03.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, cobrado por caja el 28 de marzo de 2018 en oficina Concepción Bio Bío, y al reverso figuran manuscrito número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N° 21**).

Por los antecedentes referidos, se trata de un decreto pago falso, pues da cuenta de haber servido para pagar la factura 597777 de Laboratorio Andrómaco, pero el cheque que se refiere haber sido empleado para el pago de dicha factura, fue girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado y cobrado por caja por éste; y por lo demás, siendo lo normal que en el decreto de pago se individualice al momento de la confección del decreto, el N° de cheque, en este caso no se hizo, y solo se anotó de manera manuscrita en el recuadro final; y, además, dentro de los antecedentes que conforman el respectivo legajo, figura una copia de una factura distinta, la N° 597077, de 3.05.2017, por \$2.987.019, y otra copia de la misma factura, la cual tiene un timbre de oficina de partes de la Dirección de Salud Talcahuano, de fecha 27 NOV 2017.

5.- Decreto Pago N° 653 (Prueba Documental N° 212)

Fecha: 2 de abril de 2018

Páguese a: Munnich Pharma Medical Ltda.

Suma de: \$2.907.825



Factura N°: 17167

Cheque: 9710543

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los recuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 9710543

Fecha pago: figuran el 01-3-2018 y 2-04-2018, escritas una fecha con lápiz pasta y la otra lápiz grafito.

Recibí conforme: En blanco

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161, y como número de egreso se consigna 20.

Dentro del legajo, figura una obligación presupuestaria de 16.04.2018 y comprobante de movimiento contables de la misma fecha, indicándose en esta última la factura 17167 y cheque 9710543; ambos documentos por \$2.907.825; documentos que aparecen emitidos o usuario nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna es del 2015, el formulario recepción mercaderías es del año 2016, y existe una fotocopia de Factura 11767, de 03.03.2016, por \$2.907.825.

Que revisado el cheque N° 9710543, aparece extendido por \$2.907.825, de fecha 28.02.2018, a nombre de Pedro Paredes Montoya, cobrado por caja el 28 de febrero de 2018 en oficina Talcahuano, y al reverso figura número C.I. 8.242.907-7 (**Prueba Documental 108 N° 19**); por lo que este cheque aparece extendido con anterioridad a la fecha del decreto de pago y de los comprobantes de movimiento contable y obligación presupuestaria.

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°9710543 sirvió para pagar la factura N° 17167 de Munnich Pharma Medical Ltda., pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Ravanal Mellado; y además dicho cheque aparece extendido con fecha 28 de febrero de 2018, y cobrado ese mismo día, esto es, con anterioridad a la fecha del decreto de pago y de los comprobantes de movimiento contable y obligación presupuestaria, que lo son del mes de abril de 2018, y la fotocopia de la factura adjunta en el legajo es la N° 11767, de 03.03.2016.

6.- Decreto Pago N° 643 (Otros Medios de Prueba N°2)

Fecha: 12 de abril de 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$ 2.827.202

Factura N°: 562206

Cheque: 9710438

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce



Visto bueno usuario: nsanmart

En los cuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 9710438

Fecha pago: 12.04.2018

Recibí conforme: En blanco.

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 2004 y como número de egreso se consigna 05

Dentro del legajo figura comprobante de movimientos contables de fecha 12.04.2018, por \$2.827.202, indicándose la factura 562206; como también otro comprobante de movimientos contables de misma fecha, pero de distinta hora, en la cual se consigna además, el cheque N° 9710438, documentos que aparecen emitidos por usuaria nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías son del año 2016 y 2017, y figuran 6 facturas del año 2016 que suman los \$2.827.202, entre ellas factura N° 562206, de 23.11.2016, por \$466.480, y algunas guías de despacho que respaldan tales facturas.

Que revisado el cheque N° 9710438, aparece extendido por \$2.827.202, de fecha 12.04.2018 a nombre de Pedro Ravanal Mellado, cobrado el 13 de abril de 2018, en oficina Talcahuano, y al reverso figura número 9844026-7 **(Prueba Documental 107 letra g)**.

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°9710438 sirvió para pagar la factura N° 562206 de Laboratorio Andrómaco, pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Ravanal Mellado; y además el decreto de pago sólo hace referencia a una factura, en circunstancias que en el legajo figuran 6 facturas del año 2016, y si bien se encuentra la factura N°562206, esta lo es por un monto de \$466.480, de fecha 23.11.2016, y no por el monto que refiere la orden de pago.

7.- Decreto Pago N° 659 (Prueba Documental N° 212)

Fecha: 17 de abril de 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$2.972.239

Factura N°: 562825

Cheque: 733206

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los cuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 733206

Fecha pago: 17.04.2108

Recibí conforme: En blanco



Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 187 y como número de egreso se consigna 12-31.

Dentro del legajo figura un comprobante de movimiento contables de 17.04.2018, indicándose la factura 562825, y otro comprobante de movimientos contables de misma fecha, pero de distinta hora, en la cual se consigna además, el N° cheque 733206; documentos que aparecen emitidos o usuaria nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna son del año 2016, formulario recepción mercaderías 2017, y existen 8 facturas, entre ellas la N° 562825, de 29.11.2016, por \$142.086; por lo que el monto de la factura no se corresponde con el valor que se ordena pagar en el decreto.

Del análisis del cheque el cheque N° 733206, , aparece girado por \$2.972.239, de fecha 17.04.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, y cobrado el 17 de abril de 2018 en oficina Concepción Bio Bio, y al reverso figura número 9844026-7 (**Prueba Documental N° 110**).

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°733206 sirvió para pagar la factura N°562825 de Laboratorio Andrómaco, pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Ravanal Mellado; y además el decreto de pago sólo hace referencia a una factura, en circunstancias que en el legajo figuran 8 facturas, y si bien se encuentra la factura N°562825, esta lo es por un monto de \$142.086, y no por el monto que refiere la orden de pago.

8.- Decreto Pago N° 745 (Prueba Documental N° 212)

Fecha: 2 de mayo de 2018

Páguese a: Laboratorio Andomaco

Suma de: \$2.680.118

Factura N°: 626151

Cheque: 620232

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos.

Firmado director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los recuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 620232

Fecha pago: 2.05.2018

Recibí conforme: En blanco

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-614.

Dentro del legajo, no hay comprobante de obligación presupuestaria ni de movimientos contables, pero en todo caso la documentación respaldante, como orden compra interna, es del año 2017, y el formulario recepción mercaderías del año 2018, existiendo una factura N° 626155, de 28.11.2017, por \$2.680.118,



en la que aparecen recepcionado los productos el 30.11.2017, conforme a timbre de Ángel Muñoz, Droguería Comunal Thno.

Al respecto se debe señalar que conforme al Hecho N°5, en su numeral 8, imputados por la fiscalía y la acusadora particular a los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez, se da cuenta que el referido decreto u orden de pago N° 745, fue cancelado por medio del cheque 620231 por la suma de \$2.680.118, en circunstancias que conforme al señalado decreto debidamente incorporado, el pago se habría efectuado mediante cheque N° 620232 por dicha suma, mas este documento no ha sido incorporado al juicio por ninguno de los acusadores, ni existe antecedente alguno a su respecto, por lo que se ignora en definitiva si realmente existe dicho documento, y en el caso de existir, por qué monto fue extendido, y a nombre de qué persona natural o jurídica se giró, y consiguientemente, no es posible establecer si efectivamente la orden de pago en cuestión se pagó o no a Laboratorio Andrómaco, ni mucho menos si se giró a nombre de alguno de los acusados; motivos por los cuales no se ha acreditado el delito en que se funda en estos hechos, y por lo mismo, al respecto corresponde una decisión absolutoria de los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez, según se dirá más adelante.

La conclusión anterior, no se ve alterada por la existencia del referido cheque 620231, el cual por lo demás fue debidamente acompañado **(Prueba Documental 108 N° 28)**, y figure extendido con fecha 02.05.2018, por la suma de \$2.680.118, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, y cobrado con fecha 03.05.2018, el cual no aparece asociado a ningún decreto de pago, lo cual es sin perjuicio que dicho documento sirve para el establecimiento de otro delito imputado por los acusadores, como Hecho 4 N°25, conforme se indica en otro apartado de esta sentencia.

9.- Decreto Pago N° 921 (Prueba Documental N°212)

Fecha: 23 de mayo de 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$3.220.783

Factura N°: 622331

Cheque: 620314

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los recuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 620.314

Fecha pago: 23.05.2018

Recibí conforme: En blanco

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20.



Dentro del legajo figura obligación presupuestaria de 23.05.2018 y comprobante de movimiento contables de la misma fecha, indicándose en esta última la factura 622331, ambos documentos por \$3.220.783; como también existe otro comprobante de movimientos contables de misma fecha, pero de distinta hora, en la cual se consigna además, el N° cheque 620314, documentos que aparecen emitidos o usuaria nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías son del año 2017, y existen 3 facturas que suman los \$3.220.783, entre ellas la N° 622331, de fecha 28.10.2017, por \$399.840.

Analizado el cheque N° 620314, aparece extendido por la suma \$3.220.783, de 23.05.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, y cobrado por caja el 23 de mayo de 2018 en oficina Talcahuano, existiendo al reverso manuscrito el número 9.844.026-7 (**Prueba Documental N° 108 N° 34**).

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°620314 sirvió para pagar la factura N°622331 de Laboratorio Andrómaco, pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Ravanal Mellado; y además el decreto de pago sólo hace referencia a una factura, en circunstancias que en el legajo figuran 3 facturas, y si bien se encuentra entre ellas la factura N°622331, esta lo es por un monto de \$399.840, y no por el monto que refiere la orden de pago.

10.- Decreto Pago N° 983 (Otros Medios de Prueba N°2)

Fecha: 4 de junio de 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$3.332.000

Factura N°: 551799

Cheque: 620356

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los recuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 620356

Fecha pago: 4.06.2018

Recibí conforme: En blanco

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20.

Dentro del legajo figura comprobante de movimientos contables de fecha 04.06.2018, por \$3.332.000, indicándose la factura 551799, documento que aparece emitido o usuaria nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías son del año 2017, y se encuentra factura N° 551799, de fecha 09.11.2016, por \$3.332.000.



Sin embargo, del análisis del cheque N° 620356, aparece que fue girado por la suma de \$3.332.000, el 04.06.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, siendo cobrado por caja el 5 de junio de 2018 en la oficina Concepción Collao, y al reverso figura manuscrito el número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N° 38**).

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°620356 sirvió para pagar la factura N°551799 de Laboratorio Andrómaco, pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Ravanal Mellado;

11.- Decreto Pago N° 1232 (OTROS MEDIOS N°2)

Fecha: 24 de julio de 2018

Páguese a: Laboratorio Chile S.A.

Suma de: \$3.923.073

Factura N°: 279576

Cheque: 962162

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los recuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 962162

Fecha pago: 24.07.2018

Recibí conforme: Aparece manuscrito Nelson Segovia M, y un número.

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20/1012.

En el legajo figura comprobante de movimientos contables de fecha 24.07.2018, indicándose la **factura** 276756, por \$3.923.073; como también otro comprobante de movimientos contables de fecha 25.07.2018, en la cual se consigna además, el cheque N° 962162, documentos que aparecen emitidos o usuaria nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías son de febrero de 2018, y la factura que existe es la N° 279756, es de 16.02.2018, por \$3.923.073.

No obstante, del examen del cheque N° 962162, se constata que fue girado por la suma de \$3.923.073, con fecha 24.07.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, y fue cobrado el 24 de julio de 2018 en oficina Talcahuano, existiendo al reverso manuscrito número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N° 49**).

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°962162 sirvió para pagar la factura N° 279576 de Laboratorio Chile S.A., pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Ravanal Mellado; y además la factura que existe en el legajo es la N° 279756, de 16.02.2018, por \$3.923.073; conclusión que no se ve alterada por la circunstancia que en el



recuadro de "Recibí conforme" aparezca manuscrito el nombre de Nelson Segovia M, por cuanto si bien algunos funcionarios de la DAS dieron cuenta que el representante o vendedor que intervenía por Laboratorio Chile tenía dicho nombre, lo cierto es que tal como lo sostiene el Ministerio Público, ello no permite tener la certeza de qué fue lo que retiró dicha persona, y no aparece ningún otro antecedente para sustentarlo, al punto que ni si quiera se refiere la fecha en que habría ocurrido tal recepción; y por el contrario, ha quedado fehacientemente demostrado que el cheque que se singulariza fue extendido a nombre del acusado referido, y efectivamente cobrado por caja en la fecha indicada por él mismo.

12.- Decreto Pago N° 1277 (Otros Medios de Prueba N° 2)

Fecha: 30 de julio de 2018

Páguese a: Laboratorio Chile SA

Suma de: \$ 3.570.000

Factura N°: 294655

Cheque : 1166424

Firmado jefe finanzas: Alejandro cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los recuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 1166424

Fecha pago: 30.07.2018

Recibí conforme: En blanco

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 2004 y como número de egreso se consigna 05.

En el legajo figura comprobante de movimiento contables de 30.07.2018, por \$3.570.000, indicándose la **factura 294655**, como también otro comprobante de movimientos contables de misma fecha, pero de distinta hora, en la cual se consigna además, el N° cheque 1166424, documentos que aparecen emitidos o usuaria nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, es de mayo de 2018, y orden de compra de fecha 10.05.2018, que aparece tarjada, y luego anotada otra de 22.05.18, formulario recepción mercaderías es de 23.05.2018, en que figura anotación de factura N° 294554, recepcionado 15.05.2018; y figuran dos fotocopias de misma factura N° 294554, de 11.05.2018, por \$3.570.000, que tienen manuscrito 16-05-2018, y una de ellas, además, tiene un timbre de Oficina de Partes de la Dirección de Salud Municipal Talcahuano, con fecha 17 mayo 2018.

Revisada la copia del cheque N°1166424, aparece por \$3.570.000, de fecha 20.07.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, cobrado por caja el 31 de julio 2018 en oficina Talcahuano, y al reverso figura manuscrito número 9844026-7 (**Prueba Documental 111 N°4**)



De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N° 1166424 sirvió para pagar la factura N° 294655 de Laboratorio Chile S.A., pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Ravanal Mellado; y por lo demás, dentro del legajo figuran dos fotocopias de una misma factura, que no es la antes referida, sino que la N° 294554, de 11.05.2018, por \$3.570.000.

13.- Decreto Pago N°1535 (Otros Medios de Prueba N° 2)

Fecha: 3 de septiembre de 2018

Páguese a: Pharma Investi De Chile S.A.

Suma de: \$ 3.810.380

Factura N°: 70405

Cheque: 962279

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los cuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N°962279

Fecha pago: 3.09.2018

Recibí conforme: En blanco.

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20/1205.

En el legajo figura obligación presupuestaria de 10.09.2018 y comprobante de movimiento contables de la misma fecha, indicándose en esta última la factura 70405, ambos documentos por \$3.810.380; como también otro comprobante de movimientos contables de misma fecha, pero de distinta hora, en la cual se consigna además, el N° cheque 962279, documentos todos que aparecen emitidos o usuaria nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías son del año 2014, y 3 facturas, entre ellas la N° 70405, de 12.12.2014, por \$1.190.000, con su comprobante de movimientos contables de fecha 4.03.2014, en que se singulariza dicha factura por el mismo monto; y factura 69930 de 9.12.2014, por \$1.192.380, y su comprobante de movimientos contables de 26.03.2015 por el mismo monto, en que se refiere dicha factura; y Factura 69932 de fecha 09.12.2014 por \$1.428.000, con comprobante de movimientos contables del 26.03.2015, por \$1.428.000, en que se indica factura 69932, últimos 3 comprobantes en que figura usuario acabello.

No obstante, examinado el cheque N° 962279, aparece girado por \$3.810.380, de fecha 31.08.2018, a nombre de Pedro Paredes Montoya, y cobrado por caja el 31 de agosto de 2018 en oficina Talcahuano, al reverso y manuscrito figura C.I. 8.242.907-7 (**Prueba Documental 108 N° 58**) .

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N° 962279 sirvió para pagar la factura N° 70405 de Pharma Investi De



Chile S.A., pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Paredes Montoya; y además el decreto de pago sólo hace referencia a una factura, en circunstancias que en el legajo figuran 3 facturas, y si bien se encuentra entre ellas la factura N°70405, esta lo es por un monto de \$1.190.840, y no por el monto que refiere la orden de pago.

14.- Decreto Pago N° 1540 (Otros Medios de Prueba N°1)

Fecha: 3 septiembre 2018

Páguese a: Buhos S.C.I. LTDA

Suma de: \$3.213.000

Factura: 18112

Cheque: 962267

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los cuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 962267

Fecha pago: 03.09.2018

Recibí conforme: Hay una firma ilegible

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20.

En el legajo figura Obligación presupuestaria y Comprobante movimientos contables de fecha 25.09.2018, en este último se indica factura 18112 de 21.09.2016, por \$3.213.000, en ambos figura usuario nsanmart, se adjunta factura 18112, la cual en legajo aparece por \$3.213.00, de fecha 21 septiembre 2016 y también una guía de despacho por ese monto, de la misma fecha, orden de compra de 14.09.2016

No obstante, del examen del cheque N°962267, aparece girado por \$3.213.000, de fecha 22.08.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, cobrado o pagado por caja el 23 de agosto de 2018 en oficina Concepción Plaza Acevedo, y al reverso manuscrito 9.844.026-7 **(Prueba Documental 108 N° 55)**.

Además, debe indicarse que el referido cheque N°962267 también aparece singularizado en la orden de pago N°1475 de fecha 22 de agosto de 2018 **(Prueba Documental N°206)**, por la cual se ordena pagar a Esenergy SPA la suma de \$437.671, pero dicha suma aparece depositada por DAS el 23 de agosto de 2018 en la cuenta de Esenergy, conforme a comprobante de depósito del Banco Chile que obra en el legajo.

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°962267 sirvió para pagar la factura N° 18112 de Buhos S.C.I. LTDA, pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Ravanal Mellado; y además, el comprobante de movimientos contables es de fecha 25.09.2018, esto es, con



posterioridad al cobro del cheque, ocurrido el 23 de agosto de 2018, lo que también es irregular, si se tiene en cuenta que el comprobante de movimientos contables da cuenta del egreso cuando se efectúa el pago.

15.- Decreto Pago N° 1541 (Otros Medios de Prueba N°2)

Fecha: 3 de septiembre de 2018

Páguese a: Laboratorio Chile S.A.

Suma de: \$ 3.575.474

Factura N°: 154356

Cheque: 962284

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los cuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 962284

Fecha pago: 03.09.2018

Recibí conforme: En blanco

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-1230.

Conforme al legajo, figura obligación presupuestaria de 10.09.2018 y comprobante de movimiento contables de la misma fecha, indicándose en esta última la factura 154356, ambos documentos por \$3.575.474; como también otro comprobante de movimientos contables de misma fecha, pero de distinta hora, en la cual se consigna además, el N° cheque 962284, documentos que aparecen emitidos o usuaria nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías son del año 2016, y una orden de compra y formulario recepción del año 2015, y 2 facturas que suman los \$3.575.474, entre ellas la N° 154356, de 09.11.2015, por \$3.241.560, esto es, por un monto menor.

No obstante, al analizar el cheque 962284, aparece girado por \$3.575.474, de fecha 03.09.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado o cobrado por caja el 3 de septiembre de 2018 en oficina Talcahuano, y al reverso se consigna manuscrito 9.844.026-7. **(Prueba Documental 108 N° 59).**

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N° 962284 sirvió para pagar la factura N° 154356 de Laboratorio Chile S.A., pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Ravanal Mellado; y además el decreto de pago sólo hace referencia a una factura, en circunstancias que en el legajo figuran 2 facturas, y si bien se encuentra entre ellas la factura N°154356, esta lo es por un monto de \$3.241.560, y no por el monto que refiere la orden de pago.

16.- Decreto Pago N° 1644 (Otros Medios de Prueba N°2)

Fecha: 3 de septiembre de 2018



Páguese a: Whinpharm SPA

Suma de: \$3.660.738

Factura N°: 50716

Cheque: 962263

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Juan Garcés Gallardo (S)

Visto bueno usuario: nsanmart

En los cuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 962263

Fecha pago: 03.09.2018

Recibí conforme: En blanco.

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-1287.

En legajo figura comprobante de movimiento contables de fecha 25.09.2018, por \$3.660.738, indicándose la factura 50716 de 12.10.2016; documento que aparece emitido o usuaria nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías son del año 2016 y 2017, y hay 4 facturas del año 2016, que totalizan \$3.660.738, entre ellas la N° 50.716, de 12.10.2016, por \$1.487.500, esto es, por un monto menor al indicado en la orden de pago.

Examinado el cheque N° 962263, aparece girado por \$3.660.738, de fecha 20.08.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado o cobrado por caja el 21 de agosto de 2018 en oficina Concepción Collao, al reverso manuscrito figura 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N° 54**).

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°962263 sirvió para pagar la factura N° 50716 de Whinpharm SPA, pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Ravanal Mellado; y además el decreto de pago sólo hace referencia a una factura, en circunstancias que en el legajo figuran 4 facturas, y si bien se encuentra entre ellas la factura N°50716, esta lo es por un monto de \$1.487.500, y no por el monto que refiere la orden de pago.

17.- Decreto Pago N° 1550 (Otros Medios de Prueba N°2)

Fecha: 4 de septiembre de 2018

Páguese a: Laboratorio Chile

Suma de: \$ 3.893.680

Factura N°: 155825

Cheque: 962287

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los cuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:



Figura pago con cheque N° 962287

Fecha pago: 04.09.2018

Recibí conforme: En blanco

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-1227.

En el legajo figura obligación presupuestaria de 10.09.2018 y comprobante de movimiento contables de la misma fecha, indicándose en esta última la factura 155825, ambos documentos por \$3.893.680; como también otro comprobante de movimientos contables de misma fecha, pero de distinta hora, en la cual se consigna además, el N° cheque 962287, documentos que aparecen emitidos o usuaria nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías son del año 2016, y 2 existen facturas que suman los \$3.893.680, entre ellas la N° 155825, de 19.11.2015, por \$2.290.750, por lo que lo es por monto menor al indicado en el decreto.

Al analizar el cheque N° 962287, se constata que fue girado por la suma de \$3.893.680, de fecha 04.09.2018, a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado o cobrado por caja el 4 de septiembre de 2018 en oficina Talcahuano, y al reverso manuscrito C.I. 8.242.907-7 (**Prueba Documental 108 N° 60**).

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N° 962287 sirvió para pagar la factura N° 155825 de Laboratorio Chile S.A., pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Paredes Montoya; y además el decreto de pago sólo hace referencia a una factura, en circunstancias que en el legajo figuran 2 facturas, y si bien se encuentra entre ellas la factura N°155825, esta lo es por un monto de \$2.290.750, y no por el monto que refiere la orden de pago.

18.- Decreto Pago N° 1588 (Otros Medios de prueba N° 2)

Fecha: 5 de septiembre de 2018

Páguese a: Laboratorio Chile S.A.

Suma de: \$3.587.731

Factura N°: 155859

Cheque: 1344005

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los recuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 1344005

Fecha pago: 05.09.2018

Recibí conforme: En blanco.

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-.



Dentro del legajo figura obligación presupuestaria de 10.09.2018 y comprobante de movimientos contables de la misma fecha, indicándose en esta última la factura 155859, ambos documentos por \$3.587.731; y otro comprobante de movimientos contables de la misma fecha, pero de distinta hora, por mismo monto en el cual se consigna además el cheque N°1344005; documentos que aparecen emitidos o usuaria nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías son del año 2016, y existen 2 facturas que suman los \$3.587.731, entre ellas la N° 155859, de 19.11.2015, por \$2.290.750, esto es, la factura singularizada en la orden es por un monto menor.

Al examinar cheque N° 1344005, se constata que fue girado por \$3.587.731, de fecha 05.09.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado o cobrado por caja el 6 de septiembre de 2018 en oficina Talcahuano, y al reverso manuscrito figura 9844.026-7 **(Prueba Documental 108 N° 62)**.

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°1344005 sirvió para pagar la factura N°155859 de Laboratorio Chile S.A., pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Ravanal Mellado; y además el decreto de pago sólo hace referencia a una factura, en circunstancias que en el legajo figuran 2 facturas, y si bien se encuentra entre ellas la factura N°155859, esta lo es por un monto de \$2.290.750, y no por el monto que refiere la orden de pago.

19.- Decreto Pago N° 1594 (Otros Medios de Prueba N° 2)

Fecha: 5 de septiembre de 2018

Páguese a: Opko Chile S.A

Suma de: \$3.476.847

Factura N°: 250002

Cheque: 1344003

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce.

Visto bueno usuario: nsanmart

En los recuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 1344003

Fecha pago: 05.09.2018

Recibí conforme: En blanco.

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-1229.

En el legajo figura obligación presupuestaria de 10.09.2018, por \$3.476.847 y comprobante de movimiento contables de 10.09.2018, por misma suma, indicándose factura 250002, y otro comprobante de movimientos contables de fecha 25.09.2018, emitido en relación a **Ethon Pharmaceuticals**, en el cual se consigna factura 74656 y cheque 1344029, por monto de



\$3.681.789; por lo que es evidente que es documentación que corresponde a otro legajo; documentos que aparecen emitidos por usuaria nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías son del año 2016 y también del año 2015, y 3 facturas de OPKO Chile S.A., que suman los \$3.476.847, entre ellas la N° 250002, de 29.10.2015, por \$450.677, por monto menor a la orden de pago.

Que al analizar el cheque N° 1344003, aparece girado por \$3.476.847, con fecha 05.09.2018, a nombre de Alejandro Cabello Bustos, y figura pagado o cobrado el 6 de septiembre de 2018 en oficina Talcahuano, y al reverso se indica manuscrito el número 14.372.476-K (**Prueba Documental 108 N°63**).

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°1344003 sirvió para pagar la factura N° 250002 de Opko Chile S.A., pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Alejandro Cabello Bustos; y además el decreto de pago sólo hace referencia a una factura, en circunstancias que en el legajo figuran 3 facturas, y si bien se encuentra entre ellas la factura N°250002, esta lo es por un monto de \$450.677, y no por el monto que refiere la orden de pago.

20.- Decreto Pago N° 1587 (Otros Medios de Prueba N° 2)

Fecha: 5 de septiembre de 2018

Páguese a: Pharma Investi de Chile S.A.

Suma de: \$3.111.255

Factura N°: 64273

Cheque: 1344001

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los recuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 1344001

Fecha pago: 05.09.2018

Recibí conforme: En blanco

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-.

En el legajo figura obligación presupuestaria de 10.09.2018 y comprobante de movimiento contables de la misma fecha, indicándose en esta última la factura 64273, ambos documentos por \$3.111.255; como también otro comprobante de movimientos contables de misma fecha, pero de distinta hora, en la cual se consigna además, el cheque N°1344001, documentos que aparecen emitidos por usuaria nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías son del año 2014 y 2016, e incluso hay un comprobante de movimiento contable de 4.03.2014, y se consignan 3 facturas, las N° 64.237, de 09.10.2014; N° 110762, de 21.03.2016, y N° 64273, de 10.10.2014, por la suma de \$1.499.400, por lo



que además de consignarse una sola factura en el decreto, esta lo es por un monto inferior.

Sin embargo, al analizar el cheque N° Cheque 1344001, se constata que fue girado por \$3.111.255.-, de fecha 05.09.2018, a nombre Nubia San Martín Pavez, pagado el 5 de septiembre de 2018 en oficina de Talcahuano, y al reverso manuscrito figura 8.203.804-8 (**Prueba Documental 108 N°61**).

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N° 1344001 sirvió para pagar la factura N° 64273 de Pharma Investi de Chile S.A., pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Nubia San Martín Pavez; y además el decreto de pago sólo hace referencia a una factura, en circunstancias que en el legajo figuran 3 facturas, y si bien se encuentra entre ellas la factura N°64273, esta lo es por un monto de \$1.499.400, y no por el monto que refiere la orden de pago.

21.- Decreto Pago N° 1589 (OTROS MEDIOS N° 2)

Fecha: 10 de septiembre de 2018

Páguese a: Ethon Pharmaceuticals

Suma de: \$3.681.789

Factura N°: 74656

Cheque: 1344029

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce.

Visto bueno usuario: nsanmart

En los recuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 1344029

Fecha pago: 10.09.2018

Recibí conforme: En blanco.

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-1284.

Dentro del legajo figura obligación comprobante de movimiento contables de fecha 10.09.2018, por \$3.681.789, en la que se indica factura 74656, documentos en aparece usuaria nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías son del año 2016, y existen 2 facturas que suman los \$3.681.789, entre ellas la N° 74656, de 27.04.2016, por \$753.199, por lo que además de consignarse una sola factura, lo es por monto inferior.

Además, al examinar la copia del cheque N°1344029, se constata que fue girado por \$3.681.789, con fecha 10.09.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, el cual fue pagado o cobrado por caja el 10.09.2018 en oficina Talcahuano, y al reverso manuscrito existe número 9844.026-7 (**Prueba Documental 112 N° 3**).



De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°1344029 sirvió para pagar la factura N°74656 de Ethon Pharmaceuticals, pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Ravanal Mellado; y además el decreto de pago sólo hace referencia a una factura, en circunstancias que en el legajo figuran 2 facturas, y si bien se encuentra entre ellas la factura N°74656, esta lo es por un monto de \$753.199, y no por el monto que refiere la orden de pago.

22.- Decreto Pago N° 1634 (OTROS MEDIOS N° 2)

Fecha: 13 septiembre 2018

Páguese a: Laboratorio Chile S.A

Suma de: \$3.439.930

Factura N°: 214403

Cheque: 1344035

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Juan Garcés Gallardo (S)

Visto bueno usuario: nsanmart

En los recuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 1344035

Fecha pago: 13.09.2018

Recibí conforme: En blanco

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-1290.

En el legajo figura comprobante de movimiento contables de 25.09.2018, indicándose la factura 214403, de 27.12.2016, ambos documentos por \$3.439.930; como también otro comprobante de movimientos contables de misma fecha, pero de distinta hora, en la cual se consigna además, el cheque N°1344035, documentos que aparecen emitidos por usuaria nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra es del año 2016, y formulario recepción mercaderías del año 2016, y se consignan 2 facturas que suman los \$3.432.930, entre ellas la N° 214403, de 27.12.2016, por \$219.930, esto es, por un monto menor.

Al revisar cheque N°1344035, se constata que fue girado por \$3.439.930, fechado 13.09.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado o cobrado por caja el 13 de septiembre de 2018 en oficina Concepción Collao, y figura manuscrito 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N° 66**).

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°1344035 sirvió para pagar la factura N° 214403 de Laboratorio Chile S.A., pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Ravanal Mellado; y además el decreto de pago sólo hace referencia a una factura, en circunstancias que en el legajo figuran 2 facturas, y si bien se encuentra entre ellas la factura



N°214403, esta lo es por un monto de \$219.930, y no por el monto que refiere la orden de pago.

23.- Decreto Pago N° 1626 (Otros Medios de Prueba N° 2)

Fecha: 14 de septiembre de 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$ 3.825.731

Factura N°: 646489

Cheque: 1344036

Firmado jefe finanzas; PP Alejandro Cabello Bustos, según peritaje de Pacheco es firma de Nubia San Martín

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce.

Visto bueno usuario: nsanmart

En los cuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 1344036

Fecha pago: 14.9.2018

Recibí conforme: En blanco.

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-.

En el legajo figura comprobante de movimiento contables de 14.09.2018, indicándose factura 646489, documento por \$3825.731, como también otro comprobante de movimientos contables de misma fecha, distinta hora, en el cual además indica cheque N° 1344036; y otro comprobante de movimientos contables de fecha 25.09.2018, todos por \$3.825.731, documentos que aparecen emitidos por usuaria nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías son de abril y mayo de 2018 (orden de compra tiene tarjada fecha y anotada otra), y figuran 2 facturas que suman los \$3.825.731, N° 658839 de 4.06.2018, y N° 656498, de 18.05.2018; sin que figure ninguna factura N° 646489 entre tales antecedentes.

Del examen del cheque N° 1344036, se constata que fue girado por \$3.825.731, fechado el 14.09.2018, a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado o cobrado por caja el 14 de septiembre de 2018 en oficina Talcahuano, y al reverso manuscrito figura anotado 8.242.907-7 (**Prueba Documental 108 N° 65**).

No obstante los antecedentes referidos, se debe precisar que si bien en el decreto u orden de pago aparece un pie de firma a nombre de Alejandro Cabello Bustos, lo cierto es que al respecto existe un peritaje evacuado por Elizabeth Pacheco Coke que señaló que la firma allí estampada es una firma auténtica de Nubia San Martín Pavez, quien firma “por” , lo cual ratificó al serle exhibido el decreto 1626 en cuestión; motivo por el cual no se ha acreditado la intervención del acusado Cabello Bustos en los hechos signados como Hecho 5 N° 23, y, que fueran calificados como falsificación de instrumento público por los acusadores,



y, por lo mismo, corresponde a su respecto una decisión absolutoria, según se dirá más adelante.

La conclusión anterior, no se ve alterada por la existencia del referido cheque 1344036, extendido a nombre de Pedro Paredes Montoya, toda vez que dicho documento sirve para el establecimiento de otro delito imputado por los acusadores, como Hecho 2.23, conforme se indica en otro apartado de esta sentencia.

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°1344036 sirvió para pagar la factura N° 646489 de Laboratorio Andrómaco, pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Paredes Montoya; y además el decreto de pago sólo hace referencia a una factura, en circunstancias que en el legajo figuran 2 facturas, sin que ninguna de estas corresponda a la factura N° 646489; conclusión de falsedad que es sin perjuicio de que a su respecto no se encuentre establecida la participación del acusado Cabello Bustos.

24.- Decreto Pago N° 1635 (Prueba Documental N°212)

Fecha: 20 de septiembre de 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$3.746.120

Factura N°: 616179

Cheque: 1344039

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los recuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 1344039

Fecha pago: 20.09.2018

Recibí conforme: En blanco

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-1292.

En el legajo figura comprobante de movimiento contables de 25.09.2018, indicándose factura 616179, documento por \$3.746.120; documentos que aparecen emitidos por usuaria nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra de 27.11.2017 (Fecha tarjada y con manuscrito 1.06.2018), otra orden interna de 30 mayo 2018, formulario recepción mercaderías de 18 junio 2018, y 3 facturas, la número 626179, de 28.11.2017, por \$1.074.570, N°628199 de 13.12.2017, por \$642.600, y 610573 por \$2.028.950, que tiene fechas entrega agosto, noviembre y diciembre 2017, no existiendo en el legajo la factura N° 616179 que se refiere en la orden de pago.

Al examinar el cheque N° 1344039, aparece extendido por \$3.746.120, fechado el 20.09.2018, a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado o cobrado



por caja el 20 de septiembre en oficina Talcahuano, y en el reverso manuscrito figura número 8.242.907-7 (Prueba Documental 108 N°67).

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°1344039 sirvió para pagar la factura N° 616179 de Laboratorio Andrómaco, pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Paredes Montoya; y además el decreto de pago sólo hace referencia a una factura, en circunstancias que en el legajo figuran 3 facturas, sin que ninguna de estas corresponda a la factura N° 616179 que se refiere en la orden de pago.

25.- Decreto Pago N° 1643 (Otros Medios de Prueba N° 2)

Fecha: 20 de septiembre de 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$ 3.560.480

Factura N°: 647811

Cheque: 1344040

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director (S): Juan Garcés Gallardo

Visto bueno usuario: nsanmart

En los cuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 1344040

Fecha pago: 20.09.2018

Recibí conforme: En blanco

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-1293.

Dentro del legajo figura comprobante de movimiento contables de fecha 25.09.2018, indicándose factura 647811 de 11.04.2018, documento por \$3.560.480; como también otro comprobante de movimientos contables de misma fecha, pero de distinta hora, en la cual se consigna además, el N° cheque 1344040, documentos que aparecen emitidos por usuaria nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías son de marzo 2018, y factura que se adjunta es N° 648711, de 11.04.2018, por \$3.560.480, por lo que no se corresponde con la que se indica en el decreto.

Al examinar el cheque N° 1344040, aparece girado por \$3.560.480, de fecha 20.09.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado o cobrado por caja el 21 de septiembre de 2018, en oficina Concepción Collao, y al reverso figura manuscrito 9.844.026-7 (**Prueba Documental N° 108 N° 68**).

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°1344040 sirvió para pagar la factura N°647811 de Laboratorio Andrómaco, pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Ravanal Mellado; y



además la factura que se adjunta al legajo es la N° 648711, de 11.04.2018, por \$3.560.480, por lo que no se corresponde con la que se indica en el decreto.

26.- Decreto Pago N°1660 (Prueba Documental N°213)

Fecha: 24 de septiembre de 2018

Páguese a: Laboratorio Chile

Suma de: \$3.877.020

Factura N°: 235235

Cheque N° 1344052

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado director: Juan Garcés Gallardo

Visto bueno usuario: nsanmart

En los recuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 1344052

Fecha pago: 24.09.2018

Recibí conforme: Hay una firma ilegible.

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-1312.

En el legajo figura orden compra interna y otra documentación año 2017 y dos facturas de distinto monto que suman \$3.877.020, entre ellas la N° 235235, por \$514.080, ambas del año 2017 y sus respectivas guías de despacho; hay dos comprobantes de movimiento contable por \$3.877.020, de la misma fecha 27.09.2018, pero de horas distintas, en el cual se sindicaron la factura y cheque consignado en el decreto de pago, con la diferencia que en uno de dichos decretos se indica la fecha de la factura (03.05.2017) y en el otro no; obligación presupuestaria de 27 de septiembre de 2018, por monto de \$3.877.020; por lo que en el decreto se sindicó una sola factura y por un monto menor.

Al analizar cheque N° 1344052, aparece extendido por \$3.877.020, fechado el 25.09.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado o cobrado por caja el 25 de septiembre de 2018, en oficina de Talcahuano, al reverso manuscrito 9.844.026-7 **(Prueba Documental 108 N° 69)**.

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°1344052 sirvió para pagar la factura N° 235235 de Laboratorio Chile, pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Ravanal Mellado; y además el decreto de pago sólo hace referencia a una factura, en circunstancias que en el legajo figuran 2 facturas, y si bien se encuentra entre ellas la factura N°235235, esta lo es por un monto de \$514.080, y no por el monto que refiere la orden de pago.

27.- Decreto Pago N° 1690 (Prueba Documental N° 213)

Fecha: 2 de octubre de 2018

Páguese a: Winpharm SPA

Suma de: \$3.962.700



Factura N°: 50714

Cheque 1344065

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los cuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 1344065

Fecha pago: 2.10.2018

Recibí conforme: En blanco.

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-1344.

Dentro del legajo figura comprobante de movimientos contables de 4.10.2018, indicándose en esta última la factura N° 50714 y cheque 1344065 por \$3.962.700, nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías, son del año 2016 y 2017, y factura 50714 por monto indicado, de fecha 12.10.2016.

Examinado el cheque N° 1344065, aparece extendido por \$3.962.700, fechado el 02.10.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado o cobrado por caja el 3 de octubre de 2018, en sucursal Concepción Plaza Acevedo, y al reverso figura manuscrito 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N°72**).

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°1344065 sirvió para pagar la factura N° 50714 de Winpharm SPA, pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Ravanal Mellado.

28.- Decreto Pago N° 1712 (Prueba Documental N° 212)

Fecha: 4 de octubre 2018

Páguese a: Etex Farmacéutica Limitada

Suma de: \$3.320.100

Factura N°: 1034439

Cheque: No se indica

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los cuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 1344082 (Escrito con lápiz grafito)

Fecha pago: No se indica

Recibí conforme: Figura Ricardo Valdivia, con N° Rut y una firma ilegible

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-1349 (este último escrito con lápiz grafito).

En el legajo figura obligación presupuestaria de 4.10.2018 y comprobante de movimientos contables de la misma fecha, indicándose en esta última la



factura 1034439 de 10.11.2014, ambos documentos por \$3.320.100; como también otro comprobante de movimientos contables de misma fecha, pero de distinta hora, en la cual se consigna además, el N° cheque 1344082, documentos que aparecen emitidos por usuaria nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías son del año 2014, y existen 4 facturas, ninguna de las cuales es la signada en el decreto, que tienen timbres de recibido del año 2014, y otros timbres de pagado con fechas de 4 octubre de 2018 en manuscrito, siendo la factura N° 1034939, por \$499.800, la factura que más se asemeja al número consignado en el decreto de pago.

Además, al analizar el cheque N° 1344082, fue extendido por \$3.320.100, fechado el 04.10.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado o cobrado por caja el 5 de octubre de 2018 en oficina Concepción Plaza Acevedo, y figura en manuscrito número 9.844.026-7 **(Prueba Documental 108 N° 73)**.

Por los antecedentes referidos, se trata de un decreto pago falso, pues da cuenta de haber servido para pagar la factura N° 1034439 de Etex Farmacéutica Limitada, pero el cheque que se refiere haber sido empleado para el pago de dicha factura, el N° 1344082, fue girado a nombre de Pedro Ravanal Mellado y cobrado por caja por éste; y debiendo singularizarse en el decreto de pago al momento de su confección el N° de cheque, en este caso no se hizo, y solo se anotó de manera manuscrita en el recuadro final; y, además, dentro de los antecedentes que conforman el respectivo legajo, figuran cuatro facturas, ninguna de las cuales corresponde a la señalada en el decreto, por cuanto solo existe una factura cuyo número se asemeja, la N° 1034939 por \$499.800, que tampoco se condice con el valor total de la orden de pago.

29.- Decreto Pago N° 1729 (Prueba Documental N° 213)

Fecha: 8 octubre 2018

Páguese a: Laboratorio Chile S.A.

Suma de: \$3.760.995

Factura N°: 158856

Cheque N°: 1344089

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: acabello

En los recuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N°1344089

Fecha pago: 8.10.2018

Recibí conforme: En blanco

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-1367

En el legajo figura obligación presupuestaria de 4.10.2018 y comprobante de movimientos contables de la misma fecha, indicándose en esta última la



factura 158856 del 16.12.2015, ambos documentos por \$3.760.995, en que figura como usuario nsanmart; como también otros dos comprobantes de movimientos contables de fecha 9.10.2018, a distintas horas, pero ahora en el comprobante de movimientos contables, al indicarse el número de la factura, no se indica la fecha, y aparece como usuario acabello; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías y facturas son de años anteriores, 2015 y 2016; hay varias facturas por distintas compras, que suman el total, entre ellas la 158856, por \$30.345.

Al examinar el cheque N°1344089, se constata que fue extendido por \$3.760.995, fechado el 08.10.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado o cobrado por caja el 8 de octubre de 2018, en oficina Concepción Plaza Acevedo, y al reverso figura manuscrito 9844026-7 **(Prueba Documental 108 N° 74)**.

Que en atención a que en la confección del presente decreto u orden de pago no consta la intervención de la acusada San Martín Pavez, dado que no figura su identificación de usuario, sino que la de acabello, que corresponde al acusado Alejandro Cabello Bustos, el cual, por lo demás, es quien firma como Jefe de Finanzas, no se puede dar por acreditada la intervención de la encartada San Martín Pavez en los hechos signados como Hecho 5 N° 29, y, que fueran calificados como falsificación de instrumento público por los acusadores, y, por lo mismo, corresponde a su respecto una decisión absolutoria, según se dirá más adelante.

La conclusión anterior, no se ve alterada por la existencia del referido cheque 1344089, extendido a nombre de Pedro Ravanal Mellado, toda vez que dicho documento sirve para el establecimiento de otro delito imputado por los acusadores, como Hecho 4.62, conforme se indica en otro apartado de esta sentencia.

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N° 1344089 sirvió para pagar la factura N° 158856 de Laboratorio Chile S.A, pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Ravanal Mellado; debiendo agregarse que dentro del legajo se encuentran adjuntas varias facturas, y si bien figura entre ellas la N° 158856, lo es por la suma de \$30.345, esto es, por un monto ostensiblemente menor al valor que el decreto ordena pagar y el monto del cheque girado; conclusión de falsedad que es sin perjuicio de que a su respecto no se encuentre establecida la participación de la acusada San Martín Pavez.

30.- Decreto Pago N° 1738 (Prueba Documental N° 213)

Fecha: 11 de octubre de 2018

Páguese a: Lab Chile S.A.

Suma de: \$3.909.627

Factura N°155847

Cheque N° 1344096



Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos
Director: Armando Domínguez Ponce
Visto bueno usuario: nsanmart

En los cuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N°1344096

Fecha pago: 11.10.2018

Recibí conforme: En blanco

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-1381

Dentro del legajo figura orden compra interna de fecha 4 de febrero de 2016, varias facturas del 2015 y documentación de ese año y del 2016, entre ellas la factura indicada en el decreto de pago, pero por **\$124.950**, movimiento contable de fecha 4.10.2018, por \$3.909.627 en que figura factura 155847 de 19.11.2015, y obligación presupuestaria de 4.10.2018, en que se incluyen 9 compras, por total de \$3.909.627, emitido por nsanmart, y otro comprobante movimiento contable de 16.10.2018, en que además de referir la misma factura, agrega número de cheque 1344096.

Del examen del cheque N° 1344096, se constata que fue girado por \$3.909.627, fechado el 12.10.2018, a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado o cobrado el 12 de octubre de 2018, en la oficina Talcahuano, al reverso manuscrito 8.242.907-7 **(Prueba Documental 108 N°75)**.

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°1344096 sirvió para pagar la factura N°155847 de Laboratorio Chile S.A., pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Paredes Montoya; y además el decreto de pago sólo hace referencia a una factura, en circunstancias que en el legajo figuran varias facturas, y si bien se encuentra entre ellas la factura N°155847, ésta lo es por un monto de \$124.950, esto es, por un monto ostensiblemente menor al valor que el decreto ordena pagar y el monto del cheque girado.

31.- Decreto Pago N°1747 (Prueba Documental N° 213)

Fecha: 17 de octubre de 2018

Páguese a: Laboratorio Chile SA

Suma de: \$3.612.835

Factura N°: 155864

Cheque: 1344100

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los cuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N°1344100



Fecha pago: 17.10.2018

Recibí conforme: En blanco.

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-1388.

En el legajo figura obligación presupuestaria de 17.10.2018 y comprobante de movimientos contables de la misma fecha, indicándose en esta última la factura 158864 del 19.11.2015, ambos documentos por \$3.612.835; como también otro comprobante de movimientos contables de misma fecha, pero de distinta hora, en la cual se consigna además, el N° cheque 1344100; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías son del año 2016, y 2 hay facturas que suman los \$3.212.835, entre ellas la N° 155864, de fecha 19.11.2015, por la suma de \$ 435.540, esto es, la factura referida en el decreto de pago es de monto menor.

Además, al analizar el cheque N° 1344100, se constata que fue extendido por \$3.612.835, fechado el 17.10.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado o cobrado por caja el 18 de octubre de 2018, en oficina Concepción Plaza Acevedo, y figura anotación manuscrita 9.844.026-7 **(Prueba Documental 108 N° 76).**

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N° 1344100 sirvió para pagar la factura N°155864 de Laboratorio Chile S.A, pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Ravanal Mellado; y además el decreto de pago sólo hace referencia a una factura, en circunstancias que en el legajo figuran dos facturas, y si bien se encuentra entre ellas la factura N°155864, ésta lo es por un monto de \$435.540, esto es, por un monto ostensiblemente menor al valor que el decreto ordena pagar y el monto del cheque girado.

32.- Decreto Pago N° 1754 (Prueba Documental N° 213)

Fecha: 22 de octubre de 2018

Páguese a: Ethon Farmaceuticals

Suma de: \$3.616.100

Factura N°: 74221

Cheque: 1344104

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado director Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los recuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 1344104

Fecha pago: 22.10.2018

Recibí conforme: En blanco.

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-1394.



En el legajo figura obligación presupuestaria de 17.10.2018 y comprobante de movimiento contables de 22.10.2018, indicándose en esta última la factura 74221 del 19.11.2015 y cheque 1344100, ambos documentos por \$3.616.100 (figura en ellos nsanmart); como también otro comprobante de movimientos contables de misma fecha, pero de distinta hora, en la cual se consigna además, el N° cheque 1344100; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías son del año 2016, y 8 facturas que suman más del monto del cheque, entre ellas la N° 74221, por \$157.574, con guías de despacho año 2016, esto es, en el decreto sólo se singulariza una sola factura y lo es por un monto menor a la suma que ordena pagar.

Revisado el cheque N°1344104, éste fue girado por \$3.616.100, fechado el 22.10.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado o cobrado por caja el 22 de octubre de 2018, en oficina Concepción Collao, y figura manuscrito el número 9.844.026-7 (**Prueba Documental 108 N° 77**).

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°1344104 sirvió para pagar la factura N°74221 de Ethon Pharmaceuticals, pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Ravanal Mellado; y además el decreto de pago sólo hace referencia a una factura, en circunstancias que en el legajo figuran ocho facturas, y si bien se encuentra entre ellas la factura N°74221, ésta lo es por un monto de \$157.574, esto es, por un monto distinto y ostensiblemente menor al valor que el decreto ordena pagar y el valor del cheque girado.

33.- Decreto Pago N°1758 (Prueba Documental N°213)

Fecha: 23 de octubre de 2018

Páguese a: Winpharm SPA

Suma de: \$3.881.780

Factura N°: 45518

Cheque N°: 1344106

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los recuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N°1344106

Fecha pago: 23.10.2018

Recibí conforme: En blanco

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-1396.

Revisado el legajo, figura obligación presupuestaria del 23.10.2018 y comprobante de movimiento contables de la misma fecha, indicándose en esta última la factura 45518 del 19.05.2016, ambos documentos por \$3.881.780;



como también otro comprobante de movimientos contables de misma fecha, pero de distinta hora, en la cual se consigna además, el cheque N° 1344106; documentos que aparecen emitidos o usuaria nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías son del año 2016, y hay 4 facturas que suman los \$3.881.780, entre ellas la N° 45518, de fecha 19.05.2016, por la suma de \$1.349.460, esto es, en el decreto de pago no se consignaron todas las facturas, y la indicada, lo es por un monto menor al que se ordena pagar.

Revisado el cheque N° 1344106, figura extendido por \$3.881.780, fechado el 23.10.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado o cobrado por caja el 24 de octubre de 2018, en oficina Concepción Bio Bio, y al reverso manuscrito el número 9.844.026-7 **(Prueba Documental 108 N°78)**.

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°1344106 sirvió para pagar la factura N° 45518 de Winpharm SPA, pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Pedro Ravanal Mellado; y además el decreto de pago sólo hace referencia a una factura, en circunstancias que en el legajo figuran cuatro facturas, y si bien se encuentra entre ellas la factura N°45518, ésta lo es por un monto de \$1.348.460, esto es, por un monto distinto al que el decreto ordena pagar y el valor del cheque girado.

34.- Decreto Pago N° 1776 (Prueba Documental N° 213)

Fecha: 24 de octubre de 2018

Páguese a: Lab. Silesia S.A.

Suma de: \$3.539.885

Factura N°: 305984

Cheque: N° 1344107

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos.

Firmado director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: nsanmart

En los recuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 1344107

Fecha pago: 24.10.2018

Recibí conforme: En blanco

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-1410.

Dentro del legajo figura obligación presupuestaria de 24.10.2018 y comprobante de movimiento contables de la misma fecha, indicándose en esta última la factura 305984 del 01.07.2015, ambos documentos por \$3.539.885; como también otro comprobante de movimientos contables de misma fecha, pero de distinta hora, en la cual se consigna además, el N° cheque 1344107, documentos en los que aparece nsanmart; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, son de años 2014, 2015 y 2016,



formulario recepción mercaderías de años 2014 y 2015, y 20 facturas, entre ellas la N° 305984, de fecha 1.07.2015, por \$153.938.

Revisado el cheque N°1344107, aparece girado por \$3.539.985, fechado el 24.10.2018, a nombre de Nubia San Martin Pavez, pagado o cobrado por caja el 24 de octubre de 2018 en oficina Talcahuano, y manuscrito figura el número 8.203.869-8 (**Prueba Documental 108 N° 79**).

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°1344107 sirvió para pagar la factura N°305984 de Laboratorio Silesia S.A., pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Nubia San Martín Pavez; y además el decreto de pago sólo hace referencia a una factura, en circunstancias que en el legajo figuran veinte facturas, y si bien se encuentra entre ellas la factura N°305984, ésta lo es por un monto de \$153.938, esto es, por un monto distinto y ostensiblemente menor al que el decreto ordena pagar y el valor del cheque girado.

B) En relación al Hecho N° 6 de la acusación fiscal y particular, imputado al acusado Cabello Bustos, el Ministerio Público incorporó el siguiente decreto de pago, con sus respectivos legajos y la información que a continuación se detalla:

Decreto Pago N°1013 (Prueba Documental N° 212)

Fecha: 12 de junio 2018

Páguese a: Laboratorio Andrómaco

Suma de: \$ 3.560.480

Factura N°: 648696

Cheque: No se indica

Firmado jefe finanzas: Alejandro Cabello Bustos

Firmado Director: Armando Domínguez Ponce

Visto bueno usuario: acabello

En los recuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 620368

Fecha pago: 12.06.2018

Recibí conforme: En blanco.

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-.

Dentro del legajo figura comprobante de movimientos contables de fecha 12.06.2018, por monto de \$3.560.480, indicándose la factura 648696, como también otro comprobante de movimientos contables de misma fecha, pero de distinta hora, en la cual se consigna además, el N° cheque 620368, documentos que aparecen emitidos por usuario acabello; no obstante la documentación respaldante, como orden compra interna, formulario recepción mercaderías son



de marzo 2018, y se encuentra adjunta factura N°648696, de 11.04.2018, por \$3.560.480.

Revisado el cheque N° 620368, se constata que fue girado por \$3.560.480, de fecha 12.06.2018, a nombre de Pedro Paredes Montoya, pagado o cobrado por caja el 12 de junio de 2018 en oficina Talcahuano, y al reverso figura número manuscrito 8.242.907-7 (**Prueba Documental 108 N° 40**).

Por los antecedentes referidos, se trata de un decreto pago falso, pues da cuenta de haber servido para pagar la factura N° 648696 de Laboratorio Andrómaco, pero el cheque que se refiere haber sido empleado para el pago de dicha factura, el N°620368, fue girado a nombre de Pedro Paredes Montoya y cobrado por caja por éste; y debiendo singularizarse en el decreto de pago al momento de su confección el N° de cheque, en este caso no se hizo, y solo se anotó de manera manuscrita en el recuadro final.

C) En relación al Hecho N° 7 de la acusación fiscal y particular, imputado a la acusada San Martín Pavez, el Ministerio Público incorporó el siguiente decreto de pago, con sus respectivos legajos y la información que a continuación se detalla:

Decreto Pago N° 235 (Prueba Documental N° 212).

Fecha: 1 de febrero 2019

Páguese a: Nipro Medical Corporation

Suma de: \$3.513.753

Facturas N°: 71405 y 71040

Cheque: 1344113

Firmado jefe (S) finanzas: Nubia San Martín Pavez

Firmado Director(S): Juan Garcés Gallardo

Visto bueno usuario: nsanmart

En los recuadros existentes al final, se dejó consignada en forma manuscrita la siguiente información:

Figura pago con cheque N° 1344113

Fecha pago: Solo se indica "29"

Recibí conforme: Tiene un timbre de I Municipalidad de Talcahuano, Direcc. Adm. De Salud, que dice Pagado, sin fecha ni ninguna otra anotación.

Refiere que el pago se imputó a la cuenta corriente terminada en 161 y como número de egreso se consigna 20-155, y sobre el último 5, existe el número 7.

Dentro del legajo se encuentra obligación presupuestaria de 29.10.2018 y comprobante de movimientos contables de la misma fecha, indicándose en esta última la factura 71045, de fecha 27.01.2017, ambos documentos por \$3.513.753; y en ambos aparece usuario nsanmart; como también hay otro comprobante de movimientos contables de fecha 19.02.2019, por el mismo monto ya señalado, en el cual se indican las facturas 71405 y 71040, y el cheque 1344113, documento en el cual figura nsanmart como usuario.



Figuran en el legajo documentación respaldante, dos órdenes de compra que suman el total del cheque, del 23.01.2017, dos formularios de recepción de mercaderías, en las que se citan las facturas 71045 y 71040, dando cuenta recepción de efectuada el 31.01.2017. Se encuentran adjuntas las facturas 71045, de fecha 27.01.2017, por \$3.007.689, y 71040, de 27.01.2017, por \$506.064, que suman el total del cheque.

Revisado el cheque 1344113, se constata que fue girado por \$3.513.753, fechado el 29.10.2018, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, pagado o cobrado por caja el 30 de octubre de 2019, en oficina Concepción Bio Bio, y manuscrito figura el número 9.844.026-7 (Prueba Documental 108 N°81).

Ha de señalarse que dentro del legajo, también existe acompañado el Decreto de Pago N° 1806, de fecha 29 de octubre de 2018, en favor del mismo laboratorio Nipro Medical Corporation, por el mismo monto, en el cual se hace referencia a Factura 71045 y al cheque 1344113, en que aparece como usuario nsanmart, y es firmado por Alejandro Cabello Bustos como jefe de finanzas y Armando Domínguez Ponce como director. No aparece al final con qué cheque se paga, ni fecha de pago; y hay una firma ilegible en el ítem Recibí Conforme.

También dentro del legajo figura un comprobante de movimientos contables de 29 de octubre de 2018, por monto de \$3.513.753, en que se refiere una factura N° 71045 de 27.01.2017, y obligación presupuestaria de la misma fecha, por mismo monto, y en ambos figura nsanmart; y está la factura N°71045, de 27.01.2017 por el valor señalado, y su respectiva orden de compra de 23.01.2017, y recepción de mercaderías, de dicha factura, el 30.01.2017

De esta manera se trata de un decreto de pago falso, porque señala que el cheque N°1344113 sirvió para pagar las facturas N°71405 y 71040 de Nipro Medical Corporation, pero ese cheque no fue destinado a pagar dicha factura ni al referido proveedor, sino que fue cobrado por caja por Nubia San Martín Pavez.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que en cuanto a la naturaleza documentos públicos o auténticos de los denominados decretos u órdenes de pago tantas veces referidos, ha de señalarse que no ha habido cuestionamiento alguno por parte de las defensas, sin perjuicio de lo cual ha de señalarse que siguiendo al profesor Alfredo Etcheberry, "... documento público, para los efectos penales, es todo documento a cuya formación o custodia debe concurrir un funcionario público obrando en su carácter de tal y en el cumplimiento de sus funciones legales" ("Derecho Penal", Parte Especial, Tomo IV, página 160, Tercera Edición); características que reúnen con creces los referidos decretos de pago, habida consideración que no hay duda que se trata de actos administrativos, emanados de ciertas autoridades o funcionarios públicos que los suscriben, que en el caso eran el Jefe del Departamento de Finanzas y el Director de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Talcahuano, documentos que por lo demás disponen u ordenan el pago con fondos o caudales públicos de los bienes o servicios adquiridos por el ente municipal para el cumplimiento de su función



pública, que en el caso preciso está relacionado con la satisfacción de las necesidades de salud primaria de la comuna de Talcahuano; tal como lo indica el fiscalizador Quezada Guenante, al manifestar el decreto de pago es un acto administrativo por el cual un municipio o una DAS autoriza o da la orden de pago a un particular o a un proveedor, que al firmar un funcionario un decreto de pago, está dando fe de ello; totalmente coincidente con lo referido por Urrutia Sáez, en orden a que el decreto de pago es un acto administrativo que da fe que lo que se está pagando a una persona natural o jurídica es real.

Que conforme a lo consignado en la documentación analizada, y el mérito de las declaraciones de los testigos, entre ellos los fiscalizadores de la Contraloría Regional del Bío Bío, señores Urrutia Sáez y Quezada Guenante, los decretos de pago debían de llevar dos firmas, la del acusado Cabello Bustos, en su calidad de jefe del departamento de finanzas, como también debían ser firmados por el Director de la DAS, Armando Domínguez Ponce, que eran los titulares de dichos cargos; habiéndose igualmente establecido, que ante la ausencia de los mismos, firmaban las órdenes de pago Nubia San Martín Pavez, en calidad de jefe de finanzas subrogante, y Juan Garcés Gallardo, en calidad de director subrogante, como expresamente lo precisó Urrutia Sáez, quien además agregó que no estaba regulado quién debía firmar primero el decreto.

Igualmente se estableció que para la confección de los decretos de pago se ingresaba la información pertinente a un sistema computacional, a cuyo respecto quedaba consignada la responsabilidad en la confección del mismo, mediante la identificación del usuario que había ingresado al sistema, de quien prepara el decreto de pago; como lo afirmó Urrutia Sáez, en orden a que el decreto de pago es emitido por la persona que está asignada para dicho proceso, que es una persona de finanzas, y que en el caso específico de la DAS era Nubia San Martín Pavez, pues en la carátula del mismo van sus iniciales y visto bueno de quien lo generó, hay un recuadro que indica el usuario, que se ingresa la información al Sistema Modular Contable (SMC) y luego se imprime el formulario y se incluyen los campos que se necesitan, se complementa manualmente con el número de cheque, número de egreso y las firmas; y si bien Urrutia Sáez indicó que no tenía constancia de dónde se encontraba regulada la obligación o funciones de Nubia San Martín de ingresar la información al SMC, afirma que sí estaba realizando tal función, porque en los decretos de pago estaba su inicial y V°B°.

A este respecto ha de señalarse que se cuenta con el **Oficio 712/2021 de la Jefa (R) del Departamento de Salud de la Municipalidad de Talcahuano, doña Carolina Vera Sepúlveda, de fecha 6 de diciembre de 2021**, por medio del cual se adjunta un **Memorándum N° 199, de la misma fecha**, suscrito por Gustavo Martínez Parra, Encargado de Informática de la DAS, por el cual se consigna que en el Sistema Modular de Contabilidad Computacional de dicho municipio, el nombre de usuario “nsanmart”



corresponde Nubia Edith San Martín Pavez, Rut 8.203.869-8; y el usuario “acabello”, corresponde a Alejandro David Cabello Bustos, Rut 14.372.476-K (**Prueba Documental N°193**).

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que en cuanto a los decretos u órdenes de pago referidos en el motivo Trigésimo letra A), es del caso que del análisis de los mismos queda en evidencia que fueron confeccionados por Nubia San Martín, esto es, ella ingresó la información pertinente al Sistema Modular Contable, utilizando sus privilegios o claves, por cuanto efectivamente aparece en ellos como usuario “nsanmart” con una firma o mosca sobre el usuario, quedando así patente la intervención que le cupo a aquélla en todos los decretos de pago contenidos en el Hecho 5 de la acusación fiscal y particular, y detallados en el considerando citado, con la sola salvedad del Decreto de Pago N° 1729, consignado en el numeral 29, en que el usuario identificado es “acabello”, que corresponde a Alejandro Cabello Bustos, quien por lo demás es quien firma el referido decreto en calidad de jefe del Departamento de Finanzas; motivo por el cual en la confección de dicha orden de pago no se ha podido acreditar, más allá de toda duda razonable, la intervención de la acusada San Martín Pavez, por más que dentro del legajo del respectivo documento existan documentos en que se consigna como usuario “nsanmart”, por lo cual será absuelta de toda responsabilidad en relación a dicho decreto de pago.

Por otra parte, en cuanto a la intervención del acusado Cabello Bustos en los decretos de pago en cuestión, referidos en el motivo Trigésimo letra A), ha de señalarse que todos ellos, a excepción del decreto de pago N° 1626, consignado en el N° 23, aparecen firmados precisamente por él en su calidad de Jefe del Departamento de Finanzas de la DAS, y, si bien la **perito documental Elizabeth Pacheco Coke** concluyó en su informe N° 11 que no era posible establecer la autenticidad o falsedad de las firmas trazadas a nombre de Alejandro Cabello Bustos en los decretos de pago sometidos a la pericia, puesto que para ello era necesario un material de cotejo coetáneo que solicitó y que no se le hizo llegar, lo cierto es que dicho peritaje no ha descartado que las firmas hayan sido trazadas por el referido acusado, y es más indicó que en dichas firmas pudo observar una semejanza súper importante, porque la morfología es igual, precisando que hay semejanzas en su fisonomía global, explicando que ello se refiere al diseño, a la primera impresión que se ve en la firma, y que en eso hay semejanza; ello unido a la circunstancia que conforme a los numerosos testimonios de funcionarios del departamento de finanzas de la DAS, quedó establecido que nunca se escuchó que se pusiera en duda o se hubieren cuestionado las firmas por parte de Cabello Bustos en los decretos u órdenes de pago, testigos que también indicaron que quienes firmaban tales documentos eran el jefe de finanzas y el director de la DAS, como igualmente lo sostuvieron los fiscalizadores de la Contraloría que se constituyeron en la auditoría llevada a



cabo en dicha repartición; todo ello unido a la circunstancia que jamás el acusado ha cuestionado la autoría de su firma en las órdenes de pago.

En efecto, **Juan Torres Vargas**, manifestó que en el tiempo que trabajaba en la DAS, no solo cuando él era jefe de finanzas, sino que cuando ingresó en reemplazo de Cabello Bustos, ningún funcionario cuestionó las firmas contenidas en los documentos del departamento de finanzas propias del proceso de trabajo de dicho departamento, y en relación a los procesos de pago de proveedores, de Cabello o San Martín, no recuerda que hubiere algún reclamo o planteamiento de que alguna firma no hubiese sido fidedigna; lo cual se encuentra en total concordancia con lo manifestado por **Mónica Vera Cionti**, encargada de adquisiciones de la DAS, que sobre el punto manifestó que cuando le llegaba el certificado de disponibilidad presupuestaria, debía revisar que viniese la firma del encargado de finanzas, que era el jefe o quien le subrogara, por lo que debía verificar que viniera firmado por Alejandro Cabello o Nubia San Martín, como subrogante, por lo que conocía la firma de Cabello y de San Martín, y nunca tuvo duda del certificado ni de la firma del señor Cabello, pues nunca vio una firma extraña o diferente de lo normal, que cuando conversaba con Cabello, éste nunca le hizo algún comentario respecto de sus firmas contendidas en alguno de los procesos de trabajo de la DAS, ni escuchó a algún funcionario del departamento de adquisiciones ni del departamento de finanzas que cuestionara la firma de algún documento por parte de Cabello, o que se dudara que fuese su firma en los documentos emitidos en los procesos de trabajo del departamento de finanzas ni en los distintos departamentos de la DAS, por lo que refiere que si se le exhibe algún documento de la DAS de aquella época, probablemente podría reconocer la firma del señor Cabello; ante lo cual el ente persecutor le exhibió el Decreto de Pago N° 1635, contenido en la Prueba Documental N° 212, ante lo cual la testigo indicó que corresponde a una orden de egreso, en que existen documentos firmados por ella y algunos firmados por Alejandro Cabello.

Por lo demás, debe consignarse que las muestras caligráficas las tomó la propia perito Pacheco Coke, según lo afirmó durante la audiencia, reconociendo que las muestras caligráficas que se exhiben corresponden a las que ella le tomó a Cabello (**Otros Medios de Prueba N° 74**), quien además precisó que solicitó otro tipo de material de comparación coetáneo a los documentos cuestionados, debido a la existencia de algunas diferencias como en el uso del plano basal y en la cualidad del trazado, explicando que el uso del plano basal se refiere a si el uso del plano es ascendente o descendente, y la cualidad del trazado, se refiere a que tan fluida puede ser una firma; y en el caso de la firma cuestionada se notaba una firma fluida, pero la muestra caligráfica no lograba esa fluidez, circunstancia esta última que podía deberse a varios motivos, como el que puede haber estado nervioso al momento de la muestra caligráfica, o que haya tratado de hacer otro gesto gráfico, y es por eso que pidió material de comparación coetáneo, es decir de años 2018 a 2019, pero que no recibió respuesta a dicha



solicitud; motivos totalmente atinentes, si se considera que la toma de muestras caligráficas lo fueron el 4 de febrero de 2020, conforme da cuenta el acta de dicha diligencia, cuando se encontraba ya en calidad de imputado, dado que el funcionario Valenzuela manifestó que Cabello Bustos se presentó a declarar a la fiscalía local el 26 de agosto de 2019 en calidad de imputado.

Debe consignarse igualmente que a la perito le fueron exhibidos todos los decretos de pago respecto a los cuales se ha establecido intervención caligráfica del acusado Cabello Bustos, referidos en el motivo Trigésimo letra A), que se encuentran contenidos en la **Prueba Documental 212 y 213**, y en **Otros Medios de Prueba 1 y 2**, a cuyo respecto indicó que corresponden a los decretos de pago de la Municipalidad de Talcahuano con pie de firma de Alejandro Cabello Bustos, en torno las que llegó a la conclusión señalada, con excepción de la situación del decreto de pago N° 1626, en torno a la cual refirió que era una firma genuina de Nubia San Martín.

En efecto, en cuanto al decreto de pago N° 1626, referido en el numeral 23, según lo ya adelantado y precisado, quedó establecido que la firma estampada al pie del nombre de Alejandro Cabello Bustos, corresponde a una firma auténtica de Nubia San Martín Pavez, conforme lo señaló la perito documental en cuestión, a quien por lo demás se le exhibió el respectivo decreto durante la audiencia (**contenido en Otros Medios de Prueba N° 2**), precisando que en dicho documento a pesar que el pie de firma es de Alejandro Cabello, doña Nubia San Martín firma “por”, como por lo demás estos sentenciadores pudieron apreciar claramente en el documento en cuestión; por lo que no habiéndose establecido alguna intervención del encartado Cabello Bustos en la confección de dicho decreto, no queda más que absolverlo del Hecho 5 N° 23, que en las acusaciones fiscal y particular le fuere imputado.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, en cuanto al decreto u orden de pago N°1013, de 12 de junio de 2018, referido en el motivo Trigésimo letra B), que dice relación con el Hecho N° 6 de la acusación fiscal y particular, del análisis del mismo y antecedentes ya referidos, aparece que ha sido confeccionado por el encartado Cabello Bustos, por cuanto ingresó la información pertinente al Sistema Modular Contable, utilizando sus privilegios o claves, como quedó consignado en el mismo documento la identificación del usuario “acabello”, quedando además patente su intervención por el hecho que también firmó dicho documento en su calidad de jefe del Departamento de Finanzas; a lo cual se puede agregar que dentro del legajo figuran documentos, como dos comprobantes de movimientos contables de fecha 12/06/2018, en el cual aparece “acabello”, como usuario; según lo detallado en su oportunidad; teniendo total aplicación lo indicado en el motivo precedente en cuanto a la autoría de la firma del acusado Cabello Bustos, conforme a los dichos de la perito Pacheco Coke, quien por lo demás pericó el referido decreto N°1013.



TRIGÉSIMO CUARTO: Que, en cuanto al decreto u orden de pago N°235, de 1 de febrero 2019, referido en el motivo Trigésimo letra C), que dice relación con el Hecho N° 7 de la acusación fiscal y particular, del análisis del mismo y antecedentes ya referidos, aparece que ha sido confeccionado por la acusada San Martín Pavez, esto es, ella ingresó la información pertinente al Sistema Modular Contable, utilizando sus privilegios o claves, por cuanto efectivamente aparece en ellos como usuario “nsanmart”, quedando además patente su intervención por el hecho que también firmó dicho documento en su calidad de jefe subrogante del Departamento de Finanzas; además que dentro del legajo del señalado decreto figuran documentos, como comprobantes de movimientos contables de fecha 29/10/2018 y 19/02/2019, en el cual aparece “nsanmart”, como usuario; según lo detallado en su oportunidad; a cuyo respecto debe considerarse igualmente que conforme al peritaje de Pacheco Coke dentro de los 11 decretos de pago de la Municipalidad de Talcahuano en que figuraba el nombre de Nubia San Martín, pudo establecer que en todos ellos se trataba de firmas genuinas de dicha persona, toda vez que pudo establecer y observar características caligráficas semejantes con morfología general, uso del plano basal, calidad y diseño del trazado, en forma continua y uniforme, lo que significa que no se ven vacilaciones o cortes en la escritura, y era pareja en cada una de sus firmas, que había altura media y proporcionalidad de las líneas, que tenían un mismo tamaño tanto la firma dubitada como las analizadas, dando cuenta de una serie de otros aspectos en base a los cuales arribó a su conclusión, relativos a los matices de presión, esto es, dónde se presiona o hay aposamientos de tinta, el grado de inclinación del eje de los signos, si es a la izquierda o a la derecha, la configuración estructural de sus elementos, que vio el diseño de las firmas y las analizó trazo a trazo; agregando que entre los 11 decretos referidos se encontraba el número 235, el cual le fue exhibido dentro de la **Prueba Documental 212**, junto a otras órdenes de pago.

Que la conclusión pericial referida precedentemente, no se ve alterada por la circunstancia que al refrescar memoria mediante el instrumento procesal respectivo a que fue sometida la perito Pacheco Coke por la defensa de la encartada San Martín, no apareciera en el listado de su informe de los 70 decretos por ella periciados la orden de pago N° 235, por cuanto fue enfática en que sí lo había periciado, como también perició el N° 231 que tampoco figura en dicho listado, explicando que ello pudo deberse a un error de número o tipeo, que se copió mal, y que aunque no estén en el listado, sí están en el desarrollo de su informe; lo cual se condice totalmente con el mismo instrumento de refrescar memoria a que fue sometida por la señalada defensa, en relación a los 11 decretos de pago objetados en relación a la acusada San Martín Pavez, en cuyo listado precisamente figuran los decretos 231 y 235; perito que por lo demás dio cuenta que para la práctica de su pericia ella misma levantó las muestras caligráficas de la referida acusada, las que corresponden a las que le fueron exhibidas dentro de **Otros Medios de Prueba N° 73**.



TRIGÉSIMO QUINTO: Que el mérito de la prueba rendida también ha permitido establecer, más allá de toda duda razonable, la existencia de un concierto entre todos los acusados, en orden a llevar adelante toda una maquinación tendiente a la substracción de fondos públicos o dineros pertenecientes a la Municipalidad de Talcahuano, concierto que se extrae a partir de la existencia de distintas comunicaciones que se lograron establecer entre los acusados, a partir de los exámenes o pericias a los dispositivos telefónicos y mensajes o conversaciones vía chat a través de diversas aplicaciones, como también se desprende de la propia modalidad de ejecución de los delitos, de las funciones que desempeñaban los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez en el departamento de finanzas, de la existencia de relaciones de trabajo y familiares o de pareja en el caso específico de la acusada San Martín Pavez con el encartado Ravanal Mellado; y del conocimiento que todos los acusados tenían acerca de la calidad de funcionarios públicos de Cabello Bustos y San Martín Pavez y de las labores o funciones que cada uno de estos últimos realizaban al interior del departamento de finanzas, y de sus responsabilidades, al menos de manera genérica.

1.- Que, cabe señalar que no es efectivo lo sostenido por una de las defensas, en orden a que algunos de los acusados no se conocían y que ni siquiera había una relación entre ellos, y que Ravanal Mellado prácticamente no tenía ninguna comunicación con Cabello Bustos ni con Paredes Montoya; pues durante el juicio se aportaron una serie de antecedentes documentales y testimoniales que desmienten tales afirmaciones.

Desde ya es un hecho no discutido, que Cabello Bustos y San Martín Pavez trabajaban en el departamento de finanzas, por lo que evidentemente se conocían, y por lo demás también se encuentra debidamente acreditado por medio de los antecedentes latamente expuestos en las consideraciones anteriores, que Pedro Paredes Montoya, a la época de los hechos, esto es, en el período comprendido entre octubre de 2017 y marzo de 2019, también trabajaba en la DAS, como encargado de proyectos; y todavía más, con anterioridad a ese período, incluso, se había desempeñado como jefe del departamento de finanzas de la DAS, como también lo reconoce el propio imputado, al indicar que ese cargo lo ejerció entre los años 2005 y 2010; imputado que también tenía una relación cercana con la acusada San Martín Pavez, como lo afirma Manuel Rojas, al señalar que San Martín y Paredes eran amigos, lo que afirma por el trato que se daban, la forma en que Nubia lo trataba, le servía café, almorzaban juntos, o al menos eso fue lo que él vio, y los veía bajar juntos hacia el comedor de la DAS; lo cual se encuentra en total concordancia con lo indicado por la testigo Priscila Muñoz Candia, quien afirmó que la relación entre Nubia y Paredes era de muchísima confianza, porque él siempre iba a la oficina a verla, a hablar de su vida, y siempre salían a almorzar juntos, precisando que Paredes iba a la oficina dos o tres veces a la semana a visitar a Nubia, que llegaba a la



hora de colación, a veces en la mañana, y se quedaba como por media hora; y que en el tiempo que ella estuvo en Finanzas –que fue en los primeros meses de del año 2019-, vio a Paredes ir a la oficina de finanzas y a veces revisaba algunas carpetas y preguntaba cosas específicas, lo que hacía cuando le asignaban algún trabajo y necesitaba información de proveedores, llegaba a cumplir labor que le habían asignado; indicando que también iba a la oficina a visitar a doña Nubia su esposo, Pedro Ravanal, y algunas veces se pillaban con Paredes.

La testigo Muñoz Candia también dio cuenta que entre Nubia San Martín y Alejandro Cabello existía la relación de trabajo en el día a día, se tenían mucha confianza, pues trabajaban juntos desde hace muchos años, y Nubia era la subrogante de Alejandro; como se corrobora con los dichos de la asesora jurídica Chamorro Díaz, que sostuvo en juicio que en relación a los funcionarios de la DAS había una buena relación laboral; y de hecho don Pedro –refiriéndose a Paredes Montoya- y Nubia eran muy amigos, la venía a buscar, iban a almorzar; y en cuanto a la relación de Cabello y Nubia, no visualizó que tuvieran una relación más cercana, de amistad, pero sí una relación laboral continua entre ellos; amistad de Paredes con San Martín de la cual también dio cuenta el testigo Juan Torres Vargas, quien en todo caso afirmó que él nunca los escuchó conversar temas relacionados con las finanzas de la DAS.

2.- Que además del hecho que los acusados evidentemente se conocían, por las razones referidas, hay otros antecedentes que reafirman el conocimiento y las relaciones existentes entre ellos, e incluso concluir que iba más allá alguna amistad de las relaciones propias del trabajo, que permite vincularlos con los hechos por los cuales se encuentran acusados, todo ello a partir del contenido de mensajes y comunicaciones que mantuvieron algunos de los acusados, obtenidas de las diligencias practicadas a dispositivos telefónicos de los acusados, y de la existencia de tráfico telefónico existente entre algunos acusados; como también del análisis practicado a sus cuentas bancarias.

a) En cuanto al tráfico de llamadas entre los acusados, se presentó a declarar **Juan Carlos Estay González**, subcomisario de la Policía de Investigaciones, miembro de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana, quien entre otras diligencias de las que dio cuenta, se refirió a la revisión y análisis de los tráficos telefónicos de los acusados, que se informó por medio de Informe 2383, de 11 de marzo de 2021, precisando que analizó, entre otras la NUE terminada en 32, rotulada “Entel responde oficio DAS”, la cual contenía más de 6830 páginas que albergaban los tráficos telefónicos de Pedro Ravanal, entre los años 2017 a 2020, de cuyas conversaciones fue lógico encontrar muchas llamadas entre Nubia San Martín y Pedro Ravanal, ya que eran pareja, pero que les llamó la alta comunicación entre Pedro Ravanal y Alejandro Cabello, entre quienes existían más de 1200 llamadas en el período de 4 años; precisando que no sólo eran llamadas de Cabello a Ravanal, sino que



también más de 900 llamadas de Ravanal a Cabello; tráfico de llamadas que refirió se encuentran contenidas en un CD-R marca Verbatim que se contiene en **Otros Medios de Prueba N° 59** que le fue exhibido y que reconoció como el CD que analizó.

Que el mismo testigo Estay González, también dio cuenta del análisis de la NUE terminada en 33, rotulada “Movistar responde oficio DAS”, la cual da cuenta de dos números telefónicos de Pedro Paredes, los terminados en 61 y 68, que se contienen en un CD marca Verbatim, y que señala corresponde al que se le exhibe en **Otros Medios de Prueba N° 60**, el cual analizó; de cuyo análisis pudieron observar unas 180 llamadas mutuas entre Paredes y San Martín, pero en un período súper acotado, entre mayo y diciembre de 2019; y además pudieron detectar una llamada de 41 segundos de duración entre Cabello y Paredes el día 30 de mayo de 2019, que corresponde a la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de entrada y registro a la Municipalidad de Talcahuano.

De cuyos análisis se puede apreciar que los acusados Pedro Ravanal y Alejandro Cabello mantuvieron un altísimo número de llamadas telefónicas entre ellos, que pone en evidencia que se relacionaban permanentemente; al igual que Pedro Paredes con Nubia San Martín, y si bien entre Pedro Paredes y Alejandro Cabello solo se pudo establecer una llamada telefónica, la misma es trascendente, dado que lo fue el mismo día en que ocurrió la diligencia de entrada y registro a las dependencias de la DAS, la cual desde ya ha de descartarse esté relacionada con motivos de trabajo propiamente tal, si se considera que Paredes a esa época no trabajaba en el departamento de finanzas, por lo que la conclusión natural y obvia es que tuvo relación la referida diligencia, que a todas luces era comprometedora para ellos.

b) También es posible extraer el conocimiento y, consiguientemente, el concierto de los acusados, en los hechos por los cuales se encuentran acusados, del registro de los depósitos bancarios en efectivo que se realizaron en las distintas cuentas de aquéllos, y coincidencias de cobro de cheques con abonos efectuados, de lo cual dio cuenta el **perito Nelson Enrique Castro Arraño**, contador público, auditor y analista financiero de la Unidad Especializa de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, quien realizó una pericia que comprende el período comprendido entre octubre de 2017 y marzo de 2019, la cual tenía varios objetivos, entre los cuales se encontraba determinar el monto de los abonos registrados en las cuentas bancarias de los imputados, lo cual le permitió establecer las sumas totales depositadas en las cuentas de los acusados en el período señalado, lo cual también además arrojó que Pedro Ravanal registra en su cuenta del Banco de Crédito e Inversiones una transferencia de fondos desde la cuenta del Banco Estado de Alejandro Cabello por la suma de \$500.000 o \$600.000; y Alejandro Cabello registra una transferencia de fondos desde la cuenta del Banco Estado de Nubia San Martín



por la suma de \$600.000; circunstancias estas que ponen de manifiesto que los acusados mantenían ciertas relaciones, al punto que incluso se hacían transferencias bancarias.

El mismo perito también dio cuenta que otro objetivo que tenía su análisis era determinar la correspondencia existente entre la fecha de cobro del documento bancario, versus la fecha del o los abonos registrados en las cuentas bancarias de los imputados, explicando que ello se refiere a que en la fecha que se cobró el cheque coincide con la fecha en que la persona efectúa el depósito en su cuenta bancaria; por lo que hay un patrón en el sentido que el día en que se cobra el cheque se efectúa el depósito en la cuenta bancaria respectiva. Al respecto pudo establecer que Nubia San Martín registra 8 coincidencias entre la fecha de cobro del cheque y la de los abonos en sus cuentas corrientes, uno de cuyos cheques había sido cobrado por ella misma, tres cheques habían sido cobrados por Ravanal y cuatro cheques cobrados por Paredes; Pedro Ravanal registra 23 coincidencias, de los cuales 14 documentos fueron cobrados por él mismo, 7 cobrados por Pedro Paredes, y dos cobrados por Nubia San Martín, precisando que los últimos 7 abonos que registra Ravanal son por montos superiores a un millón de pesos; y Pedro Paredes registra 3 coincidencias entre las fechas de cobro de los cheques y fecha de abono a sus cuentas bancarias, cuyos cheques habían sido cobrados por San Martín, Ravanal y Paredes; y Alejandro Cabello registra dos coincidencias, y en ambos casos se trató de cheques cobrados por Pedro Ravanal.

Coincidencias que, conforme a lo explicado por el perito, permiten establecer un cierto patrón de la correspondencia que se presenta en cuanto a que en los mismos días que se cobraba por caja alguno de los cheques materia de la acusación por alguno de los encartados, se efectuaba un depósito en alguna de las cuentas de estos últimos; lo cual da sustento a la manera de operar, que implica un acuerdo de que quien cobra algún cheque procede a depositar dineros en su cuenta y en alguna cuenta de los otros acusados; ello más allá que no haya coincidencia en cuanto a los montos del cheque con las cantidades depositadas, pues claramente los acusados se cuidaron de no ingresar la totalidad de los montos malversados al sistema bancario u otro sistema formal; debiendo tener en consideración a este respecto, lo manifestado por el perito Castro Arraño, en cuanto a que si bien no pudo determinar algún patrón en cuanto al monto de los abonos en relación a los cheques cobrados, respecto de Ravanal hay un documento que se puede determinar que el abono corresponde prácticamente a un tercio del cheque cobrado, que era de aproximadamente \$3.500.000.

Acuerdo que también se ve corroborado con el análisis o correspondencia georeferencial efectuado por el perito **Castro Arraño**, en cuanto a determinar si existe coincidencia entre la fecha de cobro del cheque y la sucursal de cobro,



versus la fecha de abono y el lugar donde se efectuó el depósito; y desde esa perspectiva estableció que Nubia San Martín presenta dos coincidencias respecto a la fecha y lugar de cobro y de abono en su cuenta bancaria, respecto de dos cheques cobrados por Pedro Ravanal en las sucursales del Banco Estado de Plaza Concepción y Plaza Acevedo; que tratándose de Pedro Ravanal, registra 11 coincidencias en los términos referidos, destacando un movimiento consignado con el Número 10, en que el cobro lo hace Pedro Paredes de un cheque de \$3.867.000 y fracción, y hay un abono en la cuenta bancaria de Pedro Ravanal por la suma de \$1.289.000 y fracción, a partir de lo cual el perito refiere que se puede presumir que la repartición fue de un tercio para cada uno; respecto de Pedro Paredes, se registran dos coincidencias, ambos de cheques cobrados en la sucursal de Talcahuano; en tanto que Alejandro Cabello refleja una coincidencia en la sucursal Concepción Bio Bío.

Al respecto cabe señalar, que la información entregada por el referido perito, conforme a sus dichos, la obtuvo a partir del Informe Final N° 315 del año 2019, de la Contraloría General de la Republica, de la copia digitalizada de los documentos bancarios de las cuenta corrientes y cartolas bancarias de las cuentas 52709052161 y 52709052004; como también de las cartolas bancarias del Banco del Estado correspondiente a cuentas corrientes y cuenta de ahorro de Nubia San Martin; cartolas bancarias de cuentas corrientes de BCI y Banco Falabella de Pedro Ravanal Mellado, copias de colillas de depósitos efectuados en Banco Falabella de Pedro Ravanal; cartolas bancarias del banco de Chile correspondientes a Pedro Paredes Montoya; y cartolas bancarias de las cuentas del banco del Estado de Alejandro Cabello Bustos; documentación que por lo demás también fue incorporada a juicio, según consta de Prueba Documental N° 81, 82, y 83, 104, 106, 115, 141, 142, 162, 168 y 169.

c) También se contó con los dichos de la testigo **Llubixza Alexandra Lizana Rivera**, subinspectora de la Policía de Investigaciones de Chile, de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana, quien dio cuenta de haber analizado la información extraída de dos teléfonos pertenecientes a Nubia San Martín, marca Samsung, modelo SMG 530H y SMG 965F, la cual se contiene en el Disco Duro marca Toshiba que se le exhibió, que corresponde a **Otros Medios de Prueba N° 55**, habiendo dado cuenta de las fotografías existentes, que corresponden a las que le fueron exhibidas y contenidas en **Otros Medios de Prueba N° 101**, las que si bien muestran alguna documentación, como comprobante de pagos, capturas de pantalla de computador en la que se reflejan algunas transacciones respecto a ciertas cuentas corrientes de la DAS, y un cheque a nombre de un Laboratorio, las mismas no arrojan antecedentes incriminatorios sobre el punto en cuestión; mas, se contienen diversos mensajes de distintas aplicaciones, que dan cuenta del contacto que permanentemente existía entre Nubia San Martín y Alejandro Cabello, acerca de los depósitos que se debían hacer en las distintas cuentas.



Así, de la aplicación Hangouts, refirió la existencia de 171 hojas de impresión con conversaciones, muchas de las cuales se refieren a períodos anteriores al comprendido en los hechos imputados en el presente juicio, contenidas en **Otros Medios de Prueba N° 98**, que le fue exhibida a la referida testigo, respecto de las cuales sólo se refirió a 7 hojas, entre las cuales es relevante una conversación de fecha 28 de septiembre de 2017, en que Nubia San Martín dice “Alejandrito acuérdate de los ingresos no registrados, a lo que Alejandro le responde con un dedo hacia arriba; al igual que conversaciones de la aplicación WhatsApp, en las que revisó 320 hojas de conversaciones en el período 2016 al 2018, entre las cuales habían conversaciones de Nubia San Martín con distintos usuarios, como Alejandro Cabello, Pedro Ravanal, dando cuenta la testigo que las conversaciones relevantes son las de Nubia San Martín con Alejandro Cabello en el año 2018, que en general son diálogos en que se hace referencia a depósitos, transferencias a distintas cuentas, que se nombraban por los últimos dígitos, y que también en una de las conversaciones se refieren a la clave de una caja fuerte; precisando que dentro de las conversaciones existe el número teléfono terminado en 661 que corresponde a Cabello, y que también al pasar las conversaciones aparece el terminado en 953, que también correspondería a Alejandro Cabello, dado que en las conversaciones Nubia San Martín hace referencia a que está dialogando con Alejandro Cabello; como también hay conversaciones de relevancia durante el año 2018 con Pedro Ravanal, en que siempre dialogan respecto a depósitos, a si Pedro Ravanal concurría o no a alguna entidad bancaria y si se juntaban o no supuestamente a almorzar; que están contenidas en **Otros Medios de Prueba N° 99**, de las cuales se refirió únicamente a 28 hojas, entre las cuales se pueden destacar las siguientes:

Conversación de Hoja 1, de 17 de abril de 2018, en que Alejandro Cabello dice que hay que hacer un par de pagos con la 2004, y Nubia contesta Cta 161 está negativa 6; ante lo cual Alejandro responde mando a depositar, y Nubia dice Si, de la 187, contestando Alejandro, OK .

Conversación de Hojas 3 y 4, de 12 de junio de 2018, en la cual luego de los saludos, Nubia le dice, dime, pasa algo; a lo que Alejandro responde “se me perdió el número de cta de su Pedro”, contestando Nubia “77048253 BCI cta. Cte. Rut 9844 26/7 gracias”, y Alejandro contesta Ok, para luego Nubia escribir “Rut 9844026-7; y luego Nubia le escribe “El nombre pedro rabanal mellado”, y Alejandro responde “mañana voy son 1.166”, respondiendo Nubia “ok”.

Conversación de Hoja 5, de 3 de julio de 2018; en que Nubia escribe “Con paredes”, y Alejandro le responde “Decida usted”, a lo que Nubia señala “Pero hablaste con el hoy pq te andaba buscando”, y Alejandro responde “No de eso”.

Conversación de Hoja 8, de fecha 27 de febrero de 2018, en la que la conversación es con número 56964242953, que según la testigo correspondería



a Alejandro Cabello, en que Nubia dice "Sabe el pedro estuvo aca preguntando por ti", y el número terminado en 953 responde "El anda cargoseando"; y Nubia contesta "A ya", para luego el número terminado en 953 señalar "Pero no le dije que fuera", a lo que Nubia responde "Ok para dos", y el número 953 dice " Sip"

Conversación de Hoja 14, de 23 de mayo de 2018, en la que Nubia remite un mensaje al número terminado en 953 "Esta el pedro paredes contigo", y el 953 responde "No", y Nubia responde "ok".

Conversación de Hoja 17, de 20 de septiembre de 2018, en la Nubia señala "Hola Alejandro llego un poco mas tarde, y el número 953 responde "OK", y luego el número 953 envía mensaje "Sra. Nubia, la caja tampoco abre con la clave porque no tiene pilas", y Nubia contesta "Yaaas y que comprar y cuales usa" y luego Nubia dice "Te las compro".

Conversación Hoja 18, de 20 de septiembre de 2018, en que Nubia escribe mensaje "Envíame la fecha de tu cumpleaños", y el numero 953 responde "25021975", y Nubia responde "La caja tiene tu fecha de nacimiento", y el numero 953 responde "Gracias".

Igualmente existen conversaciones entre Nubia San Martín y Pedro Ravanal, ya que conforme a la testigo Lizana Rivera, el número 56984500049 correspondería a este último; y que conforme a las copias de los registros, por lo demás aparece expresamente el nombre Pedro Ravanal, número que confirmó el propio acusado Ravanal como el suyo durante su declaración en juicio:

Conversación Hoja 19, de 30 de julio de 2018, en la que luego de que Nubia le señala "almorzamos" y Ravanal responde "Ok tengo que ir al bco?".

Conversación de Hoja 20, de 23 de julio de 2018, en la que Ravanal señala "llegue", y luego escribe "Abajo te espero".

Conversación Hoja 21, de 17 de julio de 2018, en la que Ravanal escribe "Numero tuyo por fa", y Nubia responde "De celu 981576190", y Ravanal le dice "No sirena", a lo que Nubia escribe "Explicate", y Ravanal le escribe "sino no hay\$", y Nubia contesta "No entiendo", por lo que Ravanal le escribe "Cta cte tuya".

Conversación Hoja 23, de 2 de mayo de 2018, que dice "Revisa el depósito", y Ravanal responde "Dhh" y luego escribe "Bci", y luego otro mensaje de Ravanal "Y".

Conversación Hoja 24, de 31 de enero de 2018, en que Nubia señala "Llegando", y Ravanal responde "Ok bco".

Conversación Hoja 25, de 26 de enero de 2018, en que Nubia señala Bco estado cta 5270001638 Rut 14372476-K, y Ravanal responde "Ok".; a cuyo



respecto debe señalarse que el Rut referido por Nubia San Martín, corresponde al de Alejandro Cabello Bustos, conforme a toda la documentación aportada durante el juicio, particularmente sus decretos de nombramiento y hoja de vida, a la que se hizo referencia en su momento, lo cual pone de manifiesto que Ravanal necesitaba el número de Rut de Alejandro Cabello para realizar algún trámite, que puede perfectamente corresponder a algún depósito.

c) Lo anterior, pone en evidencia que existía un alto grado de confianza entre los acusados, y de conversaciones e intercambio de información relacionada con depósitos, transferencias y otros hechos materia de la acusación, como se refleja en el hecho que la caja fuerte de la que estaba a cargo Nubia San Martín, tuviere como clave la fecha de nacimiento de Alejandro Cabello, de lo que éste estaba en total conocimiento; que Cabello solicitara los antecedentes de Pedro Ravanal, como su número de cuenta y Rut, o que la propia Nubia San Martín le entregara a Pedro Ravanal el número de cuenta bancaria de Alejandro Cabello; o que Nubia San Martín le pregunte a Alejandro Cabello si habló con Pedro Paredes, debido a que éste andaba buscando a Cabello; y que en una decisión que eventualmente puede involucrar a Paredes, Cabello la deja entregada a San Martín, lo cual denota que Pedro Paredes se relacionaba no solo con Nubia San Martín, sino que también mantenía contactos con Alejandro Cabello, y tenía actividades o asuntos con ellos, y habían temas que se conversaban con él; y por lo demás, también aparece claro que los contactos y visitas de Ravanal a Nubia San Martín a su lugar de trabajo y almuerzo, más allá de la relación de pareja existente entre ellos, se relacionaban con las concurrencias de Ravanal al banco, existiendo varias conversaciones entre ambos en que acuerdan temas relacionados con depósitos y cuentas; lo que pone de manifiesto el conocimiento que también tenía Ravanal de las funciones y actividades que Nubia San Martín realizaba al interior de la DAS, y de los contactos de ésta última con los acusados Paredes Montoya y Cabello Bustos.

A lo anterior debe agregarse que existen otras coincidencias resultantes del análisis de la prueba, las que si bien, como lo indica la propia fiscal, se refieren a un período anterior a los hechos de la acusación, lo cierto es que permiten reforzar las conclusiones de conocimiento, de relaciones y concierto existentes entre los acusados, como lo son el hecho que del análisis de las cartolas de las cuentas bancarias de los acusados Ravanal Mellado y Paredes Montoya, existan depósitos en efectivo efectuados los mismos días en ambas cuentas, según queda en evidencia al tenor de la cartola 6 de la cuenta corriente de Ravanal Mellado (**Prueba Documental 115**) del día 15 de junio de 2016, con la cartola 6 de la cuenta corriente de Paredes Montoya (**Pruebas Documental 106**) del mismo día; y de la cartola 8 de la cuenta corriente de Ravanal Mellado (**Prueba Documental 115**) de los días 11 y 19 de julio de



2017, con las cartola 7 de la cuenta corriente de Paredes Montoya (**Pruebas Documental 106**) de los mismos días.

d) Luego existe un cúmulo de indicios a partir de los cuales es posible establecer la existencia de las relaciones entre los cuatro acusados, que ponen en evidencia el conocimiento que existía entre ellos, más allá de los motivos laborales, y fundamentalmente altos grados de confianza que los llevaban a efectuarse transferencias de dinero, y a que al momento de cobrar los cheques de las cuentas corrientes de la DAS girados a su nombre, aparecieran depositadas algunas sumas de dinero en las cuentas de alguno de los acusados y muchas veces el depósito efectuado en la misma sucursal del Banco Estado en que se materializó el cobro por caja del documento; todo ello independientemente que las cantidades que en definitiva se determinaron haber sido depositadas en las distintas cuentas bancarias de los acusados no se ajuste al total del dinero malversado, y que solo representen un 20% de ese monto; y que respecto de San Martín Pavez hubiere alcanzado a un total de \$7.000.020 (17 abonos); que en el caso de Ravanal Mellado, totalizaran \$55.997.770 (95 abonos); que Paredes Montoya los depósitos sumaran \$2.660.000 (13 abonos); y en el caso de Cabello Bustos, ascendieran al total de \$5.499.000 (21 abonos), según lo informado por el perito Castro Arraño; dado que ello da cuenta precisamente del hecho que los acusados no depositaron la totalidad de los dineros malversados, como tampoco altera las conclusiones que en muchos casos se tratare de depósitos por cantidades que pudieren estimarse de bajo monto.

3.- Así las cosas, no cabe más que concluir que existía un conocimiento personal entre los cuatro acusados, y que más allá de si efectivamente los testigos vieron o no a los cuatro acusados reunidos en una misma oficina o conversando aspectos relativos a giro de cheques o decretos de pago, lo cierto es que se configuraron lazos de confianza entre ellos, a partir de los cuales en definitiva se concertaron para actuar conjuntamente en pro de objetivo común para hacerse de fondos o caudales públicos, distribuyéndose las actividades a ejecutar cada uno de ellos para tales efectos, en que Cabello Bustos y San Martín, por las funciones que cumplían al interior de la DAS, jefe de finanzas y encargada de presupuesto o administrativa contable, respectivamente, eran los que principalmente llevaban adelante la maquinación para materializar la substracción de los fondos públicos de los cuales se encontraban a cargo, y que en el caso de Cabello Bustos, además, era quien debía aplicar los mecanismos de control interno, siendo San Martín Pavez quien firma los cheques a nombre de los acusados, por ser una de las firmas autorizadas, quien se encargaba de la obtención de cheques firmados en blanco por parte de Manuel Rojas, que era el otro funcionario con firma autorizada; en tanto que Ravanal Mellado y Paredes Montoya, cooperan al objetivo común señalado, ejecutando el cobro por caja de los cheques emitidos a sus nombres, salvo un documento que fue cobrado a



través de su depósito en una cuenta bancaria; sin perjuicio que también se giraron algunos cheques a nombre del propio Cabello Bustos y San Martín Pavez, quienes igualmente los cobraron por caja; estando todos los acusados en pleno conocimiento de esa distribución de funciones y de las calidades de funcionarios públicos de los mismos, en atención a que los acusados San Martín Pavez, Cabello Bustos y Paredes Montoya eran compañeros de trabajo en la DAS de Talcahuano, y tratándose de Ravanal Mellado, el único particular, era la pareja de San Martín Pavez; todo ello unido a la circunstancia que los respectivos cheques además hacían referencia al titular de la cuenta corriente, que al final no era otra que la Municipalidad de Talcahuano, más allá de si era una cuenta de Remuneraciones, Aportes Municipales, Resolutividad u otra las tantas cuentas municipales; por lo que en definitiva todo lo señalado y la forma propiamente tal de ejecución del delito, permite arribar la existencia de un actuar doloso por parte de cada uno de los acusados en pos de la ejecución de la malversación de caudales públicos.

4.- Por lo demás, el concierto en la comisión de los hechos queda totalmente corroborado por los dichos de los propios acusados, quienes entregaron antecedentes que dan cuenta de saber o estar al tanto de la situación de la substracción de los fondos de la DAS, a través del cobro irregular de cheques, los cuales se giraban a nombre de los propios acusados, quienes después del cobro debían repartirse los montos obtenidos; ello más allá de ciertas diferencias en torno a de quien fue al idea de comenzar con el cobro de los cheques, o del porcentaje o forma en que se repartían el dinero obtenido, y de si Paredes sabía o no que también cobraba cheques el acusado Ravanal.

Así, Cabello Bustos manifestó que él fue la primera persona que cobró un cheque, y lo hizo solo, sin conocimiento de nadie, estaba en una situación personal complicada y económicamente también, tenía unos cobros que estaban hace mucho tiempo en Dicom, y tenía problemas que lo iban a embargar y en un momento de desesperación, no lo pensó mucho, y viendo todas estas falencias, giró un cheque a su nombre; explicando que se buscaba una orden de compra de un proveedor a quien ya se le hubiese pagado la orden, que fuera antigua, y volvía a ingresar la orden al sistema informático contable, como una deuda nueva, como una nueva obligación contable y se hacía todo el proceso de pago normal, o sea se generaba la orden, se devengaba contablemente y se generaba la orden de pago, todo a nombre del proveedor, que ya se había pagado, por lo que en el fondo era un segundo pago, la diferencia es que al momento de emitir el cheque manual, lo hizo a su nombre y no de la empresa, y cobró el documento, y en ese momento, sabía que eso estaba mal, cobró el documento por la necesidad económica que tenía en ese momento. Que después de un tiempo, la señora Nubia descubrió esta situación irregular, y se lo hizo ver, de hecho ella fue a su oficina y lo encaró, le dijo que encontró un documento que en la contabilidad está a nombre de un proveedor, pero no están cobrados por el



proveedor sino que cobrados por él, y en ese momento le reconoció que había sido así, y le dijo que entendía que ella lo tenía que denunciar, que no lo volvería a hacer y señora Nubia le dijo que no lo iba a denunciar, sino que ella también iba a cobrar documentos porque también tenía problemas económicos; que no hablaron más del tema y al cabo de un par de semanas, gestionaron un nuevo cobro, cree que fue a nombre de la señora Nubia, quien empezó a cobrar documentos; y al cabo de un par de semanas aparece Pedro Paredes en su oficina y le dice que había hablado con la señora Nubia, quien le había dicho que estaban cobrando documentos irregularmente, y que estaba al tanto y que él también empezaría a cobrar porque estaba en situación económica complicada y veía en esto una solución para eso; agregando que en adelante siguieron los cobros de la misma forma, y empezaron a girar documentos en la medida que había disponibilidad de fondos y siempre motivados por una necesidad económica de cualquiera de los 3 que siempre estaban con problemas económicos; que la repartición siempre fue en tres partes iguales, y la participación de Pedro Ravanal fue una situación de la que se enteró a fines de 2018, a raíz de una conversación con la señora Nubia, de lo que se sorprendió en el momento, quien le dijo que llevaba cobrando hace bastante tiempo.

Por su parte, San Martín Pavez, señaló que la primera persona que comenzó con el cobro irregular de cheques fue Alejandro Cabello, que ella lo descubrió y posteriormente se incorporaron al cobro de cheques ella y Pedro Paredes, como también su pareja Pedro Ravanal, quien en un primero momento no sabía de qué se trataba, pues le había dicho que le hiciera el favor de cobrar un cheque que era de la administración porque se necesitaba dinero en efectivo, pero como fueron cobros consecutivos ella después le explicó que no se quería exponer tanto a la situación de los documentos irregulares; que su pareja ingresó en octubre de 2017 y se prolongó la situación hasta el año 2019; que el monto de los cheques cobrados se repartían en partes iguales entre Cabello, Paredes y ella, independiente de quien cobraba el cheque; que la decisión de girar los cheques la tomaban los tres, porque los tres tenían problemas económicos, se giraba el cheque y uno de ellos lo iba a cobrar, y que la decisión en relación a nombre de quién se hacía el cheque, no se tomaba ninguna decisión, sino que se hacía por la necesidad, que a veces Pedro Paredes iba a saludarla en la mañana o con don Alejandro se juntaban en la oficina, y ahí se decidía quién iba, y el que tenía más voluntad o tiempo iba a cobrarlo; y a veces se saludaban y se decían que tenían problemas económicos y listo, y no se hacían reuniones, que se juntaban cuando ella repartía el dinero o venía o Pedro a dejar la plata a la oficina de Alejandro; agregando que para saber cuándo habían fondos disponibles en la DAS para girar cheques e ir a cobrarlos, ella como administrativa podía ver el sistema contable para ver si había disponibilidad; y luego consultaba con Alejandro Cabello quien decía en cual cuenta había disponibilidad; precisando que luego de cobrarse el cheque, el



reparto en dinero en efectivo se hacía en la oficina, a la hora de colación se juntaban para la distribución del monto del cheque, que era en tres partes iguales respecto de todos los documentos, que siempre fue la misma modalidad, incluso los cheques cobrados por Ravanal.

En tanto que Paredes, luego de explicar una situación de persecución laboral y endeudamiento que le afectaba, que dice que era conocida por gran parte de la oficina, del equipo de finanzas, doña Nubia y don Alejandro, y que con este último tenía permanente contacto en reuniones que realizaban, señala que a raíz de esta situación en octubre de 2017 Alejandro le dice que le ofrece ayuda, y él aceptó porque su situación era bastante delicada, y la ayuda consistía en cobrar un cheque que iba a salir a su nombre, y una parte del cheque era para él, lo tomaba como suyo, y lo otro era entregado a la señora Nubia y a Alejandro, era una repartición en tres partes iguales; que inicialmente no hizo mayor cuestionamiento e incluso ni siquiera preguntó si habían otras personas cobrando, y siempre supuso que era la única persona que cobraba; que los documentos que él recibió tenían un valor promedio de tres millones y medio, por lo que era obvio que la repartición era en términos iguales; que la entrega de documentos era de manera manual o Alejandro o la señora Nubia, no existía una fecha preestablecida, sino que en cualquier momento; que al final del período se enteró que habían otras personas que estaban cobrando cheques, a través del informe emanado de la Contraloría General de la Republica en agosto de 2019, donde se expresan los documentos que fueron cobrados por cada uno de ellos, y además una cuarta persona, don Pedro Ravanal.

Finalmente, Ravanal señala al respecto que reconoce el cobro de 86 cheques a su nombre lo que hizo a petición de Nubia San Martín, quien en un principio le dijo que era parte de su trabajo, y que al pasar los días le pidió si podía seguir cobrando cheques a lo que él accedió, que después de cobrarlos en el banco, se juntaban a la hora de almuerzo y le entregaba la totalidad del dinero a Nubia, excepto las monedas, pues le entregaba solo los billetes; acusado que en todo caso admitió que en una declaración prestada en julio de 2019 señaló que don Alejandro Cabello le había propuesto a Nubia San Martín que él cobrara documentos, explicando que eso lo señaló por asesoramiento del abogado que tenía a esa fecha.

5.- Que la circunstancia del concierto entre los acusados, y particularmente del existente entre Cabello Bustos y San Martín Pavez, se ve corroborado con el tenor de una carta encontrada al interior de una carpeta color rojo que fue hallada al interior de una caja fuerte que estaba en el dormitorio de la acusada San Martín Pavez, al momento de materializarse la diligencia de entrada y registro a su domicilio, conforme dio cuenta el funcionario Valenzuela Ortiz, la cual fue debidamente incorporada al juicio **(Otros medios de Prueba N° 3)**, quien señaló que la carta habría sido escrita a



mano por la señora Nubia, quien consultada sobre la misma, le indicó que era un relato de los hechos sucedidos, y que en algún minuto tuvo la intención de entregarla, pero que no se había atrevido; carta cuya existencia no ha sido cuestionada, como tampoco se ha desmentido la autoría de la misma; cuyo contenido fue transcrito en su oportunidad, de la cual por lo demás se dio íntegra lectura en la audiencia, y que en lo pertinente, da cuenta de cómo la acusada San Martín a inicios del año 2017 habría descubierto a Cabello Bustos que giraba cheques a su nombre y de un tercero utilizando la firma de ella, lo cual se vendría realizando desde años anteriores; la circunstancia de habérselo representado y la respuesta dada, en el sentido que no era de su incumbencia, para posteriormente ofrecerle que participara con un porcentaje en cada operación; destacándose los siguientes párrafos, que literalmente se transcribe: *“ Teniendo presente que el sr Alejandro Cabello Bustos siempre manejo toda la situación desde el momento en que se genera la idea y el pago del documento porque él sabía en que momento hacerlo, por lo tanto el modo operandi fue: Jefe de Finanzas decidía en que momento hacerlo y realizar la operación definiendo los montos y personas que iban involucrados, dando siempre un porcentaje del monto cobrado, ya sea por la firma y cobro en efectivo del documento.”*

Asimismo, el aludido funcionario policial señaló que también se encontró otra hoja manuscrita, tamaño carta, que se aprecia que es original, y cuyo tenor es el siguiente: *“Cuando el señor Cabello necesitaba dinero iba a la oficina y me decía que estaba con problemas económicos, que quería le girara de la cuenta 161 y si la cuenta no tenía recursos él proveía de otra cta cte para sacar y yo le preguntaba de que proveedor y le mostraba la información y me decía, y le preguntaba a que nombre el giro, y se contactaba con la persona a quien iba girado el cheque y lo acompañaba al Bco.”*

Luego, más allá de si la acusada San Martín Pavez aceptó el ofrecimiento de participar en la operación señalada por presión, como se indica en la carta, lo cierto es que los dos continúan realizando el cobro de cheques, y de la misma carta se desprende que además se incluyeron a otras personas, y que el acusado Cabello Bustos concurría la oficina de San Martín Pavez cuando necesitaba se girara un cheque, quien se contactaba con otra persona a cuyo nombre se había extendido el cheque, a quien acompañaba al banco.

TRIGÉSIMO SEXTO: Que amen de todos los elementos probatorios precedentemente referidos, y más allá de los declaraciones de los acusados referidas en el motivo precedente, lo cierto es que también durante el juicio se proporcionaron otros elementos que han sido considerados por estos sentenciadores, dado que han venido a corroborar los diversos testimonios y pruebas documentales y periciales vertidas durante la audiencia, referidas a la época de los hechos, cargos que desempeñaban en la municipalidad afectada, dinámica bajo la cual habrían actuado en los hechos ilícitos, efectividad del



cobro de cheques por caja por cada uno de los acusados, la circunstancia de repartirse el producto del cobro de tales cheques, cantidad de dinero malversado, personas que firmaban los cheques y quienes firmaban los decretos de pago, entre otros:

1.- Así, tratándose del acusado **Cabello Bustos**, indicó que se integró el 18 de enero de 2013 como jefe de finanzas de la DAS de Talcahuano, que entre los años 2017 y 2019 era el jefe de finanzas; y antes efectuó reemplazos y a contrato fijo entre los años 2007 y 2009 en el señalado departamento; que él fue la primera persona que cobró un cheque a su nombre, que lo hizo sin conocimiento de nadie, usando un cheque que estaba en blanco con las dos firmas, por la situación personal que estaba pasando y los problemas económicos, luego de explicar cómo se incorporan San Martín y Paredes al cobro de los cheques, señala que empezaron a girar documentos en la medida que había disponibilidad de fondos y siempre motivados por una necesidad económica de cualquiera de los 3, que la repartición fue en tres partes iguales, aclarando que de los cheques que cobraba Nubia o Ravanal, también le correspondía un tercio a Paredes; y que a fines de 2018, a raíz de una conversación con Nubia, se enteró que Ravanal también estaba cobrando cheques, que entiende que él empezó a cobrar cheques desde octubre o noviembre de 2017, misma fecha que comienzan a cobrar Nubia y Paredes; admite que en una oportunidad lo llamaron del banco para preguntarle por una firma; que el primer cheque que cobra la señora Nubia tiene que haber sido en octubre de 2017, y cuando ingresa la señora Nubia y Paredes, cualquiera de los tres elegía una orden de compra, la cual se ocupaba para hacer un segundo pago; que Paredes no trabajaba en el mismo edificio, pero iba prácticamente todos los días a la DAS, e incluso antes de todos esto, aquél iba a saludar y conocía todo el funcionamiento y donde estaban las órdenes, y del total de los 129 cheques siempre se dividió por tres; que respecto de los cheques que cobro Ravanal, pensaba que era Nubia quien los cobraba, pero era la señora Nubia quien llegaba con el tercio.

En cuanto a los decretos de pago, dijo que requerían dos firmas, la suya y la del director; que en relación a los decretos de pago relacionados con los hechos y en relación a cómo se obtenía la firma del director, en la teoría se supone que tenía que ir primero la firma del jefe de finanzas y luego pasar a la firma del director, pero en la práctica era indistinta, firmaba uno u otro primero, explicando que siempre se generaban muchas órdenes de compra, llegaban altos de órdenes de compra para firmar y no se revisaban en detalles las órdenes que estaban firmando; que se duplicaba el decreto, se tomaba una orden de compra ya pagada, por ende ésta ya tenía un proceso contable hecho, y se volvía a hacer todo el proceso contable para cada uno de los pagos que se hizo, y no necesariamente se duplicaba toda la documentación del legajo para el segundo decreto; que del cobro de los cheques, recibió un tercio de los 412 millones, casi 140 millones, cosa que nunca dimensionó, e incluso en su primera declaración



habló de 40 millones, no llevaba un registro; que en cuanto a la forma de proceder y obtener el pago de los cheques, las órdenes de compra las buscaba cualquiera de los tres, órdenes de compra que estaban físicamente en los baños del segundo y tercer piso, que se ocupaban como bodegas y se guardaban cajas de archivos de órdenes de compra antiguas, ya pagadas, y no había un orden de quién sacaba las órdenes de compra, podía ser cualquiera de los tres, Paredes, Nubia o él; y la orden de compra elegida debía estar pagada, se buscaba que el monto fuera de alrededor de 3 millones para que al repartir fuera de alrededor de un millón para cada uno y que fuera de un proveedor de un laboratorio; acusado que igualmente, no obstante manifestar que él no era tenedor de pin pass, señaló que, en la práctica cuando se necesitaban hacer algunos pagos, le pasaban el pin pass para hacerlo, lo cual se hacía para transferencia a proveedores, como también realizaba transferencias entre distintas cuentas de la DAS cuando faltaba dinero en alguna de estas cuentas tenía.

2.- En tanto **San Martín Pavez**, admitió que se desempeñaba como administrativa contable a la época de los hechos imputados, como también todo lo relativo al ingreso de la información al sistema contable para la confección de los decretos de pago, y que también ingresaba de manera manual la información donde se singulariza el número de cheque y la cuenta de donde va a salir el dinero para el pago; y fundamentalmente admitiendo que ella era una de las firmas autorizadas para la emisión de los cheques, que firmó todos los cheques y que ella le requería la firma de cheques en blanco a Manuel Rojas, que era la otra firma autorizada; entregando antecedentes que involucran también en los hechos a Alejandro Cabello Bustos, quien fue la persona que comenzó con el ilícito, cobrando de manera irregular cheques de la DAS, como también respecto a la incorporación de encartados Pedro Paredes, y su pareja Pedro Ravanal, en el cobro de cheques, dando cuenta que los dineros obtenidos eran repartidos entre los acusados, más allá que indicara que su pareja Ravanal no se quedaba con nada; admitiendo también que las chequeras eran de las cuentas corrientes de la Dirección de Administración de Salud y que los fondos eran de propiedad de la municipalidad, que estaban destinados a un fin público, para pagar los proveedores de salud, manifestando expresamente que sabía que estaba a cargo de custodiar los cheques, y que la primera vez que cobró un cheque fue en octubre de 2017, y que los 129 cheques cobrados fueron confeccionados por ella, independientemente del nombre de la persona a que figure, que todos los cheques están con su firma y letra.

3.- Por su parte, **Paredes Montoya**, señaló que en la DAS entre los años 2010 y 2020 se desempeñó como jefe de la unidad de proyectos que es un organismo asesor del Director, que se involucró en estos hechos en octubre de 2017, que a propósito de una conversación con el señor Cabello, por su situación económica y la existencia de una persecución laboral, en los términos ya referidos en el motivo anterior - declaración que está en concordancia con lo que le señaló al funcionario Sebastián Zapata Monsalve el día en que fue detenido-;



precisando que los cheques que cobró le eran entregados por la señora Nubia o don Alejandro Cabello, que cuando el documento estaba listo, uno de los dos lo llamaba por teléfono y le decían que estaba listo; se le entregaron 35 cheques a su nombre pertenecientes a las cuentas corrientes de la Dirección Salud Municipal Talcahuano, los que siempre cobró en la oficina del Banco Estado de Talcahuano, siempre fueron cobrados en efectivo y dan como \$115.000.000, que fueron repartidos en 3 partes iguales, lo que da como \$37.000.000, que fue lo que hurtó y que quedó bajo su propiedad, y de estos 37 millones, ha devuelto, e hizo un aporte a la causa, de \$10.000.000 como devolución por el mal causado; indicando además, que sabía que al ir a cobrar el cheque estaba cometiendo un ilícito, porque no era dinero de don Alejandro ni de la señora Nubia, que se dio cuenta de ello, porque era una cuenta corriente de la DAS.

Del mismo modo, Paredes manifestó haber ingresado el 2005 a la Dirección de Administración de Salud al departamento de Finanzas, y que en esa época era el jefe, hasta el año 2010, que a esa época Nubia San Martín ya formaba parte del departamento de Finanzas, pero Alejandro Cabello en esa fecha no, quien ingresó como el 2013, y al parecer antes estuvieron trabajando juntos un par de meses; también señaló conocer las obligaciones que tiene un jefe de finanzas, y cuáles eran las funciones desempeñadas por Nubia San Martín, que sabe lo que es un decreto de pago, que tiene que ir firmado por el jefe de finanzas y el director, que tiene que señalar a qué proveedor se le está pagando, el monto por el cual se paga, que las cuenta corriente de la DAS de Talcahuano son varias, que además de la cuenta se señala la forma como se paga, que tiene duda si se señala el número del cheque, pero si se señala el monto y el proveedor; que dentro de sus funciones como jefe de finanzas, estaba firmar los decretos de pago; que él visitaba el edificio donde trabajaba Cabello y San Martín, sabía que los legajos de compra se guardaban en las oficinas de la DAS, donde habían muchos archivadores; que entre los años 2017 y 2019 concurría al departamento de finanzas a saludar, que casi nunca salían con el señor Cabello, pero recurrentemente almorzaban con Nubia San Martín, que le piden ayuda para cobrar un cheque y que él se queda con un porcentaje, momento en que no evaluó si la situación era lícita o no, pero sabía que no podía cobrar cheques de dicha entidad, pero no sabía al gasto que se imputaba.

4.- Finalmente, Ravanal Mellado; reconoció haber cobrado 86 cheques girados a su nombre, cuyos montos variaban entre \$2.200.000, \$2.500.000 y \$2.800.000, ello a petición de Nubia San Martín, quien en principio le dijo que era parte de su trabajo, pero que al pasar los días le pidió que siguiera cobrando cheques y él accedió, para lo cual lo llamaba por teléfono y él iba a su oficina, y luego iba al Banco Estado a cobrar el cheque a la sucursal que hubiera menos gente, para posteriormente juntarse a la hora de almuerzo, donde entregaba la totalidad del dinero; que vio que los 86 cheques decían Ilustre Municipalidad de Talcahuano, y en los 86 estaba la firma de Nubia, con quien es pareja hace 35



años, por lo que conoce su letra manuscrita y puede corroborar que los 86 cheques habían sido llenados por ella; que sabía que Nubia trabajaba en el departamento de finanzas de la DAS y que tenía que firmar cheques para pagar, y que su jefe era Alejandro Cabello, y que anteriormente había sido Pedro Paredes; que la primera vez que cobró un cheque fue en octubre de 2017 y la última vez en marzo del año 2019; que el dinero que Nubia traía producto de los cobros de cheques, el los depositaba en su cuenta del BCI, de CMR de Falabella y en la Cencosud de Almacenes Paris; agregando que al principio no sabía que era ilícito el cobro de los cheques, que no se debía hacer, pero que como al tercer o cuarto cheque, como a la semana, le dijo a Nubia que tenía que tener cuidado con lo que estaba haciendo, que no quería verse involucrado más allá de ir a cobrar cheques, lo cual le dijo porque supo que cobrar cheques no correspondía de su parte, pero que siguió cobrando cheques porque ella le dijo que necesitaba para no verse expuesto su nombre en el cobro .

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, ponderando con libertad los elementos de prueba producidos durante el juicio, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, se ha adquirido la convicción, más allá de toda duda razonable, que se encuentran acreditados los siguientes hechos:

Que entre los meses de octubre de 2017 a marzo de 2019, la Dirección de Administración de Salud Municipal de Talcahuano, en adelante DAS, comuna, el imputado Alejandro David Cabello Bustos se desempeñaba como funcionario de la Municipalidad de Talcahuano, específicamente como Jefe del Departamento de Finanzas, encargado, entre otras funciones, de controlar el presupuesto, asesorar en el cumplimiento de las funciones de administrar presupuesto y convenios, supervisar y encargarse de las transferencias entre cuentas corrientes y velar por el correcto funcionamiento del presupuesto de la DAS.

En el mismo departamento de finanzas, dentro de igual periodo, la imputada Nubia San Martín Pavez, funcionaria de la misma Municipalidad, ejercía la labor Encargada de Presupuesto, y entre sus funciones se encontraban las de ingreso de registros contables, revisión de documentos de respaldo para pagos, registro de obligaciones, devengamiento y ajustes contables, pago de proveedores, y atención de proveedores. Además tenía a su cargo la caja chica y era una de las firmas autorizadas para girar cheques desde las cuentas corrientes de titularidad de la Municipalidad de Talcahuano.

En la misma época, el imputado Pedro Eduardo Mauricio Paredes Montoya, se desempeñaba como funcionario de la DAS de Talcahuano, como encargado de proyectos; y dentro del mismo periodo, Manuel Andrés Rojas Ramírez, se desempeñaba como funcionario municipal en el departamento de Abastecimiento de la DAS de Talcahuano y, entre otras funciones, le correspondía ser una de las firmas autorizadas para girar cheques desde las cuentas corrientes de titularidad de la Municipalidad de Talcahuano.

En el periodo señalado, en la comuna de Talcahuano, los imputados Cabello Bustos, Paredes Montoya, San Martín Pavez y Ravanal Mellado se



concertaron para sustraer distintas sumas de dinero de la Municipalidad de Talcahuano a través del giro y cobro de diversos cheques que se individualizarán, abusando todos de sus cargos y funciones públicas en su caso.

Para sustraer fondos municipales, los imputados obraron de la siguiente forma:

HECHO N° 1:

Dentro del periodo señalado el imputado Alejandro David Cabello Bustos quien, en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano, tenía a su cargo los fondos municipales permitió, estando previamente concertado con la imputada Nubia San Martín Pavez quien, en su calidad de funcionaria del Departamento de Finanzas de la DAS y titular de una de las firmas habilitadas de las cuentas corriente N° 52709052161 y N° 52709052004 del Banco Estado de la referida Municipalidad, giró y suscribió 7 cheques a su nombre para luego cobrarlos por caja sustrayendo la suma total de \$ 17.898.643 equivalente a 377,04 UTM, repartiéndose entre ambos, los montas sustraídos.

Los imputados Cabello Bustos y San Martín Pavez, registraron el cheque como pagadero de obligaciones contraídas por la DAS con proveedores, lo cual concretaron mediante el registro por San Martín Pavez del cheque en el respectivo instrumento público Decreto de Pago, que luego era suscrito por el imputado Cabello Bustos autorizando el pago. Luego, ingresaban el pago en el Sistema Modular Contable en adelante SMC quedando pagada contablemente pero en realidad estas obligaciones quedaban pendiente de pago para la Municipalidad.

Estos cheques fueron suscritos además por Manuel Rojas Ramírez, quien tenía otra de las firmas habilitadas, el cual infringió labores propias de su cargo, dando ocasión a que los fondos fueran sustraídos.

Lo anterior ocurrió en las fechas de giro, en relación con los cheques de las cuentas que se señalarán, por los mantos y en las fechas de cobro que se detallan a continuación:

	Fecha de giro	Cuenta corriente	N° Cheque	Monto	U.T.M.	Fecha cobro
1. -	04/10/2017	52709052161	8986400	\$ 1.433.212	30,63	04/10/2017
2. -	28/11/2017	52709052004	9193157	\$ 2.472.523	52,95	28/11/2017
3. -	30/01/2018	52709052161	8986471	\$ 1.547.435	32,87	01/02/2018
4.	02/04/201	52709052161	9710655	\$	54,59	02/04/201



-	8			2.582.300		8
5.-	14/08/2018	52709052004	1166545	\$ 3.212.033	67,30	14/08/2018
6.-	05/09/2018	52709052161	1344001	\$ 3.111.255	64,93	05/09/2018
7.-	24/10/2018	52709052161	1344107	\$ 3.539.885	73,72	24/10/2018

HECHO N°2:

Dentro del periodo señalado el imputado Alejandro David Cabello Bustos quien, en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano, y teniendo a su cargo los fondos municipales, permitió que la imputada Nubia San Martín Pavez, con quien estaba previamente concertado, en su calidad de funcionaría del Departamento de Finanzas de la DAS y titular de una de las firmas habilitadas de las cuentas corrientes N° 52709052161 y N°52709052004 del Banco Estado de la referida Municipalidad, girara y suscribiera 35 cheques a nombre del imputado Pedro Eduardo Mauricio Paredes Montoya, quien, concertado también con los imputados Cabello Bustos y San Martín Pavez los cobró por caja, sustrayendo la suma total de \$111.176.748 equivalentes a 2.339,69 UTM según el valor de la época, repartiéndose luego entre los coimputados los montos sustraídos.

Estos cheques fueron suscritos además por Manuel Rojas Ramírez, quien tenía otra de las firmas habilitadas, el cual infringió labores propias de su cargo, dando ocasión a que los fondos fueran sustraídos.

Lo anterior ocurrió en las fechas de giro en relación con los cheques de las cuentas que se señalarán, por los montos y en las fechas de cobro que se detallan a continuación:

	Fecha de giro	Cuenta corriente	N° Cheque	Monto	U.T. M.	Fecha cobro
1.-	31/10/2017	52709052161	9193240	\$ 1.825.936	39,10	02/11/2017
2.-	07/11/2017	52709052004	9193090	\$ 1.724.429	36,93	07/11/2017
3.-	22/11/2017	52709052004	9193152	\$ 2.472.523	52,95	22/11/2017



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

4.-	30/11/2017	52709052004	9193164	\$ 2.171.750	46,51	30/11/2017
5.-	14/12/2017	52709052161	9193347	\$ 1.285.200	27,36	14/12/2017
6.-	22/12/2017	52709052161	9193377	\$ 2.394.756	50,98	22/12/2017
7.-	31/01/2018	52709052161	8986478	\$ 1.898.626	40,38	31/01/2018
8.-	28/02/2018	52709052161	9710543	\$ 2.907.825	61,78	28/02/2018
9.-	23/03/2018	52709052004	9470749	\$ 2.677.500	56,61	23/03/2018
10.-	27/03/2018	52709052161	9710628	\$ 2.728.602	57,69	27/03/2018
11.-	05/04/2018	52709052161	9710666	\$ 2.900.625	61,32	05/04/2018
12.-	26/04/2018	52709052161	620223	\$ 2.853.299	60,32	26/04/2018
13.-	07/05/2018	52709052161	620253	\$ 2.898.447	61,15	07/05/2018
14.-	25/05/2018	52709052161	620324	\$ 3.331.326	70,29	25/05/2018
15.-	12/06/2018	52709052161	620368	\$ 3.560.480	74,90	12/06/2018
16.-	05/07/2018	52709052161	962127	\$ 3.503.955	73,49	05/07/2018
17.-	17/07/2018	52709052161	962149	\$ 3.348.507	70,23	17/07/2018



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

18. -	03/08/2018	52709052161	962202	\$ 3.645.229	76,37	03/08/2018
19. -	17/08/2018	52709052004	1166550	\$ 3.499.552	73,32	17/08/2018
20. -	27/08/2018	52709052161	962270	\$ 3.729.252	78,13	27/08/2018
21. -	31/08/2018	52709052161	962279	\$ 3.810.380	79,83	03/09/2018
22. -	04/09/2018	52709052161	962287	\$ 3.893.680	81,25	04/09/2018
23. -	14/09/2018	52709052161	1344036	\$ 3.825.731	79,84	14/09/2018
24. -	20/09/2018	52709052161	1344039	\$ 3.746.120	78,17	20/09/2018
25. -	28/09/2018	52709052161	1344059	\$ 3.429.889	71,58	28/09/2018
26	12/10/2018	52709052161	1344096	\$ 3.909.627	81,42	12/10/2018
27. -	31/10/2018	52709052161	1344121	\$ 3.868.885	80,57	31/10/2018
28. -	08/11/2018	52709052161	1344156	\$ 3.826.109	79,44	09/11/2018
29. -	27/11/2018	52709052161	1762405	\$ 3.587.255	74,49	27/11/2018
30. -	05/12/2018	52709052161	1762436	\$ 3.457.545	71,51	05/12/2018
31. -	20/12/2018	52709052161	1762462	\$ 3.781.820	78,21	20/12/2018



32. -	28/12/201 8	5270905216 1	176248 2	\$ 3.867.85 7	79,99	02/01/201 9
33. -	01/02/201 9	5270905216 1	176256 1	\$ 3.864.87 0	89,84	01/02/201 9
34. -	06/02/201 9	5270905216 1	176257 8	\$ 3.741.95 5	77,47	06/02/201 9
35	06/03/201 9	5270905216 1	214272 1	\$ 3.207.20 6	66,33	04/03/201 9

HECHO N° 3:

El 05 de septiembre del 2018 el imputado Alejandro David Cabello Bustos, quien en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano tenía a su cargo los fondos municipales, permitió que la imputada Nubia San Martín Pavez, con quien estaba previamente concertado, en su calidad de funcionaria del Departamento de Finanzas de la DAS y titular de una de las firmas habilitadas de la cuentas corriente N° 52709052161 del Banco Estado de la referida Municipalidad, girara el cheque N° 1344003 a nombre del Alejandro David Cabello Bustos, quien posteriormente procedió a cobrarlo por caja el 06 de septiembre del mismo año, sustrayendo así la suma de \$ 3.476.847 correspondientes a 72,56 UTM.

Estos cheques fueron suscritos además por Manuel Rojas Ramírez, quien tenía otra de las firmas habilitadas, el cual infringió labores propias de su cargo, dando ocasión a que los fondos fueran sustraídos.

HECHO N°4:

Dentro del periodo señalado el imputado Alejandro David Cabello Bustos quien, en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano, tenía a su cargo los fondos municipales permitió que la imputada Nubia San Martín Pavez, con quien estaba previamente concertado, en su calidad de funcionaria del Departamento de Finanzas de la DAS y titular de las firmas habilitadas de las cuentas corriente N° 52709052161, N°52709052004, N°52709052187 y N° 52709052179 del Banco Estado de la referida Municipalidad, girara y suscribiera 86 cheques a nombre del imputado Pedro Ravanal Mellado, quien, concertado también con los imputados Cabello Bustos y San Martín Pavez y a sabiendas de las calidades de funcionarios públicos desempeñados por estos, los cobró por caja, permitiendo la sustracción de la suma total de \$279.472.587 equivalente a 5.854,99 UTM repartiéndose entre los coimputados, los montas sustraídos.



Todos los cheques, salvo N° 620362 y N° 620383 de la cuenta corriente N° 52709052161 de los número 36 y 37 del listado, fueron suscritos además por Manuel Rojas Ramírez, quien tenía otra de las firmas habilitadas, el cual infringió labores propias de su cargo, dando ocasión a que los fondos fueran sustraídos.

Lo anterior ocurrió en las fechas de giro en relación con los cheques de las cuentas que se señalarán, por los mantos y en las fechas de cobro que se detallan a continuación:

	Fecha de giro	Cuenta corriente	N° Cheque	Monto	U.T. M.	Fecha cobro
1.-	23/10/2017	52709052161	9193223	\$ 2.246.720	48,02	24/10/2017
2.-	30/10/2017	52709052161	9193237	\$ 922.845	19,72	31/10/2017
3.-	10/11/2017	52709052004	9193122	\$ 1.796.344	38,47	13/11/2017
4.-	16/11/2017	52709052004	9193128	\$ 2.331.986	49,94	16/11/2017
5.-	05/12/2017	52709052004	9193183	\$ 2.714.390	57,79	05/12/2017
6.-	12/12/2017	52709052004	9470619	\$ 1.979.446	42,14	15/12/2017
7.-	04/01/2018	52709052161	9193398	\$ 1.777.665	37,81	04/01/2018
8.-	10/01/2018	52709052161	8986407	\$ 2.512.888	53,44	11/01/2018
9.-	16/01/2018	52709052161	8986413	\$ 2.294.082	48,79	17/01/2018
10.-	19/01/2018	52709052161	8986424	\$ 1.802.493	37,80	22/01/2018
11.-	25/01/2018	52709052161	8986437	\$ 2.238.97	47,62	26/01/2018



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

				9		
12. -	30/01/2018	52709052161	8986470	\$ 1.414.315	30,08	30/01/2018
13. -	09/02/2018	52709052161	9710502	\$ 2.968.812	63,08	14/02/2018
14. -	15/02/2018	52709052161	9710509	\$ 2.814.826	59,81	15/02/2018
15. -	20/02/2018	52709052161	9710524	\$ 2.677.500	56,89	20/02/2018
16. -	27/02/2018	52709052161	9710542	\$ 2.377.620	50,52	27/02/2018
17. -	09/03/2018	52709052161	9710590	\$ 2.618.000	55,35	12/03/2018
18. -	14/03/2018	52709052004	9470742	\$ 2.795.310	59,10	14/03/2018
19. -	28/03/2018	52709052161	9710634	\$ 2.987.019	63,53	28/03/2018
20. -	10/04/2018	52709052161	9710683	\$ 2.907.825	61,47	10/04/2018
21. -	12/04/2018	52709052004	9710438	\$ 2.827.202	59,77	13/04/2018
22. -	17/04/2018	52709052187	733206	\$ 2.972.239	62,84	17/04/2018
23. -	23/04/2018	52709052161	620204	\$ 2.588.250	54,72	24/04/2018
24. -	30/04/2018	52709052161	620230	\$ 2.942.311	62,10	02/05/2018
25. -	02/05/2018	52709052161	620231	\$ 2.680.11	56,55	03/05/2018



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

				8		
26. -	04/05/2018	52709052161	620250	\$ 2.796.500	59,00	04/05/2018
27. -	11/05/2018	52709052161	620274	\$ 3.236.526	68,29	14/05/2018
28. -	15/05/2018	52709052161	620291	\$ 3.220.353	67,95	15/05/2018
29. -	15/05/2018	52709052161	620296	\$ 3.623.788	76,46	16/05/2018
30. -	23/05/2018	52709052161	620314	\$ 3.220.783	67,95	23/05/2018
31. -	27/05/2018	52709052161	620334	\$ 3.652.110	77,06	29/05/2018
32. -	31/05/2018	52709052161	620345	\$ 3.402.210	71,78	31/05/2018
33. -	04/06/2018	52709052161	620356	\$ 3.332.000	70,09	05/06/2018
34. -	05/06/2018	52709052161	620360	\$ 3.748.500	78,85	06/06/2018
35. -	07/06/2018	52709052161	620362	\$ 3.855.600	81,11	12/06/2018
36. -	26/06/2018	52709052161	620383	\$ 3.951.633	83,13	26/06/2018
37. -	27/06/2018	52709052161	620388	\$ 3.046.400	64,08	28/06/2018
38. -	28/06/2018	52709052161	962104	\$ 3.513.435	73,91	29/06/2018
39. -	03/07/2018	52709052161	962121	\$ 3.927.00	82,36	04/07/2018



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

				0		
40. -	12/07/201 8	52709052161	962144	\$ 3.632.57 2	76,18	12/07/201 8
41. -	20/07/201 8	52709052161	962155	\$ 3.878.68 6	81,35	23/07/201 8
42. -	24/07/201 8	52709052161	962162	\$ 3.923.07 3	82,28	24/07/201 8
43. -	30/07/201 8	52709052004	1166424	\$ 3.570.00 0	74,87	30/07/201 8
44. -	01/08/201 8	52709052161	962191	\$ 3.382.57 5	70,87	02/08/201 8
45. -	06/08/201 8	52709052161	962219	\$ 3.769.99 1	78,99	08/08/201 8
46. -	08/08/201 8	52709052161	962240	\$ 3.754.33 1	78,66	08/08/201 8
47. -	10/08/201 8	52709052004	1166531	\$ 3.641.40 0	76,29	13/08/201 8
48. -	13/08/201 8	52709052004	1166538	\$ 3.538.21 9	74,13	14/08/201 8
49. -	20/08/201 8	52709052161	962263	\$ 3.660.73 8	76,70	21/08/201 8
50. -	22/08/201 8	52709052161	962267	\$ 3.213.00 0	67,32	23/08/201 8
51. -	30/08/201 8	52709052161	962274	\$ 3.442.11 3	72,12	31/08/201 8
52. -	03/09/201 8	52709052161	962284	\$ 3.575.47 4	74,61	03/09/201 8
53. -	05/09/201 8	52709052161	1344005	\$ 3.587.73	74,87	06/09/201 8



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

				1		
54. -	10/09/2018	52709052161	1344029	\$ 3.681.789	76,83	10/09/2018
55. -	13/09/2018	52709052161	1344033	\$ 3.793.720	79,17	13/09/2018
56. -	13/09/2018	52709052161	1344035	\$ 3.439.930	71,78	13/09/2018
57. -	20/09/2018	52709052161	1344040	\$ 3.560.480	74,30	21/09/2018
58. -	25/09/2018	52709052161	1344052	\$ 3.877.020	80,91	25/09/2018
59. -	28/09/2018	52709052161	1344060	\$ 3.855.159	80,45	28/09/2018
60. -	02/10/2018	52709052161	1344065	\$ 3.962.700	83,02	03/10/2018
61. -	04/10/2018	52709052161	1344082	\$ 3.320.100	69,15	05/10/2018
62. -	08/10/2018	52709052161	1344089	\$ 3.760.995	78,33	08/10/2018
63. -	17/10/2018	52709052161	1344100	\$ 3.612.835	75,24	18/10/2018
64. -	22/10/2018	52709052161	1344104	\$ 3.616.100	75,31	22/10/2018
65. -	23/10/2018	52709052161	1344106	\$ 3.881.780	80,84	24/10/2018
66. -	25/10/2018	52709052161	1344108	\$ 3.706.613	77,20	29/10/2018
67. -	29/10/2018	52709052161	1344113	\$ 3.513.75	73,18	30/10/2018



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

				3		
68. -	05/11/2018	52709052161	1344130	\$ 3.212.033	66,70	05/11/2018
69. -	07/11/2018	52709052161	1344145	\$ 3.520.773	73,11	07/11/2018
70. -	09/11/2018	52709052161	1344175	\$ 3.165.400	65,73	12/11/2018
71. -	13/11/2018	52709052161	1344183	\$ 3.254.650	67,58	26/11/2018
72. -	28/11/2018	52709052161	1762412	\$ 3.246.646	67,58	29/11/2018
73. -	03/12/2018	52709052161	1762416	\$ 3.463.495	71,63	04/12/2018
74. -	07/12/2018	52709052161	1762442	\$ 3.782.415	78,23	11/12/2018
75. -	13/12/2018	52709052161	1762451	\$ 3.868.055	80,00	14/12/2018
76. -	19/12/2018	52709052161	1762456	\$ 3.850.840	79,64	19/12/2018
77. -	24/12/2018	52709052161	1762463	\$ 3.775.937	78,09	24/12/2018
78. -	28/12/2018	52709052161	1762480	\$ 3.861.550	79,86	28/12/2018
79. -	27/12/2018	52709052161	1762478	\$ 3.796.838	78,52	07/01/2019
80. -	08/01/2019	52709052161	1762511	\$ 3.783.724	78,25	09/01/2019
81. -	08/01/2019	52709052161	1762513	\$ 3.626.19	74,99	05/02/2019



				2		
82.-	08/01/2019	52709052161	1762512	\$ 3.500.980	72,40	06/02/2019
83.-	18/02/2019	52709052161	1762587	\$ 3.685.668	76,30	18/02/2019
84.-	21/02/2019	52709052161	1762600	\$ 3.923.073	81,21	22/02/2019
85.-	27/02/2019	52709052179	2593238	\$ 3.986.500	82,53	27/02/2019
86.-	06/03/2019	52709052161	2142720	\$ 3.298.918	68,23	07/03/2019

HECHO N° 5:

Entre los meses de diciembre del 2017 a octubre del 2018 el imputado Alejandro Cabello Bustos en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano y encargado de suscribir los decretos municipales que registran los pagos de obligaciones contraídas por la DAS de dicha Municipalidad, firmó los decretos respecto de pagos a distintos proveedores en las fechas, montos y con los cheques que se indicarán, a sabiendas que los cheques consignados no pagaron las obligaciones declaradas en los documentos; decretos de pago que fueron elaborados concertadamente con Cabello Bustos, por la imputada Nubia San Martín Pavez, en su calidad de Encargada de Presupuesto, quien ingresa la información contenida en los decretos y luego visa con firma de responsabilidad los mismos. Estos decretos son falsos al declarar que las respectivas obligaciones en ellos consignadas fueron pagadas con los cheques de titularidad de la Municipalidad señalados en los documentos.

Lo anterior ocurrió en los siguientes documentos, en las fechas, respecto de los proveedores, por los cheques, y mantos que se señalan a continuación:

	Número Decreto	Fecha	N° Cheque	Monto	Proveedor
1.-	2199	14/12/2017	9193347	\$ 1.285.200	Laboratorio Chile S.A.
2.-	275	21/02/2018	9710524	\$ 2.677.500	Etex Farmacéutica Limitada



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

3.-	344	38/03/2018	9710590	\$ 2.618.000	Etex Farmacéutica Limitada
4.-	498	28/03/2018	9710634	\$ 2.987.019	Laboratorio Andrómaco
5.-	653	32/04/2018	9710543	\$ 2.907.825	Munnich Pharma Medical Ltda.
6.-	643	12/04/2018	9710438	\$ 2.827.202	Laboratorio Andrómaco
7.-	659	17/04/2018	733206	\$ 2.972.239	Laboratorio Andrómaco
9.-	921	23/05/2018	620314	\$ 3.220.783	Laboratorio Andrómaco
10.-	983	34/06/2018	620356	\$ 3.332.000	Laboratorio Andrómaco
11.-	1232	24/07/2018	962162	\$ 3.923.073	Laboratorio Chile S.A.
12.-	1277	30/07/2018	1166424	\$ 3.570.000	Laboratorio Chile S.A.
13.-	1535	D3/09/2018	962279	\$ 3.810.380	Dpharma Investi De Chile S.A.
14.-	1540	03/09/2018	962267	\$ 3.213.000	Buhos S.C.I.Ltda.
15.-	1541	03/09/2018	962284	\$ 3.575.474	Laboratorio Chile S.A.
16.-	1644	03/09/2018	962263	\$ 3.660.738	Winpharm SPA
17.-	1550	04/09/2018	962287	\$ 3.893.68	Laboratorio Chile S.A.



PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
CONCEPCION

				0	
18. -	1588	05/09/2018	1344005	\$ 3.587.731	Laboratorio Chile S.A.
19. -	1594	05/09/2018	1344003	\$ 3.476.847	Opko Chile S.A
20. -	1587	05/09/2018	1344001	\$ 3.111.255	Pharma Investi De Chile S.A.
21. -	1589	10/09/2018	1344029	\$ 3.681.789	Ethon Pharmaceuticals
22. -	1634	13/09/2018	1344035	\$ 3.439.930	Laboratorio Chile S.A.
23. -	1626	14/09/2018	1344036	\$ 3.825.731	Laboratorio Andrómico
24. -	1635	20/09/2018	1344039	\$ 3.746.120	Laboratorio Andrómico
25. -	1643	20/09/2018	1344040	\$ 3.560.480	Laboratorio Andrómico
26. -	1660	24/09/2018	1344052	\$ 3.877.020	Laboratorio Chile S.A.
27. -	1690	02/10/2018	1344065	\$ 3.962.700	Winpharm SPA
28. -	1712	04/10/2018	1344082	\$ 3.320.100	Etex Farmacéutica Limitada
29. -	1729	08/10/2018	1344089	\$ 3.760.995	Laboratorio Chile S.A.
30. -	1738	11/10/2018	1344096	\$ 3.909.627	Laboratorio Chile S.A.
31. -	1747	17/10/2018	1344100	\$ 3.612.83	Laboratorio Chile S.A.



				5	
32. -	1754	22/10/2018	1344104	\$ 3.616.100	Ethon Pharmaceuticals
33. -	1758	23/10/2018	1344106	\$ 3.881.780	Winpharm SPA
34. -	1776	24/10/2018	1344107	\$ 3.539.885	Laboratorio Silesia S.A.

HECHO N° 6:

El 12 de junio del 2018 el imputado Alejandro Cabello Bustos en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano y encargado de suscribir los decretos municipales que registran los pagos de obligaciones contraídas por la DAS de dicha Municipalidad, elaboró e ingresó la información contenida en el decreto de pago N° 1013 respecto del pago al proveedor LABORATORIO ANDROMACO declarando que el cheque N° 620368 pagaba dicha obligación por \$3.560.480 para luego firmarlo. Decreto de pago que Cabello Bustos firma a sabiendas de su falsedad al declarar que la respectiva obligación en el decreto consignada, fue pagado con el cheque de titularidad de la Municipalidad señalado en el documento, lo cual es falso.

HECHO N° 7:

El 01 de febrero del 2019 la imputada Nubia San Martín Pavez en su calidad de jefa subrogante del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano y encargada de suscribir los decretos municipales que registran los pagos de obligaciones contraídas por la DAS de dicha Municipalidad, elaboró e ingresó la información contenida en el decreto de pago N° 235 respecto del pago al proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION, declarando que el cheque N° 1344113 pagaba dicha obligación por \$3.513.753 para luego firmarlo. Decreto de pago que San Martín Pavez firma a sabiendas de su falsedad al declarar que la respectiva obligación en el decreto consignada fue pagado con el cheque de titularidad de la Municipalidad señalado en el documento, lo cual es falso.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que los hechos establecidos en el motivo precedente, signados como Hechos 1, 2, 3 y 4, son constitutivos de 129 delitos de malversación de caudales público, previstos y sancionados en el artículo 233 N° 2 y 3 del Código Penal, normativa que sanciona con las penas que allí indica al empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, los substraigiere o consintiere que otro los substraiga; ello en atención a que durante el juicio se acreditaron todos los elementos requeridos para la configuración de los mismos, a saber:



Que el sujeto activo ha de ser un empleado público; que dicho empleado público tenga a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en razón de su oficio o cargo; y que dicho funcionario los substraiga o permita o consienta que un tercero los substraiga:

1.- Que en cuanto a ser el sujeto activo un empleado público, ha de indicarse que para tales efectos habrá que estarse al concepto contenido en el artículo 260 del Código Penal, en cuanto dicha norma de manera expresa establece que “Para los efectos de este Título y del párrafo IV del Título III, se reputa empleado a todo aquel que desempeñe un cargo o función pública, sea en la administración central o en instituciones o empresas semifiscales u autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean de nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldo del Estado. No obstará esta calificación el que el cargo sea de elección popular”.

Al respecto, no se ha discutido que los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez a la época de los hechos eran funcionarios de planta de la I. Municipalidad de Talcahuano, el primero en su calidad de jefe del departamento de finanzas de la Dirección de Administración de Salud de dicha entidad municipal, y la segunda, en su calidad de administrativa contable del mismo departamento; calidad de funcionario público que también tenía el acusado Paredes Montoya, quien era encargado de proyectos de dicha Dirección de Salud, ello sin perjuicio de lo que se dirá más adelante respecto de este último acusado; habiéndose por lo demás, acompañado la documentación pertinente que acredita tales calidades, según lo consignado en el motivo decimonoveno.

2.- En cuanto a que el empleado público tenga a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en razón de su oficio o cargo, se ha sostenido que ello significa que tales caudales o efectos deben estar vinculados al funcionario por una especial relación de custodia, la que a su vez deriva de su función pública, exigencia que descansa en la confianza que ha depositado el Estado en el funcionario, la que pasa a ser en cierto modo una confianza pública; y se dice que el funcionario comete malversación cuando sustrae los fondos públicos o de particulares, que tiene a su cargo en razón de sus funciones, ya que los dineros o caudales los detenta exclusivamente por la función que desempeña (Lino Gustavo Videla Bustillo, “Aproximación a la Doctrina y Jurisprudencia Chilena sobre Delitos Funcionarios. Malversación de Caudales Públicos y Fraude al Fisco” 4116 - Revista Derecho 2009 YK.indb 83 19-05-2010, página 83).

También ha de considerarse que si bien algunos autores sostienen que es preciso que el funcionario desempeñe el cargo en alguna de las calidades que el Derecho Administrativo contempla, en virtud de disposición legal o de formal nombramiento, y también que el cargo dentro de las disposiciones legales o reglamentarias vigentes, lleve consigo la custodia de los fondos malversados



(Alfredo Etcheberry, “Derecho Penal”, Partes Especial, Tomo IV, Tercera Edición Revisada y Actualizada, página 238), no es menos cierto que también se sostiene que “La jurisprudencia, por el contrario, no exige esta vinculación ya que considera que éste es un requisito doctrinal que no emana del texto legal. Esta norma sólo haría referencia al funcionario que tiene “fondos a su cargo”, es decir, que estén a su cuidado, disposición o responsabilidad. Ni el artículo 233 ni ningún otro precepto exigen que el funcionario tenga las especies o valores en virtud de una ley o reglamento (Lino Gustavo Videla Bustillo, op. cit., página 84).

Y en este orden de cosas, nuestro máximo tribunal en torno a las expresiones “teniendo a su cargo” empleadas por el artículo 233 ha señalado que “... del análisis de dicha norma se desprende que la misma no exige que tales caudales los tenga el funcionario público en razón de su cargo o función, resultando bastante para los efectos de su configuración, que los tenga aún a un título de mera tenencia”, e incluso más, sostiene que “basta que un empleado público haya sido encargado (se supone que por una autoridad jerárquica superior, en este caso el Secretario del Segundo Juzgado de San Antonio) de recibir y entregar dineros a quien corresponda para que, si no lo hace, incurra en la figura delictual allí señalada, sin que exija como requisito para ello que sea el funcionario que directamente en razón de sus funciones que la ley o el reglamento le hayan asignado, quien cometa el delito”. (Corte Suprema, Sentencia de 30 de enero de 2006, motivos 9° y 10°, Rol 735-2003)

Es más, también se sostiene por la doctrina que la expresión “a su cargo”, prácticamente equivalente de la expresión “que administre”, empleada en el artículo 236, denota mucho más claramente la especie de vinculación que debe existir entre el funcionario y los caudales y que, como se ha dicho, es esencialmente una relación de hecho, que importa resguardo, custodia; que en la expresión “a su cargo” deben entenderse todas las funciones de un tenedor de fondos públicos: percibir, recaudar, cobrar, custodiar, conservar, administrar e invertir bienes, y que “Ese, seguramente, ha sido el espíritu de la ley” (Álvaro Bunster “La Malversación de Caudales Públicos, Estudio de Doctrina y Jurisprudencia.”. Memoria de Prueba para optar al grado de licenciado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Santiago, Chile. Universidad de Chile, Facultad de Derecho, 1948. pp. 46 y 52; citado por Ramón Ignacio Espinoza Sapag, “Aproximación al requisito normativo del tipo “teniendo a su cargo” en el delito de malversación de caudales públicos del artículo 233 del Código Penal Chileno”. Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Escuela de Postgrado, Diciembre de 2013).

Todavía más, José Luis Guzmán Dálbora expresa que la locución “tener a su cargo”, implica, entre otras exigencias, que los bienes hayan sido confiados al cuidado o a la procura del sujeto agente, lo que supone que éste tenga un poder sobre ellos, sujeto que debe tener las cosas “precisamente en razón de sus



funciones, de modo que no son suficientes una relación adventicia, ocasional y, mucho menos, un vínculo ilegal o antirreglamentariamente establecidos sobre ellas. Al contrario, su tenencia ha de cimentarse en las funciones propias del cargo del empleado, o dicho de otra manera, tiene que ser lícita. Su base podrá ser la ley, el reglamento, la resolución e incluso la costumbre administrativa” (citado por Ramón Ignacio Espinoza Sapag, op. Cit., página 40).

Por otra parte, en apoyo de que la circunstancia de que no necesariamente el deber de custodia ha de emanar del Derecho Administrativo o de un reglamento, encuentra sustento en lo dispuesto en el artículo 238 del Código Penal, norma que establece que “las disposiciones de este párrafo son extensivas al que se halle encargado por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos municipales o pertenecientes a un establecimiento público de instrucción o beneficencia”, en torno a la cual la doctrina sostiene que “En este caso, la relación del empleado o del particular con la cosa no debe provenir exclusivamente del reglamento o la ley, y puede fundarse en una orden administrativa dada por el funcionario competente” (Sergio Politoff L., Jean Pierre Matus A., María Cecilia Ramírez G., “Lecciones de Derecho Penal Chileno”, Parte Especial, Segunda Edición Actualizada, página 493.).

De todo lo anteriormente expuesto, se puede colegir que lo que realmente el tipo penal exige es que el sujeto activo, más allá de la existencia formal de una norma legal o reglamentaria, en el hecho tenga efectivamente dentro de las funciones que habitualmente realiza, la custodia de los fondos o efectos públicos; al punto que la misma costumbre administrativa puede dar lugar a configurar el elemento en cuestión, que es precisamente lo que ocurría en el caso sublite, en el cual conforme a los dichos del funcionario Valenzuela Ortiz, todos los funcionarios de la DAS por él entrevistados decían tener muy clara sus funciones y responsabilidades, incluidos los acusados; como por lo demás queda debidamente corroborado por los dichos de Priscila Muñoz Candia, y con lo expuesto por la asesora jurídica de la Dirección de Administración de Salud Municipal de Talcahuano, Marianela Chamorro Díaz, quien dio cuenta precisamente de la existencia de una cultura histórica de las responsabilidades que implicaban las funciones que desarrollaban los funcionarios al interior de la DAS, de sus funciones y perfiles de cargo, conforme a lo cual, por lo demás respecto a los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez, se establecieron una serie funciones por ellos desarrolladas, dentro de las cuales estaban precisamente las que llevaron a cabo y que se tradujeron en el incumplimiento de velar por la debida custodia de los caudales o efectos públicos de los que estaban a cargo; que en el caso de Cabello Bustos, cabe destacar, principalmente su calidad de Jefe de Finanzas, y por lo mismo el encargado de todo el aspecto de pago de obligaciones que se van generando en las compras de bienes y servicios, de todo el pago que implica el funcionamiento del recurso humano, el pago de remuneraciones, de las provisiones, y pago de los



honorarios, pues todo lo que es pago proveedores pasaba por ese departamento, conforme lo aseverado por la testigo Chamorro Díaz; cargo que también implicaba la firma de los certificados de disponibilidad financiera, esto es, debía certificar si la compra de bienes o contratación de servicios podía ser financiada o no, además, por su cargo, era una de las firmas que debían llevar las órdenes de pago, como también debía otorgar el visto bueno cuando el banco lo requería para el cobro de cheques sobre cierto monto; y en la práctica tenía manejo de clave o digipass para efectuar transferencias desde las cuentas corrientes de la DAS a terceros, como entre las mismas cuentas bancarias de dicha Dirección, ello sin perjuicio que no figurare oficialmente con token o clave como tal para ingresar a las cuentas; según consta de carta del Banco Estado, de 11 de octubre de 2019, en la que no figura Cabello Bustos con claves de acceso y token **(Prueba Documental N° 80)**.

En efecto, conforme a los dichos de la encartada San Martín Pavez, las transferencias bancarias, tenían un sistema de doble súper clave o doble pinpass, que las manejaba el departamento de Remuneraciones; y si bien señaló que ella nunca manejó claves de pinpass, también afirmó que en el departamento de finanzas siempre se manejaban los dos pinpass, a veces lo manejaba Alejandro para cargar los sueldos o remuneraciones o a veces la encargada de remuneraciones, y algunas veces se hacían transferencias de esas cuentas cuando se solicitaban; que para las transferencias también se necesitaba doble clave, uno lo mantenían en el departamento de Finanzas, don Alejandro, y si no lo tenía Alejandro, en el departamento Finanzas el pin pass lo mantenía ella en la caja fuerte, por lo que era ella o don Alejandro, o la parte de remuneraciones cuando solicitaban los pagos de los sueldos, los dos pinpass los tenía el departamento de remuneraciones para hacer transferencias o cargar los sueldos; quien incluso agregó que cuando el banco tenía que llamar para verificar una firma, para verificar el pago de un documento, tenía todos los teléfonos de la municipalidad y posiblemente llamaban a don Alejandro, quien siempre estaba en contacto con el banco por el asunto de los depósitos para que se hicieran más rápido, y poder liberar más rápido los fondos, por lo que se comunicaban con él; pero que a ella no la llamaban del banco para verificar el pago de un cheque de titularidad del DAS.

Y en el caso de San Martín Pavez, funcionaria que en su calidad de administrativa contable tenía clave para ingresar la información al Sistema Modular Contable para efectos de la confección de los respectivos decretos de pago; efectuaba el registro el contable o devengo de las facturas a pagar, y como tal efectuar revisión de la documentación de respaldo, registro y devengamiento de las obligaciones contables; incluso también cumplía funciones de jefe de finanzas subrogante, y en tal condición también firmaba los certificados de disponibilidad financiera y los decretos de pago; y era una de las personas que tenía firma autorizada en el Banco Estado para firmar la documentación bancaria, específicamente los cheques de las cuentas corrientes municipales de



la DAS; y como tal también mantenía bajo su custodia los respectivos talonarios de cheques; funcionaria que dentro de sus principales funciones, tenía precisamente a cargo todo el proceso de pago a proveedores y pago de servicios, además de manejar la caja chica de la DAS, que era una pequeña cantidad de dinero que se entregaba para gastos menores; tenía póliza de fianza y dentro de la Dirección de Salud era la funcionaria de mayor antigüedad y conocimiento histórico de todos los procesos que se llevaban en el departamento, conforme a los dichos de la referida Chamorro Díaz; funciones que evidentemente implican que dentro de sus responsabilidades está la custodia de los fondos o caudales públicos de la DAS; como por lo demás se desprende de la propia declaración de Nubia San Martín, quien en audiencia manifestó que sabía que los cheques que se cobraban eran de las cuentas corrientes de la DAS y que se referían a fondos de propiedad de la municipalidad, que tenía conocimiento que esos fondos eran para un fin público, y que sabía que estaba a cargo de custodiar dichos cheques; a lo cual debe agregarse lo ya indicado por la acusada en relación al manejo de las claves o pin pass.

Todo lo cual, por lo demás, también ha quedado acreditado por medio de prueba documental y refrendado por los dichos contestes de todos los funcionarios municipales que tuvieron la oportunidad de trabajar en el mismo departamento de finanzas o de relacionarse con los referidos acusados con ocasión de sus diversas funciones, ya sea al interior de la DAS e incluso de la propia Municipalidad que trabajaban con ellos, y considerando la experiencia y tiempo que ambos acusados llevaban en sus cargos; sin que sea óbice para arribar a dicha conclusión la falta de algún manual o reglamento interno que diera cuenta de las funciones, o de algún acto administrativo que formalmente estableciera que se encontraban a su cargo determinados fondos o caudales públicos, ni mucho menos por la circunstancia que Cabello Bustos no tuviere suscrita una póliza de fianza.

3.- Objeto material: El objeto sobre el que recae la conducta consiste en caudales o efectos públicos, a cuyo respecto se sostiene que “La exigencia de que sean públicos no debe entenderse solamente en el sentido restringido de pertenencia al Estado o Fisco, sino que debe relacionarse, para los efectos penales, con el concepto de empleado público del Art. 260, para concluir que si el cargo o función en alguna de las instituciones mencionadas en el Art. 260 es suficiente para conferir la calidad de empleado público, correspondientemente los fondos de dichas instituciones deben ser considerados fondos públicos para los efectos de este título.” (Alfredo Etcheberry, “Derecho Penal”, Parte Especial, Tomo IV, Tercera Edición, página 237).

Y es del caso, que más allá que no se ha cuestionado por las defensas la naturaleza pública de los fondos de que disponía la Municipalidad de Talcahuano para el cumplimiento de sus fines, conforme a lo precedentemente expuesto, encontrándose establecidas las funciones y cargo de los acusados Cabello Bustos



y San Martín Pavez que permiten otorgarles la calidad de empleados públicos, los dineros que la Dirección de Salud Municipal mantenía en sus cuentas corrientes bancarias, tienen la calidad de fondos o caudales públicos; habiéndose establecido, por lo demás, conforme al mérito de los testimonios, entre otros, de Chamorro Díaz, asesora jurídica de la DAS, y Estrada Rivas, directora jurídica de la Municipalidad de Talcahuano de aquella época, unido a los informes ya analizados en motivos precedentes, que las cuentas corrientes de la Municipalidad de Talcahuano que se vieron afectadas con el accionar de los acusados, fueron la de Fondos Project APS, cuenta corriente N°52709052004; la cuenta Aporte Municipal, cuenta corriente N°52709052161, cuyos fondos proviene de los que transfiere el municipio a la DAS; la denominada cuenta Programa de Resolutividad de Atención primaria, cuenta corriente N° 52709052187; y la cuenta Remuneraciones, cuenta corriente N° 52709052179, que recibe aportes del Ministerio de Salud a través del Servicio de Salud respectivo, a través del aporte per cápita, según la población que se atiende en la atención de salud primaria de la comuna; por lo que más allá de si las personas que estaban a cargo de los fondos eran empleados públicos o no, intrínsecamente los fondos que se vieron afectados, y que estaban a cargo de los encartados, son indudablemente caudales públicos, cuyas cuentas corrientes por lo demás son precisamente las consignadas en cada uno de los 129 cheques cobrados por los acusados, según se aprecia del solo examen de tales documentos.

4.- Que, conforme a lo adelantado, la figura típica del artículo 233 del Código Penal, exige que el funcionario público substraiga o permita o consienta que un tercero substraiga los caudales o efectos públicos; que es precisamente la conducta misma constitutiva del referido delito; para lo cual ha de tenerse presente que se sostiene por Alfredo Etcheberry que “sustraer significa una acción material de apoderamiento que hace salir la cosa de la esfera de custodia de su titular”; e incluso agrega que la sustracción también puede consistir en quedarse con los caudales o efectos antes de que ellos se incorporen materialmente en arcas fiscales; agregando que para determinar si ha existido sustracción debemos distinguir entre la esfera de custodia del empleado como funcionario público y como persona privada, debiendo considerarse la primera a efectos de establecer la eventual configuración del delito, y que para distinguir entre una y otra esfera debemos suponer mentalmente que un día el funcionario es reemplazado por otra persona y, si esta última sigue teniendo la custodia de los fondos, ello quiere decir que éstos aún no han sido sustraídos; y en cuanto a la conducta de “consentir en que otro los sustraiga”, señala que puede consistir en una conducta activa o meramente pasiva, pero que en todo caso debe ser dolosa, pues no basta la negligencia; y puede o no existir concierto con el tercero que sustrae los fondos, lo cual es indiferente para los efectos típicos (Alfredo Etcheberry, op.cit. , página 239); a



cuyo respecto también ha de indicarse que esta conducta descrita en el artículo 233 es la conducta más grave de los tipos de malversación ya que se trata de una apropiación permanente, sin devolución, a diferencia de la figura del artículo 235 del Código Penal en que la distracción no es definitiva, ya que en ella se permite o acepta la figura del reintegro, lo que implica necesariamente un uso temporal de los fondos (Ramón Ignacio Espinosa Sapag, “Aproximación al requisito normativo del tipo “teniendo a su cargo” en el delito de malversación de caudales públicos del artículo 233 del Código Penal chileno”, Universidad de Chile, Escuela de Post Grado, páginas 11 y 12).

Y es del caso, que se acreditó que efectivamente en el período comprendido entre octubre de 2017 y marzo de 2019, los acusados sustrajeron caudales públicos, consistente en los fondos existentes en las cuentas corrientes de la DAS de Talcahuano, dado que desde la cuenta corriente N°52709052004, se giraron cantidad 16 cheques, por un monto de \$43.424.607; contra la cuenta corriente N°52709052161, se giraron cantidad 111 cheques, por un monto total de \$361.641.479; en contra de la cuenta corriente N° 52709052187, cantidad 1 cheque, por un monto \$2.972.239; y en contra de la cuenta corriente N° 52709052179, cantidad 1 cheque, monto \$3.986.500; por lo que en total se giraron contra las señaladas cuentas municipales un total de 129 cheques, que alcanzan a la suma de \$412.024.825; ello conforme al testimonio de diversos funcionarios la entidad edilicia, en especial de los testigos Campos Coa y Chamorro Díaz, y del mérito del Informe Final N° 315 de la Contraloría Regional del Bío Bío, todo ello según lo expuesto en su oportunidad; y, más específicamente, quedó totalmente acreditado que en el período referido se giraron y cobraron un total de 129 cheques de las señaladas cuentas corrientes que totalizaron la suma indicada, de los cuales 86 cheques fueron girados a nombre del acusado Pedro Ravanal Mellado, quien cobró los mismos, por un total de \$279.472.587; 35 cheques fueron girados a nombre de Pedro Paredes Montoya y cobrados por éste, por una suma total de \$111.176.748; en tanto que 7 cheques fueron girados a nombre de Nubia San Martín Pavez y cobrados por ésta, por un monto total de \$17.898.643; y 1 cheque fue girado a nombre de Alejandro Cabello Bustos, y cobrado por éste, por un monto de \$3.476.847; todo ello conforme al mérito de cada uno de los 129 cheques, debidamente acompañados por la fiscalía, en los cuales constan los montos de cada uno de ellos, las personas a cuyo nombre fueron girados y el cobro de los mismos en las fechas que allí se indican, según Prueba documental números 107, 108, 109, 110, 111 y 112, y del informe citado del ente contralor.

5.- Que para la debida calificación de los hechos y de su penalidad, se ha tenido presente el monto malversado en cada ocasión y el valor de la unidad tributaria mensual a la época de comisión de cada uno de los hechos, que ascienden a los montos que a continuación se indican, ello de conformidad con la



información oficial y de público conocimiento que registra el Servicio de Impuestos Internos en página web:

Año 2017: Octubre, \$46786; noviembre, \$46.692; diciembre, \$46.9728.

Año 2018: Enero \$47.019; febrero, \$47.066; marzo, \$47.301; abril, 47.301; mayo, \$47.396; junio, \$47.538; julio, \$47.681; agosto, \$47.729; septiembre, \$47.920; octubre, \$48.016; noviembre, \$48.160; y, diciembre, \$48.353.

Año 2019: Enero, \$48.353; febrero, \$48.305; marzo, \$48.353.

TRIGESIMO NOVENO: Que, los hechos establecidos en el motivo trigésimo séptimo, signados como Hechos 1, 2, 3 y 4, son constitutivos de 129 delitos de malversación de caudales público, en grado de consumados, previstos y sancionados en el artículo 233 N° 2 y 3 del Código Penal, en los cuales les ha correspondido a los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez, una participación en calidad de autores, conforme al artículo 15 N° 1 del Código Penal, en atención a que dichos acusados, en sus calidades de funcionarios públicos, se concertaron con Paredes Montoya y Ravanal Mellado, para girar y cobrar a nombre de los cuatro encartados referidos, un total de 129 cheques por diversos montos desde las cuentas corrientes de la Dirección de Salud Municipal de Talcahuano, que totalizaron \$412.024.825, sustrayendo así fondos o caudales públicos que tenían a su cargo, en razón de las funciones que desempeñaban, por lo cual intervinieron de una manera inmediata y directa en cada uno de los señalados delitos; rechazándose así las alegaciones de absolución, como el cambio de calificación jurídica y grado de participación esgrimida por la defensa, en atención a los fundamentos ya expuestos, y de las siguientes consideraciones:

1.- Desde ya debe señalarse que en cuanto a las alegaciones de la defensa en orden a que no se encuentra acreditado el concierto entre todos los acusados, y particularmente entre Cabello Bustos y San Martín Pavez, han de desecharse en base a los antecedentes latamente expuestos en el motivo trigésimo quinto, que van más allá de los dichos de los propios encartados al momento de admitir su participación en los hechos y la manera de cómo se involucraron en los mismos; lo cual tiene incidencia en las alegaciones fundadas en que el acusado Cabello Bustos tenía ausencias permanentes en las oficinas de la DAS, dado los problemas personales que presentaba, problemas de alcohol y de licencias médicas, como también el hecho que el 1 de enero de 2019 tuvo una atención médica de urgencia por una caída, que motiva una licencia médica, lo cual estima se corrobora con los dichos del testigo Torres Vargas que llega el 24 de enero de 2019 a la DAS a propósito de dicha licencia; por lo que la defensa hace hincapié en la obligación del Ministerio Público de establecer el acuerdo previo en cada una de las oportunidades que se cobró un cheque.

Que efectivamente el testigo Torres Vargas refirió en audiencia que él llegó a trabajar el 23 de enero de 2019 a la DAS y que en ese momento Cabello Bustos estaba con licencia médica, como también consta una atención de



urgencia en la persona de Cabello Bustos, acreditada con el mérito del Dato de Atención de Urgencia, del Hospital Las Higueras de Talcahuano, de fecha 1 de enero de 2019, en que se refiere que Cabello Bustos fue atendido, indicándose como motivo de consulta: “se lanzó de un vehículo en movimiento”, consignándose un diagnóstico médico legal de grave, con impotencia funcional de muñeca derecha, refiriéndose el tratamiento aplicado **(Otros Medios de Prueba 68)**.

Que no obstante lo anterior, la prueba y antecedentes referidos en el motivo trigésimo quinto dan cuenta del concierto y la forma de operar que tenían los acusados y la distribución de las funciones que al efecto tenían para la materialización del objetivo de malversar los fondos municipales de la DAS, y en los que precisamente el acusado Cabello Bustos no era de aquellos que debían cobrar los cheques, al punto que sólo aparece girado y cobrado un solo cheque a su nombre, como tampoco lo era la acusada San Martín Pavez, respecto de quien sólo figuran 7 cheques en esa condición, todo ello dentro de un universo de 129 cheques; cheques que por lo demás eran extendidos y firmados por San Martín Pavez, quien para tales efectos disponía de cheques firmados en blanco por Manuel Rojas; de manera tal que en ese contexto no era necesaria la presencia física del acusado Cabello Bustos en las dependencias de la DAS; por lo que ninguna incidencia tiene en las conclusiones de estos sentenciadores que el acusado Cabello Bustos, por los motivos que fuere, se haya ausentado algunos días a su trabajo, lo cual se ve corroborado con el mérito de los dichos de los demás acusados, en orden a que todos los cheques cobrados se repartían en tres partes iguales, de lo que se colige, que estuviere o no el acusado Cabello Bustos físicamente en las oficinas de la DAS, igual estaba participando de la substracción de los fondos de dicha Dirección, y lo manifestado por el propio Cabello Bustos, en cuanto señaló que sabe que él recibió dineros del total de los 129 cheques porque todos los cheques girados eran siempre repartidos en tres partes iguales, y todavía más manifestó que a propósito del cobro de cheques recibió un tercio de los 412 millones, casi 140 millones, y que en su primera declaración habló de 40 millones, porque no llevaba un registro; consideraciones en base a las cuales también se desechan las alegaciones de la defensa de que no se puede establecer el concierto de su representado Cabello Bustos, por el solo hecho que él firme los decretos u órdenes de pago.

2.- Del mismo modo, han de desecharse los cuestionamientos de la defensa en cuanto a que no se presentó al juicio ningún representante del Banco Estado que diera cuenta acerca de las visaciones o visto bueno de cada uno de los cheques cobrados, y que más allá que algún testigo haya afirmado que escuchó una llamada del banco para el visto bueno de un cheque, no se puede establecer que en todos los cheques existió esa visación; alegaciones que en todo caso no tienen fundamento, dado que se acreditó con el oficio respectivo del citado banco que el visto bueno solo correspondía sobre el monto de cuatro millones, y



porque más allá de si se dio un visto bueno respecto de todos los cheques, lo cierto es que el acusado Cabello era el encargado de otorgarlo en caso de ser requerido, como por lo demás quedó acreditado en uno de los cheques en que expresamente se anotó al reverso del mismo, por el ejecutivo o cajero del banco al momento de presentarse a cobro el documento, que el visto bueno había sido otorgado por Cabello, y la circunstancia de los testigos que también dan cuenta de las funciones de Cabello en tal sentido, acusado que por lo demás reconoció en audiencia que el banco lo llamó una vez respecto de un cheque y simplemente dio el visto bueno, aunque no recuerda si estaba girado a nombre de Pedro Ravanal.

Que la defensa igualmente planteó que por el solo hecho que Cabello Bustos firmara los decretos de pago, no significaba que estuviere dando el beneplácito para pagar una obligación que no correspondía, y por lo mismo tal firma no puede ser interpretada como un antecedente para establecer el concierto con los acusados, más aun si los decretos también debían ser firmados por el Director de la DAS; mas, conforme al cúmulo de antecedentes probatorios latamente expuestos en los motivos anteriores, ha quedado establecido que además de firmar los decretos de pago, también él cobró un cheque, e incluso al igual que Paredes, también buscaba la documentación o legajo relativo a facturas ya pagadas y se los llevaba a Nubia San Martín para que ella lo ingresara nuevamente al sistema como una deuda nueva, como un nuevo pago, y así se confeccionaba el decreto de pago y se hacía el cheque; conforme a lo declarado en audiencia por la referida acusada San Martín, quien además agregó que la decisión de girar algún cheque la tomaban los tres -refiriéndose a ella, Cabello y Paredes-, porque los tres tenían problemas económicos.

3.- Que la defensa cuestiona que en la descripción de los Hechos 1, 2 3 y 4 de las acusaciones, no se describa el concierto que se imputa a sus defendidos, y que en el Hecho 1 no se da cuenta de la participación de los otros acusados; mas, la defensa omite que la acusación contempla una introducción o encabezamiento, en el cual se describe el contexto y el concierto bajo el cual se cometen los hechos que posteriormente se detallan, por lo que no es efectiva la falta de descripción alegada; y por lo mismo, tampoco tienen cabida los cuestionamientos en orden a que no se indican los montos que cada uno de los acusados se apropia, pues de la lectura de la acusación claramente aparece que los encartados Cabello Bustos y San Martín Pavez, lo son respeto del total de los cheques cobrados, y respecto de los otros acusados, por las sumas de dinero que respectivamente cobraron; careciendo de todo sustento las alegaciones en torno a la importancia de la determinación de los montos para los efectos del artículo 235 del Código Penal, cuyos presupuestos no se dan en la especie, pues no ha habido reintegro de fondos, y que por lo demás ni las defensas han invocado su aplicación.



4.- Que, en torno a todas las alegaciones de la defensa relativas a que sus defendidos no tenían a su cargo fondos públicos, a que no había acto administrativo que les atribuyere tal obligación, ni reglamento o manuales con el perfil de cargo o descripción de funciones, al hecho que Cabello Bustos no tenía clave de acceso al banco, ni firma autorizada, ni era apoderado ante ninguna institución bancaria, como tampoco tenía fianza; a que no es posible establecer la administración y custodia de fondos públicos en base a la costumbre, pues ello requiere un acto administrativo normal; han de ser desechadas, conforme a las argumentaciones contenidas en motivos precedentes.

5.- Finalmente, la defensa acompañó 5 hojas impresas, que forman parte de 314 hojas de impresión de la aplicación whatsapp, que se contienen en **Otros Medios de Prueba 99**, respecto de las cuales la fiscalía también acompañó 28 hojas de dichas conversación, y a las que se refirió la testigo Lizana Rivera, de la Bridec, según lo anotado en el motivo trigésimo quinto N° 2, letra c); en que precisó que respecto a las conversaciones por dicha aplicación ella revisó 320 hojas de conversaciones en el período 2016 al 2018, entre las cuales habían conversaciones de Nubia San Martín con distintos usuarios, como Alejandro Cabello, Pedro Ravanal, dando cuenta la testigo que las conversaciones relevantes son las de Nubia San Martín con Alejandro Cabello en el año 2018, y en torno a las cuales precisó el contenido de las hojas que le fueron exhibidas, indicando que en las conversaciones hay un número terminado en 661 que corresponde a Cabello, y que también en las conversaciones aparece el terminado en 953, que según la testigo también correspondería a Alejandro Cabello, dado que en las conversaciones Nubia San Martín hace referencia a que está dialogando con Alejandro Cabello.

Que en base a los referidos antecedentes, las conversaciones acompañadas por la defensa, tendrían lugar entre un teléfono celular de Nubia San Martín, el terminado en 703, pues así por lo demás se indica en la misma, con otro número terminado en 904, que se identifica como perteneciente a Patricia Vecina del Campo, las que tienen lugar los días 22, 23 y 25 de junio de 2018, por medio de las cuales Nubia le envía mensajes al otro número indicado, dando cuenta que llegó, y que lo pasaron bien, y su interlocutor la saluda y le manifiesta que espera que lo haya pasado bien junto a su hijo; y que también figuran conversaciones entre el referido celular de Nubia San Martín Pavez con otro número terminado en 953, que conforme al análisis de Lizana Rivera, correspondería a Cabello Bustos, las cuales tuvieron lugar los días 12 a 15 de septiembre de 2018, en una de las cuales Cabello Bustos le señala a San Martín Pavez que está con licencia por tres días, en otras se ponen de acuerdo acerca de la hora de llegada de Cabello Bustos; y una tercera conversación que gira en torno a la compra de una caja, en que San Martín Pavez le pregunta si le compra una, y Cabello Bustos le dice que ella elija, para después San Martín indicarle que se la van a dejar.



Que de las referidas conversaciones no es posible extraer ningún antecedente que permita desvirtuar o contradecir los antecedentes inculpativos allegados al juicio, ni ataca a ninguno de los elementos que tipifican los delitos de malversación de caudales públicos de los que resultan responsables ambos acusados, más allá que Nubia manifieste que llegó de un lugar que no se precisa, o que Cabello Bustos señale estar con licencia médica por tres días, y que Nubia San Martín y Alejandro Cabello se pongan de acuerdo para la compra de una caja.

CUADRÁGESIMO: Que, los hechos establecidos en el motivo trigésimo, signados como Hecho 2, son constitutivos de 35 delitos de malversación de caudales público, en grado de consumados, previstos y sancionados en el artículo 233 N° 2 y 3 del Código Penal, en los cuales le ha correspondido al acusado Paredes Montoya una participación en calidad de autor, conforme a lo previsto en el artículo 15 N° 3 del citado código punitivo; en tanto que signados como Hecho 4 en el referido considerando, son constitutivos de 86 delitos de malversación de caudales público, en grado de consumados, previstos y sancionados en el artículo 233 N° 2 y 3 del Código Penal, en los cuales le ha correspondido al acusado Ravanal Mellado una participación en calidad de autor, conforme a lo previsto en el artículo 15 N° 3 del código punitivo; en atención a que si bien no tenían a su cargo fondos públicos, y todavía más, este último ni siquiera era funcionario público, lo cierto es que consintieron en participar en la actividad criminal, facilitando los medios tendientes a su materialización, que no era otra que la sustracción de los caudales públicos desde las cuentas corrientes de la Municipalidad de Talcahuano, para cuyos efectos procedieron al cobro de los cheques girados nominativamente a sus respectivos nombres, por diversas sumas de dinero, que en el caso de Paredes Montoya totalizaron \$111.176.748, y en el caso de Ravanal Mellado, ascendieron a \$279.472.587, conociendo el origen público de tales caudales, por lo que corresponde sancionarlos penalmente por los delitos de malversación de caudales públicos, rechazándose de este modo las alegaciones de las defensas que pedían la absolución, y peticiones de recalificación jurídica de los hechos y del grado de participación, conforme a lo ya establecido, y además, en atención a las siguientes consideraciones:

1.- Que conforme a los razonamientos expuestos, se ha acreditado de manera inequívoca la existencia de un concierto entre los acusados Cabello Bustos, San Martín Pavez, Paredes Montoya y Ravanal Mellado, tendiente a materializar la sustracción de los fondos públicos o dineros pertenecientes a la Dirección de Salud de la Municipalidad de Talcahuano; ello, fundamentalmente, al tenor de las comunicaciones entre los acusados, establecidas a partir de los exámenes o pericias a los dispositivos telefónicos y mensajes electrónicos entre los encartados, como también por la propia modalidad de ejecución de los delitos, de las funciones que desempeñaban los acusados Cabello Bustos y San



Martín Pavez en el departamento de finanzas, de la existencia de relaciones de trabajo de los encartados en la Municipalidad de Talcahuano, y de los lazos familiares o de pareja, en el caso específico de la acusada San Martín Pavez con el encartado Ravanal Mellado; lo cual permitía que todos los acusados, no solo estuvieron en pleno conocimiento de la calidad de funcionarios públicos de Cabello Bustos y San Martín Pavez, sino que también de las labores o funciones que cada uno de estos últimos realizaban al interior del departamento de finanzas, y de sus responsabilidades, al menos de manera genérica; más aún si uno de ellos, Paredes Montoya, que si bien a la fecha de los hechos no se desempeñaba en el departamento de finanzas, anteriormente había ejercido precisamente el cargo de jefe de dicho departamento, y por lo mismo conocía por experiencia propia el funcionamiento interno de la DAS y había sido también superior jerárquico de la acusada San Martín Pavez.

2.- Que lo expresado en el párrafo precedente, tiene trascendencia para efectos de sancionar a todos los acusados por su responsabilidad penal en relación a los delitos de malversación de caudales públicos, aun cuando Ravanal Mellado no revista la calidad de funcionario público, y que Paredes Montoya, siendo funcionario público, no tuviere fondos públicos a su cargo; desde que estos últimos tenían pleno conocimiento de la calidad de funcionarios públicos de Alejandro Cabello Bustos y Nubia San Martín Pavez, y consintieron en participar en dicha actividad criminal facilitando los medios tendiente a su materialización, que no era otra que la sustracción de caudales públicos desde las cuentas corrientes de la municipalidad de Talcahuano, para cuyos efectos procedieron al cobro de los cheques girados nominativamente a sus respectivos nombres, por diversas sumas de dinero, que totalizaron las cantidades ya indicadas para cada uno de dichos acusados, conociendo el origen público de tales caudales.

3.- Que según ha quedado debidamente asentado, y, por lo demás, no ha sido materia de discusión, el acusado Pedro Ravanal Mellado no ostentaba a la fecha de los hechos imputados la calidad de funcionario público en los términos exigidos por el artículo 260 del Código Penal, ni bajo ninguna otra circunstancia, y su única relación con la municipalidad afectada, se basa en su calidad de pareja de la acusada San Martín Pavez, y por lo demás no hay antecedentes probatorio alguno que dé cuenta que alguna vez hubiere tenido la calidad de empleado público; y también hay consenso entre los acusadores y las defensas que el encartado Paredes Montoya, si bien era funcionario municipal, y, por lo mismo, empleado público, no tenía a cargo fondos o caudales públicos, lo cual por lo demás quedó refrendado por el hecho que no se desempeñaba en el departamento de finanzas ni intervenía en los distintos procesos de compra ni de pago a los proveedores, ni realizaba ningún tipo de función que tuviera alguna relación con los fondos o caudales de la Dirección de Salud de Talcahuano, según los testimonios referidos por diversos testigos que trabajaban en la DAS.



Lo anteriormente expuesto, implica resolver si los encartados Ravanal Mellado y Paredes Montoya resultan penalmente responsable de los delitos de malversación de caudales públicos que se les imputan, y por lo mismo dilucidar a su respecto el denominado problema de la comunicabilidad de la calidad del sujeto activo en el derecho penal, esto es, cuando existe más de un partícipe, en el cual uno o más de ellos -denominados intraneus- reúne la característica especial exigida por el tipo penal y otro u otros -denominados extraneus- que no la poseen; punto sobre el cual los acusadores sostienen que en la especie se puede comunicar esta calidad a los referidos Ravanal Mellado y Paredes Montoya para los efectos punitivos, y, por el contrario, las defensas niega tal comunicabilidad.

4.- Al respecto, debe indicarse que en atención a que nuestro ordenamiento jurídico penal no resuelve el señalado problema de la comunicabilidad, es que ha habido un largo debate doctrinal y jurisprudencial sobre tal posibilidad, existiendo las tesis de la comunicabilidad extrema, la incomunicabilidad extrema y la comunicabilidad relativa; explicando el profesor Gustavo Balmaceda Hoyos que en el caso de la primera postura, la característica especial exigida por el tipo penal del intraneus siempre se comunica al extraneus; que en la tesis de la incomunicabilidad extrema, tal calidad nunca se comunica al extraneus; y que conforme a los partidarios de la llamada comunicabilidad relativa, lo fundamental es la determinación de si el delito de malversación de caudales públicos es un delito especial propio o impropio (Gustavo Balmaceda Hoyos, “Comunicabilidad de la calidad del sujeto activo en los delitos contra la función pública. Especial referencia a la malversación de caudales públicos y al fraude al Fisco”. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte - Año 19 N° 2 -2012, página 58).

Agrega el profesor Balmaceda Hoyos que la tesis de la comunicabilidad extrema “... plantea que el problema de la comunicabilidad debe ser resuelto de forma afirmativa en todos los casos -delitos especiales propios e impropios-, por lo cual el extraneus siempre responderá por el delito especial aplicable, ya sea a título de autor o de mero partícipe, según cual haya sido su aportación al hecho delictivo.”; que “... la tesis de la incomunicabilidad extrema plantea que las circunstancias personales del intraneus nunca se comunican a los sujetos no calificados”; y en relación a la comunicabilidad relativa, señala que la doctrina distingue para los efectos de la solución a aplicar, si se está frente a delitos especiales propios o impropios, y que “... cuando se trata de delitos especiales impropios, se aplica el art. 64 del CP, por lo que la calidad especial no se comunica y el extraneus responde por el tipo residual que fuere aplicable. Lo anterior es debido a que esta clase de delitos son entendidos simplemente como una figura agravada del delito base, por lo que la circunstancia especial debe ser considerada solo como agravante de la responsabilidad penal del intraneus y, por aplicación del artículo 64 inciso



primero del CP. ‘Las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en la disposición moral del delincuente, en sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad de sólo aquellos autores, cómplices o encubridores en quienes concurren’. En los delitos especiales propios, en tanto, la calidad especial es fundante del tipo penal y, por ende, no recibiría aplicación el artículo 64; en tales casos, en consecuencia, se estima que la calidad especial se comunicará a los partícipes extraneus, debiendo estos responder por el tipo especial aplicable.” (Gustavo Balmaceda Hoyos, op. cit., página 65).

Que conforme a lo referido precedentemente, ha de tenerse presente que Politoff, Matus y Ramírez, señalan que son delitos especiales propios “aquellos en que la cualidad del sujeto es determinante para la existencia del delito, de tal forma que, faltando la misma, el hecho sería atípico”, y delitos especiales impropios son “aquellos en que la calidad especial posee únicamente la virtud de atenuar o agravar la pena de sus autor, existiendo una correspondencia fáctica con un delito común que, en las mismas circunstancias fácticas, puede ser cometido por cualquier persona, incluido por supuesto cualquiera que posea la especial calidad que define el tipo del delito especial impropio correspondiente” (Sergio Politoff L., Jean Pierre Matus A, María Cecilia Ramírez G, “Lecciones de Derecho Penal Chileno”, Parte Especial, Segunda edición actualizada, página 489).

Por su parte, el profesor Mañalich sostiene que por delitos especiales “cabe entender todos aquellos delitos que consisten en el quebrantamiento de normas especiales. Una norma es especial, a su vez, siempre que el lugar de destinatario de la misma sólo puede ser ocupado por alguien que exhibe un determinado estatus especial. Esto quiere decir que, en rigor, no hay tal cosa como un “delito especial impropio”, tal como lo sugiere, en efecto, esta misma denominación, que hace explícita la impropiedad de semejante caracterización. En términos de teoría de las normas, lo que suele ser llamado un delito especial impropio no es más que el quebrantamiento de una norma general, esto es, un delito común, que se ve cualificado, desde el punto de vista de la correspondiente norma de sanción, en atención a un determinado estatus personal. Así, un delito es especial si y sólo si el mismo está constituido por el quebrantamiento de una norma cuyo destinatario está determinado por una cualificación especial. De ahí que sólo una persona cualificada —esto es, un intraneus— puede ser autor del delito en cuestión; una persona no cualificada —esto es, un extraneus— sólo puede venir en consideración como partícipe, en la medida en que el injusto del hecho (ajeno) le sea accesoriamamente imputable.” (Mañalich, Juan Pablo. “La malversación de caudales públicos y el fraude al fisco como delitos especiales”, página 358. Polít. crim. Vol. 7, N° 14 (Diciembre 2012), Art. 4, pp. 357 - 377. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_07/n_14/Vol7N14A4.pdf]).



5.- Que en relación a las tesis referidas, se sostiene que la mayoritariamente aceptada es la de la comunicabilidad relativa; mas, en cuanto al delito de malversación de caudales públicos también existe división entre quienes sostiene que se trata de un delito especial impropio y quienes postulan que se trata de un delito especial propio, con las implicancias que ello tiene para el caso sublite; y si bien hay autores que se inclinan por sostener que se trata de un delito de especial impropio (como Sergio Politoff, Jean Pierre Matus y María Cecilia Ramírez en su obra “Lecciones de Derecho Penal Chileno”, y Luis Rodríguez Collao y María Magdalena Ossandon Widow, en su libro “Delitos contra la Función Pública”), han surgido voces que sostiene lo contrario, esto es, que el delito de malversación de caudales públicos es un delito especial propio, entre ellos Juan Pablo Mañalich, quien incluso critica la división de delitos especiales en propios e impropios; y Gustavo Balmaceda Hoyos; posición esta última que estos sentenciadores acogen, y en base a la cual estiman que los acusados Paredes Montoya y Ravanal Mellado también han de ser penalmente responsables por el delito de malversación de caudales públicos.

En efecto, el profesor Mañalich sostiene que “Los delitos de malversación constituyen delitos especiales (propios). Esto se debe, única y exclusivamente, a que la posición del destinatario de la norma cuyo quebrantamiento es delictivo sólo puede ser ocupada por una persona que exhibe el estatus de funcionario público, tal como éste se encuentra definido por el art. 260 del Código Penal. Las normas cuyo quebrantamiento puede ser constitutivo de alguna modalidad de malversación punible, en otros términos, son normas específicamente dirigidas a aquellas personas que exhiben el estatus en cuestión; de ahí que no pueda postularse su descripción como “delitos especiales impropios”, con total independencia de que esas normas puedan encontrarse superpuestas con algunos otras normas cuyo quebrantamiento pueda ser constitutivo de un delito común. Esto último, sin embargo, sólo tiene relevancia para la dogmática de los concursos de delitos, y en particular para la dogmática del concurso aparente.”; autor que agrega que prescindiendo de lo prescrito en el inciso primero del artículo 238 del Código Penal, que establece que estas normas también puedan resultar quebrantadas por cualquier persona que se encuentre encargada de fondos, rentas o efectos municipales o pertenecientes a algún establecimiento público de instrucción o de beneficencia, “la restricción del círculo de destinatarios de las normas de comportamiento reforzadas por las normas de sanción de los arts. 233 y siguientes deja intacto el hecho de que la persona que exhibe el estatus en cuestión ha de encontrarse, además, en una determinada posición relativa a los caudales o efectos que representan, bajo cada uno de los tipos delictivos, el respectivo objeto de la acción. Aquí se trata, en rigor, de la caracterización típica de la específica modalidad de comportamiento delictivo, por referencia al objeto de éste, en relación con el cual el potencial autor de malversación ha de encontrarse en una determinada posición de detentación.”, y



“... que en cualquiera de sus variantes, la malversación siempre presupone una determinada posición jurídica del autor en relación con determinados caudales o efectos” , “ ...el autor de malversación ha de encontrarse, dicho de manera laxa por el momento, o bien en una posición definida por una obligación de conservación, o bien en una posición definida por una obligación de administración o inversión de determinados caudales o efectos.” (Mañalich, Juan Pablo, op cit., páginas 362 y 363).

Y, según se adelantó, el profesor Balmaceda Hoyos también es de opinión que el delito de malversación de caudales públicos es un delito especial propio y no impropio; como también sostiene que el delito de fraude al fisco del artículo 239 del Código Penal tiene carácter autónomo y no puede ser reconducido a ningún delito común, por lo que es un delito especial propio, “... en que la calidad de empleado público fundamenta la ilicitud de la conducta. Como ya nos manifestamos en otro lugar, de esta interpretación no se sigue la impunidad de los partícipes extraneos, que siempre podrán ser sancionados a título de partícipes en sentido estricto del delito especial cometido por el empleado público...” (“La Malversación de Caudales Públicos y el Fraude al Fisco en el Derecho Penal Chileno”, Revista de Derecho de la Universidad San Sebastián 20/2014, páginas 91 y 95).

Que es del caso, que en consonancia con lo sostenido por los profesores Mañalich y Balmaceda, nuestro máximo tribunal ya se había pronunciado varios años atrás sobre el punto, al sostener que la calidad de empleado público con caudales o efectos a su cargo en el delito de malversación no es una circunstancia modificatoria de la responsabilidad, sino que es, por definición, según lo describe el artículo 233 del Código Penal, un elemento del delito (C.S. sentencia de 15 de mayo de 1963. Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo LX. secc. IV, p. 225. Fallo citado por Ramón Ignacio Espinoza Sapag, Universidad de Chile Facultad de Derecho Escuela de Postgrado “Aproximación al Requisito Normativo del Tipo “Teniendo a su cargo” En el Delito de Malversación de Caudales Públicos del artículo 233 del Código Penal Chileno”).

6.- Que a partir de lo señalado precedentemente se puede indicar que en el caso sub lite, efectivamente los destinatarios de la norma cuyo quebrantamiento sanciona el legislador penal, sólo puede ser ocupada por una persona que exhibe el estatus de funcionario público, y que además se encuentra en una determinada posición relativa a los caudales o efectos públicos que representan, que en la especie son los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez, por cuanto tras el artículo 233 del Código Penal, subyace una norma que impone al funcionario público el deber de no sustraer ni consentir en que otro substraiga los caudales o efectos públicos que tiene a su cargo, un deber de



probidad administrativa y de velar por el patrimonio municipal o por la correcta gestión del patrimonio público.

Al respecto, también ha de considerarse lo sostenido por el profesor Balmaceda Hoyos, quien, admitiendo que la doctrina chilena mayoritaria considera que el delito de malversación de caudales públicos es un delito especial impropio, señala que "... no existe acuerdo para efectos de determinar la figura residual de este delito, y que al respecto para algunos autores la figura residual (común) sería la apropiación indebida, para otros el hurto, la estafa, la estafa o el hurto, según sea el caso; el hurto, la apropiación indebida o la estafa, según cuáles sean las circunstancias concretas en que se ejecuta el acto; o la apropiación indebida o el hurto, dependiendo de la modalidad comisiva"; señalando luego una serie de observaciones, diferencias o críticas a cada uno de estas figuras residuales en virtud de las cuales es de opinión que no podría clasificarse la malversación de caudales públicos como una forma especial de apropiación indebida, de estafa, de hurto (Gustavo Balmaceda Hoyos, "La Malversación de Caudales Públicos y el Fraude al Fisco en el Derecho Penal Chileno", Revista de Derecho de la Universidad San Sebastián 20/2014, página 88 a 91); situación que, en concepto de estos sentenciadores, refuerza la posición de que el delito de malversación de caudales públicos no es un delito impropio, pues no existiría una correspondencia fáctica con un delito común.

Así, respecto al delito de apropiación indebida, Balmaceda Hoyos indica que se ha dicho en la doctrina reciente, que dicha figura comparte con la malversación que se trata de la tenencia legítima de una cosa mueble ajena, aunque la malversación presenta una mayor amplitud y contiene conductas que escapan a aquellas a que hace referencia el artículo 470 N° 1 del Código Penal; que le parece problemático defender la identidad de la malversación con el hurto, dado que al respecto el Código Penal emplea el verbo rector "apropiarse", que ha sido entendido tradicionalmente como "sustraer una cosa de la esfera de resguardo de otra persona, con el ánimo de comportarse de hecho como propietario de ella"; y que el código distingue la tipificación de la malversación frente al hurto, al no utilizar el verbo rector "apropiarse", sino que construyendo gran parte de sus hipótesis a partir de otro, el "substraer"; agregando que en las distintas hipótesis del delito de malversación, el sujeto activo ya tiene la custodia del objeto material (los caudales, efectos, etc.), por lo que no es necesario el quebrantamiento de una esfera de custodia anterior, que exige el hurto, y que lo que ocurre en el delito de malversación es simplemente una "mutación de custodia pública en custodia privada"; y en cuanto al delito de estafa, refiere que le parece aún más difícil de fundamentar la residualidad de la estafa, básicamente porque en dicho delito el elemento esencial es el engaño; y en ninguna de las hipótesis de malversación se reconoce de forma alguna al engaño como verbo rector; mismos cuestionamientos y reparos que en general



plantea el ente persecutor al oponerse a las peticiones de la defensa de negar la comunicabilidad y sancionar conforme a una figura penal común, y que estos sentenciadores comparten.

Antecedentes estos que en concepto de estos sentenciadores son reveladores de que precisamente el delito de malversación de caudales públicos, por las especiales características de la cualidad del sujeto activo y de la naturaleza de la obligación de encontrarse en una cierta posición frente a determinados fondos o caudales, que además deben ser de naturaleza pública, no existe una figura residual paralela, y por lo mismo, no puede ser catalogado como un delito especial impropio; y consiguientemente, nos encontramos frente a un delito especial propio, en el cual si bien los extraneus - Paredes Montoya y Ravanal Mellado - no pueden ser sancionados en calidad de autores, dado que no son los destinatarios de la norma cuyo quebrantamiento es delictivo, si lo pueden ser a título de partícipes, específicamente, en el presente caso, en calidad de cómplices, de aquellos que nuestro código penal sanciona como autores en su artículo 15 N° 3, conforme a lo que más adelante se dirá.

7.- Que lo sostenido en las consideraciones precedentes, en cuanto a la comunicabilidad de la especial calidad del intraneus al extraneus, ha sido recogido por nuestra jurisprudencia:

Así, la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazó un recurso de apelación interpuesto por la defensa en contra de una sentencia dictada en un procedimiento abreviado, en que sostenía que por no ser sus defendidos funcionarios públicos no podían ser sancionados por el delito de malversación de caudales públicos, dado que el autor de esta clase de delitos sólo podría ser quien infrinja un determinado deber que le incumbe velar, porque quien no posee ese deber solo debe responder por el delito base, que sería únicamente la apropiación indebida. Y ante tales alegaciones, la Corte estimó que teniendo los condenados "... pleno conocimiento de la calidad de funcionarios públicos de los hechos de los ilícitos, descritos en la consideración sexta anterior y que, además, consintieron en participar en dicha organización criminal destinada a la sustracción de caudales públicos desde las arcas de la institución pública de Carabineros de Chile al recibir por diversos medios estas cuantiosas sumas, conociendo el origen público de esas sumas, por lo que no resulta, a juicio de estos sentenciadores, atendible, pretender que estos no tengan, igualmente, la calidad de autores del delito de malversación de caudales públicos que fuera establecida, precisamente, en la medida que, respecto de ellos se hace aplicable la norma contenida en el artículo 15 N° 3 del Código Penal, esto es, "los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él", razón por la cual forzoso es concluir que el Tribunal a quo no



ha errado, como sostiene la defensa, en la calificación jurídica de los hechos por los que vienen siendo condenados sus representados en calidad de autores.”(Corte de Apelaciones de Santiago, Sentencia de 29 de julio de 2019, motivo octavo, Rol N° 3417-2019).

Del mismo modo, tratándose del delito de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, en el denominado caso MOP GATE, y en el cual se planteaban, entre otras cosas, expresamente la improcedencia de la comunicabilidad del delito de fraude al fisco a un particular, se resolvió “Que, en la figura delictiva descrita en el artículo 239 del Código Penal, la calidad personal del autor es un elemento que queda comprendido en la descripción del tipo, de modo que se trata de un delito especial en que el sujeto que actúa debe revestir la calidad de empleado público, en los términos y con el alcance definido en el artículo 260 del mismo Código. Sin embargo, es perfectamente posible, que en la ejecución del ilícito puedan concurrir también otros individuos que no reúnan las condiciones personales que exige el tipo penal, a quienes se le comunica la calidad especial del sujeto que si las reúne por estar en conocimiento de la función que desempeñaban sus coparticipes y haber prestado su concurso para la materialización del delito, en cuyo caso debe responder por su conducta del mismo modo que cabría a los agentes calificados para la comisión del delito...” (Corte de Apelaciones de Santiago, Sentencia de 11 de agosto de 2014, Motivo Cuarto, Rol Corte 2284-2010); jurisprudencia compartida en el denominado caso Corpesca, en la que se sanciona a una persona que no es funcionario público por el delito de fraude al fisco, para cuyos efectos se argumenta que el civil ha actuado como coautor en el ilícito que se le imputa, razón por lo cual se le comunica la calidad especial, debiendo responder del mismo modo que el titular del artículo 239 del Código Penal (Corte de Apelaciones de Santiago, Sentencia 21 de noviembre de 2021, Rol Corte 2100-2021, la cual rechazó un recurso de nulidad en contra sentencia de 16 de abril de 2021, del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Rol 309-2019).

Por otra parte, nuestro máximo Tribunal también ha estado porque la característica especial exigida por el tipo penal del intraneus se pueda comunicar al extraneus, incluso partiendo de la base que el delito de fraude al fisco es un delito especial impropio, por cuanto ha sostenido “Que, a criterio de esta Corte Suprema, la calidad de funcionario público, en los delitos cualificados impropios, como lo es el fraude al fisco, castigado en el artículo 239 del Código Punitivo, se comunican a los autores en que concurren, tanto si integran el tipo penal, como si no lo integran, quedando todos los partícipes regidos por la única figura penal aplicable. Así, por lo demás, lo ha resuelto este Tribunal Superior en sentencias Rol N° 5419-03 de fecha dieciséis de octubre de dos mil seis y la de fecha treinta de julio de mil novecientos sesenta y nueve, publicada en la R.D.J. L XVI, 4-170. Clave en esta reflexión



resulta ser la determinación de si el tipo delictivo conserva o no su carácter de tal en el supuesto de eliminarse hipotéticamente la circunstancia personal de ser empleado público uno de los copartícipes, evento en el cual deberá concluirse que aquélla integra el correspondiente tipo y, por tanto, se comunica a quienes estaban en conocimiento de ella.” (Excma. Corte Suprema, Sentencia de 19 de mayo de 2008, Motivo Décimo Cuarto, Rol 2321-2007).

Comunicabilidad que también nuestro máximo tribunal postula en otras causas, sin perjuicio que estime que el delito de malversación de caudales públicos es un delito especial impropio (Sentencia de 24 de octubre de 2018, Rol 13.123-2018); dado que más allá de inclinarse estrictamente por alguna teoría en particular, de si se trata de comunicabilidad extrema o relativa, y de si es un delito especial propio o impropio, en particular, en relación al delito de malversación de caudales públicos, lo cierto que los diversos pronunciamientos jurisprudenciales citados al aplicar la comunicabilidad, descansan sobre la premisas de que los extraneus, esto es, los individuos que no reúnan las condiciones personales que exige el tipo penal, tengan conocimiento de la calidad de empleado público del sujeto activo que interviene de un modo inmediato y directo, como también de las funciones que desempeña, y de estar prestando su concurso precisamente para la materialización de la sustracción de los caudales públicos.

8.- Y es del caso, que respecto de los acusados Ravanal Mellado, quien no reviste la calidad de empleado público, y Paredes Montoya, que a pesar de ser empleado público, no tenía caudales públicos a su cargo, se dan todos los presupuestos doctrinarios y jurisprudenciales precedentemente expuestos para comunicarles a su respecto las calidades especiales de funcionarios públicos de Cabello Bustos y San Martín Pavez y de la circunstancia que dentro de sus funciones se encuentra el cuidado de caudales o efectos públicos; dado que aquéllos estaban en pleno conocimiento de dichas calidades especiales y de que tenían a su cargo caudales públicos, lo cual queda en total evidencia, por el hecho de ser Ravanal Mellado la pareja de San Martín Pavez, ya por 35 años, según lo manifestó en la audiencia, lo que evidentemente implica que sabe donde trabaja y que funciones cumple, a quien por lo demás en muchas ocasiones lo vieron en la municipalidad en compañía de aquélla, por lo que concurría a su lugar de trabajo, habiendo el propio Ravanal Mellado, señalado en audiencia que sabe que Nubia trabajaba en la municipalidad en el departamento de Finanzas, el cargo que tiene, pero no el detalle de lo que hace, mas, señala que sabe que tenía que girar cheques para pagar y que tenía chequeras a su cargo, agregando que también sabía que su jefe era Alejandro Cabello, como también sabía que Paredes Montoya anteriormente había sido jefe de Nubia. Y en relación a Paredes Montoya, por ser funcionario de la misma municipalidad, esto es, compañero de trabajo de los acusados, quien por lo demás años anteriores había desempeñado también



el cargo de jefe de finanzas, quien al respecto manifestó que por ello sabe cuáles son las obligaciones que tiene un jefe de finanzas, que las conoce, una de las cuales era tener a cargo los fondos públicos, y que sabe cuáles eran las funciones desempeñadas por San Martín, y por lo mismo, sabe que estaba a cargo del manejo de las cuentas corrientes de la DAS y de otros departamentos que indica.

Por lo anterior, ambos acusados estaban en conocimiento de las funciones desplegadas por los encartados Cabello y San Martín, como asimismo del carácter o naturaleza pública de los fondos a cuyo cargo se encontraban, los cuales cobraron a través de los cheques girados nominativamente a sus personas, en los cuales se sindicaba expresamente que la cuenta corriente a la que pertenecían correspondía a la Municipalidad de Talcahuano; por lo que al accionar Ravanal Mellado y Paredes Montoya, estaban en total conocimiento de todos y cada uno de los elementos que configuran el delito de malversación de caudales públicos, accionar que estos sentenciadores estiman ser constitutivo de una cooperación concertada con los sujetos activos cualificados; por cuanto concertadamente prestaron su concurso para la materialización de la sustracción de los caudales públicos, facilitando los medios para la ejecución de la malversación de caudales públicos llevada a efecto; lo cual implica que tuvieron una participación en calidad de cómplices, partícipes a quienes nuestro código punitivo, en atención al concierto previo existente, en el artículo 15 N° 3 les ha dado el mismo tratamiento de los autores, lo cual descarta la aplicación del artículo 16 solicitada por las defensas.

Que lo señalado precedentemente se condice con una prevención del abogado integrante del Corte de Apelaciones de Santiago, señor Rodrigo Correa G., quien ante la reclamación de haberse infringido el artículo 239 del Código Penal por sancionar por el delito de fraude al fisco a personas que carecen de la calidad de funcionario público, a mayor abundamiento estuvo por rechazar el recurso, por cuanto dicha norma sanciona "... a quien en razón de su función tiene control sobre procedimientos o decisiones de la organización estatal (*intraneus*) y los ejerce fraudulentamente originándole pérdida o privándole de un lucro legítimo. La disposición exige por tanto la participación de un "empleado público", quien en rigor es el único que puede ser autor del delito en sentido estricto"; agregando que "El legislador no sólo ha dispuesto la sanción penal a los autores de los delitos, sino también a determinados partícipes. Por otra parte, el artículo 15 del Código Penal ha extendido el tratamiento penal de la autoría a otros partícipes, que son considerados autores. En consecuencia, si bien quien carece de la calidad de empleado público (*extraneus*) no puede ser autor de la conducta descrita en el artículo 239 del Código Penal, nada impide que participe en ella, incluso de un modo que la ley pueda asimilar a la autoría"; y que "El *extraneus* no puede sin embargo "tomar parte en la ejecución del hecho" en el sentido del primer numeral del artículo 15, pues "el hecho"



precisamente supone la calidad de empleado público. La participación punible del *extraneus* queda por tanto limitada a las hipótesis de los numerales 2 y 3 del artículo 15 y de los artículos 16 y 17, todos del Código Penal.” (Prevención contenida en Sentencia de 17 de diciembre de 2015, de I. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Corte 17.014-2015).

9.- A mayor abundamiento, ha de considerarse que en doctrina también se sostiene que en relación a la comunicabilidad de los elementos subjetivos y circunstancias personales comprendidas por el tipo penal en su descripción particular hay que estarse a la fase subjetiva, en orden a que en la coautoría “... la imputación es única al conjunto, como un todo, con sus circunstancias y modalidades típicas, porque el hecho es común. El cómplice y el instigador, de consiguiente responderán del tipo penal en el que hayan intervenido tanto objetiva como subjetivamente; el instigador por el hecho que instigó, y el cómplice por el hecho en el que colaboró, considerando su subjetividad, o sea el dolo de su particular acción de inducción o de colaboración...”, agregando que “los particulares (*extraneus*) que hayan intervenido subjetivamente, esto es, con pleno conocimiento de las circunstancias y voluntad de participar en tales delitos, caso en el cual deberían responder por malversación y prevaricación. De no ser así, o sea cuando no media ese dolo-, las calificaciones de hurto o apropiación indebida o estafa y de impunidad en la prevaricación son correctas” (Mario Garrido Montt. “Derecho Penal”, Parte General, Tomo II, Tercera Edición, páginas 332 y 333); para cuyo autor lo más importante en la comunicabilidad es la imputación por el dolo del partícipe, esto es, como lo señala la acusadora fiscal, si el sujeto sabe que actúa, que colabora con el empleado público, sabe las funciones desempeñadas por los funcionarios públicos, y las circunstancias bajo las cuales se está cometiendo la acción típica, significa que se puede comunicar al *extraneus* la cualificante, bajo la categoría del artículo 15 N° 3 del Código Penal, que es precisamente lo que ocurre en el presente caso, en que se ha establecido que Paredes Montoya y Ravanal Mellado concurrieron concertadamente a la conducta de malversar fondos públicos.

Consideraciones que se condicen plenamente con lo postulado por el profesor Mañalich, en orden a que “... un delito es especial si y sólo si el mismo está constituido por el quebrantamiento de una norma cuyo destinatario está determinado por una cualificación especial. De ahí que sólo una persona cualificada —esto es, un *intraneus*— puede ser autor del delito en cuestión; una persona no cualificada —esto es, un *extraneus*— sólo puede venir en consideración como partícipe, en la medida en que el injusto del hecho (ajeno) le sea accesoriamente imputable.” (Juan Pablo Mañalich, op cit., página 357); autor que también resalta dentro de sus argumentos que un *extrañus* solo podrá intervenir en el delito de malversación, posibilitando o facilitando la infracción del deber primario del delito de peculado, que solo puede ser imputable al funcionario público como autor.



Finalmente, Gustavo Balmaceda Hoyos, en su trabajo ya citado, comparte lo sostenido por María Ossandon Widow, en cuanto a que en los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco, el extraneus “siempre puede ser partícipe, pues aunque no resulta competente para infringir directamente la norma penal que emana del artículo 233 o 239, bien se le puede imputar una colaboración en la infracción del deber del funcionario”; y que dado que el deber del extraneus es secundario, no puede fundamentar ninguna forma de autoría, aunque el particular tenga el dominio de la situación fáctica; pues es el funcionario obligado a proteger el patrimonio fiscal quien tiene la competencia primaria, pues a él se dirige la norma penal.

En suma, la participación de los encartados Ravanal Mellado y Paredes Montoya también puede sostenerse que estaría dada por una infracción de un deber secundario, y como extraneus solo pueden intervenir en el delito de malversación de caudales públicos como partícipes en sentido estricto, que en el caso sublite se concreta al momento del cobro de los respectivos cheques, posibilitando así o facilitando la infracción del deber primario del referido delito de peculado que pesa sobre el funcionario público obligado a proteger el patrimonio fiscal, enmarcándose la conducta de los referidos acusados a lo dispuesto en el artículo 15 N° 3 del Código Penal.

10:- Que en atención a todas las consideraciones precedentemente expuestas, se rechazan las alegaciones de absolución de las defensas de los referidos acusados, por la falta de acreditación del concierto existente entre todos los acusados de esta causa, y de la incumunicabilidad al extraneus de la calidad de funcionario público y de la condición de custodia de caudales públicos del intraneus, y las peticiones subsidiarias, a partir de sostener que el delito de malversación de caudales públicos es un delito especial impropio, en orden a que se les sancione por alguno de los delitos base de hurto o apropiación indebida; o en calidad de cómplice del artículo 16 del Código Penal respecto del delito de malversación de caudales públicos; para cuyo rechazo se tienen, además, en cuenta las siguientes consideraciones.

a) En cuanto a las alegaciones de la defensa de Paredes Montoya, en orden a que no se ha acreditado cuál ha sido el destino de los fondos provenientes de los 129 cheques que habrían cobrado los acusados, y que tampoco se ha acreditado que se ha tratado de una apropiación permanente, para diferenciar de la situación descrita en los artículos 235 y 236 del Código Penal, como tampoco se ha establecido el perjuicio ni el monto al que ascienden; baste señalar que se acreditó que cada uno de los 129 cheques contenidos en la imputación fáctica de las acusadoras, fueron efectivamente cobrados por cada uno de los acusados, determinándose los días y lugares en que fueron efectivamente cobrados por caja, y en un caso depositado en una cuenta de uno de los acusados; fondos que salieron de las cuentas corrientes de la municipalidad de Talcahuano, según el detalle referido en consideraciones



anteriores; los cuales a la fecha no han sido restituidos o reintegrados, por lo que la apropiación o sustracción de los mismos ha sido permanente; sin que, para los efectos de la tipificación del delito en cuestión, sea necesario acreditar el destino que cada uno de los acusados dio a tales fondos, y si están o no aún en poder de cada uno de ellos, como lo pretende la defensa, pues lo concreto es que tales fondos ya no están en las arcas municipales, debido al accionar de los acusados; respecto de quienes se estableció el debido concierto, más allá de las declaraciones de los acusados, en pos de la materialización de la malversación de caudales públicos de que han resultado responsables, según se dio cuenta en consideraciones anteriores.

Que específicamente al perjuicio causado, la defensa de Paredes Montoya sostiene que hay falta de prueba, fundado en que de los 35 cheques imputados a su defendido, hay 12 respecto a los cuales no hay asociado ningún decreto de pago, por lo que no se sabe con qué factura o proveedor se puede relacionar, agregando que tampoco se sabe de dónde se extrajo la información referida en el Anexo 10 de Informe 315; todo ello en atención a que se sostiene por las acusadoras que los fondos estaban destinados al pago de proveedores.

Que tales alegaciones, conforme a lo ya indicado y argumentado, carecen de todo sustento, por cuanto para el establecimiento del perjuicio sufrido por la Municipalidad de Talcahuano, no se requiere establecer a quién o para que fines estaban destinados los fondos malversados, ni si se pagó o no en definitiva a los proveedores, como tampoco es necesario que exista un decreto de pago asociado a los cheques cobrados por los acusados, lo que por lo demás, pone de manifiesto que la emisión de un decreto de pago no era necesaria para el cobro de cheques, y consiguientemente para concretar o llevar adelante la malversación de caudales públicos, según se analiza en otros motivos de esta sentencia; por lo que ninguna incidencia tiene para la configuración del referido delito, el que se ignore qué obligación en concreto debía pagarse con los fondos que sustrajeron los acusados.

Por los mismos motivos precedentemente expuestos, se rechazan las alegaciones de la defensa en orden a que hay ciertos cheques que aparecen recibidos en los decretos de pago por determinadas personas, que tenían la calidad de representantes de los Laboratorios, y que por ello no se sabe si el dinero llegó o no a los proveedores, ya que no se hizo investigación alguna, no habiendo una acreditación que la deuda exista.

b) Por su parte, la defensa del acusado Ravanal Mellado, además de las alegaciones de no ser procedente la comunicabilidad a su respecto, por tratarse de un extraneus, insistió en que aquél no conocía los procesos administrativos internos de la DAS, ni los procedimientos de pago, y en la falta de concierto con los demás acusados, ya que no mantenía contacto con los acusados Cabello Bustos ni Paredes Montoya, y específicamente que nunca se le vio reunirse con



Cabello Bustos ni se encontró en el domicilio de este último algún elemento que los vincule, descartando el movimiento contable existente entre ambos, por ser de un monto exiguo que no tiene relación con los hechos sino con la devolución de un préstamo que Ravanal le había hecho; alegaciones que han de ser rechazadas en base a todos los elementos expuestos en su oportunidad, particularmente para el establecimiento del concierto existente entre los acusados, y en especial, lo referente a los mensajes y comunicaciones existentes entre Nubia San Martín y Cabello Bustos, que dan cuenta de la entrega de número de cuentas y datos para efectuar depósitos o transferencias entre ambos, y documentación bancaria, como cartolas de cuentas corrientes, y análisis de las mismas, de las que dieron cuenta los peritos y testigos ya referidos, que ponen de manifiesto que el acusado efectivamente al cobrar los 86 cheques que se le imputan, estaba en conocimiento del contexto en que se cobraban los mismos, y de la calidad de funcionarios públicos y cargos que detentaban tanto Cabello Bustos como de su pareja San Martín Pavez, y al menos de manera genérica de las funciones y obligaciones que cada uno de ellos tenía, conforme a los razonamientos ya expuestos, acusado que por lo demás también admite que el dinero obtenido al cobrar los documentos lo entregaba a Nubia San Martín, y sabía que a ella le correspondía un tercio del mismo.

Igualmente la defensa sostuvo que nunca existieron llamadas telefónicas entre su defendido Ravanal Mellado y Cabello Bustos, en atención que conforme al testigo Estay González el número asociado a Cabello Bustos era uno cuyos cuatro últimos dígitos eran 0082, número que la defensa sostiene correspondía a Elson Lienlaf, socio del negocio “Yolas”, con el cual Cabello Bustos tenía muchos motivos para conversar y llamar, y que se incorporó un oficio de la compañía telefónica en que se indica que ese número pertenece a Lienlaf; más conforme al señalado testigo, si bien no sabe a qué compañía correspondía el número de Cabello Bustos, sí sabe que ese número terminado en 82 era el suyo, debido a que fue el propio Cabello Bustos quien se lo entregó en una de sus declaraciones, y además en base a la información que le remitió la fiscalía; agregando que él no recepcionó los tráficos de Cabello, y por ello no puede decir cuántos llamados y frecuencias de llamados tenía él, pero que si lo determinó a través de otras cartolas de tráfico, precisando que las llamadas entre Ravanal y Cabello eran en horario laboral, entre las 08 de la mañana y las 06 de la tarde.

Al respecto, ha de señalarse que conforme a la propia prueba aportada por la defensa, consistente en un archivo contenido en un CD-R marca Verbatin rotulado “Entel responde oficio DAS cheques 25/2020” (**Otros Medios de Prueba N°59**), conforme al oficio de requerimiento de información que la fiscalía remite a la Empresa Entel, y la resolución judicial de fecha 24 de enero de 2020, que se contienen en dicho archivo, se otorgó autorización de tráfico de llamadas entrantes y salientes de los números de teléfonos móviles que allí se indican, entre los que figuran el N° 984500049, de la empresa Entel, cuyo titular



sería Pedro Ravanal Mellado, y N° 957383280, de la empresa Entel, cuyo titular sería Elson Lienlaf Quirilao; información esta última que también se contiene en un archivo de un CD marca Verbatin rotulado “movistar responde oficio DAS cheques N° 26/2020, en que rola resolución judicial autorizando tráfico de llamadas y se asocia el referido número a Lienlaf Quirilao (**Otros Medios de Prueba N°60**); por lo que no es efectivo lo planteado por la defensa, en orden a que el número terminado en 0082 corresponde a Lienlaf; por lo que con dicho oficio no se puede descartar que el número terminado en 82 esté asignado a Cabello Bustos; e incluso más, es posible que incluso el funcionario policial se hubiere equivocado al referir la terminación del número telefónico de Cabello Bustos, señalando que termina en 82, dado que textualmente manifestó que “cree” que el número del señor Cabello terminaba en 82, posibilidad cierta si se tiene presente que conforme a la referida resolución, también se autorizó el tráfico de llamadas respecto del N° 9934288362, de la Empresa Entel, cuyo titular sería Alejandro Cabello Bustos, esto es un número telefónico que termina en 62, que es fácilmente confundible con uno terminado en 82.

Que a lo anterior debe agregarse que conforme al testigo Estay González, el número asociado a Ravanal Mellado era el terminado en 49, lo que se encuentra debidamente corroborado por el propio Ravanal Mellado, quien en su declaración en audiencia señaló expresamente que el número de celular que él utilizaba era el 984500049, y por la propia resolución referida en el párrafo anterior, por lo que, de seguir el razonamiento de la defensa - aún en el evento de estimar que el número terminado en 82 correspondería a Lienlaf, lo que según el oficio acompañado, no es así-, resultaría que Ravanal Mellado se estaría comunicando con Lienlaf, a cuyo respecto no tiene ningún sentido, pues no se ha establecido ninguna relación entre ambos; pero sí tiene total sentido que las comunicaciones de Ravanal desde su número terminado en 0049, efectuada con el número terminado en 82, lo hayan sido con el acusado Cabello Bustos, con motivo del cobro de documentos, lo que se ve reforzado por los otros antecedentes expuestos en el motivo trigésimo quinto, en cuanto a un depósito de dinero en la cuenta de Cabello Bustos efectuada por Ravanal, y los antecedentes de número de Rut y cuenta corriente de Ravanal Mellado solicitado por Cabello Bustos a Nubia San Martín; o de la información de la cuenta corriente de Cabello Bustos que ella, a su vez, entrega a Ravanal Mellado. Por lo demás, tampoco resultaría extraño que un teléfono figure asignado en la compañía telefónica a una persona, y en la realidad sea utilizado por una persona distinta, más aún si entre las mismas existe alguna vinculación familiar o de trabajo, como sería el caso, en que Cabello y Lienlaf tenían vínculos comerciales, según se acreditó en el juicio, en que este último sería uno de los socios de la sociedad formada para llevar adelante el negocio o local nocturno “Yolas”, del cual en el hecho estaba a cargo el acusado Cabello Bustos, según lo afirmado por él mismo.



Que las referidas conclusiones, en nada se alteran con el mérito del archivo TRAF-IMEI CC0605.xlsx, que se contiene en el CD de Otros Medios de Prueba N°59 referido en párrafos anteriores, habida consideración que la información que allí se contiene no ha sido explicada por testigo o perito alguno, ni por el propio defensor en sus alegatos, que a lo más se puede colegir que tiene relación con un número de celular, que correspondería a la acusada Nubia San Martín, conforme a los oficios referidos en líneas anteriores.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que es del caso, que los acusadores imputan a los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez la falsificación de los decretos u órdenes que en cada caso se detallan en el considerando Trigésimo, por haber faltado a la verdad en la narración de los hechos sustanciales que en dichos documentos se indica, esto es, que en los respectivos decretos u órdenes de pago se da cuenta de una situación que en la realidad no es tal, esto es, el delito de falsificación de instrumento público por falsedad ideológica, previsto y sancionado en el artículo 193 N° 4 del Código Penal; a cuyos efectos la doctrina ha sostenido que "...el funcionario público comete falsedad ideológica cuando miente acerca de aquellos hechos respecto de los cuales está obligado por ley a decir la verdad, porque su palabra hace prueba." (Alfredo Etcheberry, "Derecho Penal", Parte Especial, Tomo IV, página 163 Tercera Edición).

Y es más, se sostiene que cuando la norma habla de "narración" debe tratarse de aquellos hechos de que el funcionario da testimonio por ciencia propia: fecha del acto, identidad de las personas, lugar, firma de los otorgantes y testigos, tenor de las aseveraciones hechas, etc.; y que al referirse a "hechos sustanciales", se trata de aquellos que dan su sentido o alcance al documento, en relación con lo que el documento está destinado a constituir o a probar (Alfredo Etcheberry, op. cit. , página 164); o como lo sostiene el profesor Mario Garrido Montt, en orden a que la exigencia que la falsedad deba referirse a hechos sustanciales, implica que no se trata de cualquier alteración de la realidad, sino que "... debe tener relevancia jurídica, sea por sí misma o por su vinculación con el resto del documento" (Garrido Montt, "Derecho Penal" Tomo IV, Parte Especial, Segunda Edición, página 73).

Que conforme a lo señalado en las consideraciones precedentes, ha quedado establecido que todos los decretos u órdenes de pago emanados de la Dirección de Salud Municipal de Talcahuano, y particularmente todos los referidos en el motivo Trigésimo, son documentos públicos, los cuales, a la época de los hechos, debían ser firmados por el Director y el Jefe del Departamento de Finanzas de dicha Dirección, o por quienes los subroguen, y que en lo que interesa para el establecimiento de los hechos, se acreditó que quienes firmaron en calidad de Jefe del Departamento de Finanzas, en los respectivos casos indicados en el señalado motivo Trigésimo, fueron los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez; decretos que eran confeccionados por el personal del departamento de finanzas, para lo cual debían tener un perfil que permitiera el



ingreso al Sistema Modular Contable, quedando registrado o identificado en el mismo documento el usuario que había efectuado el ingreso; y que en los casos materia de las acusaciones, la persona que ingresaba la información era la acusada San Martín Pavez, funcionaria administrativa contable del departamento de finanzas, conforme el registro de usuario “nsanmart” de que dan cuenta los documentos en cuestión, con la salvedad de algunos decretos en que la información la ingresó el propio acusado Cabello Bustos, como lo evidencia el registro de usuario “acabello”, quien además firmó el decreto en su calidad de jefe de Finanzas, como se constata de los decretos N°1729 (Hecho 5 N° 29) y N°1013 (Hecho 6).

Que también se estableció que si bien el decreto de pago se confeccionaba ingresando la información al Sistema Modular Contable de que disponía la DAS, para lo cual se debía contar con una clave, quedando por lo mismo registrado el usuario que había ingresado la información, al momento del pago propiamente tal de la suma ordenada en el decreto, para el caso que se efectuara con cheque, en el recuadro respectivo existente al final del documento un funcionario del departamento de finanzas llenaba a mano, de puño y letra, el número de cheque con el que se pagaba, el monto y fecha de pago, la cuenta con la cual se estaba pagando o a la cual se imputa el gasto, y el número de egreso; cheque que también se llenaba a mano, por cualquier funcionario de finanzas a nombre del proveedor respectivo, los que en todo caso sólo podían ser firmado por Nubia San Martín y Manuel Rojas; y al costado derecho de la hoja, se anotaba el nombre y Rut de quien retiraba el documento y su firma.

Igualmente se estableció que en el decreto de pago se debía individualizar la factura que se estaba pagando, y si eran más de una, se debían indicar todas, como expresamente lo señaló el testigo Juan Francisco Torres, que es el actual Jefe de Administración y Finanzas de la DAS, pero que a la época de los hechos se desempeñaba como funcionario del departamento de finanzas, que sobre el punto dijo que si en un decreto de pago se están pagando más de una factura, en el decreto deben aparecer todas desglosadas, y si bien hay una lista máxima de facturas que van a aparecer en el decreto de pago como carátula, si son muchas debe imprimirse un anexo de decreto de pago donde aparecen todas las facturas que se están pagando; decreto de pago que era acompañado de toda una documentación soportante o legajo, y solo una vez que este último estuviere completo podía pagarse, según lo ya indicado en su oportunidad, entre otros, por los testigos Valenzuela Ortiz y Muñoz Candia, lo cual debía de ser controlado fundamentalmente por el jefe del departamento de finanzas, quien por lo demás, en su momento emitió el respectivo certificado de disponibilidad presupuestaria, dando cuenta que la obligación en cuestión tenía el respaldo para su pago.

Que conforme a las observaciones que se fueron realizando en cada uno de los decretos de pago referidos en el motivo Trigésimo, hay un sinnúmero de



irregularidades en los legajos y en los decretos de pago propiamente tales, como el hecho que en el documento no se consignen todas las facturas que presuntamente se están pagando cuando eran más de una, o derechamente no se refería la factura que se estaba pagando, o se incluían facturas con dígito alterado, o el monto de la factura referida era de un monto inferior al que se ordena pagar; el que se haga referencia a facturas que ya están pagadas, algunas de fecha muy anterior a la fecha del decreto, a la circunstancia que existan decretos de pago emitidos con posterioridad a la fecha de giro y cobro de los cheques , o se utilizara un cheque para dos decretos de pago distinto; y fundamentalmente porque en todos los decretos de pago en cuestión se consigna al final del documento, en el recuadro que se completaba a mano, la circunstancia de haberse pagado al proveedor respectivo la suma de dinero que se indicaba en la orden de pago, con cargo a una cuenta corriente de la DAS que se singularizaba, con indicación del número de egreso en muchos casos, y principalmente, singularizando el número de cheque, el monto y la fecha de pago; en circunstancias que en cada uno de los casos el cheque singularizado no fue girado a nombre del proveedor, sino que nominativamente a alguno de los cuatro acusados, quienes procedieron a cobrar los mismos por caja en las oficinas del Banco Estado que se indican, con la salvedad de un cheque que fue depositado en una oficina de Punta Arenas del Banco BCI.

De manera que, y más allá de las irregularidades contenidas en la documentación soportante o legajo de cada decreto u orden de pago, en cada uno de estos documentos se está dando cuenta de haberse pagado a un proveedor una suma de determinada por concepto de los bienes o servicios que fundamentaron la orden de pago, mediante un cheque que se individualiza, con su fecha y monto, consignándose, además, la cuenta corriente con la cual se pagó y en la mayoría de los casos el número de egreso; pero ello no fue así, dado que las sumas de dinero que se indican en cada caso que fueron pagadas por los referidos cheques, en definitiva fueron recibidas por cada uno de los acusados a cuyo nombre se giraron los cheques, que posteriormente cobraron; por lo que en los decretos de pago u órdenes de pago referidos en el motivo Trigésimo se está dando fe por medio de un acto administrativo municipal de la circunstancia de haberse pagado sendas obligaciones pecuniarias de la DAS de Talcahuano para con sus proveedores, pero que en la realidad no ha sido así.

Todo lo anterior, demuestra que efectivamente en cada uno de los decretos de pago referidos en el motivo Trigésimo, con la salvedad del referido en el N° 8 (Decreto de Pago N° 745), respecto del cual se adelantó un veredicto absolutorio, se ha faltado a la verdad en la narración de hechos sustanciales por parte de los funcionarios públicos Cabello Bustos y San Martín Pavez, como lo es señalar que la Dirección de Salud Municipal de Talcahuano, en una fecha determinada ha efectuado un pago a un proveedor que se singulariza mediante un cheque que se indica por un monto que se consigna en cada caso, en circunstancias que dichos cheques fueron cobrados por alguno de los cuatro



acusados, cuyo nombre fueron girados nominativamente por la propia acusada Nubia San Martín, conforme se estableció por medio de la pericia documental ya referida en otros apartados de esta sentencia; situación que a la luz de lo señalado por la doctrina, no cabe duda que se cumple con las exigencias de que la falsedad diga relación con “hechos sustanciales”, dado que precisamente la esencia del decreto de pago, es disponer o autorizar el pago de las obligaciones contraídas por la Municipalidad a proveedores debidamente determinados, por los montos que allí se consignan, documento en el cual por lo demás se consigna el día y forma como se materializa dicho pago, por lo que también puede ser empleado como un medio probatorio; cuyo respaldo está dado por el acto de fe que implica el haber sido otorgado por un empleado público; por lo cual la falsedad en el contenido del mismo, indudablemente que tiene una enorme relevancia jurídica, como también lo exige la doctrina.

Que en torno a las firmas de los decretos de pago, y a la falsedad de los mismos, las mismas quedan de manifiesto por los dichos del propio acusado Cabello Bustos, quien admitió que requerían dos firmas, la suya y la del director, y que así se hacía; que en relación a los decretos de pago relacionados con los hechos y a cómo se obtenía la firma del director, señaló que si bien no recuerda lo que declaró al respecto durante la investigación en agosto de 2019, en la teoría se supone que tenía que ir primero la firma del jefe de finanzas y luego pasar a la firma del director, pero en la práctica era indistinto, firmaba uno u otro primero; y preguntado respecto de estos decretos duplicados y la obtención de la firma del director, respondió que no había diferencias en cuanto a cómo obtener una firma del director, siempre que fuera con la firma del jefe de finanzas y luego la firma del director, pero esto era la teoría; que siempre se generaban muchas órdenes, llegaban altos de órdenes para firmar y no se revisaban en detalles las órdenes que estaban firmando; que se duplicaba el decreto, se tomaba una orden de compra ya pagada, por ende ésta ya tenía un proceso contable hecho, y se volvía a hacer todo el proceso contable para cada uno de los pagos que se hizo, y no necesariamente se duplicaba toda la documentación del legajo para el segundo decreto; que se tomaba la orden de pago antigua, se sacaba y se sacaban firmas nuevamente, se ocupaba la misma orden de compra antigua y lo que se duplicaba eran los movimiento contables que generaban el proceso de pago, el proceso de pago era lo que se duplicaba en el fondo, no la orden de compra.

Y por lo demás, San Martín Pavez también admitió de manera similar a la indicada por Cabello Bustos la forma de operar en relación a los decretos de pago y firmas que requerían, precisando lo pertinente en cuanto a la emisión del decreto de pago, para lo cual se usaba un sistema computacional modular contable que había en la Municipalidad, y que los que podían crear decretos de pago eran los del departamento de finanzas, y tenían un perfil para ello, y que luego de imprimir el decreto de pago quedaba un registro de la sigla de quien había ingresado o emitido el decreto de pago u orden; registros que según lo



analizado en los decretos de pago materia de la acusación, son los de nsanmart y acabello, correspondientes a los dos acusados en cuestión; y por lo demás San Martín admite que ella era una de las personas que ingresaba la información, incluso más quien llenaba y firmaba los cheques respectivos, y que consignaba manualmente la información relacionada con el número de cheque, la cuenta de donde salían los fondos.

Concordante con todo lo anteriormente expuesto, están los dichos del testigo Valenzuela Ortiz, quien, explicando todo el proceso de pago de las facturas a los proveedores, manifestó los pagos se hacen por medio de un decreto de pago, que es el acto administrativo que da fe de lo que se está pagando a una persona natural o jurídica es real, el cual debe ser emitido por la persona que está asignada para dicho proceso o función, y en el caso de la DAS de Talcahuano quien generaba el decreto de pago era Nubia San Martín, pues en la carátula del mismo van sus iniciales y visto bueno; y que el decreto de pago ha de contener dos firmas, las del jefe del departamento de Finanzas de la DAS, que en el caso eran Alejandro Cabello o quien lo subrogue, que era Nubia San Martín; y el Director de la DAS, que era Armando Domínguez, o su subrogante Juan Garcés.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: De esta manera los hechos consignados en el motivo Trigésimo Séptimo como Hechos 5, 6 y 7, son constitutivos de 35 delitos de falsificación de instrumento público, previsto y sancionado en el artículo 193 N° 4 del Código Penal, por cuanto se acreditó que empleados públicos, en la especie, funcionarios municipales, cometieron falsedad, faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales, en cada uno de los decretos de pago allí singularizados.

Y habida consideración de los fundamentos latamente expuestos, al acusado Cabello Bustos, respecto de los hechos consignados como Hechos 5 y 6 del referido motivo, con la salvedad del contenido en el Hecho 5, bajo el numeral 23, por el cual será absuelto, le ha correspondido participación en calidad de autor, conforme al artículo 15 N° 1 del Código Penal, por haber tomado parte en la ejecución de los hechos de una manera inmediata y directa, desde que en su calidad de jefe de finanzas de la DAS, y siendo una de las personas encargadas de suscribir los decretos de pago, procedió a su firma en las condiciones ya anotadas; por lo que en definitiva es autor de un total de 33 delitos de falsificación de instrumento público.

En tanto que a la acusada San Martín Pavez, en relación a los hechos consignados como Hecho 5 en el aludido considerando Trigésimo Séptimo, con excepción del consignado en el número 29, por el cual será absuelta, le ha correspondido una participación en calidad de autora, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 N° 3 del Código Penal, por cuanto concertada con el acusado Cabello Bustos, mediante la confección de los decretos de pago, facilitó los medios para llevar a efecto la ejecución de los hechos ilícitos; y respecto de los



hechos consignados como Hecho 7 del motivo Trigésimo Séptimo, le ha correspondido participación de autor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, por haber tomado parte en la ejecución de los hechos de una manera inmediata y directa, desde que en su calidad de jefe de finanzas subrogante de la DAS, era una de las personas llamadas a suscribir el decreto de pago, firmó los documentos en las condiciones ya anotadas; siendo en definitiva responsable en calidad de autora de un total de 33 delitos de falsificación de instrumento público.

Que las conclusiones precedentes no se ven alteradas por la circunstancia que los decretos de pago debían ser firmados, además, por el director de la Dirección de Salud Municipal, desde que de las pruebas vertidas en el juicio, no surgieron antecedentes que dieran cuenta que los directores firmantes, ya sea el titular o el subrogante, estuvieron en conocimiento de las acciones que estaban llevando a cabo los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez, más aún si quedó establecido que la falsificación documental en definitiva se concretaba cuando se ingresaba de manera manual o manuscrita el número de cheque, su monto, fecha de pago y la cuenta corriente contra la cual se giraba y el número de egreso, en circunstancias que el cheque era girado a nombre de alguno de los acusados, quienes posteriormente los cobraban, y no a nombre del proveedor que se indicaba en el decreto de pago; conforme lo señalado por los testigos referidos en su momento; todo ello sin considerar que en el presente juicio tampoco han sido acusados los directores de la DAS, titular o subrogante, motivo por el cual estos sentenciadores no pueden pronunciarse sobre eventuales responsabilidades de dichos funcionarios.

Que de esta manera se rechazan las alegaciones de la defensa en atención a los argumentos ya expuestos y en base, además, a los siguientes:

1.- En efecto, en relación al Hecho 5, señala la defensa que en los decretos de pago no se consigna en parte alguna que se haya pagado una determinada suma de dinero con un documento, pues simplemente se ordena el pago de una suma de dinero respecto de un determinado proveedor; mas, contrariamente a lo sostenido por la defensa, en cada uno de los decretos u órdenes de pago allí relacionados, de manera expresa se deja constancia en su parte inferior izquierda que esa orden que dispone el pago a un determinado proveedor, se materializó por medio de un cheque que se singulariza, con su monto y fecha, e incluso se deja constancia de la cuenta corriente contra la cual se gira el documento, y en la mayoría de los casos, además, se consigna el Número de egreso; por lo que en cada uno de los decretos de pago se da cuenta del hecho de haberse efectuado el pago; orden de pago que sólo sería un mero acto administrativo sin las implicancias imputadas por los acusadores, en el evento que no existieran la constancia o certificación de haberse efectivamente extendido un cheque a un proveedor; lo cual se ve reforzado por los dichos del funcionario policial Quezada Guenante, que sobre el particular manifestó que el decreto de pago es una orden de pagar a alguien, es un acto administrativo, más



bien informativo, que no genera por sí solo un movimiento contable, sino que hasta después de hacer las menciones de a quién se le debe pagar, número de cheque y cuenta asociada, llevando las dos firmas, y la mosca que va con las iniciales del funcionario que emitió el decreto de pago.

2.- En relación a los Hechos 6 y 7, plantea la defensa que de la lectura de los mismos, se constata que se trata de una redacción incompleta de los hechos, dado que no se señala a dónde se ingresa la información que se indica, si a un libro o registro de la municipalidad, a algún sistema computacional o en algún cuaderno de cada uno de los acusados, por lo que al no estar contenido ese elemento, no es posible establecer que se haya ingresado una información falsa a un sistema computacional contable, porque no se tiene el documento donde se ingresó, que es lo que determina la falsedad de la información; alegación que debe ser desechada, habida consideración que conforme a toda la prueba rendida quedó totalmente establecido que los decretos u órdenes de pago se confeccionaban por intermedio del Sistema Computacional Contable, para lo cual se ingresaban en ese sistema todos los datos pertinentes, allí requeridos, como fecha del decreto, persona natural o jurídica respecto de quien se ordena el pago, con su dirección y Rut, monto y motivo del pago, individualización de la orden de compra, la contabilización respectiva, con indicación de la factura a pagar y documento con el cual se paga y cuentas corrientes en contra de las cuales se cargará el pago, entre otras menciones, información toda que queda debidamente registrada al ser impresa la respectiva orden de pago, en la cual además, queda registrado el usuario que ingresó la información; por lo que no es efectivo que no se pueda establecer el ingreso de información falsa, como lo sostiene la defensa; dado que en definitiva la orden de pago impresa, es el reflejo fiel de la información que se ingresó al sistema computacional contable; y esa información, a la luz de los antecedentes expuestos en su momento, son falsos, al tenor de la certificación manual y manuscrita que se estampa en la parte inferior izquierda de cada decreto, según lo ya indicado.

Por otra parte, y tal como se hizo en el acta de deliberación, para efectos procesales, se deja establecido que si bien en la acusación el Ministerio Público, contenida en el motivo segundo del auto de apertura, se consigna que se acusó a Nubia San Martín Pavez por 36 delitos de falsificación de instrumento público, la persecutoria fiscal durante su discurso de clausura expresamente rectificó su acusación en el sentido que el total de dichos delitos imputados eran 35 y no 36, respecto de todos los cuales este tribunal se ha pronunciado debidamente.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que conforme a la descripción fáctica, consignada como Hecho 5, numeral 8 en las acusaciones de la fiscalía y de la querellante, imputada a los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez, se señala que el decreto u orden de pago N° 745 de fecha 2 de mayo de 2018, referido en tales hechos, fue pagado por medio del cheque N° 620231 por la suma de \$2.680.118, en circunstancias que conforme al citado decreto



debidamente incorporado (**Prueba Documental N° 212**), el pago se efectuó mediante cheque N° 620232 por la referida suma, conforme a los antecedentes expuestos en el motivo Trigésimo letra A) N° 8, de esta sentencia, los que se dan por reproducidos; mas, como se indicó en su oportunidad, este último documento no ha sido incorporado al juicio por los acusadores, ni existe antecedente alguno a su respecto, por lo que se ignora en definitiva si realmente existe el referido cheque N° 620232, y en el caso de existir, por qué monto fue extendido, y a nombre de qué persona natural o jurídica se giró, y consiguientemente, no es posible establecer en definitiva si efectivamente la orden de pago en cuestión se pagó o no a Laboratorio Andrómaco, ni mucho menos si el cheque se giró a nombre de alguno de los referidos acusados; motivos por los cuales no se ha acreditado, más allá de toda duda razonable, la existencia del hecho punible en cuestión, y, por lo mismo, al respecto corresponde una decisión absolutoria de los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez, como ya se había adelantado; conclusión que no se ve alterada por el hecho que el decreto de pago en cuestión aparezca firmado por el acusado Cabello Bustos, como jefe de finanzas, y que la acusada San Martín Pavez haya sido quien confeccionó el decreto en cuestión; como tampoco por la existencia del referido cheque 620231, el cual por lo demás fue debidamente acompañado (**Prueba Documental 108 N° 28**), y figura extendido con fecha 02.05.2018, por la suma de \$2.680.118, a nombre de Pedro Ravanal Mellado, cobrado con fecha 03.05.2018, el cual no aparece asociado a ningún decreto de pago, lo cual es sin perjuicio que dicho documento sirve para el establecimiento de otro delito imputado en las acusaciones, como Hecho 4 N°25, conforme se indica en otro apartado de esta sentencia.

CUADRÁGESIMO CUARTO: Que, por otra parte, la fiscalía y la acusadora particular han imputado a los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez, la comisión del Hecho N°5, en su numeral 23 de sus libelos acusatorios, esto es, la falsificación del decreto de pago 1626, de fecha 14 de septiembre de 2018 (**Otros Medios de Prueba N° 2**), documento que conforme a los antecedentes referidos en el motivo Trigésimo letra A), N° 23, de esta sentencia, los que se tienen por íntegramente reproducidos, si bien efectivamente aparece que fue confeccionado por la encartada San Martín Pavez, dado que figura en dicho documento su identificación como usuario ("nsanmart"), y además, dentro de la documentación soportante contenida en el legajo respectivo también aparece que ella emitió los comprobantes de movimientos contables; de los antecedentes en su oportunidad referidos, si bien en el decreto u orden de pago en cuestión aparece un pie de firma a nombre de Alejandro Cabello Bustos, lo cierto es que al respecto existe un peritaje evacuado por Elizabeth Pacheco Coke que señaló que la firma allí estampada es una firma auténtica de Nubia San Martín Pavez, quien firma "por", lo cual ratificó al serle exhibido el decreto 1626 en cuestión; motivo por el cual no se ha acreditado la intervención del acusado Cabello Bustos en los hechos signados como Hecho 5 N° 23 de las



acusaciones fiscal y particular, y, que fueran calificados como falsificación de instrumento público en el motivo cuadragésimo segundo, corresponde a su respecto una decisión absolutoria, según lo ya adelantado; y sólo se tendrá por acreditada la participación de la acusada San Martín Pavez respecto de dichos hechos, quien según el peritaje referido, además de confeccionar el decreto, fue quien lo firmó como Jefa del Departamento de Finanzas, no obstante que se hiciera la referencia a que firmaba “pp” Alejandro Cabello Bustos.

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que, la fiscalía y la acusadora particular han imputado a los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez la comisión del Hecho N°5, en su numeral 29, de sus libelos acusatorios, esto es, la falsificación del Decreto de Pago N° 1729, de fecha 8 de octubre de 2018 (**Prueba Documental N° 213**); por la intervención que les cupo en la firma del decreto y en la confección del mismo, basado en que fue firmado por el acusado Cabello Bustos en su calidad de jefe de finanzas, y confeccionado o ingresado la información respectiva al mismo por la encartada San Martín Pavez; más conforme a los antecedentes referidos en el motivo Trigésimo letra A), N°29, de esta sentencia, los que se dan por enteramente reproducidos, si bien efectivamente aparece que fue firmado por Cabello Bustos en la calidad señalada, respecto de cuya autoría ya se ha resuelto que le pertenece a él; al analizar el documento propiamente tal, aparece que no fue confeccionado por la encartada San Martín Pavez, dado que no figura en dicho documento su identificación como usuario (“nsanmart”), sino que por el contrario, la identificación del usuario que se consigna es “acabello”, que según lo analizado en párrafos precedentes, corresponde al acusado Alejandro Cabello Bustos, quien entonces, además de suscribir el documento en su calidad de jefe de finanzas, es la persona que lo confeccionó o ingresó los antecedentes pertinentes para ello al sistema modular contable, como por lo demás se ve corroborado por el hecho que dentro del legajo existen documentos, como lo son dos comprobantes de movimientos contables de fecha 9.10.2018, en los que figura el usuario “acabello”; motivos por los cuales, al no constar que en la confección del presente decreto u orden de pago hubiere tenido alguna intervención la acusada San Martín Pavez, no se puede dar por acreditada, más allá de toda duda razonable, la intervención de la referida encartada en los hechos signados como Hecho 5 N° 29 de las acusaciones y, que fueran calificados como falsificación de instrumento público en el motivo cuadragésimo segundo, por lo que corresponde a su respecto una decisión absolutoria, según se adelantó.

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que dentro de las alegaciones de la defensa de los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez, se sostiene que los delitos de falsificación de instrumento público se encuentran en concurso medial con los delitos de malversación de caudales públicos, en atención a que los decretos de pago fueron el medio para lograr el perjuicio fiscal, pues de no existir este



medio, el resultado no se habría producido, y por lo tanto la conducta está subsumida.

Que no se discute que para estar en presencia de un concurso medial se requiere que uno de los delitos sea el medio “necesario” para cometer el otro, de tal manera que el delito fin no se haya podido cometer sin la comisión previa del otro delito; situación que claramente no se da en la especie, pues la prueba rendida permitió establecer que para materializar los delitos de malversación de caudales públicos cometidos por los acusados no era necesario la falsificación de los decretos de pago, ello sin perjuicio que para proceder al pago de los proveedores existía un procedimiento regular, en cuanto a que para firmar la orden de pago se debería adjuntar el respectivo cheque; mas en la práctica quedó demostrado que no siempre se ajustó el actuar de los acusados a dicho sistema, y por lo mismo, en muchas ocasiones se procedió a girar cheques a nombre de los acusados sin que los mismos se hubieren relacionado con decreto de pago alguno, como sucedió con los cheques cobrados por San Martín Pavez (Número 2 del Hecho 1 de las acusaciones), Paredes Montoya (Números 2, 3, 4, 6, 11, 12, 16, 20, 25, del Hecho 2 de las acusaciones), Ravanal Mellado (Números 3, 4, 5 del Hecho 4 de las acusaciones); realidad de giro de cheques sin decreto de pago que los respalde que también queda en evidencia de la Prueba Documental 77, en la que se contiene el Pre informe de la Contraloría Regional del Bío Bío, en su Anexo 10, en el cual se detallan los cheques, número y monto de los mismos, proveedores y decretos de pago a los que se asocian los documentos (sindicados con letras “DP”), figurando varios cheques que no tiene asociado ningún decreto de pago (DP).

Por lo demás, quedó totalmente establecido que incluso en algunas oportunidades se giraron los cheques y posteriormente fueron emitidos los decretos de pago, como consta del decreto N°1540, de fecha 3 de septiembre de 2018 (Hecho 4 N° 50), en el cual el cheque se giró con fecha 22 de agosto de 2018, y fue cobrado por caja el 23 de agosto de 2018, es decir, alrededor de 10 días antes de emitirse la orden de pago; o el decreto 653, de fecha 2 de abril de 2018 (Hecho 2 N° 8), en el cual el cheque se giró y cobró con fecha 28 de febrero de 2018, esto es, más de un mes antes de firmarse el decreto de pago; decreto de pago 1644 de fecha 3 de septiembre de 2018 (Hecho 4 N° 49), en el cual el cheque giró el 20 de agosto de 2018 y se cobró por caja el 21 de agosto de dicho año; decreto de pago 235, de fecha 1 de febrero de 2019 (Hecho 7), en que el cheque fue girado el 29 de octubre de 2018 y cobrado el 30 de dicho mes; decreto de pago 231, de fecha 1 de febrero de 2019 (Hecho 4 N° 79), en que el cheque fue girado con fecha 27 de diciembre de 2018 y cobrado por caja el 7 de enero de 2019; orden de pago 232 de 1 de febrero de 2019 (Hecho 4 N° 78), en que el respectivo cheque se giró y cobró por caja con fecha 28 de diciembre de 2018; casos todos en los que se materializó el perjuicio fiscal, mediante la sustracción de los caudales públicos desde las cuentas corrientes de



la Dirección de Salud de la Municipalidad de Talcahuano con mucha antelación a las suscripción de los respectivos decretos de pago.

Todo lo cual da cuenta que para materializar la sustracción de los fondos o caudales público que se encontraba a cargo de los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez no era necesaria la emisión del decreto de pago, más aún si quien tenía bajo su custodia los talonarios de cheques y era firma autorizada era la acusada Nubia San Martín, quien también contaba con cheques firmados en blanco por el funcionario Manuel Rojas, como lo sostuvo Urrutia Sáez; por lo que dicha acusada podía incluso girar directamente el cheque a su nombre o a nombre de cualquiera de los acusados; más aún si para el cobro del cheque por caja en la institución bancaria, tampoco era necesario la exhibición del decreto de pago que sustentara la emisión o giro del cheque a nombre de la persona que lo presentaba a cobro.

Al respecto declaró el fiscalizador **Quezada Guenante**, señalando que en una práctica regular para el cobro de los cheques era necesario la emisión de un decreto de pago, pero que en la situación irregular que estaba la DAS daba lo mismo, que desde un punto de vista lógico debería haber existido un decreto de pago para que tanto Nubia San Martín como Manuel Rojas firmaran un cheque, agregando que era perfectamente posible que un funcionario de finanzas ingresara la información a los registros contables con posterioridad al cobro de los cheques; en tanto que su colega **Urrutia Sáez** señaló que se puede generar un cheque sin generar el decreto de pago, sin haberlo contabilizado, lo que es indebido, pero se puede porque no hay control respecto de la persona que genera y firma el cheque, agregando que en la DAS de Talcahuano se podía emitir un cheque sin que existiera un decreto de pago, porque se podían firmar cheques por premura y luego hacer el acto administrativo para regularizar la situación, lo cual era excepcional, pero se podía dar, e incluso señala que habían decretos de pago que se habían emitido con fecha posterior a la emisión del cheque; como también lo afirmó la testigo **Muñoz Candia**, al manifestar que se podía llenar un cheque de la municipalidad sin contar con decreto de pago, aunque ello no debería hacerse, pero igual se realizaban cheques sin decreto, lo que sucedía cuando por solicitud de la jefatura llegaba una factura suelta y se pedía que se pagara por prioridad al proveedor, y se puede cobrar por caja en el banco un cheque sin el decreto de pago; corroborado esto último por **Juan Torres Vargas**, quien también trabajó en el departamento de finanzas y actualmente es el jefe de administración y finanzas de la DAS, el cual señaló al respecto que había momentos en que se pagaba sin el decreto de pago, solo contra factura o solo a petición del jefe de finanzas o del director de la DAS, y respecto de esos pagos, los realizaba Nubia San Martín; e incluso el fiscalizador **Quezada Guenante** señaló que si el documento denominado movimiento contable es emitido después del decreto de pago, debería de aparecer ahí el número del decreto, y durante la auditoría se vieron una serie de movimientos



contables en los cuales no se indicaba el decreto, y también se vieron una serie de decretos de pago, en los cuales no se individualizaba el cheque.

Que además de la situación de que objetivamente era perfectamente posible girar un cheque sin que existiera un decreto u orden de pago previo, debe señalarse que la falta de control al interior del departamento de finanzas de la DAS referida por Urrutia Sáez, se encuentra debidamente corroborada por los dichos de **Estrada Rivas**, directora Jurídica de la Municipalidad de Talcahuano, quien al respecto indicó que el único mecanismo de control era el entregado al jefe del departamento de finanzas, pero él no controlaba nada porque estaba sustrayendo los fondos públicos, y dentro de ese departamento no existían otros elementos de control, pues el señor Cabello Bustos era quien veía todo; de lo que se desprende que la dictación o no de un decreto u orden de pago para los efectos de sustraer los fondos públicos desde las cuentas corrientes de DAS no tenía ninguna trascendencia, puesto que no existía ningún control sobre los acusados Cabello y San Martín, que no fueran ellos mismos, ya en su calidad de jefe de finanzas, respecto de Cabello Bustos, ya en su calidad de firma autorizada para la emisión de los cheques, en el caso de San Martín Pavez, quien por lo demás tenía a su custodia los talonarios de cheques, disponía de cheques firmados en blanco por Manuel Rojas, y también era la persona que subrogaba el cargo de jefe de finanzas; y, por lo demás, el propio acusado Cabello Bustos manifestó que para cobrar un cheque no era necesario llevar el decreto de pago respaldante, pues el banco solo pedía el cheque.

A lo anterior, debe agregarse que la situación fáctica, de desorden financiero y ausencia de control de las acciones de los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez, hacían demás innecesario la emisión de un decreto de pago para materializar su actuar ilícito, más aun si la encartada San Martín tenía a su disposición cheques firmados en blanco por parte de la persona que tenía la segunda firma autorizada, don Manuel Rojas Ramírez, quien durante el juicio admitió que efectivamente él le firmaba cheques en blanco a doña Nubia, quien siempre se los solicitaba diciéndole que era urgente, que había que pagar a algún servicio básico, para que no lo cortaran, o que le solicitaba cheques en blanco cuando él se iba a ir de vacaciones, ignorando que eran utilizados para ser cobrados por alguno de los acusados, por lo que fue engañado, y abusaron de su confianza; practica de firma de cheques en blanco que es reconocida también por la propia Nubia San Martín, que sobre el punto manifestó que siempre se firmaban cheques en blanco, que ella los requería a Manuel Rojas cuando se necesitaban cosas urgentes, y también ella los dejaba firmado en blanco por cualquier cosa que se necesitare; todo ello corroborado por el propio Cabello Bustos, que manifestó que la práctica de mantener cheques firmados en blanco benefició la perpetración del ilícito, porque habían cheques firmados en blanco que se podían asociar a un nombre distinto, con el nombre de alguno de ellos .



Por otra parte, debe indicarse que si bien gran parte de los cheques girados y cobrados por los acusados se encuentra asociados a alguna orden de pago, ello no transforma la suscripción de tales documentos en un medio necesario para la comisión de la malversación de caudales públicos que afectó a la Municipalidad de Talcahuano, y a lo más, puede estimarse como una manera que tenían los acusados para tratar de evitar ser descubiertos o de encubrir su accionar, por lo que en definitiva la emisión de un decreto de pago tenía más bien por finalidad revestir o dotar al procedimiento de giro y cobro de cheques a nombre de los acusados de una apariencia de legalidad, una especie de ocultamiento, a fin de evitar ser descubiertos, al punto que la Contraloría General del Bío Bío solo pudo descubrir los hechos a través de la revisión de las imágenes de los cheques que le proporcionó el banco y de aquellos documentos que le envió para la fiscalización.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que en torno a la argumentación de las defensas de los acusados Pedro Paredes Montoya, por una parte, y de los acusados Nubia San Martín Pavez, Alejandro Cabello Bustos y Pedro Ravanal Mellado, por otra, respecto a que los hechos establecidos en el considerando trigésimo séptimo, formuladas de manera subsidiaria a las peticiones de absolución y de cambio de calificación jurídica, han de considerarse como un delito continuado, es pertinente recordar, como primera cosa, que tal como lo ha sostenido nuestra Excma. Corte Suprema de Justicia, la existencia de delito continuado no se encuentra expresamente reconocida en nuestra legislación positiva y que es el fruto de la doctrina y la jurisprudencia (Sentencia 17 de febrero de 2020, Rol N° 322-2020), indicándose por nuestro máximo tribunal, citando la doctrina al respecto, que “Se habla de delito continuado para referirse a varias acciones ejecutadas en tiempos diversos, cada una de las cuales, considerada en forma independiente, realiza completamente las exigencias de tipos delictivos de la misma especie; no obstante, lo cual han de ser tratadas como un todo y castigadas como un solo hecho punible, en virtud de la relación especial que media entre ellas (Enrique Cury Urzúa, Derecho Penal, Editorial Jurídica, 1985, tomo II, página 275)”; y continúa, “Con arreglo a ella, (teoría de la alternación) la reunión de los diversos actos aisladamente considerados delitos objetivamente autónomos en una unidad de acción presupone subjetivamente que el autor renueve la misma resolución delictiva o una similar, bajo el efecto motivador de circunstancias equivalente o esencialmente equivalentes” (SCS 2863-2003, 30 de enero de 2006).

Señala nuestro máximo tribunal que “En relación con este tópico, suele señalarse que para estar en presencia de un delito continuado deben concurrir una serie de requisitos, tanto objetivos como subjetivos. Del primer orden son: la pluralidad de acciones u omisiones, la unidad de ley violada y, para algunos, la identidad del sujeto pasivo. De índole subjetiva, es el requisito de unidad de designio, propósito, intención o dolo. También se incluyen en la doctrina ciertos



elementos de carácter secundario que, fundamentalmente, permiten dar por establecido alguno de los requisitos mencionados. Aquí se ubican la unidad o identidad de acción, la conexión espacial y temporal, y el empleo de medios semejantes. Que, si bien en nuestro país, la figura del delito continuado no tiene reconocimiento legal, se acepta su aplicación como política morigeradora de penas para casos como los delitos contra la propiedad o en que no existen pruebas para distinguir y separar en el tiempo las diferentes acciones” (Sentencia 17 de febrero de 2020, Rol N° 322-2020).

Que así las cosas, en el presente caso se estima que no se dan los presupuestos para estar en presencia del denominado delito continuado, y, por el contrario, los hechos descritos en el motivo trigésimo séptimo, constituyen delitos reiterados de malversación de caudales públicos y delitos reiterados de falsificación de instrumento público, según el detalle ya anotado en líneas anteriores, por cuanto quedó debidamente demostrado, más allá de toda duda razonable, que los acusados no han hecho más que reiterar una conducta delictiva durante el periodo comprendido entre octubre de 2017 y marzo de 2019 en el desarrollo de sus respectivas funciones y relaciones que mantenían entre ellos, sin que se pueda establecer un elemento claramente distintivo que permita arribar a la conclusión de la existencia de una unidad de designio, propósito, intención o dolo, que permita que los diversos actos aisladamente considerados delitos objetivamente autónomos sean estimados en una unidad de acción.

Así por lo demás lo ha resuelto nuestro máximo tribunal, que en un caso similar señaló “Que, por lo demás, aun aceptándose la posibilidad de entender continuada una determinada conducta prolongada del sujeto activo, en el caso que nos ocupa no puede concluirse que por el mero hecho de repetir entre los años 2012 y 2016 numerosas acciones de defraudación, mediante la adulteración de cheques girados a proveedores de la universidad donde desempeñaba sus funciones colocándoles su nombre, los que luego depositaba en su cuenta vista, el agente tuvo un mismo designio criminoso: simplemente se trata de un sujeto que, aprovechándose de la labor que desarrollaba para su empleador, una universidad estatal, modificaba los cheques que se extendían para el pago de los proveedores, reemplazando el nombre de los beneficiarios por el suyo, depositándolos en su cuenta, lo que permitía cobrar los montos consignados en esos documentos mercantiles en repetidas ocasiones, lo que implica, desde luego, la reiteración de una conducta delictual, sin que aparezca como objetivo final el apropiarse de la suma total defraudada”; concluyendo que “el sujeto activo no ha hecho otra cosa más que reiterar una conducta delictiva entre los años 2012 y 2016, en el contexto del desarrollo de sus funciones como encargada de cuentas por pagar del Departamento de Contabilidad de la Universidad Arturo Prat de Iquique, de manera que lo que correspondía era aplicar en la especie el artículo 351 del Código Procesal Penal, como



acertadamente lo hizo el tribunal a quo.”. (Excma. Corte Suprema, Sentencia de 17 de febrero de 2020, Rol N° 322-2020).

Sobre el particular, también se ha indicado que “Si bien la apreciación de una pluralidad de actos, separados cronológicamente unos de otros, que satisfacen todos ellos adecuadamente la descripción típica, puede resultar relativamente sencilla, no acontece lo mismo en cuanto a la determinación sobre cuál es y qué naturaleza tiene este vínculo al que se atribuye esta capacidad de unificar esas distintas acciones y en ello radica el problema esencial del delito continuado. Pues bien, diversas teorías han sido formuladas por la doctrina para procurar explicar la naturaleza de este nexo, siendo recogidas algunas de ellas por la jurisprudencia, distinguiéndose principalmente entre teorías objetivas y subjetivas (dolo común), e incluso una concepción negativa, para la cual en tanto la institución es ajena a nuestro derecho debe prescindirse de ella. No obstante lo anterior, a fin de corregir las soluciones desafortunadas a que puede conducir la aceptación de una u otra postura, surge aquélla de acuerdo a la cual el delito continuado aparece como un problema de injusto típico. Se traslada por lo tanto la cuestión del nexo o vínculo, que en las concepciones tradicionales se pretendía presentar en el plano psíquico de la acción o en el formal del tipo, al ámbito material de la antijuridicidad. Así, es posible sostener que el delito continuado consiste en una pluralidad de acciones, cada una de las cuales satisface en todas las características de un tipo legal, pero que han de ser valoradas conjuntamente porque constituyen la violación, *necesariamente fraccionada*, de una misma norma de deber. En términos más simples, el delito continuado existe cuando, conforme a la representación del autor, no era posible consumarlo sino fraccionadamente (Cury, ob. cit., página 656)”, “Que en el escenario antes expuesto, podrá afirmarse la existencia de un delito continuado si, en primer término, se está ante un caso de pluralidad de acciones, cada una de las cuales satisface las exigencias del tipo respectivo y si, en segundo término, ha transcurrido un cierto lapso entre la ejecución de cada una de esas acciones, de modo que el hechor pueda ser sancionado, en principio, por cada una de ellas separada o aisladamente. Pero además, si desde el punto de vista del sujeto activo el fraccionamiento de la conducta aparecía como necesario para la consumación...”; por lo que “la clave para apreciar la existencia de un delito continuado, como se expuso más arriba, no es la simple repetición de conductas similares en periodos de tiempo diversos y más o menos prolongados, sino el hecho de que para el autor, conforme a su representación, no haya sido posible la consumación sino de manera fraccionada, es decir, que desde su punto de vista ese fraccionamiento de la conducta haya aparecido necesario e indispensable para consumir su propósito delictivo...” (Corte de Apelaciones de Santiago, Sentencia de 3 de abril de 2020, motivos sexto, séptimo y octavo, causa Rol 551-2020).

Que es del caso que en la especie tampoco aparecía necesario para la



consumación de los hechos el aludido fraccionamiento de la conducta del sujeto activo, en términos que la única manera de comisión de los ilícitos hubiere sido precisamente a través del fraccionamiento en el tiempo de los actos de apoderamiento o sustracción que tipifica el artículo 233 del Código Penal; ni mucho menos se rindió prueba por parte de las defensas tendiente a demostrar tal necesidad de fraccionamiento; dado que en cada oportunidad los acusados se hacían de dineros, de fondos públicos de la Dirección de Administración de Salud de la Municipalidad de Talcahuano, según la cantidad que ellos mismos determinaban a su entero arbitrio, como expresamente lo señalaron los propios acusados, al punto que también indicaron que se extendían los cheques cuando tenían problemas económicos; o que no existía una fecha preestablecida para ello, sino que se hacía en cualquier momento, como lo afirmó Paredes Montoya; sin que obste a la señalada conclusión el que la sustracción se efectuaba de manera fraccionada para no ser descubierto, por cuanto es de sentido común y máxima de la experiencia, que toda persona que comete algún delito no quiere ser descubierto, más aun tratándose de personas con cierto nivel de educación y experiencia en el área de la administración pública, como los acusados, y dada la naturaleza de los hechos y la calidad de fondos públicos de las sumas involucradas; y por lo demás, sobre el punto también se ha señalado que cuando la consumación instantánea es posible y el fraccionamiento se hace necesario para impedir un descubrimiento ulterior del hecho, este caso, pues debe ser tratado conforme a las normas que regulan el concurso material” (Enrique Cury Urzúa, “Derecho Penal”, Parte General, página 657).

Incluso más, también se ha sostenido que “Si bien en nuestro país, la figura del delito continuado no tiene reconocimiento legal, se acepta su aplicación, como política morigeradora de penas, para casos como los delitos contra la propiedad o en que no existen pruebas para distinguir y separar en el tiempo las diferentes acciones” (Corte Suprema, sentencia 19 de junio de 2020, Rol N°33.156-2020); situación esta última que tampoco se da en la especie, en la que se encuentra totalmente acreditado las diferentes acciones cometidas por los acusados, con la determinación precisa de las fechas en las que se perpetraron las acciones ilícitas, al punto que se encuentra singularizados los respectivos cheques empleados para la materialización de la malversación fiscal, sus montos, fechas de emisión y fechas de cobro en caja o depósito, como también las fechas en que se confeccionaron los decretos u órdenes de pago; conforme al pormenorizado detalle que se expuso al momento de tener por acreditados los 129 delitos de malversación de caudales públicos y 35 delitos de falsificación de instrumento público.

En suma, si bien se tuvieron por acreditadas varias acciones, ejecutadas en tiempos diversos, cada una de las cuales, considerada en forma independiente, realiza completamente las exigencias de tipos delictivos de la misma especie, que por lo demás afectaron a una misma persona; de los hechos que se han dado



por acreditados, no aparece que haya sido necesario e indispensable para consumir el propósito delictivo el fraccionamiento de la conducta; ni tampoco se da la situación de no existir pruebas para distinguir y separar en el tiempo las diferentes acciones, ni mucho menos se ha podido establecer un elemento claramente distintivo para arribar a la conclusión de la existencia de una unidad de designio, propósito, intención o dolo, que permita que los diversos actos aisladamente considerados delitos objetivamente autónomos sean estimados en una unidad de acción, como lo proponen las defensas; y por el contrario, se dan todos y cada uno de los presupuestos para sancionar a los acusados por cada uno de los delitos de que han resultado responsables, y ante la reiteración delictiva, corresponde aplicar la acumulación jurídica regulada en el artículo 351 del Código Procesal Penal, por resultar más beneficioso para los encartados que la acumulación material del artículo 74 del Código Penal, según se dirá.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que la acusadora particular al calificar los Hechos 1, 2, 3 y 4 de su acusación, estimó que los mismos eran constitutivos de 129 delitos reiterados de falsificación de instrumento privado mercantil, descritos y sancionados en el artículo 197 en relación con el artículo 193 N°4, ambos del Código Penal, en concurso medial con 129 delitos reiterados de malversación de caudales públicos del artículo 233 N° 2 y 3 del Código Penal, en grado de consumados, cometidos por los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez en calidad de autores; respecto del Hecho N° 2 estimó que eran constitutivos de 35 delitos consumados y reiterados de uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, descritos y sancionados en el artículo 198, en relación con los artículos 197 y 193 N° 4, todos del Código Penal, en concurso medial con 35 delitos consumados y reiterados de malversación de caudales públicos, descritos y sancionados en el artículo 233 N° 2 y 3 del Código Penal, cometidos por el acusado Paredes Montoya en calidad de autor; y respecto del Hecho N° 4 estimó que eran constitutivos de 86 delitos consumados y reiterados de uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, descritos y sancionados en el artículo 198, en relación con los artículos 197 y 193 N° 4, todos del Código Penal, en concurso medial con 86 delitos consumados y reiterados de malversación de caudales públicos, descritos y sancionados en el artículo 233 N° 2 y 3 del Código Penal, cometidos por el acusado Ravanal Mellado en calidad de autor.

Que desde ya debe señalarse que ambos acusadores están contestes en que los hechos referidos son constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos que en cada caso se especifican, respecto de cuya existencia rigen todos los antecedentes ya expuestos en consideraciones anteriores; mas difieren en cuanto a la existencia de los delitos de falsificación de instrumento privado mercantil y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, a cuyo respecto el Ministerio Público estima que no se configuran los mismos, en atención a que los cheques cobrados por caja por los acusados correspondían a



documentos legalmente emitidos y pagados por el banco, y no se hace mención o no constituyen una forma de declaración de la obligación que están pagando, por lo que no son falsos bajo ninguno de los numerales que se señalan, y al no haber documento falso, malamente podría haber un uso malicioso del mismo; habiendo las defensas, del mismo modo, estimado que no se configuran tales delitos, fundamentalmente por el hecho que los cheques son incausados, no necesitan causa para su validez, se bastan asimismo, y son meramente formales, y por lo mismo no es posible sostener una falsedad ideológica del mismo.

Que desde ya debe indicarse que no ha habido controversia alguna entre los intervinientes en torno a que un cheque reviste la calidad de instrumento privado mercantil, documento que cuya reglamentación se encuentra contenida en el DFL 707, sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.

Que al respecto debe señalarse que el artículo 197 del Código Penal sanciona con las penas que indica al que con perjuicio de terceros cometiere en instrumento privado algunas de las falsedades designadas en el artículo 193; y si tales falsedades se cometieren en letras de cambio u otras clase de instrumentos mercantiles, se castigara a los culpables con las penas que se indican en el inciso segundo del citado artículo 197; y en el caso específico la imputación que efectúa la acusadora particular lo es en relación a lo dispuesto en el artículo 193 N° 4 del Código Penal, esto es, cometer falsedad faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales, que conforme a la toda la doctrina, corresponde a la denominada falsedad ideológica.

Que si bien el artículo 197 del Código Penal en cuanto a las formas de falsificación hace una referencia a las contenidas en el artículo 193, a propósito de la falsificación de instrumentos públicos, la doctrina se encuentra conteste en que la referencia ha de atenderse únicamente a las denominadas falsedades materiales, consignadas en los numerales 1, 5 y 6 del citado artículo 193, (Así Mario Garrido Montt, "Derecho Penal", Tomo IV, Parte Especial, página 87, Segunda Edición; Alfredo Etcheberry, "Derecho Penal", Parte Especial, Tomo IV, página 173, Tercera Edición); sosteniéndose que "... quienes extienden u otorgan documentos privados pueden mentir en ellos sin que la ley los sancione por esa sola circunstancia; no están jurídicamente obligados a decir la verdad, y lo que ellos afirmen no estará dotado de fe pública ni de fuerza probatoria" (Alfredo Etcheberry, op. cit.); situación que cobra aún mayor relevancia atendida la naturaleza esencialmente formal de este tipo de documentos, en cuanto a que la ley exige para su validez el cumplimiento de determinados requisitos, y por lo mismo, tal como lo sostienen las defensas, se trata de un título que se basta por sí mismo, y no se puede recurrir a situaciones preexistentes o fuera del título.

Finalmente, cabe indicar que al tenor la citada Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, no se ha esgrimido ninguna omisión o irregularidad en la formalidad de los mismos, por cuanto según lo establecido en su momento,



fueron firmados por las personas cuyas firmas se encuentran registradas y autorizadas en el Banco, y sin que exista ninguna alteración y cumpliendo todas las exigencias requeridas en el artículo 13 del citado texto legal, por lo que más allá de no haber sido invocado por la acusadora particular, tampoco se configura a su respecto ninguna de las denominadas falsedades materiales de los números 1, 5 y 6 de artículo 193 del Código Penal.

Consiguientemente, no habiéndose establecido la existencia de algún documento privado mercantil falso, tampoco puede sostenerse la existencia del delito de uso malicioso del mismo; motivos por los cuales no habiéndose acreditado, más allá de toda duda razonable la existencia de los delitos de falsificación de instrumento privado mercantil y de uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, imputados por la acusadora particular, corresponde la absolución de los acusados por la imputación de dichas figuras delictivas.

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que concurre a favor de los acusados Paredes Montoya, Cabello Bustos, San Martín Pavez y Ravanal Mellado, respecto de todos los delitos de que han resultado responsables, la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior, por cuanto no se han allegado a la causa antecedentes de ninguna índole que den cuenta del hecho de tener alguna anotación prontuaria en sus extractos de filiación y antecedentes penales; atenuante que, por lo demás, fue reconocida expresamente por las propias acusadoras en sus respectivas acusaciones y durante la audiencia, acogándose así la petición formulada por las defensas.

QUINCAGÉSIMO: Asimismo, favorece a los referidos acusados respecto de todos los delitos de que resultan responsables la circunstancia atenuante prevista en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, esto es, la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, por cuanto todos los acusados prestaron declaración durante el juicio, reconociendo una serie de aspectos contenidos en la imputación fáctica de las acusadoras, sobre los cuales se sustentan la configuración de los delitos que le fueron atribuidos, y que han servido para corroborar los antecedentes incriminatorios existentes en su contra, estimándose por lo mismo que tal actitud ha implicado una cooperación eficaz y sustancial al esclarecimiento de los hechos que el tribunal ha de valorar, desde que ha permitido descartar toda duda en torno a su participación en los hechos, y por lo mismo ha contribuido a formar su convicción condenatoria.

En efecto, todos los acusados han admitido participación en los hechos que le han sido imputados, más allá de las discusiones desde el punto jurídico que plantean sus defensas, particularmente recocieron haber cobrado los cheques materia de la acusación, y en el caso de San Martín Pavez, además el giro y firma de los mismos y su calidad de firma autorizada; y tácitamente el encartado Cabello Bustos, también ha admitido la firma de los decretos de pago, dado que



nunca ha cuestionado ni en fase investigativa ni durante el transcurso del juicio, la autoría de tales firmas; como igualmente dieron cuenta todos los acusados de la forma como se inicia el actuar ilícito de cada uno de ellos, y del hecho que los dineros obtenidos de los cheques eran repartidos entre ellos, cualquiera que hubiere sido la proporción o porcentaje que indican; amén de otros antecedentes que se han ido refiriendo en las distintas argumentaciones pretéritas al momento de establecer la existencia de los hechos y la participación de cada uno de los acusados, particularmente del mérito de sus declaraciones consignadas en el motivo trigésimo sexto, las cuales se tienen por reproducidas.

Que no obsta a la configuración de la atenuante, la circunstancia que no se haya recuperado el dinero malversado, ni el hecho que los acusados eventualmente no hayan acreditado en que lo gastaron o invirtieron, toda vez que tales aspectos, tal como lo indica la propia fiscal, se relacionan con el agotamiento del delito de malversación de caudales públicos, y, por lo mismo, eventualmente podrán tener influencia para efectos de determinar la mayor o menor extensión del mal causado, más no para efectos de establecer si han colaborado o no al esclarecimiento sustancial de los hechos.

No obstante lo anterior, los antecedentes aportados por cada uno de los acusados no fueron de la entidad suficiente para estimar como muy calificada la colaboración prestada, por cuanto los acusadores rindieron numerosa prueba documental y testimonial que permitió sustentar sus alegaciones y pretensiones, a partir de las cuales estos sentenciadores han podido dar por acreditada la existencia de los delitos imputados y la participación que a cada uno de ellos le ha correspondido en los mismos; calificación a la cual también obstan los constantes cambios de versión durante el transcurso de la investigación en torno a la dinámica de los hechos, que denotan que también hubo por parte de los encartados un cierto ánimo de, al menos, entorpecer el curso de la investigación y el esclarecimiento oportuno de los hechos, y de antecedentes aportados, que no se condicen con el mérito de la prueba rendida según ha quedado demostrado en líneas anteriores.

En efecto, hay cambio de versiones en torno a si Cabello Bustos fue el que propuso inicialmente el cobro de cheques a los otros acusados, en circunstancias que en sede policial aquél dijo que Paredes le había propuesto cobrar cheques, porque conocía la forma de hacerlo, y que sólo necesitaba que él firmara los decretos, por lo cual le cancelaría un porcentaje, señalando Cabello Bustos que Nubia San Martín fue la primera que empezó con los cobros, y al integrarse él, se hace la repartición de un tercio, todo ello conforme dio cuenta el funcionario Valenzuela Ortiz que le tomó declaración policial a Cabello Bustos; como también hay diferencias en relación a la forma de repartirse los dineros cobrados, si era un porcentaje o por partes iguales, a si sabían o no de la intervención del acusado Ravanal Mellado en el cobro de cheques, o a la época en que se enteraron de ello; en cuanto a la negativa de las relaciones y contactos telefónicos y de mensajería existentes entre los acusados; al hecho de plantear



el desconocimiento de las funciones que debían desempeñar en el ejercicio de sus cargos, particularmente en cuanto a la custodia de fondos públicos, tratándose de los acusados Cabello y San Martín; o el haber negado durante la investigación que se firmaban cheques en blanco, y particularmente haber negado la firma de cheques, en caso de la acusada San Martín, y sostener que eran falsificados, lo que motivó la práctica de la diligencia pericial caligráfica respectiva, acusada que también a los fiscalizadores de la Contraloría pretendió engañar remitiendo en un correo un cheque adulterado, en que se refería haber sido extendido a nombre de un proveedor, en circunstancia que estaba girado a nombre de uno de los acusados, conforme lo señalaron los fiscalizadores Urrutia y Quezada, quienes se dieron cuenta de ello al revisar a través de la página del banco la imagen del cheque, acusada San Martín que también en sede policial dijo que le prohibió denunciarlo, para luego en juicio señalar que fue ella quien le manifestó que también quería cobrar cheques; o el haber indicado que su intervención era solo de un “palo blanco”, como lo afirmó Ravanal en sede investigativa, quien también negó mantener contactos con Paredes y Cabello.

Como también en torno a la entrega de claves y contraseñas para el acceso a los dispositivos móviles y correos electrónicos, que impidieron su análisis en algunos casos, conforme dio cuenta el perito Marcelo Eduardo Ziem Cortes, del Laboratorio de Criminalística de la PDI, quien refirió le enviaron las contraseñas de las cuentas de correos que indica, correspondientes a los acusados Nubia San Martín, Pedro Paredes y Alejandro Cabello, y que no fue posible acceder o ingresar a ninguna de las cuentas, debido a que el sistema arrojaba un mensaje de error, que señalaba que no era posible acceder a dichas credenciales de acceso; precisando que respecto de San Martín Pavez, la clave que ingresó es la que se indica en una hoja de papel que contiene en **Otros Medios de Prueba N° 44 que se le exhibe -en la cual figura a mano escrito “Agustin2014.-”-**, y que el mensaje que le arrojó el sistema a su respecto fue que la contraseña ingresada era incorrecta; en relación a Paredes Montoya, eran dos cuentas de correo, en una de las cuales el mensaje fue que la contraseña ingresada era incorrecta, y en la otra cuenta arrojó un mensaje similar y además, solicitó agregar un código adicional por medidas de seguridad, lo que se debió a los reiterados intentos por ingresar al sistema, precisando que las claves que se señalan en una hoja de papel, **contenida en Otros Medios de Prueba N° 45 que se le exhibe**, son las que ingresó en las respectivas cuentas; y respecto de Cabello Bustos, también se trataba de dos cuentas de correo, respecto de una de las cuales, arrojó mensaje que la cuenta no era reconocida por gmail, lo que significa que no estaba asociada a ningún usuario dentro de su base de datos de cuentas de correos; en tanto que la segunda cuenta, el mensaje arrojado señalaba que la contraseña era incorrecta y había sido cambiada hace 37 días desde el momento en que él ingresó, estimando que esto último ocurrió como 5 días antes de la fecha de su informe de 6 de julio de 2020; precisando que las claves que se señalan en una hoja de papel, **contenida en Otros Medios de**



Prueba N° 46 que se le exhibe, son las que ingresó en las respectivas cuentas, indicando que corresponden a acabello.disamtalcahuano@gmail.com y a alcabeb@gmail.com; no obstante lo cual, el tribunal puede constatar al revisar la señalada hoja que el perito ha incurrido en un error al leer el primer correo electrónico, debido a que en la referida hoja de papel, el correo anotado es: acabello.dastalcahuano@gmail.com.

Que en todo caso, la negativa a la calificación de la atenuante de colaboración, no se ve alterada por el hecho que eventualmente se hubiere incurrido en algún error al momento de enviársele al perito el nombre de una de las cuentas de correo electrónico del acusado Cabello Bustos, o por el hecho que haya leído erróneamente el correo; ello en el entendido que el nombre de una de las cuentas del acusado Cabello Bustos fuere acabello.dastalcahuano@gmail.com, como aparece de las 4 hojas de impresión de correos electrónicos de nsanmartin.disamtalcahuano@gmail.com, del Informe Policial 143 del 25 de enero de 2021 de la Briedec Metropolitana, que se contienen en **Otros Medios de Prueba N° 100**, incorporados por la defensa; dado que igualmente se mantiene la conclusión que respecto de la otra cuenta la contraseña era incorrecta y que había sido cambiada la clave; y en todo caso, tampoco es posible descartar que la cuenta que se cuestiona por la defensa, hubiere sido dada erróneamente por el propio acusado Cabello Bustos; y en todo caso, conforme a la lectura de la hoja de papel, contenida en la **Otros Medios de Prueba N° 46**, la cuenta anotada efectivamente es acabello.dastalcahuano@gmail.com, y alcabeb@gmail.com, y al costado de esta última cuenta la leyenda nacs.2019, pues dichas anotaciones figuran manuscritas, por lo que si hay algún error en las mismas, o hubo una mala lectura, ello no puede ser atribuido a los funcionarios policiales ni al perito, pues es el acusado quien anota sus cuentas y contraseñas; y lo mismo sucede con el contenido de la anotación que se contiene en la Hoja que forma parte de la **Otros Medios de Prueba N° 44**, en cuanto figura de manuscrita las siguiente anotación Agustin2014, lo cual habría sido escrito por el acusado Paredes Montoya.

Tampoco se altera la conclusiones de estos sentenciadores, en el sentido de no acceder a la calificación de la atenuante de colaboración por la circunstancia, que el acusado haya entregado voluntariamente un teléfono celular con la indicación de la clave, del tipo “patrón”, según consta del acta de incautación o entrega voluntaria de objetos, documentos y/o instrumentos acompañada por la defensa, de fecha 26 de agosto de 2019 (**Otros Medios de Prueba 71**), dado que lo concreto es que conforme al perito Bravo Castro en definitiva no pudo ser desbloqueado, y porque aún en el evento que ello no fuere imputable a Cabello Bustos, lo cierto es que el conjunto de otras inconsistencias y cambios de versión de los hechos obstan a la calificación de la atenuante en cuestión.



QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Que únicamente en los delitos de malversación de caudales públicos, favorece a los acusados Cabello Bustos, San Martín Pavez, Paredes Montoya y Ravanal Mellado la circunstancia atenuante de responsabilidad penal del artículo 11 N°7 del Código Penal, esto es, la de procurar reparar con celo el mal causado, la cual se encuentra acreditada con los comprobantes de depósito judicial incorporados por las respectivas defensas durante la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal, y especialmente con el mérito de la certificación de Roberto Venturelli Lizama, Administrador del Juzgado de Garantía de Talcahuano, de fecha 29 de agosto de 2022, e Informe de depósitos en la cuenta corriente de dicho tribunal, por medio de los cuales se encuentra establecido que Cabello Bustos efectuó una consignación total de \$ 20.100.000.-; San Martín Pavez, la suma total de \$20.005.000.-; Paredes Montoya, consignó la suma total de \$10.000.000; y Ravanal Mellado, la suma total de \$19.995.000; estimándose que dichos depósitos constituyen respecto de cada uno de los acusados, una reparación “celosa” habida consideración que se estableció que a pesar de la circunstancia procesal en la que se encuentran, se concretaron acciones tendientes a reunir dichas cantidades de dinero para ponerlas a disposición de la municipalidad afectada para procurar en parte reparar el mal causado, existiendo así lo que la jurisprudencia denomina “una manifestación material objetivamente constatable a favor de la víctima del delito” (citada por el profesor Jean Pierre Matus Acuña, en la obra “Texto y Comentario del Código Penal Chileno”, Tomo I, Libro Primero-Parte General”, página 181), desechándose las alegaciones de los acusadores que estuvieron por no acoger dicha atenuante.

En efecto, la fiscalía se opuso a tener por concurrente la atenuante del artículo 11 N° 7 del Código Penal, porque los depósitos efectuados no son merito suficiente para considerarse una reparación celosa, dado los altos montos defraudados y el hecho que puede que dichos dineros provengan del mismo ilícito, y porque si bien podrá sostenerse por los acusados que hay aportes de sus familiares, no hay prueba al respecto, por lo que fuera de los comprobantes de depósitos no existe prueba de que se trate de una reparación “celosa”; en tanto que la parte querellante se opuso, sosteniendo para estar en presencia de esta atenuante, no se trata de cualquier reparación, sino que debe ser una reparación “celosa”, que importe un esfuerzo de parte de los acusados, y que tienda a reducir al mínimo las consecuencias perniciosas del delito, agregando que los acusados jamás han aportado antecedentes de cuál es el origen de los fondos, y no han restituido la mínima parte de los fondos sustraídos, dando versiones alejadas de la realidad en cuando al destino de los mismos.

Que las alegaciones precedentes, no son óbice para la configuración de la atenuante en cuestión dado el carácter instrumental que tanto la doctrina como la jurisprudencia le ha dado a tal circunstancia, sosteniéndose, entre otras cosas, que *“la reparación se puede hacer en cualquier momento, antes de la dictación de la sentencia condenatoria de término, no requiere inmediata a la*



comisión del hecho” (Mario Garrido Montt, “Derecho Penal”, Parte General, Tomo I, página 194); que desde un punto de vista subjetivo la atenuante en cuestión, al decir del mismo autor, “no requiere especiales modalidades, salvo la de que la reparación sea un acto voluntario del sujeto”; e incluso más, señalando que tampoco tienen importancia los motivos que lo han inducido a la reparación, los que pueden ser mezquinos o altruistas, corresponder o no a un real arrepentimiento, agregando que “la reparación puede ser cumplida por el sujeto activo *personalmente*, o por medio de un *tercero* que obra en interés de aquél”; autor para quien esta atenuante tiene su fundamento en razones de política criminal; sosteniéndose igualmente que “los motivos del individuo son irrelevantes. Da lo mismo que actúe por un impulso de auténtico arrepentimiento o tan solo para procurarse el beneficio de una sanción más benévola” (Enrique Cury Urzúa, “Derecho Penal” Parte General, página 494); criterios que expresamente ha recogido nuestra jurisprudencia, precisando que “*La pureza ética de la circunstancia es un requisito extra-legal y, por ende, no exigible*” (Sentencia de 31 de enero de 2006, Rol N° 4664-2001, I. Corte de San Miguel).

Aspectos todos que también han sido recogidos por nuestro máximo tribunal, al sostener que “*Según consta de las Actas de la Comisión Redactora del Código Penal la circunstancia atenuante de responsabilidad penal se relaciona con la conducta del agente posterior a la época de comisión del delito y tiene un carácter marcadamente neutro, es decir, no incorpora exigencias subjetivas de arrepentimiento, ni hace necesaria una reparación total y completa del mal causado por el delito, limitándose la norma a exigir que el hechor procure, trate, haga lo posible por reparar, mitigar o disminuir las consecuencias lesivas producidas por el hecho. Es criterio de esta Corte Suprema, desde a lo menos el año 1975, que “tampoco tiene importancia el que ese daño haya sido reparado en su integridad, pues lo que la ley exige es que el reo haya procurado reparar con celo el mal causado sin exigir que la reparación haya abarcado la totalidad de ese mal”* (Citada en Revista de Ciencias Penales, T XXXIV, N° 2, 1975, p. 218). En la perspectiva que se viene señalando también resulta impertinente plantear que el concepto de “procurar” pueda importar la idea de exigir equivalencias o proporciones numéricas entre la cuantía de la reparación –en la medida que ello sea posible– y la magnitud del mal causado; y ello ocurre desde que la norma en cuestión lo que demanda al sujeto es una “*actividad esforzada y diligente para tratar de obtener la reparación, no ésta en su totalidad o plenitud*” (Citada en Revista de Ciencias Penales, T XXXIV, N° 2, 1975, p. 218), mismo criterio que expone el profesor Cury cuando plantea que “*La ley se contenta con la exteriorización efectiva de un propósito serio; no reclama resultados exitosos*” (Cury, Enrique, Derecho Penal, Parte General, T I, p. 124). Finalmente la neutralidad de la norma impide la invocación de criterios vinculados a arrepentimiento o consideraciones de tipo moral, elementos ajenos al Derecho Penal, siendo relevante y decisivo el elemento “celo”, que debe



caracterizar la actividad reparatoria.” (Excma. Corte Suprema, Sentencia 24 de octubre de 2018, motivo Vigésimo tercero, Rol 13.123-2018).

De igual manera, se sostiene por la doctrina que “la apreciación del celo con que ha obrado el procesado no puede desvincularse de un sinnúmero de factores o circunstancias importantísimas y que deben orientar el criterio del juzgador. La condición social y económica del reo, su situación de preso o liberto bajo fianza, el desempeño o no de laguna labor en el presidio, el carácter singular o aislado de la actividad reparatoria o su integración a una actitud sostenida a lo largo de un período de tiempo, la oportunidad procesal en que se produce la gestión o trámite del inculpado, son elementos de juicio decisivos que junto a otros que pueden presentarse, deben ser considerados para poder resolver con justicia y equidad, la aceptación o rechazo de la atenuante” (Carlos Künsemüller Loebenfelder, en su artículo “Algo más sobre la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 7 del Código Penal”, publicado en Revista de Derecho y Humanidades, de la Universidad de Chile, página 100 <https://derechoyhumanidades.uchile.cl>).

Y relacionado con lo anterior, debe considerarse que los acusados se han encontrado precisamente privados de libertad desde principios del año 2021 a la fecha, ya en prisión preventiva, ya bajo arresto domiciliario total, lo cual naturalmente ha restringido considerablemente las posibilidades que tienen de obtener recursos para la materializar una reparación del mal causado, habiéndose efectuado varias consignaciones durante el transcurso de la investigación, en el transcurso de los años 2021 y 2022, según se aprecia de las certificaciones acompañadas; consignaciones que al decir de los acusados fueron con el apoyo de los familiares, dada la condición procesal en la que ellos se encuentran; indicando Cabello Bustos que las consignaciones se efectuaron con aportes de sus hermanos mayores que son profesionales; San Martín Pavez, en tanto, afirmó que para reparar el mal causado recibió ayuda de su hermano, que es jefe de una empresa de montaje industrial, y de sus cuñados y cuñadas que tienen un negocio de abarrotes; y Ravanal Mellado, dio cuenta que la suma consignada lo fue también por aportes familiares, principalmente de sus hermanos, particularmente refiere a su hermano José, que trabaja en el norte, con su sueldo, ahorros y su 10%; todo lo cual demuestra el celo exigido por la norma, en cuanto las sumas consignadas implican una preocupación y esfuerzo por procurar de algún modo, ya con bienes propios o de terceros, paliar en algo el mal causado con su accionar, por lo que si bien el monto total malversado por los cuatro acusados suman más de 400 millones de pesos, las cantidades depositadas por cada uno de los acusados no son menores considerando la situación procesal y de privación de libertad en que se encuentran; suma que evidentemente podrá de alguna manera servir para paliar las consecuencias perniciosas causadas por su accionar ilícito.

Por lo anteriormente expuesto, es que tampoco tienen mayor incidencia las alegaciones de las acusadoras y el tenor de la prueba rendida, en el sentido que



no se haya podido establecer en definitiva donde se encuentra la totalidad de los dineros malversados, y que no se haya establecido en qué se habrían gastado o invertidos los dineros defraudados, conforme a lo ya analizado.

Atenuante que en todo caso no concurre en relación con los delitos de falsificación de instrumento público de que resultan responsables los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez, habida consideración que no se ha fundado debidamente por las defensas, de qué manera se entiende que se habría reparado o procurado reparar con celo el mal causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias en relación a dichos delitos, más aun si prácticamente no se hizo referencia alguna ello en sus alegaciones finales ni en la audiencia respectiva, considerando además la naturaleza de los mismos, y el bien jurídico protegido.

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: En cuanto al destino que habrían tenido los fondos malversados, compras y gastos que habrían efectuado, los acusados dieron cuenta de una serie de antecedentes para efectos de justificar la circunstancia que no se les haya encontrado dineros ni bienes en los cuales hubieren sido invertidos; a cuyos efectos se rindió prueba de diversa índole tendiente a determinar la existencia o no de los dineros provenientes de la sustracción cometida por los acusados o bienes adquiridos con el producto de los mismos, y tendiente a verificar o no las aseveraciones que al respecto proporcionaron los acusados, según lo que a continuación se señala, en que también se analizan otros antecedentes que fueron aportados por estos últimos; todos los cuales si bien no tienen una incidencia gravitante en los hechos que se han dado por establecidos, ni afectan a los elementos que configuran cada uno de los delitos de que han resultado responsables los acusados, se han relacionado, a fin de completar el contexto de los antecedentes aportados por los propios acusados en relación a la comisión de los hechos materia de la presente causa, y que por lo mismo han permitido a estos sentenciadores tener mayores elementos para su análisis y debida valoración de los testimonios y versiones aportadas por aquéllos.

1.- Que el acusado **Cabello Bustos** señaló que el dinero lo gastó en sus problemas económicos y de salud psicológica, en clubes nocturnos y bares, en la compra de un vehículo que indicó, como también en el arriendo de un local de un minimarket que instaló una persona con la que se fue a vivir, a quien le compró un auto, y viajes efectuados con ella; como también en la puesta en marcha de un local nocturno en Talcahuano, cuya dueña era Sonia González, para lo cual se constituyó la sociedad A y E Limitada, en que figuran como socios Richard Augusto y Elson Lienlaf; para lo cual pidió en Caja Los Andes un préstamo de tres millones y medio de pesos, pero en definitiva no resultó el negocio y con el préstamo alcanzó a pagar los gastos de dos meses, pero el contrato era por un año, por lo que debió seguir pagando los gastos por el resto del año; y también prestó dinero a un amigo para los exámenes de su hijo, y pagó cuentas atrasadas que tenía en Caja Los Andes y Coopeuch, y en general el



dinero lo gastó en cosas sin valor; no obstante de información remitida por Coopeuch, a través comunicación de 16 de agosto de 2021 de dicha institución financiera, no hace referencia a ningún crédito cursado a Ravanal Mellado.

Al respecto debe señalarse que efectivamente se acreditó la existencia del contrato suscrito por la Empresa A y E Limitada con Sonia González, con el mérito del respectivo contrato de arriendo, estatutos de la sociedad referida, y elementos como timbre y máquinas transbank que fueron encontrados en el domicilio del acusado Cabello Bustos en calle Colón 1307, departamento 305, conforme dan cuenta **Otros Medios de Prueba N° 68, 69 y 70 y 90**, ya detallados en motivaciones anteriores al dar cuenta de los hallazgos habido en dicho domicilio, y los asertos del perito fotógrafo Ricardo Pérez Zúñiga, el funcionario policial Valenzuela Ortiz y, en especial, la comisario de la PDI, doña Gladys Lea Lagos Reyes, quien le tomó declaración a Sonia González Gajardo, quien dio cuenta de ser dueña de un local nocturno, denominado “Olas Nigth Club, ubicado en calle Balmaceda 725 Talcahuano, el cual le arrendó a una sociedad cuyos socios eran Enzo y Richard, pero que el contacto lo mantenía con Alejandro Cabello, a quien le cobraba entre \$600.000 o \$700.000, quien le pagaba por depósito o transferencia, y que el contrato era por dos años, pero le el último arriendo que le pagó fue en octubre de 2018, pues le dijo que iba a dejar el local por problemas familiares; agregando que la señora González dijo que los arrendatarios no habían realizado alguna reparación al local; como también dan cuenta de la existencia de la referida sociedad la **Prueba Documental 54, 55, 57 y 75**, relativas a información tributaria existente en el SII de la referida empresa correspondiente a períodos que allí se indican, y con información de los socios y representante legal de la misma, giro, domicilio y timbraje de boletas; corroborado con la comunicación de 11 de septiembre de 2019, emitida por Transbank, por medio de la cual se entrega información referida a la Sociedad Comercial A y E Limitada, su representante y contratos de dicha empresa con Transbank, los cuales se adjuntan (**Prueba Documental N°85**), también corroborado por los antecedentes que le entregó el propio Richard Augusto Álvarez, al funcionario policial Valenzuela Ortiz, en orden a que Cabello Bustos le propuso que generara la referida sociedad, con Elson Lienlaf, porque él no podía en su calidad de funcionario público, a quien Valenzuela también le tomó declaración, confirmandole la existencia de su participación en tal sociedad.

Habiéndose establecido que la mujer con la que se fue a vivir el acusado Cabello Bustos se llamaba Maritza Vargas Pincheira, a quien entrevistó el funcionario Valenzuela Ortiz, quien indicó que dicha mujer le manifestó que le devolvió el dinero que Cabello le había prestado para el negocio; quien además le manifestó que había visto \$16.000.000 al interior de una caja fuerte que había en la casa de Cabello Bustos, pero que después sólo habían tres millones; que en cuanto a vehículos comprados, conforme al certificado del Registro Civil (**Prueba Documental N° 101**), a parte del Hyundai Accent que más adelante



se indica, no existen más vehículos comprados a nombre de Maritza Vargas; y conforme a los antecedentes aportados por el testigo Nicolás Arratia Reyes, no resulta creíble que el acusado Cabello Bustos le hubiere facilitado dinero, cuando conforme a dicho testigo, que examinó información extraída del teléfono celular de Maritza Vargas, que señala corresponder al que se le exhibió en audiencia (contenido en **Otros Medios de Prueba N° 72**), en los 14 archivos de audio que pudo analizar de dicho dispositivo, habían alguno relacionados a aparentes prestamistas colombianos con los que Maritza tendría relación, pues se escuchaba que ella mantenía deudas con ellos, y conforme a otros audios, ella señalaba que necesitaba dinero porque tenía una pancreatitis aguda y estaba organizando un evento para obtener fondos y que tenía pensado vender su auto, audios que eran de aproximadamente julio del 2019; información que refirió está contenida en un disco duro comprendido en **Otros Medios de Prueba 55** que le fue exhibido .

En cuanto a la compra de un vehículo que Cabello Bustos señala haberle comprado a Maritza Vargas, conforme al certificado del Registro Civil (**Prueba Documental N° 102**), el vehículo (Automóvil Hyundai accent, año 2016, placa patente HRTY 47-0), con fecha 25 d agosto de 2017 figura adquirido por Gladys Ester Peñas Peña, luego con fecha 16 de octubre de 2018, figura a nombre de Alejandro Cabello Bustos, y finalmente, con fecha 12 de diciembre de 2018, a nombre de Maritza Vargas Pincheira; por lo que inicialmente el vehículo no fue comprado a nombre de esta última persona, quien por lo demás afirma que ella le compró el vehículo a Cabello por una suma de alrededor de \$6.000.000, según dio cuenta el funcionario Valenzuela Ortiz, quien le tomó declaración a Maritza Vargas.

En cuanto a los depósitos en efectivo, conforme al perito Castro Arraño, en el período que abarcan los hechos solo figuran 21 abonos que totalizan \$5.499.000 y una transferencia de Nubia San Martín por \$600.000; por lo que tampoco es posible sostener que los dineros malversados tuvieron como destino masivo las cuentas bancarias del encartado; lo que se ve ratificado con Comunicación del Banco de Chile, de fecha 12 de abril de 2021 (**Prueba Documental N°168**), en que se da cuenta que Cabello registró cuenta corriente que fue abierta el 9 de noviembre de 2018 y cerrada el 2 de julio de 2019, adjuntándose las cartolas de ese período, de cuyo examen se aprecian depósitos por sumas menores, salvo uno de \$1.500.000, de fecha 26 de febrero de 2019.

2.- Que la encartada **San Martín Pavez** manifestó que respecto a la totalidad de los 129 cheques, se enteró por el informe de Contraloría que eran alrededor de 412 millones de pesos, y que de eso se llevó un tercio, que serían como 120 a 130 millones, dinero que lo destinó en viajes, iban con Ravanal a Punta Arenas a ver el hijo de ambos, 3 a 4 veces al año, arrendaron casa en Punta Arenas para quedarse, una semana o quince días, lo que fue una vez, porque después el hijo tenía casa, no veía lo que gastaba, que hacían



excursiones, a Torres del Paine, Cuevas del Milodón, Puerto Natales; también a las Termas de Malleco y de Manzanar, todos viajes de placer, iban por el día; también hizo muchas compras, se dio los gustos que nunca con sus ingresos se los había podido dar, compraba muchos perfumes, ropa, regalos, vinos, licores, cosas exquisitas; fue clienta de Antena 3D; gastaba y pagaba, botas arriba de 120 mil pesos, zapatos caros, pagó operación de la vista en el Sanatorio Alemán, se compró lentes caros arriba de 800 mil pesos, la operación cree que fue sobre 2 millones; se arregló los dientes y se puso implantes dentales ella y Ravanal, por sobre cuatro o tres millones de pesos; que hizo regalos a Miguel Viveros, su hijo mayor, que es odontólogo, casado con Karina Vera, a quienes le regalaron plata para comprar un auto, un Peugeot 301; y al enterarse de la situación se lo devolvieron, para lo cual lo hacen traspasándolo a nombre de la hermana de Pedro Ravanal, y después el vehículo fue vendido, y ese dinero no lo devolvió a la Municipalidad, porque se ocuparon para el consumo porque tenían muy bajos ingresos en esos momentos, y se ocupó en gastos de la casa; que no le pasó dinero a su hijo para que pagara el crédito hipotecario, que debería haber sido Pedro Ravanal quien le pasó dinero para comprarse un terreno en Tomé, la suma de 15 millones, porque eso lo trataba con su pareja, pero ese dinero que le pasó a su hijo, no era el mismo de la DAS, fue un préstamo que Ravanal pidió en el banco; agregando que ella no adquirió una parcela en Ranquil, nunca tuvo parcela en Ranquil; y Pedro Ravanal compró una parcela en Ranquil pero en el año 2008 o 2009, como un proyecto de vida para los dos; que después se construyó una casa en este período, con sus propias manos, por lo que no se invirtió dinero desde la DAS, porque se compró el terreno el año 2009, y se empezó a edificar; su pareja trabajaba en la empresa Sigdo Koppers, donde ganaba como \$1.800.000 a \$2.000.000, como supervisor, pero era relativo, y no se recuerda hasta qué fechas trabajó allí, 2016 o 2017, que había un negocio de sándwich de la hermana, que él administraba, se llama "RAVA" de Ravanal, pero no tiene noción de cuando se instaló o cuando comenzó su cuñada con el negocio, y Pedro Ravanal empezó a trabajar como el 2016 o 2017 en ese negocio; que Pedro Ravanal pidió un préstamo para entregarle dinero a su hijo, y con los dineros de la DAS pagaron créditos que tenían, consumos del mes.

Por su parte, **Ravanal Mellado** dio cuenta del hecho de haberse gastado con Nubia San Martín una suma estimada de 140 millones de pesos, en pago de supermercado, ropa, consumos básicos, bencina, se hacía chequeos generales una vez al año, exámenes de sangre, se hizo como 6 implantes en una clínica dental por lo cual estima que gastó como \$20.000.000, lo que se pagó dando un cheque suyo del BCI, que pagó entre 4 a 5 millones por la primera parte, y después lo demás lo fue depositando; que compró en Bruno Fritsch un automóvil Peugeot 301 para su hijo, que le costó \$10.000.000, pero que lo pusieron a nombre de Karina porque Miguel estaba ocupado, y que después que se enteró de lo que estaba pasando con la Contraloría, decidieron devolver el auto, y lo



recibieron de vuelta, y se lo ofreció a su hermana, quien se lo compró y lo pusieron a nombre de ella, pero con el tiempo no pudo pagar, comprarlo, por lo que a otra persona como en 7 millones de pesos; agregó su hijo hizo gestiones para obtener un préstamo para comprar un sitio en Tomé, pero en el banco no le prestaban el dinero porque trabajaba con boleta, por lo que él se ofreció a ayudarlo, y pidió un préstamo de \$15.000.000, pero en definitiva el sitio nos e compró, pero su hijo le pidió el dinero para pagar su casa, y con el tiempo empezó a pagar las cuotas del préstamo, que eran de \$330.000, y aparte de ese préstamo, en el período 2017 a 2019 no contrató otros créditos; y en cuanto al negocio que administró, llamado Ravasandwich, era un negocio de su hermana Carmen Ravanal, quien por enfermedad no pudo hacerse cargo del mismo, por lo que él que estaba sin trabajo, se hizo cargo y con el tiempo su hermana empezó a exigir dinero, y después el hermano le dijo que tenían que vender el negocio, y ella le pidió si se podía hacer cargo, y se hicieron papeles por un contador, y en el papel él es el dueño del local, pero no lo es, ni tiene ganancias del negocio, sino que se hizo para que su hermana no perdiera el local, que está a nombre de su hermana y en algún tiempo estuvo a nombre suyo.

Que, en relación a Nubia San Martín Pavez ha de indicarse que conforme a la documentación emanada del Servicio de Impuestos Internos, aquélla no registra sociedades en las que tenga participación (Prueba Documental 18 y 19), y según el mismo Servicio, figura a su nombre el bien raíz ubicado en calle Tegalda 36 A, Pob Coop Collao Ltda., por lo que ante dicho organismo no figura ninguna propiedad en Ranquil; registrándose además, la renta total neta pagada en los años tributarios 2016 a 2019, que fluctúan entre los 10 a 12 millones de pesos anuales (**Prueba Documental N° 123**), lo que se condice con la remuneración que percibía en el desempeño de su cargo en la Municipalidad de Talcahuano, conforme a los antecedentes entregados por testigo Juan Carlos Estay González, subcomisario de la Brídec Metropolitana, a quien se le encargó la diligencia de analizar las cuentas bancarias de los acusados, a fin de determinar el destino de los fondos malversados, en orden a que San Martín Pavez por concepto de remuneraciones de la referida municipalidad, recibió durante el año 2018, la suma de \$12.505.353; y de enero a septiembre de 2019, la suma de \$10.084.215; sin que de la información del S.I.I. aparezca que tenga otras fuentes de ingresos.

No obstante lo anterior, figuran en el período comprendido entre octubre de 2017 y marzo de 2019, 17 abonos en la cuenta corriente del Banco Estado y en la cuenta de ahorro de la misma entidad bancaria de San Martín Pavez, 25 abonos que totalizan \$7.220.000, según la pericia de Castro Arraño; lo cual se condice con lo señalado por el testigo Estay González, en orden a que San Martín Pavez registra depósitos en efectivo recepcionados el año 2018 por un monto de \$5.620.000, y en el año 2019 un total de \$2.340.000, precisando que se trata de depósitos en efectivo de origen desconocido, dado que no se



individualiza quien realizó los depósitos; quien agregó que también registra abonos por transferencias de fondos por internet de origen desconocido, al no indicarse en las cartillas el emisor de la transferencia, por la suma de \$1.470.960 entre febrero a y diciembre de 2018; y por la suma de \$4.544.825, entre enero a septiembre de 2019; información que este último testigo refiere que se encuentra en el CD-R marca Maxell, contenido en **Otros Medios de Prueba N° 47** que le fue exhibido; depósitos de los cuales también se dan cuenta en las cartolas de la cuenta corriente que la acusada mantenía en el Banco Estado, que abarca períodos de junio de 2018 a enero de 2020, contenida en la **Prueba Documental N° 142**.

Que en cuanto a los viajes que la acusada San Martín refiere haber realizado a Punta Arenas junto a su pareja Ravanal Mellado, en los años 2017 y 2018, la fiscalía acompañó variada documentación a efectos de determinar la veracidad de tal información, entre las cuales figuran oficios de Latam, Sky y Jet Smart que informa que Pedro Nolasco Ravanal Mellado no figura en sus registros con viajes o reservas realizadas desde el año 2017 en adelante (**Prueba Documental Nros 86, 87 y 88**), por lo que al menos conforme a dichos informes no se puede corroborar lo afirmado por los acusados, como tampoco con medio de la triangulación del teléfono móvil del acusado Ravanal, dado que el subcomisario Estay González que efectuó el análisis del tráfico de llamadas de aquél, indicó que aparecieron antenas de otras regiones, pero que en muchas ocasiones hay errores de ubicación, pero que en todo caso no recuerda que existiera el uso de antenas desde la ciudad de Punta Arenas, información que refiere está contenida en el CD-R incorporado como **Otros Medios de Prueba N°59**, que le fue exhibido; y por lo demás, tampoco constan registran salidas del país en los últimos cinco años, conforme al Oficio N° 20, de fecha 6 de agosto de 2019 del Departamento de Migración y Policía Internacional de Concepción (**Prueba Documental N° 63**); sin que los dos "Travel Voucher" (**Otros Medios de Prueba N° 3**) acompañados por la defensa de los referidos acusados puedan establecer por sí mismos la efectividad del viaje en cuestión, dado que si bien se puede apreciar que aparecen emitidos el 29 de diciembre de 2018 a nombre de cada uno de los dos acusados, debe hacerse la precisión que se trata en el fondo de compras de pasajes abiertos que deben ser canjeados en el plazo de 6 meses, como expresamente se indica en tales documentos; todo ello, sin perjuicio que la circunstancia que se haya o no realizado el o los viajes a Punta Arenas por los acusados, no altera en nada todas y cada una de las conclusiones a las que han arribado estos sentenciadores, y que en todo caso, aún en el evento que se hubieren materializado, ello tampoco implicaría un gasto considerable en relación a las sumas involucradas en la malversación de caudales públicos de que resultan responsables los señalados acusados.

En cuanto a las imágenes y archivos exhibidos en la audiencia, contenidas



en un disco Toshiba (**Otros Medios de Prueba N° 55**), que serían extraídas desde un dispositivo celular perteneciente a Nubia San Martín Pavez, y en las que se muestran algunas conversaciones e imágenes, ninguna conclusión pueden extraer estos sentenciadores, dado que no fueron exhibidas para su reconocimiento a ningún testigo o perito para que explicara su contenido.

En cuanto a los gastos dentales, se estableció que los acusados San Martín y Ravanal, conforme a los dichos de la testigo Llubixza Lizana Rivera, de la Bridec Metropolitana, ella analizó dos teléfonos de propiedad de Nubia San Martín, y del Samsung SMG 965G se extrajeron algunos antecedentes, que se contienen en disco duro marca Toshiba que corresponde a **Otros Medios de Prueba N° 55** que se le exhibió, entre los que estaban dos boletas electrónicas terminadas en 62 y 63, correspondientes a dos presupuestos dentales, en la sociedad prestadora de servicios odontológicos Dufey Limitada, por las sumas de \$4.000.000 y \$3.400.000 aproximadamente; a cuyo objeto se le exhibieron dos impresiones contendidas en **Otros Medios de Prueba N° 102**, en torno a las cuales manifestó que corresponden a las boletas electrónicas Nros. 41463 y 41462, de 31 de julio de 2018, por las sumas de \$4.000.000 y \$3.431.240, correspondientes a la sociedad odontológica referida; antecedentes que permiten establecer la efectividad de los tratamientos dentales referidos por los acusados, mas no por los montos por ellos referidos, esto es, por más de 20 millones de pesos.

Que de igual manera quedó acreditado que el vehículo Peugeot 301, patente LGVL-22, referido por el acusado Ravanal Mellado, fue adquirido por Karina Vera Seguel, el 24 de abril de 2019 en la suma de \$10.190.864 en Bruno Fritsch S.A., el cual posteriormente, con fecha 30 de mayo de 2019, fue transferido a Carmen Ravanal Mellado, pagado con cheques que se indican, conforme a la documentación acompañada por la fiscalía, emanada de la empresa vendedora y del Registro Civil e Identificación (**Prueba Documental Nros. 184, 185, 186, 187, y 188**), a cuyo respecto igualmente se cuenta con fotocopia de un cheque por la suma de \$4.000.000 de la cuenta corriente de Nubia San Martín, del Banco Estado, de fecha 16 de abril de 2019, que corresponde a uno de los documentos que se individualizan por las empresa automotor como uno de los documentos con los cuales se pagó el vehículo en cuestión, que se contiene en **Prueba Documental N° 169**; y con mérito de la fotocopia del cheque por \$4.000.000, de fecha 16 de abril de 2019, girado a la referida automotora, de la cuenta corriente del acusado Ravanal Mellado, del Banco BCI, el cual fue presentado a cobro en el referido banco, ello según el Oficio del citado banco, que fue acompaña como **Prueba Documental N° 162**; antecedentes que dan cuenta que los acusados Ravanal y San Martín, al menos financiaron la adquisición del señalado vehículo hasta por los montos indicados.

Además, conforme a certificados del Registro Civil e identificación, San Martín Pavez registra inscrito a su nombre un vehículo tipo station wagon, marca Daihatsu, placa patente única BRSG 85, año 2009, adquirido el 20 de



mayo de 2011 (**Prueba Documental N° 91 y 92**); por lo que el financiamiento de dicha compra, ninguna relación puede tener con los dineros substraídos a la DAS.

Que, en relación a Ravanal Mellado, conforme a la documentación emanada del Servicio de Impuestos Internos, se registra Restaurant Ravasandwich Pedro Nolasco Ravanal Mellado Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, con fecha inicio 1 de marzo de 2019, en la que dicho acusado figura como representante legal y socio, empresa con domicilio en Manuel Rodríguez 1204 Concepción (**Prueba Documental 22, 23, 24, 25**); y además hay información del acusado como persona natural en relación a una micro empresa familiar y empresa de menor tamaño Pro-Pyme, cuya actividad es de un minimercado, bazar y paquetería, frutas y verduras, que figura con fecha de constitución el 4 de enero de 2018 (**Prueba Documental N° 15, 16 y 17**); corroborándose así la versión del referido acusado en relación a su intervención en el señalado negocio.

En cuanto a los ingresos del acusado Ravanal, se cuenta con un informe del Servicio de Impuestos Internos que da cuenta que aquél no registra inscritos bienes raíces, y registra una renta total neta anual que fluctúa entre los \$22.122.014, \$9.325.215, \$2.614.616, pagada en los años tributarios 2016 a 2019 (**Prueba Documental N° 128**); lo que da cuenta que no tiene ingresos estables y fijos en el tiempo.

Que conforme a los respectivos certificados de inscripción y anotaciones vigentes en el RVM del Registro Civil e Identificación el acusado Ravanal Mellado, figura como propietario de una camioneta Ford Ranger, año 1999, placa patente ST 6388-6, adquirida el 3 de junio de 2005; de una moto, marca Honda, año 2007, adquirida el 13 de agosto de 2007; y un automóvil marca Ford, modelo Fiesta, año 2010, placa patente CBKS 35-8, adquirido el 13 de agosto de 2016; esto es, vehículos inscritos a su nombre con anterioridad al período comprendido en las acusaciones; todos adquiridos con anterioridad al período materia de los hechos de la causa; en tanto que dentro de dicho período, figura registrada a su nombre una camioneta, marca Mitsubishi, modelo L 200, año 2016, que adquirió el 15 de enero de 2019, y que a partir del 8 de septiembre de 2021 comenzó a figurar a nombre de otros titulares, conforme a la documentación respectiva del Registro Civil e Identificación (**Prueba Documental N° 93, 99 y 100**).

Que conforme al testigo Estay González que revisó y analizó las cuentas bancarias de los acusados, en relación a Ravanal Mellado, manifestó que según las cartolas del Banco BCI, tenía depósitos en efectivos recepcionados de origen desconocido, en el período enero a diciembre de 2017, por un total de \$21.373.170, cuyos depósitos más altos eran del 12 de junio de 2017, por \$1.300.000, del 28 de septiembre, 17 de noviembre y 21 de diciembre de 2017, todos por \$1.000.000; y en el banco Falabella, entre los meses de febrero de



2017 a enero de 2018, habían depósitos por un total de \$3.555.000, en que el depósito más alto era de \$500.000, de 5 de julio de 2017; precisando que entre los meses de enero a mayo de 2017, los depósitos en documentos en el Banco BCI sumaban \$3.089.170; como también recibió abonos en Banco Estado, en período agosto a diciembre de 2018, la suma de \$1.241.517, por pagos o transferencias de Transbank; y en el año 2019, enero a agosto, se recepcionaron \$1.777.215; información contenida en CD-R marca Maxell (**Otros Medios de Prueba 47**) que le fue exhibida al referido testigo, quien lo reconoció como el CD en el cual se contienen las Tablas Excel con la información referida; sumas de dinero que no se condicen con lo manifestado por el propio acusado, en orden que del cobro de los cheques, él solo se quedaba con las monedas; por cuanto según la documental ya referida, el negocio Ravasandwich tiene fecha de inicio de actividades en marzo de 2019, esto es, en la última parte de la comisión de los ilícitos que afectaron a la DAS; información que también se contiene en diversos oficios de las entidades bancarias acompañadas por la fiscalía, emitidas por Banco Falabella, referida a una cuenta corriente y a una cuenta de ahorro del encartado Ravanal Mellado, en que se consigna diversos depósitos en dinero efectivo durante el año 2018, en que las sumas más altas son de \$7.000.000, \$2.000.000, \$1.000.000 (**Prueba Documental N° 28**); como también información del mismo banco, en que remite las cartolas de las referidas cuentas, correspondientes a periodo 2016 a 2017 (**Prueba Documental 181**). Del mismo modo, se recibió la información bancaria del acusado en cuestión relacionada con el banco BCI, que da cuenta de los distintos productos que mantiene en dicha entidad, particularmente cuenta corriente y de ahorro, remitiendo cartolas de dichas cuentas, en las que constan una serie de depósitos en efectivos, entre los que se destacan varios sobre \$1.000.000, e incluso uno de \$3.000.000 y otros de \$5.000.000, un abono de un crédito de \$15.000.000, y un cheque depositado en Punta Arenas, por \$3.855.600, el 11 de junio de 2018; habiéndose igualmente acompañado carta respuesta del Banco BCI, de fecha 23 de julio de 2021 (**Prueba Documental N° 171**), por la cual el banco remite las cartolas históricas desde el año 2016 a dicha fecha de la cuenta corriente 77048253 que Ravanal Mellado mantiene en dicha institución, en la cual se consignan los distintos movimientos realizados en dicha cuenta, en que durante el período de ocurrencia de los hechos imputados se registran depósitos por montos menores, destacando como los más altos, algunos por \$800.000, \$600.000, \$1.000.000, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017.

Que sin perjuicio que los hechos materia de las acusaciones comprenden el periodo que va de octubre de 2017 a marzo de 2019, ha de señalarse que según oficio del Banco de Crédito e Inversiones, figuran depósitos en la cuenta 77048253 que el acusado Ravanal mantiene en ese banco, mediante cheques de las cuentas fiscales de la Municipalidad de Talcahuano, terminadas en 161 y 2004, por \$3.855.600, de fecha 7 de junio de 2018, depositado el 11 de junio de 2018; \$1.274.490, de fecha 27 de octubre de 2016, depositado con esa misma



fecha; y \$1.660.650, de fecha 21 de julio de 2016, depositado el 22 de julio de 2016 **(Prueba Documental N° 162)**; dando cuenta estos últimos dos cheques de la circunstancia que al menos desde el mes de julio de 2016 el encartado en cuestión estaba recibiendo cheques provenientes de las cuentas de la DAS, y no desde octubre de 2017 como lo planteó en su declaración, lo cual hace menos creíble su versión que a octubre de 2017 pensara que solo se trataba de cobrar cheques que le pedía Nubia San Martín por tema de trabajo de la DAS.

Con respecto a Nubia San Martín, igualmente se acompañó comunicación del 15 de octubre de 2019, del Banco del Estado de Chile, **(Prueba Documental N° 81)** por el cual se remite información acerca de los productos que la referida acusada mantiene en dicha entidad bancaria, informando que mantiene cuenta corriente, cuenta vista y cuentas de ahorro que singulariza, y datos acerca de la fecha de apertura de las mismas; adjuntándose el detalle de los movimientos de las mismas, respecto de cuyo contenido estos sentenciadores no pueden efectuar valoración alguna, dado que ningún testigo o perito se refirió a la extensa información allí contenida, de la cual tampoco los intervinientes se hicieron cargo; misma situación que se produce en relación al acusado Ravanal Mellado, a cuyo respecto se incorporó comunicación del 15 de octubre de 2019, de la misma entidad bancaria **(Prueba Documental N° 83 y 140)** por el cual se remite información acerca de los productos que el referido acusado mantiene en dicho banco, informando que mantiene cuenta Rut, dos cuentas de ahorro que singulariza, y datos acerca de la fecha de apertura de las mismas..

3.- Que el encartado **Paredes Montoya**, respecto al destino de los recursos, señaló que siempre fue el pago de deudas; bancos e instituciones financieras, principalmente, y que en muchas de estas instituciones tuvo que repactar y le significaba altos montos, y tenía gastos importantes, dos hijos estudiando en la Universidad, una hija en la secundaria junto con su nieta y la ludopatía que desarrolló de alguna manera; que dicha situación siguió avanzando, y él seguía cobrando los documentos y era preocupante, pues era una bola de nieve que seguía creciendo y no tenía claro el destino final; que el dinero no lo utilizó en la compra de ningún bien, no compró auto, ni departamento, simplemente, iba aumentando la bola de nieve deuda tras deuda.

Que si bien el acusado registra una salida al país entre el 17 y el 25 de mayo de 2019, específicamente a México, conforme al Oficio N° 20, de fecha 6 de agosto de 2019 del Departamento de Migración y Policía Internacional de Concepción **(Prueba Documental N° 63)**; viaje en el cual podrían haberse financiado con parte de los dineros malversados, ello queda descartado al tenor de lo declarado por el funcionario Valenzuela Ortiz, quien afirmó haberle tomado declaración a la cónyuge del encartado, doña Ingrid Saldaña León, quien le señaló que ella le había financiado el viaje a Cuba, donde fueron juntos, como



regalo de cumpleaños; quien también le indicó al funcionario policial que él nunca ha comparado nada, que siempre ha estado endeudado, y que la casa en la cual viven lo fue con un crédito hipotecario que ella obtuvo, y que también ella se compró su vehículo, lo que se condice con la documentación encontrada en el domicilio de Paredes Montoya el día de su detención, entre los que figuran precisamente, como lo es una factura electrónica DIFOR Chile N° 144068, emitida el 8 de febrero de 2017, a Ingrid del Pilar Saldaña León, por un station wagon nuevo marca Ford modelo Eco Sport, por monto de \$8.815.126, más IVA, \$10.490.000, solicitud de primera inscripción de 9 de febrero de 2017 del referido vehículo; como también liquidaciones de remuneraciones a nombre de Ingrid Saldaña León, como docente, de los meses abril y febrero de 2019, por sumas de \$825.235 y \$845.552, respectivamente, que dan cuenta que disponía de ingresos propios; documentación que se contiene en **Otros Medios de Prueba N° 23**.

En cuanto a vehículos motorizados, el acusado registra inscrito a su nombre un automóvil Daewoo, modelo Lanos, año 1999, que fue adquirido el 28 de septiembre de 1998 (**Prueba Documental N° 97 y 98**), por lo que fue adquirido en un período anterior al que motivan los hechos de esta causa.

Que conforme al testigo Estay González que revisó y analizó las cuentas bancarias de los acusados, en relación a Paredes Montoya, buscó los depósitos en efectivo recibidos por Paredes en años 2017, 2018 y 2019; que de febrero a diciembre de 2017, estableció un total de \$2.791.000, por depósitos de origen desconocido; el 2018 el banco entregó cartolas de marzo a diciembre y recepcionó depósitos por \$1.250.000; y el año 2019, con cartolas de mayo y junio, obtiene abonos en efectivo por \$1.060.000; también señaló que Paredes por abono de remuneraciones recibió el 2017 por los meses de febrero a diciembre, la suma de \$8.772.979; el 2018 entre enero y diciembre, recibió \$11.039.533; y el año 2019, entre enero 2019 y enero de 2020, recibió \$10.617.020; y también señala abonos de remuneraciones recibidas de la Universidad Tecnológica donde prestaba servicios, los que el año 2017, entre enero y diciembre fueron \$ 6.352.159; el 2018, entre marzo a noviembre, recibió \$5.301828; y el 2019, entre mayo y agosto, recibió \$2.725.064; agregando que recibió transferencias de fondos, en el año 2017, entre enero y septiembre, la suma de \$410.719; el 2018, entre enero y octubre, la suma de \$509.839; y el año 2019, entre febrero y mayo, la suma de \$622.781.

Según el perito Castro Arraño, el acusado Paredes Montoya registra en su cuenta corriente del banco Chile, 13 abonos por \$2.660.000 en el período octubre de 2017 a marzo de 2019.

El detalle de los movimientos en su cuenta corriente del Banco Chile, se contiene en la información remitida por oficio del Banco Chile, de 22 de enero de 2020 (**Prueba Documental 106**) por el cual se remiten copias de las cartolas de la cuenta corriente de depósito N° 25007402, de los años 2016 a



2017, como asimismo cartolas de transferencias electrónicas recibidas y enviadas, del período año 2016 a agosto de 2019, y copias de los depósitos en efectivo efectuados en la referida cuenta desde el año 2016 a agosto de 2019, que se condice con la información proporcionada por Castro Arraño; como asimismo el ente persecutor acompañó una serie de otros oficios por medio de los cuales las entidades bancarias remitieron la información de sus cuentas corrientes y cartolas de los movimientos registrados, como la Comunicación de 27 de junio de 2019 del Banco de Chile (**Prueba Documental N° 66**), referida a la misma cuenta corriente, con el detalle de los depósitos efectuados.

Del mismo modo se allegó información relativa a productos contratados por el acusado en Coopeuch, contenida en Comunicación de 8 de agosto de 2019 (**Prueba Documental N° 67 y 117**), que da cuenta del otorgamiento de un crédito de consumo que se le cursó por \$10.528.757 con fecha 9 de mayo de 2019, con vencimiento el 15 de enero de 2024, y la existencia de una cuenta Vista, con un saldo disponible de \$1.000; y otro oficio de la misma institución, de fechas 29 de enero de 2020 (**Prueba Documental N° 116**), que reitera información señalada; como también se acompañó Comunicación de 9 de julio de 2019, de Cooperativa Ahorrocoop, que informa que Paredes Montoya es socio de la misma, y que mantiene cuenta de ahorro, con un saldo de \$115.264 al 25 de enero de 2019 (**Prueba Documental N° 65**).

A su respecto, igualmente se acompañó comunicación del 15 de octubre de 2019, del Banco del Estado de Chile, (**Prueba Documental N° 82 y 141**) por el cual se remite información acerca de los productos que Paredes Montoya mantiene en dicha entidad bancaria, informando que mantiene cuenta vista y cuenta de ahorro y Tarjeta de Crédito que singulariza.

Finalmente, en cuanto a la información tributaria a su respecto, conforme a los registros del Servicio de Impuestos Internos, Paredes Montoya no registra información en cuanto a su pertenencia a alguna sociedad (**Prueba Documental N° 20 y 21**).

Que si bien a la entrada y registro de su domicilio, se encontró documentación relativa a un detalle de las condiciones contractuales de un crédito otorgado por Caja Los Andes, cuyo beneficiario es Pedro Paredes Montoya; de lo cual pudiese desprenderse la existencia de obligaciones por tal concepto, lo cierto es que como lo señala el comisario de la PDI **Luis Didier Cárdenas Loyola**, no se observa firma ni timbre de ejecución del documento, ni fecha, por lo que es probable que ese préstamo no se hubiere concretado; dentro de cuya documentación, también se ubicó liquidación de remuneraciones, emitida por Municipalidad de Talcahuano, del mes de febrero de 2019 a nombre de Pedro Paredes Montoya, con timbre y un visto bueno, en que se hace un detalle de \$652.564, que sería el monto líquido, y otras liquidaciones de los meses de marzo y abril, conforme lo detalló el citado funcionario policial,



documentación que se contiene en **Otros Medios de Prueba N° 23.**

4.- Que así las cosas, de la correlación de los antecedentes y medios probatorios referidos precedentemente, evidentemente hay muchos aspectos proporcionados por los acusados que tienen corroboración, más también hay otros que no lo tienen, y en definitiva, analizando sus antecedentes bancarios, registros de vehículos motorizados, de bienes raíces, y tributarios, tal como lo señalaron los funcionarios de la Policía de Investigaciones, no es posible establecer inversiones por parte de los acusados en bienes que den cuenta del destino que dieron a los fondos malversados, por cuanto la información recopilada durante la investigación, no dio mayores luces de ello, más allá de las sumas que se logró establecer que fueron depositadas en las cuentas corrientes de los acusados, dentro de los cuales el que más depósitos registrados era el acusado Ravanal Mellado; antecedentes estos últimos que si bien es cierto no obstan a la configuración de la atenuante del artículo 11 N° 7 del Código Penal que ha sido acogida, le restan intensidad a la misma, al no haberse entregado por los acusados antecedentes concretos sobre el destino de los bienes malversados, que habrían permitido su recuperación, y con ello, una mayor reparación del mal causado.

QUINCUAGÉSIMO TERCERO: Que en los delitos de malversación de caudales públicos, perjudica a los acusados Cabello Bustos, San Martín Pavez, Paredes Montoya y Ravanal Mellado la circunstancia agravante del artículo 260 ter del Código Penal, por cuanto se acreditó que los referidos encartados actuaron formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer los delitos de malversación de caudales público, sin que dicha organización constituya una asociación ilícita de que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo; agravante que afecta a los acusados respecto de los hechos cometidos con posterioridad al 20 de noviembre de 2018, esto es, respecto de los consignados en los numerales 29 a 35 del Hecho 2, y de los numerales 72 a 86 del Hecho 4 de las acusaciones fiscal y particular.

En efecto, la prueba rendida permitió establecer que en los respectivos delitos los acusados actuaron organizados bajo una cierta estructura, en la cual había una distribución de funciones tendiente a materializar el objetivo común que era la substracción de los fondos públicos pertenecientes a la DAS de Talcahuano, en la cual San Martín Pavez era quien confeccionaba y firmaba los cheques a nombre de los demás acusados, e incluso a nombre propio, aprovechándose de la existencia de cheques firmados en blanco por el funcionario Manuel Rojas, quien tenía la segunda firma autorizada; y los acusados Paredes Montoya y Ravanal Mellado, eran quienes cobraban los documentos y posteriormente entregaban el dinero en efectivo obtenido por dicha acción para su reparto entre los encartados; en tanto que Cabello Bustos, además de haber cobrado un cheque a su nombre, en su calidad de jefe del departamento de finanzas, y por lo tanto, la persona encargada del controlar el presupuesto, y supervisar y encargarse de las transferencias entre cuentas



corrientes, y velar por el correcto funcionamiento de las cuentas de la Dirección de Salud, y teniendo a su cargo los fondos municipales de dicha Dirección, permitía el giro de tales cheques, de cuyo producto igualmente se beneficiaba; por lo que se encontraba claramente establecida una división de funciones, que tenía por objeto materializar la substracción de los fondos públicos de la DAS de los cuales se encontraban a cargo Cabello Bustos y San Martín Pavez, quienes por lo mismo, eran los que principalmente llevaban adelante tal maquinación, en conjunto con los otros dos acusados.

Que no obstante lo referido precedentemente, en la referida agrupación no es posible establecer una clara jerarquía o nivel de mando, que pudiese constituir a su respecto una asociación ilícita, por cuanto no obstante que Cabello Bustos era el jefe del departamento de finanzas, el mérito de la prueba no permite dar por acreditado que él desempeñare la calidad de jefe o mando superior de la agrupación, ni tampoco la acusada San Martín Pavez, a pesar de su calidad de firma autorizada y de tener bajo su custodia los talonarios de cheques; sin perjuicio que por la naturaleza de sus cargos y funciones al interior del departamento de finanzas, la intervención de ellos naturalmente era relevante; más aun considerando lo señalado por la propia encartada San Martín Pavez, en orden a que la decisión de girar algún cheque la tomaban los tres – refiriéndose a ella, Cabello y Paredes-, porque los tres tenían problemas económicos, que cualquiera podía tomar la decisión porque estaban siempre de acuerdo los tres, precisando que en relación al nombre a quien se giraba el cheque, se hacía a nombre del que tuviera más tiempo para ir a cobrar el documento; lo que revela la falta de una jerarquía al interior de la agrupación en cuestión, más aún si uno de los acusados, ni siquiera trabajaba en la entidad edilicia; dinero que posteriormente era repartido entre todos los acusados; sin que se haya establecido fehacientemente alguna repartición especial, más allá de haberse indicado por los acusados que la repartición era por partes iguales.

Que a efectos de diferenciar cuándo una agrupación u organización de dos o más personas configura la agravante en cuestión y cuando una organización constituye una asociación ilícita de que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo, es posible hacer aplicación de lo sostenido por la doctrina en relación a la misma cuestión que se plantea entre la agravante del artículo 19 letra a) de la Ley N° 20.000 y el delito de asociación ilícita establecido en el artículo 16 de la misma ley; a cuyo respecto se sostiene que para estar frente a la agravante debe carecer de jerarquización y organización propios de la asociación ilícita, como jefes y reglas propias (“Sergio Politoff L., Jean Pierre Matus A., María Cecilia Ramírez G., “Lecciones de Derecho Penal Chileno” Parte Especial, Segunda Edición actualizada, página 614); argumento que cobra fuerza si se considera que el delito de asociación ilícita de que tratan los artículos 292 y siguientes del Código Penal, al penalizar las conductas, precisamente tiene en consideración si se tuvo parte o no en el ejercicio del mando de la organización.

Así, en definitiva, fue posible establecer, más allá de toda duda razonable,



que los acusados formaron una agrupación destinada a cometer los delitos de malversación de caudales público, esto es, se concertaron para sustraer fondos de la Dirección de Administración de Salud de la Municipalidad de Talcahuano, aprovechándose el acusado Cabello Bustos y San Martín Pavez de la circunstancia de tener a su cargo dichos fondos públicos, y la acusada San Martín Pavez, además, de las funciones que desempeñaba como encargada de presupuesto de dicha Dirección, y particularmente del hecho de ser una de las firmas autorizadas para girar cheques; todo ello junto a los acusados Paredes Montoya y Ravanal Mellado, cuya función era la de cobrar los cheques que eran girados a su nombre, agrupación que tuvo una cierta permanencia en el tiempo, que por lo mismo va más allá de la simple coparticipación argumentada por la defensa; sin que exista una clara jerarquía, jefes, centros o mandos de poder al interior de dicha agrupación u organización.

Por lo anteriormente expuesto, se desestiman las alegaciones de las defensas, en orden a que no se configura la referida agravante, y en particular por el hecho que no se encontraría descrita fácticamente en los hechos de la acusación, como lo sostiene la defensa de los acusados Cabello Bustos, San Martín Pavez y Ravanal Mellado, dado que la acusación es un todo, y precisamente los aspectos que el señor defensor echa de menos, se encuentran comprendidos en la primera parte de las acusaciones fiscal y particular, que sirven de preámbulo y de contexto en el cual se cometen de manera específica los hechos que luego se detallan, como Hechos 1 a 7, y por lo mismo se encuentran descritos los presupuestos fácticos a partir de los cuales es posible configurar y dar por establecida la agravante del artículo 260 ter del Código Penal, de la manera que se ha expuesto.

De igual manera se rechazan las alegaciones en torno a que no se configura la agravante por el hecho que en definitiva el reparto de los dineros producto del cobro de cheques hubiere sido en partes iguales, y que ello no se condice con la existencia de jefes y jerarquías, por cuanto desde ya debe indicarse que si bien los acusados dieron cuenta que los dineros se habrían repartido en partes iguales, ello no necesariamente ha quedado debidamente acreditado, habida consideración que entre los mismos acusados también hubo cambios de versiones en cuanto a la forma que se repartían el dinero; y por lo demás, aun cuando la distribución hubiere sido en partes iguales, ello no tiene mayor influencia en los elementos que configuran la agravante en cuestión, y porque tampoco se estableció la existencia de jerarquías al interior de la agrupación, todo ello conforme a lo ya razonado.

QUINCUGÉSIMO CUARTO: Que cada uno de delitos de falsificación de instrumento público de que han resultado responsables los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez se encuentran sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo; y concurriendo en la especie dos circunstancias atenuantes y ninguna agravante a su respecto, el tribunal en uso de la facultad contenida en el artículo 68 del



Código Penal, está facultado para imponer la pena inferior en uno, dos o tres grados al mínimo señalado por la ley, y en el caso concreto se estima que atendida la entidad de las atenuantes, la rebaja ha de ser de un grado, esto es, la pena de presidio menor en su grado medio, por cada uno de los referidos delitos; ello conforme a la regla de acumulación material de las penas del artículo 74 del Código Penal.

Mas, conforme a lo dispuesto en el artículo 351 del Código Procesal Penal, habiendo los acusados resultado responsables de treinta y tres delitos de la misma especie, es posible imponerles la pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en uno o dos grados; y en el caso concreto, aumentada que sea dicha pena en un grado, quedaría en un principio una pena en el rango de presidio mayor en sus grados mínimo a medio; y concurriendo dos circunstancias atenuantes de responsabilidad penal y ninguna agravante, conforme al artículo 68 del Código Penal, el tribunal está facultado para imponer la pena inferior en uno, dos o tres grados al mínimo señalado por la ley, y, que en la especie, atendida la entidad de las atenuantes, el tribunal estima que corresponde rebajar la pena en un grado, quedando en presidio menor en su grado máximo, como pena única por todos los delitos de falsificación de instrumentos públicos de que resultan responsables.

Que del análisis precedente, es a todas luces más favorable para los acusados ser sancionados conforme al sistema de acumulación jurídica del artículo 351 del Código Procesal Penal, que el de acumulación material del artículo 74 de Código Penal, por lo que en definitiva se les aplicará una pena única de presidio menor en su grado máximo por la reiteración de delitos, en el quantum que se dirá en la parte resolutive.

QUINCUAGÉSIMO QUINTO: Que en relación a los delitos de malversación de caudales públicos que se han dado por acreditados, ha de señalarse que lo son los previstos en el artículo 233 N° 2 y 3 del Código Penal, sancionados conforme a la normativa vigentes antes de la modificación introducida por la Ley N° 21.121, de 20 de noviembre de 2018, y delitos de malversación de caudales públicos previstos en el artículo 233 N° 3 del Código Penal, cometidos a contar de dicha modificación.

1.- Que así las cosas, antes de la modificación referida, el delito de malversación de caudales públicos se encontraba sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, si excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta unidades tributarias mensuales, para el caso del artículo 233 N°2 del Código Penal; y con la de presidio mayor en sus grados mínimos a medio y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales, en el caso del artículo 233 N°3 del citado código punitivo; y en todos los casos, con la pena de inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo a inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.



Que a contar del 20 de noviembre de 2018, el delito de malversación de caudales públicos se encuentra sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, si excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta unidades tributarias mensuales, para el caso del artículo 233 N°2 del Código Penal; y con la de presidio mayor en sus grados mínimos a medio, si excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales, en el caso del artículo 233 N°3 del citado código punitivo; y en todos los casos, además, con las penas de multa del doble de lo sustraído y de inhabilitación absoluta temporal en su grado medio a inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos. .

2.- Que conforme a lo anteriormente referido y los hechos que se han dado por acreditados, los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez, han resultado responsables de diez delitos de malversación de caudales públicos previstos en el artículo 233 N° 2 del Código Penal; y noventa y siete delitos de malversación de caudales públicos previstos en el artículo 233 N° 3 del referido código, cometidos antes de la modificación legal señalada; y de veintidós delitos de malversación de caudales públicos previstos en el artículo 233 N° 3 del código punitivo, cometidos a contar de la modificación en cuestión.

Por su parte, Paredes Montoya, ha resultado responsables de tres delitos de malversación de caudales públicos previstos en el artículo 233 N° 2 del Código Penal; y veinticinco delitos de malversación de caudales públicos previstos en el artículo 233 N° 3 del citado código, cometidos antes de la modificación legal señalada; y siete delitos de malversación de caudales públicos previstos en el artículo 233 N° 3 del referido texto legal, cometidos a contar de la modificación en cuestión.

En tanto que Ravanal Mellado, ha resultado responsables de cinco delitos de malversación de caudales públicos previstos en el artículo 233 N° 2 del Código Penal; y sesenta y seis delitos de malversación de caudales públicos previstos en el artículo 233 N° 3 del citado código, cometidos antes de la modificación legal señalada; y de quince delitos de malversación de caudales públicos previstos en el artículo 233 N° 3 de dicho código, cometidos a contar de la modificación en cuestión.

3.- Que dada la reiteración de delitos y la cantidad de los mismos de que resulta responsable cada uno de los acusados, sin lugar a dudas que les resulta más beneficioso la aplicación del régimen de acumulación jurídica de las penas, contemplado en el artículo 351 del Código Procesal Penal, por sobre la acumulación material prevista en el artículo 74 del Código Penal; y si bien es cierto que se trata únicamente de delitos de malversación de caudales públicos, dado que las penas a imponer dependen del monto de lo sustraído y considerando, además, que algunos delitos se encuentran afectos a un régimen sancionatorio más severo, habida consideración de la modificación legislativa señalada, en estricto rigor, dada la naturaleza de las distintas infracciones, no pueden estimarse como un solo delito, por lo que corresponde hacer aplicación



del inciso segundo del citado artículo 351, y consiguientemente, se deberá aplicar la pena señalada a aquella infracción que considerada aisladamente, con las circunstancias del caso, tuviere asignada una pena mayor, aumentándola en uno o dos grados, según fuere el número de delitos; razonamiento en el cual habrá de tenerse presente que la pena que en definitiva se aplique no vulnere el principio de que ningún delito se castigará con otra pena que la que le señala una ley promulgada con anterioridad a su perpetración.

4.- Que así las cosas, respecto de los delitos del artículo 233 N° 2 del Código Penal, cometidos antes de la modificación de la Ley 21.121, existiendo tres circunstancias atenuantes y ninguna agravante de responsabilidad penal, el tribunal está facultado para imponer la pena inferior en uno o dos grados al mínimo señalado por la ley, y en el caso concreto se estima que atendida la entidad de las atenuantes referidas en motivos anteriores, la rebaja ha de ser de un grado, esto es, la pena de presidio menor en su grado medio; y respecto del artículo 233 N° 3, considerando el mismo juego de las referidas circunstancias, el tribunal puede imponer la pena inferior en uno, dos o tres grados al mínimo señalado por la ley, y en el caso concreto se estima que atendida la entidad de las atenuantes, la rebaja ha de ser de un grado, esto es, la pena de presidio menor en su grado máximo; todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 67 y 68 del Código Penal.

Que así las cosas, de la totalidad de las diversas infracciones de que resultan responsables los acusados, cometidas antes de la modificación introducida por la Ley 21.121, la infracción al artículo 233 N° 3 del Código Penal considerada aisladamente, con las circunstancias del caso, resulta ser la que tiene asignada una pena mayor, esto es, una pena de presidio menor en su grado máximo, por lo que conforme a lo dispuesto en la normativa de acumulación jurídica, corresponde aplicar dicha pena aumentada en uno o dos grados, y estimando estos sentenciadores que el aumento ha de ser en un grado, la pena única que correspondería aplicar a los acusados por todos los delitos de malversación de caudales públicos cometidos antes de la modificación en cuestión sería la de presidio mayor en su grado mínimo; todo ello conforme lo autoriza el inciso segundo del artículo 351 del Código Procesal Penal.

5.- Mas, ha de considerarse que también los acusados cometieron delitos de malversación de caudales públicos, previstos y sancionados en el artículo 233 N° 3 del Código Penal, bajo la vigencia del nuevo régimen sancionatorio establecido por la Ley 21.121, y conforme a ello existiendo tres circunstancias atenuantes y una agravante de responsabilidad penal, corresponde compensar la agravante del artículo 260 ter con la atenuante de irreprochable conducta anterior, por estimarse ambas de la misma entidad; de manera que subsistiendo dos circunstancias atenuantes y ninguna agravante, el tribunal está facultado para imponer la pena inferior en uno, dos o tres grados al mínimo señalado por la ley, y en el caso concreto se estima que atendida la entidad de las atenuantes, la rebaja ha de ser de un grado, esto es, quedando una pena a imponer de



presidio menor en su grado máximo por cada uno de los delitos cometidos; todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 68 y 74 del Código Penal.

Que en atención a que los acusados cometieron varios delitos de la misma especie, a saber, malversación de caudales públicos bajo la nueva normativa sancionatoria (Cabello Bustos y San Martín Pavez, 22 delitos; Ravanal Mellado, 15 delitos; y Paredes Montoya, 7 delitos), naturalmente que a cada uno de ellos les es más favorable la aplicación del inciso primero del artículo 351 del Código Procesal Penal, conforme al cual habrá de imponerse la pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en uno o dos grados; esto es, en el caso en cuestión, conforme a la determinación concreta de la pena efectuada en el párrafo anterior, correspondería además la aplicación de una pena única de presidio mayor en su grado mínimo por todos los delitos cometidos bajo la vigencia de la Ley 21.121.

6.- Luego, si se considera sancionar a los acusados conforme a una acumulación jurídica de las diversas infracciones cometidas, ajustándose las sanciones al período en que fueron cometidos los distintos delitos, según el detalle de los dos párrafos anteriores, en aras de no violentar la normativa del artículo 18 del Código Penal, arrojaría como resultado que deberían ser sancionados, por una parte a la pena única de presidio mayor en su grado mínimo por todos los delitos de malversación de caudales públicos cometidos antes de la modificación en cuestión; y otra pena única de presidio mayor en su grado mínimo por los delitos cometidos bajo la vigencia de la Ley 21.121; lo que a todas luces constituye una determinación y aplicación de penas más desfavorable para los encartados.

7.- Por todo lo anteriormente expuesto, atendida las diversas infracciones de que resultan responsables los acusados, que por su naturaleza y época de comisión no pueden estimarse como un solo delito, el tribunal les aplicará la pena señalada en el artículo 233 N° 3 del Código Penal con la modificación de la Ley 21.121, habida consideración que aisladamente, con las circunstancias del caso, resulta ser la que tiene asignada una pena mayor, esto es, una pena de presidio menor en su grado máximo, pena que se aplicará a cada uno de los acusados aumentada en un grado, esto es, se les sancionará con la pena única de presidio mayor en su grado mínimo, en el quantum que respecto de cada uno de los encartados se dirá en lo resolutivo, para lo cual se tendrá en consideración lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal y lo indicado a continuación; todo ello conforme lo autoriza el inciso segundo del artículo 351 del Código Procesal Penal.

8.- Que para la determinación del quantum, respecto de los acusados Cabello y San Martín, el tribunal tiene en consideración que los mismos han resultado responsables en calidad de autores del artículo 15 N° 1 del Código Penal, de un total de 129 delitos de malversación de caudales públicos, esto es, son responsables de la totalidad de la suma sustraída a la Dirección de Salud Municipal de Talcahuano, y por lo mismo, a su respecto, tuvieron una mayor



influencia en la extensión del mal causado a dicha Dirección de Salud; como también la circunstancia que ambos acusados dado los cargos y funciones que desempeñaban al interior de la referida Dirección, estaban en conocimiento del desorden financiero existente en la misma y de los problemas de falta de control en el departamento de finanzas, de las que da cuenta precisamente el Informe Final 315 de la Contraloría Regional del Bío Bío, particularmente al indicar que se detectaron una serie de irregularidades, falencias y omisiones durante la auditoria, entre los cuales se destacan el hecho que la DAS no mantiene las conciliaciones bancarias actualizadas y existen cuentas corrientes que no tienen antecedentes respecto de su última conciliación bancaria, además de partidas de antigua data sin conciliar, correspondientes a cheques girados y no cobrados, cargos y abonos no contabilizados y diferencias contables no registradas; como también se verificaron inconsistencias en los saldos de las cuentas; se verificó que las disponibilidades reales en las cuentas corrientes de la entidad según cartolas bancarias al 31 de diciembre de 2017 difieren del monto informado; se constataron diversas inconsistencias en las cuentas del balance; y asimismo, se constató que la inexistencia de segregación de funciones respecto de las labores relacionadas con la contabilización de ingreso y egresos y firma de cheques, además de la falta de supervisión relacionada con la aprobación de las conciliaciones bancarias y visación de los decretos de pago; falencias todas de las cuales se aprovecharon los referidos acusados para obrar de la manera que lo hicieron, y que además en el caso de Cabello Bustos no era cualquier funcionario público a cargo de fondos públicos, sino que el jefe del departamento de Finanzas. Y, para la determinación de la pena concreta que se aplicará a los acusados Paredes Montoya y Ravanal Mellado, se tendrá en cuenta que estos resultaron, respectivamente, responsable de 35 y 86 delitos de malversación de caudales públicos; como asimismo se tiene en cuenta que ellos no tenían a su cargo los fondos o caudales públicos sustraídos, y que el encartado Ravanal Mellado, tampoco era funcionario público; quienes por lo mismo, en definitiva son sancionados de conformidad con el artículo 15 N° 3 del Código Penal.

Además, en relación a todos los acusados ha de considerarse no solo la elevada afectación patrimonial causada al ente municipal, sino que además las consecuencias que en la comunidad produjo la substracción de los fondos municipales, que estaban destinados precisamente al financiamiento de las prestaciones de salud e insumos médicos para la atención primaria de salud en la ciudad de Talcahuano, como lo declaró expresamente su directora jurídica, doña Estefanía Estrada Rivas, en orden a que estos hechos repercutieron en el suministro para la municipalidad de Talcahuano, que se reflejó en que no se estaban pagando a los proveedores los insumos médicos, lo que originaba que en los Cesfam no hubieran insumos médicos, al punto que hubo reclamos y barricadas por tal motivo, quema de neumáticos, paros de médicos por no tener insumos; lo que se condice con lo aseverado por la encargada de adquisiciones



de la DAS, doña Mónica Vera Cionti, quien sobre el punto señaló que después de la ocurrencia de estos hechos, la municipalidad tuvo que intervenir la DAS, nombrando una funcionaria municipal que hiciera las veces de administrador y negociador ante las empresas, para en definitiva firmar con ellas compromisos de pago para regularizar la situación y lograr que los proveedores siguieran vendiéndoles; como también lo manifestado por el propio alcalde de la comuna, Henry Campos Coa, que indicó que la situación de falta de medicamentos se dio en los Cesfam, Leocan Portus, en los Cerros, y Cesfam de Higuera, en que las personas iban a buscar medicamentos y tenían para entregarlos, por lo que se debió recurrir a fondos de emergencia y sociales, precisando que el fin último de la Dirección de Salud Municipal es entregar atención primaria de salud a los vecinos, que se traduce en entrega de horas médicas, odontológicas, oftalmológicas y de atención de urgencia, y la entrega de insumos y medicamentos que son requeridos para ello; como también hubo afectación en la imagen de los propios funcionarios que se desempeñaban en la Dirección de Administración de Salud Municipal de Talcahuano.

9.- Que según lo referido, los acusados serán sancionados conforme a la infracción penal del 233 N° 3 del Código Penal con la modificación de la Ley 21.121, la cual contempla una pena de multa del doble de lo sustraído, y para la determinación de la misma a cada uno de los acusados, se considerará el monto de lo malversado por cada uno de ellos, conforme a los delitos por los cuales han resultado responsables, por lo cual se aplicará únicamente como pena pecuniaria la establecida luego de la modificación introducida por la señalada ley, para cuyo cálculo se tendrán en consideración únicamente los delitos cometidos bajo la vigencia de la misma, quedando subsumida en dicho monto la pena pecuniaria que les corresponde por los delitos cometidos con anterioridad a la modificación; todo ello con el fin último de aplicar la pena pecuniaria que en derecho y justicia les corresponde soportar y para no afectar lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal.

Así las cosas, tratándose de los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez, siendo responsables de la sustracción de \$412.024.825, en principio la multa a aplicar correspondería a \$824.049.650, más habida consideración que los delitos de malversación de caudales públicos cometidos durante la vigencia de la Ley N° 21.121, son solo los comprendidos en los numerales 29 a 35 del Hecho 2, y los referidos en los números 72 a 86 del Hecho 4, cuyos montos totalizan \$80.959.339, se les aplicará el doble de esta última cantidad, y consiguientemente la multa a imponer a cada uno de ellos será la de \$161.918.678.

Por su parte, respecto del acusado Paredes Montoya, siendo responsable de la sustracción de \$111.176.748, en principio la multa a aplicar correspondería a \$222.353.496, más habida consideración que los delitos de malversación de caudales públicos cometidos durante la vigencia de la Ley N° 21.121, son solo los comprendidos en los numerales 29 a 35 del Hecho 2, cuyos



montos totalizan \$25.508.508, se le aplicará el doble de esta última cantidad, y consiguientemente la multa a imponer será la de \$51.017.016.

Que en relación al acusado Ravanal Mellado, siendo responsables de la sustracción de \$279.472.587, en principio la multa a aplicar correspondería a \$558.945.174, más habida consideración que los delitos de malversación de caudales públicos cometidos durante la vigencia de la Ley N° 21.121, son solo los comprendidos en los numerales 72 a 86 del Hecho 4, cuyos montos totalizan \$ 55.450.831, se le aplicará el doble de esta última cantidad, y consiguientemente la multa a imponer será la de \$110.901.662.

10.- Que, sin perjuicio de si a la multa que será impuesta a los acusados le es aplicable o no la norma general del artículo 70 del Código Penal, dada la especial naturaleza de la multa contemplada en el artículo 233 del mismo código, lo cierto es tampoco se reúnen los requisitos contemplados en la señalada disposición para acceder a las peticiones de rebaja de multa formuladas por las defensas, en atención a que a cada uno de ellos les perjudica una circunstancia agravante de responsabilidad penal; quedando en todo caso exentos del apremio contemplado en el artículo 49 del señalado código punitivo, por así disponerlo la misma norma.

11.- Que los delitos de malversación de caudales públicos de que han resultado responsables los acusados, traen aparejada la pena accesoria de inhabilitación absoluta temporal en su grado medio a inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos; mas, habida consideración que los encartados serán sentenciados a sendas penas de presidio mayor en su grado mínimo, se les aplicarán las penas accesorias de conformidad con el artículo 28 del Código Penal, y consiguientemente, se les sancionará a cada uno de los acusados las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y en todo caso, aún en el evento de aplicarse la normativa del inciso segundo del artículo 233 del citado código, estos sentenciadores estiman que la accesoria que correspondería aplicar en la especie, igualmente sería la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, habida consideración de la cantidad de delitos de que han resultado responsables, entre los cuales figuran ilícitos comprendidos en el numeral 3 de la citada normativa, que tienen la pena más grave del delito de peculado allí establecido, y los montos involucrados en la malversación de que han resultado responsables cada uno de los encartados.

12.- Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Código Penal, se decretará igualmente el comiso del dinero incautado en el domicilio de los acusados San Martín Pavez y Ravanal Mellado, ubicado en calle Tegalda N° 36 A, sector Collao, Concepción, ascendente a la suma de \$2.027.490, conforme dieron cuenta los funcionarios policiales que intervinieron en la diligencia de entrada y registro del señalado inmueble, particularmente Valenzuela Ortiz, dinero en efectivo que fue habido en una de las piezas de dicho inmueble, en una



caja de seguridad y en bolsas plásticas al interior de una cómoda, suma de la cual da cuenta el comprobante de depósito de Servi Estado, que se contiene en **Otros medios de Prueba N° 64**; no bastando los meros dichos de los acusados, en orden a que los mismo proviene de la venta de miel y huevos, habida consideración que precisamente el propio acusado Ravanal Mellado en su declaración en calidad de imputado del día 3 de julio de 2017 ante la Policía de Investigaciones dio cuenta que el dinero proveniente del hecho ilícito su señora lo guardaba en una caja fuerte en su domicilio, según el señalado agente policial citado, lo cual se condice con lo manifestado por Ravanal Mellado durante la audiencia, en orden a que en una declaración del año 2019 le dijo a la policía que Nubia guardaba documentos y dinero en su domicilio de calle Tegualda 36 A, Concepción, que dijo dónde estaban los documentos y le abrió la caja de fondo, y chequearon el dinero y lo contaron, que entre los funcionarios que llegaron a su domicilio estaba el señor Valenzuela, precisando que al llegar a su domicilio le dijeron que venían a ver la caja de fondos que había indicado en su declaración previa y que se la mostrara y la abriera, por lo que los llevó al dormitorio y le indicó su ubicación y abrió la caja, que tenía la clave que él manejaba, y dentro de la caja encontraron un cheque rayado que tenía Nubia, que era de la Municipalidad, y en relación a la caja en que estaba el dinero, le dijeron que tenían que llevarse el dinero, por lo que lo sacaron y se puso sobre la mesa, y lo contaron, y eran como dos millones de pesos, agregando que la caja era negra, de unos 20 por 15 por 10 centímetros, y que dicho dinero lo había dejado allí Nubia San Martín; caja que por lo demás se aprecia en la imagen 14, contenida en **Otros Medios de Prueba N° 89**, en cuya fijación fotográfica intervino el perito Figueroa Olivares, y a cuyo respecto el policía Valenzuela Ortiz manifestó que ahí se ilustra el dinero encontrado dentro de la caja metálica.

QUINCUGÉSIMO SEXTO: Que, atendida la extensión de la pena temporal que se impondrá a cada uno de los acusados, no reuniéndose los requisitos de la Ley N°18.216, no se les concederá pena sustitutiva alguna, por lo que habrán de cumplir de manera efectiva las respectivas penas temporales que se les impondrán, en la forma que se dirá en la parte resolutive; por lo cual ninguna incidencia tienen en la determinación de la forma de cumplimiento, la documental acompañada por las defensas, consistente en bonos de atención médica e informe médico de 1 de febrero de 2021 y copia de resolución judicial que declara liquidación de sus bienes, respecto del acusado Paredes Montoya, que dan cuenta de ciertos problemas de salud de los cuales padecería, y una liquidación de sueldo del acusado; y tres informes sociales, emitidos respecto de los acusados Ravanal Mellado, San Martín Pavez y Cabello Bustos, que se refieren a la situación socio económica de cada uno de ellos, problemas de salud que les afectan y posibilidades de reinserción, acompañadas por el abogado defensor de los indicados acusados.



QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO: Que para efectos procesales, ha de señalarse que los siguientes medios probatorios aportados por las partes no se analizaron mayormente, o lo fueron de manera parcial, habida consideración que los mismos no alteran las conclusiones a las cuales se ha arribado por estos sentenciadores, y tampoco tienen mayor incidencia en las discusiones que fueron planteadas por los intervinientes; como lo son los siguientes:

1.- Certificado de matrimonio de Nubia San Martín Pavez (**Prueba Documental N° 10**).

2.- Oficio N°24080/2019, de 11 de octubre de 2019, del Banco del Estado de Chile, (**Prueba Documental N° 78**) por el cual se remite información acerca de las cuentas corrientes de la Municipalidad de Talcahuano, números 527-0-905200-4 y 527-0-95216-1, la cual además de referir los saldos de dichas cuentas a la fecha del oficio, acompaña las cartolas respectivas entre el 3 de enero de 2018 y 29 de marzo de 2019, respecto de cuyo contenido estos sentenciadores no pueden efectuar valoración alguna, dado que ningún testigo o perito se refirió a la extensa información allí contendía, de la cual tampoco los intervinientes se hicieron cargo; información que se contiene en el CD acompañado como Otros Medios de Prueba N° 43.

3.- Respuesta Conservador de Bienes Raíces de Florida, de fecha 8 de mayo de 2020, habida consideración que sólo se limita a informar que desde el año 2016 en adelante no consta ningún inmueble ni derechos inscritos a nombre de las nueve personas señaladas; sin especificar los nombres de las mismas (**Prueba Documental N° 122**).

4.- Oficio 62-2021, de 2 de agosto de 2021, de la Jefa de Unidad de Alertas de Prevención de Blanqueo de capitales, del Banco Santander (**Prueba Documental 174**), en atención a que adjunta una información sobre algunas cuentas corrientes, pero no se sabe a quién corresponde, habida consideración que el oficio hace referencia a tres personas, Elson Lienlaf Qurilao, Manuel Rojas Ramírez y Pedro Ravanal Mellado, y n se especifica nada al respecto.

5.- Informe emitido por el Banco Estado, de fecha 30 de noviembre de 2021 (**Prueba Documental N° 192**), que corrobora la circunstancia referida por funcionarios investigadores, en el sentido que no fue posible obtener la totalidad de los cheques o copias de los mismos, habida consideración que la entidad bancaria, entre otras cosas, informa la imposibilidad de encontrar cheque que singulariza; y en cuanto a la información allí contenida referida a cuentas corrientes de la Municipalidad de Talcahuano, de la Sociedad Comercial A y E Limitada y documentación de apertura de esta última, y de Pedro Ravanal Mellado, no se encontró información relevante para la decisión de la causa, información respecto a la cual, por lo demás, no se presentó ningún testigo o perito que explicara la misma, ni fue citada por los intervinientes al momento de sostener sus posturas en sus discursos finales; misma situación en la que se encuentra la información proporcionada por la misma entidad bancaria por oficio de 23 de diciembre de 2021 (**Prueba Documental N° 194**), en relación a



la cuenta corriente N° 527-0-001635-8, de titularidad de Alejandro Cabello Bustos, respecto de la cual se informa que se encuentra cancelada con fecha 1 de junio de 2020, por resolución del banco, y en relación a la cual se adjuntan los movimientos bancarios en ella realizados durante el período 2016 al 2020, respecto a la cual la fiscalía resaltó algunas operaciones o depósitos realizados en efectivo, no obstante lo cual, no se le exhibió a ningún testigo o perito la extensa documentación para que se refiriera a la misma y entregara los antecedentes relevantes de la misma.

6.- Del mismo modo ninguna trascendencia tienen los antecedentes aportados por el perito informático Jonathan Leandro Castillo, quien dio cuenta de haber efectuado una búsqueda de palabras claves en diversos archivos digitales contenidos en un disco duro, el cual contenía imágenes digitales de celulares, disco duro que señala es el que se le exhibe como **Otros Medios de Prueba N° 49**, y que la información obtenida la guardó en la memoria externa que se le exhibe, contenida en **Otros medios de Prueba N° 80** que se le exhibe, pero en definitiva, el perito no dio cuenta de la información obtenida de los celulares, como tampoco sabía a qué celulares correspondían, pues ni siquiera se mostró el contenido de la referida memoria externa .

7.- Respecto a los dichos del perito Nicolás Arratia Reyes, del análisis de su pericia, se desprende que no aporta antecedentes concretos al presente caso, habida consideración que si bien refiere haber analizado la información extraída de los dos teléfonos celulares, uno de ellos del acusado Pedro Paredes, al respecto indicó que no pudo determinar si existían conversaciones entre Paredes y alguno de los otros acusados, y los archivos que estimó de relevancia y de los que dio cuenta, ninguno de ellos entrega elementos útiles para la decisión del caso, y más aún que no pudo determinar los interlocutores, más allá de que se refieran algunos a consultas acerca de lo que estaba sucediendo en la DAS o del proceso o investigación que llevaría la Contraloría en relación a la Municipalidad de Talcahuano; y en cuanto a la información contenida en un segundo teléfono celular, la misma dice relación con el móvil de doña Maritza Vargas, (**Otros Medios de Prueba 66**, que contiene celular marca Motorola, del cual el perito Bravo castro extrajo la información) que habría sido pareja del acusado Cabello Bustos, en la que los archivos de audio analizados, en general se refieren a problemas económicos y de salud de la mencionada Maritza Vargas; más allá de haberse encontrado algunas fotos de aquella junto a Cabello y de existir fotos, entre otros, de algunos documentos que al decir del mismo perito aparentaba ser documentos bancarios, como comprobantes de transferencias, por montos de 200, 300, o 350 mil pesos, dado que el perito tampoco pudo precisar debidamente el tema de un comprobante de transferencia que refiere, en la que se señalaba a Alejandro Cabello, como que habría realizado una transferencia desde su cuenta, sin poder determinar si fue llevada a cabo por el imputado o solo llevada a cabo desde su cuenta por un monto cercano a los \$300.000.



8.- Finalmente, se acompañaron los decretos u órdenes de pago N° 234, de 1 de enero de 2019 (**Prueba Documental 212**); 1143, de 3 de julio de 2018; 1402, de 10 de agosto de 2018; 785, de 8 de mayo de 2018; 1549, de 4 de septiembre de 2018; 581 de 9 de abril de 2018; y 792 de 9 de mayo de 2018 (todos contenidos en **Otros Medios de Pruebas N° 42**), los cuales en definitiva no tienen ninguna injerencia en relación a los hechos investigados, y en general se refieren o dan cuenta de órdenes de pago, que se cumplieron mediante depósitos en cuentas bancarias, de lo cual se adjuntan los respectivos comprobantes.

II.- EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:

QUINCUGÉSIMO OCTAVO: Que doña **ALICIA FELMER OPITZ**, Abogado Procurador Fiscal de Concepción, del Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Talcahuano, ambos con domicilio, para estos efectos en calle Barros Arana N° 1098, oficina 1501, 15to. Piso Concepción, interpuso **DEMANDA CIVIL DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS**, en contra de **ALEJANDRO DAVID CABELLO BUSTOS**, domiciliado en calle Colon N° 305, departamento 1307, comuna de Talcahuano, **NUBIA EDITH SAN MARTIN PAVEZ Y PEDRO NOLASCO RAVANAL MELLADO**, ambos domiciliados en calle Tegalda N° 36-A comuna de Concepción, actualmente todos en prisión preventiva en el CP Concepción y representados por los abogados FRANCISCO GARCIA RETAMAL y MARIA PÁZ GANDARA CHICO, con domicilio y forma de notificación registrados en este tribunal y **PEDRO EDUARDO MAURICIO PAREDES MONTOYA**, domiciliado en calle Ainavillo N° 1040 comuna de Concepción, actualmente en prisión preventiva en el CP de Concepción, representado por el abogado DANIEL BERATO FIGUEROA, cuyo domicilio y forma de notificación se encuentran registrados en este tribunal, fundado en los mismos antecedentes de hecho expuestos en su acusación, agregando que los mismos significaron en el aspecto penal, la comisión de 129 delitos consumados y reiterados de malversación de caudales públicos del artículo 233 N° 2 y N° 3 del Código Penal en concurso medial con delitos de falsificación de instrumento privado mercantil falso descrito y sancionado en el artículo 197 en relación con el artículo 193 N° 4 del C.P y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso descrito y sancionado en los artículos 198, 197 y 193 N° 4 todos del CP, así como 35 delitos de falsificación de instrumento público del artículo 193 N° 4 del Código Penal, los que al mismo tiempo constituyen un delito civil en perjuicio de la I. Municipalidad de Talcahuano, que debe ser reparado en su integridad por los acusados; agregando que funda la demanda en el artículo 2314 del Código Civil que contempla la regla general en relación con la responsabilidad civil extracontractual, al establecer que *“el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización...”*.

Agregó que los elementos de la responsabilidad civil extracontractual son la capacidad del autor del delito o cuasidelito civil, el dolo o culpa del autor, el



daño y la relación de causalidad entre el hecho u omisión dolosa o culpable y el daño producido; y que en la situación que nos ocupa, aparece prístino que concurren los cuatro elementos ya mencionados; por cuanto la capacidad del autor del ilícito, esta no merece duda atendida la circunstancia de que la regla general es la capacidad, y la excepción la incapacidad, los demandados no se encuentran en ninguna de las situaciones excepcionales de incapacidad que contempla el ordenamiento jurídico; que en relación al elemento dolo, quedará demostrado que los demandados son autores de los hechos constitutivos de delitos reiterados de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público, por los que se encuentran acusados, sancionado penalmente y que a su vez se configuran un delito civil; que por otro lado, se produjo un daño en el patrimonio de mi representada, la Ilustre Municipalidad de Talcahuano, ascendente a la suma de \$ **412.024.825**, finalmente, no cabe duda que el daño sufrido por el patrimonio de mi representada es una consecuencia inmediata y directa del actuar doloso de los autores, pues sin éste, aquel no se habría producido.

Además, fundó la demanda en el artículo 2329 del Código Civil, que establece la obligación de responder por “todo daño” que pueda imputarse a malicia (dolo) o negligencia (culpa) de determinadas personas, de donde se desprende que, en el caso sublite, los acusados deberán indemnizar a mi representada por el daño efectivo y completo que ha ocasionado con su actuar, daño que asciende a la suma de cuatrocientos doce millones veinticuatro mil ochocientos veinticinco pesos (\$ 412.024.825), más los intereses correspondientes; por lo que habiendo incurrido los acusados en los hechos ilícitos que ocasionaron perjuicio, sostiene que deberán ser condenados a la reparación íntegra de ellos, al tenor de los artículos citados, y de lo señalado en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil; por lo que en mérito de lo expuesto y lo previsto en el artículo 261 letra d) del Código Procesal Penal, pide tener por deducida, en la representación indicada, acción civil de indemnización de perjuicios en contra de **ALEJANDRO DAVID CABELLO BUSTOS, NUBIA EDITH SAN MARTIN PAVEZ, PEDRO NOLASCO RAVANAL MELLADO y PEDRO EDUARDO MAURICIO PAREDES MONTOYA**, a fin de que en sean condenados a pagar a favor de la Ilustre Municipalidad de Talcahuano:

A) La suma de \$ 412.024.825 correspondiente a la pérdida causada a la I. Municipalidad de Talcahuano, por el actuar delictivo, con su correspondiente conversión en pesos a la fecha del pago efectivo y total, en subsidio, la suma que S.S. a fije.

B) Intereses corrientes sobre la suma señalada en la letra a) debidamente reajustada, calculados entre la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada y la fecha del pago efectivo y total.

C) Las costas de la causa.

QUINCUGÉSIMO NOVENO: Que la defensa del acusado Paredes Montoya en el evento de ser condenado, solicitó el rechazo de la acción civil,



dado que no se sabe si hubo perjuicios, por cuanto no basta para ello que se hayan cobrado los cheques, pues no se sabe si la municipalidad pagó de nuevo la misma deuda, y en todo caso, no puede ser condenado por el total, dado que fue acusado sólo por su responsabilidad en el Hecho 2, por el cobro de 35 cheques que suman 111 millones de pesos y fracción; en tanto que la defensa de los acusados Cabello Bustos, San Martín Pavez y Ravanal Mellado, señaló que en cuanto a la solidaridad demandada, debe estar en relación únicamente a los montos que se acrediten defraudados por cada uno de los acusados, no siendo posible atribuirse la totalidad del monto a cada uno de los acusados, dado que no se da cuenta de que los dineros hayan sido distribuidos entre todos los acusados.

SEXAGÉSIMO: Que, la Ilustre Municipalidad de Talcahuano, reúne la calidad de víctima, por lo que conforme a lo dispuesto en los artículos 59, 60, 108 y 109 letra c) del Código Procesal Penal, se encuentra legitimada para los efectos de actuar en la presente causa en calidad de demandante y consiguientemente perseguir la responsabilidad civil proveniente del hecho punible que le afectó, actuando para ello, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado.

SEXAGESIMO PRIMERO: Que, respecto a la demanda civil interpuesta por la Ilustre Municipalidad de Talcahuano, encontrándose establecida la responsabilidad penal de los demandados Cabello Bustos, San Martín Pavez, Paredes Montoya y Ravanal Mellado en los hechos que a su respecto se determinaron en la parte penal de esta sentencia, los cuales se dan por reproducidos, cobra vigencia lo previsto en el artículo 2.314 del Código Civil, el cual dispone: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.”, como asimismo lo dispuesto en el artículo 2329 del mismo código, en orden a que todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta

SEXAGÉSIMO SEGUNDO: Que, es pacífico en la doctrina y la jurisprudencia que los elementos fundantes de la responsabilidad extracontractual, establecida en el artículo 2.314 del Código Civil, tal como lo indica la demandante son los siguientes: 1.- Que su autor sea capaz de delito o cuasidelito; 2.- Que ese hecho u omisión provenga de dolo o culpa del autor; 3.- Que cause un daño, y 4.- Que exista relación de causalidad entre el hecho o la omisión dolosa o culpable y el daño producido.

SEXAGÉSIMO TERCERO: Que, en cuanto al primero de los requisitos, ha de señalarse que durante el juicio no se ha hecho valer ningún antecedente del cual pueda desprenderse alguna duda en torno a la capacidad de los demandados para incurrir en una conducta delictual o cuasi delictual, como es la que se le atribuye en autos, y que la capacidad de las personas constituye la regla general, por lo que para tenerla por inconcurrente ha de señalarse a lo



menos la causal de inhabilidad o incapacidad en que dicha alegación se cimenta, cuestión que no ocurre en la especie, por lo que la capacidad de los demandados se tiene por acreditada.

Que en cuanto al segundo requisito, conforme a los razonamientos expuestos en la parte penal de esta sentencia, los que se dan por íntegramente reproducidos, especialmente los contenidos en los motivos trigésimo quinto al cuadragésimo, ha quedado debidamente acreditado que los demandados actuando dolosamente y previamente concertados al efecto, se apropiaron de sumas de dinero de propiedad de la Dirección de Salud Municipal de Talcahuano, actuando contra el ordenamiento penal y transgrediendo así el ordenamiento jurídico, dañando con su actuar el patrimonio de una institución pública, por cuanto realizaron actos de sustracción de caudales públicos, para lo cual se procedía al giro de cheques de las cuentas corrientes de la I. Municipalidad de Talcahuano a nombre de los demandados, los cuales eran cobrados por caja en las oficinas del respectivo, con la salvedad de un cheque que fue depositado en la cuenta corriente de uno de los acusados, acreditándose la ilicitud de los hechos imputados con la extensa prueba analizada en la parte penal de esta sentencia, que se tiene por totalmente reproducidas para estos efectos civiles; a partir de la cual también es posible tener acreditada la relación de causalidad entre el actuar de los demandados y el daño material provocado a las arcas municipales, puesto que los respectivos cheques fueron efectivamente pagados por el Banco Estado con cargo a las cuentas corrientes de la I. Municipalidad de Talcahuano, materializándose así la sustracción de fondos o caudales públicos, a través del actuar doloso de los demandados; no siendo necesario para el establecimiento del perjuicio sufrido, que la demandante acredite que las deudas de los proveedores a quienes iban dirigidos los pagos fueron efectivamente solucionadas, dado que el perjuicio efectivo se produce desde el momento que los dineros salieron de las cuentas corrientes de la municipalidad, lo cual fue debidamente acreditado con los informes de Contraloría Regional del Bío Bío, y particularmente por medio de cada uno de los 129 cheques que fueron cobrados por los acusados.

Que el actuar de los demandados de la manera referida, les permitió concretar una malversación de fondos públicos que ascendió a la suma total de \$412.024.825, conforme se acreditó por medio de las declaraciones de testigos, prueba documental e informes elaborados por la Contraloría General de la República, analizados en extenso en la sede penal de esta sentencia, los cuales se dan por reproducidos, suma que constituye el perjuicio material sufrido por la demandante, y por cuya suma total tiene el demandante derecho a ser indemnizado.

SEXAGÉSIMO CUARTO: Que, que conforme lo dispuesto en el inciso primero del artículo 2317, “Si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o



más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito, salvo las excepciones de los artículos 2323 y 2328.”

Que es del caso, que no se da en la especie ninguna de las excepciones referidas en la norma transcrita, por lo que corresponde hacer aplicación de la responsabilidad solidaria de los demandados, para cuyos efectos, se tendrá en consideración los delitos respecto de los cuales resultaron responsables y los montos involucrados en cada caso, ello en consonancia con la propia demanda civil al describir los hechos en que se funda, que reitera los contenidos en la acusación fiscal y particular.

Así las cosas, se estableció la responsabilidad penal de los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez en calidad de autores de 129 delitos de malversación de caudales públicos, los cuales constituyen el monto total del perjuicio sufrido por la demandante, ascendente a \$412.024.825; en relación al acusado Paredes Montoya, se determinó su responsabilidad en 35 delitos de malversación de caudales públicos, ascendente a una suma total de \$111.176.748; y en tanto que respecto de Ravanal Mellado, su participación penal se determinó en relación a 86 delitos de malversación de caudales públicos, ascendente a la suma de \$279.472.587.

Que por lo anterior, si bien se condenará a los acusados a responder de manera solidaria por los perjuicios causados a la demandante, en justicia y equidad, corresponde que dicha solidaridad se restrinja a la suma de dinero que con su accionar directo se afectó al patrimonio de la demandante, especialmente considerando que la propia demandante civil al accionar lo ha hecho en base a la descripción fáctica de la acusación formulada en materia penal, en la cual la participación de los demandados Paredes Montoya y Ravanal Mellado queda circunscrita a los delitos y montos consignados en los Hechos 2 y 4 de las acusaciones fiscal y particular; acogiéndose así las alegaciones de las defensas en tal sentido.

SEXAGÉSIMO QUINTO: Que, la suma ordenada pagar, lo será con los reajustes e intereses que se dirán, desde que por tratarse de una suma de dinero, éste es susceptible de sufrir una desvalorización monetaria que ha de remediarse con la reajustabilidad respectiva más los intereses correspondientes; y de igual manera y conforme a lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y habiendo sido completamente vencido los demandados, será condenados al pago de las costas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 7, 11 N° 6, 7 y 9, 14 N° 1°, 15 N° 1°, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 47, 50, 67, 68, 69, 193 N° 4, 233 N° 2 y 3, 260 y 260 ter del Código Penal; 1°, 4°, 36, 45, 46, 47, 281, 295, 296, 297, 309, 324, 325, 326, 328, 329, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344,



346, 348 y 351 del Código Procesal Penal; 2314, 2317 y 2329 del Código Civil; e Instrucciones de Pleno de la Excm. Corte Suprema sobre la forma y contenido de las sentencias dictadas por los Tribunales de la Reforma Procesal Penal, **SE DECLARA:**

A) EN CUANTO A LA ACCION PENAL.-

I.- Que se ABSUELVE a los acusados **Alejandro David Cabello Bustos y a Nubia Edith San Martín Pavez**, de los 129 delitos de falsificación de instrumento privado mercantil, en carácter de reiterados, descritos y sancionados en el artículo 197, en relación con el artículo 193 N° 4, ambos del Código Penal, que en la acusación particular les fueron imputados haber cometido en calidad de autores y en concurso medial con los delitos de malversación de caudales públicos de que han resultado responsables.

II.- QUE SE ABSUELVE al acusado **Pedro Eduardo Mauricio Paredes Montoya**, de los 35 delitos de uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, en carácter de reiterados, descritos y sancionados en el artículo 198, en relación con los artículos 197 y 193 N° 4, todos del Código Penal, que en la acusación particular le fueron imputados haber cometido en concurso medial con los delitos de malversación de caudales públicos de que ha resultado responsables.

III.- Que se **ABSUELVE** al acusado **Pedro Nolasco Ravanal Mellado**, de los 86 delitos de uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, en carácter de reiterados, descritos y sancionados en el artículo 198, en relación con los artículos 197 y 193 N° 4, todos del Código Penal, que en la acusación particular le fueron imputados haber cometido en concurso medial con los delitos de malversación de caudales públicos de que ha resultado responsables.

IV.- Que, **SE CONDENA** a **Alejandro David Cabello Bustos**, ya individualizado, **a la pena única de OCHO AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO**, a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en su calidad de autor de 129 delitos consumados de malversación de caudales públicos, en calidad de reiterados, previstos y sancionados en el artículo 233 N° 2 y 3 del Código Penal, cometidos entre los meses de octubre de 2017 y marzo de 2019 en la comuna de Talcahuano; referidos en los Hechos 1, 2, 3 y 4 de la acusación fiscal y particular.

V.- Que, **se condena a Nubia Edith San Martín Pavez**, ya individualizada, **a la pena única de OCHO AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO**, a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en su calidad de autora de 129 delitos consumados de malversación de caudales públicos, en calidad de reiterados, previstos y sancionados en el artículo 233 N° 2 y 3 del Código Penal,



cometidos entre los meses de octubre de 2017 y marzo de 2019 en la comuna de Talcahuano; referidos en los Hechos 1, 2, 3 y 4 de la acusación fiscal y particular.

VI.- Que se **CONDENA** al acusado **Alejandro David Cabello Bustos**, ya individualizado, a la **pena única de TRES AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO**, a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios público durante el tiempo de la condena, en su calidad de autor de 33 delitos consumados de falsificación de instrumento público, en carácter de reiterados, descritos y sancionados en el artículo 193 N° 4 del Código Penal; cometidos entre los meses de octubre de 2017 y marzo de 2019 en la comuna de Talcahuano; referidos en los Hechos 5 y 6 de la acusación fiscal y particular; **con excepción de los contenidos en el Hecho 5, en sus números 8 y 23, que también le fueron imputados por los acusadores haber cometido en calidad de autor, por los cuales se le absuelve.**

VII.- Que se **CONDENA** a la acusada **Nubia Edith San Martín Pavez**, a la **pena única de TRES AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO**, a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios público durante el tiempo de la condena, en su calidad de autora de 33 delitos consumados de falsificación de instrumento público, en carácter de reiterados, descritos y sancionados en el artículo 193 N° 4 del Código Penal; cometidos entre los meses de octubre de 2017 y marzo de 2019 en la comuna de Talcahuano, referidos en los Hechos 5 y 7 de la acusación fiscal y particular; **con excepción de los contenidos en el Hecho 5, en sus números 8 y 29, que también le fueron imputados por los acusadores haber cometido en calidad de autor, por los cuales se le absuelve.**

VIII.- Que se **CONDENA** al acusado **Pedro Eduardo Mauricio Paredes Montoya**, ya individualizado, a la **pena única de SEIS AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO**, a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en su calidad de autor de 35 delitos consumados de malversación de caudales públicos, en calidad de reiterados, previstos y sancionados en el artículo 233 N° 2 y 3 del Código Penal, cometidos entre los meses de octubre de 2017 y marzo de 2019 en la comuna de Talcahuano; referidos en el Hecho 2 de la acusación fiscal y particular.

IX.- Que se **CONDENA** al acusado **Pedro Nolasco Ravanal Mellado**, ya individualizado, a la **pena única de SEIS AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO**, a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en su calidad de autor de 86 delitos consumados de malversación de caudales públicos, en calidad de



reiterados, previstos y sancionados en el artículo 233 N° 2 y 3 del Código Penal, cometidos entre los meses de octubre de 2017 y marzo de 2019 en la comuna de Talcahuano; referidos en el Hecho 4 de la acusación fiscal y particular.

X.- Que se condena asimismo a cada uno de los acusados a una pena de multa, equivalente al doble de los sustraído, que conforme a lo razonado en el motivo Quincuagésimo Quinto N° 9, equivale a los siguientes montos: Respecto de los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez, a pagar una multa de \$161.918.678; respecto del encartado Paredes Montoya, a pagar una multa de \$51.017.016, y respecto del sentenciado Ravanal Mellado, a pagar una multa de \$110.901.662.

XI.- Que se condena a todos los acusados al pago proporcional de las costas de la causa.

XII.- Que se decreta el comiso de la suma de \$2.027.490.- referida en en el motivo Quincuagésimo Quinto N° 12.

XIII.- Que habiéndose acogido la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 7 del Código Penal, respecto de todos los acusados en relación al delito de malversación de caudales públicos de que han resultado responsables, según se da cuenta en el motivo quincuagésimo primero, se dispone el giro de los dineros consignados por los acusados para tal fin, ascendente a la suma de \$70.100.000, a nombre de la afectada I. Municipalidad de Talcahuano, o a nombre de quien sus derechos represente; ello conforme da cuenta la certificación del Administrador del Juzgado de Garantía de Talcahuano, de fecha 29 de agosto de 2022 que obra en la carpeta virtual.

XIV.- Que, no reuniéndose los requisitos contemplados en la Ley N°18.216, no se concede a los sentenciados ninguna de las penas sustitutivas contempladas en la referida ley, **por lo que deberán cumplir de manera efectiva las penas temporales que le han sido impuestas** de la manera que a continuación se indica, debiendo, en el caso de los acusados Cabello Bustos y San Martín Pavez principiar por las penas más graves:

En cuanto a los **acusados Cabello Bustos, San Martín Pavez y Paredes Montoya**, las penas se les contarán desde el 4 de marzo de 2021, fecha desde la cual se encuentran hasta el día de hoy ininterrumpidamente privados de libertad, que suman 576 (quinientos setenta y seis) días; sirviéndoles, además, de abono los 7 (siete) días que permanecieron en calidad de detenidos (25 de febrero de 2021) y sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario total del artículo 155 letra a) del Código Procesal Penal (entre el 26 de febrero y 3 de marzo de 2021); **con lo cual totalizan 583 (quinientos ochenta y tres) días de abono a la fecha.**

Respecto del **sentenciado Ravanal Mellado**, la pena temporal se le contará desde que se presente o sea habido, sirviéndole de abono los 353 (trescientos cincuenta y tres) días, correspondiente al período que permaneció ininterrumpidamente privado de libertad entre el 4 de marzo de 2021 y el 19 de febrero de 2022; y los 7 (siete) días que permaneció en calidad de detenido (25



de febrero de 2021) y sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total (entre los días 26 de febrero y 3 de marzo de 2021); como asimismo le servirán de abono 223 (doscientos veintitrés) días correspondientes al período durante el cual se ha encontrado sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total desde el 20 de marzo de 2022 a la fecha; **con lo cual totaliza 583 (quinientos ochenta y tres) días de abono a la fecha;** como asimismo, le servirá de abono todo el tiempo durante el cual se mantenga vigente la medida cautelar de arresto domicilio total.

Todo lo anterior, conforme al mérito del auto de apertura, certificación de la Jefa de Unidad de Administración de Causas de este Tribunal, y lo obrado en la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal.

B) EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:

XV.- Que, se acoge la demanda civil de indemnización de perjuicios interpuesta por la parte querellante Consejo de Defensa del Estado en representación de la Municipalidad de Talcahuano, en contra de los demandados civiles y acusados **Alejandro David Cabello Bustos, Nubia Edith San Martín Sáez, Pedro Nolasco Ravanal Mellado y Pedro Eduardo Mauricio Paredes Montoya**, ya individualizados, por la suma total de \$412.024.825, suma que se pagará debidamente reajustada conforme a la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o el que haga sus veces, desde el mes anterior a la fecha de esta sentencia y hasta el mes anterior a su pago total y efectivo, más intereses corrientes calculados desde la fecha que esta sentencia quede ejecutoriada y hasta su pago total y efectivo; precisándose que los demandados Cabello Bustos y San Martín Pavez quedan solidariamente obligados al pago del referido monto de \$412.024.825; en tanto que el demandado Ravanal Mellado queda solidariamente obligado hasta el pago de la suma de \$ 279.472.587; y, Paredes Montoya queda solidariamente obligado hasta el pago de la suma de \$111.176.748.

XVI.- Que, se condena en las costas a los demandados civiles, por haber sido vencidos totalmente en la acción indemnizatoria civil.

Devuélvase a los intervinientes la prueba allegada al procedimiento.

Ejecutoriada que sea esta sentencia, comuníquese al Juzgado de Garantía de Talcahuano para todos los efectos legales; y oficiese al Servicio Electoral a fin de comunicar que los condenados lo han sido por delitos que merecen pena aflictiva, conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley 20.568.

Regístrese y archívese.

Redactó la sentencia el juez don Selín Omar Figueroa Araneda.

RUC 1900571226-5

RIT 96-2022



Dictada por María José Vidal Araya, quien presidió, Reynaldo Eduardo Oliva Lagos y Selín Omar Figueroa Araneda, Jueces Titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción.

